

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales



TESIS DOCTORAL

**La protección social como condicionante en las relaciones
comerciales entre la Unión Europea y América Latina**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Armando Alvares García Junior

Director

José Ángel Sotillo Lorenzo

Madrid, 2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Departamento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales



LA PROTECCIÓN SOCIAL COMO CONDICIONANTE EN LAS RELACIONES
COMERCIALES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Armando Alvares Garcia Júnior

Bajo la dirección del profesor doctor

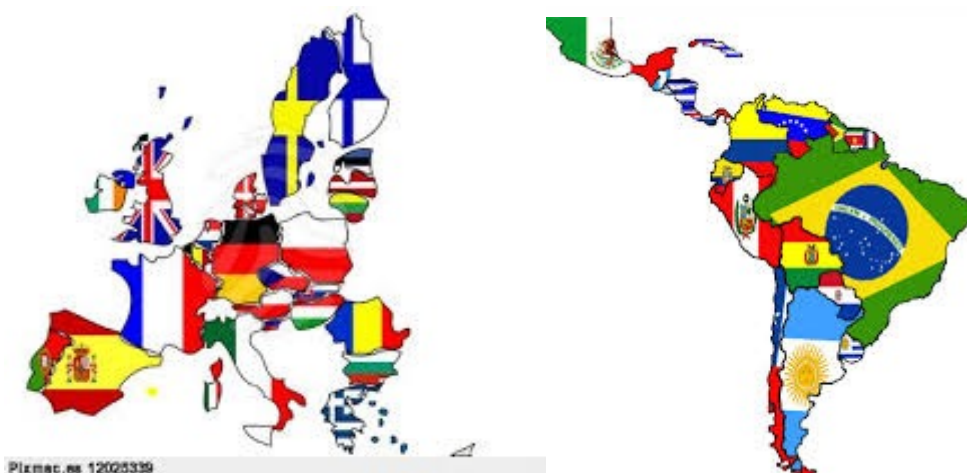
José Ángel Sotillo Lorenzo

Madrid, 2016

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y
RELACIONES INTERNACIONALES



LA PROTECCIÓN SOCIAL COMO CONDICIONANTE EN LAS RELACIONES
COMERCIALES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA



TESIS DOCTORAL
ARMANDO ALVARES GARCIA JÚNIOR

Madrid, 2016

TESIS DOCTORAL

**LA PROTECCIÓN SOCIAL COMO CONDICIONANTE EN LAS
RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y
AMÉRICA LATINA**

AUTOR: ARMANDO ALVARES GARCIA JÚNIOR

TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR:

ARMANDO ALVARES GARCIA JÚNIOR

DIRECTOR DE LA TESIS DOCTORAL:

Dr. JOSÉ ÁNGEL SOTILLO LORENZO

**(Profesor Titular del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid)**

**DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

2016

TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR:

ARMANDO ALVARES GARCIA JÚNIOR

DOCTORANDO: Armando Alvares Garcia Júnior **NIF:** 53475145-F

DIRECTOR: Prof. Dr. José Ángel Sotillo Lorenzo

PROGRAMA DE DOCTORADO: Ciencias Políticas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales, Derechos Humanos, Comercio Internacional, Economía

DEPARTAMENTO: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

TÍTULO DE LA TESIS: “La protección social como condicionante en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina”

SUMARIO

LA PROTECCIÓN SOCIAL COMO CONDICIONANTE EN LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA

PARTE I

EL MARCO DE ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL COMO CONDICIONANTE EN LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO.....	41
---	-----------

CAPÍTULO 2

DERECHOS HUMANOS Y COMERCIO INTERNACIONAL: DELINEAMIENTOS BÁSICOS.....	107
---	------------

PARTE II

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

CAPÍTULO 3

LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA.....	173
--	------------

CAPÍTULO 4

LA PROTECCIÓN SOCIAL: DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS LABORALES.....	259
---	------------

PARTE III

LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN AMÉRICA LATINA..

CAPÍTULO 5

LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN AMÉRICA LATINA.....	319
--	------------

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES.....	401
--------------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA TRABAJADA.....	413
------------------------------------	------------

ANEXO

ANEXO I.....	465
ANEXO II.....	466

ÍNDICE

LA PROTECCIÓN SOCIAL COMO CONDICIONANTE EN LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA

SUMARIO.....	9
ÍNDICE.....	11
RESUMEN EN CASTELLANO.....	15
RESUMEN EN INGLÉS.....	19
AGRADECIMIENTOS.....	23
SIGLAS Y ACRÓNIMOS.....	25
PRESENTACIÓN.....	29
1.1 Motivaciones personales.....	29
1.2 Observaciones sobre la investigación.....	30
1.3 Objeto, estructura, contenido de la tesis y resumen de los capítulos.....	34
PARTE I.....	39
EL MARCO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA	39
CAPÍTULO 1.....	41
INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO.....	41
1.1.- JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.....	43
1.1.1 - Objetivos de la tesis doctoral.....	43
1.1.2.- Relevancia de la investigación.....	44
1.1.3.- Estado de la cuestión.....	68
1.1.4.- Justificación del periodo histórico acotado.....	76
1.1.5.- Originalidad, problemas y límites de la investigación.....	77
1.2.- MARCO TEÓRICO.....	79
1.2.1.- La historia de las relaciones internacionales bajo la perspectiva de Pierre Renovin.....	81

1.2.2.- El impacto de las fuerzas económicas en las relaciones internacionales: el peso de Braudel.....	85
1.2.2.1.- La Escuela de los Annales.....	86
1.2.3.- Otras influencias en el marco teórico.....	87
1.3.- CUESTIONES METODOLÓGICAS.....	93
1.3.1.- Metodología utilizada en la investigación académica.....	95
1.4.- HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: HIPÓTESIS DE PARTIDA Y DE DESARROLLO.....	102
1.5.- FUENTES EMPLEADAS EN LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL.....	105
CAPÍTULO 2.....	107
DERECHOS HUMANOS Y COMERCIO INTERNACIONAL: DELINEAMIENTOS BÁSICOS.....	107
2.1 La cláusula social y el funcionamiento del mercado.....	109
2.2 Derechos humanos y comercio internacional: el rechazo de la inclusión de la cláusula social por los países latinoamericanos.....	117
2.3 La cláusula social y los bajos salarios.....	124
2.4 La cláusula social y los vencedores y perdedores del comercio internacional.....	126
2.5 La cláusula social y el movimiento social europeo.....	130
2.6 La cláusula social y la concepción jurídica latinoamericana.....	136
2.7 Derechos humanos y economía de mercado.....	142
2.7.1 La cláusula social y el isomorfismo.....	153
2.7.1.1 La Unión Europea: comprendiendo lo que es	156
2.7.1.1.2 La representación exterior de la Unión Europea. Los derechos humanos como valor fundamental en sus relaciones comerciales con terceros países.....	160
PARTE II.....	171
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL.....	171
CAPÍTULO 3.....	173
LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA.....	173
3.1 Cláusula social y derechos humanos: breves comentarios.....	175

3.1.1 Los derechos humanos como <i>ius cogens</i>	184
3.2 Cláusula social: objeto y desarrollo histórico.....	194
3.3 Cláusula social y derecho al desarrollo: comentarios introductorios.....	204
3.4 Desarrollo económico y social: algunas cuestiones.....	213
3.4.1 Desarrollo económico y social y comercio internacional.....	220
3.5 Cláusula social, Declaración de los Derechos del Hombre y comercio internacional.....	248
CAPÍTULO 4.....	259
LA PROTECCIÓN SOCIAL: DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS LABORALES.....	259
4.1 La protección social: derechos humanos y derechos laborales.....	261
4.2 Las generaciones de derechos humanos.....	270
4.2.1 Los derechos humanos de primera generación.....	272
4.2.2 Los derechos humanos de segunda generación.....	275
4.2.3 Los derechos humanos de tercera generación.....	280
4.3 Críticas a las generaciones de derechos humanos (I).....	283
4.4 Críticas a las generaciones de derechos humanos (II).....	289
4.5 La incorporación de los derechos humanos y laborales en los instrumentos internacionales señalados por la UE.....	297
4.6 Limitaciones de los derechos humanos.....	303
4.6.1 Derogación, privación y restricción de los derechos humanos.....	306
4.6.2 Cláusula social y derechos humanos absolutos.....	310
PARTE III.....	317
LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN AMÉRICA LATINA.....	317
CAPÍTULO 5.....	319
LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN AMÉRICA LATINA.....	320
5.1 Panorama reciente de la protección social en la Unión Europea.....	280
5.2 La protección social en América Latina.....	332
5.2.1 Algunos aspectos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.....	347

5.2.2 Instrumentos Jurídicos de protección de los Derechos Humanos en América Latina.....	350
5.2.3 Los derechos humanos en la legislación interna de los países latinoamericanos.....	358
5.2.4 Eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos e interiorización de esos derechos en el ámbito regional.....	362
5.2.5 Relación histórica entre Unión Europea y América Latina: derechos humanos y comercio internacional.....	367
5.2.5.1 “Escayolamiento” del sistema mundial de comercio, Ronda Doha de la OMC y Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión.....	371
5.3 Casos concretos: ejemplos y sanciones. Enfoque empírico y seguimiento de operatividad.....	380
CONCLUSIONES.....	401
La protección social como condicionante en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina.....	401
1.1 Aspectos destacables.....	403
I. - Síntesis, objetivos, alcance y aportaciones relevantes. Aspectos metodológicos...	404
II.- Verificación de las hipótesis propuestas.....	408
III.- Temas pendientes. Evolución del objeto de estudio y perspectivas.....	410
BIBLIOGRAFÍA.....	413
Bibliografía trabajada.....	413
ANEXOS.....	463
Anexo I.....	465
Anexo II.....	466

Resumen en castellano:

La investigación aborda el tema de la protección de los derechos humanos y laborales en las relaciones comerciales entre Unión Europea y América Latina. Para su desarrollo ha sido necesario interconectar diferentes campos del conocimiento: derecho, relaciones internacionales, economía, comercio internacional y política exterior de la Unión Europea.

Su objetivo más amplio era lograr, aunque parcialmente, seis aportaciones principales: 1) el encauzamiento, en la misma investigación, de campos tradicionalmente estudiados de forma separada (por ejemplo, economía y derecho), 2) el análisis de las relaciones entre Unión Europea y América Latina, tomando en consideración la óptica latinoamericana, 3) la aportación de datos y conocimientos oriundos de diferentes campos (por ejemplo, economía, derecho, comercio internacional, política exterior de la Unión Europea etc.), 4) el conocimiento y la difusión de los meandros del funcionamiento del mercado y su interferencia negativa en el rol de promotor de los derechos humanos y laborales atribuido a la cláusula social, 5) la difusión de los instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos y laborales en vigor en América Latina, 6) la reivindicación de una perspectiva analítica que se desarrolla bajo el manto de las fuerzas profundas de la historia y de su estructura temporal.

El marco teórico elegido para establecer eficaz y coherentemente las distintas interconexiones ha sido el de la historia de las relaciones internacionales, con especial destaque para las aportaciones de los historiadores franceses Pierre Renouvin ("fuerzas profundas de la historia") y Fernand Braudel ("estructuralismo temporal"). Su base permite una visión más amplia sobre los diferentes factores involucrados en las relaciones internacionales de naturaleza comercial entre ambas partes. En este sentido, la combinación de la perspectiva histórica con la perspectiva sistémica permitió cierta flexibilidad y dinamismo dentro de este marco de análisis, capaz de albergar distintos campos del conocimiento. Su función de brújula e hilo conductor ha estado presente durante todo el tiempo de desarrollo de la investigación, aunque de modo muy sutil, casi

imperceptible. Finalmente, ha cumplido un rol fundamental en la verificación de las hipótesis de partida y de desarrollo planteadas, sirviendo tanto de orientación en el análisis como de base para la interpretación de los datos colectados durante la investigación, además de proporcionar un soporte sólido para comprender la relación existente entre los fenómenos estudiados.

Partiendo de la afirmación de Campenhoudt & Quivy (1992)¹, según la cual la hipótesis de partida debe abordar el estudio de lo que existe o existió y no el estudio de lo que aún no existe (su finalidad no es prever el futuro, sino captar sus posibilidades y desafíos), la tesis doctoral plantea en su hipótesis de partida si la cláusula social incorporada en los acuerdos comerciales concluidos entre Unión Europea y América Latina cumple eficazmente su función de promotora de los derechos humanos y laborales y, como hipótesis de desarrollo, si es jurídicamente justificable su inclusión en esos acuerdos comerciales.

Relativamente a la hipótesis de partida, la investigación demuestra que no. La cláusula social busca fomentar los derechos humanos y laborales en los países en desarrollo (de hecho, esa cláusula plasma el objetivo de la Unión Europea de fomentar sus valores fundamentales por todo el mundo) pero no altera sustancialmente el funcionamiento del mercado en el marco de la libre competencia. Las empresas privadas seguirán con poder decisorio para asignar los recursos económicos disponibles, incluyendo la partida destinada a los salarios. Además, en un mercado competitivo (libre competencia), las dos principales opciones empresariales para consolidar e incrementar la cuota de mercado son el liderazgo en costes (costes de producción muy bajos, asociados a bajos salarios, explotación laboral y violación de los derechos humanos y laborales) y la innovación (cuyos elevados recursos invertidos son parcialmente compensados *a posteriori* por la producción a bajo coste).

Actualmente las empresas buscan ambas estrategias: a) innovar (lo que exige inversiones elevadas con resultados inciertos) y b) producir con bajos costes (hasta

¹ Campenhoudt, L. V., & Quivy, R. (1992). *Manual de investigação em ciências sociais*. Lisboa: Gradiva.

mismo para compensar la inversión realizada en el proceso de innovación). La cláusula social no puede idóneamente alterar el proceso decisorio de asignación de recursos, al contrario, la experiencia señala que los países en desarrollo con legislaciones protectoras más estrictas no se caracterizan por el respeto sistemático y generalizado de los derechos humanos y laborales (además, suelen presentar elevado nivel de corrupción por parte de los agentes públicos designados a la inspección de las normas laborales incorporadas en los respectivos ordenamientos internos).

No siendo la cláusula social realmente eficaz en su rol de promotora de los derechos humanos y laborales en el mercado (hipótesis de partida), se debilita mucho, bajo la perspectiva de cumplimiento de sus objetivos, la idea de establecerla como un elemento condicionante en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina.

En lo que concierne a la hipótesis de desarrollo, la investigación demuestra que no se justifica jurídicamente la incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales Unión Europea-América Latina. Su justificación es de naturaleza política, en función del modelo europeo de capitalismo, centrado en la sociedad.

En términos estrictamente jurídicos, la incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales no se justifica porque los países latinoamericanos ya poseen un acervo normativo constitucional de protección de los derechos humanos y laborales. Además, ratificaron diversos instrumentos internacionales y regionales que superan los exigidos por la Unión Europea como el estándar básico a ser observado. Para completar, América Latina cuenta con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ambas con elevado prestigio en todo el mundo (en virtud del elevado nivel técnico-jurídico de sus decisiones), sin olvidar que la eficacia de las normas jurídicas protectoras de los derechos humanos y laborales en América Latina no puede ser legalmente apreciada en el ámbito de la Unión Europea.

Existen varios temas en el ámbito de las relaciones comerciales Unión Europea-

América Latina que pueden ser explorados. Entre los más destacados, cabría señalar, por ejemplo: a) la posibilidad de que la cláusula social funcione como barrera comercial no arancelaria, b) la validez de la sanción (restricción del comercio internacional con base en la violación de la cláusula social) ante la Organización Mundial del Comercio, en virtud de la necesidad de convergencia entre los acuerdos bilaterales de comercio y los acuerdos multilaterales. Como es notorio, el sistema multilateral de comercio no contempla los derechos humanos y laborales.

Como reflexión prospectiva se podría preguntar si la Unión Europea estaría realmente dispuesta a sancionar a todos los países latinoamericanos violadores de los derechos humanos y laborales. Aunque esta posibilidad jurídica exista, la probabilidad de que esto ocurra es remota en virtud de los diversos e importantes intereses en juego (comerciales, geopolíticos, geoeconómicos, estratégicos, creación de marcos jurídicos estables para la transferencia de capitales, inversión extranjera directa, internacionalización de empresas europeas etc).

La apreciación, más o menos estricta, que puede realizar la Unión Europea sobre la violación de los derechos humanos y laborales en esos países, así como la eventual decisión de aplicar sanciones y restringir los flujos comerciales, es de naturaleza esencialmente política, no jurídica (esta apreciación debe tomar en cuenta el conjunto de beneficios, perjuicios y consecuencias derivadas de la eventual adopción de una decisión sancionadora).

En resumen, la Unión Europea puede adoptar medidas económicas y comerciales más drásticas en relación a muchos de los países latinoamericanos violadores de los derechos humanos y laborales pero, siguiendo su característica histórica, tendería a aplicar sanciones efectivas solamente en pocos y selectos casos. Aun así, sus intereses comerciales y financieros en América Latina serían afectados con esa decisión.

Palabras clave: América Latina, comercio internacional, derechos humanos, derecho internacional público, relaciones internacionales, Unión Europea.

Resumen en inglés:

This thesis addresses the issue of protection of human and labor in trade relations between EU and Latin American rights. For its development it has been necessary to interconnect different fields of knowledge: law, international relations, economics, international trade and foreign policy of the European Union.

Its broader goal was, albeit partially, achieve six major contributions: 1) the channeling, in the same research field traditionally studied separately (i.e. economics and law), 2) analysis of relationships between European Union and Latin America, taking into account the Latin American perspective, 3) the provision of data and native knowledge from different fields (i.e. economics, law, international trade, foreign policy of the European Union etc.), 4) knowledge and dissemination of the meanders of the functioning of the market and its negative interference in the role of promoter of human and labor rights attributed to the social clause 5) dissemination of the legal instruments of protection of human and labor rights in force in Latin America 6) claim of an analytical perspective that develops under the mantle of profound forces of history and its temporal structure.

The theoretical framework chosen to establish effective and coherent various interconnections has been the history of international relations, with special emphasis to the contributions of the French historians Pierre Renouvin ("profound forces of history") and Fernand Braudel ("structuralism temporary"). Its base allows a broader view on the different factors involved in international relations of a commercial nature between the two sides. In this regard, the combination of historical perspective with systemic perspective allowed some flexibility and dynamism within this framework analysis, capable of accommodating different fields of knowledge. Its function compasses and common thread has been present throughout the development of the research, albeit very subtly, almost imperceptibly. Eventually, it has played a key role in verifying the initial and the developed hypothesis, serving both guidance in the analysis as a basis for the interpretation of the collected data during the research, in addition to providing a solid support to understand the relationship between the phenomena

studied.

Based on the statement of Campenhoudt & Quivy (1992)², according to which the hypothesis must approach the study of what exists or has already existed and not to study what has not existed yet (their purpose is not to predict the future, but to capture its possibilities and challenges), this doctoral thesis presents in his initial hypothesis if the social clause incorporated in trade agreements concluded between European Union and Latin America effectively fulfills its function of promoting human and labor rights and developed hypothesis, if it is legally justifiable inclusion in these trade agreements.

Regarding to the initial hypothesis, this research shows that the social clause is ineffective. The social clause seeks to promote human and labor rights in developing countries (in fact, this clause embodies the objective of the European Union to promote its core values throughout the world), but does not substantially alter market functioning in the framework of competitive market. Private companies will allocate decision makers to economic resources, including the resources allocated to wages. In addition, in a competitive market (competition), the two main affairs options to consolidate and increase market share are leadership cost (very low costs production associated with low wages, labor exploitation and violation of human rights and labor) and innovation (whose high resources invested are subsequently and partially offset by production at low cost).

Currently, companies seek both strategies: a) innovation (which requires high investments with uncertain outcomes) and b) produce low-cost (up to compensate for the same investment in the innovation process). The social clause may suitably not alter the decision-making process of resource allocation, on the contrary, experience shows that developing countries with stricter protective legislation are not characterized by systematic and widespread respect for human and labor rights (it also tends to present high level of corruption by public officials appointed to the inspection of labor standards embodied in the respective domestic systems).

² Campenhoudt, L. V., & Quivy, R. (1992). *Manual de investigação em ciências sociais*. Lisboa: Gradiva.

Not being truly effective social clause in its role as promoter of human and labor rights on the market (initial hypothesis), is much weaker, from the perspective of fulfilling its objectives, the idea of establishing it as a determining element in trade relations between the European Union and Latin America.

With respect to the developed hypothesis, research shows that it is not legally justified the inclusion of the social clause in the European Union-Latin America trade agreements. Their justification is political in nature, based on the European model of capitalism, centered society.

In strictly legal terms, the incorporation of social clauses in trade agreements is not justified because the Latin American countries have already got a regulatory body of constitutional protection of human and labor rights. In addition, they ratified various international and regional instruments that exceed those required by the European Union as the basic standard to be observed. In addition, Latin America has the Inter-American Human Rights System (composed of the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights), both with high prestige worldwide (under high technical and legal level of their decisions) without forgetting that the effectiveness of protective legal standards of human and labor rights in Latin America cannot legally be appreciated in the context of the European Union.

There are several issues in the field of trade relations of European Union-Latin America that can be explored. Amongst the most prominent, it should be noted, for example: a) the possibility that the social clause function as non-tariff trade barrier, b) the validity of the sanction (restriction on international trade based on the violation of the social clause) to the World Trade Organization, under the need for convergence between bilateral trade agreements and multilateral agreements. As it is well known, the multilateral trading system does not include human and labor rights.

As a reflection one might ask whether the European Union would be really willing to punish all Latin American countries violators of human and labor rights. Although

this legal possibility exists, the probability of this happening it is remote under the different and important interests at stake (commercial, geopolitical, geo-economics, strategic, creating stable legal framework for the transfer of capital, foreign direct investment, internationalization European companies etc.).

With the appreciation more or less strict, which can make the European Union on the violation of human and labor rights in those countries and the eventual decision to apply sanctions and restrict trade flows, is essentially political, not legal (this assessment must take into account all benefits, damages and consequences of the possible adoption of a sanction decision).

In short, the European Union may adopt more drastic economic and trade measures relating to many Latin American countries violators of human and labor rights but, following their historical property, would tend to apply effective sanctions only in a few selective cases. Yet their commercial and financial interests in Latin America would be affected by that decision.

Keywords: *European Union, Latin America, human rights, international trade, international relations, public international law.*

AGRADECIMIENTOS

Con una jornada laboral extremadamente intensa, que supera con creces las cuarenta horas semanales, el apoyo de mi familia ha sido importante para que pudiera desarrollar esta investigación. Muchas gracias a mi esposa Clea, mi hija Adriana, mi hijo Carlo, mi hermana Suely, mi padre Armando y mi madrastra Rosely. Os quiero.

Gracias al profesor José Ángel Sotillo Lorenzo por la oportunidad de realizar esta investigación. Mi gratitud es inmensa.

A DIOS.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ABC:	Acuerdos Bilaterales de Comercio
AC:	Acuerdo Comercial
ACNUDH:	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ACP:	África, del Caribe y del Pacífico
AELC:	Asociación Europea de Libre Comercio
AGNU:	Asamblea General de las Naciones Unidas
AGOE:	Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
AL:	América Latina
ALCA:	Área de Libre Comercio de las Américas
ASHC:	Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales
CADH:	Convención Americana sobre Derechos Humanos
CDESC:	Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
CDFUE:	Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
CDH:	Consejo de Derechos Humanos
CE:	Comunidad Europea
CEDH:	Convención Europea de Derechos Humanos
CEE:	Comunidad Económica Europea
CELAC:	Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
CIDH:	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CVDT:	Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
DADDH:	Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
DCP:	Derechos Civiles y Políticos
DESC:	Derechos Económicos, Sociales y Culturales
DCPESC:	Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales
DD:	Derecho al Desarrollo
DD.HH:	Derechos Humanos
DD.HH.L	Derechos Humanos y Laborales
DOCE:	Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOUE:	Diario Oficial de la Unión Europea

DUDH:	Declaración Universal de los Derechos Humanos
EE.UU:	Estados Unidos de América
FMI:	Fondo Monetario Internacional
GBM:	Grupo del Banco Mundial
MERCOSUR:	Mercado Común del Sur
NAFTA:	North American Free Trade Agreement
OCDE:	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OEA:	Organización de los Estados Americanos
OECE:	Organización Europea para la Cooperación Económica
OIT:	Organización Internacional del Trabajo
OMC:	Organización Mundial del Comercio
ONU:	Organización de las Naciones Unidas
OSD:	Órgano de Solución de Diferencias
PCC:	Política Comercial Común
PD:	Países Desarrollados
PECOS:	Países de Europa Central y Oriental
PED:	Países en desarrollo
PESC:	Política exterior y de seguridad común
PFPIDESC:	Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PIDCP:	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC:	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PMA:	Países menos Adelantados
SI:	Sociedad internacional
SIDH:	Sistema Interamericano de Derechos Humanos
SPG:	Sistema de Preferencias Generalizadas
TFUE:	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TEDH:	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TUE:	Tratado de la Unión Europea
UE:	Unión Europea

PRESENTACIÓN

1.1 Motivaciones personales

La elección del tema de esta tesis está estrechamente asociada a la experiencia personal, profesional y académica de este investigador y a la pertinencia del momento histórico (crisis económica / debilidad de crecimiento económico).

En lo que concierne al aspecto personal, el interés por vincular AL y UE en la investigación deriva tanto del hecho de haber nacido en Brasil (aunque de familia española e italiana) como por el creciente interés por la protección de los DD.HH.L en los países latinoamericanos. Profesionalmente, el tema corresponde a una percepción adquirida (y gradualmente fortalecida) durante más de 25 años como consultor jurídico (gobierno brasileño y empresas latinoamericanas y multinacionales) de que la cláusula social incorporada en los acuerdos comerciales concluidos entre UE y AL no cumple eficazmente su función de promotora de los DD.HH.L.

En nivel académico, la formación de este investigador en derecho, economía y comercio internacional encontró en el tema elegido la posibilidad de tender un puente e interrelacionar estos diferentes campos de conocimiento, enriquecido ahora con las Ciencias Políticas, aunque sin olvidar, como señala Agazzi (2002)³, el desafío de la interdisciplinariedad. La investigación sobre la protección de los DD.HH.L en las relaciones comerciales entre UE y AL, además de atender a los intereses personales, profesionales y académicos (búsqueda de una visión más profunda e integradora, que este investigador intenta plasmar en su actividad como abogado y docente universitario), cumple el rol, muchísimo más importante, de generar un conocimiento (que se espera sea social y académicamente relevante) susceptible de ser canalizado para distintos actores sociales, en un área muy poco estudiado.

³ Agazzi, E. (2002). El desafío de la interdisciplinariedad: Dificultades y logros, *Revista Empresa y Humanismo*, 2, 241-252.

1.2 Observaciones sobre la investigación

El campo elegido - la protección social como condicionante en las relaciones comerciales entre la UE y AL – atiende a esa necesidad de comprender un fenómeno que abarca el derecho internacional público, las relaciones internacionales, la política internacional, la ciencia política, el comercio internacional, la economía internacional, la microeconomía y otros campos afines, no se limitando a un mero análisis económico del derecho, como señalado por Roemer (1994)⁴, Durán (1995)⁵ o Vázquez (1996)⁶. Aun así, este último campo jurídico mencionado será abordado oportunamente, a tenor de las enseñanzas de Dunoff & Trachtman (1999)⁷, en virtud de su utilidad en el cuestionamiento de la eficacia de la cláusula social en su rol de promotor de los DD.HH.L.

La actuación profesional de este investigador en el ámbito del Mercosur y en otros países latinoamericanos le ha brindado la oportunidad de tener contacto tanto con relevantes empresarios como con humildes trabajadores. En relación a estos últimos, ha podido observar sus precarias condiciones de vida (y de sus respectivas familias) lo que le ha impulsado a cuestionar la eficacia de la cláusula social en promover los DD.HH.L en AL. Con efecto, muchas empresas actuantes en la región logran incrementar su competitividad mediante continuas violaciones de los DD.HH.L de sus trabajadores (Bennett, 2002)⁸. Uno de los escenarios más comunes que este investigador presenció podía ser sucintamente descrito como sigue:

⁴ Roemer, A. (1994). *Introducción al Análisis Económico del Derecho*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

⁵ Durán, P. (1995). Sobre el análisis económico del Derecho. *Anuario de filosofía del derecho*, (12), 705-718.

⁶ Vázquez, R. (1996). Comentarios sobre algunos supuestos filosóficos del análisis económico del derecho. *Isonomía*, 5, 311-342.

⁷ Dunoff, J. L., & Trachtman, J. P. (1999). Economic analysis of international law. *Yale J. Int'l L.*, 24, 1-39.

⁸ Bennett, J. (2002). Multinational corporations, social responsibility and conflict. *Journal of International Affairs*, Columbia University, 55(2), 393-414.

- Empresarios: no podían (o no querían) mejorar la situación de sus trabajadores para no perder su competitividad. El argumento básico era que la aplicación de los instrumentos jurídicos de protección de los DD.HH.L encarecían los costos de producción, lo que acabaría llevando la empresa a despedir (quizá masivamente) sus empleados, en una posición ya señalada por Pfeffer (1994)⁹.

- Trabajadores: muchos aceptaban resignadamente su situación de precariedad laboral por temor a perder sus puestos de trabajo (mal pagados y, en muchísimos casos, sin cualquier registro legal). El argumento básico era que, caso se incrementase la presión gubernamental, social o personal sobre la empresa (para que observara y respetara sus DD.HH.L), un gran porcentaje de ellos correría el riesgo de perder su único medio de supervivencia. En una situación como esa, naturalmente, muchos de ellos no se atrevían a reclamar o reivindicar sus legítimos derechos. En Colombia, solamente para mencionar un ejemplo, los acuerdos sin participación sindical han aumentado alrededor de un 10% entre 1990 y 2005, según Luz (2005)¹⁰.

Al elegir este tema para su tesis doctoral en Ciencias Políticas, este investigador tomó en cuenta que muchos trabajadores latinoamericanos rechazan la protección de sus propios derechos, incluyendo, muchas veces, la prohibición del trabajo infantil. Al final, si los/las niños(as) no pueden trabajar, menor será el ingreso familiar, ya por sí esmirriado. Además, el porcentaje de trabajadores legalmente registrados, especialmente en las áreas rurales, sigue siendo bajo. Desde las investigaciones de Portes (1995)¹¹, hace veinte años, la situación no parece haber cambiado radicalmente. Por estas razones – y con base en las experiencias profesionales de este investigador - se ha incluido en la tesis doctoral un análisis sobre el funcionamiento del mercado para poder señalar los problemas de efectividad de la cláusula social como promotora de los DD.HH.L. Esta

⁹ Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people. *California management review*, 36(2), 9-21.

¹⁰ Luz, M. (2005). *La reforma laboral en América Latina: 15 años después*. M. L. V. Ruíz (Ed.). Oficina Internacional del Trabajo, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

¹¹ Portes, A. (1995). *En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la economía no regulada*. FLACSO Mexico.

iniciativa atiende directamente a la búsqueda de respuestas al planteamiento enmarcado en la hipótesis inicial.

Como se verá a lo largo de esta investigación, la incorporación de la cláusula social en los ABC de comercio UE-AL es políticamente correcta pero jurídicamente cuestionable. Otro aspecto que se ha destacado en la investigación, con el propósito de alejar posiciones más estrictas y limitadas muchas veces observadas en los contactos profesionales con empresas y trabajadores, es el tipo o categoría jurídica comprendida en la expresión “cláusula social”.

Como se observará, ella no se restringe a los derechos laborales (van Liemt, 1989¹²; Castello, 2000¹³). Para este investigador, los DCPESC están comprendidos en la cláusula. En ambos casos, sin embargo, los instrumentos jurídicos de vocación universal (ONU y OIT) referenciados en los acuerdos comerciales recíprocos y no recíprocos (SPG de la UE) son frecuentemente ignorados por los trabajadores, rechazados o violados por muchos empresarios y desatendidos, de cierta forma y en la práctica, por los propios estados, interesados en que sus empresas exporten como sea, aunque con el costo social de ciertos segmentos de la población (los estratos más bajos), ya que cuentan con el ingreso de divisas para beneficiar sus balanzas de pago y comercial (McCombie, Thirlwall & Thompson, 1994)¹⁴.

Esta investigación también indaga la posibilidad de que los estados limiten los DD.HH. Como se verá, algunas limitaciones son legítimas bajo la óptica estrictamente jurídica, de modo que no se podría técnicamente hablar en violación de la cláusula

¹² van Liemt, G. (1989). Normas laborales mínimas y comercio internacional: ¿ resulta viable una cláusula social?. *Revista internacional del trabajo*, 108(3), 301-318.

¹³ Castello, A. (2000). La cláusula social y la declaración social laboral del MERCOSUR. *Derecho Laboral*, 198, 201-228.

¹⁴ McCombie, J. S., Thirlwall, A. P., & Thompson, P. (1994). *Economic growth and the balance-of-payments constraint*. New York: St. Martin's press.

social para efectos de aplicación de eventuales medidas sancionadoras por parte de la UE.

La noción de cláusula social se mueve en un escenario en que convergen factores políticos, económicos, comerciales, sociales, estratégicos etc. de modo que el investigador puede formular preguntas como las siguientes:

- ¿Es la cláusula social eficiente en su objetivo de promover los DD.HH.L?
- ¿Cuáles son las dimensiones en que se puede evaluar su eficacia?
- ¿Es la cláusula social jurídicamente justificable en el ámbito de las relaciones comerciales UE-AL?
- En este caso, ¿por qué?; ¿No existen previsiones legales suficientes en el marco jurídico latinoamericano?
- ¿Existe control institucional adecuado que garantice la protección de los DD.HH en AL?

En un primer momento (hipótesis inicial), la investigación busca analizar la eficacia de la cláusula social presente en los acuerdos UE-AL, tomando en cuenta el funcionamiento del mercado y, en un segundo momento (hipótesis de desarrollo) si la incorporación de esta cláusula es jurídicamente justificable en los acuerdos comerciales concluidos con AL, en virtud tanto de la existencia de un enorme acervo normativo que consagra la protección de los DD.HH.L como de la presencia del sistema interamericano de DD.HH.

La cláusula social es políticamente correcta, plasma jurídicamente los valores fundamentales de la política exterior de la UE (DD.HH, democracia y estado de derecho) pero permite una interpretación esencialmente política por parte de la UE sobre la situación jurídica y social de los estados latinoamericanos. Las consecuencias derivadas de una eventual adopción de medidas sancionadoras (improbables ante el enorme juego de intereses: marco regulatorio para la transferencia de capitales y la inversión extranjera directa, expansión e internacionalización de empresas europeas en

la región etc.) también son apreciadas políticamente (reflejos económicos y comerciales, por ejemplo).

De hecho, la interpretación jurídica de un sistema de protección por otro sistema de protección no sería legal ni adecuada (Zweigert & Kötz, 1998)¹⁵. La interpretación, más política que jurídica, y tomando en cuenta los intereses comerciales, económicos, geoestratégicos etc. estaría por detrás, por ejemplo, de la apertura de negociaciones con Cuba o la actualización y ampliación de los acuerdos comerciales con México, en el marco de la VIII Cumbre Europea-América Latina y el Caribe (II UE-CELAC). Comprender como la cláusula social se articula en el mercado y en el campo normativo permitirá, sin duda, apreciar su papel con otras perspectivas y traer nuevamente para el campo normativo (al final, es una cláusula convencional) un tema que se ha politizado demasiadamente (Gilpin, 2011)¹⁶. Este crisol no debería generar extrañeza pues al final, como observa Arlen (1998)¹⁷, todo está interrelacionado.

1.3 Objeto, estructura, contenido de la tesis y resumen de los capítulos

El objeto de estudio de la investigación está comprendido esencialmente en el campo académico del derecho internacional público, de las relaciones internacionales, de la política exterior y comercial de la UE y de los DD.HH. La línea de investigación planteada propone evaluar la eficacia de la cláusula social como promotora de los DD.HH.L y si es justificable jurídicamente su presencia en los acuerdos comerciales concluidos entre UE y AL.

El objeto material de la investigación (parcela de la realidad que será investigada) está constituida por las relaciones comerciales entre la UE y AL (en cuyos acuerdos se

¹⁵ Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *Introduction to comparative law*. Oxford: Clarendon Press.

¹⁶ Gilpin, R. (2011). *Global political economy: Understanding the international economic order*. Princeton University Press.

¹⁷ Arlen, J. (1998). Comment: The future of behavioral economic analysis of law. *Vand. L. Rev.*, 51, 1765-1798.

plasma la cláusula social) al paso que el objeto formal (o sea, la perspectiva intelectual desde la que se aborda el conocimiento de dicha parcela de la realidad) es proporcionada por la disciplina denominada relaciones internacionales, tomando en cuenta las aportaciones de los distintos campos abarcados.

Durante el desarrollo de la investigación se ha considerado sobretodo las observaciones de los siguientes autores: a) Arenal (1990)¹⁸, según la cual se debe tomar en cuenta todas las relaciones sociales (políticas, económicas, culturales etc.) que configuran la sociedad internacional, b) Fernández Liesa (2008)¹⁹, que observa que en una sociedad heterogénea cultural, política y económicamente, es necesario reforzar y enriquecer progresivamente los valores asumidos por la comunidad internacional (algo que dependerá de la voluntad política y de que en los foros internacionales se logre transitar de las agendas e ideas al consenso y al Derecho), c) Díaz Barrado (2008)²⁰ que resalta la compartición de diversos valores comunes en las Cumbres celebradas entre la UE y AL y el Caribe, como el respeto, la promoción y la protección de los DD.HH y libertades individuales, la universalidad de todos los DD.HH, la economía de mercado, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la no intervención y autodeterminación, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, la igualdad entre todos los estados, la cooperación para el desarrollo económico y social (incorporación del concepto de cohesión social), el respeto del derecho internacional, el espíritu de igualdad, respeto, asociación y cooperación, el compromiso a favor de un sistema multilateral fuerte y eficaz y la competitividad internacional, d) Sanahuja (2015)²¹, según lo cual el dialogo

¹⁸ Arenal, C. D. (1990). *Introducción a las Relaciones Internacionales*. Madrid: Tecnos.

¹⁹ Fernández Liesa, C. R. (2008). La democracia y los derechos humanos en el espacio eurolatinoamericano e iberoamericano. Díaz Barrado, Fernández Liesa y Zapatero Miguel. *Perspectivas sobre las relaciones entre Unión Europea y América Latina*. Madrid: Universidad Carlos III y Boletín Oficial del Estado, 51-77.

²⁰ Díaz Barrado, C. M. (2008). Marco político-normativo de las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe a la luz de las Cumbres. Díaz Barrado, Fernández Liesa y Zapatero Miguel. *Perspectivas sobre las relaciones entre Unión Europea y América Latina*. Madrid: Universidad Carlos III y Boletín Oficial del Estado, 17-26.

²¹ Sanahuja, J. A. (2015). *La UE y CELAC: Revitalización de una relación estratégica*. Relaciones birregionales/Series de los Foros de Reflexión. Hamburgo: Fundación EU-LAC.

político y la relación birregional debe servir a sus propósitos fundacionales, como diversificar las relaciones exteriores, conocer las opciones políticas, económicas y sociales de las partes e identificar interdependencias y responsabilidades compartidas en relación a cuestiones que van más allá de la agenda birregional y Sotillo Lorenzo (2009)²², según lo cual AL durante años deseó más comercio que ayuda por parte de la UE.

Esta tesis doctoral se estructura en tres partes distintas. En la primera parte – El Marco de Análisis de la Protección Social como Condicionante en las Relaciones Comerciales entre la Unión Europea y América Latina - se establece el marco teórico de referencia de la tesis, su fundamento y la base sobre la que se construye la investigación. La segunda parte – La Protección de los Derechos Humanos y Laborales en el Comercio Internacional – busca dotar de sentido al título de la tesis y analizar diferentes aspectos de la cláusula social. La tercera parte – La Protección Social en la Unión Europea y en América Latina – procura evaluar y comparar la protección de los DD.HH en ambas regiones del planeta, para efectos de buscar la justificación jurídica de la cláusula social en los acuerdos comerciales concluidos por la UE con AL (países y subregiones). Estas tres partes están divididas en cinco capítulos interrelacionados, además de las conclusiones:

La primera parte está constituida por dos capítulos: “Capítulo 1. Introducción. Planteamiento General de la Investigación y Marco Teórico” y Capítulo 2. Derechos Humanos y Comercio Internacional: Delineamientos Básicos. En el capítulo 1 se establece el marco teórico de referencia de la tesis, su fundamento y la base sobre el que se construye la investigación. La idea central es establecer las coordenadas en torno a las cuáles se realizará la investigación. Dentro de este capítulo serán abordados distintos aspectos, de acuerdo con la propuesta de Jacobstein, Mersky & Dunn (1994)²³: a) objeto

²² Sotillo Lorenzo, J. A. (2009). Las Cumbres Unión Europea-América Latina y Caribe: Encuentros y Desencuentros, *Revista de Derecho Comunitario Europeo* nº 33 (mayo/agosto), 541-566.

²³ Jacobstein, J. M., Mersky, R. M., & Dunn, D. J. (1994). *Fundamentals of legal research*. Foundation Press.

de estudio, b) justificación (académica y social) y desarrollo de la investigación, c) objetivos planteados, d) relevancia de la investigación (perspectiva social y perspectiva académico-científica), e) estado de la cuestión, f) justificación del período histórico considerado, g) originalidad, límites y problemas encontrados en el proceso investigador, h) marco teórico, i) cuestiones metodológicas (metodología utilizada en la investigación académica), j) hipótesis de la investigación (hipótesis de partida y de desarrollo), k) fuentes empleadas. En función del profundo entrelazamiento de elementos jurídicos, políticos, económicos, comerciales, estratégicos, históricos etc. a este investigador le ha parecido conveniente considerar como elemento subyacente aquello que Pierre Renouvin denominó “fuerzas profundas de la historia” (Renouvin & Duroselle, 2000)²⁴. Estas fuerzas impulsan los actores internacionales a adoptar determinadas posiciones o conductas a lo largo de su historia en función de sus intereses estratégicos, políticos, económicos etc. (Gilpin & Gilpin, 1987)²⁵.

Efectivamente, los estados adoptan determinadas posturas, cambian de rumbo, rectifican posiciones, concluyen acuerdos diversos (como los comerciales), buscan o rechazan asociaciones con otros miembros de la sociedad internacional, declaran la guerra, proclaman la paz, se acercan o se repudian, establecen o cortan relaciones diplomáticas etc. por diferentes razones que gravitan sobre las fuerzas motrices de la historia. Son las fuerzas profundas que forman el sustrato de los diferentes contextos internacionales. A propósito, la vinculación entre economía, política y comercio ha sido destacada por Almeida (2001)²⁶ y, con un enfoque más generalizado, por Pomeranz & Topik (2012)²⁷. El capítulo 2, “Derechos Humanos y Comercio Internacional:

²⁴ Renouvin, P., & Duroselle, J. B. (2000). Introducción a la historia de las relaciones internacionales. Fondo de Cultura Económica.

²⁵ Gilpin, R., & Gilpin, J. M. (1987). *The political economy of international relations* (Vol. 8). Princeton: Princeton University Press.

²⁶ Almeida, P. R. D. (2001). *A economia internacional no século XX: um ensaio de síntese*. Revista Brasileira de Política Internacional, 44(1), 112-136.

²⁷ Pomeranz, K., & Topik, S. (2012). *The World That Trade Created: Society, Culture, and the World Economy, 1400 to the Present*. New York: Me sharpe.

Delineamientos Básicos” busca identificar y fijar el tema que sirve de sustrato para el desarrollo de la investigación, abordando distintos aspectos relacionados a la cláusula social para evaluar su eficacia.

La segunda parte - “La Protección de los Derechos Humanos y Laborales en el Comercio Internacional” - está constituida por dos capítulos: a) Capítulo 3. “Los Derechos Humanos en las Relaciones Comerciales de la Unión Europea” y Capítulo 4. “La Protección Social: Derechos Humanos y Derechos Laborales”. El primero busca analizar la cláusula social bajo la perspectiva de los DD.HH. Entre otros aspectos, se analizará la categoría *ius cogens* (construcción doctrinaria occidental relevante para la posición actualmente ocupada por los DD.HH en la esfera jurídica) y la relación de la cláusula social con el DD económico y social y el comercio internacional; Por su vez, el capítulo 4 centrará su análisis en la extensión de la expresión “cláusula social” en función de los derechos laborales, las generaciones de los DD.HH y las limitaciones legítimas a esos derechos por parte del poder estatal (las limitaciones ilegítimas configurarían violación a la cláusula social).

La tercera parte está constituida por el capítulo 5 - “La Protección Social en la Unión Europea y en América Latina”. En este capítulo la investigación busca capturar el panorama reciente de la protección social tanto en la UE como en AL y profundizar el estudio del sistema interamericano de DD.HH con el objetivo de responder a la hipótesis de desarrollo (la justificación jurídica de la cláusula social en los ABC concluidos entre UE y AL). Por último, son expuestas las conclusiones de la tesis doctoral: se verifican las hipótesis de investigación desarrolladas en la parte introductoria del trabajo (con el objetivo de confirmarlas, reformularlas o refutarlas) y se añaden reflexiones sobre el tema objeto de la investigación, incluyendo algunas de carácter prospectivo. El último apartado contiene un listado de la bibliografía empleada en la elaboración del trabajo.

PARTE I

EL MARCO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO

1.1.- JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Son varios los objetivos perseguidos en este primer capítulo: a) justificar académica y socialmente la importancia de la investigación, b) justificar el periodo de tiempo elegido sobre lo cual se desarrollará la tesis (periodización), c) analizar el estado actual del debate de la cuestión, d) señalar la originalidad del tema y de su abordaje, e) señalar los problemas y límites enfrentados durante el proceso investigador. En el marco teórico se explican las razones del abordaje adoptado sobre el objeto material de la tesis, las hipótesis de partida y de desarrollo planteadas y la metodología empleada para recurrir el camino hacia su verificación. Por último, se describen las fuentes empleadas en la investigación y se destaca el esfuerzo de tender un puente entre diferentes áreas del conocimiento como el derecho, las relaciones internacionales, el comercio internacional y la economía.

1.1.1 - Objetivos de la tesis doctoral

Esta tesis doctoral tiene los siguientes objetivos: a) cubrir lagunas de conocimiento (tanto en lo que concierne a la relación entre la asignación de recursos por el empresario en una economía de mercado y la efectividad de la cláusula social incorporada en los acuerdos comerciales concluidos por la UE con países y subregiones latinoamericanas como en lo que se refiere a la justificación jurídica de la cláusula social incluida en esos acuerdos); b) constituirse en un punto de referencia para estudiosos e investigadores de las áreas de derecho (derecho internacional público, DD.HH), relaciones internacionales, comercio internacional, ciencias políticas y economía internacional.

En este sentido, podría servir como punto de partida para aquellos investigadores (nacionales y extranjeros, con especial destaque para los latinoamericanos) que se interesen por ampliar y profundizar el conocimiento de las interrelaciones jurídicas, políticas, económicas y comerciales; c) estimular el conocimiento sobre la interrelación entre los DD.HH y el comercio internacional, tema considerado tradicionalmente, bajo la perspectiva jurídica, como imposible de ser tratado conjuntamente.

1.1.2.- Relevancia de la investigación

El estudio de las relaciones entre los DD.HH y el comercio internacional constituye un tema extremadamente importante y complejo. En todo el mundo surgen voces que claman por el fin de las violaciones de las normas de protección de los DD.HH.L. Estas violaciones suelen, muchas veces, perpetradas por empresas nacionales y multinacionales (cuya presencia en el país es casi siempre fomentada por los estados en virtud de su interés económico).

En varios países, aunque la producción se realice con flagrantes violaciones de sus derechos, muchos trabajadores evitan manifestarse en contra de sus empleadores, por temor de perder su medio de subsistencia²⁸. Es habitual que ese trabajo sobreexplotado y mal remunerado constituya la única fuente de ingreso económico de toda la familia. Estos problemas no ocurren solamente en países como Bangladés; lamentablemente, AL también es prodiga en casos de trabajo infantil, incumplimiento de límites de jornadas laborales etc.

Existen muchas dificultades políticas, económicas y operacionales, especialmente en países con gobiernos corruptos e instituciones débiles, para que se establezca un riguroso control sobre la conducta de las empresas hacia sus trabajadores. Una de las dificultades, que ha servido de excusa para varias multinacionales, es que los trabajadores cuyos derechos son violados no integran sus respectivas plantillas. Esto normalmente es verdad, puesto que está diseminada en el entorno empresarial la subcontratación en la cadena productiva. Las empresas no pueden, o no desean, tener control sobre estas personas, trabajadoras de sus diversos proveedores (de la Garza,

²⁸ Las huelgas, consagradas en las constituciones políticas de los países latinoamericanos, mejoran la posibilidad de reivindicar el adecuado cumplimiento de los derechos laborales.

2012)²⁹. Como afirma Bahillo (2012)³⁰, solamente cuando alguna tragedia humana de grandes proporciones traspasa a los medios de comunicación de masa, esas empresas, voluntariamente, incorporan reglas de buena conducta (que suelen ser sectoriales y no vinculantes al estado donde actúan).

En un mercado competitivo, la sobreexplotación de los trabajadores suele ser vista, en muchos hogares, como una necesidad empresarial para el abaratamiento de costos (mano de obra barata significa, casi siempre, producción con precios competitivos). Los bienes producidos de esta manera son, en su mayor parte, vendidos/exportados a mercados consumidores con mayor poder adquisitivo (la diferencia de precios, desde la producción en la fábrica hasta el consumidor final, puede superar cientos o miles de puntos porcentuales).

Evidentemente, las producciones y el comercio no engloban únicamente la mano de obra o su explotación, con o sin violación de los DD.HH.L por agentes privados o públicos. Factores como el acceso a los recursos (materiales, financieros, humanos etc.), acuerdos clave con los proveedores, ayudas gubernamentales etc. también deben ser considerados. Las “cinco fuerzas de Porter” son un “clásico” en este sentido (Porter, 2008)³¹, al englobar: 1) el poder de negociación de los clientes, 2) el poder de negociación de los proveedores, 3) la amenaza de la entrada de nuevos competidores (barreras de entrada), 4) la amenaza de productos sustitutivos y 5) la relación entre las empresas competidoras³².

²⁹ de la Garza, E. (2012). La subcontratación y la acumulación de capital en el nivel global. pp. 17-40, en Celis J., (2012) *Comp. La Subcontratación Laboral en América Latina: Miradas Multidimensionales*. Medellín, Colombia: Escuela Nacional Sindical.

³⁰ Bahillo, C. G. (2012). Ética y responsabilidad empresarial en la sociedad globalizada. *Revista Icade. Publicación de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales* 75, 125-142.

³¹ Porter, M. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. *Harvard Business Review*, 86(1), 58-77.

³² Esta tesis de doctorado se centrará exclusivamente en la evaluación de la eficacia de la cláusula social y de su justificación jurídica en los acuerdos comerciales.

El escenario internacional comprende diversas relaciones. Las de naturaleza comercial constituyen solamente una de ellas, aunque tremendamente importante para las empresas y para los países o grupo de países (como la UE). El mundo contemporáneo está constituido por extensas redes de poder, como afirma Rezende Martins (2002)³³, en que la política, la economía, la sociedad y la cultura se entremezclan en escala global. Es este el escenario transversal en que se desarrolla la cláusula social, incorporada como disposición convencional en los acuerdos de comercio. Estos distintos factores interconectados (incluidos en la historia de las relaciones internacionales a partir del esfuerzo de historiadores como Renouvin y Braudel), parecen hoy algo natural. Sin embargo, muchos obstáculos impuestos por las elites intelectuales y académicas de Francia, y especialmente de Alemania, han tenido que ser sorteadas para que pudiera ser aceptada como un flujo continuo de hechos y valores que no se confunden con la mera sucesión de eventos.

En términos temporales, las relaciones internacionales (incluyendo las de naturaleza comercial), están asociadas a un proceso histórico que comprende tres niveles: largo plazo, medio plazo y corto plazo. En este amplio contexto, la inserción de los DD.HH en las relaciones comerciales internacionales, mediante la incorporación de la cláusula social, plasma un valor cristalizado en el tiempo, aunque su efectividad, como se verá en esta investigación, sea cuestionable bajo la perspectiva económica (Smith, 1998)³⁴. En la UE, por razones históricas, el respeto de los DD.HH constituye un valor fundamental de su política exterior, cuya importancia es creciente en las agendas internacionales, como recuerdan Dunne & Wheeler (1999)³⁵. Sin embargo, aunque la

³³ de Rezende Martins, E. C. (2002). *Relações internacionais: cultura e poder*. Ibri.

³⁴ Smith, K. E. (1998). The use of political conditionality in the EU's relations with third countries: How effective? *European Foreign Affairs Review*, 3(2), 253-274.

³⁵ Dunne, T., & Wheeler, N. J. (1999). *Human rights in global politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

política exterior de los estados occidentales tienda a exaltar el respeto por los DD.HH, la efectividad de la cláusula social se difumina en el mercado (Ishay, 2008)³⁶.

Dos regiones concretas del planeta han sido seleccionadas en la investigación: UE y AL. Por un lado, se tiene a un grupo de PD y por otro, a un grupo de PED. La elección de estas dos partes ha sido natural por distintas razones: a) en AL aún subsisten muchos episodios de violación de los DD.HH.L (lo que incluye, evidentemente, la producción de bienes exportables para la UE), b) AL se encuentra amparada por el sistema interamericano de protección de los DD.HH, c) UE tiene un sistema de protección de los DD.HH, d) los DD.HH (así como la democracia y el estado de derecho) constituyen valores fundamentales de la política exterior de la UE, e) UE y AL poseen importantes vínculos comerciales, f) la cláusula social está asociada a la protección de los DD.HH (su finalidad es fomentarlos en los PED), g) la relación UE-AL es asimétrica (Sanahuja, 2000)³⁷ pero estratégica (Grisanti, 2004)³⁸.

Es importante recordar que la UE brinda a los PED, desde la década de setenta del siglo pasado, facilitaciones comerciales consistentes en rebajas arancelarias no recíprocas a sus productos exportables al mercado único. El respeto por los DD.HH, por parte de los PED, juega un papel relevante en la concesión de esos beneficios comerciales, aunque los sindicatos europeos (con destaque para los franceses), tienden a presionar a sus respectivos gobiernos a no aceptar la importación de productos obtenidos con flagrantes violaciones de los DD.HH.L.

Aquí, más que altruismo, lo que existe es miedo de que los productos importados a precios más bajos pongan en peligro la supervivencia de las empresas y sus respectivos

³⁶ Ishay, M. R. (2008). *The history of human rights: From ancient times to the globalization era*. Univ of California Press.

³⁷ Sanahuja, J. A. (2000). Asimetrías económicas y concertación política en las relaciones Unión Europea-América Latina: un examen de los problemas comerciales. *Revista electrónica de estudios internacionales*, 1-18.

³⁸ Grisanti, L. X. (2004). El nuevo interregionalismo trasatlántico: la asociación estratégica Unión Europea-América Latina (vol. 4). BID-INTAL.

puestos de trabajo. En lo que concierne a la dignidad humana, tanto la UE como AL están inmersas en procesos dinámicos que revelan tanto las “fuerzas profundas de la historia” (Renouvin & Duroselle, 2000)³⁹ como su estructuración en el tiempo (Braudel, 1986)⁴⁰. Ambas perspectivas están en la base del juego diplomático, político, económico y comercial y parecen señalar que el ejercicio del poder está basado mucho más en los intereses egoístas que en los valores universales.

Según Saraiva (2001)⁴¹, la complejidad de esa red de poder solamente puede ser comprendida adecuadamente desde la perspectiva histórica. En este ámbito, la protección de los DD.HH ha evolucionado en las últimas décadas aunque la retomada de la globalización, con el fin del socialismo, presenta escenarios muy dispares (Art & Jervis, 1996)⁴². Con efecto, la tradicional perspectiva historiográfica, basada en la política y la diplomacia, ha sido reemplazada por un crisol que comprende la economía, el derecho, el comercio, la política, la cultura, la ecología, los valores, entre otros factores. La historia de las relaciones internacionales proporciona movimiento, sentido y racionalidad al presente⁴³. La universalización de ciertos valores, como la democracia, el estado de derecho y los DD.HH proceden de largos recorridos históricos. En su magistral obra “Todo imperio perecerá: Teoría sobre las relaciones internacionales”,

³⁹ Renouvin, P. & Duroselle, J. B. (2000). *Introducción a la historia de las relaciones internacionales*. México: Fondo de Cultura Económica.

⁴⁰ Braudel, F. (1986). *La historia y las ciencias sociales*. Madrid: Alianza.

⁴¹ Saraiva, J. F. S. (2001). *História das relações internacionais: O objeto de estudo e a evolução do conhecimento. Relações internacionais — dois séculos de história*. Brasília: IPRI, 15-58.

⁴² Art, R. C. & Jervis, R. *International politics: enduring concepts and contemporary issues*. New York: Harper Collins.

⁴³ Por ejemplo, los DD.HH plasmados en la reconstrucción europea en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial se han consolidado en las relaciones exteriores del bloque hasta llegar a nuestros días, con la incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales UE-AL. La contribución del pasado permite analizar el presente y arriesgar ciertas reflexiones prospectivas sobre el futuro. No existe teoría consistente en las relaciones internacionales sin sustentación histórica. El presente es un instante impulsado por un pasado que debe ser tomado en cuenta.

Duroselle (1998)⁴⁴ deja claro la necesidad del conocimiento histórico en el estudio de las relaciones internacionales contemporáneas. A propósito, Watson (2009)⁴⁵ señalaba el concepto de SI europea (siglo XIX e inicio del siglo XX) para explicar la construcción de patrones de conducta en el juego de las relaciones internacionales a partir de la hegemonía colectiva ejercida por los estados europeos en las relaciones con terceros países en aquella época⁴⁶.

La noción de “fuerzas profundas” planteada por Pierre Renouvin⁴⁷ considera que la interrelación entre factores políticos, económicos, comerciales, jurídicos, sociales, estratégicos etc. está en la base del movimiento histórico. Para el autor (y algunos de sus colegas como Gaston Zeller, 1987⁴⁸ y André Fugier, 2007⁴⁹), esos diversos factores están en la base de las decisiones de los hombres de estado en el cumplimiento de sus funciones. Renouvin criticaba la historia diplomática asentada en el hecho político y la biografía de los grandes personajes por considerarla insuficiente para explicar las catástrofes del siglo XX.

Mutatis mutandis, algo similar parece ocurrir en relación a la cláusula social: está inmersa en un escenario que es un verdadero crisol de intereses y en que se observa una sobrevalorización política no necesariamente congruente con la dinámica del mercado. Las fuentes de investigación, para Renouvin, necesitaban ser ampliadas para abarcar otros factores, como las fuerzas económicas. Solamente así se podría producir

⁴⁴ Duroselle, J. B. (1998). *Todo imperio perecerá: Teoría sobre las relaciones internacionales*. México: Fondo de Cultura Económica.

⁴⁵ Watson, A. (2009). *The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis*. Londres: Routledge.

⁴⁶ Con características propias, la UE también tiene un patrón de conducta, consustanciado en una política exterior común y observable, en lo que nos interesa, en la inclusión de la cláusula social en los acuerdos comerciales.

⁴⁷ Publicada originalmente en 1953.

⁴⁸ Zeller, G. (1987). *Les institutions de la France au XVIe siècle* (Vol. 14). Presses universitaires de France.

⁴⁹ Fugier, A. (2007). La Guerra de las Naranjas: (Luciano Bonaparte en Badajoz). L. A. L. Píriz (Ed.). Diputación Provincial, Departamento de Publicaciones.

un conocimiento acorde con el dinamismo y la amplitud de la realidad internacional. Su visión, innovadora en la época, plasma perfectamente la transversalidad de las relaciones internacionales.

Duroselle (1990)⁵⁰, antiguo alumno de Renouvin, desarrolló la noción de “fuerzas profundas” y señaló su influencia sobre la formulación de las políticas exteriores (y, de un modo general, sobre cualquier decisión política de grande envergadura). En relación a la cláusula social, los diversos y relevantes intereses (económicos, comerciales, estratégicos y sociales) en juego son muy elevados, de modo que tanto su incorporación en un AC como el seguimiento y la interpretación de las medidas adoptadas (ratificación y aplicación efectiva) por terceros países signatarios de los instrumentos internacionales de referencia para la UE (tratados, protocolos y convenios sobre la protección de los DD.HH.L) han sido absorbidas por un proceso político que atiende a compromisos económicos y sociales históricamente consolidados (como la protección del libre mercado, de la libre competencia y de los sectores sensibles de la economía, del cual el ejemplo por excelencia es la agricultura).

Como se verá, este seguimiento por parte de la UE no puede ser jurídico por absoluta ausencia de competencia legal/jurisdiccional. Además, la presencia de abundantes instrumentos normativos en el sistema interamericano de DD.HH pone en entredicho, bajo la perspectiva estrictamente jurídica, la presencia persistente de la cláusula social en los acuerdos comerciales concluidos con AL. Es importante comprender como la cláusula social se articula para verificar las posibilidades y los límites que ofrece.

Relativamente a los eventos, Duroselle (1990)⁵¹ señalaba que el papel de las circunstancias (eventos) en el proceso político decisorio debe ser considerado. En el tema investigado, por ejemplo, viene a la mente el hecho de que la CEE no vinculaba la

⁵⁰ Duroselle, J. B. (1990). *História da Europa*. São Paulo: Círculo de Leitores.

⁵¹ Duroselle, J. B. (1990). *História da Europa*. São Paulo: Círculo de Leitores.

protección de los DD.HH a la cooperación de los países ACP hasta que el general Idi Amin Dada procediera al genocidio de las minorías étnicas en Uganda o el gobernante Jean-Bédél Bokassa se involucrara con la matanza de los niños que protestaban contra la política de su gobierno en Centroáfrica⁵² (Kabunda, 2000)⁵³.

Históricamente, el liberalismo económico y la consolidación del bloque europeo como una formidable potencia comercial acabarán redefiniendo, según Paillard (1994)⁵⁴, una posición de sostenimiento de las asimetrías entre los actores internacionales, con especial énfasis al denominado Tercero Mundo. La cláusula social, aunque busque fomentar la ratificación de tratados internacionales de DD.HH.L puede también contribuir, económicamente, al mantenimiento de un escenario asimétrico (función de barrera comercial no arancelaria, no analizada en esta investigación). Como mínimo, su eficacia es cuestionable bajo distintos aspectos. La justificación jurídica de la cláusula social en los acuerdos comerciales también es cuestionable, pero su presencia no es circunstancial, sino el resultado de un movimiento histórico políticamente consistente.

La denominada escuela británica no ha sido tan dinámica como la francesa. Sin embargo, autores como Butterfield (2012)⁵⁵ también enfatizaron los procesos de continuidad histórica en las relaciones internacionales⁵⁶. En el proceso histórico europeo, Lynch (1984)⁵⁷ señala que la protección de la agricultura (que ha merecido una posición de destaque) estaba asociada a la integración, repercutiendo profundamente en

⁵²Regimen depuesto por iniciativa atribuida al gobierno galo de Valéry Giscard d'Estaing

⁵³Kabunda, B. M. (2000). Derechos humanos en Africa: teorías y prácticas. Universidad de Deusto.

⁵⁴ Paillard, Y. G. (1994). *Expansion occidentale et dépendance mondiale: fin du XVIIIe – 1994*. Paris: Armand Colin.

⁵⁵ Butterfield, H. (2012). *The historical novel: An essay*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁵⁶ La guerra es un tema recurrente en la historiografía británica de las relaciones internacionales.

⁵⁷ Lynch, F. (1984). Resolving the Paradox of the Monnet Plan: National and International Planning in French Reconstruction*. *The Economic History Review*, 37(2), 229-243.

la adopción de todas las políticas exteriores europeas de posguerra. De hecho, por ejemplo, la inclusión de la cláusula social y de la cláusula verde en los acuerdos comerciales concluidos por la UE con AL (subregiones y países) sigue estando muy cerca de la idea de protección de los sectores sensibles/estratégicos de la UE (caso de la importación de biocombustibles y maderas certificadas desde esa parte del planeta). Es interesante observar que, en este tema concreto (la agricultura), las decisiones europeas han sufrido directamente el impacto de las decisiones políticas internas de sus estados miembros.

La inclusión de una cláusula de protección de los DD.HH.L en los acuerdos comerciales partiría de una propuesta iniciada por el movimiento sindical francés, uno de los más combativos de Europa, en virtud de la preocupación de los trabajadores de ese país con la preservación de sus puestos de trabajo, potencialmente amenazados por la “competencia desleal” de los PED, donde esos derechos no eran observados o cuyos estándares eran más bajos que los europeos. La lógica era sencilla: la no observancia de los DD.HH.L abarataría los costes de producción de modo que, una vez exportados al mercado europeo, esos productos tendrían precios más competitivos, lo que generaría el cierre de las fábricas nacionales y el despido masivo de trabajadores en el país.

¿Pero la cláusula social ha logrado revertir la situación?

La exaltación de los DD.HH por el bloque europeo ha llegado al punto de constituirse en un valor fundamental de su política exterior, lo que, por extensión, condiciona su patrón de conducta hacia los PED. No obstante, su plasmación en la cláusula social no es eficiente ni justificable (jurídicamente) en los acuerdos comerciales. Aquí parece ganar peso la diferenciación que Watson (2009: 122) realiza entre “sistema de estados” y “sociedad internacional”. La primera expresión transmitiría la idea de los intereses y presiones concurrentes que los estados toman en cuenta en la adopción de sus cálculos de política exterior, al paso que la segunda transmitiría el conjunto de instituciones, reglas comunes, valores y patrones de conducta que son – o deberían ser – compartidos por los diferentes sistemas y estados.

Chabod (1987)⁵⁸, considerado el padre de la historiografía italiana de las relaciones internacionales, también comprendía que los movimientos económicos deberían integrar las fuerzas profundas de la vida internacional. Por su vez, Brunello Vigezzi (1991)⁵⁹ ha pretendido incluir la sociedad interna en el proceso histórico de las relaciones internacionales, algo que, actualmente, podría plasmar perfectamente, para efectos de la tesis, las presiones ejercidas por los sectores sensibles relativamente a la adopción y posterior control (insistentemente reflejado en las reivindicaciones del Parlamento Europeo) de la protección de los DD.HH en las relaciones comerciales del bloque con los PED. En parte, los movimientos sociales internos son captados y reflejados por los hombres de estado en sus decisiones de política externa. Por ese motivo, Fulvio D'Amoja (1981)⁶⁰ señalaría que, bajo su perspectiva, las fuerzas profundas aceleran o retardan acciones que son dirigidas por la razón de estado.

El movimiento de las fuerzas profundas de la historia impulsa a los actores internacionales a adoptar decisiones diversas, coherentes con ese proceso dinámico, en que coexisten, en diferentes grados e intensidades, los diversos factores mencionados. El resultado, muchas veces, se plasma en la conclusión de tratados internacionales de naturaleza variada. Los acuerdos comerciales reflejan también este crisol de intereses, factores y elementos, incluyendo las necesidades de la sociedad interna (estos acuerdos están subsumidos y son impulsados por el movimiento histórico. La inclusión de la cláusula social también es parte de un movimiento histórico, así como también lo es el acercamiento de la UE a AL o el proceso de globalización).

La escuela helvética, con especial destaque para el *Institut des Hautes Études Internationales*, busca el acercamiento de la historia de las relaciones internacionales

⁵⁸ Chabod, F. (1987). *La idea de nación*. México: Fondo de cultura económica.

⁵⁹ Vigezzi, B. (1991). *Politica estera e opinione pubblica in Italia dall'unità ai giorni nostri: orientamenti degli studi e prospettive della ricerca*. Milano: Editoriale Jaka Book.

⁶⁰ D'Amoja, F. (1981). Primato della politica estera, primato della politica interna nella storia delle relazioni internazionali. *Studi Storici*, 553-570.

con el derecho, la economía y la ciencia política, presentando especial predilección por los temas del mundo contemporáneo. En el análisis de los hechos actuales, busca la continuidad de los movimientos de larga duración y la interconexión de todos los factores involucrados.

EE.UU no ha contado con una escuela de pensamiento crítico durante muchos años. Los grandes historiadores europeos participaban activamente en el sistema universitario del país (Renouvin, Watson o Chabod). La influencia de la “guerra fría” ha impulsado una línea de pensamiento considerada degradada, como la “teoría del dominó”, para justificar la participación e intervención de la CIA y del Pentágono para frenar la expansión comunista en AL y Asia.

Sin embargo, más recientemente, parece existir una simbiosis entre científicos políticos e historiadores que tiende a encarar las relaciones internacionales bajo la óptica del liberalismo económico. La propia aportación de Fukuyama (1992)⁶¹ va en el mismo sentido, de un orden internacional en que predomina el sistema neoliberal. Este sistema aboga por la liberalización de los mercados internacionales y cuenta con el apoyo y el impulso institucional de la OMC. La UE, en el plan comercial y económico, también incentiva la liberalización del mercado relativamente a bienes, servicios y capitales (los países latinoamericanos también lo hacen, aunque reconocen las asimetrías que existen y sus dificultades para superarlas)⁶². Con efecto, hace muchos años que Lewis, Stavenhagen & Soberón (1958)⁶³ observaron la existencia de una fuerte dependencia estructural de los PED en relación a los PD, que los mantienen en la zona periférica de las relaciones internacionales.

⁶¹ Fukuyama, F. (1992). *El fin de la historia y el último hombre*. Barcelona: Planeta.

⁶² Los países latinoamericanos no poseen fuerza suficiente para romper ciertas posiciones hegemónicas en las relaciones internacionales.

⁶³ Lewis, W. A., Stavenhagen, R. & Soberón, O. (1958). *Teoría del desarrollo económico*. México: Fondo de Cultura Económica.

Aun sobre las relaciones internacionales, importa mencionar que Argentina y Brasil son los países sudamericanos con mayor profusión de trabajos en el área de la historia de las relaciones internacionales. Además de la influencia de la doctrina francesa, el pensamiento crítico y la construcción del conocimiento recurren habitualmente el tema del desarrollo como un factor crucial en la inserción internacional.

En Brasil, la Universidad de Brasilia ofrece cursos de grado y postgrado en relaciones internacionales que enfatizan la relevancia del derecho, de la política y de la economía. Algunos de los más prestigiosos historiadores de las relaciones internacionales del país están integrados en esta universidad como, por ejemplo, Amado Luis Cervo y Clodoaldo Bueno, historiadores de primera línea que unirían sus esfuerzos en la publicación de la obra “Historia da política exterior do Brasil” (Cervo & Bueno, 1992)⁶⁴ y Paulo Roberto de Almeida (2012)⁶⁵. En Rio de Janeiro se destacan Falcon & Moura (1981)⁶⁶, con un óptimo trabajo conjunto. La inserción internacional en los escenarios subregional, regional y mundial ha sido objeto de estudio por historiadores brasileños y argentinos. Doratioto (1994)⁶⁷, Bandeira (1997)⁶⁸ y Saraiva (2001)⁶⁹ en Brasil, o Figari (1991)⁷⁰ y Rapoport (1997)⁷¹ en Argentina analizaran, en campos

⁶⁴ Cervo, A. L., & Bueno, C. (1992). *Historia da política exterior do Brasil* (vol. 81). Editora Ática.

⁶⁵ de Almeida, P. R. (2012). *Relações internacionais e política externa do Brasil*. São Paulo: LTC.

⁶⁶ Falcon, F. J. C., & Moura, G. (1981). *A formação do mundo contemporâneo*. São Paulo: Editora Campus.

⁶⁷ Doratioto, F. (1994). *Espaços nacionais na América Latina: da utopia bolivariana à fragmentação*. Editora Brasiliense.

⁶⁸ Bandeira, M. (1997). *Relações Brasil-EUA no contexto da globalização: Presença dos EUA no Brasil*. São Paulo: Senac.

⁶⁹ Saraiva, J. F. S. (2001). *Relações internacionais: dois séculos de história. Entre a ordem bipolar e o policentrismo (de 1947 a nossos dias)*. Brasília: Ibri.

⁷⁰ Figari, G. M. (1991). *Argentina y América Latina: conflictos e integración*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

⁷¹ Rapoport, M. (1997). La globalización económica: ideologías, realidad, historia. *Revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad*, 7(12), 3-42.

específicos, las relaciones internacionales como un proceso evolutivo y dinámico. En ambos países, existe una acentuada tendencia hacia la superación de la historia diplomática y la búsqueda de identidades subregionales, especialmente en el ámbito del Mercosur. Otra característica verificada en esos dos países es la tentativa de los historiadores de procurar vislumbrar en la dinámica de la vida internacional, oportunidades de inserción internacional y desarrollo, lo que parece significar que desean reemplazar la vieja teoría de la dependencia.

Sin embargo, ¿eso es posible? ¿Qué papel juega la cláusula social en los acuerdos internacionales de naturaleza comercial?

Como se verá en esta tesis, la comprensión de como la cláusula social se articula con el mercado, con el medio empresarial, con el comercio internacional o con el propio campo del derecho internacional señalará sus límites y posibilidades, en lo que concierne a su utilización potencial como promotor de los DD.HH. Verdier & O'Rourke (1994)⁷² ya habían advertido sobre la incorporación de valores occidentales (como la democracia, el estado de derecho y los DD.HH) en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales. Esto viene de lejos. El discurso oficial del gobierno estadounidense durante el proceso de reconstrucción iniciado después de la Segunda Guerra Mundial - y que ha servido de base para los acuerdos de *Bretton Woods* – estaba asociado a la intensificación del comercio internacional.

Por su parte, la UE es una grande potencia mundial en materia de comercio internacional y, francamente, no existen indicios de que pretende reducir su presencia en los mercados internacionales, sino que al contrario, su intención es aumentar esta presencia, porque esto significa aumentar sus ingresos económicos y su esfera de poder. Ahora, saber si esa presencia se armoniza con los DD.HH, tal como se supone, en virtud de la política exterior y comercial de la UE, es algo que debe ser mejor analizado. Con

⁷² Verdier, D. & O'Rourke, K. (1994). *Democracy and international trade: Britain, France, and the United States, 1860-1990*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

efecto, como afirman Ohmae (1992)⁷³ y Gowa & Mansfield (1993)⁷⁴, el poder político y el comercio están íntimamente relacionados en las relaciones internacionales.

En el caso de la UE, las fuerzas profundas de la historia señalan que la incorporación de la cláusula de protección de los DD.HH en los ABC tiene su génesis en la etapa de reconstrucción del segundo postguerra. Este período de tiempo coyuntural, para emplear las ideas de Braudel, se ha mantenido coherente desde el final de los años cuarenta del siglo pasado⁷⁵.

Realmente, la historia de las relaciones internacionales, bajo la perspectiva renouviniana (de fuerzas profundas), demuestra que la adopción de la cláusula social en los acuerdos concluidos por la UE con países o grupos de PED refleja ese movimiento evolutivo de la historia, lo que no significa que por detrás de los acuerdos no existan – o puedan existir - objetivos no revelados. La lectura de los trabajos de Gowa (1986, 1995)^{76/77} permite contemplar un mundo de interrelaciones que no descartaría la existencia de intereses ocultos. Tampoco se puede decir que la cláusula social es totalmente eficiente e inmejorable (Blackett, 1999)⁷⁸. La historia reciente (a partir de los acuerdos con los países ACP) parece asignarle un rol esencialmente bueno: el de promotor de los DD.HH en los PED.

⁷³ Ohmae, K. (1992). El mundo sin fronteras: poder y estrategia en la economía entrelazada. Serie Publicaciones Misceláneas A1/SC (IICA), 96, 11-27.

⁷⁴ Gowa, J., & Mansfield, E. D. (1993). Power politics and international trade. *American Political Science Review*, 87(02), 408-420.

⁷⁵ Sin embargo, esto no ha ocurrido con la OMC. También podríamos decir que la falta de previsión de la protección de los derechos humanos en su normativa es coherente con su historia. Su antecesor, GATT, no lo contemplaba tampoco.

⁷⁶ Gowa, J. (1986). Anarchy, egoism, and third images: The Evolution of Cooperation and international relations, *International Organization*, 40(01), 167-186.

⁷⁷ Gowa, J. (1995). *Allies, adversaries, and international trade*. Princeton University Press.

⁷⁸ Blackett, A. (1999). Whither Social Clause-Human Rights, Trade Theory and Treaty Interpretation. *Colum. Hum. Rts. L. Rev.*, 31, 1-36.

No obstante, como afirmarían desde hace muchos años Renouvin y Braudel, los factores económicos están integrados en las relaciones internacionales y es importante comprender el funcionamiento del mercado para analizar la eficacia de la cláusula social, cuya condicionalidad está asociada al respeto por las normas internacionales de protección de los DD.HH.L señalados en los acuerdos comerciales concluidos por la UE con los PED. Efectivamente, los países latinoamericanos que pretendan exportar sus productos para el mercado único de la UE deben ratificar y aplicar las normas básicas de protección de los DD.HH previstas en el derecho internacional. En otras palabras, la cláusula social es la plasmación de un vigoroso movimiento histórico (europeo).

La eficacia de la cláusula social como promotora de los DD.HH, sin embargo, no parece ser tomada realmente en cuenta, como se puede inferir de la ausencia casi absoluta de estudios sobre el tema. La atención parece puesta sobre las consecuencias que la protección de los DD.HH parece tener sobre el flujo internacional de bienes y servicios. Algunas voces, como las de Lindroos & Mehling (2005)⁷⁹ creen que la posibilidad de interpretación integradora proporcionada por la CVDT conducirá progresivamente a una armonización del acervo normativo de la OMC (sistema autocontenido y poco permeable a normas externas según diversos autores como, por ejemplo, Kuyper, 1994⁸⁰, Petersmann, 1997⁸¹, Dunoff, 2000⁸², Pauwelyn, 2000⁸³,

⁷⁹ Lindroos, A., & Mehling, M. (2005). Dispelling the chimera of 'self-contained regimes' international law and the WTO. *European Journal of International Law*, 16(5), 857-877.

⁸⁰ Kuyper, P. J. (1994). The law of GATT as a special field of international law: Ignorance, further refinement or self-contained system of international law?. *Netherlands Yearbook of International Law*, 25, 227-257.

⁸¹ Petersmann, E. U. (1997). *The GATT/WTO dispute settlement system: international law, international organizations and dispute settlement* (Vol. 23). New York: Martinus Nijhoff Publishers.

⁸² Dunoff, J. L. (2000). WTO in Transition: Of Constituents, Competence and Coherence, *The Geo. Wash. Int'l L. Rev.*, 33, 979-1001.

⁸³ Pauwelyn, J. (2000). Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules-Toward a More Collective Approach. *American Journal of International Law*, 512, 335-347.

Mavroidis, 2000⁸⁴, Kelly, 2001⁸⁵, Bronckers, 2001⁸⁶) con las reglas de derecho internacional público, campo en que los DD.HH poseen carácter *ius cogens* por construcción doctrinal. No obstante, la verdad es que existe una enorme laguna en el ámbito jurídico en lo que concierne a la interrelación entre el comercio internacional y los DD.HH. El tema es difícil, sin duda, pero la escasez de estudios, también aquí, no deja de ser sorprendente.

Tomando por base la historia de las relaciones internacionales como un proceso continuo movido por fuerzas profundas a lo largo de un tiempo estructurado en larga, media y corta duración (aproximación de las teorías de Renouvin y Braudel), se puede observar que la cláusula social es consecuente con el movimiento histórico europeo iniciado después de la Segunda Guerra Mundial. La bibliografía generalmente aborda la inclusión de la cláusula de protección de los DD.HH bajo la perspectiva jurídico-política europea. Existen varios textos, como el de Young-Anawaty (1980)⁸⁷, De Wet (1995)⁸⁸, Panagariya (2002)⁸⁹ o Kingah (2006)⁹⁰ sobre su proceso evolutivo en el marco de los acuerdos con los países ACP. Este proceso histórico es sin duda interesante, así como su ampliación hacia los países candidatos a la adhesión en el bloque o a todos los

⁸⁴ Mavroidis, P. C. (2000). Remedies in the WTO legal system: between a rock and a hard place. *European Journal of International Law*, 11(4), 763-813.

⁸⁵ Kelly, J. P. (2001). Judicial Activism at the World Trade Organization: Developing Principles of Self-Restraint. *Nw. J. Int'l L. & Bus.*, 22, 353-371.

⁸⁶ Bronckers, M. C. (2001). More Power to the WTO?. *Journal of International Economic Law*, 4(1), 41-65.

⁸⁷ Young-Anawaty, A. (1980). Human Rights and the ACP-EEC Lomé II Convention: Business as usual at the EEC. *NYUJ Int'l L. & Pol.*, 13, 63-94.

⁸⁸ de Wet, E. (1995). Labor standards in the globalized economy: the inclusion of a social clause in the General Agreement on Tariff and Trade/World Trade Organization. *Human Rights Quarterly*, 871, 443-462.

⁸⁹ Panagariya, A. (2002). EU preferential trade arrangements and developing countries. *The World Economy*, 25(10), 1415-1432.

⁹⁰ Kingah, S. (2006). The Revised Cotonou Agreement between the European Community and the African, Caribbean and Pacific States: Innovations on Security, Political Dialogue, Transparency, Money and Social Responsibility. *Journal of African Law*, 50(01), 59-71.

PED con quién la UE establece acuerdos comerciales y de cooperación. Sin embargo, la eficacia de la cláusula no es abordada como sugieren los trabajos de Collingsworth (2001)⁹¹, Valor (2006)⁹², Wilkinson (2007)⁹³ o Davies, Doherty & Knox (2010)⁹⁴.

La progresiva liberalización del comercio internacional, confirmada, según la doctrina, con el establecimiento de un número reducido y no ampliable de causas que permitirían, por un período de tiempo transitorio (mientras dure el factor que autorizaría la adopción de la medida) la restricción del flujo internacional de mercancías, servicios y bienes inmateriales (como la propiedad intelectual) no parece compatibilizarse, al día de hoy, con la inclusión, en los acuerdos comerciales, de una condicionalidad de acceso al mercado único europeo, sea por DD.HH, democracia o estado de derecho (los tres valores fundamentales de la política exterior común de la UE). Ninguno de los tres valores es contemplado por la OMC como causa justificante de la adopción de medidas restrictivas al comercio.

Existen pocos trabajos que abordan con profundidad la relación entre las normas multilaterales de comercio y los DD.HH. Una de las razones, a parte de la dificultad del tema, es que la propia OMC no contempla (y el GATT tampoco) de modo consistente y explícito esos derechos en su enorme acervo de normas jurídicas. La UE sí que lo hace en el ámbito bilateral, pero con una eficacia dudosa, que será analizada en esta investigación.

La condicionalidad de la cláusula social existe, en el ámbito bilateral, porque en el marco multilateral solamente es posible encontrar una redacción ambigua en lo que

⁹¹ Collingsworth, T. (2001). Essential Element of Fair Trade and Sustainable Development in the FTAA is an Enforceable Social Clause, *An. Rich. J. Global L. & Bus.*, 2, 197-232.

⁹² Valor, C. (2006). What if all trade was fair trade? The potential of a social clause to achieve the goals of fair trade. *Journal of Strategic Marketing*, 14(3), 263-275.

⁹³ Wilkinson, J. (2007). Fair trade: dynamic and dilemmas of a market oriented global social movement. *Journal of Consumer Policy*, 30(3), 219-239.

⁹⁴ Davies, I. A., Doherty, B., & Knox, S. (2010). The rise and stall of a fair trade pioneer: The Cafédirect story. *Journal of Business Ethics*, 92(1), 127-147.

concierno a las (pocas) excepciones autorizadas por la entidad para restringir (temporalmente) el libre flujo de bienes y servicios (estos últimos incorporados con la OMC a partir de 31 de diciembre de 1994). Una de las excepciones contempladas es la del bien producido en prisiones, al que se podría eventualmente extender a situaciones análogas, como aquella en que los bienes son producidos por personas sometidas a la esclavitud (o situaciones análogas a de esclavitud). Esta suele ser la preocupación de la protección de los DD.HH en el comercio: la defensa contra la competencia “desleal”. En este caso, considerando el conjunto de excepciones o restricciones al libre flujo de bienes y servicios, se desprende que la preocupación no es la protección del ser humano, sino salvaguardar los sectores productivos de una competencia considerada desleal. ¿Entonces, cual es el rol desempeñado por la cláusula social como promotora de los DD.HH?

En el escenario fomentado por la OMC, los DD.HH.L no se cuadran adecuadamente a la dinámica del mercado⁹⁵. La entidad no contempla esos derechos y, además, evita asumir responsabilidades en la apreciación de temas con ellos relacionados. Con efecto, su OSD, en las pocas controversias en que este tema podía haber sido analizado, ha optado por una apreciación más política que jurídica (Ford, 2001)⁹⁶. En términos de derechos laborales el problema tampoco ha sido solucionado. La eficacia de la cláusula social es muy cuestionable en virtud del propio funcionamiento del mercado. Es interesante observar que la UE asocia los derechos laborales fundamentales a la cláusula social, al contrario de la OMC, que afirma tajantemente estar fuera de su competencia cualquier apreciación en este sentido (además de afirmar que la entidad idónea para apreciar cualquier controversia relacionada con la ratificación, implementación y

⁹⁵No obstante, la culpa no debe recaer únicamente sobre la OMC y su OSD. De hecho, los propios estados evitan plantear con firmeza la compatibilidad de ciertas normas de la OMC con las reglas y principios presentes en los instrumentos internacionales de derechos humanos, señalados por la UE y asociados a la condicionalidad de acceso al mercado en sus acuerdos con los PED. Tampoco suelen llevar a cabo estudios sobre el impacto de la cláusula social en la vida cotidiana de los estados, incluyendo sus agentes privados.

⁹⁶ Ford, R. A. (2001). Beef Hormone Dispute and Carousel Sanctions: A Roundabout Way of Forcing Compliance with World Trade Organization Decisions, *The. Brook. J. Int'l L.*, 27, 543-1137.

observancia efectiva de los convenios laborales es la Organización Internacional del Trabajo: OIT).

En la actualidad, la OMC reconoce la denominada “dimensión social del comercio” (que incluiría los DD.HH.L), pero afirma que no es incumbencia suya apreciar las implicaciones existentes entre el comercio y los DD.HH. Así que, no siendo incumbencia suya, los autores tienden a desechar el tema en sus investigaciones. Quizá no les parezca interesante estudiar algo que la propia OMC rechaza. Por su parte, la UE se aprovecha de un “espacio jurídico gris” (la omisión del artículo XX del GATT 1994 sobre los DD.HH y el carácter autocontenido de las normas de la OMC) para incluir en sus acuerdos comerciales bilaterales la cláusula social (cuyo objeto es carente de regulación normativa en el marco del sistema multilateral de comercio).

Para este investigador es esencial comprender la relación (existente o no) entre la cláusula social, el mercado (su funcionamiento), la economía y el comercio internacional. Aquí también la laguna bibliográfica es inmensa y los pocos estudios serios disponibles buscan abordar el desarrollo de la cláusula de protección de los DD.HH en función de los acuerdos con los países ACP. La perspectiva latinoamericana no está contemplada en esos estudios y tampoco la actuación y perspectiva de los agentes privados, algo fundamental para la comprensión del funcionamiento del mercado. La escasez de investigaciones pertinentes sorprende cuando se verifica que el interés de la UE por AL es enorme (incluyendo acuerdos estratégicos con países como Brasil y México). ¿Cómo establecer condicionalidades si el objeto de su aplicación, la protección de los DD.HH.L, tiende a diluirse en la práctica? Lamentablemente, la bibliografía latinoamericana tampoco aborda los temas planteados en esta tesis doctoral, algo también sorprendente.

Durante el desarrollo de esta investigación se ha intentado suplir la laguna existente en el área jurídica a partir de fuentes bibliográficas del comercio internacional y de la economía internacional. Sin embargo, la línea propuesta tampoco es abordada, quizás porque sus autores consideren que se trata de un tema jurídico. Así, por ejemplo, autores

como Michalak & Gibb (1997)⁹⁷ Frankel & Wei (1997)⁹⁸, Nagarajan (1998)⁹⁹, Winters (1999)¹⁰⁰, Krueger (1999)¹⁰¹, Baldwin, Cohen, Sapir & Venables (1999)¹⁰², Crawford & Laird (2001)¹⁰³, Mansfield & Reinhardt (2003)¹⁰⁴, Baldwin (2006)¹⁰⁵, Devuyt & Serdarevic (2007)¹⁰⁶ presentan una visión esencialmente económica (de modo que sigue existiendo una inmensa laguna en la bibliografía jurídica). Cabe la posibilidad de que en los últimos setenta años el establecimiento de una discusión realmente seria sobre los DD.HH en el ámbito del mercado y del comercio internacional levantara obstáculos difíciles de sortear, algo que no interesaría a ningún país (y, quizás, de desarrollo teórico problemático)¹⁰⁷.

⁹⁷ Michalak, W., & Gibb, R. (1997). Trading blocs and multilateralism in the world economy. *Annals of the Association of American Geographers*, 87(2), 264-279.

⁹⁸ Frankel, J. A., Stein, E., & Wei, S. J. (1997). *Regional trading blocs in the world economic system*. Peterson Institute.

⁹⁹ Nagarajan, N. (1998). *Regionalism and the WTO: New Rules for the Game?* European Commission.

¹⁰⁰ Winters, L. A. (1999). Regionalism vs. multilateralism. *Market integration, regionalism and the global economy*, 5-49.

¹⁰¹ Krueger, A. O. (1999). Are preferential trading arrangements trade-liberalizing or protectionist?. *The Journal of Economic Perspectives*, 105-124.

¹⁰² Baldwin, R., Cohen, D., Sapir, A., Venables, A. (1999) *Market Integration, Regionalism and the Global Economy*, Cambridge University Press.

¹⁰³ Crawford, J. A. & Laird, S. (2001). Regional trade agreements and the WTO. *The North American Journal of Economics and Finance*, 12(2), 193-211.

¹⁰⁴ Mansfield, E. D., & Reinhardt, E. (2003). Multilateral determinants of regionalism: The effects of GATT/WTO on the formation of preferential trading arrangements. *International organization*, 57(04), 829-862.

¹⁰⁵ Baldwin, R. E. (2006). Multilateralising regionalism: spaghetti bowls as building blocs on the path to global free trade. *The World Economy*, 29(11), 1451-1518.

¹⁰⁶ Devuyt, Y. & Serdarevic, A. (2007). World Trade Organization and Regional Trade Agreements: Bridging the Constitutional Credibility Gap, *The Duke J. Comp. & Int'l L.*, 18, 1-16.

¹⁰⁷ Las fuerzas profundas que desembocaran en la exaltación de los DD.HH. en la UE parecen insertarse dentro de un movimiento histórico mayor, que abarcaría a todos los países y organizaciones internacionales, aunque con velocidades diferentes. Los DD.HH están dentro de ese movimiento evolutivo histórico, pero su consagración se ha hecho más efectiva en algunos países que en otros.

En lo que se refiere al comercio internacional, desde el fracaso del proyecto de creación de la Organización Internacional del Comercio y su sustitución (para atender a los intereses estadounidenses) por el acuerdo provisional GATT, el movimiento histórico ha tomado una dirección de cierto modo ambigua. Por un lado, se concedió ciertos beneficios a los PED (especialmente a partir de la Ronda Tokio) y, por otro, se ha evitado atacar los problemas relacionados con la pobreza y la consolidación de las asimetrías generadas por el liberalismo económico. Esta disociación entre los DD.HH y el comercio internacional - que se refleja en el funcionamiento del mercado - no se ha combatido quizás por miedo de sus consecuencias.

Algo análogo ha pasado en relación al surgimiento de los primeros procesos de integración económica y configuración de la mecánica de los mercados (el GATT evitaba reconocer oficialmente la existencia de los primeros bloques económicos puesto que, al fin y al cabo, el objetivo principal de ese acuerdo provisional - posteriormente heredado por la OMC - era liberalizar el comercio internacional en todo el mundo, en igualdad de condiciones, salvo la ayuda al desarrollo a favor de los países más pobres y menos industrializados (Bergsten, 1998)^{108/109}. En otras palabras, existen movimientos históricos distintos dentro de un contexto mayor que, actualmente, al menos para los países occidentales, parece tender a la consagración de los DD.HH en todas sus esferas.

Durante el recorrido de la investigación ha sido intrigante constatar la falta de investigaciones que aborasen, en relación a los temas propuestos, las perspectivas europea y latinoamericana. A pesar de la intensificación histórica de las relaciones comerciales UE-AL, es inquietante la escasez de estudios sobre la interrelación de dos temas vitales para las relaciones internacionales, en general, y para las relaciones entre esas dos partes, en concreto: los DD.HH y el comercio internacional. Así que uno de los objetivos de esta tesis doctoral es cubrir esas enormes lagunas existentes en la

¹⁰⁸ Bergsten, C. F. (1998). *Fifty Years of the GATT/WTO: Lessons from the Past for Strategies for the Future*. Institute for International Economics.

¹⁰⁹La antigua CEE ha sido admitida en el ámbito del GATT por ser imposible ignorar su creciente poder político y económico en el mundo. No obstante, otros bloques y asociaciones de menor peso relativo han tenido que esperar años hasta que su existencia fuera explícitamente aceptada.

bibliografía jurídica, de relaciones internacionales, de comercio internacional y de economía internacional. Otro objetivo es lograr que sus resultados sirvan de base y referencia para que puedan ser realizados nuevos estudios e investigaciones sobre estos entrelazados temas.

La relevancia de esta investigación puede ser apreciada desde dos perspectivas: social y académico-científica:

1) Perspectiva social:

Esta tesis busca superar el desconocimiento existente sobre la efectividad de la cláusula social en el ámbito del funcionamiento del mercado, así como sobre la necesidad jurídica - bajo la perspectiva formal - de su permanencia en los acuerdos comerciales UE-AL. La escasez de estudios e investigaciones sobre este campo impide la fluidez de discusiones sobre el tema, algo necesario para la sociedad como un todo, en virtud de las enormes implicaciones resultantes del comportamiento de los estados signatarios relativamente a la actuación de sus agentes públicos y privados¹¹⁰.

Para la UE, la cláusula social sería una consecuencia explicada por un movimiento histórico coyuntural (para emplear el estructuralismo de Braudel), al paso que para los países latinoamericanos, sería un instrumento promotor de los DD.HH.L de dudosa eficacia en el mercado que, además, funcionaría como posible barrera comercial de naturaleza no arancelaria que gravita en función de la interpretación política que las

¹¹⁰ La actuación de ambos agentes es apreciada por la UE de modo más o menos estricto en función de los intereses políticos, económicos y comerciales involucrados, lo que significa que el bloque europeo tiene, en la cláusula social, la clave para restringir las importaciones latinoamericanas, afectando directa o indirectamente a miles de empresas y personas que de un modo o de otro están involucrados con la producción y/o exportación de productos al mercado único europeo (aunque, en la práctica, no parece prestar la debida atención a la posible dilución de su eficacia por el propio funcionamiento del mercado o a su cuestionable permanencia en los acuerdos bajo la perspectiva jurídica). Esta situación, al afectar familias enteras, millones de ellas, posee un componente de especial sensibilidad para los gobiernos nacionales que debería ser plasmado en comportamientos políticos. Los recientes acuerdos concluidos por la UE con Colombia y Perú, miembros de la Comunidad Andina, demuestran que la incorporación de la protección de los derechos humanos en los acuerdos comerciales (cláusula social) es un tema que interesa tanto a sociedades como a gobiernos partícipes de un proceso de integración económica.

autoridades europeas hagan – y de los intereses involucrados que tengan - del comportamiento estatal hacia la efectiva protección de los DD.HH de su población.

La mayoría de los países en AL ha ratificado tanto instrumentos jurídicos de ámbito mundial como instrumentos jurídicos de ámbito regional en lo que concierne a la protección de los DD.HH¹¹¹. No obstante, la apreciación de la UE en lo que concierne al “grado de interés demostrado” por esos países (signatarios de los acuerdos comerciales y de la aceptación y aplicación de los instrumentos jurídicos asociados a la cláusula social), además de ser esencialmente política, descuida tanto el análisis del funcionamiento del mercado (efectividad de la cláusula social como promotora de los DD.HH.L) como las cuestiones jurídicas relacionadas con su incorporación en esos acuerdos¹¹².

Las circunstancias históricas exigen una discusión amplia y abierta sobre los elementos mencionados, porque muchas son las personas naturales, empresas y gobiernos involucrados (los intereses son múltiples y su armonización es difícil, llegando muchas veces al antagonismo)¹¹³. Los DD.HH y el comercio internacional son dos temas de extraordinaria relevancia en la diplomacia actual, como bien observó Mullerson en su obra de 1997, recientemente reeditada (2014)¹¹⁴.

¹¹¹ Interesa mencionar la OEA y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¹¹² Cabe destacar, por ejemplo, la actitud del Parlamento Europeo, intolerante con las violaciones de derechos humanos en terceros países. Aunque relevante, la apreciación política no puede ser considerada aceptable para justificar jurídicamente la permanencia de la cláusula social en los acuerdos comerciales (o en las concesiones de beneficios comerciales). En el momento de conceder beneficios arancelarios especiales y sin reciprocidad, la cláusula social constituye solamente uno de los puntos apreciados por la UE. Existen otros, como el grado de vulnerabilidad económica o de inserción internacional en función del comercio diversificado.

¹¹³ La perspectiva social, por ejemplo, englobaría la discusión concienzuda de esos temas por parte de agentes privados, ONGs, entidades de clase y gobiernos, además de la elevación de esas discusiones al plan político y, por extensión, a los medios diplomáticos.

¹¹⁴ Mullerson, R. (2014). *Human Rights Diplomacy*. Londres: Routledge.

La interrelación y vinculación entre los diferentes actores, sectores y gobiernos alrededor de los temas abordados en la investigación revela, por sí mismo, la necesidad de que se proporcione un material que explore, aunque no agote, este campo aun inexplicablemente poco estudiado e investigado.

Por fin, interesaría mencionar que la eventual aplicación práctica del conocimiento generado y difundido por esta investigación a las relaciones comerciales UE-AL podría ser también relevante para los formuladores y ejecutores de políticas exteriores, así como para los operadores económicos, sociales y culturales en juego.

2) Perspectiva académico-científica:

Esta tesis doctoral busca igualmente realizar una importante aportación en el campo académico-científico del derecho internacional público y de las relaciones internacionales. Como se ha mencionado, la escasez bibliográfica es enorme y el enfoque que se confiere a la investigación es innovador.

La presente tesis doctoral busca incentivar el estudio de las relaciones internacionales bajo un enfoque tan importante y actual cuanto poco explorado (según las líneas planteadas): el de la interrelación entre los DD.HH y el comercio internacional (particularmente en lo que concierne a la incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales concluidos por la UE con países y subregiones latinoamericanas).

Sorprendentemente aun no existen análisis y reflexiones en este campo académico. Por consiguiente, una futura publicación de la tesis doctoral, tanto en España (u otro país de la UE) como en cualquier país de AL, podría subsanar parcialmente esas profundas carencias del conocimiento. Además, también interesaría destacar la posibilidad de incluir el tema objeto de esta investigación en tertulias, conferencias, congresos, ponencias y, de un modo general, en discusiones académicas pertinentes llevadas a cabo en universidades, centros de investigación etc. En otras palabras,

interesaría difundir el conocimiento generado por esta investigación lo más ampliamente posible y buscar la cooperación interuniversitaria UE-AL en el área de conocimiento a la que se adscribe esta tesis: el derecho internacional público y las relaciones internacionales.

1.1.3.- Estado de la cuestión

No es una tarea sencilla proceder a la discusión sobre el estado de la cuestión cuando se carece de textos de referencia. No existen trabajos que aborden el tema o sintetizen informaciones relativas a la interrelación entre los DD.HH y el comercio internacional en las líneas planteadas: a) efectividad de la cláusula social en el ámbito del mercado y b) la justificación jurídica de su incorporación en los ABC. La ausencia de obras de referencia, sin embargo, ha permitido al autor de esta investigación lanzarse en campos como, por ejemplo, el derecho, el comercio internacional o la economía internacional (áreas en que ha actuado profesionalmente, inclusive como profesor universitario, desde el inicio de los años noventa).

Por otro lado, una de las grandes dificultades generadas por la ausencia de obras de referencia ha sido el problema de la sistematización del conocimiento. Los datos encontrados estaban muy esparcidos y desarrollados dentro de contextos epistemológicos específicos. La transposición de ciertos datos para esta investigación ha representado un reto nada desdeñable. La falta de una obra que proporcionase una visión sistematizada sobre la interrelación entre el comercio internacional y los DD.HH y sobre las dimensiones abordadas de la cláusula social (efectividad en el mercado y justificación jurídica en los acuerdos comerciales UE-AL)¹¹⁵ ha sido un obstáculo relevante en el transcurso y desarrollo de la investigación, asumiendo su autor la responsabilidad por los errores cometidos en su tentativa de sistematizar un campo tan disperso como inexplorado. Tampoco se ha logrado encontrar estudios que integrasen investigaciones parciales (jurídicas, de comercio internacional, de relaciones internacionales, de economía internacional o de política) en un contexto más amplio y

¹¹⁵ En todos los PED en general.

transversal, como el planteado en esta tesis. Si existiera bibliografía con estas características, este investigador se enfrentaría a un proceso menos arduo para interrelacionar coherentemente los diferentes aspectos de la cuestión y dotarlos de unidad, coherencia y significado.

No existen trabajos que analicen o simplemente retraten la interrelación entre los DD.HH, el comercio internacional y la economía internacional. Evidentemente, existen muchos estudios que abordan el tema de los DD.HH en las relaciones internacionales, entre los cuales se pueden mencionar, por ejemplo, los de Vincent (1986)¹¹⁶, Dunne & Wheeler (1999)¹¹⁷, Jørgensen (2006)¹¹⁸, Forsythe (2012)¹¹⁹ o Donnelly (2013)¹²⁰, pero sus investigaciones no inciden en el campo analizado en esta tesis. Los estudios dedicados más directamente a las relaciones UE-AL, como los de Freres (2000)¹²¹ o Grabendorff & Seidelmann (2005)¹²² tampoco analizan el tema.

La literatura sobre la política exterior común de la UE, la cooperación internacional, las relaciones internacionales del bloque europeo y la protección de los DD.HH.L es abundante y variada (incluyendo el tema de la actuación del Banco Europeo de Inversiones y su apoyo a proyectos que contribuyan a aumentar el potencial de crecimiento y empleo). En una rápida revisión de la literatura, podríamos mencionar,

¹¹⁶ Vincent, R. J. (1986). *Human rights and international relations*. Cambridge University Press.

¹¹⁷ Dunne, T., & Wheeler, N. J. (1999). *Human rights in global politics*. Cambridge University Press.

¹¹⁸ Jørgensen, R. F. (2006). *Human rights in the global information society*. MIT Press.

¹¹⁹ Forsythe, D. P. (2012). *Human rights in international relations*. Cambridge University Press.

¹²⁰ Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.

¹²¹ Freres, C. (2000). The European Union as a Global “Civilian Power”: Development Cooperation in EU-Latin American Relations. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 42(2), 63-85.

¹²² Grabendorff, W., & Seidelmann, R. (2005). *Relations between the European Union and Latin America: biregionalism in a changing global system* (Vol. 57). Nomos Verlagsgesellschaft MbH & Co.

por ejemplo: Flory, 1974¹²³; Espiell, 1975¹²⁴; Leary, 1982¹²⁵; Lafer, 1988¹²⁶; Demaret, 1988¹²⁷; Hitters, 1991¹²⁸; Garret, 1992¹²⁹; Sikkink, 1993¹³⁰; Lewis-Anthony, 1994¹³¹; Scheinin, 1995¹³²; Bourrinet & Torrelli, 1996¹³³; Ávila Álvares, Urrutia & Días,

¹²³ Flory, M. (1974). Souveraineté des états et coopération pour le développement. *RCADI*, 141, 221-269.

¹²⁴ Espiell, H. G. (1975): Le système interaméricain comme régime regional de protection international des droits de l'homme". *RCADI*, 145, 72-118.

¹²⁵ Leary, V. (1982). *International labour conventions and national law. The effectiveness of the automatic incorporation of treaties in national legal systems*. Boston, Martinus Nijhoff.

¹²⁶ Lafer, C. (1988): *A Reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt*. São Paulo, Cia das Letras.

¹²⁷ Demaret, P. (1988). *Les relations extérieures des Communautés européennes et le marché intérieur: aspects juridiques et fonctionnels*. Brussels: Storia scientia.

¹²⁸ Hitters, J. C. (1991): *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*. Buenos Aires: Ediar.

¹²⁹ Garrett, G (1992). *International Cooperation and Institutional Choice: The European Community's Internal Market*. Cambridge: The MIT Press.

¹³⁰ Sikkink, K (1993): *Human rights, principled issue-networks, and sovereignty in Latin America*. Massachusetts: IO Foundation and the Massachusetts Institute of Technology.

¹³¹ Lewis-Anthony, S. (1994). *Treaty based procedures for making human rights complaints within the UN system. Guide to international human rights practice* (2^a ed.). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

¹³² Scheinin, M. (1995). *Economics and Social Rights as Legal Rights. Economic, Social and Cultural Rights – A Textbook*. Dordrecht: Nijhoff.

¹³³ Bourrinet, J., & Torrelli, M. (1996): *Les relations extérieures de la C.E.E.*: Paris: Librairie l'étourdi.

1997¹³⁴; Kaddous, 1998¹³⁵; McMahon, 1998¹³⁶; Torrent, 1998¹³⁷; Israel, 1998¹³⁸; Cox & Chapman, 1999¹³⁹; Alonso & Mosley, 1999¹⁴⁰; Schmitz, 2000¹⁴¹; Pérez-Soba, 2000¹⁴²; Nuttall, 2000¹⁴³; Schlosser, 2000¹⁴⁴; Perkmann & Sum, 2002¹⁴⁵; Conde Pérez, 2002¹⁴⁶; Rajagopal, 2003¹⁴⁷; Smith, 2003¹⁴⁸; Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen,

¹³⁴ Ávila Álvarez, A.; Castillo Urrutia, J. A., & Díaz Mier, M. A. (1997). *Política Comercial Exterior de la Unión Europea*. Madrid: Ediciones Pirámide.

¹³⁵ Kaddous, C. (1998). *Le droit des relations extérieures dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes*. Bruxelles: Bruylant.

¹³⁶ McMahon, J. A. (1998): *The Development Cooperation Policy of the EC*. London, Boston: Kluwer Law International.

¹³⁷ Torrent, R. (1998). *Derecho y práctica de las relaciones exteriores de la Unión Europea*. Barcelona: CEDECS.

¹³⁸ Israel, J. (1998). *Droit des libertés fondamentales*. Paris: LGDJ.

¹³⁹ Cox, A & Chapman, J. (1999). *The European Community External Cooperation Programmes. Policies, Management and Distribution*. London: Overseas Development Institute (ODI).

¹⁴⁰ Alonso, J. A. & Mosley, P. (1999). *La eficacia de la cooperación internacional al desarrollo: evaluación de la ayuda*. Madrid: Civitas.

¹⁴¹ Schmitz, H. (2000). *Does Local Cooperation Matter? Evidence from Industrial Clusters in South Asia and Latin America*. Oxford Development Studies, V. 28, Issue 3.

¹⁴² Pérez-Soba, I. (2000). *Cooperación para el desarrollo. Legislación y directrices*. Madrid: Trotta.

¹⁴³ Nuttall, S. J. (2000). *European Foreign Policy*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁴⁴ Schlosser, P. (2000). Jurisdiction and international judicial and administrative cooperation. *RCADI*, 2000, 284, 311-387.

¹⁴⁵ Perkmann, M & Sum, N. (2002). *Globalization, regionalization and cross border regions*. Paris: Lavoisier.

¹⁴⁶ Conde Pérez, E. (2002). *Los instrumentos de la política exterior de la Unión Europea*. Madrid: Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense, Facultad de Derecho.

¹⁴⁷ Rajagopal, B. (2003). *International Law from Below: Development, Social Movements and Third World*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁴⁸ Smith, M. E. (2003). *Europe's Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation*. Cambridge: Cambridge University Press.

2003¹⁴⁹; Edwards, 2004¹⁵⁰; Sorel, 2004¹⁵¹; Eeckhout, 2004¹⁵²; Sanchez Ramos, 2005¹⁵³; Grabendorff & Seidelmann, 2005¹⁵⁴; Elgström & Smith, 2006¹⁵⁵; Brotons & Navarro, 2006¹⁵⁶; Alston & Goodman, 2007¹⁵⁷; Fouchard, 2007¹⁵⁸; Tomz, 2007¹⁵⁹; Fraser, 2007¹⁶⁰; Pérez Bernardez, 2007¹⁶¹; Sanahuja, 2008¹⁶² (entre varios trabajos pertinentes);

¹⁴⁹ Degnol-Martinussen, J. & Engberg-Pedersen, P. (2003). *Aid: Understanding International Development Cooperation*. Londres, Zed Books.

¹⁵⁰ Edwards, M. (2004): *Future Positive: International Cooperation in the 21st Century*. Oxford: Earthscan.

¹⁵¹ Sorel, J. (2004). *L' emergence de la personne humaine en droit international: l'exemple de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice*. Roma: Editoriale Scientifica.

¹⁵² Eeckhout, P. (2004). *External Relations of the European Union: Legal and Constitutional Foundations*. Londres: Oxford University Press.

¹⁵³ Sanchez Ramos, B. (2005). *La Unión Europea y las relaciones diplomáticas*. Valencia: Tirant lo Blanch.

¹⁵⁴ Grabendorff, W. & Seidelmann, R. (2005). *Relations Between the European Union and Latin America: Biregionalism in a Changing Global System* (Internationale Politik Und Sicherheit). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. Internationale Politik Und Sicherheit.

¹⁵⁵ Elgström, O. & Smith, M. (2006). *The European Union's Roles in International Politics: Concepts And Analysis*. Londres: Taylor & Francis Publishers.

¹⁵⁶ Remiro Brotons, A & Blazquez Navarro, I. (2006): *El futuro de la acción exterior de la Unión Europea*. Valencia: Tirant lo Blanch.

¹⁵⁷ Alston, P. y Goodman, R. (2007). *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*. Oxford: OUP.

¹⁵⁸ Fouchard, P. (2007). *Droit et moral dans les relations économiques internationales*. Paris: Centre Français de l'Arbitrage.

¹⁵⁹ Tomz, M. (2007): *Reputation and International Cooperation: Sovereign Debt across Three Centuries*. Princeton: Princeton University Press.

¹⁶⁰ Fraser, C. (2007). *An Introduction to European Foreign Policy*. New York: Taylor & Francis Publishers.

¹⁶¹ Pérez Bernardez, C. (2007): *La proyección exterior de la Unión Europea: desafíos y realidad*. Valencia: Tirant lo Blanch.

¹⁶² Sanahuja, J. A. (2008): *La efectividad de la cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y América Latina: balance y perspectivas*, Documento de Estrategia, Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión. Dirección B, Parlamento Europeo, abril.

Keukeleire & MacNaughtan, 2008¹⁶³; Smith, 2008¹⁶⁴; Marquez, 2008¹⁶⁵; Acosta-López & Duque-Vallejo (2008)¹⁶⁶, Orbie, 2008¹⁶⁷; Gamble & Stuart, 2009¹⁶⁸; Orazem, Tzannatos & Sedlacek, 2009¹⁶⁹; Lenz, 2009¹⁷⁰; Bindi, 2010¹⁷¹; Söderbaum & Stalgren, 2010¹⁷²; Cepillo Galvín (2010)¹⁷³, Robalino, Ribe & Walker, 2010¹⁷⁴; Désir, 2010¹⁷⁵;

¹⁶³ Keukeleire, S. y MacNaughtan, J. (2008). *The Foreign Policy of the European Union*. Hampshire: Palgrave MacMillan.

¹⁶⁴ Smith, K. (2008). *European Union Foreign Policy in a Changing World*. Hoboken: John Wiley & Sons.

¹⁶⁵ Marquez, G. (2008). *Outsiders? The Changing Patterns of Exclusion in Latin America and the Caribbean, Economic and Social Progress in Latin America*. Inter-American Development Bank. David Rockefeller/ Inter-American Development Bank.

¹⁶⁶ Acosta-López, J. I. y Duque-Vallejo, A. M. (2008). Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿norma de ius cogens? *Revista colombiana de derecho internacional*, 12, 13-34.

¹⁶⁷ Orbie, J. (2008). *Europe's Global Role: External Policies of the European Union*. Surrey: Ashgate Publishing.

¹⁶⁸ Gamble, A. & Stuart, D. L. (2009). *The European Union and world politics: consensus and division*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

¹⁶⁹ Orazem, P. F., Tzannatos, Z. y Sedlacek, G. (2009). *Child Labor and Education in Latin America: An Economic Perspective*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

¹⁷⁰ Lenz, T. (2009). *From Geopolitics to Geoeconomics: The European Union's Promotion of Regional Integration in Latin America*. Saarbrücken: VDM Verlag.

¹⁷¹ Bindi, F. M. (2010). *The foreign policy of the European Union: Assessing Europe's role in the world*. Washington D.C.: Brookings Institution Press

¹⁷² Söderbaum, F. y Patrik, P. (2010). *The European Union and the global South*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

¹⁷³ Cepillo Galvín, M. A. (2010). *Política comercial europea y preferencias arancelarias*. Madrid: Editorial Dykinson.

¹⁷⁴ Robalino, D. A., Ribe, H. y Walker, I. (2010). *Achieving Effective Social Protection for All in Latin America and the Caribbean: From Right to Reality (Directions in Development)*. Washington: World Bank Publications.

¹⁷⁵ Désir, H. (2010). *Document de Travail sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords de commerce internationaux*. Parlamento Europeo (Commission du commerce international).

Scholz, 2010¹⁷⁶; Hill & Smith, 2011¹⁷⁷; Kazak, 2011¹⁷⁸; Fjellner, 2011¹⁷⁹; Mihr (2011)¹⁸⁰, Smith, (2011)¹⁸¹, De Keyser, 2011¹⁸²; Ayuso & Sánchez-Montijano, 2011¹⁸³; Saïfi, 2012¹⁸⁴, Lee, 2012¹⁸⁵, Fenwick & Glancey, 2012¹⁸⁶, Mamontoff, 2013¹⁸⁷, De Feyter, 2013¹⁸⁸, Sotillo Lorenzo (2014)¹⁸⁹ etc., además de publicaciones de diversas

¹⁷⁶ Scholz, H. (2010). *Documento de Trabajo sobre las relaciones comerciales UE-América Latina*. Parlamento Europeo. Comisión de Comercio Internacional.

¹⁷⁷ Hill, C. & Smith, M. (2011). *International Relations and the European Union*. Oxford: OUP.

¹⁷⁸ Kazak, M. (2011). Documento de Trabajo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales de la ayuda macrofinanciera a terceros países. Parlamento Europeo. Comisión de Comercio Internacional.

¹⁷⁹ Fjellner, C. (2011). Documento de Trabajo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas. Comisión de Comercio Internacional.

¹⁸⁰ Mihr, A. (2011). *Human Rights Benchmarks for EU'S External Policy*. Utrecht: Utrecht University.

¹⁸¹ Smith, K. E. (2011). *The European Union and the Review of the Human Rights Council*. European Parliament.

¹⁸² De Keyser, V. (2011). Informe sobre las políticas exteriores de la UE en favor de la democratización. Comisión de Asuntos Exteriores.

¹⁸³ Ayuso, A. & Sánchez-Montijano. (2011). *Propuesta para la Creación de un Observatorio de las Migraciones entre la UE y América Latina y el Caribe*. Bruselas: Centro de Estudios Internacionales de Barcelona (CIDOB). Departamento Temático de la Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión.

¹⁸⁴ Saïfi, T. (2012). Documento de Trabajo sobre el comercio y la inversión como motores de crecimiento para los países en desarrollo. Parlamento Europeo. Comisión de Comercio Internacional.

¹⁸⁵ Lee, R. G. (2012). *Blackstone's Statutes on Public Law & Human Rights 2012-2013* (Blackstone's Statute Series). Oxford: OUP.

¹⁸⁶ Fenwick, H. & Glancey, R. (2012). *Civil Liberties & Human Rights 2013-2014 (Questions and Answers)*. London: Routledge.

¹⁸⁷ Mamontoff, A. M. (2013). Risque, vulnérabilité et protection sociale. *PLes cahiers européens des sciences sociales*, 3, 31-58.

¹⁸⁸ De Feyter, K. (2013). *Human Rights: Social Justice in the Age of the Market (Global Issues)*. London: Zed Books.

¹⁸⁹ Sotillo Lorenzo, J. A. (2014). La política exterior y la política de cooperación: paradojas del caso español, *Comillas Journal of International Relations*, nº 1 pp. 117-131.

entidades (v.g., Comisión Europea, OIT, Banco Europeo de Inversiones, Europeaid etc.). Aunque la literatura existente exalte, de un modo o de otro, la importancia humanística de la protección social o los aspectos técnicos de la cooperación y de la política exterior común, no llega a evaluar la efectividad de la cláusula social en el mercado o la justificación jurídica de su inclusión en los acuerdos comerciales.

En lo que concierne a la situación actual del objeto de estudio de la tesis de doctorado, se podría afirmar que las relaciones comerciales UE-AL se han incrementado progresivamente en los últimos cincuenta años. Desde la perspectiva de la UE, los intercambios comerciales deben andar lado a lado con la protección de los DD.HH, la consolidación de la democracia y la promoción del estado de derecho (valores fundamentales de su política exterior y resultantes de un movimiento histórico robusto y evolutivo) al paso que desde la perspectiva latinoamericana, la inclusión de la cláusula social (aunque contradictorio): a) no altera sustancialmente la situación de desamparo y violación de derechos (efectividad) y b) formalmente (bajo la perspectiva jurídica), no se justifica en un AC. Este posicionamiento, sin embargo, no figura en estudios académicos, aunque se plasman en charlas mantenidas por este investigador con varios trabajadores y ejecutivos latinoamericanos.

El hecho es que el deseo de intensificar las relaciones comerciales existe por parte de los países, así como de la UE. En este momento - en relación a AL - el bloque europeo tiene acuerdos comerciales con Centroamérica, Comunidad Andina, Chile¹⁹⁰, Mercosur y México. Aunque sus acuerdos parecen asumir cada vez más un carácter subregional, algunas negociaciones conjuntas eran demasiado problemáticas, de modo que se ha optado por una negociación país a país (por ejemplo, con la Comunidad Andina, cuyo resultado ha sido un acuerdo conjunto con Colombia y Perú, como señala Fritz, 2010)¹⁹¹.

¹⁹⁰ La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, el 29 de octubre de 2014, han declarado públicamente la intención de actualizar el tratado de libre comercio entre Chile y UE.

¹⁹¹ Fritz, T. (2010). *The second conquest. The EU free trade agreement with Colombia and Peru*. Forschungs-und dokumentationszentrum chile-Lateinamerika eV (FDCL), Berlin: transnational Institute.

Entre UE y AL existen, además del comercio, relevantes vínculos históricos, culturales y políticos (una interesante obra sobre el tema es la del profesor Aníbal Quijano, 2000¹⁹², de la Universidad Ricardo Palma en Perú). Los vínculos históricos, especialmente los lazos coloniales, tienen una influencia notable sobre el comercio internacional, como ha señalado el profesor Pankaj Ghemawat del IESE *Business School* en su curso de tres meses de duración asistido por este investigador en el primer semestre del año 2014.

Simultáneamente, los acuerdos comerciales, antes asociados a países singularmente considerados, están siendo progresivamente reemplazados por otros de base subregional (Kandogan, 2008)¹⁹³, centrados en cláusulas fundamentales que cubren los valores clave de la política exterior europea: DD.HH, estado de derecho y democracia. Los lazos coloniales pueden estar relacionados con el acercamiento y la intensificación potencial del comercio exterior (España-países iberoamericanos, por ejemplo), pero deben cumplir rotundamente su rol de instrumento promotor de los DD.HH.L (considerar el funcionamiento real del mercado para evaluar su efectividad), así como respetar los aspectos jurídicos inherentes a las relaciones internacionales, sin el excesivo (aunque inevitable) sobredimensionamiento político y económico.

1.1.4.- Justificación del periodo histórico acotado

El período histórico inmediatamente posterior a la Segunda Grande Guerra ha sido considerado idóneo para marcar el término inicial en esta investigación por traer datos importantes para el proceso de formación de la concepción europea sobre DD.HH. De ahí se desarrollaría un proceso histórico que llegaría hasta nuestros días, como se puede constatar en los recientes acuerdos internacionales firmados por la UE con varios países latinoamericanos y basados, en este aspecto, en el TUE, de 7 de febrero de 1992,

¹⁹² Quijano, A. (2000). Coloniality of power and Eurocentrism in Latin America. *International Sociology*, 15(2), 215-232.

¹⁹³ Kandogan, Y. (2008). Consistent estimates of regional blocs' trade effects. *Review of International Economics*, 16(2), 301-314.

artículo 21, 1: “*La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional*”¹⁹⁴.

El término temporal final sería el año 2013, fecha en que entra en vigor los acuerdos comerciales concluidos por la UE con diferentes países y subregiones latinoamericanas. Todo indica que las relaciones comerciales UE-AL sigan su desarrollo dentro de un entorno liberal marcado por estructuras y funcionamientos muy similares a los actuales (asignación de recursos económicos por agentes privados), de modo que se podría añadir que el proceso histórico cumple, esencialmente, la función de proporcionar una serie de informaciones necesarias para que no se pierda la perspectiva de aquellos movimientos que se prolongan en el tiempo (como la consolidación de los DD.HH en nivel universal y su reforzamiento en el marco de los instrumentos internacionales).

1.1.5.- Originalidad, problemas y límites de la investigación

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en su artículo 13,1 que la tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. En su preámbulo, el Real Decreto señala que *el componente fundamental de la formación doctoral es el avance del conocimiento científico a través de la “investigación original”*. En la base de datos TESEO del Ministerio de Educación y Cultura de España, donde se relacionan todas las tesis de doctorado depositadas y

¹⁹⁴ La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE no se ha incorporado directamente al Tratado de Lisboa, pero el artículo 6, apartado 1, del TUE le atribuye carácter jurídicamente vinculante al concederle el mismo valor jurídico que los Tratados. La entrada en vigor, el 1 de junio de 2010, del Protocolo nº 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), que permite no solo a los Estados sino también a las organizaciones internacionales convertirse en signatarios del Convenio, abrió el camino de la adhesión de la UE a dicho Convenio. Dicha adhesión todavía requiere la ratificación de todos los Estados Parte del CEDH, así como de la propia UE. Recuperado de http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuid=FTU_1.1.5.html

defendidas en universidades españolas, no se encuentra ninguna dedicada exclusivamente al estudio de la efectividad de la cláusula social y de su justificación jurídica en los acuerdos comerciales UE-AL. Esta tesis de doctorado cumple así con el requisito establecido en la citada disposición legal, tanto por la originalidad del tema como, posiblemente, por la novedosa perspectiva, en que se entrelazan temas de derecho internacional público, relaciones internacionales, DD.HH, comercio internacional, economía internacional y política internacional.

Con efecto, los trabajos producidos por diferentes centros de estudios e investigación no establecieron un “puente” entre los mencionados campos del conocimiento aunque, con base en las aportaciones de varios de los historiadores de las relaciones internacionales citados en este capítulo, no es difícil comprender la existencia de una fuerte confluencia entre las áreas mencionadas¹⁹⁵. Ya se comentó sobre la inexistencia de obras que sinteticen o plasmen estudios parciales anteriores acerca del tema analizado en esta investigación. Todo esto refuerza y reafirma la idea de originalidad que debe caracterizar un trabajo de investigación doctoral. El pionerismo en la investigación, sin embargo, conlleva ventajas y desventajas al trabajo. Las primeras han sido ya mencionadas al paso que las segundas tienden a evidenciarse por sí mismas.

Sin pretender ofrecer ninguna excusa, el hecho es que al no contar con ninguna referencia (ausencia de trabajos de investigación previos sobre el tema analizado), los problemas iniciales enfrentados para la realización de la tesis podían ser divididos en: a) qué fuentes investigar, b) transversalidad (cómo realizar la correcta transposición de temas propios de un campo para otro campo del conocimiento), c) qué perspectiva abordar, cuando se observa que el tema lleva entrelazado aspectos jurídicos, políticos, comerciales, económicos, estratégicos etc. de modo tan estrechamente unido que el

¹⁹⁵ Esto no significa que en la tesis se tenga realizado un abordaje de todos esos campos de modo explícito. Este no era - y no es - el objetivo de la investigación. El “puente” ha sido tendido de modo mucho más sutil, casi imperceptible y de forma deliberadamente descompensada por tratarse de una tesis doctoral en ciencias políticas con enfoque tanto económico como jurídico, no una tesis en economía o comercio internacional. Sin embargo, la línea que mezcla historia, derecho, comercio y economía está presente en el trabajo, en su concepción y en su desarrollo.

desmembramiento carece de sentido. Por último, en lo que concierne a los límites de la investigación, debe mencionarse la enorme dispersión de las fuentes de información tanto en el campo jurídico como en el campo de las relaciones internacionales, del comercio internacional, de la economía internacional o de las ciencias políticas, lo que ha dificultado sobremanera el proceso investigativo.

1.2.- MARCO TEÓRICO

Durante la concepción y el desarrollo de la tesis muchas dudas surgieron en lo que se refiere al adecuado camino para abordar el objeto de la investigación. Los postulados teóricos y conceptuales iniciales algunas veces se torcían y algunos aspectos considerados relevantes eran difuminados ante el apareamiento de otros igualmente importantes.

Al tratarse de un tema que abarca conocimientos provenientes del derecho, de las relaciones internacionales, del comercio internacional, de la economía internacional y de las ciencias políticas, las dificultades eran mucho mayores. Cuál planteamiento elegir no ha sido una tarea sencilla. Al final, a este investigador le ha parecido adecuado realizar el estudio desde un marco capaz de plasmar a todos los campos mencionados dentro de una dinámica propia y coherente: la historia de las relaciones internacionales, explicada anteriormente. Esta elección no solucionaría todos los problemas, evidentemente.

La intuición de que la cláusula social pudiera ser poco efectiva en la realidad del mercado o jurídicamente injustificable dentro de los ABC en el ámbito UE-AL conduciría naturalmente a un abordaje económico y jurídico. En la misma senda se presentaba el problema de distinguir lo que podía ser considerado relevante o necesario (asumiendo diferentes grados subjetivamente considerados de lo que sería realmente importante para el desarrollo de la tesis) de otros elementos en que su importancia relativa abriría una nueva frente en la investigación, ramificando la idea original.

Tanto la economía como el derecho proporcionan interesantes elementos para la investigación, pero no pueden ser enfocados con exclusividad por el riesgo de que se escape un aspecto fundamental para la comprensión del trabajo: la simbiosis que los DD.HH proporcionan entre el derecho, la economía y la política. Al final, la inclusión y permanencia de la cláusula social en los ABC dependerían fundamentalmente de una interpretación esencialmente política de la UE sobre el respeto a los DD.HH.L por los países latinoamericanos (en esta apreciación estaría presente un crisol de intereses: políticos, económicos, estratégicos, comerciales, ideológicos etc.).

La organización de los datos obtenidos de diferentes fuentes del conocimiento en algo unitario, comprensible y coherente, ha sido uno de los obstáculos más importantes a que el autor se enfrentó en el desarrollo de la tesis (esto porque, durante todo el proceso de investigación, ha estado muy patente la intrincada relación entre todos esos campos del conocimiento).

Los planteamientos formulados no encontraban una respuesta adecuada dentro de ningún campo concreto, sino en una base transversal del conocimiento. La opción que ha parecido más integradora para este investigador ha sido, como se ha señalado anteriormente, aquella proporcionada por la historia de las relaciones internacionales, capaz de albergar en sus grandes movimientos, estructurados en el tiempo (Braudel), las fuerzas profundas (Renouvin) que comandan realmente la vida internacional. Esta elección se justificaba puesto que, desde la etapa de formulación de las hipótesis, obtención y tratamiento de datos hasta la plasmación del material investigado en el texto de la tesis, era posible observar la tendencia de vigorosos movimientos internacionales alrededor de los ejes trabajados en la investigación.

Así, con esto en mente, se ha optado por orientar el marco teórico dentro de la línea proporcionada por Pierre Renouvin y Fernand Braudel. Las aportaciones de ambos - especialmente de Braudel, en el ámbito de la historia de las relaciones internacionales - abrirían la posibilidad de “unificar” los diferentes campos, puesto que enfocan las relaciones internacionales dentro de una línea más duradera y, por tanto, menos

susceptible a ocurrencias episódicas. Esta concepción de Braudel es denominada “estructuralismo”. Son las estructuras forjadas en el tiempo que sustentan la trama de las relaciones internacionales.

Otro autor varias veces mencionado en este capítulo es Pierre Renouvin, el gran historiador francés, cuya visión de las relaciones internacionales ha sido muy útil en la comprensión y desarrollo de la tesis. Renouvin (2000)¹⁹⁶ abogaba por la existencia de “fuerzas profundas de la historia” marcadas tanto por las presiones ideológicas como económicas. Estas son precisamente las claves más relevantes de todo el proceso.

Al realizar su transposición a la presente investigación, se percibe sin mayores dificultades que tanto el elemento ideológico “humanismo” (plasmado en la cláusula social) como los elementos económicos asociados al funcionamiento del mercado (libre competencia, asignación de recursos económicos por los agentes privados) sintetizan movimientos históricos sumamente relevantes (DD.HH y liberalismo económico). Esta forma de comprender las relaciones internacionales es muy útil porque las dota de un dinamismo propio, consistente, menos variable por cuestiones puntuales.

1.2.1.- La historia de las relaciones internacionales bajo la perspectiva de Pierre Renouvin

Para comprender la inclusión y permanencia de la cláusula social en los acuerdos comerciales, se lanzó mano de los marcos conceptuales proporcionados por Renouvin y Braudel, comentados en el epígrafe anterior. La relación entre fuerzas económicas, políticas e ideológicas, de hecho, es tan compacta que difícilmente se podrá observar cualquier movimiento histórico sin que esos tres elementos estén presentes.

Como se ha comentado, el método histórico seguido por Pierre Renouvin está centrado en la noción de lo que el autor denomina “fuerzas profundas”, un verdadero

¹⁹⁶ Renouvin, P., & Duroselle, J. B. (2000). *Introducción a la historia de las relaciones internacionales*. México: Fondo de Cultura Económica.

crisol donde están presentes intereses económicos, políticos, estratégicos e ideológicos. Además, en su concepción, Renouvin también consideraba el rol representado por los dirigentes políticos (“hombres de Estado”) y la comprensión imparcial y extensiva de los acontecimientos. Esta perspectiva rectificaba los errores cometidos por la tradicional visión de las relaciones internacionales adoptada por la historia diplomática, como un cúmulo de hechos habitualmente interpretados desde la óptica estrictamente política (de hecho, este abordaje tradicional se revelaría demasiado simplista e incapaz de responder convincentemente a las preguntas formuladas por los estudiosos sobre la inclusión de las fuerzas del capital).

Por otro lado, las fuerzas profundas o subyacentes de la historia contenían implícitamente un conjunto de factores diversos capaces de explicar consistentemente las tendencias y los caminos recorridos por las relaciones internacionales, lo que abría la puerta a un análisis prospectivo por el investigador. Esencialmente, la idea promueve la detección de aquellos factores considerados esenciales en las relaciones internacionales, apartados de cualquier contingencia momentánea.

Esos elementos se revisten de suficiente robustez que facilitan la formulación y revisión de hipótesis teóricas porque, entre otras razones, las fuerzas profundas son duraderas y, de cierta forma, configuran la propia estructura de las relaciones internacionales, la base sobre la cual se mueven los diferentes torbellinos. Esto es relevante, la separación de lo que es esencial y duradero de aquello que es accidental y efímero. Los primeros apuntan el camino para la ocurrencia de los segundos, le confieren consistencia o le restan importancia en el movimiento histórico. Para la investigación, era esencial reducir el peso de los factores accidentales para lograr una mayor consistencia. Esencialmente, la idea sería comprender la historia, sus causas y sus tendencias, en vez de describir numerosos hechos bajo una perspectiva limitada. La inclusión de elementos diversos - políticos, económicos, comerciales, jurídicos etc. – conduciría a la exploración de distintas fuentes del conocimiento para poder explicar determinados movimientos históricos.

Las importantes transformaciones ocurridas en las relaciones internacionales (por ejemplo, la promoción de los DD.HH, la democracia y el estado de derecho en los países de Europa occidental a partir de la década de cincuenta hasta su inclusión como valores fundamentales en la política exterior común) revela un movimiento histórico claro, aunque existan dudas sobre la falta de efectividad de la cláusula social en el mercado o de su justificación jurídica en los instrumentos internacionales concluidos con AL.

Como movimiento histórico, la consolidación de los DD.HH constituye un cuadro de referencia muy interesante y útil para situar el estudio de las relaciones internacionales. De hecho, es posible que todos los diversos componentes que integran la historia en su dimensión más amplia puedan ser trasplantados a las relaciones internacionales: derecho, economía, política. Otros autores, incluyendo seguidores de Renouvin, han participado en la elaboración de sus postulados como, por ejemplo, Jean-Baptiste Duroselle (1998)¹⁹⁷, que tenía una visión amplia que integraba las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, demográficas y psicológicas, siendo este último elemento actualmente considerado esencial en el análisis de los movimientos económicos (Akerlof & Shiller, 2010)¹⁹⁸.

Aunque la noción de fuerzas profundas de la historia sea ampliamente reconocida en el ámbito de las relaciones internacionales, curiosamente, no existe una construcción teórica sobre ella. Sencillamente, su principal autor, Renouvin, consideraba que esas fuerzas subyacentes, propulsoras de los acontecimientos internacionales, eran capaces de influenciar la toma de decisiones por los “hombres de estado” y orientar la acción diplomática como un todo. Aquí se podría dividir su planteamiento en dos partes, la primera estaría constituida por la causalidad y la segunda por la finalidad: a) causalidad (comprendería las distintas fuerzas, un crisol de diferentes proporciones con capacidad

¹⁹⁷ Duroselle, J. B. (1998). *Todo imperio perecerá: Teoría sobre las relaciones internacionales*. Fondo de Cultura Económica.

¹⁹⁸ Akerlof, G. A., & Shiller, R. J. (2010). *Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism*. Princeton University Press.

para propulsar los acontecimientos históricos), b) finalidad (estaría asociada a la formulación y ejecución de políticas públicas para lograr determinados objetivos: políticos, económicos, estratégicos etc. El propio Renouvin rechazaba establecer como preponderante un factor sobre otro, puesto que su composición variaría enormemente en cada acontecimiento.

Un pequeño comentario se hace necesario sobre el peso excesivo concedido al estado por Renouvin. Los intereses económicos y el mercado poseen, hace ya muchos años, fuerza suficiente para frenar o impulsar las decisiones políticas (Spero & Hart, 2009)¹⁹⁹. Esta característica, de hecho, ya había sido señalada en las décadas de sesenta (Bouvier, 1965)²⁰⁰, setenta (Gilpin, 1971)²⁰¹, ochenta (Thobie, 1985)²⁰² y noventa (Woods, 1995)²⁰³ del siglo pasado en cuatro excelentes trabajos. Las fuerzas económicas juegan un papel extremadamente relevante en las relaciones internacionales a tal punto que, para Lenz (2009)²⁰⁴, las decisiones geopolíticas están siendo gradualmente suplantadas por las decisiones geoeconómicas. La cláusula social está incorporada en este escenario y en este proceso.

¹⁹⁹ Spero, J. E. & Hart, J. (2009). *The politics of international economic relations*. Cengage Learning.

²⁰⁰ Bouvier, J. (1965). L'appareil conceptuel dans l'histoire économique contemporaine. *Revue économique*, 1-17.

²⁰¹ Gilpin, R. (1971). The politics of transnational economic relations. *International Organization*, 25(03), 398-419.

²⁰² Thobie, J. (1985). *La dialectique forces profondes-décision dans l'histoire des relations internationales*. *Relations internationales*, 41, 29-38.

²⁰³ Woods, N. (1995). Economic ideas and international relations: beyond rational neglect. *International Studies Quarterly*, 161-180.

²⁰⁴ Lenz, T. (2009). *From Geopolitics to Geoeconomics: The European Union's Promotion of Regional Integration in Latin America, 1980s*. VDM Verlag.

1.2.2.- El impacto de las fuerzas económicas en las relaciones internacionales: el peso de Braudel

Dentro del marco teórico cabe destacar, por su utilidad en la concatenación de los datos y de las ideas, la aportación del historiador Fernand Braudel. En función de los específicos aspectos contenidos en la investigación (derecho internacional, relaciones internacionales, economía internacional, derechos humanos, comercio internacional, política internacional, historia etc.) se ha optado muy especialmente por el marco teórico proporcionado por el movimiento estructuralista, pionero en considerar los efectos de la economía en la historia total. Braudel no aceptaba la historiografía tradicional, esencialmente narrativa de acontecimientos políticos y biográficos, y carente de una perspectiva realmente integradora. En su visión innovadora, rechazada por el Ministerio de Educación francés, Braudel pretendió divulgar su idea de larga, media y corta duración (Braudel, 1995)^{205/206}.

En su influyente y espectacular obra “The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II”, Braudel establece las bases, de modo extraordinariamente innovador, de los distintos tiempos que pudo tener la historia. El primer tomo estudia la “larga duración” de la estructura temporal, vinculando el hombre con la geografía, las relaciones sociales, el clima, la biología, la limitación de la productividad y la influencia religiosa. En el segundo tomo analiza la “media duración”, asociándola a las diferentes coyunturas. En su estructura, ese tiempo englobaría las civilizaciones y sus estructuras políticas, sociales, económicas y demográficas, así como sus procesos de cambio (incluyendo las revoluciones industrial y burguesa). El tercero y último tomo estudia la “corta duración”, que comprende la historia de los acontecimientos, de menor importancia para el autor, al considerarla como la “cresta de espuma encima de la ola”.

²⁰⁵ Braudel, F. (1995). *The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II*. Univ of California Press.

²⁰⁶ Braudel, F., Martín, F. R., & Tovar, I. P. V. (1984). *Civilización material, economía y capitalismo, siglos XV-XVIII*. Madrid: Alianza.

Durante su permanencia en Brasil, a partir de una experiencia personal en Bahía, Braudel ha asociado los eventos a las luces de las luciérnagas²⁰⁷.

Esta perspectiva integradora supera con creces la antigua visión de las relaciones internacionales establecida por la historia diplomática. El estructuralismo temporal y la inclusión de diversos factores en la comprensión de la historia (economía, comercio, demografía, geografía, política, cultura etc.) permiten interpretarla desde un ángulo mucho más amplio que aquel proporcionado por la mera observación de hechos específicos. Como casi todo en la vida, Braudel también tiene sus detractores. Algunos autores, como Fontana (1999)²⁰⁸ y Lai (2000)²⁰⁹, afirman que el historiador francés no ha tomado realmente en cuenta las causas y los efectos del factor económico. No es objetivo de esta tesis discutir estas críticas. En la opinión de este investigador, la inclusión de la dimensión económica y la estructuración del tiempo histórico en larga, media y corta duración son contribuciones de innegable valor científico.

1.2.2.1.- La Escuela de los Annales

Se trata de una corriente historiográfica fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch en 1929. Braudel asumió su dirección con la muerte de Febvre. Es difícil imaginar la historiografía francesa del siglo XX sin ella. Su influencia ha llegado a España y a AL, siempre con sus dos principales características: a) la ampliación temática del estudio de la Historia, b) el rechazo hacia la preponderancia de la política, la diplomacia y los acontecimientos militares. El modo como esta tesis doctoral ha sido concebida

²⁰⁷ Aunque los acontecimientos sean relevantes, como la influencia de la dictadura de Idi Amin Dada en el proceso de inclusión de la protección de los DD.HH en los acuerdos de la UE (inicialmente en el ámbito de los países ACP), los niveles históricos más relevantes son, para el autor, la geográfica y la coyuntural. Por su vez, la dictadura de Idi Amin también estaría inserta dentro de su respectivo proceso histórico de media y larga duración.

²⁰⁸ Fontana, J. (1999). Historia: análisis del pasado y proyecto social. Barcelona: Biblioteca del Bolsillo.

²⁰⁹ Lai, C. C. (2000). Braudel's Concepts and Methodology Reconsidered, *The European Legacy* 5 (1), 65-86. Ver también, del mismo autor, la obra de 2004: *Braudel's Historiography Reconsidered*. Maryland: University Press of America.

encuentra fuerte relación con el tipo de planteamiento que caracterizaba esta escuela. Así, en el inicio de la investigación se ha planteado un problema (o un conjunto de problemas) que se pretende resolver con base en diferentes áreas del conocimiento, pero unificados en una base sutil (quizás poco perceptible, pero presente en todo el momento en la mente del investigador) que está representada por la historia de las relaciones internacionales. La concepción de esta escuela se aleja de la historiografía narrativa propia del modelo alemán rankeano y permite la reflexión sobre fenómenos que se prolongan en el tiempo (Lustick, 1996)²¹⁰.

El acercamiento conceptual a la Escuela de los Annales ha permitido refutar la mera descripción pasiva de la historia y adentrar en un campo más propicio a la reflexión. El contacto con diferentes áreas del conocimiento (derecho, relaciones internacionales, comercio internacional, economía internacional etc.) era una invitación para eso. La postura abierta de esa escuela ofrecía la posibilidad, a este investigador, de tentar establecer un puente (aunque muy sutil) entre los distintos campos involucrados. En este ámbito, la selección de fuentes (distintas áreas del conocimiento) y su interpretación abierta a la reflexión sirvieron de base para el desarrollo de esta investigación, que incorpora elementos diversos que escaparían de la perspectiva historiográfica exaltada por Leopold von Ranke (Iggers & Powell, 1990)²¹¹.

1.2.3.- Otras influencias en el marco teórico

La idea de analizar las relaciones internacionales tomando en cuenta las aportaciones de distintos campos del conocimiento, no obstante, no era exclusiva de Renouvin (1893–1974) o de Braudel (1902–1985). Autores anteriores ya habían realizado planteamientos innovadores para superar la tradición historiográfica, más estrecha en su abordaje de las relaciones internacionales. El jurista alemán Robert von

²¹⁰ Lustick, I. S. (1996). History, historiography, and political science: Multiple historical records and the problem of selection bias. *American Political Science Review*, 605-618.

²¹¹ Iggers, G. G., & Powell, J. M. (1990). *Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline*. Nueva York: Syracuse Univ Pr.

Mohl (1799–1875), por ejemplo, en el siglo XIX, había sostenido una interesante discusión académica con el historiador Heinrich von Treitschke (1834–1896), importante politólogo cuya idea antisemita fue, años después, ampliamente abrazada por la ideología nazi. Robert von Mohl (1799–1875) planteaba la inclusión de la economía, el derecho o la religión en la constitución de la historia social. Otros autores europeos que también enfatizaban la incorporación de diferentes campos del conocimiento en el estudio de la historia, para la comprensión integral de las relaciones internacionales, han sido Jacob Burckhardt (1818-1897), Wilhelm Dilthey (1833-1911), Eberhard Gothein (1853-1923), Henri Pirenne (1862-1935) y Henri Berr (1863-1954).

En EE.UU, hasta la segunda mitad del siglo XIX, la historiografía era muy similar a la europea, con una orientación narrativa que ensalzaba la temática política (enfocando especialmente la élite política y los grandes personajes) y depreciaba los factores económicos y sociales.

Con la aparición, entre 1886 y 1890, de publicaciones académicas de la envergadura de *Political Science Quarterly*, *American Historical Review*, *Journal of Political Economy*, *Quarterly Journal of Economics* y *Annals of the American Academy of Political and Social Sciences*, la construcción histórica – y con eso la perspectiva de las relaciones internacionales – pasa a acoger factores económicos y sociales. En este país, Frederick Jackson Turner (1861–1932) amplió el objeto del análisis histórico incorporando aspectos económicos y sociales cuyo resultado ha culminado, a principios del siglo XX, en la aparición de la tendencia historiográfica conocida por *New History* que incluía factores sociales y económicos. James Harvey Robinson (1863–1936), Vernon Parrington (1871–1929), Carl Becker (1873–1945), Charles Beard (1874-1948) y Perry Miller (1905–1963) también han sido importantes en la incorporación de razones socio-económicas para la explicación de los acontecimientos y procesos históricos.

Con el reemplazo de la Nueva Historia por la cliometría (o historia cuantitativa), tras la Segunda Guerra Mundial y las aportaciones de economistas como John Maynard

Keynes, Simon Kuznets, Alfred Conrad, John Meyer, Robert Fogel y Walter Rostow, la historiografía pasa a presentar procedimientos hipotético-deductivos y a refutar el estilo narrativo-descriptivo en la construcción histórica. Kuznets (1980)²¹² y otros autores pugnaban que la modernización económica (que en esta tesis incluiría tanto el tema de la asignación de recursos por parte del agente privado como el comercio internacional) conduciría también a la modernización política (de sus instituciones), el establecimiento del mercado libre (pugnado tanto por la UE y AL, como por la OMC y otras instituciones) y la democracia. El hecho es que no parecía adecuado a este investigador realizar la apreciación de la interconexión entre los DD.HH, el comercio internacional y la economía, sin considerar el proceso histórico. Por esta razón se ha optado por escapar del marco historicista, tal como lo habían hecho la *Revue de synthèse historique* o la *Cambridge Modern History*.

Durante el planteamiento de la tesis, ha llamado la atención de este investigador la postura de Émile Durkheim (2013)²¹³, uno de los creadores de la sociología moderna. Aunque su idea de subordinar la historia a la sociología fuera ampliamente rechazada por otros académicos, su crítica a la historia y su narrativa de hechos concretos son interesantes. Se puede destacar, particularmente, su innovadora perspectiva sociológica de la historia (Durkheim, Mauss & Nelson, 1971)²¹⁴, armoniosa, en el modo de ver de este investigador, con la larga duración de Braudel, puesto que las condiciones geográficas influyen en la formación de las características sociológicas (Agnew, 1989)²¹⁵.

²¹² Kuznets, S. (1980). Driving forces of economic growth: What can we learn from history?. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 116(3), 409-431.

²¹³ Durkheim, E. (2013). *Institutional analysis* (revisión crítica realizada por Lucien Levy-Bruhl). University of Chicago Press.

²¹⁴ Durkheim, E., Mauss, M., & Nelson, B. (1971). Note on the Notion of Civilization. *Social Research* nº 117, 808-813.

²¹⁵ Agnew, J. A. (1989). *The power of place: Bringing together geographical and sociological imaginations*. Sidney: Allen & Unwin Australia.

De Max Weber (2009)²¹⁶ se buscó acaparar la idea de la presencia de la ideología en la sociedad. El liberalismo económico y el humanismo (plasmado en la cláusula social) poseen componentes ideológicos importantes. Concretamente la exaltación de los DD.HH en la política exterior y comercial de la UE refleja un valor interiorizado también en la orden interna. Además del factor ideológico, Weber también ha señalado la importancia de la dimensión económica en diferentes obras (1978²¹⁷, 1981²¹⁸). Swedberg (2000)²¹⁹ incluso realiza una crítica muy interesante a respecto en su libro “Max Weber and the idea of economic sociology”.

Sin embargo, las obras de Weber parecen priorizar los factores ideológicos sobre los factores económicos al paso que, como se ha visto, Renouvin y Braudel evitaban deliberadamente definir de antemano una escala jerárquica entre los distintos factores constitutivos de la historia. Claro está que, en esta tesis doctoral, no se pretende discurrir sobre la polémica entre Weber y Carl Marx pero, a guisa de ilustración, la teoría marxista abogaba por la supremacía de los factores económicos en la sociedad capitalista, al paso que Weber (2002)²²⁰ creía que eran los ideológicos (éticos, religiosos y morales).

En la tesis doctoral, la protección de los DD.HH (como un conjunto de normas de carácter universal) se ve incorporada en la sociedad europea hasta convertirse en uno de los valores fundamentales de la política exterior de la UE, que debe promoverla en el resto del mundo, como corolario de su concepción humanista, al lado del estado de derecho y la democracia. El hecho de comprender las relaciones internacionales dentro de un proceso histórico que, además de los hechos políticos, diplomáticos y militares,

²¹⁶ Weber, M. (2009). *Essays in sociology*. Londres: Routledge.

²¹⁷ Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Univ of California Press.

²¹⁸ Weber, M. (1981). *General economic history*. New Jersey: Transaction publishers.

²¹⁹ Swedberg, R. (2000). *Max Weber and the idea of economic sociology*. Princeton University Press.

²²⁰ Weber, M. (2002). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism and Other Writings*. Londres: Penguin.

incluye también factores sociales, culturales, económicos, comerciales, ideológicos etc. era verdaderamente alentador, puesto que la investigación se desarrolla sobre la incorporación de la protección de los DD.HH en la vida del bloque europeo hasta su exteriorización en las relaciones internacionales de naturaleza comercial y económica.

En Reino Unido esta visión más amplia de la historia también se ha verificado, destacándose diversos autores como George Unwin (década de los veinte), Arnold Toynbee (1972)²²¹ y John Clapham (1987)²²². En Francia, donde nuevamente se encuentran los autores que sirven de orientación principal para esta tesis, Pierre Renouvin y Fernand Braudel, la crítica a la historia metódica ha ganado más adeptos que en Alemania. Henri Barr (2012)²²³, por ejemplo, propuso la utilización de las aportaciones de las ciencias sociales en la síntesis histórica.

Por fin, este investigador gustaría de rendir homenaje a otros autores franceses que han contribuido para ampliar la perspectiva que se tiene actualmente de la historia de las relaciones internacionales, por considerarla idónea para comprender el crisol de interconexiones que está en la base de los movimientos históricos. Así, entre otros, merecen destaque los excepcionales historiadores George Lefebvre, Lucien Febvre, Marc Bloch (estos dos últimos fundadores de la corriente historiográfica conocida como la Escuela de los Annales, en 1929). Todos ellos reconocían la existencia de factores políticos, económicos y sociales en la formación de la historia. Camille-Ernest Labrousse también ha sido una figura destacada en el movimiento historiográfico, estableciendo su estudio en los ámbitos económico, social y cultural e influenciando a Braudel.

Por su vez, Eckart Kehr también ha criticado la historiografía historicista en Alemania, realizando relevantes aportaciones y señalando la influencia de los intereses

²²¹ Toynbee, A. (1972). *A Study of History Illustrated*. Cambridge: Oxford University Press.

²²² Clapham, J. H. (1987). *An Economic History of Britain*, The Cambridge Economic History of Modern Britain. Cambridge.

²²³ Barr, H. (2012). *La synthèse en histoire*. Paris: Albin Michel.

económicos en las decisiones políticas. Aunque los planteamientos de Kehr tardarían décadas hasta irrumpir en las universidades alemanas (solamente en los años setenta), ellas tuvieron una notable influencia en el surgimiento de la denominada Historia Social Alemana, que ha contado con exponentes de peso, como los representantes de la conocida Bielefeld School, Jürgen Kocka, Reinhart Koselleck y Hans-Ulrich Wehler (este último fallecido en julio de 2014). Para esos autores, la economía y la dimensión social integraban la interpretación historiográfica. Paralelamente, criticaban la tradicional instrumentalización política de la historia en el país (Sheehan, 1981)²²⁴.

Para terminar, retomando las ideas iniciales, tanto la perspectiva renouviniiana como la braudeliana de la historia de las relaciones internacionales parecen adecuadas, para este investigador, para servir de marco teórico para esta tesis. Las fuerzas políticas, económicas y sociales configuran las relaciones internacionales, aunque muchas veces el observador solamente perciba la “espuma de las olas”. Así que la tesis debe ser leída no tanto en función de los acontecimientos (corta duración), sino en su sentido de prolongación de un movimiento histórico más robusto y distendido (los DD.HH y los intereses comerciales y económicos). Las relaciones internacionales no son las “luces de las luciérnagas” como diría Braudel. La inclusión de los DD.HH en los acuerdos internacionales de naturaleza comercial ha sido el resultado de un proceso histórico más amplio que, por su vez, está comprendido en un proceso de formación y consolidación aún más amplio y longevo. Esto no significa que la cláusula social sea efectiva en el mercado o que se justifique jurídicamente su inclusión en los acuerdos comerciales. De hecho, la naturaleza jurídico-política de los DD.HH permite cierta maleabilidad interpretativa por parte de la UE, al sabor de sus intereses y necesidades comerciales, económicas, geopolíticas etc. (con efecto, la violación de esos derechos solamente ha generado sanciones a los países ACP.

²²⁴ Sheehan, J. J. (1981). What is German history? Reflections on the role of the nation in German history and historiography. *The Journal of Modern History*, 2-23.

1.3.- CUESTIONES METODOLÓGICAS

Las relaciones comerciales existentes entre UE y AL constituye el objeto material de esta tesis. La interpenetración de los DD.HH en esas relaciones (cláusula social), de cara al funcionamiento del mercado y al propio acuerdo, como instrumento jurídico, constituye su objeto formal²²⁵. Diversos modelos metodológicos han sido empleados durante la investigación con el propósito de indagar, comprender y explicar el objeto material. Se ha tenido en cuenta la observación de Tomassini (1991)²²⁶, según la cual el investigador debe utilizar la metodología para evitar el elevado riesgo de proceder a una interpretación arbitraria de la realidad (algo que muchas veces ocurre, durante el proceso de investigación, por el entusiasmo excesivo o por la ausencia de rigor técnico del investigador, apresurado por librarse el cuanto antes de aquello que considera desfasado). El tema elegido para la investigación, algo de importancia transcendental que puede condicionar todo el trabajo posterior, revelaba un camino complicado. La consulta realizada junto a diferentes académicos y profesionales también señalaba la dificultad de llevarse a cabo el proyecto de investigación. Una vez determinado el tema, se consideraron diversas metodologías para profundizar la investigación y responder a las siguientes preguntas básicas:

- ¿Qué se pretende conocer?

El comercio internacional existente entre UE y AL y su interrelación con los DD.HH (mediante la inclusión de la cláusula social en los acuerdos comerciales).

- ¿Por qué conocer este objeto material?

²²⁵ El abordaje del objeto material mezcla de manera sutil el derecho internacional público, las relaciones internacionales, la política internacional, el comercio internacional y la economía.

²²⁶ Tomassini, L. (1991). *La política internacional en un mundo postmoderno*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

Las relaciones comerciales existentes entre UE y AL son relevantes para ambas partes. No obstante, el conocimiento sobre esta realidad tiende a ser, casi siempre, limitada a aspectos muy específicos, aparentemente desconectados²²⁷.

- ¿Para qué investigar este objeto?

El comercio internacional UE-AL afecta directa e indirectamente la vida de numerosas empresas y personas, así como a los gobiernos de todos los países involucrados en los dos lados del Atlántico (balanza comercial, balanza de pagos, PIB etc.). Conocer la interrelación que posee ese comercio con la protección de los DD.HH (incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales), en función del mercado y de su justificación jurídica en los acuerdos de comercio, es importante para comprender ese movimiento histórico y evaluar sus efectos y potencialidades.

- ¿Cómo se desea conocer esta realidad?

La forma más idónea para conocer esta realidad compleja y multidisciplinar será mediante la adopción de una postura investigadora abierta que comprenda la transversalidad de las distintas dimensiones que la componen. La perspectiva histórica “renouviniana” y “braudeliana” de las relaciones internacionales parece idónea para este investigador, al permitir interconectar el derecho, la política, el comercio y la economía.

- ¿Desde cuándo...hasta cuándo?

Básicamente, desde la plasmación de los DD.HH en importantes instrumentos jurídicos internacionales en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial (como la Declaración de los Derechos del Hombre) hasta la incorporación de la cláusula social en los actuales acuerdos de comercio concluidos entre UE y AL (por ejemplo, el acuerdo de 2013 concluido con Colombia y Perú)²²⁸. No obstante, se ha considerado el movimiento histórico social surgido en Inglaterra en el final de la

²²⁷ La historia de las relaciones internacionales, bajo la perspectiva renouviniana y braudeliana, tal como explicado anteriormente, proporciona un marco teórico consistente para que el investigador analice las conexiones existentes entre el comercio internacional y la protección de los derechos humanos.

²²⁸ En otras palabras, se ha excluido de la investigación el desarrollo histórico de los DD.HH desde antiguos instrumentos como, por ejemplo, el Código de Urukagina (2350 a.C.).

primera revolución industrial, en función de su conexión más inmediata con el proceso de incorporación de los valores sociales en la concepción político-jurídica de la Europa del posguerra, la formación del estado de bienestar social y el reconocimiento de los DD.HH, posteriormente reflejado en la relación del bloque europeo con otros actores internacionales.

- ¿Cuánto se podrá investigar sobre el tema?

Básicamente la idea se prende al esfuerzo intelectual, temporal y económico posible para el desarrollo de la investigación, además de la propia viabilidad de concreción de la tesis. La limitación temporal es enorme, en función de la intensa actividad profesional del investigador. La viabilidad de desarrollo y concreción de la tesis ha sido cuestionada incontables veces, durante todo el proceso, en virtud de la escasa disponibilidad de tiempo. El esfuerzo económico, en la adquisición de publicaciones diversas y viajes de investigación (bibliotecas, centros universitarios etc.) también ha sido importante. No se ha solicitado beca de ningún tipo. Todos los costos han sido asumidos integralmente por el investigador.

1.3.1.- Metodología utilizada en la investigación académica

Serán utilizados en la investigación:

A. El Método Dialéctico (Inferencia Contradictorio-Sintetizadora)

Se ha elegido el método dialéctico con el objetivo de mejor captar y comprender la realidad dinámica, transversal e interconectada de las relaciones internacionales. La contradicción entre tesis y antítesis, solucionada mediante la elaboración de una síntesis capaz de captar las fuerzas motrices de la realidad y plasmarla conceptualmente en leyes universales, conduce al investigador a aceptar que todo está conectado en una realidad cambiante, caracterizada por la existencia de fuerzas esencialmente antagónicas. La complejidad de las relaciones revela la existencia de una acción recíproca entre sus elementos. Particularmente en esta tesis doctoral se tendría:

- Tesis (primera idea):

La tesis parte de la idea de que la interrelación entre el comercio internacional y los DD.HH (mediante la incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales) cumple una función esencialmente beneficiosa para los países latinoamericanos, al promover en ellos los DD.HH.

- Antítesis (oposición o segunda idea):

La antítesis plantea que la interrelación entre el comercio internacional y los DD.HH (mediante la incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales) ni es efectiva en el mercado ni es justificable jurídicamente en el acuerdo, aunque sea “políticamente correcta” (la protección de los DD.HH).

- Síntesis (combinación de la tesis y la antítesis, tercera idea):

De esas dos fuerzas antagónicas se procurará extraer una ley general aplicable a las relaciones internacionales de naturaleza comercial (plasmadas en acuerdos comerciales) existentes entre UE y AL.

Además, en la investigación se ha utilizado:

B. El método analítico:

Este método ha sido empleado para descomponer las relaciones comerciales UE- AL en diferentes elementos (económicos, jurídicos, comerciales, políticos, ideológicos, sociales) con el propósito de estudiar sus posibles interrelaciones²²⁹. En este desmembramiento de la realidad investigada, no se ha querido entrar en el nivel de la microhistoria (Ginzburg, Martín & Cuartero, 1997)²³⁰ para explicar la relación entre el comportamiento de ciertas personas y la adopción de determinadas decisiones relevantes para el movimiento histórico. Los dos únicos nombres mencionados han sido

²²⁹ Identificar las partes permite entender mejor el conjunto todo, así como explicar la realidad de un modo más completo.

²³⁰ Ginzburg, C., Martín, F., & Cuartero, F. (1997). *El queso y los gusanos*. Barcelona: Muchnik editores.

los de Idi Amin Dada (cuyo comportamiento genocida impulsó el establecimiento de un cambio de postura de la UE en relación a la ayuda a los PED) y Antonio Rugiero (primer presidente de la OMC, en función de su postura amigable en relación a los PED en el año 1995).

C. El Método Sintético

Una vez analizadas las diferentes partes de la realidad investigada, comprendidos sus aspectos, sus relaciones básicas y extraída su esencia, se ha buscado reintegrar esas partes y reconstruir sintéticamente el “todo”. La perspectiva de “totalidad” obtenida después del proceso de descomposición y recomposición es muy útil para comprender de un modo más amplio y profundo el objeto material investigado (el empleo del método sintético facilita la comprensión y explicación del “todo” mediante la conjunción del conocimiento obtenido de sus partes. Por eso es una superación del método analítico).

En el objeto material de la tesis, las distintas partes no pueden ser separadas con facilidad, ya que la estructura y la dinámica de la realidad internacional comprenden procesos complejos, en que los elementos políticos, jurídicos, comerciales y económicos se mezclan con tanta intensidad que se confunden en un todo homogéneo. Básicamente este método ha sido utilizado con el objetivo de alcanzar un conocimiento más completo y profundo sobre el objeto material investigado. La síntesis parte del abstracto hacia el concreto, puesto que la reconstrucción del conjunto permite al investigador una mayor comprensión de los elementos constituyentes y sus interrelaciones²³¹.

²³¹La hipótesis resultante de la síntesis vincula dos o más conceptos esenciales y los organiza de una forma determinada.

D. El método descriptivo (formas narrativa e histórica)

Importa comentar previamente algo sobre la técnica de recogida de los datos. Esta se ha plasmado básicamente en la selección y recopilación documental (libros, artículos, documentos de trabajo, memorias de actividades, informes de resultados producidos por diferentes entidades, normas jurídicas etc.) y en discursos, comparecencias, ruedas de prensa etc. en función de su pertinencia, relevancia, cualidad y adecuación metodológica. El análisis del contenido documental previamente seleccionado y recopilado ha sido analizado metodológicamente (los varios métodos explicados en este apartado).

Por su vez, el análisis del discurso consideró también el contexto, el lugar, el tiempo y el público a quién iba dirigido. Una vez realizada esta aclaración, interesaría mencionar que el empleo del método descriptivo se ha realizado en su forma narrativa e histórica con el objetivo de describir con el necesario rigor informativo el objeto material investigado. Esta realidad investigada ha sido captada tanto por la observación directa (mediante el trabajo, por veintiséis años, como asesor jurídico de operaciones internacionales: contratos de compraventa internacional de bienes y servicios en multinacionales y en órganos gubernamentales) como por el conocimiento adquirido a través de la lectura de trabajos de diversos autores en distintas áreas, en función de la actividad docente universitaria (derecho, comercio internacional, economía y administración y dirección de empresas) desde el año 1992.

Para el desarrollo de esta investigación se acopió un enorme acervo documental con el propósito de lograr informaciones detalladas sobre diferentes aspectos de la investigación. No obstante, durante el proceso de análisis y redacción de la tesis doctoral, se ha enfocado la atención hacia sus elementos esenciales, base para la interpretación. Para el enfoque principal (perspectiva particular de contemplación, análisis y reflexión del objeto de estudio) se ha optado por el método socio-histórico, en función de su perspectiva integradora histórica-sociológica, esencial en el estudio de las

relaciones internacionales (Truyol y Sierra, 1973²³², Calduch, 1991²³³ y Merle, 1991²³⁴), lo que permite conocer el pasado, interpretar el presente e identificar líneas de acción posibles en el futuro (Sarquis, 2001)²³⁵, todo en consonancia con las teorías de Renouvin y Braudel (fuerzas profundas y estructuralismo temporal, respectivamente).

E. Método Comparativo

Se ha empleado tanto la búsqueda analógica como la búsqueda antagónica relativamente a los acuerdos internacionales vigentes entre UE y AL. Considerando que los DD.HH están comprendidos, como mínimo, de modo implícito en los acuerdos internacionales concluidos por la UE en función de la base legal que autoriza la promoción de sus valores fundamentales por todo el mundo (DD.HH, democracia y estado de derecho), se ha establecido inicialmente como criterio de diferenciación la explícita alusión a los DD.HH en el cuerpo del tratado. Realizada esta búsqueda antagónica (búsqueda de diferencias), se inició una búsqueda analógica (búsqueda de semejanzas) entre los acuerdos internacionales vigentes entre UE y AL con el propósito de identificar, clasificar y agrupar los acuerdos internacionales de naturaleza comercial, diferenciándolos de aquellos de naturaleza no comercial. Esta es una tarea ardua, puesto que muchos acuerdos suelen contener disposiciones que abarcan diferentes ámbitos de las relaciones entre sus signatarios.

²³² Truyol y Sierra, A. (1973). *La teoría de las relaciones internacionales como Sociología*. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.

²³³ Calduch, R. (1991). Curso de métodos y técnicas de investigación en Relaciones Internacionales. Recuperado de <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/Metodos.pdf>

²³⁴ Merle, M. (1991). *Sociología de las Relaciones Internacionales*. Madrid: Alianza.

²³⁵ Sarquis, D. (2001). ¿Historia o coyuntura?: hacia una redefinición del análisis histórico en relaciones internacionales, *Revista Mexicana de Política Exterior*, 65 (nov.2001-feb.2002),126-143.

F. Método Inductivo (Inferencia Inductiva)

Las características generales del objeto material han servido para formular las proposiciones (ley científica de carácter general). El razonamiento ascendente (desde el singular hacia lo general) conduce a la comparación de las relaciones de causalidad presentes en fenómenos similares. En el caso, se ha partido del particular, el hipotético beneficio de la inclusión de la cláusula social en los acuerdos comerciales, hacia el general, la permanencia de esa cláusula por parte de la UE, cuya efectividad en el mercado y justificación jurídica se cuestionan en la investigación²³⁶.

G. El Método Deductivo (Inferencia Deductiva)

Después de haber partido del general (la asociación entre el comercio internacional y los DD.HH: la cláusula social es beneficiosa para todos los países) y llegar al particular (la inclusión de la cláusula social beneficia a los PED/países latinoamericanos), se ha cuestionado el grado de efectividad de la cláusula social en su rol de promotora de los DD.HH.L. La tarea es muy compleja, puesto que el argumento deductivo válido impone la imposibilidad de que su premisa sea verdadera y su conclusión falsa. De hecho, no se critica la inclusión de la cláusula social sino que se cuestiona su efectividad en el mercado²³⁷.

El mayor o menor rigor de la UE en la apreciación política de las violaciones de los DD.HH en AL no atiende solamente a intereses económicos y comerciales inmediatos, sino también a beneficios importantes como el incremento de su influencia política en la región. En este contexto, aunque la cláusula social sea de dudosa eficacia, así como jurídicamente cuestionable, ella parece atender a intereses proteccionistas de la UE,

²³⁶ La correcta observancia de los DD.HH y de la aplicación de los instrumentos jurídicos asociados a la cláusula social por parte de los países latinoamericanos depende, en nuestro modo de ver, de un control esencialmente político de la UE, lo que significa que podría ser más o menos estricta en función de los intereses involucrados (económicos, comerciales, geopolíticos, geoeconómicos, estratégicos etc.).

²³⁷ Con efecto, el rol de impulsor de los DD.HH en Latinoamérica puede diferenciar de modo más marcado la UE de los EE.UU en una región ideológicamente resistente al “imperialismo estadounidense”.

tema que no será aquí abordado. Está claro que todos desean obtener ventajas comerciales y económicas, algo tan relevante como la aceptación de la UE como un aliado y socio fiable.

La investigación no pierde su carácter científico por proporcionar probabilidades (certezas relativas) sobre la validez de las formulaciones teóricas generalizadas puesto que la anomalía científica difiere del resultado de una premisa falsa. Sin embargo, esa aparente anomalía podría cuestionar la propia validez de la teoría, a punto de que sea adecuado realizar un cambio de paradigma, lo que no pone en tela de juicio la validez del método. Las leyes científicas se consolidan mediante cada generalización que parta de una apreciación singular realizada mediante el empleo del método inductivo. Ellas refuerzan su valor en la medida en que pueden ser empleadas deductivamente en aquellos casos no investigados por la inducción. En otras palabras, la teorización de los casos particulares inducidos debería permitir la aplicación deductiva a nuevos casos particulares. El ideal es, naturalmente, emplear tanto el método inductivo como el deductivo y cruzarlos, siempre que posible (Sahagun, 1998)²³⁸.

H. Método Socio-Histórico

Para el enfoque principal (perspectiva particular de contemplación, análisis y reflexión del objeto material de estudio) se ha optado por el método socio-histórico, en función de su perspectiva integradora histórica-sociológica, esencial en el estudio de las relaciones internacionales (conocer el pasado, interpretar el presente e identificar líneas de acción posibles en el futuro).

El escenario de la investigación es multidisciplinar y transversal pero sus factores convergen en el movimiento histórico de las relaciones internacionales, tal como se ha relatado anteriormente (Renouvin y Braudel, entre otros autores). Esta metodología ha sido determinante en la elaboración de las hipótesis y en el desarrollo investigativo. Sin

²³⁸ Sahagun, F. (1998). *De Gutenberg a Internet. La sociedad internacional de la información*. Madrid: Edit. Estudios Internacionales de la Complutense.

embargo, en la redacción del trabajo, aunque el movimiento histórico esté presente de modo subyacente y muy sutil, se ha conferido deliberado énfasis al campo jurídico-económico.

1.4.- HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: HIPÓTESIS DE PARTIDA Y DE DESARROLLO

Cazau (2006)²³⁹ considera la hipótesis la suposición (intuición, para García, 1977²⁴⁰ y Duverger, 1996²⁴¹ o presentimiento del investigador, para Verma & Beard, 1981²⁴²) de una respuesta a los problemas suscitados por la realidad investigada. El objetivo de la hipótesis es el conocimiento, la comprensión de aquello que el investigador intuye pero aún no conoce con exactitud en su complejidad y funcionamiento. Sirve de base e hilo conductor de toda la investigación.

La hipótesis es una proposición provisoria, una presuposición que debe ser verificada, presentándose habitualmente como una anticipación de una relación entre un fenómeno y un concepto, entre dos conceptos o entre dos fenómenos. Su formulación debe ser observable, lo que significa que debe ser susceptible de verificarse. El investigador debe, en las conclusiones de su tesis doctoral (resultado de la investigación) extraer conclusiones de naturaleza científica que confirmen o refuten las hipótesis planteadas sobre el funcionamiento de la realidad investigada.

En ambos casos se facilita la acumulación de conocimientos científicos y con ello el progreso científico. La confirmación de la hipótesis resulta directamente aplicable al conocimiento de la realidad investigada, aportando explicaciones sobre su

²³⁹ Cazau, P. (2006). *Introducción a la investigación en ciencias sociales*. Lima. Editorial Universidad Ricardo Palma.

²⁴⁰ García, R. F. (1977). *Metodología de la investigación*. México: Trillas.

²⁴¹ Duverger, M. (1996). *Métodos de las ciencias sociales*. Barcelona: Ariel.

²⁴² Verma, G.K. & Beard, R.M. (1981). *What is Educational Research? Perspectives on techniques of research*, Aldershot, Gower.

funcionamiento y permitiendo cierto grado de previsión sobre su comportamiento, lo que abre el camino para nuevas y posteriores investigaciones. La refutación de la hipótesis también resulta directamente aplicable al conocimiento de la realidad. La verificación de la proposición contraria infirmaría la hipótesis planteada conllevando al descarte de las explicaciones anteriores realizadas sobre esa realidad (lo que significa que no permite sustentar previsiones sobre su funcionamiento). No obstante, en este caso también se abre el camino para nuevas investigaciones, obligando a descartar las hipótesis refutadas y, en consecuencia, a formular nuevas hipótesis de trabajo.

Relativamente al momento de su formulación dentro del proceso de investigación, las hipótesis de trabajo pueden ser clasificadas en hipótesis de partida e hipótesis de desarrollo (Cook, Deutsch, Jahoda & Selltitz, 1976)²⁴³. La hipótesis de partida debe abordar el estudio de lo que existe o existió y no el estudio de lo que aún no existe. Como afirman Raymond & Campenhoudt (1998)²⁴⁴, su finalidad no es prever el futuro, sino captar sus posibilidades y desafíos. La hipótesis de partida de esta tesis doctoral se plasma en la siguiente pregunta: ¿Cumple la cláusula social incorporada en los acuerdos comerciales concluidos entre UE y AL eficazmente su función de promotora de los DD.HH.L? Este investigador acredita que no. Como se verá, el mercado tiene una mecánica que tiende a diluir la mayor parte de este objetivo.

Una vez analizada la hipótesis principal, con el avance de la investigación ha surgido una nueva duda, plasmada en la hipótesis de desarrollo expresada en la siguiente pregunta: ¿Es jurídicamente justificable la incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales concluidos entre UE y AL? Este investigador acredita que la inclusión de la cláusula social atiende a razones históricas y es políticamente correcta.

²⁴³ Cook, S. W., Deutsch, M., Jahoda, M., & Selltitz, C. (1976). *Métodos de investigación en las relaciones sociales*. Madrid: Rialp.

²⁴⁴ Raymond, Q. & Campenhoudt, L. V. (1998). *Manual de investigação em ciências sociais*. Lisboa: Gradiva.

No obstante, bajo la perspectiva estrictamente jurídica, su presencia en los acuerdos comerciales UE-AL no se justifica. Jurídicamente tendría sentido su inclusión y persistencia ante la inexistencia o la escasez de normas o instrumentos jurídicos de protección de los DD.HH en AL. Sin embargo, eso no ocurre. El sistema interamericano de DD.HH, a pesar de sus deficiencias, es activo y cuenta con diversos instrumentos de protección de los DD.HH. Lo mismo ocurre con varios países de la región, en que esos derechos son consagrados en nivel constitucional. La UE podría cuestionar la eficiencia y la eficacia del sistema o de la CIDH pero, como se puede constatar fácilmente, esa apreciación sería política, no jurídica. Además, legalmente, la UE no tiene competencia para apreciar las normas del sistema interamericano o de cualquier de sus países, para efectos de aplicación de sanciones por su falta de observancia y respeto de los DD.HH consagrados en los instrumentos asociados a la cláusula social. Su apreciación es, como se ha mencionado, de naturaleza política.

Como reflexión prospectiva este investigador pregunta si la UE, por razones políticas, económicas, comerciales o estratégicas, estaría dispuesta a restringir las importaciones latinoamericanas en función de la aplicación de sanciones asociadas a la violación de la cláusula social, o sea, de condicionar el acceso a su mercado único de bienes y servicios procedentes de AL en función de la violación de los DD.HH.L en esa parte del planeta.

Esa posibilidad existe, puesto que es políticamente tentador restringir importaciones en un contexto económico aun inestable. La necesidad de recuperación y protección de sectores sensibles puede impulsar las autoridades de la UE a adoptar una postura más crítica y estricta en relación a la protección de los DD.HH.L en los países latinoamericanos. No obstante, la probabilidad de que eso ocurra se reduce cuando se verifica que entre UE y AL existen diversos intereses en juego, no solo comerciales: intereses geopolíticos, geoeconómicos, estratégicos, de seguridad, creación de marcos

jurídicos estables para la transferencia de capitales, inversión extranjera directa, proceso de internacionalización de empresas europeas etc²⁴⁵.

1.5.- FUENTES EMPLEADAS EN LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Las fuentes directas de esta tesis doctoral (generadas por los actores que participan directa o indirectamente del objeto material investigado) están divididas en: a) fuentes escritas (instrumentos jurídicos: tratados internacionales, declaraciones, resoluciones, convenios, protocolos, comunicados, memorias, informes, legislación interna etc.) y b) fuentes orales (entrevistas diversas: empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, docentes e investigadores universitarios). Por su vez, las fuentes indirectas utilizadas son del tipo interpretativo: libros, revistas, periódicos etc. que plasman la interpretación de los autores sobre determinados datos o informaciones.

²⁴⁵ La apreciación, más o menos estricta, que realiza la UE sobre la violación de los DD.HH, así como la decisión de restringir las importaciones (en acuerdos comerciales recíprocos) o de retirar los beneficios comerciales concedidos (en el SPG) no es de naturaleza jurídica, sino política. La apreciación debe tomar en cuenta el conjunto de beneficios, perjuicios y consecuencias políticas, económicas, comerciales y estratégicas derivadas de la eventual adopción de una decisión sancionadora.

CAPÍTULO 2
DERECHOS HUMANOS Y COMERCIO
INTERNACIONAL: DELINEAMIENTOS BÁSICOS

2.1 LA CLÁUSULA SOCIAL Y EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO

La cláusula social incorporada en los acuerdos comerciales UE-PED no es la panacea. Habitualmente se la asocia a la promoción de los DD.HH en los PED. Sin embargo, como se verá en esta investigación, su eficacia es mucho más reducida de lo que a primera vista puede parecer. El problema de la interconexión entre los DD.HH y el comercio internacional es de naturaleza esencialmente estructural. La OMC es parte integrante de esa estructura, sosteniendo y fomentando ciertas características que convierten los DD.HH en algo verdaderamente escurridizo en la práctica de las relaciones comerciales internacionales. Uno de los elementos más destacables es el libre mercado, esta bandera erigida después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido impulsada con vigor por todo el mundo. Actualmente, los 162 miembros de la OMC asumen, con todas sus consecuencias, la predicación del establecimiento del libre comercio. Este es, al final, el propósito principal de sus distintas rondas de negociación y de los diversos acuerdos internacionales que visan el establecimiento de espacios económicamente ampliados²⁴⁶.

Naturalmente, existen defensores y detractores del libre comercio (mercado mundial). Todo depende de los beneficios potenciales que se considera posible obtener. Argumentos espléndidos a su favor pueden ser encontrados, por ejemplo, en el interesante libro de Bhagwati (2007)²⁴⁷.

No obstante, el hecho de que el mundo esté globalizado, de que los miembros de la SI estén hiperconectados y que exista una enorme interdependencia económica (la

²⁴⁶ El multilateralismo en materia de comercio ha sido, de cierto modo, reemplazado por los numerosos acuerdos bilaterales preferenciales impulsados por las economías avanzadas al margen de la OMC. Además, muchos PED han optado por esta vía ante la dificultad de lograr un acuerdo general ambicioso. La Ronda de Doha, en su reunión ministerial de Nairobi (diciembre 2015) se considera prácticamente “muerta” en términos de una gran idea global, aunque temas como el acuerdo de Bali sobre facilitación de trámites comerciales, logrado en el 2013, cuenta ya con 81 ratificaciones (a fecha de 31.05.2016).

²⁴⁷ Bhagwati, J. (2007). *In Defense of Globalization*. Oxford: Oxford University Press.

interconexión deriva, esencialmente, del comercio y de las finanzas)²⁴⁸ no significa que será esencialmente beneficioso para todos en el mismo grado. Efectivamente, en lo que se refiere al comercio, cabe comentar que el nivel de renta influye en el modelo de producción y este en el volumen de exportaciones e importaciones, lo que tiende a afectar la actividad y el empleo en el resto de países. Además, algunas teorías defienden la existencia de una zona periférica (constituida por PED) dependiente de un centro (constituido por PD), cuya relación de dominancia (del centro en relación a la periferia, naturalmente) perpetuaría un desarrollo desigual y la consolidación de asimetrías.

Para efectos de consagración de los DD.HH, objetivo asociado a la cláusula social, importa tener en mente la dificultad de compatibilizarlos con el modelo de asignación de recursos habitualmente adoptado por las empresas actuantes en el libre mercado, algo estimulado por el comercio internacional, la OMC, la UE y AL. El escenario donde se desarrollan los intercambios mercantiles internacionales desvela un delicado campo por donde se mueven los DD.HH en el comercio.

Para mejor comprenderlo, es conveniente recordar que la actividad económica está directamente relacionada con la producción, el consumo y los intercambios comerciales (este último sufre, además, la influencia de diversos factores como, por ejemplo, los tipos de cambio entre divisas, tradicionalmente usados para estimular las exportaciones e incrementar la competitividad del país en el mercado mundial). En el seno de la UE, esas actividades deben tomar en cuenta los DD.HH. Lo mismo ocurre – o debería ocurrir - bajo la perspectiva de la UE, con los intercambios comerciales realizados con terceros países (desarrollados y en desarrollo). De hecho, la política exterior de la UE

²⁴⁸ A sabiendas de que existen enormes interdependencias, sería conveniente la coordinación de políticas económicas entre los países para que todos obtengan un beneficio mutuo. Sin embargo, en tiempos de crisis económica los países se sienten tentados a utilizar esas interdependencias en beneficio propio.

consagra como valores fundamentales los DD.HH, la democracia y el estado de derecho, de conformidad con sus principios fundacionales²⁴⁹.

Sin embargo, las relaciones comerciales UE-AL se desarrollan en un marco de libre mercado, en que la riqueza generada con el comercio no está condicionada estrictamente a los recursos naturales existentes, sino a la asignación apropiada y eficaz de los recursos económicos, humanos y materiales existentes (Hindriks & Myles, 2006)²⁵⁰.

Bajo esta perspectiva, la protección y el fomento de los DD.HH (incluyendo los derechos laborales: DD.HH.L) son muchas veces relegados a un plan secundario en las decisiones relativas a la asignación de recursos. Con efecto, las empresas de varios países, con el propósito de maximizar sus beneficios, tienden a vulnerar los DD.HH.L (contando, algunas veces, con la condescendencia de ciertos gobiernos). La importancia, por ejemplo, de la mano de obra barata (y frecuentemente sobreexplotada) constituye, de acuerdo con Freeman & Nickell (1988)²⁵¹, uno de los más importantes factores de la competencia empresarial (“liderazgo en costes”)²⁵².

En el libre mercado, algo defendido por UE, AL y OMC, los agentes privados adoptan decisiones que objetivan maximizar sus beneficios económicos y reducir

²⁴⁹ Artículos 2, 3, 6 y 21 del TUE y art. 205 del TFUE. El art. 21 del TUE señala que: *1. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional. La Unión procurará desarrollar relaciones y crear asociaciones con los terceros países y con las organizaciones internacionales, regionales o mundiales que compartan los principios mencionados en el párrafo primero. Propiciará soluciones multilaterales a los problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas.*

²⁵⁰ Hindriks, J. & Myles, G. D. (2006). *Intermediate public economics*. Cambridge: MIT Press.

²⁵¹ Freeman, R. B., & Nickell, S. (1988). Labour market institutions and economic performance. *Economic Policy*, 136, 64-80.

²⁵² Algunos PED producen con bajos costes laborales y el precio competitivo de sus productos afecta a los puestos de trabajo en industrias de otros países.

simultáneamente la correspondiente asignación de recursos. En otras palabras, en las economías de mercado, las decisiones económicas (lo que incluye la asignación de recursos) están basadas en decisiones privadas²⁵³ que se mueven, esencialmente, según Hillman (2009)²⁵⁴, en función de los beneficios económicos y de las informaciones pertinentes disponibles.

La transposición de la cláusula social incorporada en un AC internacional en la práctica empresarial enfrenta ese problema. Este es el contexto liberalizador en que se insieren las empresas de la UE y de AL y que viene siendo sostenida en el ámbito multilateral del comercio desde los acuerdos de *Bretton Woods* y la creación del GATT, predecesor de la OMC. Por eso, bajo la perspectiva del mercado, la cláusula social es ineficaz. Las decisiones estratégicas empresariales buscan la maximización de los beneficios, lo que significa que, si es necesario o simplemente conveniente, dependiendo del sector y del tipo de mano de obra (especialmente la poco calificada), no pondrán reparos en precarizar las condiciones laborales. Sobre el tema, enfocado más a nivel de actividades transnacionales y derecho internacional privado, es muy recomendable el trabajo de García-Castrillón (2016)²⁵⁵ que señala, acertadamente, la existencia de *estructuras empresariales transnacionales que alcanzan en no pocas ocasiones un importante poder económico, con el consiguiente incremento de la posibilidad de influir (directamente o a través de grupos de presión) sobre gobiernos y administraciones de distintos Estados y no son pocas las ocasiones en las que las*

²⁵³ Existen aproximadamente 104.000 multinacionales en el mundo, que controlan alrededor de 800.000 subsidios, 71% de ellas originarias de países desarrollados. Las 500 mayores empresas contabilizan el 25% de todo el producto (bienes y servicios) en el mundo y el 50% de todo el comercio mundial. La mayor parte de la tecnología en el mundo – y sus patentes – también están en sus manos. El 80% de los pagos por *royalties* y tasas involucran a esas grandes empresas. Fuente: *Wharton Business School*, Universidad de Pensilvania. Curso sobre Análisis de las tendencias financieras y sociales a nivel global, impartido por Mauro Guillén, de 05 de mayo a 02 de julio de 2014. Apuntes personales.

²⁵⁴ Arye .H. (2009). *Public Finance and Public Policies. Responsibilities and Limitations of Government*. Cambridge University Press.

²⁵⁵ García-Castrillón, C. O (2016). “Derechos Humanos y Responsabilidad Corporativa: vías para su articulación jurídica internacional” in Nuevos retos y amenazas a la protección de los derechos humanos en la era de la globalización (López Martín, A. G, editora y Chinchón Álvarez, J., coordinador. Tiran lo Blanch, 143-171.

actuaciones empresariales inciden perjudicialmente, de forma directa o indirecta, en el disfrute real o potencial de los derechos humanos.

Se podría pensar que el estado debería luchar rotundamente para evitar situaciones como esas. De hecho, la inclusión de la cláusula social en los acuerdos comerciales bilaterales concluidos por la UE con países o subregiones en desarrollo (v.g. Centroamérica), establece la ratificación y aplicación efectiva de determinados instrumentos internacionales (considerados como el mínimo aceptable por la UE en términos de estándares de protección de los DD.HH.L) como una condicionante para acceder al mercado único europeo con rebajas arancelarias.

Aquí también, en la práctica, la cláusula social no es tan eficaz como se imagina. Ni siempre existe un interés estatal real para evitar esta situación. Esto ocurre porque casi todos los gobiernos basan el sistema de desarrollo del país en la exportación y en la competitividad de sus empresas, mirando algunas veces “para el otro lado” en temas de violaciones de los DD.HH.L perpetradas por los agentes privados²⁵⁶, algo contemplado, a su manera, desde hace varios años, por los investigadores Collingsworth, Goold & Harvey (1994)²⁵⁷ y De Wet (1995)²⁵⁸. Bajo el enfoque del mercado, la razón es sencilla: las exportaciones son beneficiosas para el equilibrio de la balanza comercial y de pagos.

Con suerte, la cláusula social tendrá un efecto positivo en la promoción de los DD.HH.L en los países signatarios económicamente más débiles. El estado, antes de firmar y ratificar un AC con la UE y vincularse jurídicamente a la cláusula social (normalmente considerada una cláusula fundamental en los acuerdos), pondera si

²⁵⁶ La violación de DCPESC es una realidad palpable en muchos países que se insiere dentro de esa lógica. Empresas y gobiernos son actores partícipes en este campo.

²⁵⁷ Collingsworth, T., Goold, J. W., & Harvey, P. J. (1994). Labor and free trade: time for a global new deal. *Foreign Affairs*, 73(1), 8-13.

²⁵⁸ De Wet, E. (1995). Labor standards in the globalized economy: the inclusión of a social clause in the General Agreement on Tariff and Trade/World Trade Organization. *Human Rights Quartely*, 443-462.

merece la pena exportar sus productos al mercado europeo. La respuesta, naturalmente, suele ser afirmativa.

Teóricamente, la situación de vulneración de los DD.HH.L debería reducirse drásticamente cuando el país ratifica los instrumentos internacionales pertinentes (señalados, por ejemplo, en el anexo VIII del Reglamento nº 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012). En la práctica, sin embargo, cuando el compromiso político del estado se transfiere (sin excluir) a la actividad privada, suele ser ignorado o, algunas veces, se convierte en algo contraproducente (v.g., algunas empresas recortan la plantilla de empleados por reducción de la competitividad en la etapa de producción o emplean personas con discapacidad en funciones de almacén, cuyo trabajo físico no mejora su proceso de integración social).

Si uno procede al análisis económico del derecho, verá que, en este caso, la cláusula social podría estar, incluso, indirectamente asociada al incremento de despidos en un país (Kaplow & Shavell, 2002)²⁵⁹. Esto no es ninguna novedad. En AL, tradicionalmente, cuanto más normas laborales favorables al trabajador se editan, menor la contratación en el mercado de trabajo formal²⁶⁰, situación observable frecuentemente en el sector terciario de la economía.

Así, por un lado, el PED desea y necesita fomentar la exportación de bienes y servicios producidos por sus empresas (cualquier que sea el sector) y, por otro, teme violar el acuerdo concluido con la UE (puesto que está jurídicamente vinculado al acuerdo y, por consiguiente, a su cláusula social), porque de esa violación derivarían responsabilidades internacionales.

²⁵⁹ Kaplow, L., & Shavell, S. (2002). Economic analysis of law. *Handbook of public economics*, 3, 1661-1784.

²⁶⁰ Si añadimos a eso la existencia de una precaria y normalmente corrupta inspección por parte de las autoridades competentes, la situación se complica aun más.

Concretamente, en lo que concierne específicamente al tema que se aborda en la investigación, en nivel bilateral, la consecuencia principal sería la restricción comercial mediante la retirada de concesiones comerciales favorables a esos PED. Como se sabe, desde el inicio de los años setenta (1971), la UE busca estimular a los PED para que ratifiquen tratados de protección de los DD.HH. La cláusula social incorporada en los ABC concluidos por la UE con esos países cumple un rol condicionante en lo que concierne al acceso facilitado de sus productos al mercado interior europeo.

Sin embargo, la realidad empresarial en Latinoamérica, especialmente en las zonas más pobres, aún revela un cuadro de precariedad tremendo. Además, en un marco de libre competencia, otro baluarte neoliberal, de nada sirve exportar si no se logra precios competitivos que logren abrir espacio en el mercado exterior y, gradualmente, ampliar su cuota de participación²⁶¹.

Por otro lado, los consumidores, en su gran mayoría, raramente piensan en adquirir productos más caros, solo porque su producción se ha realizado con el escrupuloso respeto de las normas laborales y la protección de los DCPESC de las personas de este o de aquel país. Simplemente compran lo que es económicamente accesible para sus bolsillos. Esto, en microeconomía, corresponde al principio de la maximización de beneficios en función de la restricción presupuestaria del consumidor, considerado un agente racional.

Ahora, ¿será que los estados son indiferentes en relación al modo como los DD.HH son encarados y asumidos por sus agentes privados en el libre mercado? Teóricamente no. Por coherencia, esta idea sería extraña, puesto que hasta mismo la asignación de

²⁶¹ El Reglamento (CE) n° 1225/2009 del Consejo de 30 de noviembre, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la CE (DOUE de 22.12.2009 (L 343/51) es un ejemplo de esta preocupación, respaldada por los tribunales (v.g. la Sentencia 62012TJ0006, del Tribunal General (Sala Cuarta) de 6 de septiembre de 2013 (Godrej Industries Ltd y VVF Ltd contra Consejo de la Unión Europea, 06.09.2013 (ECLI:EU:T:2013:408). Sobre productos específicos, se puede mencionar el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/501 de la Comisión de 24 de marzo de 2015 que impone un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío originarios de la República Popular China y Taiwán (DOUE de 25 de marzo de 2015 (L 79/23)).

recursos por el estado (recursos públicos), realizados mediante la edición de normas jurídicas, debe evitar la vulneración de los DD.HH.²⁶².

Desde luego, el rol de los agentes privados en el tema de los DD.HH.L es relevante para la UE, como se puede observar, por ejemplo, con la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2009, sobre la responsabilidad social de las empresas de subcontratación en las cadenas de producción (2008/2249(INI)), la Resolución de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (2009/2201(INI)) o la de 8 de junio de 2011, sobre la dimensión exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas (2010/2205(INI)).

Existen varios otros instrumentos jurídicos que versan el tema, como el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Transformaciones industriales, desarrollo territorial y responsabilidad de las empresas” o la Resolución del Consejo de 6 de febrero de 2003 relativa a la responsabilidad social de las empresas. Para predicar con el ejemplo se podría mencionar aun el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa un polo de excelencia de la responsabilidad social de las empresas”.

En resumen: la eficacia de la cláusula social es relativa, bajo la perspectiva del funcionamiento real del mercado (esta afirmación tomará más cuerpo en el apartado siguiente). Estas disposiciones legales siguen las teorías éticas y morales en los

²⁶² Todo el tema es tomado muy en serio por la UE como revela, por ejemplo, la Resolución B4-0731, 0733, 0742, 0760 y 0778/98 sobre la violación de los derechos humanos en Myanmar, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas».

negocios, señalados por Mayorga & González (2001)²⁶³ y conocidas en el ámbito de la Administración y Dirección de Empresas (retomadas recientemente por el movimiento conocido como Capitalismo Inteligente).

Ante ese descalabro, es muy acertada la observación de Aldecoa Luzárraga (2006)²⁶⁴ de que, frente al neoliberalismo como paradigma de las relaciones económicas mundiales, la política puede y debe recuperar la primacía sobre la economía (necesidad de una ética mundial, observada en la concepción de la Política Exterior europea como política de responsabilidad, formulada desde los valores europeos y recogida en la Declaración de Laeken). En palabras de Granell Trías (2005)²⁶⁵, la UE desea ser un auténtico *soft power* civil frente al único *hard power* militar que es EE.UU.

2.2 DERECHOS HUMANOS Y COMERCIO INTERNACIONAL: EL RECHAZO DE LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA SOCIAL POR LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

Históricamente los estados latinoamericanos (así como una parcela significativa de sus respectivas sociedades²⁶⁶) se posicionan contrariamente a la inclusión de los DD.HH.L en el ámbito de los acuerdos comerciales internacionales, tanto bilaterales como multilaterales. Con efecto, en el marco del sistema multilateral de comercio, el repudio latinoamericano ha quedado marcado de forma muy intensa durante las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, a tal punto que el gobierno estadounidense llegó a acusar a esos países de practicar el denominado *dumping* social

²⁶³ Mayorga, P. & González, V. (2001). *Responsabilidad social de la empresa. Elementos teóricos y experiencias*. Fundación Corona.

²⁶⁴ Aldecoa Luzárraga, F. (2006). La nueva política exterior de responsabilidad y su dimensión ética. *Eikasia: revista de filosofía* nº 6, 1-23.

²⁶⁵ Granell Trías, F. (2005). Política exterior europea y pobreza mundial. *Economía Exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española*, nº 35, 51-57.

²⁶⁶ La cláusula social incorporada en un AC no encuentra necesariamente respuesta positiva por parte de los agentes privados, lo que incluye tanto a las empresas como a los propios trabajadores, que temen perder sus puestos de trabajo.

al obtener ventajas comerciales sobre los países que adoptan estándares laborales más elevados (Jinji, 2005)²⁶⁷, lo que configuraría una especie de “competencia desleal” (Cordella & Grilo, 2001)²⁶⁸.

En el ámbito de la UE el tema se discute tanto en nivel de intrazona como en relación a terceros países (v.g., Pregunta escrita P-8845/10 Emilie Turunen (Verts/ALE) a la Comisión. *Dumping* social; Pregunta escrita E-8805/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) a la Comisión. Denuncia de *dumping* económico, social y sanitario de la industria conservera de Galicia contra la Comisión Europea; Pregunta escrita E-7704/10 Othmar Karas (PPE) a la Comisión. *Dumping* salarial en Alemania: empresas de sacrificio y despiece). En la Ronda de Singapur, en 1996, ya estando constituida y actuante la OMC, EE.UU y Noruega intentaron incluir nuevamente el tema de la cláusula social en la pauta de las negociaciones multilaterales, pero los PED lograron bloquear la iniciativa, aludiendo a la competencia de la OIT, explícitamente señalada, un año antes, por su primer presidente, el napolitano Renato Ruggiero²⁶⁹. En esta Conferencia se proclamó la siguiente Declaración Ministerial:

“We renew our commitment to the observance of internationally recognized core labour standards. The International Labour Organization (ILO) is the competent body to set and deal with these standards, and we affirm our support for its work in promoting them. We believe that economic growth and development fostered by increased trade and further trade liberalization contribute to the promotion of these standards. We reject the use of labour standards for protectionist purposes, and agree that the comparative advantage of countries, particularly low-wage developing

²⁶⁷ Jinji, N. (2005). *Social Dumping and International Trade*. ETSG Working Paper.

²⁶⁸ Cordella, T. & Grilo, I. (2001). Social dumping and relocation: is there a case for imposing a social clause? *Regional Science and Urban Economics*, 31(6), 643-668.

²⁶⁹ No obstante, hay que considerar que la OIT no posee poderes sancionadores, aunque exista reclamación de otro país-miembro (non-observance complaints).

countries, must in no way be put into question. In this regard, we note that the WTO and ILO secretariats will continue their existing collaboration”²⁷⁰.

Así, en el marco del sistema multilateral de comercio, la cláusula social se convertiría en un punto de discordia entre los PD y los PED. Los primeros acusaban a los segundos de competencia desleal y los segundos acusaban a los primeros, de acuerdo con Elmslie & Milberg (1996)²⁷¹, de ocultar una intención comercial proteccionista por detrás de su discurso sobre DD.HH. De un modo general, los PED repudiaban la vinculación de la protección de los DD.HH a los acuerdos comerciales al considerarla una estrategia articulada por los PD para neutralizar la mayor ventaja comparativa que poseían: su mano de obra abundante y barata (Appelbaum & Christerson, 1997²⁷² y Roozendaal, 2002²⁷³).

Si se analiza la cláusula social bajo la perspectiva de su plena aceptabilidad por todos los pueblos (puesto que plasman valores supuestamente universales), se verá, una vez más, que en la práctica eso no ocurre. La dimensión social del comercio era, bajo la perspectiva de los PED, una estrategia proteccionista, comprendida y explorada en AL por algunos segmentos de la sociedad y de la clase política, como la expresión de la rivalidad entre los países del Norte y del Sur, posicionamiento ya destacado en los años setenta del siglo pasado por Diaz-Alejandro (1975)²⁷⁴.

²⁷⁰ Organización Mundial del Comercio. Doha WTO Ministerial 2001: Briefing Notes. Trade and Labour Standards. A difficult issue for many WTO member governments. Recuperado de http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/brief_e/brief16_e.htm

²⁷¹ Elmslie, B. & Milberg, W. (1996). Free trade and social dumping: lessons from the regulation of US interstate commerce. *Challenge* 72, 46-52.

²⁷² Appelbaum, R. P., & Christerson, B. (1997). Cheap labor strategies and export-oriented industrialization: some lessons from the Los Angeles/East Asia apparel connection. *International Journal of Urban and Regional Research*, 21(2), 202-217.

²⁷³ Roozendaal, G. van (2002). *Trade Unions and Global Governance: The Debate on a Social Clause*. Londres: Routledge.

²⁷⁴ Diaz-Alejandro, C. F. (1975). North-south relations: The economic component. *International Organization*, 29(01), 213-241.

En el ámbito de la UE, como señala Gough (1999)²⁷⁵, se llegó a abordar el tema bajo la perspectiva de la cohesión social. En términos normativos, se podría proporcionar como ejemplos el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “La dimensión social de la globalización - la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos”, de 09.03.2005 o, más recientemente, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre “La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos”, de 18.05.2012; o el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre “Comercio, crecimiento y desarrollo: una política de comercio e inversión a medida para los países más necesitados”, de 18.09.2012.

Es importante enfatizar que en el ámbito del sistema multilateral de comercio, por iniciativa del propio Sr. Ruggiero, la apreciación de los temas laborales sería transferida al marco competencial de la OIT que, en aquello momento, estaba debatiendo una propuesta de trabajo conjunto con la OMC (Leary, 1997)²⁷⁶. No obstante, fuera del marco multilateral, sí que ha sido posible incorporar algunos convenios básicos de la OIT en instrumentos jurídicos bilaterales. De hecho, la UE en sus relaciones comerciales con terceros países incluye varios de ellos, comprendidos en el ámbito de la cláusula social.

Naturalmente, no era sencillo políticamente afirmar que la cláusula social correspondía a una política premeditada y deliberada para marginar a los PED y cristalizar las asimetrías observables entre los países en términos de desarrollo

²⁷⁵ Gough, I. (1999). *Capitalism and social cohesion: essays on exclusion and integration*. Macmillan.

²⁷⁶ Leary, V. A. (1997). WTO and the Social Clause: Post-Singapore, *The European Journal of International Law*, 8, 118.

económico. Al contrario, como recuerda Yusuf (1980)²⁷⁷, desde el final de los años setenta, mediante la cláusula de habilitación (Ronda Tokio), se habían tomado iniciativas para mejorar la inserción comercial de esos países, visando su desarrollo socio-económico²⁷⁸, todo dentro de la noción de responsabilidad mundial asumida por la UE (Aldecoa Luzárraga, 2006)²⁷⁹.

Por parte del bloque europeo, en el ámbito bilateral, tampoco era posible afirmar rotundamente su propósito de exclusión de los PED. Su iniciativa de instituir el SPG (1971), años antes de que el GATT lograra un marco normativo multilateral (1979)²⁸⁰, parece apuntar para la construcción de una imagen alternativa y diferenciada de aquella percibida en AL en relación a los EE.UU: la imagen (de la UE) de un socio fiable, no imperialista, interesado en la promoción de los DD.HH, del estado de derecho, de la democracia y del desarrollo socio-económico. Esta imagen, sin embargo, nunca ha convencido plenamente a los miembros más pobres de la OMC, como ha señalado Kwa (1998)²⁸¹.

²⁷⁷ Yusuf, A. A. (1980). Differential and More Favourable Treatment: The GATT Enabling Clause. *Journal of World Trade*, 14(6), 488-507.

²⁷⁸ Esta posición incluso se ha plasmado en el Reglamento nº 978/2012 del parlamento Europeo y del consejo, de 25 de octubre, en su “considerando” nº 4: “La política comercial de la Unión debe ser coherente con los objetivos de la política de la Unión en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y consolidar dichos objetivos, fijados en el artículo 208 del TFUE, en particular la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible y la gobernanza en los países en vías de desarrollo. Asimismo, debe cumplir los requisitos de la OMC, especialmente la Decisión sobre trato especial y diferenciado, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo (la “Cláusula de Habilitación”), adoptada en virtud del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1979, según la cual los miembros de la OMC pueden conceder un trato diferenciado y más favorable a los países en vías de desarrollo”.

²⁷⁹ Aldecoa Luzárraga, F. (2006). *Op. cit.*

²⁸⁰ El Reglamento (UE) nº 539/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las importaciones de arroz originario de Bangladés y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 3491/90 del Consejo alude explícitamente en su considerando nº 8 a la cláusula de habilitación.

²⁸¹ Kwa, A. (1998). WTO and Developing Countries, *Foreign Policy in Focus*, 3, 37, Noviembre.

Como señala Granell Trías (2005)²⁸², es necesario que la lucha de los pueblos del Tercer Mundo contra la pobreza se base en la apertura del mercado, en la adaptación de las políticas internacionales, en el flujo de más recursos financieros y técnicos hacia los países pobres y, sobre todo, en la mejoría de los niveles de buen gobierno, fundamental en la creación de un marco propicio para la inversión productiva doméstica y externa, el comercio y las transacciones exteriores, objetivando la adecuada inserción de los PED en la división internacional del trabajo. Esta es la responsabilidad colectiva asumida por la UE, ni siempre comprendida por los PED. Según el autor, la etapa de los flujos de ayuda desconectada de la política o de la explotación de la periferia por el centro ha sido superada, y la política debe cumplir aquí un rol importante, para evitar que todo se resuma en la simple defensa del Consenso de Washington.

Aquí resalta la lección de Aldecoa Luzárraga (2006)²⁸³, según la cuál la competitividad a escala mundial exigida por el capitalismo, basada en la diferenciación, ha implicado en el desarrollo de distintas formas de organización política, económica y social, con tres modelos principales como respuesta a la globalización: el que enfatiza el mercado (EE.UU), el estado (Asia-Pacífico) y la sociedad (UE, que considera el mercado y el sistema político como instrumentos para la reestructuración de la sociedad). Aunque los tres modelos presenten elementos de integración económica, según el autor, solamente en el modelo europeo se puede hablar en una verdadera integración política, a tal punto que se logró superar el concepto clásico de estado-nación y se asumió el concepto de soberanía compartida, con una política comercial común y una unión monetaria.

No obstante, la proyección de la pretendida imagen del bloque europeo como *civil power* no era, bajo la percepción latinoamericana, compatible del todo con la actuación de la UE en el marco de la OMC, puesto que la entidad había adoptado un modelo de negociación, en la práctica, en que los temas más relevantes y de interés para los PED

²⁸² Granell Trías, F. (2005). *Op. cit.*

²⁸³ Aldecoa Luzárraga, F. (2006). La nueva política exterior de responsabilidad y su dimensión ética. *Eikasia: revista de filosofía* nº 6, 1-23.

(como la agricultura), eran discutidos casi que exclusivamente por los miembros desarrollados (principalmente UE, EE.UU, Canadá y Japón). Los PED recibían un texto prácticamente cerrado para debatir, con poca margen de maniobra, algunos temas técnicos de menor importancia. En el marco bilateral la situación era similar. La propia Oxfam (2002)²⁸⁴ ha publicado un informe (nº 22) que establecía en su página inicial:

“Los dobles raseros en política comercial son una vergüenza. La UE está forzando a los países del Sur a abrir sus mercados a una velocidad suicida, al tiempo que mantiene sus propias barreras a las exportaciones de estos países, en especial a los productos agrarios y textiles. Pero la UE aún va más allá, invadiendo el mundo en desarrollo con sus excedentes agrarios fuertemente subvencionados a unos precios con los que los pequeños productores de estos países no pueden competir, destruyendo con ello su medio de vida”.

Tomando en cuenta que la Decisión de 1979 sobre un trato diferenciado más favorable, reciprocidad y mayor participación de los PED (“cláusula de habilitación”) ha sido plasmada en el artículo XXIV del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (como se desprende del Entendimiento sobre la Interpretación del Artículo XXIV del GATT 1994) y que, entre otros instrumentos, la Resolución del Parlamento Europeo sobre las Zonas Regionales de Libre Comercio y la Estrategia Comercial de la Unión Europea (2002/2044(INI)) señala, en su letra “I”, la necesidad de que las negociaciones sobre los acuerdos comerciales regionales esclarezcan las disposiciones sobre la flexibilidad ya existente en el marco de la OMC y la relación entre el artículo XXIV del GATT y la “cláusula de habilitación” y en su letra “O” exprese sus preocupaciones sobre el incremento de los intercambios comerciales en el ámbito Sur-

²⁸⁴Oxfam. Informe Oxfam nº 22. (2002). La hipocresía de Europa. Recuperado de http://www.fongdcam.org/manuales/comerciojusto/datos/docs/ARTICULOS%20Y%20DOCUMENTOS%20DE%20REFERENCIA%20def/CONCEPTO%20CI/Como%20funciona%20el%20sistema/11-Hipocresia_Europa_oxfam.pdf

Sur, entre países aun beneficiados por la cláusula de habilitación del GATT²⁸⁵ y que todos los partícipes (OMC, UE y AL) pugnan rotundamente por el libre comercio, con todos los aspectos ya mencionados sobre la postura de las empresas (maximización de beneficios económicos) y la connivencia de muchos gobiernos (plan de desarrollo nacional basado en las exportaciones, mejoramiento de la balanza comercial y de pagos etc.), se comprenderá que todo el escenario es complejo y, como mínimo, difícil de controlar. No hay como la cláusula social ser muy efectiva en este entorno.

2.3 LA CLÁUSULA SOCIAL Y LOS BAJOS SALARIOS

Como señala Garcia (1999)²⁸⁶, tanto UE como AL y la OMC desarrollan sus acciones en una economía de mercado cuya principal característica es la prevalencia de las decisiones de los agentes privados en relación a la asignación de recursos. Estos agentes buscan maximizar sus beneficios, aunque para lograr el liderazgo en costes tiendan muchas veces a sobreexplotar la mano de obra (y cometan verdaderas atrocidades en relación a los trabajadores)²⁸⁷.

La cláusula social no ha logrado cambiar esta situación, evidentemente. Una de sus mayores fallas es no poder disciplinar, por absoluta imposibilidad técnica, los salarios practicados mundialmente. El *dumping* social supuestamente cometido por los PED está

²⁸⁵ Preocupación expresada, por ejemplo, en la Decisión de la Comisión de 2 de mayo de 2005 relativa a las medidas necesarias en relación con el obstáculo al comercio que constituyen las prácticas comerciales impuestas por Brasil al comercio de neumáticos recauchutados (considerando nº 6). DOUE de 21.05.2005 (L 128/71).

²⁸⁶ Garcia, F. J. (1999). Global Market and Human Rights: Trading Away the Human Rights Principle, *The Brooklyn Journal International Law*, 25, 51-70.

²⁸⁷ El Reglamento (CE) nº 1154/98 del Consejo de 25 de mayo de 1998 relativo a la aplicación de los regímenes especiales de estímulo a la protección de los derechos laborales y a la protección del medio ambiente previstos en los artículos 7 y 8 de los Reglamentos (CE) nos 3281/94 y 1256/96 relativos a la aplicación de los planes plurianuales de preferencias arancelarias generalizadas a determinados productos industriales y agrícolas originarios de países en vías de desarrollo es un ejemplo de fomento de la situación laboral en el ámbito de la Unión Europea.

esencialmente vinculado a los bajos salarios (Alben, 2001²⁸⁸ y Corden & Vousden, 2001²⁸⁹) pero, sobre este tema, ni mismo la OIT ha sido capaz de desarrollar un convenio pertinente, básicamente porque los salarios varían en función de las características económicas de cada país (el salario mínimo en un país es distinto del de otro)²⁹⁰. Sobre el tema, Chan (2003)²⁹¹ sostiene que los países no adoptan deliberadamente bajos patrones laborales para mejor competir en el mercado internacional, sino que esto es un reflejo de las economías caracterizadas por el exceso de mano-de-obra poco calificada.

El argumento es discutible, sin duda, pero el hecho es que no se puede fijar el mismo salario mínimo o interprofesional en Reino Unido y en Haití, por ejemplo. La propia OIT ha evitado entrar en esta tormentosa discusión. Si el salario pago es el mínimo legalmente permitido, no se puede afirmar que existe, solo por este aspecto, *dumping* social. Por más cláusula social que se incluya en un AC, poco se puede hacer sobre el incremento salarial hasta que el país logre un desarrollo económico que apalanque los salarios. Aun así, no existe ninguna garantía de que eso realmente ocurra, por las razones anteriormente expuestas²⁹².

²⁸⁸ Alben, E. (2001). GATT and the Fair Wage: A Historical Perspective on the Labor-Trade Link. *Columbia Law Review*, 1410-1447.

²⁸⁹ Corden, W. M. & Vousden, N. (2001). Paved with Good Intentions: Social Dumping and Raising Labour Standards in Developing Countries. *Globalization under threat*, 124-143.

²⁹⁰ Además, el modelo de producción puede ser intensivo de mano de obra o intensivo de capital, por ejemplo.

²⁹¹ Chan, A. (2003). Racing to the bottom: international trade without a social clause. *Third World Quarterly*, 24(6), 1011-1028.

²⁹² Muy interesante, en asunto correlacionado, las Conclusiones del Abogado General La Pergola presentadas el 12 de febrero de 1998. Sema Sürül contra Bundesanstalt für Arbeit. Petición de decisión prejudicial: Sozialgericht Aachen - Alemania. Acuerdo de asociación CEE-Turquía - Decisión del Consejo de Asociación - Seguridad Social - Principio de no discriminación por razón de nacionalidad - Efecto directo - Nacional turco autorizado a residir en un Estado miembro - Derecho a las prestaciones familiares en las mismas condiciones que los nacionales de este Estado. Asunto C-262/96.

No obstante, con el AC, el estado interesado en exportar con ventajas arancelarias sus productos al mercado interior de la UE sería estimulado a ratificar los principales instrumentos internacionales de protección de los DD.HH.L y a poner en práctica la tríplice obligación de respetar, proteger e implementar los DD.HH, lo que incluye tanto la actuación de los agentes públicos, como la supervisión y garantía de que los agentes privados también lo hagan.

Los PED asumen formalmente las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de DD.HH y de los convenios laborales de la OIT que ratifican pero, en la práctica, muchas veces, los gobiernos “miran para el otro lado” cuando las violaciones de esos derechos son cometidas por determinados agentes privados, especialmente por aquellos más ricos, poderosos y con buenos contactos en las altas esferas políticas. Al final, entre otras razones (a parte del clientelismo político y la corrupción), la exportación llevada a cabo por esas empresas ayudan a los gobiernos a equilibrar su balanza de pagos y su balanza comercial²⁹³ (Van Liemt, 1989)²⁹⁴. Una vez más se puede observar que la cláusula social no es muy eficaz en la práctica, por más que la UE, por razones históricas, políticas o filosóficas, insista en su incorporación en los acuerdos comerciales concluidos con los PED.

2.4 LA CLÁUSULA SOCIAL Y LOS VENCEDORES Y PERDEDORES DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Aunque la cláusula social incorpore valores universales que objetiven establecer estándares mínimamente dignos a todos los pueblos, el comercio internacional sigue presentando “vencedores y perdedores” (tanto estados como personas jurídicas y

²⁹³ La importancia se evidencia, por ejemplo, en el Documento de Trabajo de la Comisión sobre la evaluación de la calidad de los datos notificados por los Estados miembros en 2012 en relación con la balanza de pagos, el comercio internacional de servicios y las inversiones extranjeras directas /* COM/2013/0784 final */.

²⁹⁴ Van Liemt, G. (1989). Minimum labour standards and international trade: Would a social clause work. *Int'l Lab. Rev.*, 128, 433-472.

naturales), para emplear las expresiones de Guillén & Ontiveros (2012)²⁹⁵. De hecho, estos autores comentan que, según informes del Banco Mundial, el trabajador no calificado y de ingresos bajos o medios de los PD, corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo en el momento en que pasan a enfrentar una mayor competencia de los PED, con producciones de bajos costes. Si uno piensa en la condicionalidad de acceso al mercado asociada a la cláusula social, entonces hace sentido su inclusión en los acuerdos comerciales como forma de reducir ese potencial peligro a los trabajadores (y votantes) nacionales.

Según Gunter & Hoeven (2004)²⁹⁶, la dimensión social del comercio internacional aun hoy ocupa un plano secundario en el proceso de globalización (que parece conducir tanto a la liberalización de bienes, servicios y capital como a una nueva división internacional del trabajo en el mundo)²⁹⁷. No obstante, como persiste la idea, desde los acuerdos de *Brettons Woods*, de que el propio comercio liberalizado propiciará el desarrollo económico y social en los países, la situación sigue, de cierto modo, en *stand-by*.

Dentro de la OIT, la protección de los derechos laborales atiende a las peculiaridades de su tiempo. Cuando surgió, en 1919, existía en Europa una agitación social derivada del final de la Primera Guerra Mundial. La entidad ha plasmado esencialmente las reivindicaciones de los sectores reformistas del movimiento obrero europeo, base de la posterior socialdemocracia, y ha realizado una estratégica combinación con los intereses capitalistas de los estados. Al final, compartían un enemigo común: los bolcheviques. La protección social de los trabajadores funcionaría

²⁹⁵ Guillén, M. F. & Ontiveros, E. (2012). *Global Turning Points. Understanding the Challenges for Business in the 21st Century*. Philadelphia: Wharton School, University of Pennsylvania.

²⁹⁶ Gunter, B., & Hoeven, R. (2004). The social dimension of globalization: A review of the literature. *International Labour Review*, 143(1-2), 7-43.

²⁹⁷ La división internacional del trabajo no es una característica de la globalización o del multilateralismo consagrado por los PD. Es una característica propia de las interrelaciones entre países asimétricos. En un principio se podría decir que es el elemento distintivo del capitalismo pero la antigua URSS también había establecido, en la práctica, una división internacional entre los países que integraban en "Telón de Acero".

como una alternativa mucho menos radical a la instauración de una revolución en los moldes soviéticos. La división tripartita de la OIT era la mejor opción para abarcar a todos los legítimos actores involucrados: los trabajadores, los empleadores y los estados.

La política social europea después de la guerra contaba con la sindicalización creciente de los trabajadores y una política social activa por parte de los estados. La concesión de derechos a los trabajadores era necesaria para mantenerlos mínimamente satisfechos, pero no a punto de generar dificultades para el capital que, a estas alturas, fluía de un estado a otro. Este modelo ha permanecido incrustado en el seno europeo. La idea de concesión de derechos atendía a intereses específicos, no necesariamente altruistas.

¿Qué razones se tiene para creer que los países adoptan una postura realmente distinta en la actualidad? Siguen existiendo ganadores y perdedores en la SI y la cláusula social, por tras de la fachada ética y políticamente correcta, no parece ser suficientemente fuerte o hasta mismo idónea para cambiar esa situación, sea por la estructura del mercado, por los intereses involucrados o porqué ella misma es parte de un movimiento histórico tendiente a consolidar ciertas asimetrías económicas en las relaciones comerciales (función de barrera no arancelaria).

El incremento de las exportaciones manufactureras de los PED, de 20% en 1970 a 60% en 1990²⁹⁸, ha llevado a la antigua CE a restringir las importaciones desde esos países en virtud de la mayor competencia. No es coincidencia alguna que la cláusula social empezase a despuntar en este período. El problema era como la CE podía implementar eficazmente esa restricción, puesto que las grandes empresas europeas habían desplazado parte de su cadena de producción a esos países donde, mediante el uso de mano de obra barata y abundante (y muchas veces sobreexplotada) aumentaban su productividad e incrementaban sus beneficios económicos, parcialmente repatriados a los países sede.

²⁹⁸ Guillén, M. F. & Ontiveros, E. (2012). Obra citada.

Evidentemente, no se ha logrado el establecimiento de ningún acuerdo internacional para regular la conducta ética de las grandes corporaciones, de modo que, observa Charnovitz (1987)²⁹⁹, el movimiento sindical se ha reavivado otra vez, ahora con la iniciativa franco-estadounidense, con el fuerte deseo de que las autoridades gubernamentales lograsen la imposición de un límite legal a esa competencia directa que hacía peligrar los puestos de trabajo en EE.UU y CE. A partir de ese momento, la cláusula social, que ya encontraba un contexto histórico apropiado, pasa a incorporarse en las relaciones comerciales europeas con los PED.

Así, la función de la cláusula social de lograr en los PED los mismos estándares internacionales de DD.HH.L existentes en los PD no puede ser visto ingenuamente como un acto altruista o benevolente. Siguen existiendo, en términos de comercio internacional, los mismos intereses que antes. Es el proceso histórico. Las fuerzas profundas de Renouvin o el estructuralismo temporal de Braudel se notan aquí. Claro está que la plasmación de esos intereses en la cláusula social no ha sido bien recibida en AL, como se ha mencionado anteriormente. Básicamente:

- Los empleadores temían perder la competitividad de sus empresas, basada en el uso de una mano de obra barata abundantemente disponible;
- Los trabajadores temían perder sus empleos, caso los empleadores no pudiesen más “sobrexplotarlos”;
- El estado, que vinculaba su línea de desarrollo nacional a la producción y exportación (de bienes manufacturados, siempre que posible), tenía que asumir compromisos políticos y jurídicos (naturalmente, los instrumentos internacionales de DD.HH.L asociados a la cláusula social son jurídicamente vinculantes) lo que implicaba disminuir la “desviación de su mirada para el otro lado”, en los casos de

²⁹⁹ Charnovitz, S. (1987). Influence of International Labour Standards on the World Trading Regime-A Historical Overview, *The. Int'l Lab. Rev.*, 126, 565-586.

violación de DD.HH.L practicados por los agentes privados. De facto, en los acuerdos comerciales concluidos por la UE con los PED, la cláusula social suele tener el estatus de “fundamental”, o sea, es jurídicamente vinculante y su incumplimiento genera sanciones, aunque en la práctica la UE evite aplicarlas (Smith, 1998)³⁰⁰. Los tratados internacionales de DD.HH asociados a esa cláusula, por su vez, suelen establecer mecanismos de supervisión del cumplimiento de sus disposiciones. Esto significa que el PED, al firmar un AC con la UE, estará siendo doblemente supervisado, puesto que la propia UE también fija su control mediante misiones y elaboración de informes. Ante una situación como esa, el PED debe andar con cuidado para evitar el riesgo de perder el acceso al mercado único de la UE en condiciones comercialmente ventajosas, aunque la estructura de producción y el entorno del comercio internacional no sean apropiados para la promoción de los DD.HH.L.

2.5 LA CLÁUSULA SOCIAL Y EL MOVIMIENTO SOCIAL EUROPEO

La cláusula social no ha fraguado en la OMC (curiosamente ni mismo en el ámbito de la OIT se ha avanzado mucho). Todo lo que se refiere a la dimensión social del comercio ha sido sistemáticamente “empujado” desde la OMC hacia la OIT. No obstante, la OIT no posee un órgano similar al OSD de la OMC, capaz de emitir decisiones jurídicamente vinculantes, como señala Rodgers, Lee, Swepston & Van Daele (2009)³⁰¹. La proclividad hacia los PED (que había marcado la OMC en la primera mitad de los años noventa) no impidió que la cláusula social, en ese período histórico, mediante el balizamiento de estándares de protección de los DD.HH.L, plasmara los intereses del sindicalismo europeo en el marco bilateral, enfocado en la preservación de los puestos de trabajo locales (regionales).

³⁰⁰ Smith, K. E. (1998). The use of political conditionality in the EU's relations with third countries: How effective?. *European Foreign Affairs Review*, 3(2), 253-274.

³⁰¹ Rodgers, G., Lee, E., Swepston, L., & Van Daele, J. (2009). The International Labour Organization and the quest for social justice, 1919-2009.

Los sindicalistas europeos pugnaban la inclusión de la cláusula social en las relaciones comerciales con los PED no porque deseaban mejorar la situación de esos trabajadores, sino porque con su incorporación en los acuerdos, la cláusula social se convertiría en su escudo protector ante la competencia internacional.

Sin embargo, el rol proteccionista de la cláusula social no es técnicamente muy eficaz porque, como ha demostrado Göte (2010)³⁰², su inclusión en los acuerdos comerciales se centra esencialmente en la libertad de asociación de los trabajadores, algo que presenta una repercusión económica reducida en términos de costes de producción para la empresa en aquellos mercados donde abunda la oferta de mano de obra dispuesta a aceptar prácticamente cualquier condición laboral para sobrevivir. Un análisis atento deja claro que los temas laborales que mayor repercusión tienen sobre el precio final del producto, a saber, los salarios, las horas de trabajo, la salud y la seguridad de los trabajadores, están fuera del dominio de la cláusula social.

Históricamente la evolución del movimiento sindical europeo aporta interesantes luces sobre la cláusula social. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CISL), cuya fusión con la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) ha dado origen, en el 2006, a la Confederación Sindical Internacional (CSI), la central sindical más grande del mundo, ha buscado formar una base común alrededor de la cláusula social durante esos años. La estrecha relación con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), fundada en 1973, ha fortalecido el posicionamiento que los sindicalistas europeos tenían sobre el establecimiento de normas laborales básicas para todos los trabajadores, independientemente del país de su ubicación. Conforme se avanzaba en el proceso de integración europea, la CES también aumentaría su influencia sobre las políticas económicas, sociales y de empleo de los países miembros.

³⁰² Hansson, G. (2010). *Labour Standards, Development and Trade*. Londres: Routledge.

Aunque la cláusula social se tenga concretizado en Europa, en el ámbito del sistema multilateral de comercio no. Adamy (1994)³⁰³ recuerda que luego al inicio de la Ronda Uruguay, en 1986, el ex presidente estadounidense Ronald Regan ha llegado a proponer su inclusión, pero la iniciativa no ha prosperado. De cualquier forma, el tema ha asumido singular importancia durante las negociaciones del NAFTA (French & Cowie, 1995)³⁰⁴. La CE, por otro lado, ha absorbido esa idea, combinándola con las que su propia historia, sus experiencias internacionales y sus movimientos sindicales fermentaban.

Así, de una iniciativa relevante, pero marginal, la cláusula social se ha consagrado definitivamente, encontrando espacio en el instrumental jurídico comunitario (v.g. Resolución del Parlamento Europeo sobre la cláusula de DD.HH y democracia en los acuerdos de la UE, de 14 de febrero de 2006; Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre los DD.HH y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales).

A propósito, en la última resolución mencionada (25.11.2010), en sus apartados nº 54 y 55, el Parlamento Europeo expresamente pide que todas las relaciones contractuales con terceros países, tanto industrializados como en desarrollo, e incluso los acuerdos sectoriales, comerciales y de asistencia técnica o financiera, incluyan sin excepción cláusulas vinculantes formuladas claramente sobre DD.HH y democracia, además de exhortar a la Comisión a que garantice una aplicación más estricta de estas cláusulas y que no dude en utilizar el mecanismo de suspensión para los acuerdos vigentes cuando se violen repetidamente las cláusulas sobre DD.HH.

El Parlamento, en la realidad, hace años que señala su interés por la inclusión de capítulos exhaustivos sobre DD.HH, asuntos sociales y temas medioambientales en los

³⁰³ Adamy, W. (1994). International Trade and Social Standards, *Intereconomics* nº 29, 11-12/1994, 269-277.

³⁰⁴ French, J. D. & Cowie, J. R. (1995). *Labor and NAFTA: A Briefing Book*. Durham: The Duke-UNC Program in Latin American Studies.

acuerdos de libre comercio así como la constitución de un claro mecanismo de resolución de conflictos que contemple sanciones pecuniarias y suspensión de las ventajas comerciales otorgadas en caso de infracción grave de normas laborales y medioambientales.

En este sentido, pugna por el refuerzo de los mecanismos de supervisión y aplicación del SPG, con especial atención para la modalidad SPG *Plus* y, en el ámbito privado, que la responsabilidad social corporativa de las empresas europeas que operan en países con un sistema institucional débil tengan un carácter vinculante. A propósito, como señalan Poyatos & Gámez (2015)³⁰⁵, en el Libro Verde de la UE “Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las Organizaciones”, existen dos dimensiones de la responsabilidad social de la empresa: a) la interna (salud y seguridad en el lugar de trabajo, adaptación al cambio, gestión del impacto medioambiental, gestión de recursos humanos) y b) la externa (problemas ecológicos mundiales, DD.HH, socios comerciales, proveedores y consumidores, comunidades locales).

A pesar de los esfuerzos, la preocupación primordial sigue siendo de naturaleza económica. Las intervenciones realizadas en el Parlamento Europeo enfocan el tema económico con abrumadora frecuencia. Así, solamente para citar un ejemplo, se podría aludir a la Pregunta Escrita P-0302/04 (2004/C 88 E/0505), formulada por Christa Randzio-Plath (PSE) a la Comisión el 2 de febrero de 2004 en el asunto “Condiciones laborales de las trabajadoras del sector de la floricultura en África, Asia y América Latina” sobre la precariedad laboral y la violación de los DD.HH y la posibilidad de reacción política y comercial de la OMC y de la propia UE. La respuesta del Sr. Lamy, en nombre de la Comisión (1 de marzo de 2004) señaló explícitamente que el uso de regímenes arancelarios y preferenciales como el SPG para fomentar el comercio de mercancías cuyas condiciones de producción sean preferibles, plantea dificultades técnicas y políticas:

³⁰⁵ Poyatos, R. P., & Gámez, M. D. M. V. (2015). La responsabilidad social corporativa: especial referencia a la gestión de derechos humanos. *Iniciación a la Investigación*, (1).

- Dificultad técnica: que el producto puede ser indistinguible de otro cuyas condiciones de producción infringen las normas que la UE pretende promover (aplicación del gravamen correspondiente por las autoridades aduaneras);
- Dificultad política: inexistencia de un acuerdo entre los miembros de la OMC sobre la legitimidad de privilegiar un producto en función de su proceso de producción.

De este modo, los países soberanos se reservan la prerrogativa de elegir y aplicar sus propios regímenes sociales y medioambientales³⁰⁶ (o, en el caso del SPG, señalar los instrumentos jurídicos internacionales que consideren apropiados para otorgar esa protección). Naturalmente, la UE no puede establecer condiciones fuera de sus propias fronteras, de modo que todo debe ser pactado entre los socios comerciales (UE-PED).

Para la Comisión Europea, todos los miembros de la OMC conservan la potestad de discriminar positivamente a las mercancías producidas y comerciadas de forma justa. En cada AC negociado por la UE con un PED, se procede a una evaluación del impacto sobre la sostenibilidad para estimar los efectos potenciales sobre las economías, el desarrollo social y el medio ambiente (con particular atención a la igualdad de género, la pobreza y la sanidad).

Sin embargo, señala French (1996)³⁰⁷, al fin y al cabo, no se ha realizado realmente ningún análisis económico escrupuloso del impacto de la cláusula social. Las reglas mínimas, aunque solamente sean las de naturaleza laboral, no han sido convenientemente apreciadas por el bloque europeo en lo que concierne a su impacto

³⁰⁶ En el campo medioambiental cabe destacar el reciente Acuerdo de París (12.12.2015), adoptado dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

³⁰⁷ French, J. D. (1996). Será a Cláusula Social do GATT/OMC um Pesadelo, um Santo Graal ou uma Ilusão Fútil? Procurando Garantias Vinculadas ao Comércio dos Direitos Internacionais dos Trabalhadores, en S. Portela, I. Rodrigues, T. Vigevani y H. Zylberstajn, *Processos de Integração Regional e as Respostas da Sociedade: O Sindicalismo na Argentina, Brasil, México e Venezuela*. Río de Janeiro: Paz e Terra.

sobre las poblaciones de los PED. Por esta razón, Großmann & Koopmann (1994)³⁰⁸ acreditan que la incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales ha asumido un rol, en función de la convergencia y repercusión de diferentes acontecimientos históricos, que resalta casi que por inercia las reivindicaciones del movimiento sindical europeo.

Así que, en términos políticos, la cláusula social ha ganado un peso inusitado. De una propuesta marginal hasta convertirse en un condicionante esencial de las relaciones comerciales de la UE con terceros países la transformación ha sido impresionante. Considerando que la política exterior de la UE proclama la difusión de valores fundamentales como la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el libre comercio, la regionalización, la dignidad humana, la igualdad y la solidaridad, la paz, la gestión de la globalización, la justicia en las relaciones internacionales y la regulación del multilateralismo como marco de relación entre los estados (Aldecoa Luzárraga, 2002³⁰⁹, 2005³¹⁰ y 2008³¹¹), la actual connotación atribuida por la UE parece ser la definitiva, aunque el bloque no parece realizar realmente un análisis serio de todas las implicaciones que eso conlleva. En una obra ya antigua, Hansson (1983)³¹² ya señalaba las deficiencias de análisis en la inclusión de la cláusula social en el ámbito de los acuerdos comerciales no recíprocos.

³⁰⁸ Großmann, H. & Koopmann, G. (1994). Minimum Social Standards for International Trade, *Intereconomics* 29 (11-12), 277-283.

³⁰⁹ Aldecoa Luzárraga, F. (2002). *La integración europea. Génesis y desarrollo de la Unión Europea (1979-2002)*. Madrid, Tecnos. Sobre el tema, vid Iglesias Vázquez, M. A. & Santaella Alonso, M. (2009). El Tratado de Lisboa en el Proceso de Evolución de la Unión Europea y del Derecho Europeo, *Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social* nº 21, 1-28 y, de los mismos autores, Iglesias Vázquez, M. A. & Santaella Alonso, M. (2004). Elementos e Instituciones de la Unión Europea. *Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*.

³¹⁰ Aldecoa Luzárraga, F. (2005). La política exterior común y el proceso constitucional, *Revista de derecho de la Unión Europea* nº 9, 19-37.

³¹¹ Aldecoa Luzárraga, F. & Guinea Lorente, M. (2008). El rescate sustancial de la Constitución Europea a través del Tratado de Lisboa: la salida del laberinto. *Documentos de Trabajo (Real Instituto Encano de Estudios Internacionales y Estratégicos)*, nº 9, 1-32.

³¹² Hansson, G. (1983). *Social Clauses and International Trade: An Economic Analysis of Labor Standards in Trade Policy*. New York: St. Martin's Press.

La cláusula social, rechazada por tantos trabajadores en las sociedades latinoamericanas, se ha convertido en una especie de núcleo duro de la política exterior de la UE, un verdadero canal de difusión por el mundo de sus valores más relevantes. En la práctica, la encarnación de esos ideales en la cláusula social sugiere que la UE puede, políticamente, demostrar su conformidad o disconformidad ante determinadas situaciones existentes en terceros países. No se trata de una presión legal, puesto que los países latinoamericanos son soberanos, pero de una presión político-económica. Es posible argumentar que se trata solamente de un estímulo para que esos países asuman sus obligaciones jurídicas de respetar, proteger e implementar los DD.HH pero, en la práctica, en función de la interconexión económica existente entre los países y la necesidad de llevar a cabo sus proyectos nacionales de desarrollo económico basados en el reemplazo progresivo de la importación por la exportación, acceder al mercado interior de la UE es una necesidad casi vital para varios PED.

2.6 LA CLÁUSULA SOCIAL Y LA CONCEPCIÓN JURÍDICA LATINOAMERICANA

El condicionamiento de cualquier tipo de beneficio (acceso al mercado, rebajas arancelarias etc.) al cumplimiento de determinados estándares de protección de los DD.HH.L proyecta en AL una imagen de la UE que puede no corresponder aquella que el bloque europeo desea.

La experiencia profesional de este investigador señala que en algunos segmentos sociales latinoamericanos³¹³ la imagen de la UE no es necesariamente la de guardián de los valores más caros de nuestra civilización. La verdad es que todo depende del rol ocupado por el observador.

³¹³ Considerados en su conjunto.

En AL, parte de la población civil y del empresariado sigue repitiendo la idea señalada por Mainhold (1995)³¹⁴, de que la incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales simplemente revela una forma (quizá más sofisticada) de neocolonialismo llevada a cabo por la UE. No obstante, la condicionalidad revelada por la cláusula social es un medio para que la UE logre que los PED asuman sus obligaciones y no violen a los DD.HH.L básicos. Caso no acepten esta condición, dejarían de beneficiarse de las facilidades comerciales otorgadas en su acceso al mercado único.

Este sobredimensionamiento de los DD.HH en el ámbito comercial internacional, no obstante, es algo relativamente reciente en el ámbito europeo. Según Smith (1998)³¹⁵, en los años setenta del siglo pasado, la Comisión Europea no llegaba siquiera a posicionarse a favor del condicionamiento político vinculado a los tratados comerciales concluidos con los PED. En este campo, el Parlamento Europeo ha jugado un papel importante a partir de las elecciones de 1979 en lo que se refiere a los DD.HH hasta cristalizarlos como un valor fundamental directa y lógicamente derivado del propio desarrollo histórico de la integración europea, de sus movimientos internos y de sus experiencias internacionales.

La defensa de los DD.HH, de la democracia y del estado de derecho, su avanzado proceso de integración regional y la resolución pacífica de los conflictos deberían cumplir una función de distinción de la UE en AL. Su imagen ideal debería ser la de un socio fiable e interesado en el desarrollo socioeconómico de toda la región. Por eso, su disputa comercial con China y EE.UU por el mercado latinoamericano, acrecido de la cláusula social, no termina de convencer a ciertos segmentos sociales de esa región.

³¹⁴ Mainhold, G. & Sole, V. (1995). *La Cláusula Social: ¿una estrategia sindical ante la liberalización comercial?* San José de Costa Rica: Fundación Friedrich Ebert.

³¹⁵ Smith, K. E. (1998). The Use of Political Conditionality in the EU's Relations with Third Countries: How effective?, *European Foreign Affairs Review*, 3, 253-274.

Paralelamente, existen iniciativas destacables para mejorar su imagen. Por ejemplo, el apoyo de la UE a los procesos de integración regional como el Mercosur (dentro del marco de respeto por los DD.HH³¹⁶, la democracia y el estado de derecho) posee un significado positivo. Lo mismo ocurre con los diálogos políticos (v.g. Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de septiembre de 2007, sobre el funcionamiento de los diálogos en materia de DD.HH y de las consultas sobre DD.HH con terceros países (2007/2001(INI))³¹⁷.

Por otro lado, importa considerar el decrecimiento de la posición comercial de la UE en los mercados latinoamericanos. Hace treinta años, los EE.UU representaban el 60% de los flujos comerciales de AL y el bloque europeo el 25%. En 2013, EE.UU representaban el 40% y la UE el 14% (Guillén, 2014)³¹⁸.

Esta reducción del comercio con AL es obviamente preocupante, especialmente ahora en que la Eurozona aún no se ha recuperado de la crisis económica³¹⁹. No solo las economías más dinámicas de AL³²⁰, como Brasil, Perú, Chile y Colombia están apostando por el mercado asiático, especialmente China (Chile, México y Perú son miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: APEC)³²¹ como también se ha verificado a lo largo de los años una creciente concentración de las relaciones

³¹⁶ El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “Hacia un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur: la contribución de la sociedad civil organizada” es un documento interesante para ser consultado. DOUE de 25.11.2011 (C248/55).

³¹⁷ Sería importante reforzar la idea de que la cláusula social es coherente con toda la acción de la UE en los ámbitos interno y externo, no una jugada estratégica para dificultar comercialmente a los países latinoamericanos. A propósito, eso sería aparentemente una incongruencia, puesto que la UE es su mayor donante e inversor directo en el mundo.

³¹⁸ Guillén, M. F. (2014). Curso Analyzing Global Trends for Business and Society. Wharton School, University of Pennsylvania. Apuntes personales.

³¹⁹ La triple devaluación del *yuan* por parte del gobierno chino en el mes de agosto de 2015 tendrá repercusiones relevantes en la retomada del crecimiento económico de la UE para los años 2015 (segundo semestre) y siguientes.

³²⁰ Actualmente en proceso de desaceleración económica.

³²¹ Además, Chile, Colombia, México y Perú también participan de la Alianza del Pacífico.

comerciales entre los propios miembros de la UE. Además, con el fin de la bipolaridad EE.UU-URSS y la reducción de la influencia estadounidense, la multipolaridad que se siguió permitió que los países latinoamericanos pudiesen aumentar su participación en el comercio internacional (y entre ellos, en el marco de los esquemas Sur-Sur)³²².

Hace varios años que la UE emite claras señales de que está dispuesta a participar activamente en el proceso de construcción y consolidación de los DD.HH, del estado de derecho y de la democracia en el mundo (mediante la cláusula social, esos valores son plasmados en las relaciones comerciales, aunque su eficacia real es cuestionable en la práctica, como se ha explicado en los apartados anteriores).

Un caso que merece especial atención es el del Mercosur. Existen aquí varios temas peliagudos como, por ejemplo, el de Venezuela, que se ha incorporado al bloque en el año 2012, luego después de la suspensión de Paraguay, que se oponía al ingreso del país. Además del problema de los DD.HH y de la cuestionable democracia en Venezuela, que no es bien visto en la UE (“la censura e la negazione del diritto di espressione e della libertà di stampa costituiscono violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo, in particolare degli articoli 57 e 58 della costituzione venezuelana”. Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002717/14 alla Commissione. Oreste Rossi (PPE) e Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE): 7 de marzo 2014 o la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2010)³²³, existe también el

³²² La constitución de bloques dotados de personalidad jurídica internacional asume un rol importante en esta relación Sur-Sur, aunque no exclusiva. Mercosur, por ejemplo, tiene su personalidad internacional atribuida por el Protocolo de Ouro Preto. Es interesante observar, aunque este no sea el tema de la investigación, que los países de renta media como Brasil, México, Colombia (en menor medida) y principalmente Venezuela (actual líder regional) están cada vez más presentes en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Fuente de la última observación: DataméricaGlobal: Venezuela, gran donante de renta media. Política Exterior, Real Instituto Encano y Flacso España, 09.12.2015, recuperado de <http://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/datamericaglobal-venezuela-gran-donante-de-renta-media/>

³²³ DOUE de 16.12.2010 (CE 341/69).

rechazo venezolano a la conclusión de acuerdos de libre comercio entre el Norte y el Sur³²⁴.

Si fuera posible destacar cuatro problemas básicos que la UE enfrenta en sus relaciones con AL, se podría señalar: a) el fracaso rotundo en las negociaciones comerciales con el Mercosur³²⁵, b) la creciente presencia de China³²⁶ en AL (Granell Trías, 2015)³²⁷, c) la crisis económica de la UE, especialmente de la Eurozona³²⁸, d) la erosión de la “marca Europa” en función de sus respuestas a las crisis internacionales³²⁹. El resultado de esa conjunción de factores ha sido una menor visibilidad y presencia de la UE en AL, algo que la apuesta por los DD.HH, la democracia y el estado de derecho en la región podría intentar revertir.

El acercamiento de la UE a diferentes países y subregiones latinoamericanas, mediante la conclusión de acuerdos comerciales bilaterales o el otorgamiento de ventajas dentro del esquema SPG, ayudaría a evitar la difusión excesiva de intereses que existe en una ronda multilateral y a fortalecer, a pesar de los EE.UU y de China, su presencia en la región (Devlin, Estevadeordal & Rodríguez, 2006)³³⁰.

³²⁴ No obstante, ver la Decisión del Consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la celebración del Acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros, la República de Bolivia, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República del Perú y la República de Venezuela.

³²⁵ Que se espera sea reactivado con el nuevo gobierno de Macri en Argentina.

³²⁶ En este momento en proceso de desaceleración económica.

³²⁷ Granell Trías, F. (2015). El Sistema Económico Internacional en 2015. Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española nº 3071, 3-18. El autor recuerda que en 2015 se ha institucionalizado el diálogo entre China y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe.

³²⁸ Con perspectivas aparentemente menos sombrías en 2016 que en los años anteriores de la crisis.

³²⁹ La más reciente la de los refugiados.

³³⁰ Para profundizar el tema recomiendo: Devlin, R., Estevadeordal, A., & Rodríguez, A. (2006). *The Emergence of China: Opportunities and Challenges for Latin America and the Caribbean*. IDB.

Claro está que el proceso no es sencillo. Por ejemplo, la asociación estratégica con Brasil³³¹ no ha ayudado a la UE a avanzar en sus negociaciones con el Mercosur (antes el problema principal era Paraguay y ahora es Venezuela). Es posible que en AL esos acuerdos estratégicos no agraden a todos los gobiernos puesto que transmiten la sensación de que unos países son más especiales o merecedores de atención que otros (países “más estratégicos” y “menos estratégicos”).

Fuera del marco multilateral de la OMC, el acercamiento comercial en nivel bilateral proporciona un mayor conocimiento de las singularidades de cada país o subregión (por ejemplo, Centroamérica o Comunidad Andina) y permite un incremento potencial de la presencia de la UE en nivel político y económico. Por otro lado, también se configura en AL una tendencia de acercamiento entre los propios países que, en un futuro aún incierto, puede quizá brindar menor permeabilidad a la presencia europea en la región.

Los ABC y la posibilidad de acceder al mercado interior europeo proporcionan, sin embargo, una opción interesante para superar ciertas resistencias habitualmente presentes en las negociaciones internacionales. Aquí la asimetría juega mucho a favor de la UE, especialmente en relación a los países latinoamericanos con economías menores.

Este tipo de enfoque podría transmitir la señal, quizá, de un apoyo menos decisivo a los procesos de integración llevados a cabo en AL, justamente cuando se avanza en

³³¹ Considerando apartado H, nº 1, letra “e”: *que los temas prioritarios de la agenda política de la Asociación Estratégica comprendan el fomento de estrategias comunes para hacer frente a los desafíos mundiales, incluidas, entre otras cosas, la paz y la seguridad, la democracia y los derechos humanos, el cambio climático, la crisis financiera, la diversidad biológica, la seguridad energética, el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza y la exclusión* y letra “i”: *que la Asociación Estratégica sea una herramienta para la promoción de la democracia y los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza a escala mundial, y que los socios cooperen en mayor medida en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover los derechos humanos a escala mundial.*

procesos de coordinación política como UNASUR y CELAC³³². Cómo compatibilizar los intereses comerciales y económicos con la promoción de los DD.HH en un entorno poco propicio (estructura y funcionamiento del mercado) es complicado. Establecer una imagen diferenciada, desvinculada del imperialismo, cuando en AL se interpreta la cláusula social como una barrera no arancelaria también.

2.7 DERECHOS HUMANOS Y ECONOMÍA DE MERCADO

Como se ha visto anteriormente, los países latinoamericanos, en relación a los cuales la UE busca promover los DD.HH, la democracia y el estado de derecho (valores fundamentales en su política exterior), actúan en el marco de una economía de mercado³³³, que es la que la UE pugna en todo el mundo, en consonancia con los principios rectores de la OMC.

Esto significa, en términos jurídicos, que en ambos lados del Atlántico, los beneficios económicos de las empresas están basados en el respeto por la propiedad. Con efecto, los derechos de propiedad cumplen esta función al estimular, mediante la aplicación de sanciones diversas, el respeto a todas sus formas: protección de la propiedad industrial e intelectual, prohibición de la competencia desleal etc. Esta es una de las razones porqué la UE tiene una preocupación tan elevada en relación a la

³³² La presencia individual de España, Alemania y Reino Unido está, de cierta forma, anulando la pretensión de una presencia homogénea y al debilitamiento del perfil político de la UE en AL. Una visión profunda sobre el tema puede ser encontrada en: Sanahuja, J. A. (2013). La Unión Europea y el regionalismo latinoamericano: un balance. *Investigación & Desarrollo*, 21(1), 156-184.

³³³ Tratado de la UE, art. 3.3: *La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico». El Comité insiste en que debe garantizarse un alto nivel de protección de los consumidores; Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Hacia un Acta del Mercado Único — Por una economía social de mercado altamente competitiva — Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos* (DOUE de 03.05.2011 - C 132/47).

protección jurídica de sus empresas, muchas de ellas con economías de escala y competitivas.

La falta de protección y seguridad jurídica para sus empresas e inversiones³³⁴ ha llevado a la postergación de varios acuerdos comerciales entre UE y AL. No obstante, esta no es la única razón. La insuficiente protección legal de los DD.HH.L también dificulta la conclusión de acuerdos comerciales.

En este sentido, la UE insiste reiteradamente en este tema. El Parlamento Europeo es muy incisivo en asociar compromisos políticos y protección efectiva de los DD.HH.L con el comercio bilateral, cuya interconexión ha surgido por la presión sindical y gubernamental de ciertos países europeos que señalaban la precariedad laboral de los trabajadores latinoamericanos (bajos salarios, jornadas de trabajo más largas etc.) como un serio riesgo para los puestos de trabajo en Europa. Hasta hoy la UE declara que no acepta la precarización de las condiciones de vida y laborales como ventaja competitiva para las empresas de los PED³³⁵.

Cómo los países latinoamericanos encaran los valores plasmados en la cláusula social es algo confuso. En el capítulo pertinente se verá que AL, en general, a pesar de tantos problemas, está apostando por la consagración de los DD.HH.

¿Entonces, por qué este aparente conflicto? Parece existir cierta disensión entre lo que aceptan y/o desean gobiernos y parte de la sociedad y lo que agradan o molestan al

³³⁴ Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea (2012/2619(RSP)). DOUE de 20.04.2012 (C 258 E/84).

³³⁵ Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “La cohesión social en América Latina y el Caribe”, apartado 3.2.8.2: *constata, entre 1990 y 2002, una fuerte tendencia a la informalización del empleo (siete de cada diez empleos generados desde 1990 lo han sido en el sector informal y el empleo informal representa el 46,3 % del empleo total de América Latina) y a la precarización laboral: sólo seis de cada diez empleos nuevos en el sector formal y dos de cada diez en el sector informal tienen acceso a algún tipo de cobertura social. Se estima que existe un déficit de «trabajo decente»- para 93 millones de trabajadores, 30 millones más que en 1990, de ALC (con ello se hace referencia a ese 50,5 % de la población activa que no tiene empleo, trabaja en el sector informal o a los que, trabajando en el sector formal de la economía, lo hacen sin prestaciones sociales o en condiciones muy precarias).* DOUE de 30.04.2004 (C 110/55).

sector empresarial e industrial. El rechazo hacia la cláusula social se asocia a la reducción de competitividad del sector productivo (esto se verifica especialmente en zonas menos controladas por el estado). Existe un crisol donde encontramos supervivencia empresarial, explotación de trabajadores, malas intenciones, ambiciones, corrupción, falta de fiscalización de los respectivos gobiernos, tributación excesiva, normas laborales complicadas de cumplirse, burocracia exagerada etc. pero también, necesidad de llevar adelante empresas y exportaciones. Ni todos son malos y ni todos son buenos.

Sin embargo, por estar en una economía de mercado, también promovida por la UE y las grandes instituciones internacionales como la OMC, el FMI y el GBM, los agentes privados tienen un peso muy importante. Cómo se sabe, estos agentes buscan maximizar sus beneficios económicos. Los países latinoamericanos, aunque persigan, en mayor o menor grado, los DD.HH.L – y son estimulados a ratificar los tratados pertinentes en función de la cláusula social incorporada en los acuerdos comerciales concluidos con la UE, también tienen interés a que sus empresas ganen en competitividad, especialmente si, mediante las exportaciones, pueden ayudar al estado a equilibrar su balanza comercial y de pagos. García-Castrillón (2016)³³⁶ señala la conveniencia de introducir en las normas internas la exigencia a las empresas del cumplimiento de los estándares que consideren oportunos en materia de DD.HH., puesto que los legisladores nacionales no tienen competencia para decidir quiénes son o no sujetos de Derecho Internacional (sobre los cuáles inciden directamente las normas internacionales de protección de los DD.HH).

Esto significa que, muchas veces, en la práctica, los estados desvían la mirada sobre la precarización de las condiciones de vida y laborales de sus súbditos, aunque cada vez más opten formalmente por la consagración de los DD.HH.L y por la asunción de sus tres obligaciones básicas: respetarlos, protegerlos e implementarlos (los estados jurídicamente lo hacen mediante la edición de normas legales y la ratificación de tratados internacionales pertinentes).

³³⁶ García Castrillón, C. O. (2016). *Op. cit.*

La UE busca estimular esas ratificaciones acoplando en sus acuerdos comerciales la condicionalidad de acceso plasmada en la “cláusula social”. Esta cláusula expresa un conjunto de instrumentos internacionales multilaterales, de amplia aceptación en la SI, que actúa como un elemento condicionante para los países latinoamericanos deseosos de exportar sus productos al mercado único europeo³³⁷. Empero, ¿por qué tanto interés europeo en AL desde mediados de los años noventa? La respuesta es demasiado amplia y compleja, de modo que solamente se señalará una dimensión económica, especialmente interesante.

Según Guillén & Ontiveros (2012)³³⁸, 38,4% de la riqueza mundial provenía, en 1980, del comercio internacional, al paso que en 2010 señalaban el 56%. El comercio asume un rol relevante para el PIB de la UE³³⁹. Los mayores mercados de consumo, actualmente, son UE y EE.UU, aunque en 2034, según la inmensa mayoría de los economistas, serán China e India. Interesa exportar para esos países, interesa exportar para AL o para cualquier país que pueda comprar los bienes y servicios europeos. Para eso, es necesario expandir por todos los rincones del planeta la idea de economía de mercado, con todos los elementos correlacionados: libre comercio, libre competencia etc. (en una palabra, “globalización”: en su concepto se comprende el incremento de los

³³⁷ El objetivo de promover los derechos humanos y la democracia, por parte de la UE, se extiende por todo el mundo. UE es un actor global. Para poder crecer y consolidar su posición de *global player* de modo más eficiente, es necesario que exista coherencia con los valores plasmados en su política exterior. Nada parece mejor que la legitimidad conferida por la consagración y fomento, por todo el mundo, de los derechos humanos y la democracia. Los derechos humanos y el comercio son importantes para la UE y para el crecimiento y la estabilidad del sistema internacional en general. La expansión del comercio es un indicador correlato a la globalización. Su medición, tanto en UE como en AL, toma en cuenta las exportaciones más las importaciones de bienes y servicios, dividido por el tamaño de la economía global en diferentes puntos del tiempo.

³³⁸ Guillén, M. F. & Ontiveros, E. (2012). *Global Turning Points. Understanding the Challenges for Business in the 21st Century*. Philadelphia: Wharton School, University of Pennsylvania.

³³⁹ El PIB corresponde al valor total, normalmente expresada en euros o dólares, de los bienes y servicios producidos en una economía durante un año determinado. Del PIB participan hogares, empresas, instituciones financieras y gobiernos. El volumen de préstamo prácticamente ha duplicado en el período 1985-2010 (de 0.27% a 0.48%) según el FMI. Fondo Monetario Internacional, recuperado de <http://www.imf.org/external/pub/ft/wp/2011/wp1174.pdf>

flujos de bienes, servicios, dinero, trabajo³⁴⁰ e informaciones). Sobre la cooperación para el desarrollo, en el contexto actual, es especialmente interesante el trabajo de Granell Trías (2011)³⁴¹ y de Sotillo Lorenzo (2015)³⁴².

Comercio internacional, inversiones y actuación de empresas multinacionales son facetas interrelacionadas de un mismo fenómeno (globalización) que repercute en las decisiones de la UE en acercarse a determinados mercados. Además, como elementos negativos, se podría mencionar que la crisis que afecta a Argentina, Brasil y Venezuela repercute en la perspectiva económica de la región y b) AL presenta ventaja comparativa justamente en uno de los sectores más sensibles y protegidos de la UE: la agricultura³⁴³.

Más que un equilibrio idílico entre las partes (UE-AL), lo que existe en el comercio internacional es estabilidad. Como ha señalado Guillén, la balanza no está realmente equilibrada, existen ganadores y perdedores en las relaciones comerciales, noción hasta cierto punto distinta de la sostenida por las dos teorías clásicas basadas en la especialización productiva (teoría de la ventaja comparativa absoluta y teoría de la ventaja comparativa relativa).

Sobre este tema, conviene señalar que Adam Smith (2008)³⁴⁴, al afirmar la *ventaja comparativa absoluta*, pugnaba que los países deberían adquirir bienes y servicios

³⁴⁰ De todos los elementos mencionados, el trabajo es, con mucha diferencia, lo que más sufre limitaciones.

³⁴¹ Granell Trías, F. (2011). La evolución de la cooperación europea para el desarrollo. *Revista española de desarrollo y cooperación* nº 27 (Ejemplar dedicado a: 25 aniversario del Magíster en Cooperación Internacional), 59-73

³⁴² Sotillo Lorenzo, J. A. (2015). *La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible*, Catarata/Universidad Complutense de Madrid, Madrid. Una obra fundamental sobre el tema del desarrollo es: Sotillo Lorenzo, J. A. (2015, dir.). *Antología del Desarrollo*, Catarata/Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación-Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

³⁴³ La agricultura absorbe más del 50% del presupuesto de la UE.

³⁴⁴ Smith, A. (2008). *Riqueza das Nações*. Curitiba: Hemus.

producidos en otros países (en vez de producirlos ellos mismos) si eso representase menor dispendio de recursos económicos. En otras palabras, los países deberían priorizar aquellos sectores que presentasen mayor productividad o eficiencia. La especialización productiva está directamente relacionada con la eficiencia en el uso de los recursos: esto se verifica tanto si el país necesita menos tiempo para producir una unidad del bien como menos recursos para producir la misma o superior cantidad de bienes que los demás países. Eso conduciría a un problema trascendental en el ámbito de las relaciones comerciales UE-AL. Si tomamos como referencia la agricultura, se percibe que AL goza de mayores ventajas comparativas en su producción que UE (por razones de clima, días de exposición al sol por año, calidad de la tierra, mano de obra abundante y barata etc.). ¿Debería la UE dejar de proteger a sus productores? ¿Sería eso viable o factible económica y políticamente?

Esta teoría ha sido criticada porque los países con claras ventajas productivas en relación a los demás, en muchos sectores, no cierran sus mercados, sino que, simultáneamente, mantienen su comercio internacional y presentan especialización sectorial. De igual manera, pero a la inversa, los países que presentan desventajas absolutas siguen su especialización en determinados bienes.

Uno de los más importantes críticos de Adam Smith fue David Ricardo (2003)³⁴⁵, que en 1819 proclamó su teoría de la *ventaja comparativa relativa*, enfocando la teoría original de Adam Smith bajo la perspectiva de lo que cada país tendría de menos desventajoso para producir (aquello que cada país es capaz de hacer comparativamente mejor). Fundamentalmente, cada país tendría ventajas mayores o menores, o desventajas mayores o menores en relación a otros países, de modo que debería especializarse en aquellas actividades que presentase mayor ventaja o menor desventaja.

En otros términos, el país debería producir aquello en que presenta ventaja y adquirir en el mercado internacional aquello en que presenta desventaja (que, bajo la perspectiva de Ricardo, no debería ser producido nacionalmente). De esta manera, todos

³⁴⁵ Ricardo, D. (2003). *Principios de economía política y tributación*. Madrid: Ediciones Pirámide.

los países incrementarían su cesta de consumo y lograrían un mayor nivel de bienestar social. En esta línea de racionamiento, si el país decide incrementar un sector productivo que presenta desventaja, tendría que reasignar factores de producción, especialmente capital, lo que conllevaría a costes sociales en el corto plazo (lo mismo ocurriría en relación al cierre de algunos sectores productivos).

De forma más ilustrativa:

La noción de ventaja absoluta como base para el comercio internacional (desarrollada por Adam Smith en su conocido libro “La riqueza de las naciones”, de 1776) consagraba una idea sencilla: un país que puede producir un bien “X” consumiendo menos recursos genéricos que otro (salarios, insumos, horas de trabajo etc.) suele tener una ventaja absoluta en la producción de ese bien.

Por ejemplo, el país “X”, gracias a sus suelos fértiles y su clima temperado, produce alimentos con menores costes que el país “Y”. Por su vez, este país (“Y”) suele producir, por ejemplo, petróleo con costes más bajos que varios otros países. Sin embargo, la producción de alimentos en su territorio es muy costoso por el suelo arenoso de sus extensos desiertos. En este sencillo ejemplo, se podría afirmar que el país “X” posee ventaja absoluta en la producción de alimentos en relación al país “Y” y que el país “Y” presenta ventaja absoluta en la producción de petróleo.

Otro ejemplo: “S” posee ventaja absoluta en la producción de aceite de oliva mientras “A” posee ventaja absoluta en la producción de vehículos de lujo o, en sentido contrario, “S” no posee ventaja absoluta en la producción de vehículos de alta gama y “A” no posee ventaja absoluta en la producción de aceite de oliva.

El problema es que la teoría de Adam Smith no logra explicar algunas situaciones relevantes y muy habituales. En el último ejemplo, “A” produce tanto alimentos como vehículos con menores costes que “C”. Para la teoría de la ventaja absoluta, no tendría ningún sentido para “A” negociar con cualquier país con una producción menos

eficiente que ella. No obstante, en la práctica comercial eso no ocurre: “A” no cerraría su mercado a los demás países, aunque sean menos eficientes que ella en la producción de bienes.

Para explicar ese patrón del flujo comercial, de modo quizá más astuto, surgió la teoría de las ventajas comparativas, desarrollada en 1819 por David Ricardo en un momento histórico en que Europa pretendía proteger sus mercados (y los puestos de trabajo asociados a sus sectores exportadores) de las importaciones estadounidenses mediante el establecimiento de cuotas y aranceles.

Para Ricardo, cada país se beneficiaría del comercio internacional si se especializara en la producción y exportación de aquellos bienes que consigue producir a un coste “relativamente” bajo. De forma recíproca, cada país también se beneficiaría con la importación de aquellos bienes cuya producción se realice con un coste “relativamente” elevado. ¿Como eso sería posible?

Imaginemos que en “E” se necesite 01 hora de trabajo para producir 01 unidad de alimento y 02 horas de trabajo para producir 01 unidad de ropa. Por otro lado, consideremos que en la “UE”, el coste de 01 unidad de alimento es de 03 horas de trabajo y de 04 horas de trabajo para una unidad de ropa. Aunque “E” goce de ventaja absoluta en ambos bienes (alimentos y ropas), la teoría ricardiana señala que su ventaja comparativa solamente ocurre en relación a la producción de alimentos. Por esta misma teoría, la ventaja comparativa de la “UE” solamente ocurriría en relación a la producción de ropas.

Eso ocurre porque el coste de producción de ropas es relativamente mayor en “E” (01 unidad de alimento costa la mitad de 01 unidad de ropa), mientras que el coste de producción de alimentos es relativamente mayor en la “UE” (01 unidad de alimento costa $\frac{3}{4}$ o 0.75 de 01 unidad de ropa). Si la “UE” intercambiase parte de las ropas que produce por parte de los alimentos producidos en “E”, ambos obtendrían ventajas.

Para que este tema se quede más claro, profundizaremos el ejemplo: con 900 horas de trabajo disponibles, “E” conseguiría producir 900 unidades de alimentos ($900/1 = 900$) o 450 unidades de ropas ($900/2 = 450$) mientras “UE”, con 900 horas, podría producir 300 unidades de alimentos ($900/3 = 300$) o 225 unidades de ropas ($900/4 = 225$).

Si la “UE” suspendiera su comercio con “E”, debería evitar consumir más que 300 unidades de alimentos o 225 unidades de ropas. Por otro lado, “UE” podría intercambiar las 225 unidades de ropa por las 450 unidades de alimento en “E” (porque la ropa costa el doble en términos de horas de trabajo en ese país), obteniendo un beneficio de 150 unidades de alimento adicionales (puesto que “UE”, con las 900 horas de trabajo, solamente conseguiría producir 300 unidades de alimentos). En lo que concierne a “E”, por ejemplo, las 100 unidades de alimentos vendidas a “UE” corresponderían a 75 unidades de ropa (no a las 50 unidades producidas en el ámbito doméstico), porque cada unidad de alimento costa $3/4$ o 0.75 de 01 unidad de ropa en “UE” (considerando, en nuestro ejemplo, como se ha visto, que el coste para producir en “UE” 01 unidad de alimento es de 3 horas y de 01 unidad de ropa es de 4 horas de trabajo) lo que significa que el beneficio neto de “E” será de 25 unidades de ropas (25 más que la producción nacional, que es de 50 unidades de ropa por cada 100 unidades de alimentos)³⁴⁶.

Así, bajo la perspectiva de las ventajas comparativas, tanto “UE” (como cualquier país) podría beneficiarse del comercio internacional renunciando al proteccionismo. La Teoría de la Ventaja Comparativa es una de las más importantes de toda la Economía y es una de las bases de la diplomacia económica, cuyos resultados son plasmados en los acuerdos internacionales de comercio.

En síntesis, para Adam Smith, los países deberían considerar sus ventajas para producir, al paso que para David Ricardo deberían considerar lo que era menos

³⁴⁶ 01 hora de trabajo para producir 01 unidad de alimento y 02 horas de trabajo para producir 01 unidad de ropa.

desventajoso producir (Gaytán, 1998³⁴⁷ y Lugones, 2001³⁴⁸). En este sentido, sería comprensible pensar que la UE debería centrarse en la producción de manufacturas y dejar ciertos bienes primarios para ser importados desde AL, sin condicionar su acceso a la cláusula social. Sin embargo, existen otros factores que permean las ventajas y desventajas mencionadas: costes de transporte, logística, seguros, existencia de economías de escala, diferenciación de productos, presiones sociales para que se impongan barreras de entrada a productos que puedan afectar a sectores concretos en el ámbito de la UE y, naturalmente estrategias geopolíticas y geoeconómicas³⁴⁹.

Si se toma en cuenta los indicadores agregados de la globalización, se puede verificar que el crecimiento de los PED y de los países emergentes, en función del comercio internacional, ha subido desde el 31,8% en 1980 hasta el 56,7% en el año 2010, superando desde 1985 a los PD³⁵⁰. Interesa a la UE exportar a esos PED. La totalidad de AL está constituida por esa categoría de países, aunque Brasil y más recientemente México ya entren en la categoría de emergentes. El primer integra el

³⁴⁷ Gaytán, R. T. (1998). *Teoría del comercio internacional*. México: Siglo XXI.

³⁴⁸ Lugones, G. (2001). Teorías del comercio internacional. *Carpeta de Trabajo de la Universidad Virtual de Quilmes, UNQ-UVQ*, julio.

³⁴⁹ Si un país decide especializarse en un sector que es intensivo en el uso del factor capital (recursos naturales, trabajo y capital (que incluye maquinaria y equipos usados en la producción) + tecnología) en detrimento de otro que es intensivo en el uso de mano de obra, la reducción de la actividad en el sector intensivo en trabajo conllevará al incremento de despidos y de personas en paro. El estado tendrá que pagar su prestación por desempleo. Además, esos trabajadores tendrán que reincorporarse, quizá, en el sector intensivo en capital. Este ajuste estructural lleva tiempo. Con la incorporación de nuevos trabajadores en el otro sector, los salarios tienden a bajar. Además, la apertura al comercio no logra que la población de todos los países disfruten de un mismo nivel de bienestar. Al contrario, los países más eficientes y con mayor productividad suelen tener una cesta de consumo *per cápita* más grande que la del país menos eficiente y productivo. Otro problema, de esta vez relacionado con la propia teoría, es la de que el análisis no considera los costes de transporte, algo que afecta profundamente el comercio exterior y sus respectivas ganancias. Tampoco consideran el precio de equilibrio una vez que el país abra su mercado a la competencia externa. Este precio de equilibrio sufre directamente el impacto de la dotación de los recursos empleados en su producción (localmente y en el país donde se han producido), del uso de las tecnologías (relacionada con el incremento de la productividad y de la reducción del coste unitario) y, naturalmente, de las preferencias, gustos y necesidades de los consumidores (en ambos países).

³⁵⁰ No obstante, el comercio internacional corresponde solamente al 10% del mercado de divisas. Las transacciones con fines especulativos corresponden al 90% (Gillén, p. 49).

conjunto de países conocido por el acrónimo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y el segundo el acrónimo MIKT (México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía)³⁵¹, los países más desarrollados derivados del término económico y financiero *Next Eleven* (N-11), usado desde el final de 2005 para designar a los países del mundo más promisoros para la inversión y para el crecimiento económico (Bangladés, Corea del Sur, Egipto, Filipinas, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Pakistán, Turquía y Vietnam). Además, Brasil y México integran el denominado Grupo de los E-7 (los 07 países emergentes). De hecho, su composición es esta: 02 países asiáticos (China³⁵² e India); 02 países latinoamericanos (Brasil y México); 02 países islámicos (Turquía e Indonesia) y Rusia. El Producto Interior Bruto Agregado (PIBA) de los E-7 ha superado en el año 2014 (la previsión de 2003 era de que superara en el año 2017) el PIBA de los países del G-7 (desde los años 80 son: 02 países norteamericanos: EE.UU y Canadá, 04 países europeos: Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, 01 país asiático: Japón). La previsión es de que en el año 2050, solamente esté presente los EE.UU³⁵³.

La inclusión de la cláusula social como condicionante de las relaciones comerciales UE-AL se asocia a una tendencia de división geoeconómica entre estados fuertes, detentores de capital, con una Secretaría o Ministerio de Economía fuerte e influyente y con mano de obra calificada, por un lado, y estados comparativamente más débiles, con abundante mano de obra no calificada que dispone de poco capital y en que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tienen un peso proporcionalmente mayor.

La condicionalidad de acceso al mercado único de la UE, plasmada en la protección social, en el ámbito de las relaciones UE-AL, visa exactamente a que esa segunda categoría de estados (en desarrollo) asuma plenamente sus obligaciones en materia de DD.HH. Esta condicionalidad también puede desempeñar un papel fundamental en lo

³⁵¹ Ambos acrónimos creados por el banco de inversión Goldman Sachs.

³⁵² En 2014 China sobrepasó a los EE.UU como mayor economía del mundo en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).

³⁵³ ESADE BUSINESS AND LAW SCHOOL. Geopolítica y gobernanza global: riesgos y oportunidades. Apuntes personales. Curso finalizado en Diciembre de 2015.

que se refiere a la reducción “legítima y políticamente justificable” de la importación de productos latinoamericanos por parte de la UE. En un contexto de recesión económica, incrementar las exportaciones hacia AL y reducir “legal y legítimamente” sus importaciones tienen un peso enorme.

La crisis económica actual ha golpeado muy duramente a los 34 países miembros de la OCDE. Al considerar que 20 de los 28 estados miembros de la UE³⁵⁴ integran la OCDE y los otros 08 poseen sus economías fuertemente vinculadas a la economía del conjunto de la UE, se puede comprender la importancia de incrementar el comercio con terceros países y regiones (como es el caso de AL). Comparativamente: a) en la crisis del petróleo de 1970 (pico en 1975) aproximadamente el 42% de los PD habían entrado en recesión, b) en la de los ochenta (picos en 1980, 1981 y 1983) alrededor del 30%, c) en la de los noventa (pico en 1993), cerca de 38% y d) en la crisis iniciada en el año 2008, con el derrumbe de Leman Brothers, el 100% de los PD ha sido alcanzado³⁵⁵.

2.7.1 La cláusula social y el isomorfismo

La cláusula social parece incluirse en la actual tendencia del isomorfismo³⁵⁶, encarnada en la adopción de patrones similares de comportamiento o bases de actuación entre estados o entre empresas. En este sentido, en nivel estatal, se verifica la tendencia, al menos formal, bajo la perspectiva jurídica, política y social, de la prohibición del trabajo infantil, de la esclavitud, de la discriminación entre sexos etc.

³⁵⁴ Países en proceso de adhesión a la Organización: Rusia, Colombia y Letonia. En 2015 comenzarán las conversaciones de adhesión de Costa Rica y Lituania. Colaboración con países clave: Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica.

³⁵⁵ Wharton Business School, Universidad de Pensilvania. Curso sobre Análisis de las tendencias financieras y sociales a nivel global, impartido por Mauro Guillén, de 05 de mayo a 23 de junio de 2014. Apuntes personales.

³⁵⁶ Aquí tendríamos elementos muy diversos: la configuración del estado-nación (con sus instituciones basadas en la división de poderes), la importancia creciente de la figura del ministro de asuntos exteriores, la promoción del turismo, los periódicos, los vaqueros (*blue jeans*), la producción de música *pop* y, en lo que particularmente nos interesará, en la estandarización de ciertas normas de protección de los derechos humanos y laborales.

El isomorfismo normativo abarca la compartición de ideologías, valores (como los que orientan la UE en su política exterior común), marcos y modelos: exaltación de los DD.HH, democracia, neoliberalismo etc. El denominado isomorfismo coercitivo (Coller, Edwards & Rees, 1999)³⁵⁷ se asocia al poder y a la dependencia. Los PED tienden a adoptar modelos previamente adoptados por los países más fuertes, ricos y desarrollados.

Entidades como OMC, FMI, GBM, ONU, OIT etc. ejercen fuerte influencia tanto en el establecimiento de ciertos estándares internacionales, en lo que concierne al mercado comercial y financiero, como en lo que se refiere a la adecuación a esos patrones por los estados, muchas veces mediante el ejercicio de presión por reformas económicas, políticas e institucionales en los países que acuden a esas entidades. Lógicamente, algunos países están más expuestos que otros a las presiones isomórficas: estados muy dependientes económicamente, estados en que el comercio internacional tiene un peso muy importante para el PIB, estados democráticos (sistemas más abiertos y expuestos a influencias externas).

Interesa también comentar en este capítulo introductorio, cuya finalidad ha sido simplemente crear la base sobre la cual se debe visualizar la cláusula social en las relaciones comerciales UE-AL, que la globalización presupone tres grandes paradojas:

- 1) El sistema global es altamente estructurado, lo que presupone una tendencia a predictibilidad: economía de mercado, libre comercio, protección de los DD.HH. Por otro lado, es altamente imprevisible: crisis, rupturas del sistema, perturbaciones diversas (paradoja de la predictibilidad);
- 2) La globalización impulsa el desarrollo de un mundo cada vez más homogéneo, incluyendo estándares adoptados por estados y agentes privados, pero cuyos resultados son muy distintos (paradoja del acoplamiento);

³⁵⁷ Coller, X., Edwards, T., & Rees, C. (1999). Difusión e isomorfismo en las organizaciones. El caso de las multinacionales. *Reis*, 79-94.

3) El isomorfismo conduce a la convergencia de patrones pero, por eso mismo, se busca, de una manera o de otra, la diferenciación y la especialización³⁵⁸. La distancia entre países ricos y pobres se ha reducido en los últimos veinte años, pero la diferencia de ingresos y salarios es cada vez mayor, así como la gestión que realizan para alcanzar un nivel más elevado de desarrollo (paradoja de la convergencia).

Por último, interesa comentar que en el ámbito de las relaciones comerciales UE-AL, existen cuatro dimensiones clave que se están interconectando cada vez más: 1) la dimensión económica (incluyendo la financiera), 2) la dimensión socio-demográfica, 3) la dimensión política y 4) la dimensión geopolítica (que Lenz, 2009³⁵⁹ afirma estar siendo reemplazada por la geoeconómica).

Como elementos institucionales se pueden mencionar el mercado de trabajo, el sistema de representación política, el estado (y todo su aparato gubernamental) y el sistema internacional de estados, en que actúan esencialmente las organizaciones internacionales con capacidad decisoria a nivel global (o que sirven de foro para que sus miembros acuerden entre sí). La incorporación de la protección social en el ámbito de las relaciones comerciales es una tendencia isomórfica impulsada por la UE. ¿Pero la UE puede establecer esa condición en los acuerdos comerciales? Eso sería comprensible en el caso de dos estados soberanos. La UE no cumple ese requisito.

³⁵⁸ En el ámbito empresarial, la búsqueda por la diferenciación es una de las banderas de la ventaja competitiva.

³⁵⁹ Lenz, T. (2009). *From Geopolitics to Geoeconomics: The European Union's Promotion of Regional Integration in Latin America, 1980s*. Saarbrücken: VDM Verlag Publishing.

2.7.1.1 La Unión Europea: comprendiendo lo que es

Calificar jurídicamente la UE no es una tarea sencilla. Hill & Smith (2011)³⁶⁰ se refieren a la UE como un “extraño animal”. Según los autores: a) no es un estado, b) es una entidad distinta de las organizaciones internacionales tradicionales, c) es una agrupación de soberanías, d) posee enorme poder en algunas áreas y limitaciones en otras, e) posee una “polifonía” en sus relaciones exteriores, f) ha cambiado de modo significativo a lo largo de los años. La comprensión de lo que es la UE y lo que hace la entidad también varía en función de la perspectiva. Resumidamente:

- Para los “realistas”, la UE: a) tiene un rol circunscrito a las denominadas “altas políticas” (v.g. políticas comercial, agrícola y de seguridad), b) falla en su capacidad de acción y reacción (eficaz) ante situaciones de crisis internacional³⁶¹ (incluyendo la crisis económica iniciada en el año 2008 y la actual crisis de los refugiados) y c) no llega a ser un “full actor” en el escenario internacional. Además, según Adrian Hyde-Price (2012)³⁶², la UE conforma una especie de repositorio de orden ético y normativo en relación a sus estados miembros³⁶³, lo que incluiría la protección de los DD.HH. y su traslado como valor en sus relaciones exteriores.

- Para los liberales, la UE es: a) un remanso de paz democrática y respeto por los DD.HH, b) un símbolo de crecimiento interdependiente, en que los gobiernos nacionales refuerzan su poder domestico mediante la cooperación con la UE

³⁶⁰ Hill, C. & Smith, M. (2011). *International Relations and the European Union*. Oxford: Oxford University Press (OUP).

³⁶¹ Por ejemplo, en la Guerra civil de Bósnia, Libia, Siria, lo que señala no poseer una fuerza global.

³⁶² Hyde-Price, A. (2012). *International Security: An Introduction*. Londres: Routledge.

³⁶³ Las negociaciones para constitución de un área de libre comercio EE.UU-UE revelan intereses corporativos domésticos.

(Moravcsik y Milner, 2012)³⁶⁴ y c) una protección adicional en materias políticas y de poder negociador.

- Para los constructivistas, la UE es: a) una fuerza civil (Duchêne & Ball, 1980)³⁶⁵, b) una fuerza ética, proactiva, cuya política exterior está guiada por una “ética global” como la democracia y el respeto por los DD.HH (Aggestam, 2008)³⁶⁶, contribuyendo con la creación de lo que Granell Trías (2008)³⁶⁷ llama “Estado mundial de bienestar”, con el acceso de PD y PED a los “bienes públicos globales”, como el respeto a los “derechos igualitarios no discriminatorios de las poblaciones” y c) una fuerza normativa (Manners & Whitman, 2001)³⁶⁸, que reforzaría la letra “b”.

No se entrará en detalle sobre esas características por no constituir tema de la investigación. Lo que se pretende señalar es, esencialmente, que bajo la perspectiva jurídica, la UE es una organización de integración regional dotada de personalidad jurídica, al tenor del art. 47 del TUE³⁶⁹. En esta condición, concluye acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales (incluyendo los de naturaleza comercial) y participa de organizaciones multilaterales, como la OMC³⁷⁰.

³⁶⁴ Moravcsik, A. & Milner, H. V. (2012). *Power, Interdependence and Nonstate Actors in World Politics*. Nueva Jersey: Princeton University Press.

³⁶⁵ Duchene, F. & Ball, G. W. (1980). *Jean Monnet: The First Statesman of Interdependence*. New York: W. W. Norton and Company, Inc.

³⁶⁶ Aggestam, L. (2008). Introduction: ethical power Europe? *International affairs*, 84(1), 1-11.

³⁶⁷ Granell Trías, F. (2008). La cuarta oleada de organismos económicos internacionales. *Revista de Economía mundial*, 18, 369-380.

³⁶⁸ Manners, I. & Whitman, R. (2001). *The Foreign Policies of European Union Member States*. Manchester: Manchester University Press.

³⁶⁹ Título VI, que comprende los artículos 47 a 55, renumerado y redactado por los apartados 54) a 61) del artículo 1 del Tratado de Lisboa por el que se modifican el TUE y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (D.O.U.E.C., 17 diciembre). Se corresponde con el título VIII renumerado conforme establece la tabla de correspondencias que figura anexa al Tratado de Lisboa. Vigencia: 1 diciembre 2009.

³⁷⁰ Son miembros de la OMC tanto la UE como sus 28 estados miembros.

Aunque sea una asociación de estados soberanos, la propia UE no está realmente dotada de ese poder. El impulso inicial de su creación, a partir del eje Francia-Alemania, ha sido la preservación de la paz. La idea de Robert Schuman, en relación a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA, 1951), era tornar fácticamente imposible, a partir del Tratado de París, una guerra entre estas dos potencias históricamente rivales, mediante su producción conjunta. Una Alta Autoridad se encargaría de su gobierno.

Con el éxito del Tratado de París, otro hito de la integración económica se llevó a cabo a finales de los años 50: la CEE (1957). Su mayor logro ha sido el establecimiento de un mercado común y de una unión aduanera, precedente económico lógico del mercado común y de la unión monetaria³⁷¹. La preservación de la paz, razón fundamental de la construcción europea, no había sido abandonada. El objetivo perseguido por la CEE, el libre movimiento de bienes, personas, capital y servicios, simplemente representaba el enfoque elegido para que la paz y la prosperidad se consolidasen en este espacio del planeta.

A propósito, de acuerdo con la denominada *peace theory*, el mejor garante de la paz sería una economía de mercado impulsada por el libre comercio, dentro y fuera de Europa. La estabilidad lograda con la prosperidad debería caminar de manos dadas con la promoción, el respeto y la protección de los DD.HH, la democracia y el estado de derecho, los valores fundamentales de la política exterior de la UE. Solamente así sería posible asegurar la estabilidad social y, por consiguiente, la paz.

La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 ha generado un impacto enorme en el proceso de integración europea. En el 07 de febrero de 1992, el Tratado de Maastricht (TUE) fue firmado³⁷² para adecuarse a esa nueva situación geopolítica. Los

³⁷¹ Aunque subsistan dificultades de política fiscal (*déficits*) y de política monetaria para el área monetaria óptima. Además, este modelo suele presentar ciertas desventajas: a) *Shocks* asimétricos (desestabilización de la zona), b) asincronía cíclica, c) descoordinación en los diferenciales monetarios y financieros y d) asimetrías de producción.

³⁷² En vigor desde el 1 de noviembre de 1993.

objetivos de paz, prosperidad, promoción de los DD.HH y la democracia habían sido heredados con la nueva configuración. En la realidad, el tratado de Maastricht fue más allá de la comunidad económica y amplió el ámbito de competencia de la UE para otras áreas: Política Exterior y de Seguridad Común, Justicia y Asuntos de Interior.

Con el Tratado de Lisboa se ha buscado primordialmente simplificar el trabajo y el funcionamiento de la UE ampliada. Dado que los estados miembros han encargado a la UE para actuar en áreas específicas, como el comercio con terceros estados, el poder de negociación del bloque es superior al de cualquier país latinoamericano singularmente considerado.

Este es exactamente el campo en que la cláusula social actúa. Las antiguas – y algunas veces renovadas – reivindicaciones sobre el perjuicio generado por la precarización de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores ubicados en los PED para la economía y el mercado laboral europeo, asumió un carácter mucho más profundo y amplio, como se ha analizado anteriormente. La UE procuraría promover en todo el mundo sus valores fundamentales, entre los que se incluyen, como se sabe, los DD.HH, y lo haría mediante el dialogo político, la cooperación para el desarrollo y también mediante el comercio³⁷³. Su finalidad sería velar y promover esos derechos por todo el mundo, con el objetivo de lograr prosperidad y asegurar la paz mundial. Sin

³⁷³ Ejemplos de esa política de promoción de los DD.HH, en diferentes aspectos: a) Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de septiembre de 2007, sobre el funcionamiento de los diálogos en materia de derechos humanos y de las consultas sobre derechos humanos con terceros países (2007/2001(INI)); b) Reglamento (CE) nº 976/1999 del Consejo de 29 de abril de 1999 por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias, distintas de las de cooperación al desarrollo que, dentro del marco de la política de cooperación comunitaria, contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en los terceros países. DOCE, de 8. 5. 1999 (L 120/8); c) Dimensión exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011 , sobre la dimensión exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas (2010/2205(INI)). DOUE de 11.12.2012 (C380E/39).

embargo, como se verá, ni mismo la doctrina jurídica europea concuerda integralmente con el contenido de lo que se acaba de enunciar³⁷⁴.

2.7.1.1.2 La representación exterior de la Unión Europea. Los derechos humanos como valor fundamental en sus relaciones comerciales con terceros países

Cómo llevar a cabo esa promoción de valores no es algo sencillo dentro del libre mercado. Esta es una apuesta jurídica curiosa pero comprensible para la UE³⁷⁵. La representación exterior de la UE es diversa. En el marco del Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1º de diciembre de 2009), cumple esta función el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Presidente de la Comisión Europea, el Presidente del Consejo Europeo y el Jefe de Delegación de la UE en terceros países³⁷⁶.

³⁷⁴ A pesar del impacto positivo de la UE sobre los estados-miembros y sus respectivas poblaciones, la UE pierde gradualmente su popularidad. Esta es la gran paradoja.

³⁷⁵ El libre mercado en términos globales, constituye una apuesta curiosa para la UE, puesto que ella misma contradice el principio de la liberalización del comercio para todos los países. De hecho, la UE privilegia la liberalización de bienes, servicios, personas y capital solamente entre sus propios miembros o, eventualmente, entre otros países jurídicamente equiparados. Este es el caso del Espacio Económico Europeo que, desde el 1 de enero de 1994, en virtud de un acuerdo con la AELC, permite a sus países participar del mercado único sin tener que adherirse formalmente a la UE. Suiza participa de ese mercado, desde el 2008, en función del acuerdo Schengen.

³⁷⁶ Importa mencionar también el Servicio Europeo de Acción Exterior.

El artículo 21 del TUE (considerado derecho primario en la UE)³⁷⁷ proclama que *la acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el estado de derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional*³⁷⁸.

³⁷⁷ “The European Union is based upon treaties which has a special significance under international law. Primary law is composed of these treaties. The most important treaties today is the Treaty on the European Union, TEU and the Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU. The treaties form the basis not only of the institutions, but also are the powers that can be exercised by those institutions and the procedure under which they must operate. Therefore, the basis of any legal action must be founded on a treaty provision. And the treaties also give the Court of Justice the important task to rule on the interpretation of EU law and on the validity of EU secondary law. Consequently, primary law is the basis for the EU legal system, created by the member states”. Más adelante... “and secondary law is the sources of law that the EU system produced by itself. This means that secondary law is only valid if it complies with primary law and should always be interpreted in conformity with primary law. This explains why the provisions in the treaty, such as the four freedoms, are of general importance in the application of EU law”. Texto del curso *European Business Law: Understanding the Fundamentals* (participación de este investigador), ofrecido por la Universidad de Lund (via Coursera) de 11 de enero de 2016 a 22 de febrero de 2016. Transcripción de la clase del profesor Julian Nowag, semana 1: *EU Legal Method*.

³⁷⁸ Tratado de la UE, con las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa: **Artículo 6. 1.** La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000 , tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados. Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones. **2.** La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados. **3.** Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales. Además, “the Charter of Fundamental Rights is also part of primary law. This means that the provisions in the charter are of general importance when EU law is applied. The charter can partly be described as a codification of general principles of EU law. It is part of the European convention of human rights but includes also additional economic and social rights”. Texto del curso *European Business Law: Understanding the Fundamentals* (participación de este investigador), ofrecido por la Universidad de Lund (via Coursera) de 11 de enero de 2016 a 22 de febrero de 2016. Transcripción de la clase del profesor Julian Nowag, semana 1: *EU Legal Method*. Este documento es jurídicamente vinculante desde el año 2010.

¿Pero cómo pueden ser esos valores difundidos por todo el mundo? Jurídicamente no es sencillo justificar la inclusión de la cláusula social en el marco de una relación comercial internacional UE-AL. Políticamente es justificable para la propia UE en función de su desarrollo histórico pero, jurídicamente, el tema es cuestionable cuando se atenta para la profusión de normas jurídicas protectoras de los DD.HH.L en esos países y la naturaleza jurídica de la UE. Hasta mismo la participación de la UE en organizaciones internacionales no deja de ser jurídicamente extraña, puesto que la mayoría de ellas solamente permite la participación de estados soberanos (lo que la excluiría).

No obstante, existen dos excepciones relevantes en el sistema de las Naciones Unidas: la FAO y la OMC. En ambas organizaciones, la UE participa como un miembro *sui generis*, como una “organización miembro” (por tanto, es capaz de ejercer su peso e influencia). En el ámbito de la FAO, la UE está presente como miembro desde 1991 y en la OMC desde 1995³⁷⁹. En el seno de la ONU y de sus agencias especializadas, la UE participa especialmente como observadora, lo que limita su actuación. Wouters (2014)³⁸⁰ observa que, en el contexto actual, es imperioso que la UE desarrolle estrategias, establezca prioridades, fomente los acuerdos internacionales de sus miembros para fortalecer su propia presencia en las organizaciones y negocie mejoras en su estatus junto a ellas.

Actualmente la UE apoya el multilateralismo de la OMC pero, simultáneamente, especialmente en relación a los PED (caso de los países latinoamericanos), fija en una cláusula social establecida solamente en el marco bilateral, la condicionalidad de acceso

³⁷⁹ Antes del tratado de Lisboa, por razones jurídicas, el nombre oficial en el ámbito de la OMC era “Comunidades Europeas”. Tanto la UE como sus estados-miembros son miembros de la OMC por derecho propio (29 miembros: 28 países + la UE). La Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) representa a la UE y a sus miembros en prácticamente todas las reuniones y esferas de la OMC

³⁸⁰ Wouters, J. (2014). *The European Union in Global Governance*. European University Institute, KU Leuven, and Universität Passau. Curso realizado en los meses de abril y mayo de 2014. Apuntes personales.

a su mercado interior, lo que podría permitir un juego político que, en estos términos, escapa *a priori* del sistema multilateral de comercio³⁸¹.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la UE ha ganado competencias en el ámbito del comercio. Aunque el rol del Parlamento Europeo sea limitado, con ese tratado, su aprobación se ha tornado necesaria para la conclusión de acuerdos comerciales y de asociación (Barnard & Peers, 2014)³⁸². Esto es relevante, porque algunas de sus comisiones son especialmente escrupulosas con el tema del respeto por los DD.HH en los PED³⁸³. La democracia y los DD.HH, además, según el art. 21 del TUE, están en la base de las relaciones y asociaciones llevadas a cabo con terceros países y organizaciones internacionales regionales o mundiales que compartan esos principios³⁸⁴.

El tema de la condicionalidad de la protección social en el marco de las relaciones comerciales internacionales, sin embargo, parece haber sobrepasado la congregación de valores esencialmente cristianos y occidentales (democracia y DD.HH) y se ha convertido en un elemento crucial en los acuerdos recíprocos y no recíprocos (caso del SPG) con países muy distintos entre sí, occidentales y no occidentales, cristianos y no cristianos (Meyler, 2008)³⁸⁵. De ahí se podría inferir que la UE considera los DD.HH un

³⁸¹ En el ámbito de los denominados “acuerdos abarcados” de la OMC (multilateralismo), el peso de los DD.HH. es muy limitado, al paso que en sus relaciones comerciales con AL (bilateralismo) su peso es muchísimo mayor (incorporación de la cláusula social, no prevista en el sistema multilateral de comercio).

³⁸² Barnard, C. & Peers, S. (2014). *European Union Law*. Oxford: OUP.

³⁸³ Resolución del Parlamento Europeo sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea (2005/2057(INI)). DOUE de 29.11.2006 (C 290 E/107).

³⁸⁴ La apuesta por el multilateralismo encuentra su base también en este artículo, al rezar que la UE propiciará soluciones multilaterales a los problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas.

³⁸⁵ Meyler, B. A. (2008). Commerce in Religion. *Notre Dame Law Review*, 84(2), 09-027.

valor universal, inherente a todo ser humano, esté donde esté³⁸⁶. Las políticas comunes enfocadas a la cooperación plasman esa defensa de valores pues buscan consolidar y promover, por todo el mundo, la democracia, el estado de derecho, los DD.HH y los principios del derecho internacional, algo que se debe perseguir en todo el mundo con vistas a la paz mundial (Iglesias Vázquez, 2007)³⁸⁷.

La inclusión de la cláusula social en las relaciones comerciales UE-AL cumple así, bajo la perspectiva de la UE, diversas finalidades “políticamente correctas”. Una de ellas, plasmada en su política exterior, consiste en apoyar el desarrollo sostenible (en los niveles económico, social y medioambiental) de los PED, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza. Interesa recordar uno de sus aspectos: la prosperidad económica genera estabilidad social y paz, razones que inspiraran la construcción europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Esto no significa que el apoyo al desarrollo económico y social de los países latinoamericanos se restrinja a la construcción de un idílico mundo mejor. Mucho menos será por altruismo. Bajo la perspectiva económica, es muy conocida la idea de que el desarrollo tiende a generar estabilidad jurídica y social y conduce a un incremento del poder adquisitivo local que, actuando conjuntamente con la liberalización progresiva del comercio (apuesta de la UE en los planos bilateral y multilateral), permite la exportación de bienes con mayor valor añadido a esas zonas.

El Consejo y la Comisión, asistidos por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, deben garantizar la coherencia entre la acción exterior y las demás políticas adoptadas, lo que significa que los valores

³⁸⁶ Artículo 21. 1. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

³⁸⁷ Iglesias Vázquez, M. A. (2007). Cuestiones de Derecho Internacional y Política. Acerca de un Ordenamiento jurídico para la paz en la época de la globalización. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, pp. 45-62.

fundamentales de la política exterior común (DD.HH, democracia y estado de derecho), fomentados por todo el mundo, deben impregnar a todas las políticas adoptadas por la UE. No hay ninguna duda de que los DD.HH son relevantes en la política interior y exterior de la UE. La condicionalidad de acceso al mercado único asociada a la protección y respeto por los DD.HH.L (cláusula social) en los acuerdos comerciales UE-AL expresa eso. Los principios de la política exterior de la UE expresan eso.

No obstante, la aspiración por la protección de esos derechos, en la realidad, es muy antigua y no constituye exclusividad de nadie. Escapando de la visión utilitarista de Jeremy Bentham³⁸⁸ y su sucesor John Stuart Mill, filósofos políticos que despreciaban la idea de derechos naturales, puesto que el utilitarismo se basa en la maximización de la cantidad total de felicidad agregada y en la intensidad y duración del placer y del dolor, el hecho es que la noción de derechos inherentes a la persona humana encuentra expresión, a lo largo de la historia, en regiones y épocas muy distintas. Para su consecución (la plena realización de los DD.HH) los estados muchas veces necesitan de la ayuda internacional, lo que suele ocurrir, habitualmente, mediante diferentes mecanismos (la política de cooperación para el desarrollo de la UE costa muy poco: según Giovannetti, 2007³⁸⁹, solamente 02 euros mensuales por ciudadano son destinados a eso).

Aunque exista diferencia en el grado de aceptación social por destinar recursos económicos a ayudar a los países más pobres (los países del Mediterráneo son los que

³⁸⁸ Sandel, M. J. (2010). *Justice: What's the Right Thing to Do?* New York: Farrar, Straus and Giroux.

³⁸⁹ Giovannetti, G. & Quintieri, B. (2007). *Globalizzazione, specializzazione produttiva e mercato del lavoro. lavoro presentato al convegno "Globalizzazione, specializzazione produttiva e mercato del lavoro: verso un nuovo welfare"* organizzato dalla Fondazione Manlio Masi e dal CNEL.

menos apoyan, cerca del 67%), el hecho es que la UE es el mayor donador de ayuda oficial al desarrollo en todo el mundo³⁹⁰.

Desde el año 2002, el objetivo fijado para la ayuda es de 0.7% del PIB³⁹¹. No obstante, a partir del año 2011, el porcentaje se ha reducido, aunque no de modo uniforme entre todos los países. Luxemburgo, Suecia y Dinamarca han mantenido el objetivo de 0.7%. Esta cifra, sin embargo, es difícilmente soportada por los países mediterráneos, puesto que padecen de problemas crónicos exaltados por la crisis iniciada en el año 2008. El nivel promedio actual de la ayuda es de 0.43% del PIB (Giovannetti, 2014)³⁹². A partir del año 2015 los objetivos serían distintos, con el incremento de la denominada Política de Coherencia para el Desarrollo y la priorización de la reducción de la pobreza en el mundo.

La Agenda para el Cambio pugna que: a) los PED tengan su propia política de desarrollo, no una política impuesta por actores externos, b) la política de la UE sea comprensiva y coherente (socialmente inclusiva), c) la ayuda europea se rija por criterios de diferenciación (en función de los niveles de ingresos de cada país beneficiario, existencia de conflictos etc.), d) su implementación sea simplificada. La finalidad última es sacar de la pobreza, al menos, a 700 millones de personas. Para que todo funcione, la Política de Coherencia pretende eliminar cualquier contradicción entre las políticas de desarrollo de la UE y de sus estados-miembros y, lo que es muy

³⁹⁰ Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y se modifica el Reglamento (CE) no 1889/2006 por el que se establece un instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial (COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)).

³⁹¹ En la década de los setenta la ONU (Resolución de su 25ª Asamblea General) señalaba: *Todos los países económicamente avanzados incrementarán progresivamente su Ayuda Oficial al Desarrollo a los países en desarrollo y realizarán sus mayores esfuerzos para alcanzar una cantidad neta mínima equivalente al 0,7% de su producto nacional bruto a precios de mercado antes de la mitad de la década.*

³⁹² Giovannetti, G. (2014). *The European Union in Global Governance*. Curso realizado por Iversity entre 28 de abril a 13 de junio. Apuntes personales.

importante, evitar que otras políticas relevantes, como la comercial y la agrícola, interfieran negativamente sobre la política de desarrollo a ser llevada a cabo por la UE.

La acción exterior de la UE comprende varios instrumentos que deben ser coordinados adecuadamente. Los DD.HH componen un elemento común entre todos ellos: política comercial, cooperación al desarrollo, cooperación económica, financiera y técnica con terceros países, subregiones y regiones, o instrumentos específicos (como, por ejemplo, el “Instrumento de Estabilidad” o el “*African Peace Facility*”)³⁹³.

El problema es que, hasta que se logre realmente la coherencia planteada, algunas políticas de la UE, como la agrícola, seguirán afectando muy intensamente a los PED. La cláusula social podría incrementar su eficacia si el objetivo de promover el desarrollo no se queda, en la práctica, en una posición de menor importancia que la atención dispensada hacia los sectores económicos locales, algo difícil de ocurrir en la práctica, aunque tanto la Política de Coherencia para el Desarrollo como la Agenda para el Cambio parecen señalar un camino positivo al sopesar y buscar mayor coherencia entre los intereses internos y los intereses perseguidos en su política y acción exterior. El principal cambio en la política de desarrollo con la implementación de la *Agenda para el Cambio* parece ser su enfoque al buen gobierno, la democracia, el crecimiento inclusivo y sostenible y los DD.HH. Mediante las relaciones comerciales, la UE también buscará objetivos similares. En el marco de los acuerdos comerciales, tanto recíprocos como no recíprocos (SPG) esos objetivos ya son perseguidos.

Este capítulo ha servido para señalar las dificultades de ubicar adecuadamente la cláusula social en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales. En el marco de una economía de mercado, donde los agentes privados asumen un papel destacado y buscan maximizar sus beneficios reduciendo simultáneamente costes diversos (lo que

³⁹³ El Libro Verde sobre desarrollo, del año 2012, establece cuatro pilares: 1) elevado impacto, 2) crecimiento inclusivo, 3) desarrollo sostenible, 4) seguridad alimentaria. La clave que une todos los pilares es la protección de los DD.HH.L. Este investigador cree que la UE ha andado bien en buscar mayor coherencia entre sus políticas, con base en este poderoso denominador común.

suele incluir la utilización de mano de obra miserablemente remunerada, cumplimiento de jornadas laborales que excedan los límites legales, falta de seguridad social, ausencia de contrato, relaciones que camuflan verdaderos regímenes de servidumbre o de reducción a condición análoga a la de esclavitud etc.), la cláusula social difícilmente será plenamente eficaz.

Además de las violaciones de los derechos laborales, pueden existir violaciones de otros DD.HH, tanto por parte de los agentes privados como por parte del propio estado. Los estados son los destinatarios de las normas de protección de los DD.HH. Meron (1989)³⁹⁴ señala - con acierto en la opinión de este investigador - que la obligación de respetar, proteger e implementar los DD.HH en beneficio de las personas (sus titulares), se ha convertido en una obligación de naturaleza consuetudinaria en la sociedad internacional. En lo que concierne a esos derechos, los estados no solamente asumen el deber de vigilar la conducta de sus agentes (públicos) para evitar que los violen, sino también el deber de vigilar a los agentes privados (empresas, personas naturales/físicas) para que actúen de acuerdo con las normas, principios y valores asociados a la dignidad humana.

En sus relaciones comerciales, la UE incorpora la cláusula social como forma de estimular a los PED a ratificar los instrumentos internacionales básicos que, según ella, confieren estándares mínimos de protección a los DD.HH.L. El equilibrio no es sencillo, porque en una economía de mercado, no son solamente las empresas que están interesadas en producir más y a un menor coste (aunque a base de violaciones de DD.HH.L), varios estados también participan, aunque de modo discreto, en este proceso, puesto que la riqueza generada por sus empresas, especialmente aquella obtenida mediante las exportaciones, les ayudan a equilibrar la balanza comercial y de pagos, además de incrementar el PIB.

Sin embargo, los estados no deberían apoyar ni consentir con la violación de los DD.HH (que incluye tanto las conductas perpetradas por agentes públicos como por

³⁹⁴ Meron, T. (1989). *Human rights and humanitarian norms as customary law*. Oxford: Clarendon Press.

agentes privados, que son los que controlan mayoritariamente las decisiones - asignación y gestión de recursos – en una economía de mercado). En resumen, bajo diferentes apreciaciones, la cláusula social no es tan eficaz cuanto puede parecer a la primera vista.

Este investigador finaliza el capítulo con la observación de Santillán (1995)³⁹⁵, hasta ahora válida, de que las exigencias derivadas de la creciente competencia económica debe ser afrontada por Europa a través de la explotación de sus propias ventajas comparativas (v.g., uso intensivo de capital, de tecnología o de mano de obra calificada).

El desmantelamiento del estado de bienestar para aumentar la competitividad europea no es coherente con la cultura social sedimentada en el continente. UE no puede competir con los PED sobre la base de los costes salariales. Así que sus opciones más explícitas son: a) desmantelar el estado de bienestar social y precarizar las condiciones de vida de los trabajadores para competir; b) explorar sus propias ventajas comparativas; c) acusar a los PED de *dumping* social y buscar minimizar sus efectos mediante la inclusión de la cláusula social en el comercio bilateral con AL (países y subregiones).

³⁹⁵ Santillán, S. E. (1995). Los Mercados Laborales: Pérdidas y Ganancias en el Proceso de Integración Regional, en La Dimensión Social de la Integración Regional. Centro de Formación para la Integración Regional, Montevideo, DT, 11, 73-79.

PARTE II

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

CAPÍTULO 3

LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA

3.1 CLÁUSULA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS: BREVES COMENTARIOS

Visto el intrincado escenario donde se desarrolla la investigación de esta tesis doctoral, es necesario analizar si es jurídicamente justificable la inclusión de la cláusula social en los acuerdos comerciales concluidos entre UE y AL.

La cláusula social es un elemento condicionante en las relaciones comerciales UE-AL y su incorporación en los acuerdos comerciales, con efecto, condiciona el modo como bienes y servicios exportados por AL pueden acceder al mercado único europeo. En la práctica, la conceptualización jurídica de la cláusula social no es imprescindible en el ámbito de la política comercial de la UE porque abarca todas las categorías de DD.HH (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales: universalidad e indivisibilidad de los DD.HH)³⁹⁶. Además, la justificación jurídica de su incorporación en los acuerdos es cuestionable en relación a AL. En otras palabras, su justificación es esencialmente política, así como la apreciación de su eventual transgresión.

En este sentido, las fuerzas profundas de la historia han conducido a los DD.HH a ocupar el lugar que hoy en día poseen en algunas partes del mundo. Como señala Boutros-Ghali (1995)³⁹⁷, mucho tiempo antes de plasmarse en diversos instrumentos jurídicos internacionales (constantemente señalados por la UE en sus relaciones comerciales con los PED), la afirmación de la dignidad de la persona humana se manifestaba en la lucha contra la arbitrariedad, el despotismo, la dominación, la opresión y la exclusión.

³⁹⁶ Artículo 21. 1. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

³⁹⁷ Boutros-Ghali, B. (1995). *Les Nations Unies et les droits de l'homme 1945-1995*. New York: UN.

La proclamación de estos derechos innatos al hombre, con el tiempo, desbordó el ámbito nacional - cuya mayor expresión ha sido la Revolución Francesa - y asumió un carácter marcadamente internacional. Sus valores fundamentales, regenerados y consolidados a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones y lugares, acabarían formando un conjunto de patrones mínimamente aceptables de comportamiento interpersonal e interestatal, cuyo origen no deriva propiamente del pensamiento occidental, sino que es el resultado de la conciencia universal de sucesivas generaciones de seres humanos, procedentes de diferentes partes del planeta.

Las corrientes iusnaturalistas de los siglos XVII y XVIII, sin embargo, han ejercido una influencia especial y poderosa en este proceso de maduración, al establecer la premisa de que los derechos inherentes a la persona anteceden al derecho del propio estado. Se podría completar, como afirma Markovic (1986)³⁹⁸, que una de las consecuencias del pensamiento basado en la Ilustración ha sido la consagración de la idea de que el poder estatal deriva de la voluntad del pueblo y que la noción de justicia debe prevalecer sobre la norma positiva.

Con la Ilustración, el reconocimiento de la dignidad humana se desarrollaría bajo el influjo generado por el culto a la conciencia individual. La estrecha vinculación al bien común solamente ocurrirá en el siglo XX, cuando la SI aún tambaleaba con la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La base del cambio ha sido el interés colectivo de liberar el ser humano de todo tipo de servidumbre, inclusive de orden material. La mejoría de las condiciones humanas, afirmaría Maritain (1982)³⁹⁹, pasaría a ser una prioridad internacional que los estados deberían perseguir y proporcionar a la sociedad humana.

La formulación que consagraría y plasmaría la universalidad de los derechos inherentes a todo ser humano, independientemente de su diversidad cultural, étnica, religiosa, económica, social etc. vendría finalmente con la Declaración Universal de los

³⁹⁸ Markovic, M. (1986). *Differing Conceptions of Human Rights in Europe: Towards a Resolution in Philosophical Foundations of Human Rights*. Paris: UNESCO.

³⁹⁹ Maritain, J. (1982). *Los Derechos del Hombre y la Ley Natural*. Buenos Aires: Ed. Leviatan.

Derechos Humanos, proclamada por la AGNU en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, en París. Desde la segunda mitad del siglo XX, esta Declaración es considerada el fundamento básico de todos los derechos del Hombre y el sustrato jurídico-político de diversos instrumentos nacionales e internacionales⁴⁰⁰. Como afirma De Schutter (2014)⁴⁰¹, la SI y los estados singularmente considerados deben perseguir sus ideales en pro de la dignidad humana, en toda su extensión (y la cooperación internacional debe orientarse también en este sentido). La universalidad, indivisibilidad (o interdependencia) de los DD.HH. (así como la necesidad de su protección y garantía) han sido reafirmadas en distintas ocasiones, de las cuales destacamos dos en este momento:

- La Primera Conferencia Internacional de DD.HH., celebrada en Teherán (22 de abril - 13 de mayo de 1968). El objetivo de esta primera conferencia fue examinar los progresos logrados desde la aprobación de la DUDH y preparar un programa para el futuro. Durante esta conferencia, todos los pueblos y gobiernos han sido exhortados a consagrar los principios contenidos en la Declaración Universal, así como a redoblar sus esfuerzos para ofrecer a todos los seres humanos una vida libre y digna que les permitiera alcanzar un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual.
- La Segunda Conferencia Internacional sobre DD.HH., celebrada en Viena (14 - 25 de junio de 1993). En esta segunda conferencia, los representantes de los 171 estados participantes aprobaron consensualmente la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que exaltaba la importancia de la educación como elemento fortalecedor de los DD.HH., la comprensión mutua, la tolerancia y la paz (sección I,

⁴⁰⁰ Los DD.HH. han adquirido una dimensión excepcional, que se manifiesta tanto en el plano internacional como en el plano interno.

⁴⁰¹ De Schutter, O. (2014). *International Human Rights Course*, realizado en la Université Catholique de Louvain, de 17 de febrero a 28 abril de 2014. Apuntes personales.

párrafo 33)⁴⁰², además de poner especial atención en las personas discriminadas o discapacitadas, en los grupos más vulnerables, en los pobres y en todos los sectores socialmente marginados o excluidos (Cançado Trindade, 1997)⁴⁰³.

A partir de la DUDH ha surgido una creciente convergencia hermenéutica, operacional y normativa entre los DD.HH, la democracia y el desarrollo, con prevalencia perspectiva de los primeros. Naturalmente, la UE al fomentar el respeto por los DD.HH en su política exterior no ignora la idea de indivisibilidad consagrada en instrumentos y declaraciones internacionales (art. 21 del TUE). No obstante, hay que reconocer que ni todos los países han asumido de igual modo esta cuestión. Las divergencias ideológicas surgidas en los años cincuenta (la bipolaridad de las relaciones internacionales que caracterizó la “guerra fría”) se extendieron por mucho tiempo y socavaron la perspectiva holística propugnada por la Declaración Universal.

AL también sufrió este influjo. La Conferencia de Teherán ha sido una reacción a este proceso de atomización⁴⁰⁴. Durante el decenio siguiente, mediante la adopción de sucesivas resoluciones de la AGNU, se ha incrementado la perspectiva global de esa interdependencia de todos los DD.HH, tal como comprendido por la UE en sus relaciones comerciales con AL.

Esta perspectiva global abriría el camino para que la búsqueda de soluciones a las violaciones de los DD.HH contase con criterios relativamente uniformes y estables (Boven, 1979)⁴⁰⁵. El tratamiento dado a partir de entonces ha ganado un nuevo y positivo impulso que se manifiesta hasta hoy en el marco de las relaciones comerciales

⁴⁰² United Nations (1993). *Economic Commission for Latin America and the Caribbean*. Document A/CONF. 157/23.

⁴⁰³ Cançado Trindade, A.A. (1997). *Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos* (vol. I). Porto Alegre: Fabris.

⁴⁰⁴ Naciones Unidas, Acta Final de la Conferencia Internacional de Derechos humanos (Teherán, abril/mayo 1968), N.Y., ONU, 1968, doc. A/CONF.32/41, pp. 1-61.

⁴⁰⁵ Van Boven, T. C. (1979). *United Nations Policies and Strategies: Global Perspectives?, Human Rights: Thirty Years after the Universal Declaration*. La Haya: Nijhoff.

UE-AL. Esta percepción de la articulación de todas las categorías de DD.HH constituiría uno de los pilares de la DUDH (Cassin, 1958)⁴⁰⁶ y el sustrato de la PCC de la UE, plasmada en acuerdos recíprocos y no recíprocos (como el SPG). El reconocimiento de que sin los DESC, los DCP carecen de significado, constituye la característica principal del enfoque de la implementación de los DD.HH por los países occidentales (Humphrey, 1973)⁴⁰⁷.

Según Headley (2008)⁴⁰⁸, el impulso dado, finalmente, por la Conferencia de Viena, al conferir legitimidad a la comunidad internacional para promover y proteger los DD.HH por todas partes, ayudó a edificar la cultura universal de respeto de los DD.HH que se haría presente desde la década de los setenta en el marco de los primeros SPGs adoptados por la UE. En el mismo sentido se han posicionado Mutua (1996)⁴⁰⁹, Hasenkamp (2004)⁴¹⁰ y Elliott (2008)⁴¹¹. Según Boyle (1995)⁴¹², la Conferencia de Viena ha exhortado a todos los países a ratificar al menos las seis "convenciones básicas" de las Naciones Unidas sobre los DD.HH:

- 1) La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965);

⁴⁰⁶ Cassin, R. (1958). *La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948*. Paris: Académie des Sciences Morales et Politiques.

⁴⁰⁷ Humphrey, J. (1973). *The International Law of Human Rights in the Middle Twentieth Century. The Present State of International Law and Other Essays*. Deventer: Kluwer.

⁴⁰⁸ Headley, J. M. (2008). *The Europeanization of the world: On the origins of human rights and democracy*. Princeton University Press.

⁴⁰⁹ Mutua, M. W. (1996). The ideology of human rights. *Virginia Journal of International Law*, 36, 16-31.

⁴¹⁰ Hasenkamp, M. L. (2004). *Universalization of human rights. The Effectiveness of Western Human Rights Policies towards Developing Countries after the Cold War. With Case Studies on China*, Frankfurt a. M.

⁴¹¹ Elliott, M. A. (2008). *A cult of the individual for a global society: The development and worldwide expansion of human rights ideology* (Doctoral dissertation, Emory University).

⁴¹² Boyle, K. (1995). Stock-taking on Human Rights: The World Conference on Human Rights, Vienna 1993. *Political Studies*, 43(1), 79-95.

- 2) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966);
- 3) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966);
- 4) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979);
- 5) La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984);
- 6) La Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

Estos instrumentos jurídicos suelen ser señalados por la UE en sus acuerdos comerciales recíprocos y no recíprocos (SPG, Anexo VIII del Reglamento UE n° 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012). Los estados, no obstante, en función de su soberanía, no están obligados a ratificar tratados de DD.HH. Este es el panorama de un sistema individualista y contratualista que conduce a la fragmentación de ciertos valores erigidos como universales. La cláusula social, al fomentar la adopción de los principales instrumentos jurídicos de protección de los DD.HH por los PED, logra subsumir las obligaciones convencionales adoptadas en un plano bilateral a las aspiraciones multilateralistas-universales de los tratados de DD.HH, cuya inspiración son los intereses comunes superiores y cuya aplicación se realiza según la noción de garantía colectiva, para emplear la idea del ex presidente de la CIDH, Cançado Trindade (1995)⁴¹³.

Bajo la concepción de la universalidad e indivisibilidad de los DD.HH, la UE acepta y establece como condicionalidad en sus relaciones comerciales que los estados asuman las tres obligaciones básicas que el derecho internacional público les atribuye (la obligación de respetar, proteger e implementar⁴¹⁴), de modo que parece tener claro que, hoy en día, el progreso realizado en la protección internacional de los DD.HH depende

⁴¹³ Cançado Trindade, A. A. (1995). *The Interpretation of the International Law of Human Rights by the Two Regional Human Rights Courts, Contemporary International Law Issues: Conflicts and Convergence*. Proceedings of the III Joint Conference ASIL/Asser Instituut. La Haya: Asser Instituut.

⁴¹⁴ Reglamento (CE) n° 2240/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004 y Reglamento (CE) n° 975/1999 del Consejo.

también de las medidas nacionales de implementación. Por esta razón la cláusula social está normalmente asociada a un procedimiento de seguimiento institucional.

Como señala Cançado Trindade (1996)⁴¹⁵, la protección internacional requiere medidas nacionales para implementar los tratados de DD.HH y para fortalecer las instituciones nacionales vinculadas al pleno respeto de los DD.HH y del estado de derecho. No es otra cosa la que establece la condicionalidad asociada a la cláusula social en las relaciones comerciales UE-AL.

La interrelación y complementación lograda en años recientes en lo que se refiere a la protección de los DD.HH es esencial. La condicionalidad atiende a este objetivo, al impulsar los países latinoamericanos a mejorar su protección, incorporando criterios exigibles por los tratados de DD.HH. No solamente esto, la condicionalidad, al impulsar la ratificación de estos tratados, fortalece el principio de que las obligaciones derivadas de estos instrumentos jurídicos (tanto en relación a la UE como en relación a los demás signatarios) deben ser efectivamente cumplidas (principio *pacta sunt servanda*) bajo pena de responsabilidad internacional de los estados.

La consecuencia directa sería la imposibilidad (de los países latinoamericanos) de invocar supuestas dificultades de naturaleza doméstica como justificativa para desatender el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en lo que se refiere a la protección de los DD.HH. Al ratificar los tratados de DD.HH, impulsados por el carácter condicionante en las relaciones comerciales con la UE, los estados latinoamericanos asumen: a) obligaciones específicas con cada uno de los derechos protegidos; b) la obligación de adoptar medidas positivas para adecuar su orden legal interno a las normas internacionales de protección.

⁴¹⁵ Cançado Trindade, A. A. (1996). *A Proteção Internacional dos Direitos humanos no Limiar do Novo Século. The Modern World of Human Rights - Essays in Honour of Th. Buergenthal*. San José de Costa Rica: IIDH.

Pinto (1997)⁴¹⁶ señala que la legitimidad de la protección de los DD.HH se ha sobrepuesto al derecho positivo y a la clásica discusión doctrinal establecida entre monistas y dualistas, relativamente a la primacía de la norma interna o internacional, y ha cedido el paso, en ese terreno, a la norma más favorable a la persona (principio *pro homine* o *pro personae*).

En AL, este principio viene consagrado tanto en normas jurídicas (Decreto n° 155 de 9 de Agosto de 2013, México, Estado de Colima; Resolución Ejecutiva n° 243 de 12 de Agosto de 2013, Colombia; Ley Estatutaria n° 1751 de 16 de Febrero de 2015 del Senado, Colombia; Resolución n° 272/PJCABA/DG/13, Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 8 de Agosto de 2013; Decreto n° 1704 de 1 de Octubre de 2013, Argentina; Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, 12 de junio de 2014) como en decisiones de los tribunales competentes (Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Diciembre de 2014, tesis n° VII-P-1AS-1073, México; Auto n° 317/2014 de la Corte Constitucional, de 15 de Octubre de 2014, con base en la decisión del juzgado n° 12 del Penal Municipal De Barranquilla, Colombia; Decisión Colegiada n° AGRG NO Resp 1182806/RJ del Superior Tribunal de Justicia, Tercero Grupo, 26 de Abril de 2011, Brasil; sentencia n° 400-2011 de la Corte Suprema de Justicia - Contencioso-Administrativo de 11 de Octubre de 2012, Guatemala; sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, 13 de Julio de 2011 (caso Sandoval, Julio Ramón S/Recurso de Casación), Argentina; sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Constitucional y Social Transitoria de 25 de Enero de 2005 (Expediente: 002614-2004), Perú; sentencia n° 10916 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 16 de Agosto de 2013, Costa Rica; Caso Contencioso de la CIDH de 6 de Agosto de 2008 (Caso Castañeda Gutman *Vs.* México. Serie C N° 184); Caso Contencioso de la CIDH de 15 de Septiembre de 2005 (Caso Raxcacó Reyes *Vs.* Guatemala. Serie C N°. 133); Caso Contencioso de Corte la Interamericana de Derechos Humanos de 24 de Noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso

⁴¹⁶ Pinto, M. (1997). *El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos. La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales*. Buenos Aires: Ediciones del Puerto.

(Aguado Alfaro y otros) *Vs.* Perú. Serie C No. 158. Sin embargo, la protección de los DD.HH, para ser adecuada, depende tanto de la adopción de los instrumentos jurídicos correspondientes como de su efectivo cumplimiento (De Schutter, 2014)⁴¹⁷.

Las instituciones estatales cumplen un rol muy relevante, aunque no suficiente, para garantizar la protección individual y colectiva de esos derechos. El perfeccionamiento institucional, al lado de la adopción de medidas nacionales e internacionales diversas, repercute activamente en la propia consolidación de su protección en nivel global. La condicionalidad de la protección de los DD.HH en las relaciones UE-AL cumple, teóricamente, esa finalidad esencial: conducir los países latinoamericanos a mejorar su protección hacia las personas. Es su impulso para que el orden internacional participe de modo más activo en el ámbito doméstico de cada país, subregión y región.

No obstante, la protección de los DD.HH es algo que supera la simple asunción de un conjunto de obligaciones derivadas de un instrumento internacional, o de una cláusula convencional. Como se verá en el próximo apartado, los DD.HH gozan de un *status* especial - *ius cogens* - ampliamente reconocido por la doctrina jurídica. Esto no significa que la UE deba desistir de su diálogo sobre DD.HH con terceros países. Al contrario, según Santos (1998)⁴¹⁸, es imperioso que se fomente el diálogo intercultural sobre DD.HH (“hermenéutica diatópica”, en la expresión del autor) para lograr una práctica realmente universal. Este parece ser el camino seguido por la UE en su conducta externa, dentro del debate teórico que existe sobre el papel que deben jugar

⁴¹⁷ Los estándares internacionales establecidos en el ámbito de la ONU procuran ser asegurados mediante la adopción de los denominados *UN-level mechanisms* que, según De Schutter, son: “*Charter-based mechanisms, which apply to all member States of the United Nations and “treaty-based” mechanisms, which apply only to the States which have ratified the specific human rights treaties concerned.*” Curso mencionado, material de clase, semana 8.

⁴¹⁸ Santos, B. (1998). Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos. De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad, Bogotá, *Siglo del Hombre/Universidad de los Andes*, 203 (2), 345-367.

Estado, Sociedad y Mercado, en la reorganización interna e internacional del sistema mundial (Prieto & Luzárraga, 1998)⁴¹⁹.

3.1.1 Los derechos humanos como *ius cogens*

Como se ha mencionado en el último epígrafe, a parte de las obligaciones internacionales derivadas de la ratificación de tratados de DD.HH y del impulso generado por el establecimiento de la protección social como condicionante en las relaciones comerciales UE-AL, hay que considerar también el carácter *ius cogens* de esos derechos, en todas sus categorías (Bianchi, 2008)⁴²⁰. La naturaleza universal de los DD.HH conduce a la necesidad de armonizar en un bloque coherente las categorías teóricas relacionadas con los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales y reforzar, mediante la atribución de un carácter perentorio (*ius cogens*, *peremptory norms*), las normas protectoras de esos derechos (Orakhelashvili, 2006)⁴²¹.

En otras palabras, no se admitiría legalmente la alteración, exclusión o restricción del contenido de una norma cuyo objeto sea la protección de los DD.HH bajo pena de nulidad (Ben-Naftali, 2011)⁴²². Sea la ratificación de un tratado de DD.HH resultante de un interés del estado por fomentar y garantizar la protección de su población o derive de su interés en acceder al mercado interior europeo (condicionalidad de la cláusula social), una vez ratificado, los derechos emanados deben ser posicionados en nivel superior a las demás normas jurídicas (Meron, 1986)⁴²³. Esto puede parecer efectivo pero, en la realidad, no lo es. Además de la dificultad ya señalada sobre el

⁴¹⁹ Prieto, N. C., & Luzárraga, F. A. (1998). El nuevo regionalismo y reestructuración del sistema mundial. *Revista Española de Derecho Internacional*, 50(1), 59-114.

⁴²⁰ Bianchi, A. (2008). Human rights and the magic of jus cogens. *European journal of international law*, 19(3), 491-508.

⁴²¹ Orakhelashvili, A. (2006). *Peremptory norms in international law*. Oxford: Oxford University Press.

⁴²² Ben-Naftali, Orna (2011). *International Humanitarian Law and International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press.

⁴²³ Meron, T. (1986). On a hierarchy of international human rights. *American Journal of International Law*, 80, 1.

funcionamiento del mercado, existe otra, de naturaleza jurídica, concerniente a la justiciabilidad de los DD.HH que integran el contenido programático de políticas públicas y que, por esta razón, son implementadas muy gradualmente⁴²⁴.

Legalmente, con la entrada en vigor del PFPIDESC⁴²⁵ (5 de mayo de 2013⁴²⁶), esos derechos pasan a ser formalmente justiciables a nivel internacional. Se ha previsto un mecanismo de denuncia internacional (ante el CDESC de la ONU) para aquellas personas cuyos DESC hayan sido violados y que no hayan obtenido justicia en su propio país. Lamentablemente, aun son pocos los estados que ratificaron este instrumento⁴²⁷.

Además, el sistema interamericano de protección de los DD.HH padece de problemas estructurales que obstruyen operacionalmente la pronta reparación de estos derechos. Este es un problema específico que se conjuga armoniosamente con las razones político-históricas que pugnan por la permanencia de la cláusula social en los acuerdos comerciales con la UE: la falta de efectividad y de eficacia en la protección de los DD.HH. De cualquier modo, aunque la UE se esfuerce por promover los DD.HH

⁴²⁴ Caso Contencioso de CIDH de 31 de Agosto de 2012. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Serie C No. 246; Caso Contencioso de CIDH de 1 de Julio de 2009. Caso Acevedo Buendía y otros (?Cesantes y Jubilados de la Contraloría?) Vs. Perú. Serie C No. 198; Caso Contencioso de CIDH de 25 de Noviembre de 2003. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Serie C nº 101; Sentencia nº 01936 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 15 de Febrero de 2011; Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 11 de Abril de 2011 (caso Castro Erika Andrea C/ Casino Buenos Aires S.a. Compañía de Inversiones en Entretenimientos S.a. U.T.e. S/ Juicio Sumarísimo) etc.

⁴²⁵ Resolución A/RES/63/117 adoptada el 10 de diciembre de 2008.

⁴²⁶ El Protocolo fue adoptado por consenso el 10 de diciembre de 2008 por la AGNU y se abrió a la ratificación el 24 de septiembre de 2009.

⁴²⁷ Argentina, 24 de octubre de 2011; Bélgica, 20 de mayo de 2014; Bolivia: 13 de enero de 2012; Bosnia y Herzegovina: 18 de enero de 2012; Cabo Verde, 23 de junio de 2014; Costa Rica: 23 de septiembre de 2014; Ecuador: 11 de junio de 2010; El Salvador: 20 de septiembre de 2011; Finlandia, 31 de enero de 2014; Francia: 18 de marzo de 2015; Gabón: 1º de abril de 2014; Italia: 20 de febrero de 2015; Luxemburgo: 03 de febrero de 2015; Mongolia: 1º de julio de 2010; Montenegro: 24 de septiembre de 2013; Niger: 07 de noviembre de 2014; Portugal: 28 de enero de 2013; San Marino: 04 de agosto de 2015; Eslováquia: 07 de marzo de 2012; España: 23 de septiembre de 2010; Uruguay: 05 de febrero de 2013. United Nations. Treaty Collection. Recuperado de https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en

por todo el mundo, la posición jerárquica de esos derechos no está asegurada por ninguna norma internacional. Efectivamente, la CVDT (firmado en Viena el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980), afirma en sus artículos 53 y 64:

Art. 53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general ("ius cogens"):

“Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.

Art. 64. Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general ("ius cogens"):

“Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará”.

La norma jurídica en ningún momento afirma que los DD.HH constituyen *ius cogens*. Ha sido la doctrina, especialmente la europea, que ha erigido los DD.HH a esta categoría especial, superior a otros derechos. Autores como, por ejemplo, Gaja

(1981)⁴²⁸, Gómez Robledo (1981)⁴²⁹, Christenson (1987)⁴³⁰, Parker (1988)⁴³¹, Cassese (1993)⁴³², Koji (2001)⁴³³, Bianchi (2008)⁴³⁴ o Acosta-López & Duque-Vallejo (2008)⁴³⁵ consideran como *ius cogens* aquellos principios estructurales del orden internacional que plasman los valores fundamentales generalmente aceptados por la comunidad internacional.

Estos valores, en virtud de su propia naturaleza, obligarían a todos los estados, independientemente de su voluntad manifestada en tratados internacionales. En la civilización occidental, cristiana, la necesidad de promoción, protección y garantía de los DD.HH – y su elevación a una categoría *ius cogens* - es comprensible y aceptable. Se trata de un valor esencial derivado de la ideología cristiana que se pretende convertir en universal (la idea de que los DD.HH plasman un valor fundamental de la SI actual es compartida por diversos autores).

⁴²⁸ Gaja, G. (1981). *Jus Cogens* beyond the Vienna Convention. *RCADI*, 172, 213-276.

⁴²⁹ Gómez Robledo, A. (1981). Le *jus cogens* international: sa génèse, sa nature, ses fonctions. *RCADI*, 172, 102-210.

⁴³⁰ Christenson, G. A. (1987). *Jus Cogens*: Guarding Interests Fundamental to International Society. *Va. J. Int'l L.*, 28, 585-611.

⁴³¹ Parker, K. (1988). *Jus Cogens*: Compelling the Law of Human Rights. *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.*, 12, 411-427.

⁴³² Cassese, A. (1993). *Los derechos humanos en el mundo contemporáneo*. Ariel: Barcelona.

⁴³³ Koji, T. (2001). Emerging Hierarchy in International Human Rights and Beyond: From the Perspective of Non-derogable Rights. *European Journal of International Law*, 12(5), 917-941.

⁴³⁴ Bianchi, A. (2008). Human rights and the magic of *jus cogens*. *European journal of international law*, 19(3), 491-508.

⁴³⁵ Acosta-López, J. I. & Duque-Vallejo, A. M. (2008). Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿norma de *ius cogens*? *Revista colombiana de derecho internacional*, 12, 13-34.

Curiosamente, a pesar de su importancia, no existe un catálogo constituido por normas *ius cogens*, de modo que son los tribunales internacionales⁴³⁶ y la doctrina los que establecen esta jerarquía. Esto es precisamente lo que ha pasado con las normas jurídicas de protección de los DD.HH, alzadas en una posición jerárquica superior a las demás por la doctrina y la jurisprudencia, como ha sustentado Alexidze (1981)⁴³⁷. Sin embargo, importa reconocer que en el ámbito doméstico algunas constituciones establecen expresamente que los tratados internacionales de DD.HH gozan de rango normativo constitucional, prevaleciendo, así, sobre las normas infraconstitucionales. Muchas de esas constituciones son latinoamericanas, lo que pone en tela de juicio la necesidad jurídica de permanencia de la cláusula social en los acuerdos comerciales UE-AL.

La consideración de que las normas jurídicas protectoras de los DD.HH son imperativas (*ius cogens*) y generan obligaciones *erga omnes*, o sea, que obligan a todos los estados, es muy relevante, porque de esa noción derivarán diversos efectos legales, políticos, económicos y sociales.

¿Pero si obligan a todos los estados, independientemente de su voluntad, sería jurídicamente necesario que la UE considere la protección de los DD.HH un elemento condicionante en sus relaciones comerciales con AL? o ¿Los países latinoamericanos ya no estarían obligados a su observancia y cumplimiento? Al final, los DD.HH son uno de los grandes logros de nuestros tiempos, expresando aspiraciones elevadas y

⁴³⁶ Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 21 de septiembre de 2005. Ahmed Ali Yusuf y Al Barakaat International Foundation contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas. Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas contra las personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes - Competencia de la Comunidad - Congelación de fondos - Derechos fundamentales - *ius cogens* - Control jurisdiccional - Recurso de anulación. Asunto T-306/01. Apartado 5. *No obstante, el Tribunal de Primera Instancia está facultado para controlar, de modo incidental, la legalidad de tales resoluciones desde el punto de vista del ius cogens, entendido como un orden público internacional que se impone a todos los sujetos del Derecho internacional, incluidos los órganos de la ONU, y que no tolera excepción alguna.*

⁴³⁷ Alexidze, L. (1981). Legal nature of *jus cogens* in contemporary international law. *RCADI*, 172, 315-353.

colectivas de toda la comunidad internacional. Hall (2001)⁴³⁸ señala que las normas *ius cogens* reflejan patrones y consensos mínimos concernientes a los más relevantes valores gestados por las diversas sociedades a lo largo de la historia. En este caso, ¿sería realmente necesario plasmar esos valores en la cláusula de un acuerdo internacional y convertirla en una obligación convencional fundamental?

Los DD.HH, aunque expresen valores fundamentales, no encuentran una fundamentación legal tan sólida como la que se verifica, por ejemplo, en las reglas estructurales de funcionamiento de la sociedad internacional (v.g., solución pacífica de las controversias, prohibición de la guerra de conquista etc.). En este sentido, Orakhelashvili (2006)⁴³⁹, al analizar la importancia de consolidar ese *minimum* consensuado en el ámbito de la sociedad internacional, señala la redacción de la Carta de San Francisco, artículo 2.6, que afirma que la Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con sus principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. Estas son reglas perentorias con fundamentación legal mucho más clara que los DD.HH, cuya importancia deriva directamente del trabajo doctrinal, basado en la idea de que la DUDH, instrumento jurídicamente no vinculante, se ha convertido en una costumbre internacional que los estados no pueden evitar⁴⁴⁰.

La carta constitutiva de la ONU no hace ninguna referencia directa a los DD.HH como regla *ius cogens*. Sin embargo, esto parece implícito al propio sistema. Winters (2009)⁴⁴¹ señala que su incorporación en las relaciones internacionales, por obra de la doctrina, ha surgido naturalmente como elemento contrapuesto a los horrores de la

⁴³⁸ Hall, S. (2001). The Persistent Spectre: Natural Law, International Order and the Limits of Legal Positivism. *European journal of international law*, volume 12, 2, 253-269.

⁴³⁹ Orakhelashvili, A. (2006). *Peremptory norms in international law*. Oxford: Oxford University Press.

⁴⁴⁰ Las costumbres internacionales pueden ser rechazadas mediante el procedimiento de la objeción persistente.

⁴⁴¹ Winters, F. X. (2009). *Remembering Hiroshima: Was it Just? (Justice, International Law and Global Security)*. Farnham: Ashgate Publishing Limited.

Segunda Guerra Mundial. Su proceso histórico ha tomado un nuevo impulso a partir de ese evento y se ha plasmado en diferentes instrumentos internacionales bajo la idea de que son valores universales, aplicables a todos los seres humanos. ¿Sería AL una excepción en este proceso histórico de afirmación de los DD.HH? Este investigador acredita que no.

La elevación de esos derechos a la categoría de *ius cogens*, obra de la doctrina y de los tribunales, ha encontrado un apoyo enorme en esa parte del planeta. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD.HH proclama constantemente que los DD.HH poseen naturaleza perentoria (Caso Contencioso de la Corte Interamericana de DD.HH de 19 de Noviembre de 1999. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) *Vs.* Guatemala. Serie C N° 63; Serie C N° 229; Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de DD.HH de 17 de Septiembre de 2003. Caso Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Serie A N° 18; Caso Contencioso de la Corte Interamericana de DD.HH de 23 de Noviembre de 2004. Caso de las Hermanas Serrano Cruz *Vs.* El Salvador. Serie C N° 118; Caso Contencioso de la Corte Interamericana de DD.HH de 8 de Julio de 2004. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri *Vs.* Perú. Serie C N° 110; Caso Contencioso de la Corte Interamericana de DD.HH de 4 de Julio de 2006. Caso Ximenes Lopes *Vs.* Brasil. Serie C N° 149; Caso Contencioso de la Corte Interamericana de DD.HH de 25 de Noviembre de 2006. Caso del Penal Miguel Castro Castro *Vs.* Perú. Serie C N° 160; Caso Contencioso de la Corte Interamericana de DD.HH de 26 de Agosto de 2011. Caso Torres Millacura y otros *Vs.* Argentina; Caso Contencioso de la Corte Interamericana de DD.HH de 25 de Octubre de 2012. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños *Vs.* El Salvador. Serie C N° 252; Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de DD.HH de 19 de Agosto de 2014. Caso Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Serie A N° 21 etc.).

Si se toma por base que el derecho internacional público (y la propia doctrina del *ius cogens*) ha sido influenciado por el derecho natural (Hugo Grocio, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y la dimensión jurídica de la Escuela de Salamanca), no es de extrañar

que el humanismo asumiera el rol que actualmente representa en la esfera de las relaciones internacionales, inclusive en aquellas de naturaleza mercantil.

En lo que concierne a las relaciones UE-AL, además, esos valores podían ser más fácilmente compartidos en virtud de la herencia cristiana resultante de la colonización española y portuguesa. De hecho, el ingreso de ambos países en la CEE, en 1986, ha contribuido a un estrechamiento de las relaciones desde entonces. Con efecto, tanto los acuerdos comerciales recíprocos como el SPG⁴⁴² (un AC autónomo mediante el cual la UE proporciona acceso preferencial no recíproco a su mercado único para los productos originarios de países y territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios) incorporan ese humanismo. La protección social como condicionante de acceso al mercado en las relaciones comerciales UE-AL expresa ese valor.

Se ha comentado anteriormente que los DD.HH no están contemplados en el sistema multilateral de comercio de la OMC. No obstante, observan Thorstensen, Badin, Muller & Eleotério (2014)⁴⁴³, que la cooperación técnica entre OMC y OIT, relativamente a los derechos laborales fundamentales, está tomando forma en una multitud de acuerdos preferenciales de comercio. Los autores mencionan tres tipos de compromisos:

⁴⁴² El SPG de la UE - Reglamento UE nº 978/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 25 de octubre de 2012, publicado el 31 de octubre del 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo - señala diversos instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos, del medioambiente, de fomento de la democracia y de la buena gobernanza, en su ANEXO VIII, parte A. Esos instrumentos, básicamente convenios de la ONU y de la OIT sobre DD.HH.L, deben ser observados por terceros países para efectos de concesión de preferencias comerciales.

⁴⁴³ Thorstensen, V.; Badin, M. R.; Müller, C. & Eleotério, B. (2014). Acordos Preferenciais de Comércio: da multiplicação de novas regras aos maga-acordos comerciais. *Política Externa*, 23 (1), jul/ago/set, 151-179.

- La cooperación entre las partes.
- La elaboración de un listado de derechos básicos que deben ser resguardados por el sistema legislativo nacional de cada una de las partes (por ejemplo, la eliminación del trabajo forzado y la abolición del trabajo infantil).
- La asunción de la obligación de mantener el mínimo de protección en la legislación nacional sin que existan mecanismos capaces de flexibilizar la aplicación de esas garantías. La idea es evitar que la flexibilización confiera ventajas competitivas en el comercio bilateral.

AL, se ha comentado anteriormente, nunca ha apoyado *motu proprio* la cláusula social en los acuerdos comerciales, porque su abundante y barata mano de obra confería a los países de la región ventajas competitivas. Para que se tenga idea, el único acuerdo firmado por Brasil que cuenta con disposiciones relacionadas con derechos laborales es la Declaración sobre Cuestiones Sociolaborales, en el ámbito del Mercosur⁴⁴⁴. Sin embargo, en AL, según los autores, el rechazo a la incorporación de cláusulas sociales en la regulación del comercio está tomando una perspectiva diferente cuando el signatario del AC es China.

En este caso, el rechazo tiende a ser relativizado en función de la ingente cantidad de productos originarios del gigante asiático que ingresa en el territorio de esos países. En otras palabras, AL rechaza la inclusión de la cláusula social en relación a UE, pero considera importante su inclusión cuando su socio comercial es China. La legislación laboral y de DD.HH en AL es suficientemente desarrollada. Muchos países son signatarios de varias convenciones internacionales, incluyendo los principales convenios de la OIT. La incorporación de la cláusula social no implicaría ajustes importantes en la legislación doméstica de los países latinoamericanos y podría, al menos teóricamente, ayudar a prevenir (aunque eso sea totalmente inviable en la

⁴⁴⁴ Esta Declaración reitera principios de promoción de igualdad, eliminación de trabajo forzado, derecho de los menores y derechos sindicales. *Thorstensen et al*, ob. cit., pp. 174.

práctica) la importación de bienes chinos producidos bajo condiciones degradantes al ser humano.

La mayor preocupación latinoamericana en relación a las importaciones de productos chinos - y que es básicamente la misma preocupación que la UE tiene en relación a cualquier PED (lo que incluye naturalmente la propia China y los países latinoamericanos) es la utilización de la precariedad de condiciones humanas y laborales como ventaja competitiva⁴⁴⁵.

Esos temas no previstos en el marco multilateral de la OMC (DD.HH.L, medioambiente, inversiones, competencia etc.) son denominados OMC-Extra. Como ocurre con la cláusula social en relación al comercio UE-AL, ellos pueden afectar profundamente el comercio internacional.

La inclusión de todo tema extra a la OMC, previsto, v.g., en los acuerdos preferenciales de comercio, afecta no solamente al comercio entre los países signatarios del acuerdo, sino a terceros países también. Horn, Mavroidis & Sapir (2010)⁴⁴⁶ señalan que esos acuerdos preferenciales (en los que se podría incluir también los mega acuerdos de libre comercio, como el negociado entre UE y EE.UU) incluyen disposiciones que interfieren en el acceso de bienes y servicios a los mercados de las partes (y, por consecuencia, en el comercio de los terceros países) por los países que no adopten determinados estándares laborales y de DD.HH estipulados en esos acuerdos. O sea, los PED acabarían enfrentando dificultades en sus exportaciones para los mercados de los miembros signatarios. La cláusula social se insiere en la categoría OMC-extra. Tanto UE como EE.UU están buscando insertar temas sociales (además de los medioambientales) en sus acuerdos preferenciales de comercio, aunque UE va más allá, al incluir también el tema de género.

⁴⁴⁵ Sobre los bajos salarios, este investigador recomienda el estudio del debate entre los economistas clásicos y los keynesianos, además del modelo AS/AD (oferta agregada y demanda agregada).

⁴⁴⁶ Horn, H., Mavroidis, P. C. & Sapir, A. (2010). Beyond the WTO? An anatomy of EU and US preferential trade agreements. *The World Economy*, 33(11), 1565-1588.

La definición de los DD.HH es tremendamente problemática, como se ha mencionado anteriormente. Aguirre & de Sousa (1998)⁴⁴⁷, en una obra conjunta, retratan las dificultades de buscar una conceptualización capaz de satisfacer al enfoque multicultural. Por su vez, Ridruejo (2011)⁴⁴⁸ cuestiona hasta mismo si todos los habitantes del planeta deben gozar de los mismos derechos y libertades fundamentales o si, por el contrario, esos derechos y libertades están condicionados por la cultura, la religión, la ideología, el grado de desarrollo y la historia. Se trata, en palabras del autor, de la dialéctica entre la universalidad y el particularismo de los DD.HH.

Como la definición de los DD.HH es muy problemática y la atribución e interpretación de la extensión exacta de cada término jurídico muy poco factible de realizarse para cada AC, la UE, con base en el carácter *ius cogens* de los DD.HH y de modo muy pragmática, procede a la referenciación de compromisos adoptados en foros multilaterales, en especial la ONU y la OIT. ¿Pero qué se debe comprender por protección social, objeto de la cláusula social incorporada en los acuerdos comerciales? El tema será analizado en el próximo epígrafe.

3.2 CLÁUSULA SOCIAL: OBJETO Y DESARROLLO HISTÓRICO

El primero que se debe hacer es no confundir la expresión “protección social”, empleada algunas veces en este texto en su sentido amplio, con la expresión mucho más estricta “seguridad social”, aunque esta última esté reconocida, juntamente con el

⁴⁴⁷ Aguirre, V. & de Sousa, B. (1998). *Por una concepción multicultural de los derechos humanos*, vol. 12, UNAM.

⁴⁴⁸ Ridruejo, J. A. P. (2011). Sobre la universalidad del Derecho internacional de los derechos humanos. *Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época*, 12, 267-286.

derecho al trabajo, en la DUDH⁴⁴⁹. Este comentario podría ser redundante, no obstante, su explicitación es conveniente puesto que algunos autores, como Artigas (2005)⁴⁵⁰, vinculan la protección social como elemento contrapuesto a las situaciones derivadas del desempleo, de las discapacidades, del envejecimiento, de la salud etc. En un sentido más amplio, que es lo que se pretende atribuir a la expresión en esta investigación, la protección social correspondería a la protección de los DD.HH.L.

La UE, en su acción exterior en general y en sus relaciones comerciales con los PED, particularmente en lo que interesa a esta tesis doctoral, adopta un sentido amplio a esta protección. La expresión habitualmente empleada por la doctrina para referirse a su inclusión en los acuerdos internacionales es “cláusula social” (o cláusula de derechos humanos). Abarca diferentes categorías de derecho, como se verá más adelante. Observa Barrientos (2004)⁴⁵¹ que la inclusión de la cláusula social en las relaciones comerciales UE-AL es armoniosa con la obligación general, ampliamente aceptada por

⁴⁴⁹ **Artículo 22.** *Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.* **Artículo 23. 1.** *Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; 2.* *Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; 3.* *Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social; 4.* *Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.* **Artículo 24.** *Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.* **Artículo 25. 1.** *Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad; 2.* *La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social; Artículo 28.* *Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.*

⁴⁵⁰ Artigas, C. (2005). *Una mirada a la protección social desde los derechos humanos y otros contextos internacionales*. Chile: CEPAL – Naciones Unidas.

⁴⁵¹ Barrientos, A. (2004). *Regulation and social protection: leading issues in competition, regulation and Development*. London: Edward Elgar.

la doctrina, de que los estados deben cooperar entre sí para proporcionar estándares mínimos de bienestar y protección social a sus poblaciones.

En términos normativos, esta afirmación viene proclamada, por ejemplo, en los artículos 11 y 12 del PIDESC⁴⁵². Ciertas actividades llevadas a cabo por el BM (como sus proyectos para los pueblos indígenas) también apuntan para este camino⁴⁵³. Las políticas de protección, bienestar y cohesión social deben perseguir continuamente el propósito de corregir las fracturas sociales características del proceso de desarrollo económico (pobreza, marginación, exclusión, desigualdad etc.). Estos fenómenos (marginación, exclusión social y desigualdad) se manifiestan de distintos modos. Diferentes categorías de derechos son violadas cuando una persona se encuentra en esta situación. En los países pobres, señala Rodrik (2011)⁴⁵⁴, esa situación deriva esencialmente de la baja productividad que puede estar asociada a diversas razones, entre las cuales la existencia de élites explotadoras, típicamente confabuladas con el gobierno, que bloquean cualquier mejora de las condiciones económicas que pudiera amenazar su poder. En otra obra, el autor afirma de modo tajante que ninguno de los modelos económicos es universalmente válido (Rodrik, 2016)⁴⁵⁵, algo que se puede asociar con la idea, afirmada por Acemoglu & Robinson (2012)⁴⁵⁶ de que tanto la prosperidad como la pobreza están determinadas por los incentivos creados por las instituciones (la política determina qué instituciones tiene un país).

⁴⁵² Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la AGNU en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.

⁴⁵³ El Banco Mundial, mediante su marco de Manejo de Riesgo Social, ha conducido la protección social a un enfoque volcado esencialmente al desarrollo, de carácter preventivo, en vez de orientarse a la ayuda humanitaria.

⁴⁵⁴ Rodrik, D. (2011). La paradoja de la globalización. Barcelona. Antoni Bosh editor.

⁴⁵⁵ Rodrik, D. (2016). Las leyes de la economía. Vizcaya. Deusto.

⁴⁵⁶ Acemoglu, Daron & Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países. Barcelona. Deusto/Centro Libros PAPF.

Será exactamente el desarrollo histórico que extenderá a la expresión “protección social” el sentido que tiene en el ámbito de la política exterior y comercial de la UE. La evolución histórica de la protección social revela datos muy interesantes. El estado liberal del siglo XIX, en el contexto de la revolución industrial, proclamaba los derechos individuales. Sin embargo, la sociedad de la época padecía graves problemas sociales relacionados con las precarias condiciones de trabajo existentes. En Reino Unido, la actuación asistencialista de la Iglesia enfrentaba la oposición del gobierno, que pugnaba por la abolición de la protección social como forma de presionar los sectores asistidos a integrarse en los mercados laborales.

Esas medidas, juntamente con la desregulación total del mercado, encontraron enorme resistencia en la sociedad que, mediante intensos movimientos obreros, llevó la denominada "cuestión social" a un debate profundo en el Parlamento. La fuerte presión social logró impulsar reformas legislativas cuyo propósito era dúplice: a) atender a la demanda por intervenciones del estado en la economía y b) atender a la demanda por protección social para los marginados generados por el liberalismo. Con los primeros sindicatos de clase empezarán también las negociaciones por mejores condiciones laborales (Offe, 1990)⁴⁵⁷. La precaria situación de los trabajadores ha conducido a las primeras iniciativas de adopción de políticas sociales que, en un ambiente de creciente industrialización y urbanización, como la existente en la Europa del inicio del siglo XX, ha tenido enorme repercusión.

Los principios de Beveridge, plasmados en el informe “El Seguro Social y sus Servicios Conexos” publicado en 1942, sentarían las bases de la seguridad social con la integración de los seguros sociales, la asistencia social y los seguros voluntarios complementarios. Según Harris (1994)⁴⁵⁸, eso ha llevado la protección social a un paso adelante, al establecer un engranaje donde el segmento económicamente activo

⁴⁵⁷ Offe, C. (1990). *La política social y la teoría del Estado (Contradicciones en el Estado del Bienestar)*. Madrid: Alianza Editorial.

⁴⁵⁸ Harris, J. (1994). *Beveridge's social and political thought*. Oxford: Clarendon Press.

proporcionaría recursos para los elementos inactivos temporal o permanentemente, mediante el recibimiento de prestaciones de naturaleza social.

La OIT, en 1944, poco antes del término de la Segunda Guerra Mundial, aprobó la Declaración de Filadelfia y consagró la seguridad social en nivel internacional, hecho reproducido por la DUDH de 1948. No obstante, desde su fundación en 1919, las Conferencias Internacionales de la OIT, asentadas en la representación tripartita (trabajadores, empleadores y gobiernos), han aprobado y conferido notoria legitimidad a diversos convenios internacionales que mejorarían las condiciones laborales de los trabajadores en todo el mundo (CEPAL, 2007)⁴⁵⁹. Algunos de los convenios más significativos son señalados por la UE en sus acuerdos comerciales con los PED⁴⁶⁰.

El Plan Marshall (denominado oficialmente *European Recovery Program*), elaborado por el Secretario de Estado norteamericano George Catlett Marshall (jefe del Estado Mayor del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial) y adoptado en julio de 1947, planteaba los derechos económicos y sociales (Wexler, 1983)⁴⁶¹, mediante la implementación del denominado consenso keynesiano⁴⁶², base de los actuales sistemas de seguridad social y de relaciones laborales (Bilbao, 1990)⁴⁶³. Este plan ha vigorado

⁴⁵⁹ CEPAL. (2007). *Las reformas de salud en América Latina y el Caribe: su impacto en los principios de la seguridad social. Documentos de Proyectos*. Recuperado de https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:qDyKOyUld-8J:www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/24058/LCW63_ReformasSalud_ALC_Cap1.pdf+principios+de+Beveridge&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEEsg8j8U-zue-HaxHtAx4RdgphIBEDwAl3uOiOqkIH74Gjl7fhPqQd65JwJs_o_tu9EplQnLDSp0-oodw2SLOXutlkd40qi-k-SGBcvKkNkj2x9UtuibOniutWMcy6qKoSwOaelLP&sig=AHIEtbR8dPL3IsTLA8Bf-2y8bf50UKFR-A

⁴⁶⁰ Por ejemplo, en el Anexo VIII del SPG de 2012.

⁴⁶¹ Wexler, I. (1983). *Marshall Plan Revisited: The European Recovery Programme in Economic Perspective*. Connecticut: Greenwood Press.

⁴⁶² El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “El refuerzo de la gobernanza económica — La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento” lo señala en su apartado 4.6. DOUE de 11.4.2006 (C 88/68). El Informe Anual sobre la Aplicación de la Reforma de los Fondos Estructurales, de la Comisión Europea (04.12.1991), también señala el keynesianismo en sus apartados 1.2.3.2 y 1.2.5.2.

⁴⁶³ Bilbao, A. (1990). La lógica del Estado de bienestar y la lógica de su crítica: Keynes y Misses. *Papers*, 34, Universitat Autònoma de Barcelona.

durante cuatro años fiscales (de 1947 a 1951). Durante ese período, casi 13 mil millones de dólares fueron destinados a la reconstrucción de los estados europeos integrantes de la OECE (1948), precursora de la OCDE⁴⁶⁴.

La reconstrucción europea ha sido marcada por la actuación del estado en el ámbito económico y social, con el propósito de evitar las tensiones sociales del período anterior a la guerra (Sorel y Padoan, 2008)⁴⁶⁵.

Aunque los recursos económicos fuesen empleados para fomentar el comercio, los créditos y la liberalización del capital, el pacto social resultante de los acuerdos negociados entre el estado, las grandes empresas y los sindicatos generaría estabilidad y contribuiría a la formación del estado de bienestar social (estado providencia o *Welfare State*) entre 1950 y 1970. Esta era la apuesta de los estados europeos: incrementar su presencia en la economía con un tríplice propósito: a) desarrollar políticas capaces de promover la inclusión social del individuo mediante el estímulo de su potencialidad⁴⁶⁶, b) perseguir la reducción de la desigualdad socio-económica, c) incrementar la protección social a los más desfavorecidos (Gómez, 1995)⁴⁶⁷. Al final, como afirma Hobsbawm (1998)⁴⁶⁸, la intensidad de la presencia del estado en Europa occidental superaría la verificada en los Estados Unidos o en Japón.

La preocupación social, así como la destinación de recursos públicos en gastos sociales, acabaría por transformar los estados liberales en estados socialdemócratas.

⁴⁶⁴ Con el ingreso de EE.UU y Canadá (1961), la OECE se convirtió en la OCDE.

⁴⁶⁵ Sorel, E. & Padoan, P. C. (2008). *The Marshall Plan: Lessons Learned for the 21st Century*. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

⁴⁶⁶ La protección social, entendida como el conjunto de derechos humanos garantizados por el Estado, impulsaría la ciudadanía y fomentaría el desarrollo del potencial del individuo. La idea era, básicamente, permitir a cada persona su plena inclusión en la sociedad, al fomentar toda su potencialidad.

⁴⁶⁷ Gómez, J. M. (1995). El Estado del Bienestar y el reto de la solidaridad. *Anales de Estudios Económicos y Empresariales*, 10, 63-89.

⁴⁶⁸ Hobsbawm, E. (1998). *Historia del siglo XX*. Buenos Aires: Crítica.

Efectivamente, el desempleo y la tensión social resultantes de la crisis de 1929, así como las experiencias del fascismo y del comunismo, acabarían impulsando diversos países de la Europa occidental, tras la Segunda Guerra Mundial, a seguir un nuevo camino plasmado en dos elementos centrales:

- La democracia: asentada en los partidos políticos de masas (gobiernos de coalición nacional) como mecanismo para minimizar el antagonismo de clases;
- El keynesianismo⁴⁶⁹: constituido por el binomio “justicia social-acumulación de capital” que deja para tras la anterior política del *laissez faire* del liberalismo económico (perspectiva de la economía clásica de Adam Smith, David Ricardo y Jean-Baptiste Say)⁴⁷⁰. Como señala Bobbio (2002)⁴⁷¹, los partidos socialdemócratas, incluyendo la izquierda no comunista, pasarían a promover políticas de protección social (implementadas por los estados de bienestar), donde el estado asumiría un papel económico central, para garantizar y mejorar las condiciones laborales y proteger, como afirmaría Habermas (1994)⁴⁷², el crecimiento natural del capitalismo. A partir de ahí surgen tres modelos distintos de estado de bienestar (Esping Andersen, 1993)⁴⁷³:

⁴⁶⁹ John Maynard Keynes rechazaba la noción clásica de una economía auto-reparadora y argumentaba que esperar la autorecuperación de la economía era insensato porque, a largo plazo, “todos estarían muertos”. Keynes creía que, bajo ciertas circunstancias, la economía no rebotaría naturalmente, sino que solo se estancaría o, aún peor, caería en una espiral mortal. Para Keynes, la única manera de lograr que la economía se moviera de nuevo, era incrementar el gasto público. Para él, el estímulo fiscal (aunque en la forma de déficit) era necesario para luchar contra el desempleo. Universidad de California (Irvine): transcripción de las clases del profesor Peter Navarro en su curso “The Power of Macroeconomics: Economic Principles in the Real World”, a que asistió este investigador (enero-abril 2016).

⁴⁷⁰ Sobre las perspectivas de Keynes y Hayek, vid el interesante libro de Wapshott, N. (2013). *Keynes vs Hayek*. El choque que definió la economía moderna. Barcelona. Deusto.

⁴⁷¹ Bobbio, N; Matucci, N. & Pasquino, G. (2002). *Diccionario de Política*. Ciudad de México: Siglo Veintiuno.

⁴⁷² Habermas, J. (1994). *Ensayos Políticos*. Barcelona: Editorial Península.

⁴⁷³ Esping-Andersen, G. (1993). *Los Tres mundos del Estado de Bienestar*. Valencia: Ediciones Alfons El Magnanim.

- 1) El estado de bienestar liberal. En este modelo predominarían las ayudas a los más pobres, normalmente asociados a grupos específicos (determinados grupos étnicos, individuos en estado de indigencia etc.). Este ha sido el sistema seguido por países como EE.UU, Reino Unido, Australia y Canadá.
- 2) El estado de bienestar conservador (o corporativista). Este modelo se caracterizaría por la intervención subsidiaria del estado. En otras palabras, el estado solamente intervendría cuando se constataste la incapacidad de la propia familia para atender a sus miembros. Este sistema ha sido adoptado por Alemania, Austria, Italia y Francia.
- 3) El estado de bienestar socialdemócrata. Este modelo consagraría la universalización y la desmercantilización de los derechos sociales. Ha sido adoptado por los países nórdicos, como Suecia.

El estado de bienestar, en cualquier de sus modelos, se caracteriza por la promoción de los DD.HH.L, lo que significa que tanto los tratados internacionales sobre DD.HH como los convenios de la OIT son positivamente apreciados por el estado. Las relaciones comerciales UE-AL, en virtud de la inclusión de la cláusula social, plasman los principales instrumentos de ambos.

El modelo keynesiano de estado de bienestar ha avanzado, a lo largo del tiempo, hacia el capitalismo post-industrial, caracterizado por políticas de carácter neoliberales que exaltan la importancia del comercio internacional en el crecimiento económico. Con el neoliberalismo, el estado pasaría a coordinar los agentes económicos y dejaría la producción y distribución de la riqueza al propio mercado.

Sin embargo, al no lograr solucionar el problema de la pobreza y de la exclusión social (al contrario, la desigualdad social se ha acentuado: estructura y funcionamiento del mercado, ya analizados), el estado ha reforzado su rol de agente interventor en la economía y de fomentador de la cohesión social. Las decisiones nacionales relativas al

desarrollo político y económico pasarían a subsumirse, por un lado, a las estructuras institucionales de ámbito mundial (instancias multilaterales como la ONU, el FMI, el GBM y la OMC⁴⁷⁴) y, por otro lado, ha entrelazarse cada vez más con el enfoque desarrollista en que deben primar los DD.HH como base lógica de las relaciones internacionales (Garretón, 2007)⁴⁷⁵.

Kucera (2001)⁴⁷⁶ señala, en sentido similar al BM y a la UE, que la situación de pobreza crónica dificulta el crecimiento económico del país y contribuye a la inestabilidad social y política, afectando negativamente a la estabilidad de las relaciones internacionales. Cuando la UE estrecha sus lazos comerciales con terceros países, también tiene en vista el incremento del poder adquisitivo de sus poblaciones y la repercusión sobre la demanda de bienes y servicios europeos. Esta es, esencialmente, una de las claves del modelo CAGE desarrollado por el prof. Gemawat (2014)⁴⁷⁷.

Tanto el BM como la UE asocian fuertemente el desarrollo económico a la protección social (DD.HH.L). Los acuerdos UE-AL, incluyendo el SPG, impulsa el desarrollo de países, subregiones y regiones en consonancia con el respeto a esos derechos, algo fundamental para la política exterior común. Las medidas (incluyendo la ratificación de los instrumentos internacionales pertinentes) que la UE espera que sean adoptadas por los países latinoamericanos visarían incrementar las oportunidades de las personas, para que tanto ellas como la sociedad en general puedan desarrollarse adecuadamente. No obstante, esta aspiración parece distanciarse de la realidad, entre

⁴⁷⁴ El GATT era esencialmente un acuerdo provisional.

⁴⁷⁵ Garretón, M. A. (2007). *Del Post-Pinochetismo a la Sociedad Democrática. Globalización y Política en el Bicentenario*. Santiago: Debate.

⁴⁷⁶ Kucera, D. (2001). *The Effects of Co-worker Rights on Labor Cost and Foreign Direct Investment: Evaluating the 'conventional wisdom'*. Discussion Paper 130, International Institute for Labour Studies, ILO, Ginebra.

⁴⁷⁷ Curso auspiciado por IESE (Barcelona) y realizado entre los días 03 de febrero y 31 de marzo de 2014. Apuntes personales.

otras razones, por el funcionamiento del mercado⁴⁷⁸ y la justiciabilidad conferida a los diferentes DD.HH que integran la cláusula social.

Con efecto, los instrumentos internacionales señalados en los acuerdos comerciales recíprocos y no recíprocos (con base en el SPG) plasman derechos que padecen de justiciabilidad (posibilidad de ser reclamados ante los tribunales), aunque la garantía pueda ser, cuando integral, teóricamente proporcionada por vía administrativa, como señalan Steiner, Alston & Goodman (2008)⁴⁷⁹.

⁴⁷⁸ El debate entre los economistas clásicos y los *keynesianos* es uno de los principales en el campo de la Macroeconomía. Aunque se remonte a los años 30 (durante la Gran Depresión), muchas de las políticas macroeconómicas actualmente apoyadas por los conservadores, tienen sus raíces en la Economía Clásica, mientras que aquellas menos conservadoras (o progresistas) suelen ser generalmente más favorables a la perspectiva *keynesiana*. El debate versa, fundamentalmente, sobre cómo una economía se ajusta durante una recesión y encuentra la manera de regresar al pleno empleo. Los economistas clásicos creen que para curar la economía es necesario llevar a cabo un mecanismo de ajuste de precios. Acreditan que, en caso de desempleo, los precios, los salarios y los tipos de interés caerían en bloque. Esta caída generalizada rebotaría en el momento en que las personas, en virtud de los bajos precios, vuelvan a consumir. El aumento del consumo conduciría nuevamente al incremento de la producción y de la inversión, de modo que la economía rápidamente volvería a su equilibrio de pleno empleo. Por su vez, la escuela *keynesiana* argumentaba que antes de que este mecanismo de ajuste de precios tenga tiempo para funcionar, sería fulminado por un otro mecanismo denominado “ajuste de la renta”. En otras palabras, para los *keynesianos*, cuando la economía se hunde en una recesión, las personas no compran más porque su renta se ha mermado. Esta caída en la renta hace que las personas gasten menos y ahorren menos y que, por consecuencia, las empresas inviertan menos y produzcan menos. Esta reducción en el consumo, ahorro, inversión y producción a su vez provoca que la economía se hunda más en la recesión en vez de volver al pleno empleo. Así, mientras que para el enfoque clásico la mejor cura para una recesión es dejar que el mercado opere libremente (*laissez faire*), ya que la mayoría de las políticas del gobierno, para esos economistas, solamente empeora la situación (por eso proclaman la reducción del estado y su no intervención en la economía), para los *keynesianos* la mejor cura es arrancar el motor económico mediante el incremento del gasto público a gran escala. Los *keynesianos* normalmente creen que el gobierno puede crear e implementar políticas capaces de afectar positivamente a la economía. Por último, comentar que la Economía Clásica tiene sus raíces en los escritos sobre el libre mercado de los economistas del siglo XIX, como Adam Smith, David Ricardo y, principalmente, Jean-Baptiste Say, economistas que creían que el problema del desempleo es un componente natural del ciclo económico, que se autocorrigue y, lo más importante, que no es necesario que el gobierno intervenga en el libre mercado para corregirlo. La culpa del desempleo, según ellos, es que los salarios son muy elevados. Además afirman que, en caso de recesión, los trabajadores desempleados estarán dispuestos a trabajar por un salario más bajo. Así, los salarios bajarían hasta niveles donde nuevamente resulte rentable a las empresas contratar a trabajadores y, con eso, la recesión terminaría. Para ambos enfoques, la asignación de recursos por parte de las empresas es esencial en el proceso de producción, lo que significa que los bajos salarios son aceptables, aunque la recuperación para un estado de pleno empleo (con un mayor número de consumidores capaces de consumir los productos importados de la UE) sería teóricamente más rápido con la aplicación de la estrategia *keynesiana* de gastos públicos a gran escala.

⁴⁷⁹ Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. (2008). *International human rights in context: law, politics, morals: text and materials*. Oxford, Oxford University Press.

La UE aspira que los países y subregiones de AL actúen ante los problemas de inclusión e injusticia social y garanticen derechos que la doctrina, en todo el mundo, discute se pueden ser realmente llevados ante los tribunales. De cualquier modo, independientemente de las potenciales estrategias vinculadas a la condicionalidad representada por la cláusula social, el hecho es que hace muchos años que se busca asociar los DD.HH al DD, una aspiración permanente de los PED. En el próximo apartado se analizará este tema.

3.3 CLÁUSULA SOCIAL Y DERECHO AL DESARROLLO: COMENTARIOS INTRODUCTORIOS

El DD ha sido señalado por la AGNU como un derecho inalienable. Todo ser humano y todos los pueblos tienen el derecho de participar, contribuir y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político (ACNUDH, 1986)⁴⁸⁰.

Según Dessing (2001)⁴⁸¹, la protección social asociada a la cláusula social, según la perspectiva actual contemplada en la política exterior de la UE, camina en paralelo con la gobernabilidad democrática y la consolidación de un enfoque de derechos en las políticas públicas, cuyo objetivo mayor sería la reducción de la pobreza y el desarrollo socio-económico (del país, de la subregión o región). Esas políticas responden a la obligación del estado de asegurar los derechos básicos de todos los individuos en sus múltiples expresiones, fomentando aspectos como, por ejemplo, el derecho a la vida y a la libertad, la libertad de opinión y de expresión, la igualdad de género, el derecho al trabajo y la educación, la prohibición de la esclavitud y de la tortura, el acceso a la justicia y a condiciones laborales compatibles con la dignidad humana etc. La protección social tiende a reforzarse con la cohesión proporcionada por el enfoque hacia

⁴⁸⁰ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2002). *La mundialización y sus consecuencias sobre el pleno disfrute de los derechos humanos*. Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/28. Recuperado de <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/e0cf64c479e41632c1256ba60055dff2?OpenDocument>

⁴⁸¹ Dessing, M. (2001). *The social clause and sustainable development*. ICTSD.

las políticas de desarrollo y se expande con el fomento y la consolidación de los DCPESC. La ciudadanía plena emerge de la consagración de todos estos elementos.

Enfocar los DD.HH bajo la perspectiva del desarrollo toma como idea básica, asentada en el derecho internacional público, de que las personas son, como afirma Fouchard (2007)⁴⁸², titulares de derechos que los estados deben proporcionar, mediante normas jurídicas y políticas adecuadas, a toda la sociedad.

En los acuerdos comerciales UE-AL, los instrumentos internacionales que expresan el DD no suelen ser señalados. En el marco del SPG – el instrumento clave de la política de cooperación comercial de la UE – tampoco se hace alusión a esos instrumentos. Naturalmente, esto no significa que no exista una política europea enfocada al desarrollo. Al contrario, existen diversos documentos que plasman este objetivo (v.g. Informe de la UE sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (2011); Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2012 , sobre el Informe de la UE de 2011 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (2012/2063(INI)); Futuro de la política de desarrollo de la UE, Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2012 , sobre el Programa para el Cambio: el futuro de la política de desarrollo de la UE (2012/2002(INI) etc., incluyendo instrumentos específicos para AL: Cooperación al desarrollo con AL. Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2012 , sobre la definición de una nueva política de cooperación al desarrollo con AL (2011/2286(INI)⁴⁸³).

El GBM sí que persigue claramente el enfoque desarrollista con base en los DD.HH. En el ámbito del SPG europeo, la armonización de posturas con el GBM acabará ocurriendo en función de la utilización, por parte de la UE, del listado de los países más

⁴⁸² Fouchard, P. (2007). *Droit et moral dans les relations économiques internationales*. Paris: Centre Français de l'Arbitrage.

⁴⁸³ Apartado nº 41. *Subraya la importancia para la Unión Europea de desarrollar una política comercial más coherente con las políticas de desarrollo, con el fin que el comercio sea también vector de promoción de normas sociales equitativas y justas, especialmente para la inclusión de cláusulas sociales que respeten los derechos humanos en los acuerdos de cooperación.*

pobres del mundo elaborado y revisado periódicamente por esa entidad, para efectos de establecimiento de régimen jurídico.

La responsabilidad del estado de respetar, consolidar, ampliar, proteger e implementar los DD.HH está volcada a la consagración de la ciudadanía y al fomento del desarrollo socioeconómico (Piron, 2004)⁴⁸⁴, lo que implica, básicamente, en la valorización de la persona humana mediante la adopción de medidas que preserven, fomenten y garanticen cada una de las categorías generacionales de esos derechos⁴⁸⁵.

No se busca algo distinto en las relaciones comerciales con la UE, justamente porque la condicionalidad de la protección de los DD.HH.L tiene como objetivo estimular a los países latinoamericanos a ratificar e implementar los derechos pertinentes. Es importante enfatizar que las políticas de desarrollo, esencialmente, tal como concebidas en la actualidad, responden a la necesidad de respetar, proteger y hacer efectivos a los DD.HH.L. Estas políticas suelen estar basadas en estándares internacionales contenidos en diversos instrumentos jurídicos.

En este sentido, los instrumentos internacionales señalados por la UE en sus relaciones comerciales con AL proceden de la ONU y de la OIT. En este campo interesa comentar que la Declaración sobre el DD, adoptada por la AGNU en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986, así como los informes mundiales de desarrollo humano, toman por base las denominadas “siete libertades” del Informe del año 2000, a saber: 1) nivel de vida digno; 2) no discriminación (género, raza, origen nacional, étnico y religioso); 3) medios para desarrollar la potencialidad humana de cada uno; 4) trabajo decente y sin explotación; 5) seguridad personal (v.g., prohibición de la tortura y de la detención arbitraria); 6) prevención y combate a la injusticia y violaciones al imperio de

⁴⁸⁴ Piron, L. H. (2004). *Rights-based approaches to social protection*. UK Department for International Development. Londres: DFID.

⁴⁸⁵ El derecho internacional contemporáneo ha superado la concepción histórica de obligación negativa (abstención del estado en relación a los DCP) y ha asumido una forma proactiva.

la ley; 7) libertad para expresar opiniones, formar asociaciones y participar en la adopción de decisiones.

Estos principios se armonizan con la política exterior de la UE. En el ámbito del comercio internacional, el bloque europeo tiene demostrado su rechazo a la idea de que el deber estatal de asegurar la satisfacción de niveles mínimos de DD.HH – abarcados por esas siete libertades - desaparezca ante la escasez de recursos en el país. En otras palabras, la obligación del estado de satisfacer el más ampliamente posible los DD.HH.L debe prevalecer sobre la disponibilidad de recursos.

Obviamente, esta afirmación teórica encuentra en la realidad práctica severas dificultades, a tal punto que hasta mismo la forma cooperativa, señalada por la ONU como adecuada para combatir el subdesarrollo, no encuentra respaldo o impulso suficiente para implementarse en la proporción necesaria, según Carmona (2012)⁴⁸⁶. El estado asume contemporáneamente los deberes de respetar, proteger e implementar los DD.HH, enfoque que supera la asociación histórica entre DCP, por un lado, y la obligación meramente pasiva del estado de respetar esos derechos (abstención estatal). Ahora mismo, en relación a todas las categorías generacionales de DD.HH (DCPESC)⁴⁸⁷, afirma Hottelier (2014)⁴⁸⁸, existe también una obligación objetiva de implementación (asociada en la práctica, evidentemente, a la capacidad económica para realizarla), algo ni siempre viable.

⁴⁸⁶ Argenpress.info., Carmona, E. (2012). La noticia más censurada nº 7: La ONU proclamó 2012 Año Internacional de las Cooperativas. Recuperado de http://www.argenpress.info/2012_10_24_archive.html

⁴⁸⁷ Tradicionalmente, los DCP están asociados a una obligación negativa del Estado (abstención, deber de respetar sin interferir), mientras los DESC están asociados a una obligación positiva del Estado (desarrollo de políticas estatales apropiadas y activas, adopción de medidas legislativas y administrativas que permitan la plena realización de esos derechos, tomando en cuenta los principios de inclusión, igualdad y no discriminación).

⁴⁸⁸ Hottelier, M. (2014). Curso *Introduction aux droits de l'homme*, Universidad de Ginebra (31 de marzo-26 de mayo). Semana 5 (28 de abril-5 de mayo). Apuntes personales.

La cooperación internacional y el comercio internacional juegan aquí un rol muy importante en lo que se refiere a la promoción del desarrollo económico y social de los países, subregiones o regiones en desarrollo. La idea de que un país se encuentre en una situación de subdesarrollo no es justificable jurídicamente para permitirlo violar o ser negligente con sus deberes nacionales e internacionales de proporcionar condiciones compatibles con la dignidad humana.

La hermenéutica actual no admite la interpretación de que un estado, aunque en desarrollo, postergue *ad infinitum* sus obligaciones concernientes a la protección social, aunque atraviese épocas de restricciones presupuestarias asociadas a una situación de recesión económica (nacional, regional o internacional) o debido a problemas de índole estructural. Las personas, especialmente los miembros más vulnerables de la sociedad, pueden y deben ser protegidos por sus respectivos estados, con el fomento y cooperación continua de la sociedad internacional.

Como asevera Tomz (2007)⁴⁸⁹, la protección social no puede simplemente permanecer congelada a la espera de que el estado previamente logre alcanzar determinado nivel de desarrollo económico y social. Al contrario, el estado debe proporcionar a las personas los medios necesarios para que puedan alcanzar un nivel de vida adecuado y digno, con accesibilidad a bienes y servicios. El capítulo IX de la Carta de San Francisco (“Cooperación Internacional Económica y Social”), en su art. 55, exalta la importancia de la cooperación para crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. En este sentido, la ONU busca (letras a, b y c):

- Promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social.

⁴⁸⁹ Tomz, M. (2007). *Reputation and International Cooperation: Sovereign Debt across Three Centuries*. Princeton: Princeton University Press.

- Solucionar los problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario (y de otros problemas conexos) y promover la cooperación internacional en el orden cultural y educativo.
- Fomentar el respeto universal a los DD.HH y a las libertades fundamentales de todos - sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión - y la efectividad de tales derechos y libertades.

Además, el art. 56 determina que todos los países-miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de esos propósitos⁴⁹⁰. La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la ONU en relación a la cooperación corresponde a la AGNU y, bajo la autoridad de ésta, al Consejo Económico y Social. No obstante, la responsabilidad por la protección de los DD.HH recae esencialmente sobre los estados. Son ellos los destinatarios de estas normas jurídicas⁴⁹¹.

Diferentes instrumentos y eventos internacionales han procurado exaltar tanto la relevancia de los DD.HH como la responsabilidad de los estados en su protección y promoción en el marco del DD. Algunos de ellos son:

⁴⁹⁰ De acuerdo con el art. 57 de la Carta de San Francisco, los distintos organismos establecidos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, se vinculan a la ONU con el *status* de “organismos especializados”.

⁴⁹¹ No obstante, contemporáneamente, también es posible acaparar la responsabilidad de otros individuos (casos apreciados por el Tribunal Penal Internacional).

- La Declaración de la AGNU sobre el DD⁴⁹², adoptada en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986⁴⁹³;
- La Conferencia Mundial de DD.HH, celebrada en Viena en 1993 (durante la conferencia, 171 estados declararon que la promoción y protección de los DD.HH es la primera responsabilidad de los gobiernos);
- La Tercera Conferencia Ministerial de la OMC, efectuada en Seattle, 1999 (durante la conferencia, el CDESC de la ONU había declarado que la liberalización del comercio debe ser comprendida como un medio para lograr el objetivo del bienestar humano);
- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del año 2000, exaltaban la importancia de los estados y de la cooperación internacional para lograr los objetivos planteados: a) erradicación de la pobreza extrema y del hambre; b) enseñanza primaria universal; c) promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; d) reducción de la mortalidad infantil; e) mejora de la salud materna; f) combate al VIH/SIDA, al paludismo y otras enfermedades; g) sostenibilidad del medio ambiente; h) fomento de una asociación mundial para el desarrollo;
- El Consenso de Monterrey sobre Financiamiento del Desarrollo (2002) y el Informe de la Comisión Mundial sobre las Dimensiones Sociales de la Globalización

⁴⁹² Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Recuperado de <http://www2.ohchr.org/spanish/law/development.htm>

⁴⁹³ El documento destaca en su artículo 2: 1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del DD; 2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo; 3. Los estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.

(2004) exaltaron la importancia de las políticas destinadas a fomentar la protección social y a los DD.HH como forma de lograr una distribución equitativa de los beneficios generados por la globalización.

El desarrollo económico y social solamente cumple legítimamente su objetivo si puede funcionar como un instrumento para el desarrollo del ser humano. En el fondo, esta es la lección de Kliksberg (1999)⁴⁹⁴. La responsabilidad por el desarrollo es, en cierta medida, compartida entre el estado y la sociedad internacional. La condicionalidad de la protección social presente en los acuerdos comerciales UE-AL busca estimular esa responsabilidad. El acceso al mercado único, por parte de los PED, se ve facilitado por la ratificación de los instrumentos internacionales señalados en los acuerdos comerciales recíprocos y no recíprocos (caso del SPG), aunque la estructura del mercado no permite solventar con facilidad los problemas de asignación de recursos anteriormente señalados y la violación de los DD.HH.L de los trabajadores por agentes privados suele ser frecuente en ciertas zonas.

La presencia de la UE es fundamental en este ámbito, pero ella no asume esa responsabilidad de modo exclusivo, sino que fomenta su asunción por parte de los países latinoamericanos. En otras palabras, los países latinoamericanos poseen la responsabilidad principal por su propio desarrollo, lo que significa que durante ese proceso deberán llevar a cabo las tres obligaciones básicas identificadas por el derecho contemporáneo en relación a los DD.HH (respetar, proteger e implementar). Esas obligaciones parecen incorporadas en la dinámica de la política exterior de la UE. Antes de la entrada en vigor del PFPIDESC (5 de mayo de 2013), existían dudas sobre la justiciabilidad de los derechos de tercera generación en su propio ámbito intrazona. Sobre el tema se recomienda la lectura de las obras de Abramovich & Courtis (2003)⁴⁹⁵ y

⁴⁹⁴ Kliksberg, B. (1999). Capital social y cultura, claves esenciales del desarrollo. *Revista de la CEPAL*.

⁴⁹⁵ Abramovich, V. & Courtis, C. (2003). *Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales. La protección judicial de los derechos sociales*, 3, Ecuador, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, serie Justicia y Derechos Humanos. Neoconstitucionalismo y Sociedad.

López Martín (2016)⁴⁹⁶. Esta última autora sintetiza muy bien el problema al señalar que *la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales se ha cuestionado por diferentes razones. En primer lugar, por considerar que tales derechos están vagamente definidos, lo que no permite a los jueces justificar sus fallos acerca de si se ha producido o no una violación. En segundo lugar, por entender que son derechos progresivos por naturaleza, lo que supone que el logro de la efectividad de los mismos depende en gran medida de las políticas de los gobiernos. En tercer lugar, relacionado con lo anterior, se ha cuestionado que un tribunal pueda evaluar la realización progresiva de tales derechos.*

La participación de la UE en el proceso de desarrollo económico y social latinoamericano, no obstante, no responde a un deliberado altruismo o únicamente a la promoción de los valores fundamentales contemplados en su política exterior, puesto que derivan de una obligación derivada directamente de la ONU, entidad multilateral por excelencia cuyos instrumentos jurídicos son acatados, apoyados y difundidos por la UE en el marco de sus acuerdos comerciales con AL. La Declaración de 1986 de la AGNU (Resolución nº 41/128, de 04 de diciembre de 1986), aprobada por 146 votos a favor y uno en contra (de los EE.UU.)⁴⁹⁷ atribuye a los estados el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo de todos los miembros de la comunidad internacional⁴⁹⁸.

Como se ha visto anteriormente, la UE no es un estado. Jurídicamente no tendría que estar vinculada a esa resolución. Sin embargo, nadie duda que sea un actor muy relevante en la comunidad internacional y que sea consciente del papel que desempeña

⁴⁹⁶ López Martín, A. G. (2016). “Hacia la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito internacional en la era de la globalización, *in Nuevos retos y amenazas a la protección de los derechos humanos en la era de la globalización* (López Martín, A. G.; editora y Chinchón Álvarez, J. coordinador). Valencia. Tirant lo Blanch, 19-42.

⁴⁹⁷ Abstención de Alemania Occidental, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Israel, Japón, Reino Unido y Suecia.

⁴⁹⁸ Recientemente señalada en el Caso Contencioso de la CIDH de 21 de Mayo de 2013. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Serie C No. 261, así como en el Voto Concurrente del juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot.

y puede representar en diversos campos. Al plasmar la protección de los DD.HH en su cláusula social, la UE contribuye activa y positivamente con algo que, técnicamente, sería solamente aplicable a los estados. Esta postura revelaría un tecnicismo estricto y contraproducente a los ideales de desarrollo económico y social de todos los miembros de la comunidad internacional.

Autores como Smith (2008)⁴⁹⁹, comprenden los desafíos enfrentados por el bloque en un mundo cambiante, pero no ponen en tela de juicio la validez o la legitimidad de la promoción de los DD.HH en el ámbito de las relaciones exteriores de la UE, incluyendo las de naturaleza comercial. En el próximo epígrafe se analizará como alcanzar el desarrollo económico y social ha puesto en lados distintos a los PED y a los PD, que son los que estarían contribuyendo activamente con el desarrollo de los primeros. Aquí, la cláusula social puede tener un peso importante.

3.4 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: ALGUNAS CUESTIONES

Un largo y relevante debate se ha realizado sobre cómo alcanzar el desarrollo económico y social en los países. Para los países industrializados, la adquisición de los DCP era el paso previo y necesario para alcanzar el desarrollo al paso que para los PED, el propio desarrollo era precondition para lograr los DCP. A partir de la Declaración de 1986 de la AGNU, el establecimiento del DD como un DD.HH universal e inalienable ha logrado obtener gran repercusión⁵⁰⁰.

⁴⁹⁹ Smith, K. (2008). *European Union Foreign Policy in a Changing World*. Hoboken: John Wiley & Sons.

⁵⁰⁰ Opinión Consultiva de CIDH de 19 de Agosto de 2014. Caso Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Serie A No. 21; Caso Contencioso de CIDH de 20 de Noviembre de 2012. Caso 'Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala'. Serie C No. 253; Caso Contencioso de CIDH de 23 de Noviembre de 2010. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Serie C No. 218; Caso Contencioso de CIDH de 24 de Agosto de 2010. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Serie C No. 214; Caso Contencioso de CIDH de 17 de Junio de 2005. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Serie C No. 125.

Así, por un lado, se tiene el deber de los estados de cooperar entre sí para alcanzar el desarrollo económico y social de todos los miembros de la comunidad internacional y, por otro lado, el derecho de los estados en vías de desarrollo de buscar su propio desarrollo y de recibir, por vía de la cooperación, las contribuciones aportadas por los demás países. En términos comerciales, los PED se beneficiarían, en el marco del sistema multilateral de comercio, del establecimiento de la cláusula de habilitación consagrada en la Ronda Tokio de la OMC y, más recientemente, como resultado de la Conferencia de Nairobi (“Paquete de Nairobi”, de diciembre de 2015) de las seis Decisiones Ministeriales sobre la agricultura, el algodón y las cuestiones relacionadas con los PMA. Esas decisiones incluyen:

- 1) Un compromiso de eliminar las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios (el resultado más relevante en el ámbito de la agricultura en los 21 años de historia de la Organización);
- 2) La constitución de existencias públicas (*stocks* públicos) con fines de seguridad alimentaria;
- 3) El establecimiento de un mecanismo de salvaguardia especial para los PED;
- 4) La adopción de medidas relacionadas con el algodón;
- 5) El trato preferencial para los PMA en la esfera de los servicios;
- 6) La adopción de criterios para determinar si las exportaciones de los PMA pueden gozar de preferencias comerciales.

Interesa mencionar que, jurídicamente, la expresión “contribuciones aportadas por los demás países” no significa solamente aquellas realizadas por los PD. Aunque estos países tengan más condiciones económicas, técnicas etc. para realizar esas aportaciones, se ha verificado en los últimos años una intensificación de las relaciones Sur-Sur⁵⁰¹,

⁵⁰¹ Existe ya una inmensa bibliografía sobre la cooperación Sur-Sur. Vid, por ejemplo, Surasky, J. (2012). Seguimiento de la Cooperación Sur-Sur. *Revista española de desarrollo y cooperación* nº 29, 271-292; Rivero Illa, M. & Van Rompaey, K. (2015). La cooperación Sur-Sur en América Latina. *Política Exterior* nº 163 (v. 29), 100-107; Sotillo Lorenzo, J. A. (2007). “La cooperación Sur-Sur y la revitalización de la integración en América Latina” (2007), in *La construcción de una región: México y la geopolítica del Plan Puebla-Panamá*; in Cairo Carou, H; Preciado Coronado, J. A. y Rocha Valencia, A. (coordinadores). Madrid. Los Libros de la Catarata, 257-268 etc.

establecida entre los PED, de paso, ya señalada por la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Hacia una Asociación Estratégica UE-Brasil (Bruselas, 30.5.2007 COM(2007) 281 final) o, mucho antes, por la Comisión de las Comunidades Europeas (COM(93)82 final, Bruselas, 10 de marzo de 1993, art. 20: *Las Partes Contratantes reconocen su interés mutuo en fomentar las relaciones económicas y comerciales con otros países en vías de desarrollo en el marco de un concepto de cooperación regional y Sur-Sur*).

Además, la contribución no se resume en las ayudas financieras. Las cooperaciones de carácter interinstitucional son habituales y relevantes. La idea es ayudar a los PED a crecer y a andar con sus “propias piernas”. El refuerzo de la democracia y el respeto por los DD.HH son elementos fundamentales en todo el proceso, puesto que ambos son valores clave en la política exterior de la UE, como se ha visto.

La Declaración de 1986 también ha exaltado la interdependencia de los DCPESC (la indivisibilidad de los DD.HH)⁵⁰². Considerando el procedimiento relativo al seguimiento y supervisión de la actuación estatal en el campo de los DD.HH (por los órganos designados en los respectivos tratados o llevados a cabo por la UE, relativamente a la ratificación y efectiva aplicación de los tratados asociados a la cláusula social), se puede suponer, con mínima margen de error, que la intención de la UE es, en la medida del posible, que los PED implementen todos los DD.HH, independientemente de su categoría generacional.

El derecho contemporáneo, como se ha señalado anteriormente, concibe tres obligaciones para el estado en materia de DD.HH: respetar, proteger e implementar. En lo que concierne a los derechos económicos y sociales, la doctrina asume, de modo prácticamente unánime, que corresponden a una obligación positiva del estado. Para su efectiva realización es necesario invertir recursos. La cooperación internacional y el

⁵⁰² En relación a los DCP, ya se ha mencionado, la asociación histórica era la asunción de una obligación negativa por parte del estado (abstención u omisión). Esta concepción ha sido superada. Actualmente se comprende que mismo en relación a los derechos de primera generación, el estado asume tanto la obligación negativa de respetarlo como las obligaciones positivas de protegerlo e implementarlo.

comercio internacional cumplirían aquí un rol relevante también, con las limitaciones anteriormente expuestas.

Así, en relación a esos derechos (que deben ser perseguidos por el desarrollo económico y social), surge un campo idóneo para la cooperación internacional, algo que la UE realiza desde hace muchos años. El problema es que algunos de esos derechos son comprendidos como elementos programáticos en el ámbito de la política de estado. En otras palabras, el estado debe perseguir el objetivo de realizar plenamente esos derechos en la medida en que logra implementar sus políticas específicas. No es algo que se logre de forma inmediata. Tanto UE como AL parecen adoptar esa concepción. Quizá solamente el continente africano tenga una idea muy clara de que los derechos económicos y sociales son exigibles por las poblaciones, no que sean algo etéreo cuya implementación se difiere en el tiempo. No obstante, ese continente tiene el liderazgo en violaciones de DD.HH, en todas sus categorías generacionales⁵⁰³.

La condicionalidad de la protección social en los acuerdos UE-AL no enfoca directamente el tema del desarrollo económico y social pero es evidente que el incremento de los intercambios comerciales teóricamente favorece el desarrollo económico.

El desarrollo social, sin embargo, estaría asociado a otros factores, como por ejemplo, el nivel de distribución de la renta o el grado de corrupción de un país, temas que no serán abordados en esta investigación. En 1993, durante la Conferencia Mundial de DD.HH realizada en Viena (14-25 de junio), se ha procedido al examen minucioso de la interrelación existente entre el DD y el gozo de los DCPESC. Tanto la Declaración como el Programa de Acción resultantes de esa Conferencia proclamaban que el desarrollo, la democracia y los DD.HH son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. En ambos documentos, además, los gobiernos participantes

⁵⁰³ Curiosamente, la justiciabilidad de los derechos sociales prácticamente no se discute, a pesar de la precariedad económica de muchas zonas del continente.

reafirmaron que el DD es un derecho universal e inalienable y que la falta de desarrollo no puede ser invocado por el estado para justificar la violación de los DD.HH.

La interconexión entre la democracia, el estado de derecho y los DD.HH ya estaba nítida en el ámbito de la política exterior de la UE (valores fundamentales para el bloque europeo que busca su promoción y difusión por todo el mundo y cuyo enfoque al desarrollo está subentendido). La Declaración de 1986 ha lanzado el mensaje para todos los actores de la comunidad internacional, no solamente para los estados, de que es relevante esta interconexión (Schmitz, 2000)⁵⁰⁴, al paso que la Conferencia del 1993 ha pretendido reforzarla, algo que no llega a ser una novedad para la UE que, desde el inicio de la década de los setenta (antes mismo de su regulación normativa por la Ronda Tokio del GATT, en el final de esa década), mediante el SPG, buscaba fomentar esa interrelación⁵⁰⁵.

En 1996, la Comisión de DD.HH de las Naciones Unidas, durante su 52º período de sesiones, ha señalado que el DD se había integrado estrechamente en el ámbito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), entre otros programas específicos. Sin embargo, la dimensión social del comercio, que es el nombre atribuido por la OMC a la inclusión de los DD.HH en las relaciones comerciales, no cuenta con una base jurídica sólida. Este investigador cree que, justamente por las reticencias y las características de los acuerdos multilaterales engendrados por la OMC, y por las especificidades de su Órgano de Solución de Diferencias, es que la UE ha podido potenciar la presencia de la cláusula social en el ámbito de los acuerdos comerciales bilaterales. No existe aquí una verdadera

⁵⁰⁴ Schmitz, H. (2000). Does Local Cooperation Matter? Evidence from Industrial Clusters in South Asia and Latin America, *Oxford Development Studies*, v. 28, 3, 91-127.

⁵⁰⁵ No es demasiado recordar que el SPG es un AC no recíproco. Parte de la idea básica de que el incremento comercial se traduce en generación de riqueza. El acceso preferencial al mercado interior de la UE busca incrementar la generación de riqueza entre los países beneficiados por el esquema. Este incremento en la riqueza conduciría al desarrollo económico y, paralelamente, al desarrollo social y su finalidad es tanto estabilizar la democracia como promover a los DD.HH. (dentro de un enfoque compartido con el Banco Mundial, o sea, el desarrollo visto por los prismáticos de los DD.HH). Más que una convergencia, existe una fusión, puesto que el DD también es considerado un derecho humano inalienable por la Declaración de 1986.

convergencia entre la dimensión social contemplada por la UE y por la OMC, simplemente porque la OMC nunca ha llevado a cabo una inclusión realmente efectiva de los aspectos sociales subyacentes a sus acuerdos multilaterales (OMC Extra)⁵⁰⁶.

Un año después, en junio de 1997, la aprobación del Programa de Desarrollo por la AGNU reafirmó la interrelación entre el DD y los DD.HH (el DD es considerado formalmente, desde 1986, un derecho humano inalienable). Cuando en 1997 tiene inicio, aunque de forma poco nítida, la estrategia mundial para la promoción y la aplicación del DD⁵⁰⁷, la UE ya estaba impulsando (de modo bilateral) esos principios, canalizando ese esfuerzo, mediante la inclusión de la cláusula social en el ámbito de sus relaciones comerciales con los PED.

La estrategia mundial para el desarrollo sugería cuatro elementos principales, siendo los dos primeros ampliamente consagrados por la UE en sus relaciones con AL, mediante la cláusula social: a) el respeto de todos los DD.HH, b) la ratificación de tratados de DD.HH por los estados; c) la coherencia entre el DD y el sistema internacional de comercio, d) la reforma legislativa para garantizar la precedencia del derecho de los tratados sobre el derecho interno. Este último elemento (letra “d”) ha dividido históricamente los juristas en dos grupos: los monistas⁵⁰⁸ y los dualistas. Dos comentarios me parecen pertinentes sobre este asunto:

⁵⁰⁶ Por su vez, considerando la labor de la UNCTAD en relación a los PMA, se podría decir que la entidad está en el camino propicio para sentar las bases de un desarrollo sostenible en el campo de la globalización y del desarrollo, del comercio internacional y de los productos básicos, de la inversión y de la empresa, de la tecnología y de la logística, y de la cooperación técnica. No se ve aquí cualquier antagonismo con la acción exterior de la UE, principalmente porque el bloque europeo apoya las instituciones de gobernanza global (ONU, OIT, FMI, OMC).

⁵⁰⁷ Presentación por el tercer grupo de trabajo sobre el DD, de su informe de trabajo a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (en Ginebra, junio de 1997) y al Consejo Económico y Social (en Nueva York, julio de 1998).

⁵⁰⁸ Los monistas aun se dividen en dos grupos: a) los que pugnan por la prevalencia del derecho interno y b) los que abogan por la prevalencia del derecho internacional.

- Es la constitución que determina el nivel jerárquico que los tratados internacionales ocupan dentro del ordenamiento jurídico de un país. AL hace muchos años que tiende a atribuir a los tratados de DD.HH nivel normativo constitucional.
- La dicotomía clásica (monismo-dualismo) ha sido superada por el rol prominente que los DD.HH representan en el mundo actual. La doctrina ensalza esta característica de las normas jurídicas protectoras de los DD.HH (Sikkink, 1993⁵⁰⁹, Chemillier-Gendrau, 1995⁵¹⁰, Scheinin, 1995⁵¹¹, Alland, 2000⁵¹², Browlie, 2003⁵¹³, Dupuy, 2004⁵¹⁴, Combacau, 2004⁵¹⁵, entre otros).

En 1996, la Comisión de DD.HH de las Naciones Unidas había señalado que el DD se había integrado en el ámbito de la UNCTAD. No obstante, de ahí a afirmar que existe una verdadera convergencia entre el DD, el sistema internacional de comercio y los DD.HH va un largo camino. Es verdad que la OMC, constituida en 1995, establecía formas más equilibradas de negociación que el GATT 1947. También es verdad que la Ronda Tokio ha sido particularmente relevante para los PED. El problema es que las reglas de la OMC, que son por excelencia las reglas multilaterales de comercio, no incorporan claramente los DD.HH. Además, su OSD evita discutir el tema de los DD.HH en los casos que aprecia. En este momento, es en el ámbito bilateral (gracias, en

⁵⁰⁹ Sikkink, K. (1993): *Human rights, principled issue-networks, and sovereignty in Latin America*. Massachusetts: IO Foundation and the Massachusetts Institute of Technology.

⁵¹⁰ Chemillier-Gendrau, M. (1995). *Humanité et souverainetés: essai sur la fonction du droit international*. Paris: La Découverte.

⁵¹¹ Scheinin, M. (1995). *Economics and Social Rights as Legal Rights. Economic, Social and Cultural Rights – A Textbook*. Dordrecht: Nijhoff.

⁵¹² Alland, D. (2000). *Droit International Public*. Paris: PUF.

⁵¹³ Browlie, I. (2003). *Principles of public international law* (6ª ed). Oxford: Clarendon Press.

⁵¹⁴ Dupuy, P. (2004). *Droit international public* (7ª ed.) Paris: Dalloz.

⁵¹⁵ Combacau, J. & Sur, S. (2004). *Droit international public* (6ª. ed.) Paris: Montchrestien.

gran medida, a la incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales) que esos elementos tienden a convergir.

3.4.1 Desarrollo económico y social y comercio internacional

Afirmar que el comercio internacional promueve el desarrollo económico y social puede parecer evidente. Sin embargo, además de las apreciaciones propias de las ventajas absolutas y comparativas (que no serán abordadas en esta investigación por su extensión y complejidad), la configuración actual de las relaciones de comercio no parece favorecer a los países, subregiones y regiones más pobres y menos industrializadas. De hecho, según Rich (2013)⁵¹⁶, los PMA representan solamente el 0,3% del comercio mundial, aunque posean alrededor del 10% de la población mundial. Hace veinte años, representaban el 0,6%.

El problema central de las relaciones comerciales, para los PED, radica en que la mayor parte de sus exportaciones está constituida por productos primarios, de menor valor agregado en los intercambios comerciales⁵¹⁷. Particularmente en lo que concierne a las relaciones UE-AL, la denominada primarización de las exportaciones enfrenta un obstáculo importante: la sensibilidad del sector agrícola europeo. Esta sensibilidad repercute en forma de proteccionismo (mediante subsidios, por ejemplo) a los productores europeos, tema de reclamaciones constantes por parte de los países latinoamericanos, que tienen exactamente en la agricultura una mayor ventaja comparativa.

En lo que concierne al binomio “desarrollo económico y social-comercio internacional”, interfieren en el nivel de percepción de los gobiernos, empresas y sociedades latinoamericanas algunos factores, como por ejemplo:

⁵¹⁶ Rich, B. (2013). *Mortgaging the earth: The World Bank, environmental impoverishment, and the crisis of development*. Washington: Island Press.

⁵¹⁷ Además del uso intensivo del factor trabajo en el modelo productivo.

- Los aranceles medios practicados sobre las importaciones procedentes de los PED (no solo por la UE pero, de modo general, por los PD) suelen superar en un 30% el promedio mundial⁵¹⁸;
- El elevado precio de los insumos en AL: muchas veces importados de PD o indexados al dólar estadounidense o al euro;
- El denominado “costo país”, que incluye un conjunto de distintas variables (costes administrativos, operacionales, precio del seguro etc.);
- La protección del sector textil en la UE⁵¹⁹.

Naturalmente, como lograr el desarrollo no es una tarea sencilla, porque depende de una infinidad de factores y variables. Todo ese movimiento en pro del desarrollo latinoamericano y su vinculación con los DD.HH. está inserido dentro de una estructura compleja en que el actual modelo productivo - así como de los intercambios comerciales - juegan un papel fundamental, desfavorable para los PED (Stiglitz, 2002)⁵²⁰.

No obstante, parece evidente que los DD.HH. logran unificar la perspectiva de los diversos debates sobre el desarrollo y proporcionan una referencia y un objetivo común

⁵¹⁸ Reglamento de Ejecución (UE) n° 1101/2014 de la Comisión, de 16 de octubre de 2014, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n° 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. Subpartida n° 0706 10 00 (Zanahorias y nabos: 13,6%).

⁵¹⁹ Especialmente en los años ochenta y noventa: Decisión de la Comisión de 12 de enero de 1983 relativa a un régimen de ayuda en favor del sector textil/confección en Francia. Diario Oficial n° L 137 de 26/05/1983 p. 0024 - 0027; Dictamen del Comité Económico y Social sobre la “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Medidas en favor de la competitividad de la industria europea textil y de la confección”, Diario Oficial n° C 214 de 10/07/1998 p. 0095; Resolución sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa a las medidas en favor de la competitividad de la industria europea textil y de la confección (COM(97)0454 C4-0626/97), Diario Oficial n° C 292 de 21/09/1998 p. 0032 etc.

⁵²⁰ Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its Discontents*. New York, W.W. Norton & Company.

a su consecución, así como un relevante criterio de evaluación de las medidas adoptadas. Aunque la responsabilidad primordial sea del propio estado, los países, subregiones y regiones en desarrollo siguen necesitando ayuda de la comunidad internacional para llevar a cabo su proceso de desarrollo. Entre los medios de ayuda, se podrían mencionar el alivio de la deuda externa, la cooperación técnica, el fomento de la capacidad nacional y la concesión de preferencias comerciales (que, como se ha comentado anteriormente, está vinculada a determinadas condicionalidades: DD.HH.L, democracia, estado de derecho, buen gobierno, protección medioambiental etc.) en el ámbito de la UE⁵²¹.

¿Sería la incorporación de la cláusula social y su estricta observancia por los países latinoamericanos suficiente para asegurar los DD.HH o para asegurar el desarrollo económico y social? La respuesta es no, la simple inclusión de una cláusula social puede no generar los efectos esperados, tanto en relación a la protección de los DD.HH como en relación al desarrollo económico y social. Es importantísimo realizar una escrupulosa análisis del impacto que tendrá la inclusión de una cláusula como esa en un acuerdo internacional, por mejores que sean las intenciones de ambas partes. Sobre el tema, Schutter (2014)⁵²² esclarece:

“The duty to assess the impacts on human rights of trade or investment agreements, or other international agreements, has been repeatedly affirmed by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 12 (1999), The right to adequate food (art. 11), E/C. 12/1999/5, at paras. 19 and 36 (‘States parties should, in international agreements whenever relevant, ensure that the right to adequate food is given due attention’); Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 (2000), The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International

⁵²¹ Con efecto, la UE participa activamente en el escenario internacional como promotor del desarrollo económico y social, instrumentalizando este proceso mediante distintos medios, entre los cuales se encuentran los acuerdos comerciales.

⁵²² Schutter, O. D. (2014). *International Human Rights Course*. Université Catholique de Louvain. Workpaper. Apuntes personales.

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), E/C.12/2000/4 (2000), para. 39 ('In relation to the conclusion of other international agreements, States parties should take steps to ensure that these instruments do not adversely impact upon the right to health'); Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 15 (2002), *The right to water* (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), U.N. Doc. E/C.12/2002/11 (26 November 2002), paras. 31 and 35-36 ('States parties should ensure that the right to water is given due attention in international agreements and, to that end, should consider the development of further legal instruments. With regard to the conclusion and implementation of other international and regional agreements, States parties should take steps to ensure that these instruments do not adversely impact upon the right to water. Agreements concerning trade liberalization should not curtail or inhibit a country's capacity to ensure the full realization of the right to water')). In order to provide guidance to States as to how they should comply with this obligation, the Special Rapporteur on the right to food presented guiding principles for a methodology of human rights impact assessments (see Report of the Special Rapporteur on the Right to food to the 19th session of the Human Rights Council, Olivier De Schutter, Addendum: Guiding Principles on human rights impact assessments of trade and investment agreements, UN Doc. A/HRC/19/59/Add.5 (19 December 2011))".

Hay que considerar que en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales existen muchos intereses en juego, incluso la perpetuación de asimetrías generadas por los distintos modelos productivos (diferencias en el uso más o menos intensivo del factor trabajo y del factor capital, asignación de recursos por los agentes privados etc.). En este sentido, el comercio de bienes agrícolas, por ejemplo, ha sido un tema complicado en el desarrollo de la Ronda Doha de la OMC. En nivel bilateral, la situación tampoco es mucho más sencilla. Existen intereses relevantes de ambas partes que pueden entrar en conflicto. ¿Cómo perseguir el desarrollo económico y social en un AC si existen intereses antagónicos y resistencias por parte de sectores internos de los países involucrados?, ¿Cómo buscar el desarrollo de los países latinoamericanos,

mediante el comercio con la UE, si el tema anteriormente mencionado de la agricultura sigue siendo un nudo para tantos agentes económicos? Es muy complicado⁵²³.

¿Hasta qué punto la cláusula social puede revertir esta situación? Es muy difícil saber con exactitud. La condicionalidad de acceso al mercado puede ser considerada como una barrera no arancelaria al afectar el libre comercio (establecimiento de condiciones para acceder al mercado interior: potencial capacidad de limitación del flujo de bienes y servicios en el ámbito bilateral). Su empleo desenfrenado por la UE, no obstante, no sería razonable en este momento en virtud de la coexistencia de múltiples intereses en juego, no solamente comerciales.

Caso la cláusula social sea empleada, por razones políticas y económicas, con la finalidad específica de entorpecer el comercio de determinados bienes o servicios (algo no deseable para una UE aun golpeada por la crisis, especialmente la Eurozona), ese objetivo coexistiría con la promoción de los DD.HH y el fomento del desarrollo económico y social sobre la base del comercio bilateral. Sin embargo, además del tema de la asignación de recursos por los agentes privados, no existe ninguna garantía de que las relaciones comerciales impulsen realmente ese desarrollo.

En su aspecto más básico, el crecimiento económico (o crecimiento de la actividad económica en el tiempo) simplemente revela los efectos de la acumulación de factores productivos sobre la actividad y el empleo. Por su vez, el desarrollo económico refleja la situación actual de un país en función de diversas variables económicas (riqueza, renta, factores productivos acumulados, bienestar de la población, etc.) y siempre, naturalmente, en términos relativos con el resto de países en la economía mundial. La noción de desarrollo humano lo que hace es extender el concepto de desarrollo económico a otras dimensiones, como la social y la demográfica. Dentro de esta

⁵²³ En este caso, debemos aun suponer que el desarrollo se encuentra limitado al campo comercial objeto de la negociación. Aunque la agricultura corresponda a un sector en que los países latinoamericanos cuenten con ventajas comparativas, el desarrollo económico asociado a este comercio está comprometido por el hecho de tratarse de un tema sensible en el ámbito de la UE.

categoría se habla en desarrollo sostenible, que incorpora también las dimensiones sanitaria o medioambiental, preocupándose tanto con el desarrollo actual del país como por su desarrollo potencial futuro. Es el más amplio de los cuatro conceptos, englobando todas las dimensiones de análisis⁵²⁴.

En relación a los conceptos, existe también el de “convergencia económica”, que es el proceso por el cual los países tienden a reducir sus diferencias en sus niveles de renta *per cápita* (o de cualquier otra variable representativa de su nivel de desarrollo económico). Ahora, saber cómo y en qué dirección la apertura económica internacional afecta a estos conceptos de crecimiento económico, desarrollo económico, desarrollo humano (incluyendo el desarrollo sostenible) y convergencia económica no es sencillo. Las teorías económicas apuntan en direcciones contrapuestas que ponen en jaque el rol de la cláusula social.

Con base en estos conceptos, la primera gran pregunta que puede ser formulada es si realmente existe alguna relación entre los conceptos de integración en la economía internacional y el desarrollo económico. Si la respuesta es afirmativa, entonces se tendría que apreciar si esta relación es positiva (o sea, a mayor apertura, mayor desarrollo económico) o negativa (a mayor apertura, menores posibilidades de desarrollo).

La evidencia empírica no es capaz de determinar esta dirección. Incluso cuando se aprecian resultados positivos sigue habiendo dudas de si existe realmente una causa directa entre mayor apertura y un mayor crecimiento económico. Esto significa que la incorporación de la cláusula social no tiene porque ser necesariamente beneficiosa para los PED. El análisis de casos específicos señala que la apertura económica por si misma no tiene porqué resultar en mayor crecimiento del país y mucho menos en mayor desarrollo humano sostenible. De un modo general, la apertura debe ir acompañada de

⁵²⁴ Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas se basaban en la idea de desarrollo sostenible. la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también, como expresa su nombre.

medidas de desarrollo en la estructura económica. Sin esto, es difícil que se logren efectos positivos.

Lamentablemente, la mayoría de los modelos de crecimiento económico están diseñados para economías cerradas, por lo que las implicaciones de la apertura internacional sobre ellos deben suponerse, más que obtenerse directamente a partir de los modelos⁵²⁵. Creer que la cláusula social logrará la promoción de los DD.HH.L a partir del crecimiento económico basado en el comercio conlleva a ignorar, por ejemplo, la conocida teoría de la “trampa del crecimiento”, según la cual no es posible a ningún país crecer indefinidamente su PIB. Llegará un momento, a que todos los países convergirían y alcanzarían un equilibrio óptimo, sin apenas variación (salvo que surgiesen cambios estructurales como la tasa de ahorro, lo que impulsaría el país por una nueva senda de crecimiento económico y a un nuevo equilibrio, más elevado y con un nivel de renta *per cápita* más alto que el punto de equilibrio anterior).

Sin embargo, el recorrido de los países con menor dotación de capital por empleado tendrían un mayor recorrido o sea, los países más ricos (con un porcentaje del PIB *per capita* más elevado) tendrían un recorrido menor. Los modelos más clásicos de crecimiento económico señalan que la acumulación de capital y el progreso tecnológico impulsan el crecimiento del país de un modo constante pero diferenciado en función del nivel del factor tecnológico existente. De este modo, con el comercio internacional sería posible adquirir tecnología para mejorar el desarrollo del país, algo no abarcado por la cláusula social y que entra en el complejo campo de la transferencia tecnológica.

A partir de mediados de los años setenta del siglo pasado, en respuesta a los modelos caracterizados por el crecimiento basado exclusivamente en la transferencia tecnológica resultante del comercio internacional (factor exógeno: tecnología importada), surgieron los denominados modelos de crecimiento endógeno que buscaban comprender el crecimiento de un país desde una perspectiva de los factores nacionales.

⁵²⁵ De un modo general, los modelos económicos suelen enfatizar la acumulación del factor de capital físico, que supondría niveles mayores de actividad. En el caso de muchos PED, el factor más intensivo es el factor trabajo (además, mano de obra poco calificada).

Afirmaban la posibilidad de superar las limitaciones del crecimiento mediante la crítica de la ley económica de rendimientos decrecientes⁵²⁶ a los factores productivos⁵²⁷ y establecieron la idea básica de que, dependiendo de lo que se introduce en la economía (capital humano o innovación) el resultado podría ser positivo. Esto sería aplicable tanto a los PED como a los PD, ya que la introducción de esos factores podrían conducir al mismo ritmo (o a un ritmo mayor) de crecimiento de los PD en comparación con las economías retrasadas, donde existe mayor recorrido de crecimiento en función de la dispersión del factor capital sobre el factor trabajo (menor dotación de capital por empleado).

La cláusula social naturalmente abarca cualquier objeto de un AC, incluyendo la transferencia de tecnología. Eso no previene que la UE corra el riesgo de ser víctima de la imitación o de un *catch up* tecnológico (ponerse al nivel de los demás en términos tecnológicos). Ambos elementos (imitación o *catch up*) serían capaces de contrarrestar los factores divergentes del crecimiento e impulsarlos para arriba con la ayuda del factor trabajo (baja remuneración en función de la asignación de recursos por los agentes privados, aunque en determinados sectores, la falta de mano de obra calificada se convierta en un “cuello de botella”).

El crecimiento económico - algo asociado a la capacidad del estado para proteger más eficientemente a los DD.HH.L - tiene, en diferentes partes del mundo (UE/AL) velocidades y desarrollos distintos. Al basarse en el capital físico y humano, la innovación y la tecnología como factores del incremento de la productividad, la apertura internacional, para algunos economistas, podría contribuir positivamente para eso, incluso (en lo que se refiere al capital humano y la innovación) en el proceso de movilidad internacional de trabajadores altamente calificados (movilidad del conocimiento y la innovación). Así, es curioso que se promueva la movilidad internacional de la mano de obra hipercalificada y se critique la mano de obra poco

⁵²⁶ También conocida como rendimientos marginales decrecientes.

⁵²⁷ Aquella que afirma que existirá una disminución marginal del incremento del producto o servicio unitario en un proceso productivo conforme se añadan nuevos factores productivos.

calificada como factor productivo (no se puede olvidar que la cláusula social se incorporó en los acuerdos comerciales también con el propósito de reducir el denominado *dumping* social).

Además, en los PED, habitualmente caracterizados por la fuerte dotación en el factor trabajo, las inyecciones de capital pueden propiciar un crecimiento económico acelerado (más rápido que en los PD) por el simple hecho de que pueden “quemar etapas de desarrollo”, o sea, perder menos tiempo y recursos para generar un nivel “X” de innovación, ya que podrían (mediante la apertura del comercio) adquirir o imitar directamente las innovaciones de los PD (nivel “X”), sin necesidad de pasar por todas las difíciles y costosas etapas anteriores. Así, las posibilidades de fuertes ritmos de crecimiento en los procesos de *catch up* tecnológico son más elevadas, lo que requiere también formación del capital humano compatible para su plena y eficaz utilización.

En la medida en que estos procesos sean más o menos intensos se podrán dar tanto procesos de convergencia/divergencia entre países como procesos de mayor/menor desarrollo económico. Dependiendo de la situación coyuntural mundial (Fernand Braudel), podría haber momentos más propicios para una relación positiva entre apertura y crecimiento económico y momentos más propicios para que se cumpliera una relación negativa. El libre comercio no tiene porque ser bueno para todos, como afirmó Guillén.

Algunas investigaciones señalan la existencia de una mayor convergencia entre los países que cumplan ciertas condiciones comunes, tanto en términos económicos como sociales (como la religión, la estructura poblacional, las dotaciones de infraestructuras públicas etc.) pero eso quizá no sea suficiente para explicar claramente la existencia de diferentes ritmos de crecimiento en el tiempo, algo que la cláusula social no puede proporcionar.

En otras palabras, si existen convergencias o divergencias, es porque las economías presentan ritmos de crecimiento dispares en el tiempo. Tres dimensiones condicionantes

suelen ser mencionadas, según Tugores (2006)⁵²⁸: el nivel de internacionalización de la economía, la geografía y las instituciones. La apertura comercial de los PED (algo de cierto modo condicionado por la cláusula social) puede influir en la entrada de tecnología y de otros factores productivos (incluso podrá influir en la especialización productiva del país, algo que se reflejaría en su desarrollo económico y social , tanto en el presente como en el futuro).

El autor señala que en este nivel se debe diferenciar entre las denominadas fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas de la globalización. Las fuerzas centrípetas tendrían su origen en las economías de escala y en las externalidades positivas, que favorecen la concentración de la producción en los países que ya tienen desarrollada una estructura productiva avanzada.

Por su vez, en sentido contrario, las fuerzas centrífugas abarcarían temas diversos como diferencias salariales y precariedad laboral (bajos salarios y precariedad laboral: *dumping* social), rendimientos decrecientes o procesos migratorios). Para Tugores, una apertura insuficiente de la economía podría llevar a que las fuerzas centrípetas sean más fuertes que las centrífugas, de modo que sería más atractivo fabricar e invertir en países con una estructura productiva más avanzada, ya que las menos avanzadas no permitirían una eficaz participación de los demás países (al final, tienen sus economías y mercados más cerrados)⁵²⁹.

Relacionado con el desarrollo y tampoco solventado por la cláusula social, está el tema del efecto que la apertura (o la globalización) tiene sobre la distribución de la renta dentro del país y, en particular, sobre los grupos de población más desfavorecidos. Así, por ejemplo, la especialización productiva generada por la apertura comercial (en los PED suelen ser actividades con uso intensivo del factor trabajo) puede afectar a ciertos

⁵²⁸ Tugores Ques, J. (2006). Economía Internacional: Globalización e Integración Regional. McGraw-Hill/ Interamericana de España.

⁵²⁹ Sin embargo, caso se alcanzara una hipotética globalización plena, las economías nacionales podrían lograr un nivel de bienestar económico superior al que obtendrían sin la globalización.

grupos poblacionales directa o indirectamente dependientes de las actividades que desaparecen.

Sin embargo, la apertura hacia el exterior de sectores que logran incrementar su productividad puede generar beneficios a toda la población (tanto en el corto plazo, con una mayor renta a distribuir como en el largo plazo, al incrementar las posibilidades de inversión en factores productivos como el capital físico o el capital humano). Estos cambios podrían incluir variaciones en los salarios y en el empleo (“efecto desplazamiento laboral” hacia los sectores más productivos y con más éxito en la apertura económica del país). No obstante, ese desplazamiento tanto puede mejorar la capacidad adquisitiva de amplios sectores de la población en función de una remuneración comparativamente mejor (antes campesinos sin trabajo y ahora trabajadores en una fábrica o tienda), como provocar la reducción salarial por el exceso de oferta de mano de obra).

Naturalmente, a veces la apertura del mercado conlleva a la especialización en sectores de muy baja retribución y precariedad laboral (situación que la cláusula social desea pero no puede evitar). Además, la apertura comercial también puede afectar a los precios relativos de los productos (mediante la presión internacional para que se eliminen los subsidios, algo logrado en la reunión OMC de Doha en Nairobi, 2015). En este sentido, con el fin de los subsidios - algo beneficioso para muchos países negativamente afectados (los países latinoamericanos, por ejemplo), ocurriría también un incremento del precio interno de los productos, lo que podría afectar positiva o negativamente, según los casos, tanto a los consumidores como a los productores nacionales.

La especialización productiva (con el uso intensivo del factor trabajo, característico de los PED) también puede hacer variar los flujos de capital disponibles (o sea, la disponibilidad de crédito para pequeños comerciantes y productores) y, supuestamente, actuar beneficiosamente en los niveles de renta del país. De esta manera, aún según Tugores, mediante la apertura comercial, sería posible favorecer tanto el acceso a la

educación por parte de la población como una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo (o hasta mismo un mejor acceso al sistema financiero por parte de los trabajadores). De cualquier modo, en términos de globalización, existen algunas teorías que defienden la existencia de una zona periférica (constituida por países subdesarrollados) dependiente de un núcleo central (constituido por los PD). Esta relación de dominancia del centro en relación a la periferia sería responsable, a *grosso modo*, por la perpetuación de un desarrollo desigual (consolidación de asimetrías en el escenario internacional).

A parte, de estas puntualizaciones esencialmente económicas, merece la pena conocer las observaciones del profesor Doug Thomas⁵³⁰, sobre las razones que llevan algunos países a ser más ricos que otros (desarrollo económico). Según él, existen ocho factores que son habitualmente considerados, aunque solamente los dos últimos pueden ser considerados como denominadores comunes a todos los países desarrollados:

- **1º) Producto interno bruto *per cápita***

A lo largo de décadas y generaciones, el nivel de vida (medido por el producto *per cápita* o por el consumo de los hogares), fue determinado principalmente por el nivel de productividad y crecimiento del país. Crecimiento económico significa expansión del PIB potencial (el nivel de producción máximo que un país puede alcanzar con el trabajo, capital y tecnología existentes, sin provocar presiones inflacionistas) o de la producción nacional de un país.

Este es un concepto esencialmente relacionado con la tasa de crecimiento de la producción por persona, que determina la tasa en la cual el patrón de vida de un país se está elevando. Habitualmente se afirma que los países con grandes poblaciones son más prósperos. No obstante, según el BM, la mayoría de los países ricos poseen poblaciones

⁵³⁰ Curso Negocios Internacionales - I, Universidad de Nuevo México vía (Coursera), de 18.01.2016 a 07.03.2016.

relativamente pequeñas, donde la elaboración y aplicación de políticas de desarrollo suelen ser más sencillas (o menos complicadas)⁵³¹.

En la clásica economía malthusiana, el crecimiento de la población supera el crecimiento de la producción (alimentos, bienes y servicios), en virtud de la “ley de los rendimientos decrecientes”. Es muy difícil que un país permanezca con su mismo nivel de desarrollo económico durante mucho tiempo. Por este factor (PIB *per capita*), EE.UU era el país más rico del mundo en los años cincuenta del siglo pasado, mientras ahora le superan Suiza, Luxemburgo y varios otros (Corea del Sur, en 60 años, de tener el 50% del PIB que tuvo México, pasó a duplicarlo).

- **2º) Recursos naturales (petróleo, gas, minerales etc.)**

¿Existe una relación directa entre la abundancia de recursos naturales y la riqueza económica? Países como Brasil o Qatar poseen muchos recursos naturales, pero no son los más ricos y desarrollados del mundo⁵³². Lo mismo ocurre con varios países africanos, ricos en recursos naturales y con bajo nivel de desarrollo económico y humano. Por otro lado, Japón, uno de los países más ricos y desarrollados del planeta, tiene escasos recursos naturales e importa casi toda su comida. Así, no se puede afirmar tajantemente que solo por tener recursos naturales un país es o será rico.

No es absolutamente necesario que esos recursos sean claramente exportables (v.g., tierra cultivable, bosques y agua). Es cierto que algunos países de renta alta como Canadá y Noruega, han crecido primordialmente apoyándose en su abundante base de recursos, con una gran producción agrícola, pesquera y forestal. De manera similar, EE.UU, con sus tierras de labranza de clima templado, es el mayor productor y exportador mundial de cereales. No obstante, solamente para mencionar dos ejemplos, la ciudad de Nueva York prospera básicamente por su alta densidad de industrias de

⁵³¹ El país rico más poblado es EE.UU, con más de 300 millones de personas y un producto interno bruto *per capita* de aproximadamente 50 mil dólares anuales. Por otro lado, el país más rico del mundo actualmente, de acuerdo con este criterio, es Luxemburgo.

⁵³² El caso brasileño es paradigmático: el país exporta petróleo, minerales, café, jugo de naranja etc. pero no tienen el nivel de desarrollo económico de muchos otros países.

servicios y países como Japón no tienen virtualmente recursos naturales (han progresado concentrándose en sectores que dependen más de la mano de obra y del capital que de sus recursos autóctonos).

- **3º) Educación**

Existen diferentes criterios para fijar la educación, como el porcentaje de la población que termina la primaria, la secundaria o la universidad o, la más amplia, el nivel/índice de alfabetización del país, normalmente el porcentaje de la gente que tiene 15 años o más y es capaz de leer y escribir). Tampoco es posible señalar una correlación exacta entre la educación y el desarrollo económico y humano porque, si por un lado está Noruega (uno de los países más ricos del mundo), por otro están Corea del Norte, Cuba (médicos exportados a Venezuela), Estonia y varios países que antes integraban la extinta URSS, todos ellos PED. Los países socialistas, de hecho, tenían políticas que posibilitaban a la población recibir una educación gratuita hasta el nivel universitario. Así, no basta con educar a las personas, es necesario tener una infraestructura adecuada para generar empleos para esas personas educadas.

Muchos economistas creen que la calidad de la mano de obra, las capacidades, conocimientos y disciplina de la población activa es el elemento más importante en el crecimiento económico. Por ejemplo, un país podría comprar los dispositivos de telecomunicaciones más modernos, computadoras, equipos generadores de electricidad y aviones de combate. Sin embargo, esos bienes de capital solo pueden ser utilizados y mantenidos eficientemente por trabajadores capacitados y formados. Las mejoras en alfabetización, salud y disciplina, y más recientemente, la habilidad para usar computadoras, suman mucho a la productividad de la mano de obra.

- **4º) Sistema de gobierno**

El error de la inclusión de este factor es de fácil percepción: ningún de los sistemas señalados a seguir alberga solamente países ricos y desarrollados:

A. Repúblicas:

- Presidencialistas: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, EE.UU, Filipinas, Guatemala, Honduras, Indonesia, Liberia, México, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Perú, Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Uruguay, Venezuela, Zimbabue.
- Semipresidencialistas: Argelia, Burkina Faso, Congo (República Democrática del), Egipto, Francia, Guinea-Bisáu, Guyana, Haití, Malí, Mauritania, Rumania, Rusia, Senegal, Siria, Taiwán (República de China), Túnez, Ucrania, Yibuti.
- Parlamentarias: Albania, Alemania, Austria, Bangladés, Bosnia y Hercegovina, Botsuana, Bulgaria, Cabo Verde, Croacia, Eslováquia, Eslovenia, Estonia, Etiopía, Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, India, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Kirguistán, Líbano, Libia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Polonia, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía.
- Unipartidistas: China, Corea del Norte, Cuba, Eritrea, Laos, Vietnam.

B. Monarquías:

- Parlamentarias/Constitucionales: Antigua y Barbuda, Australia, Baréin, Bélgica, Belice, Bután, Camboya, Canadá, Curazao, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Lesoto, Luxemburgo, Malasia, Mónaco, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Samoa, Suecia, Reino Unido, Tailandia, Togo.
- Absolutas: Arabia Saudita, Brunéi, Catar, Ciudad del Vaticano, Omán, Suazilandia.
- Dictadura militar: Tailandia.

Claramente no se puede afirmar que por tan solo adoptar cierto tipo de gobierno un país va a llegar a ser más rico y desarrollado. Claro que se podría argumentar que junto con el sistema de gobierno va el sistema de la economía. No obstante, en este caso el tema se resumiría, básicamente, en si el sistema de mercado es socialista o capitalista. Aquí también sigue habiendo mucha diversidad entre los países (por ejemplo, Noruega y otros países de esta parte de Europa suelen tener un sistema mucho más socializado que EE.UU o Singapur).

- **5º) Religión**

Este factor tampoco constituye un denominador común (v.g., países como Japón y EE.UU. poseen religiones mayoritarias distintas, aunque ambos sean desarrollados). Max Weber (1998)⁵³³, analizando el rápido crecimiento de los EE.UU., después de investigar el comportamiento de los inmigrantes europeos afincados en este país en relación al trabajo (ético y duro, con el objetivo de enriquecer: una forma de complacer a Dios), afirmó en su obra *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* existir una fuerte correlación entre la religión y el desarrollo económico. Sin embargo, esta explicación teórica ni explica el crecimiento de otros países ni puede ser replicado en otras partes del mundo.

- **6º) Pujanza/éxito empresarial**

Según Yu (2016)⁵³⁴, parece ser que existe una correlación bidireccional muy fuerte entre los países más ricos y el éxito empresarial, o sea, parece ser que los países más ricos “producen” empresas exitosas y que las empresas exitosas contribuyen a un crecimiento aún más fuerte de la economía del país donde están establecidas. La revista Fortune, por ejemplo, elabora periódicamente una lista con las 500 empresas más exitosas en términos de ventas. La mayoría de esas empresas se ubica en PD y exitosas en el escenario comercial internacional (v.g., EE.UU., Japón o Corea del Sur). Esto no ocurre con empresas de Haití, Irak, Afganistán o Sierra Leona, por ejemplo. Los países más ricos suelen invertir más en el sector privado, diseñar políticas más adecuadas (o utilizar empresas públicas e instituciones) para estimular su crecimiento. En pocas palabras: las empresas suelen ser exitosas cuando los países son exitosos.

- **7º) Protección al derecho de propiedad**

En cualquier sistema económico las personas naturales o jurídicas necesitan tener un incentivo para invertir, producir y generar rentas o ganancias de cara al futuro.

⁵³³ Weber, M. (1998). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Madrid: Ediciones AKAL.

⁵³⁴ Yu, P. K. (2016). *The Comparative Economics of International Intellectual Property Agreements*. *Comparative Law and Economics*, Theodore Eisenberg and Giovanni B. Ramello, eds., Cheltenham :Edward Elgar Publishing.

Necesitan gozar y explorar su propiedad a título personal o particular. Necesitan, además, protección para esa propiedad privada (incluyendo los derechos de propiedad intelectual e industrial), algo que se logra, con mayor o menor eficacia, mediante leyes, políticas y sistemas adecuados para que la gente haga sus inversiones⁵³⁵.

La protección de la propiedad privada es clave para el desarrollo económico de un país. Los países que la respetan y protegen eficazmente (capital físico, bienes raíces, propiedad intelectual etc.) suelen ser los más ricos y desarrollados del mundo. En sentido contrario, los que no lo hacen (por distintas razones, como tradiciones, políticas internas, fuertes intereses para que nada cambie etc.) suelen estar entre los países más pobres del mundo.

- **8º) Corrupción**

Esta lacra social puede afectar muy negativamente al crecimiento de las empresas/ país y a la protección de los derechos sobre la propiedad privada. En un simple análisis se puede constatar que países con menores tasas de corrupción (v.g., Noruega, Japón, Canadá, EE.UU) suelen presentar mayores niveles de riqueza o de desarrollo económico. En sentido contrario, países más corruptos (v.g., varios del continente africano o de Centroamérica) habitualmente presentan una protección de los derechos a la propiedad privada inadecuada y un menor nivel de riqueza y de desarrollo humano⁵³⁶.

La corrupción genera obstáculos a la utilización eficiente de la propiedad privada (con el objetivo de crecer y prosperar), dificulta la inversión e impide la confianza que los inversionistas extranjeros necesitan tener en los países receptores de las inversiones. La confianza es muy relevante en la toma de decisiones para invertir⁵³⁷. Aquí se nota

⁵³⁵ Relevancia de un sistema financiero y de un marco legal que proporcionen seguridad y garantías de protección para los inversionistas.

⁵³⁶ Muchas personas consideran que los gobiernos de esos países prácticamente existen para apropiarse de las riquezas existentes (v.g., recursos naturales). Es la cleptocracia.

⁵³⁷ Aquí se nota claramente la conexión entre la corrupción y la protección de los derechos de la propiedad privada. Los países corruptos pierden muchas oportunidades de inversión y, por esta razón, limitan su propio potencial de crecimiento.

claramente la conexión entre la corrupción y la protección de los derechos de la propiedad privada. Los países corruptos pierden muchas oportunidades de inversión y, por esta razón, limitan su propio potencial de crecimiento.

El desarrollo económico y humano de un país posee una relación directa tanto con la protección del derecho de propiedad (plasmado esencialmente en políticas y normas legales) como en el nivel de corrupción existente en la sociedad y en las instituciones. Sin esos dos factores, que deben ser naturalmente combinados, ambos desarrollos serán mucho más aparentes que reales y, sobretodo, serán fugaces.

El desarrollo económico y humano en AL no es sencillo. Además, ¿cómo compatibilizar el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos con el comercio bilateral si la concesión de subsidios agrícolas continúa siendo habitual en el ámbito de la UE? Es evidente que la concesión de esos subsidios genera dificultades para los productores/exportadores latinoamericanos. Muchos de ellos no pueden competir en el mismo nivel⁵³⁸. Esos estragos no generan riqueza a los PED, más bien incrementan su pobreza y la violación de los DD.HH, algo que la cláusula social no puede solucionar.

Muchos latifundios en AL son controlados por terratenientes. La concesión de subsidios para los agricultores europeos conlleva a la necesidad de reducción de costes a los productores latinoamericanos, algo que, en muchas ocasiones, se consustancia en la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores (el uso de factor tecnología aun es incipiente en muchos países). Así, la inclusión de una cláusula social en un AC no elimina los problemas ocasionados a miles de agricultores y familias en AL, en virtud de la concesión de subsidios.

⁵³⁸ En la reunión ministerial de Nairobi de la Ronda Doha de la OMC (diciembre de 2015) se acordó la reducción de las ayudas a la exportación de productos agrícolas.

A propósito del tema, Nwobike (2005)⁵³⁹ señala que la concesión de subsidios a los agricultores europeos ha generado el desmantelamiento progresivo de la producción agrícola en los países ACP. Lo mismo pasa en otras regiones del mundo. Los subsidios concedidos por UE, EE.UU, Canadá, Japón etc. repercuten en la vida de millones de personas. La cláusula social no reverte esa situación. En la realidad, en algunas circunstancias, puede hasta mismo empeorarlas. Por eso, la condicionalidad de acceso al mercado único puede ser interpretada como una dificultad a más para los productores latinoamericanos que, según Silva (2009)⁵⁴⁰, están divididos en dos grandes grupos: a) pequeños agricultores que se dedican a la agricultura de subsistencia; b) grandes empresas agrícolas, cuya producción tanto puede incorporar elevados estándares tecnológicos como también sobreexplotar mano de obra con signos distintivos de precariedad y violación de DD.HH.L (v.g., utilización de mano de obra infantil⁵⁴¹ o de personas en régimen de esclavitud/servidumbre⁵⁴² etc.).

De este modo, la concesión de subsidios puede frustrar el objetivo de impulsar el desarrollo pretendido en un AC. “Facilitar” el comercio con la condicionalidad representada por la cláusula social (protección social: DD.HH.L) no tiene mucha eficacia. En la misma línea, el fomento de los DD.HH.L en los PED pierde una parte sustancial de su efectividad en función de los subsidios concedidos por los PD, lo

⁵³⁹ Nwobike, J. (2005). Application of Human Rights in African Caribbean and Pacific-European Union Development and Trade Partnership, the. *German LJ*, 6, 1381.

⁵⁴⁰ Silva, L. D. (2009). *A liberalização do comércio internacional de alimentos e o combate à fome*, In Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI.

⁵⁴¹ Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2012 , sobre el trabajo infantil en el sector del cacao (2011/2957(RSP)). DOUE de 31.8.2013 (CE 251/45); Resolución sobre las consecuencias sociales del trabajo infantil y estrategias para luchar contra el trabajo infantil. DOUE de 16.3.2009 (C 61/31); Asamblea Paritaria del Convenio celebrado entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y la Unión Europea (ACP-UE) - Resoluciones aprobadas sobre el trabajo de los menores de edad (ACP-UE 2097/97/def.), DOCE, C 308, 9 de octubre de 1997 etc.

⁵⁴² Pregunta escrita E-4617/05 de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión. Esclavitud infantil propiciada por las empresas multinacionales; Pregunta escrita E-004134/14 Raúl Romeva i Rueda (Verts/ALE) a la Comisión. Trabajo forzado en Corea del Norte, DO C 367 de 16.10.2014, p. 255/256.

mismo ocurriendo con las compras gubernamentales (McAfee & McMillan,1989)⁵⁴³. Existen otros elementos que también pueden interferir en la dinámica del desarrollo de los PED, como por ejemplo, la imposición de barreras a las exportaciones (por ejemplo, para los textiles) y la reorientación de las inversiones extranjeras directas, como la que se verifica actualmente hacia los mercados asiáticos.

La presencia de condicionalidades vinculadas a los DD.HH en los acuerdos comerciales, para efectos de concesión de beneficios arancelarios a los productos procedentes de países latinoamericanos, también puede implicar en una dificultad adicional para que esos países prosperen económicamente. La afirmación puede parecer jurídicamente esdrújula, pero es económicamente sensata. Efectivamente, aunque la inclusión de la protección de los DD.HH en los acuerdos comerciales responda al propósito de contribuir al desarrollo económico y social de los PED, en AL, la implementación de los instrumentos internacionales habitualmente señalados por la UE puede implicar en mayores costes para las empresas, con la correspondiente reducción de productividad y competitividad, tanto para ellas como, al fin y al cabo, para el propio país. Esto no significa que toda la responsabilidad por el desarrollo económico y social de un país deba recaer única y exclusivamente sobre la comunidad internacional ya que los estados son los primeros y principales responsables por la promoción del DD (aunque en este campo la cooperación internacional es muy relevante). A propósito, Schutter (2014)⁵⁴⁴ observa que:

“The duty of international assistance and cooperation is given a particular emphasis in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Article 2(1) of the Covenant provides that the States parties to the Covenant undertake to 'take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical', to the maximum of their available resources, 'with a

⁵⁴³ McAfee, R. P., & McMillan, J. (1989). Government procurement and international trade. *Journal of international economics*, 26(3), 291-308.

⁵⁴⁴ Schutter, O. D. (2014). *International Human Rights Course*. Université Catholique de Louvain. Workpaper. Apuntes personales.

view to achieving progressively the full realization of the rights' recognized in the Covenant. The notion of international co-operation also is mentioned in relation to the right to an adequate standard of living in Article 11(1) of the Covenant, according to which 'States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent'. Under Part IV of the Covenant, which relates to the measures of implementation, two provisions relate to international assistance and co-operation. Article 22 states that the Economic and Social Council may bring to the attention of other UN bodies and agencies concerned with furnishing technical assistance any information arising out of the reports submitted by States under the Covenant which 'may assist such bodies in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to the effective progressive implementation of the present Covenant'. Article 23 specifies the different forms international action for the achievement of the rights recognized in the Covenant may take: such international action 'includes such methods as the conclusion of conventions, the adoption of recommendations, the furnishing of technical assistance and the holding of regional meetings and technical meetings for the purpose of consultation and study organized in conjunction with the Governments concerned'. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is not alone in this regard. For instance, the Convention on the Rights of the Child (CRC) requires states to take measures to implement the economic, social and cultural rights in the treaty "... to the maximum extent of their available resources and, where needed, within the framework of international cooperation" (art. 4). Thus, as noted by the Committee on the Rights of the Child, "(w)hen States ratify the Convention, they take upon themselves obligations not only to implement it within their jurisdiction, but also to contribute, through international cooperation, to global implementation" (Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 5: General Measures of Implementation for the Convention on the Rights of the Child, UN Doc. CRC/GC/2003/5, at para. 5).

Yet, disagreement persists as to the legally binding nature of the obligation of international cooperation as expressed in the International Covenant on Economic,

Social and Cultural Rights, or other human rights instruments referring to international assistance and cooperation as a means to support the full realization of human rights. Neither the drafting history of the Covenant nor subsequent State practice provides a definitive answer. When negotiating what came to be Article 2(1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the drafters agreed that international cooperation and assistance was necessary in order to realize economic, social and cultural rights, but they disagreed as to whether it could be claimed as a right. Even where it is recognized that there may exist legal duties to provide assistance and cooperation, it may be questioned whether this should be at any specified level. Since 1970, it is agreed that "Each economically advanced country will progressively increase its official development assistance to the developing countries and will exert its best efforts to reach a minimum net amount of 0.7 percent of its gross national product at market prices by the middle of the decade" (General Assembly, International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade, GA Res. 2626, UN GAOR (Twenty-fifth session, 1970), UN Doc. A/RES/25/2626 (XXV), at 43 (1970)). This joint commitment has been re-affirmed in subsequent international declarations, including in the Monterrey Consensus on Financing for Development ((22 March 2002), UN Doc. A/AC.257/32, at 42 (2002)) and in the Doha Declaration on Financing for Development: Outcome Document of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review Implementation of the Monterrey Consensus (annexed to GA Res. 63/239, UN Doc. A/RES/63/239, at 43 (2009)). The Committee on Economic, Social and Cultural Rights has affirmed this benchmark as a necessary component of giving effect to the obligation of international assistance, and regularly asks industrialized countries whether they are reaching this target (only a handful of countries do in fact). However, whether this corresponds to a legal obligation (as opposed to a desirable objective, that States should be encouraged to strive towards), remains contested".

El desarrollo, la estabilidad económica, política y social, el estado de derecho y el respeto por los DD.HH están engranados, de una forma o de otra, con el flujo comercial y financiero. El reconocimiento y el respeto por los DD.HH contribuye a la estabilidad

social y política de un país, algo que interesa al propio país, a la subregión, región y a la comunidad internacional en general. La UE también se beneficia del incremento de la demanda de sus productos en países, subregiones y regiones con esas características. El respeto por los DD.HH, plasmado en la cláusula social (y asociada a la condicionalidad de acceso al mercado), genera previsibilidad, seguridad y estabilidad social, un marco adecuado para importar, exportar e invertir.

Además, tal como se consagra en la UE, también en AL se comprende que el pleno desarrollo de las potencialidades humanas depende del reconocimiento de los DD.HH por el estado. Contrariamente, la falta de desarrollo inhibe la potencialidad humana, perpetua la pobreza, la discriminación, la marginación y la exclusión social, entre otros problemas (Hillman, Richard, Peeler & Da Silva, 2001)⁵⁴⁵. Como instrumentos de promoción al desarrollo económico y social, los DD.HH están en la base del dialogo, la cooperación y el comercio mantenido por la UE con AL.

Es importante mencionar que, aunque se expresen mediante diferentes dibujos y estructuras, los DD.HH están presentes en los acuerdos de la UE con los PED. Dentro del contexto de la promoción del desarrollo y fortalecimiento de los DD.HH, la UE cuenta con el apoyo de la ONU en lo que se refiere a su propósito de promover un mejor nivel de vida, empleo y condiciones socio-económicas en diferentes países como forma de preservar la paz mundial.

El consenso internacional logrado por el empeño de la AGNU a partir de 1960 ha reorientado los esfuerzos hacia el establecimiento de objetivos y estrategias enfocadas específicamente al desarrollo, incluyendo la protección de los DD.HH, del medioambiente, de la democracia, la buena gobernanza etc. Estos esfuerzos también

⁵⁴⁵ Hillman, R. S.; Peeler, .A. & da Silva, E. C. (2001). *Democracy and Human Rights in Latin America*. Connecticut: Praeger Frederick Publisher.

han sido plasmados en la Cumbre del Milenio⁵⁴⁶ celebrada en septiembre del año 2000⁵⁴⁷ y en los acuerdos comerciales celebrados por la UE con distintos PED.

Por su relevancia, interesa comentar que diversos organismos especializados de las Naciones Unidas también están involucrados con la prestación de asistencia técnica a países latinoamericanos y contribuyen a la formulación de políticas y movilización de fondos. Una de las entidades, el GBM, edita periódicamente una lista de los países más pobres del mundo, datos utilizados como referencia por la UE para efectos de concesión de beneficios comerciales en el esquema SPG.

No cabe duda de que la UE participa activamente en la promoción del desarrollo económico y social en el mundo. De hecho, es el actor más activo en la cooperación al desarrollo internacional, según observa Panagariya (2002)⁵⁴⁸. Particularmente, la Comisión Europea apoya otros países para que logren avanzar en temas de desarrollo⁵⁴⁹. En este ámbito podría ser mencionado, por ejemplo, el instrumento de Cooperación para el Desarrollo de 2007, cuyo objetivo es fomentar la cohesión social y fortalecer la integración regional, el Reglamento (UE) n° 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2014 por el que se establece un Instrumento de Financiación

⁵⁴⁶ Algunos países latinoamericanos, como Argentina, han elaborado normas jurídicas con expresa referencia a la Cumbre del Milenio como, por ejemplo, Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Resolución n° 1909/GCABA/SS/03 de 24 de Septiembre de 2003 o el Proyecto de Ley n° 121 de 2013 de la Cámara (Colombia), por medio de la cual se adicionan un inciso al párrafo cuarto (4º) del artículo 136 de la ley n° 1450 de 2011.

⁵⁴⁷ También se puede mencionar la erradicación de la pobreza extrema y el hambre y la sostenibilidad del medio ambiente.

⁵⁴⁸ Panagariya, A. (2002). EU preferential trade arrangements and developing countries. *The World Economy*, 25(10), 1415-1432.

⁵⁴⁹ Diferentes temas relacionados con el desarrollo como, por ejemplo, la Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la participación de la Comunidad en un programa de investigación y desarrollo, ejecutado por varios Estados miembros y Noruega, y destinado a desarrollar nuevas intervenciones clínicas a fin de luchar contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis gracias a una cooperación a largo plazo entre Europa y los PED (COM(2002) 474 - C5-0392/2002 - 2002/0211(COD)), DO C 62E de 11.3.2004, p. 150/156.

de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020⁵⁵⁰ o la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2012, sobre la definición de una nueva política de cooperación al desarrollo con AL (2011/2286(INI))⁵⁵¹.

En lo que concierne a AL, la cooperación de la UE está organizada en función de países, subregiones y regiones. La cooperación con países está plasmada en acuerdos de cooperación bilaterales. Los denominados *Country Strategy Papers* procuran definir las prioridades cooperativas con cada país, aunque también plasmen objetivos regionales (como se puede apreciar en el Reglamento (CE) n° 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006)⁵⁵². Relevantes dimensiones son tomadas en cuenta y promovidas en este plano: a) cohesión social, b) preservación, consolidación y fomento de la paz, c) estado de derecho, d) cooperación económica y e) desarrollo del comercio. Evidentemente, la promoción se debe hacer acompañar por un adecuado apoyo presupuestario plasmado en programas de acción.

Relativamente a las subregiones, la UE las divide en América Central, Comunidad Andina y Mercosur. En América Central, la financiación del desarrollo busca fomentar el proceso de integración política, económica, institucional y social en la región, el fortalecimiento de las uniones aduaneras, de la gobernanza regional y de la seguridad pública⁵⁵³.

Existen varios instrumentos en este sentido, como por ejemplo, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “Las relaciones UE-América

⁵⁵⁰ DOUE de 15.3.2014 (L 77/44).

⁵⁵¹ DOUE de 15.11.2013 (CE 332/1).

⁵⁵² En nivel interregional, aunque con anterioridad, se puede señalar, por ejemplo, el instrumento siguiente: European Parliament resolution on the draft Commission decisions establishing Country Strategy Papers and Indicative Programmes for Malaysia, Brazil and Pakistan, Official Journal 287 E , 29/11/2007, pp.0507 - 0509.

⁵⁵³ La UE, sin ir más lejos, es miembro observador del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Central” (2007)⁵⁵⁴, la Resolución sobre las relaciones con los Estados de la América Central, incluida Cuba (1991)⁵⁵⁵ o acuerdos de mayor envergadura, como el que establece una Asociación entre la UE y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro⁵⁵⁶, aunque muchos temas sean aun bastante delicados, como señala la *Aplicación de la cláusula bilateral de salvaguardia y del mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica*, 2012⁵⁵⁷ (especial destaque para la enmienda nº 13: *Es necesario hacer hincapié en la importancia de que se respeten las normas internacionales del trabajo elaboradas y supervisadas por la Organización Internacional del Trabajo. La defensa del trabajo decente para todos debe ser una prioridad absoluta y los bananos importados de Centroamérica deben haberse producido en condiciones salariales, sociales y ambientales correctas a fin de que los productores de la Unión no sean víctimas de dumping, una desventaja que no estarían en situación de compensar y que pondría definitivamente en peligro su competitividad en el mercado mundial del banano*).

Otro instrumento que revela ciertas dificultades comerciales es el Reglamento de Ejecución (UE) nº 977/2013 de la Comisión, de 11 de octubre de 2013, relativo a excepciones a las reglas de origen que establece el anexo II del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la UE y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, que se aplican dentro de contingentes de determinados productos procedentes de Centroamérica⁵⁵⁸. Además, la UE tiene un acuerdo marco de

⁵⁵⁴ DOUE de 27.10.2007 (C 256/138).

⁵⁵⁵ DO C 72 de 18.3.1991, p. 216.

⁵⁵⁶ DOUE de 15.12.2012, pp. 3-2621.

⁵⁵⁷ Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 13 de septiembre de 2012 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Centroamérica, por otra (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)).

⁵⁵⁸ DOUE de 12.10.2013 (L272/31).

cooperación, desde el tiempo de la CEE, con las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá que abarca los ámbitos político, comercial y de cooperación (Decisión del Consejo de 22 de febrero de 1999).

Por su vez, la Comunidad Andina recibe desde el inicio de los años setenta una ayuda financiera para su desarrollo, también con la finalidad de promover la prosperidad mediante el apoyo de la integración regional. El programa de ayuda es amplio, pero destacamos la asistencia técnica para el comercio, el fomento de la cohesión social y económica y la participación de la sociedad civil en el proceso de integración.

Diversos instrumentos también existen en relación a ese grupo de países como, por ejemplo, la *Decisión del Consejo relativa a la firma de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros, las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y la República Bolivariana de Venezuela, por otra parte* (14.11.2003)⁵⁵⁹; el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Las relaciones entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones” de 16.12.2006, del cual se puede destacar el apartado nº 5.5.1: *En coherencia con el objetivo de alcanzar una asociación integral las Partes negociadoras deben plasmar la vigencia de los derechos fundamentales en materia sociolaboral y de la defensa de la democracia y los derechos humanos y establecer mecanismos de promoción de todos estos derechos, manifestando expresamente su determinación de luchar contra el narcotráfico y la corrupción y perseguir el desarrollo económico con justicia y cohesión social.*

⁵⁵⁹ Sentencia de Constitucionalidad nº 645/10 de la Corte Constitucional de Colombia, de 24 de Agosto de 2010: Revisión de constitucionalidad del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la CE y sus estados miembros, por una parte, y la comunidad andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela), por otra parte (hecho en Roma el 15 de diciembre de 2003) y la ley nº 1349 de 2009 que lo aprueba. La corte se pronuncia sobre la competencia y el objeto de control, pasa a realizar un estudio formal sobre la descripción y el trámite que se surtió sobre la ley aprobatoria del tratado, luego se realiza un análisis sobre el contenido, el contexto normativo y constitucional del acuerdo de diálogo político y se encuentra que la norma es acorde con los preceptos constitucionales. Al final, decide declarar la exequibilidad del acuerdo y de su ley aprobatoria.

En lo que concierne al Mercosur, la ayuda europea – financiación al desarrollo destinada especialmente a apoyar la integración regional - se ha iniciado en 1991. Sus programas de ayuda están enfocados principalmente en la integración de mercados, el incremento de las transacciones comerciales entre los respectivos miembros, el fortalecimiento institucional, la potenciación del papel de la sociedad civil en el proceso de integración y, prioritariamente, la ampliación del Mercosur y la aplicación de su acuerdo de asociación con la UE.

Entre los varios instrumentos existentes se puede mencionar, por ejemplo, el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados partes, por otra, de 19.03.1996, la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Mercosur, de 14.11.2003, la Resolución del Parlamento Europeo sobre las relaciones económicas y comerciales entre la UE y el Mercosur, de 12.10.2006 etc. En lo que se refiere al comercio, las relaciones de la UE están asentadas, hasta que se concluya y entre en vigor el futuro Acuerdo de Asociación, en el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, vigente desde julio de 1999 y considerado el marco jurídico básico entre ambos bloques.

En el ámbito de la cooperación regional, los programas buscan reforzar lazos con la UE y fomentar tanto el desarrollo “Sur-Sur” como de cada una de las subregiones antes mencionadas. Esta cooperación se ha puesto en marcha en el inicio de los años noventa del siglo pasado. Durante esa década, la cooperación ha estado más enfocada al ámbito educativo y al desarrollo local urbano.

No obstante, en el inicio del año 2000, nuevos programas regionales han sido formulados de acuerdo con las prioridades definidas en las Cumbres Unión Europea, América Latina y Caribe (UE-ALC). La asociación birregional busca promover el diálogo y, para eso, son adoptadas acciones conjuntas con diversas instituciones internacionales que actúan en la región, como CEPAL, PNUD, BID, OCDE etc. Estos programas están abiertos a todos los países latinoamericanos, incluyendo Cuba. Sus

prioridades máximas son la cohesión social, el desarrollo sostenible y el cambio climático y la promoción de la educación superior y la investigación.

El Fondo Latinoamericano de Inversiones, puesto en marcha por la Comisión Europea en el año 2010, contribuye en todo este proceso, al apoyar la inversión pública en sectores considerados estratégicos. En todos los acuerdos y en todas las acciones, como reflejo directo de la política exterior de la UE, los DD.HH. constituyen una base sólida, algunas veces subyacentes y otras veces, como en el caso de la accesibilidad comercial al mercado interior - mediante la condicionalidad de la cláusula social -, algo más explícita. Los instrumentos internacionales de protección de los DD.HH., asociados a la cláusula social y, por tanto, a la condicionalidad de acceso a su mercado, así como los distintos mecanismos adoptados por la sociedad internacional, están directamente inspirados en la DUDH de 1948, tema del próximo epígrafe.

3.5 CLÁUSULA SOCIAL, DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y COMERCIO INTERNACIONAL

La inclusión de una cláusula social en los acuerdos comerciales presupone la ausencia (o al menos la grave deficiencia) de previsión de los DD.HH en AL. Jurídicamente esta asertiva es injustificable. Tanto para la UE como para AL, el documento base de todos los instrumentos internacionales de protección de los DD.HH es la DUDH. Este documento plasma los elementos esenciales que deben ser perseguidos por los estados y por la propia SI en relación a los DD.HH. La Declaración ha inspirado la elaboración de relevantes instrumentos jurídicos que han positivado, consolidado y expandido su contenido.

En AL, su influencia se ha proyectado hacia la inclusión de disposiciones específicas en las distintas legislaciones nacionales y en tratados internacionales y regionales ratificados por los estados. Por lo tanto, no son países jurídicamente ajenos a los DD.HH, razón por la cual se podría cuestionar, desde la perspectiva jurídica, la persistencia de la cláusula social en los acuerdos comerciales. A lo largo de los años, la

protección de los DD.HH ha asumido distintas formas jurídicas: tratados, costumbres internacionales, principios generales, leyes nacionales etc. La inclusión de la cláusula social en un AC, con su característica de elemento condicionante del acceso al mercado único, parece ignorar la relevancia jurídica que históricamente esos derechos han tenido en esta región del planeta.

Una de las más expresivas consustanciaciones de los propósitos plasmados en la Declaración es, en el ámbito internacional, la Carta Internacional de Derechos Humanos, constituida por la DUDH, el PIDCP⁵⁶⁰ (junto con sus dos Protocolos Facultativos⁵⁶¹⁻⁵⁶²) y el PIDESC⁵⁶³⁻⁵⁶⁴ (y, presumiblemente, su Protocolo Facultativo, en vigor desde el año 2013). Este conjunto de normas no es solamente relevante para la UE, sino también para AL. Forsythe (2012)⁵⁶⁵ señala, además, algo que permitiría cuestionar aún más, según la perspectiva jurídica, la necesidad de incorporación de la cláusula social en los AC concluidos con AL.

Los instrumentos supra mencionados, además de vinculantes para los estados que los hayan ratificado, sirven también como referencia para toda la SI. Como un conjunto de derechos inherentes a todos los seres humanos, las normas de protección de esos derechos no distinguen elementos como la nacionalidad, el lugar de residencia, el origen nacional, la etnia, la religión, el sexo, la lengua o cualquier otra condición que implique

⁵⁶⁰ Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la AGNU en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.

⁵⁶¹ Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la AGNU en su resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 9.

⁵⁶² Segundo Protocolo Facultativo (destinado a abolir la pena de muerte). Aprobado y proclamado por la AGNU en su Resolución 44/128, de 15 de diciembre de 1989. Entrada en vigor el 11 de julio de 1991.

⁵⁶³ Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la AGNU en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.

⁵⁶⁴ Protocolo Facultativo: Resolución A/RES/63/117, adoptada el 10 de diciembre de 2008 (se abrió a la firma el 24 de septiembre de 2009). La Convención entrará en vigor luego de que 10 países la ratifiquen.

⁵⁶⁵ Forsythe, D. P. (2012). *Human rights in international relations*. Cambridge University Press.

en una discriminación negativa. Esta ha sido, según Jelin & Hershberg (1996)⁵⁶⁶, la base jurídica formalmente adoptada en AL para la edificación de la estructura democrática que ha permitido el dialogo con Europa.

También debe ser considerado que tanto la UE como AL son normalmente obedientes a las grandes organizaciones con capacidad decisoria en el mundo. La más importante de ellas, la ONU, cuenta con una Asamblea General cuya Tercera Comisión (ASHC) cumple el cometido de auxiliar la entidad en lo que concierne a la implantación de estándares internacionales de DD.HH en el ámbito de la SI. Ni UE ni AL son ajenas a eso. La supervisión de esos estándares de protección de los DD.HH se realiza por intermedio del CDH, establecido el 15 de mayo de 2006 por la AGNU, de la que es subordinado directo.

El Consejo, constituido por 47 estados miembros, ha sustituido a la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y es el responsable del fortalecimiento de la promoción y la protección de los DD.HH en el mundo y de considerar las situaciones de violaciones de esos derechos a través de su mecanismo de Examen Periódico Universal. No consta que AL rechace la actividad del Consejo⁵⁶⁷.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa y asiste a los estados miembros con la implantación de los estándares de DD.HH internacionales. La predisposición de ayuda y colaboración de los países latinoamericanos en esos temas también es notorio. ¿La cláusula social ignora esa situación? Interesa mencionar que muchos de los principales tratados internacionales de DD.HH cuentan con un órgano revisor que supervisa su aplicación en los países signatarios. Ningún país, lo que incluye a todos en AL, puede rechazar ese órgano, de

⁵⁶⁶ Jelin, E. & Hershberg, E. (1996). *Constructing democracy: human rights, citizenship, and society in Latin America*. Colorado: Westview Press.

⁵⁶⁷ Tanto la Comisión como el CDH, que le sucedió, son organismos multiestatales constituidos exclusivamente por representantes de los Estados (las organizaciones de la sociedad civil son solamente observadoras).

modo que la supervisión por la UE en el marco de los acuerdos comerciales no deja de ser jurídicamente redundante.

A parte de la dimensión jurídica, bajo el prisma económico también existen dudas sobre la necesidad de establecimiento de un condicionante al comercio con la UE. En tiempos de globalización, muchas son las voces que consideran la protección social (DD.HH.L) un contrapunto necesario para minimizar los problemas derivados de la actividad económica y comercial en nivel internacional como, presumiblemente, la pérdida de puestos de trabajo, la violación de DD.HH.L o la marginación y exclusión de segmentos de la población. No obstante, retomando comentarios anteriores y ampliándolos, el prestigioso economista Jagdish Bhagwati (2004)⁵⁶⁸, profesor de economía de la Universidad de Columbia y ex docente del *Massachusetts Institute of Technology*, considera que la intensificación del comercio internacional genera tanto la creación de puestos de trabajo como la elevación de los estándares laborales y de DD.HH en todo el mundo. Los mayores beneficiados serían los PED, según el autor.

Para Bhagwati, un fervoroso defensor de la globalización por sus efectos presumiblemente beneficiosos para la humanidad, la relación entre DD.HH y comercio internacional es clara. El autor afirma tajantemente que las relaciones comerciales internacionales generan puestos de trabajo, riquezas para la sociedad y, aunque a largo plazo, promueven los DD.HH.L. Su argumento se basa en la observación de que el comercio genera trabajo en regiones que padecen de elevadas tasas de desempleo. Las condiciones laborales y humanas iniciales serían duras - especialmente en las fábricas - pero, con el tiempo, tenderían a mejorar. Habría sobreexplotación, pero la presión ejercida por la comunidad internacional forzaría las autoridades nacionales a buscar la convergencia de sus propios patrones hacia aquellos estándares laborales y humanos más elevados consagrados en otros países que, por su vez, buscan estar acordes con los estándares establecidos por la ONU y la OIT.

⁵⁶⁸ Bhagwati, J. (2004). *In Defense of Globalization*. Oxford: Oxford University Press.

Si esto realmente se verifica (se ha analizado en el inicio de la investigación el tema de la asignación de recursos privados en las decisiones empresariales y su relación con la explotación laboral), la inclusión de la cláusula social en los acuerdos comerciales se reduciría esencialmente: a) al control (por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea) de la normativa interna de los países latinoamericanos (los tratados ratificados se incorporan al derecho interno) que incorpore esos estándares internacionales y b) a la supervisión de la fiscalización interna llevada a cabo en esos países. Ambos son comprensibles políticamente pero muy cuestionables desde la perspectiva jurídica.

Por su vez, el ya citado Pankaj Ghemawat (2011)⁵⁶⁹, ex profesor de la *Harvard Business School* y actual profesor del *IESE Business School*, en Barcelona, procura desmontar diversas ideas estereotipadas sobre el excesivo sobredimensionamiento de la globalización. El autor emplea la curiosa expresión “globalony” (“la globalización de las tonterías”) para criticar la visión sesgada que se tiene actualmente sobre la integración económica y procede a un diagnóstico preciso, sólidamente fundamentado en datos económicos, sobre las potencialidades del comercio internacional (el autor considera que la interrelación económica entre los países aun es excesivamente baja). Mediante el uso de su modelo CAGE (Ghemawat, 2014)⁵⁷⁰, analiza la relación del comercio internacional bajo los ámbitos cultural, administrativo, geográfico y económico. Uno de los datos que más llama la atención es la potencialidad comercial (cerca de 118%) existente entre antiguas colonias y sus respectivas ex metrópolis.

Interesa mencionar también que Sanahuja (2000)⁵⁷¹ señala que la UE tradicionalmente ha ofrecido a Latinoamérica un modelo de relación “Aid, not Trade”, bien más limitado del que fuera otorgado a los países signatarios de los Convenios de

⁵⁶⁹ Ghemawat, P. (2011). *World 3.0: Global Prosperity and how to Achieve it*. Boston: Harvard Business Press Books.

⁵⁷⁰ Ghemawat, P. (2014). *Globalization of Business Enterprise*. Apuntes personales (participación en el curso auspiciado por el IESE, 03 de febrero a 11 de abril, 2014).

⁵⁷¹ Sanahuja, J. A. (2000). Asimetrías económicas y concertación política en las relaciones Unión Europea-América Latina: un examen de los problemas comerciales. *Revista electrónica de estudios internacionales*, 1-18.

Lomé (ex colonias francesas y británicas). Con la nueva PESC, se ha diseñado una estrategia distinta hacia AL, con una asociación basada en el diálogo político, la cooperación económica reforzada y, por primera vez, la apertura de negociaciones para la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios comerciales (Sanahuja, 2000).

Si el comercio UE-AL aun es sustancialmente pequeño (lo que se comprueba con el modelo CAGE), entonces la permanencia de la cláusula social en los acuerdos comerciales con esa zona del planeta tampoco tendría demasiado sentido. Según Ghemawat, el comercio internacional puede intensificarse muchísimo más. Hay mucho espacio para eso. Su capacidad para crear empleo no debe ser olvidada, aunque hay que observar escrupulosamente su calidad. El ideal es generar trabajo con calidad, sin duda. Sin embargo, no siendo eso posible, hay que tener en cuenta que la creación de empleo debería preceder el análisis de su calidad. Este aun es un reto para muchos países, como se puede constatar en el trabajo de Bensusán (2009)⁵⁷², del cual extraigo el siguiente párrafo (p. 26):

“... los estándares laborales fundamentales no han podido frenar las estrategias competitivas basadas en el deterioro de los empleos, además de que persisten malas condiciones de trabajo en sectores alejados del comercio internacional”.

La cláusula social no cumpliría su función si se limitase la creación de puestos de trabajo en AL. Una tasa de empleo socialmente aceptable es esencial para mantener la estabilidad económica y social en un país, una subregión o toda una región, algo que evidentemente interesa a la UE, puesto que las tensiones sociales provocadas por el desempleo pueden ser notables y generar importantes inestabilidades políticas y económicas, restringiendo la importación de productos con mayor valor agregado, algo económicamente muy relevante para el bloque europeo.

⁵⁷² Bensusán, G. (2009). Estándares laborales y calidad de los empleos en América Latina. *Perfiles latinoamericanos*, 17(34), 13-49.

No obstante, la cláusula social no ha podido lidiar con los bajos salarios practicados en AL (ni la OIT ha logrado incorporar ese elemento en sus convenios internacionales), una vez que, técnicamente, no es posible identificar lo que sería un valor económico razonable para un salario mínimo global. La cláusula social pretende condicionar el acceso al mercado único europeo al establecimiento de determinados estándares internacionales en materia de DD.HH.L, pero no ha podido tocar en uno de sus componentes principales, los bajos salarios. Al contrario, son exactamente esos bajos salarios que impulsaron los movimientos sindicales que ayudaron a conformar la cláusula social. No se puede perder de vista que la mano de obra abundante y barata de los PED constituye indudablemente una enorme ventaja competitiva, no reconocida por la UE, evidentemente. El tema de los bajos salarios es motivo de preocupación por las autoridades europeas desde hace mucho tiempo y no solamente en relación a los países latinoamericanos. China, por ejemplo, ha basado su crecimiento económico de los últimos años en decisiones del partido comunista que implican:

- Mantener devaluada la moneda local – el *renminbi* (la unidad básica se llama *yuan*);
- Mantener bajos salarios;
- Volcar sus estructuras administrativas para la exportación masiva, dentro del enfoque de sus planes quinquenales.

El XII Plan Quinquenal⁵⁷³, aprobado el 14 de marzo de 2011 por la Asamblea Popular China para el período comprendido entre 2011 y 2015⁵⁷⁴, cumple esencialmente esta función: generar trabajo, aunque en condiciones precarias para el patrón occidental,

⁵⁷³ Fernández, G. R. (2011). *El XII Plan Quinquenal de la República Popular China*. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái. Madrid: ICEX.

⁵⁷⁴ El XIII Plan Quinquenal (2016-2020) para el desarrollo económico y social del país (en preparación) seguirá priorizando el desarrollo y pondrá el énfasis en la reforma y la innovación para alcanzar un mayor avance en la promoción del desarrollo científico, la transformación de la modalidad de desarrollo y la solución de los problemas profundamente arraigados en el país. Además, buscará la reestructuración y la simplificación de la administración, la delegación de facultades a los niveles inferiores, la innovación científica y la apertura al mundo exterior. Sus grandes objetivos son hacer más eficiente la economía, más equitativa la sociedad y más sostenible el desarrollo a largo plazo.

para controlar los focos de insatisfacción popular, que no pueden valerse de las elecciones democráticas para sustituir el partido único, en el poder desde 1949, cuando el Ejército Popular de Liberación derrotó al Partido Nacionalista Chino en la Guerra Civil y su líder, Mao Zedong, proclamó la nueva República Popular, bajo la dirección del Partido Comunista. Por su vez, el XIII Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social Nacional (2016-2020), concluido el 29.10.2015, enfatiza el mantenimiento de un crecimiento económico firme asociado a algunas características notables, como el fomento y la consolidación de la demanda interna, la innovación, la coordinación, el desarrollo verde, la apertura y el intercambio.

La inmensa mayoría de los economistas asevera que los flujos comerciales cumplen una función importante en lo que concierne a la creación de riqueza en escala global (Lawrence y Meyer, 1990)⁵⁷⁵. Ahora, saber si el comercio internacional se asocia con la promoción o la violación de los DD.HH o aún si genera o destruye puestos de trabajo a lo largo y ancho del planeta es entrar en una discusión sesgada e interminable que variaría en función de una infinidad de factores.

La dimensión humana que la cláusula social pretende dar a las relaciones comerciales bilaterales no se encuentra en el sistema multilateral de comercio. Su gran marco de referencia, la OMC, tiene una conexión muy limitada con los DD.HH.L. La naturaleza de la cláusula social, con sus matices jurídicos, políticos y económicos, tanto dificulta su inclusión en nivel de compromiso político en el seno de la OMC, como facilita a la UE, fuera del marco multilateral, vincularla a condicionalidades de acceso al mercado. Jurídicamente existe un hiato entre ambas posturas difícil de solucionar puesto que, como señalan Crawford & Laird (2001)⁵⁷⁶, los acuerdos bilaterales deben ajustarse a los acuerdos multilaterales de la OMC.

⁵⁷⁵ Lawrence, F. K. & Meyer, B. D. (1990). Unemployment Insurance, Recall Expectations, and Unemployment Outcomes. *Quarterly Journal of Economics*, 105, noviembre, 973-1.002.

⁵⁷⁶ Crawford, J. A., & Laird, S. (2001). Regional trade agreements and the WTO. *The North American Journal of Economics and Finance*, 12(2), 193-211.

Aunque la cláusula social busque establecer un estándar mínimo en los elementos que configuran la dimensión social del comercio, no se puede dejar de considerar que, económicamente, también permite el establecimiento de objetivos estratégicos que nada tienen que ver con la promoción de los DD.HH (se puede comprender los efectos económicos capaces de generar la inclusión de esa cláusula en la protección de sectores sensibles de la UE, caso se adopte una postura más dura y restrictiva en relación a la importación de productos procedentes de los PED, con base en eventuales violaciones de los DD.HH.L).

Como admitir que la UE incorpore la cláusula social en sus acuerdos si la propia OMC la evita es como mínimo curioso. La OMC, creada por la Declaración de Marrakech de 15 de abril de 1994⁵⁷⁷, sigue siendo la principal entidad en nivel mundial que tiene por finalidad liberalizar el comercio internacional de bienes y servicios (Narlikar, Daunton y Stern, 2012)⁵⁷⁸. No cuida de los DD.HH y remite a la OIT los temas relacionados a los derechos laborales. La UE (hasta el 30 de noviembre de 2009 conocida oficialmente en la OMC por razones jurídicas como las Comunidades Europeas) es miembro de la OMC desde el 1º de enero de 1995. Sus 28 estados miembros también son miembros de la OMC por derecho propio⁵⁷⁹. Todos, en su ámbito interno y en el comercio intrazona, toman en cuenta los DD.HH.L. Por coherencia política, también lo hacen en su política exterior, aunque jurídicamente el espacio existente para la inclusión de la cláusula social puede ser cuestionado por

⁵⁷⁷ Creada específicamente por los representantes de 124 países y de las Comunidades Europeas, durante la reunión final, a nivel ministerial, del Comité de Negociaciones Comerciales de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales en el ámbito del *General Agreement on Tariffs and Trade* 1947, celebrada del 12 al 15 de abril de 1994.

⁵⁷⁸ Narlikar, A. Daunton, M. & Stern, R. M. (2012). *The Oxford Handbook on the World Trade Organization (Oxford Handbooks in Politics & International Relations)*. Oxford Handbooks in Politics & International Relations Collection. Oxford. Oxford University Press.

⁵⁷⁹ La UE es una unión aduanera única con una política comercial y un arancel únicos. La Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) representa a todos los Estados miembros de la UE en prácticamente todas las reuniones de la OMC. OMC, Información por miembro. La Unión Europea y la OMC, recuperado de http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/european_communities_s.htm

representar potencialmente un instrumento de restricción al comercio internacional, algo no admisible en el ámbito de los acuerdos abarcados de la OMC.

Aunque el régimen jurídico de la OMC sea autocontenido y poco permeable a la incorporación de normas externas (incluyendo los tratados de DD.HH y los convenios laborales de la OIT), la entidad, en la medida del posible, parece estar buscando el equilibrio entre la liberalización comercial, su objetivo prioritario, y el denominado enfoque desarrollista (OMC, 2003)⁵⁸⁰, que parte del principio de que el acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de todos los individuos. Esto no lo reconoce expresamente la OMC, pero su apertura hacia políticas diferenciadas que favorezcan a los PED (como la cláusula de habilitación de la Ronda Tokio en el final de los años setenta del siglo pasado), parecen señalar para ese camino.

¿Se ha logrado algo de momento? Sí, claro. La situación es mucho mejor ahora que en el inicio de la Revolución Industrial, sin duda. No obstante, la verdad es que, mismo con la inclusión de la cláusula social en las relaciones bilaterales y con la asunción de compromisos multilaterales que albergan posturas más beneficiosas para los PED, aún falta recurrir un larguísimo camino.

Delmas-Marty (2005)⁵⁸¹ afirma que, lamentablemente, solo el 20 por ciento de la población mundial goza de una protección social adecuada, al paso que las relaciones comerciales se intensifican más y más a cada día. Los DD.HH y el comercio internacional no parecen seguir el mismo ritmo y la cláusula social no ha logrado cambiar eso. Al contrario, se teme que su inclusión en los acuerdos comerciales intenta impulsar la protección de los DD.HH.L (según el estándar considerado adecuado para la UE) sin realmente tomar en cuenta el impacto que ocasiona en los PED, muchas veces negativo y contraproducente.

⁵⁸⁰ OMC. (2003). El programa de Doha para el desarrollo. Informe sobre el Comercio Mundial 2003. Recuperado el 20 de enero de 2012 de www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep.../wtr03_chap2b_s.pdf

⁵⁸¹ Delmas-Marty, M. (2005). *Vers un droit commun de l'humanité* (2ª ed.). Paris: Textuel.

Además, la posibilidad de que en un momento puntual (como una crisis económica), la cláusula social (y su condicionalidad al mercado interior) sirva de base para restringir las importaciones latinoamericanas y, paralelamente, proteger a los sectores sensibles del bloque, no puede ser de forma alguna desechada. Alston (2002)⁵⁸², por su vez, reitera el comentario antes realizado de que, durante mucho tiempo, las relaciones entre los DD.HH y el comercio internacional han tenido un carácter casi tangencial. Con efecto, su reconocimiento, aunque fuera un hecho para la sociedad internacional⁵⁸³, no ha logrado una adecuada interpenetración en el sistema multilateral de comercio y su inclusión en nivel bilateral es cuestionable jurídicamente.

Cabe indagar ahora lo que el comercio internacional comprende por protección social. Es necesario perquirir si los DD.HH.L encuentran tratamientos jurídicos idénticos, similares o distintos o si esa discusión es, en la práctica, estéril.

⁵⁸² Alston, P. (2002). Resisting the Merger and Acquisition of Human Rights by Trade Law: A Reply to Petersmann, The Jean Monnet Programme, *Jean Monnet Working Paper 12/02*. New York: New York University School of Law in *European Journal of International Law*, Vol. 13, No. 4, 2002, pp. 815-844.

⁵⁸³ Por ejemplo, “Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas” (Informe John Ruggie, de 2011) y “Los Principios de Limburg sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, de 1986.

CAPÍTULO 4

LA PROTECCIÓN SOCIAL: DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS LABORALES

4.1 LA PROTECCIÓN SOCIAL: DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS LABORALES

Después de analizar las dificultades de la cláusula social en términos de eficacia, se enfocará la investigación en la comprensión de la expresión “protección social” (asociada a la cláusula social y a la condicionalidad de acceso al mercado único europeo).

Lo primero que llama la atención es que esta no es una expresión unívoca. Existen diferentes acepciones y clasificaciones que atienden a preferencias y apreciaciones subjetivas de los autores. No tiene sentido indagar si solamente están englobados los derechos sociales, los derechos laborales o la seguridad social⁵⁸⁴ porque los grandes pactos internacionales de DD.HH. referenciados por la UE en sus AC engloban todas las categorías de DD.HH.: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Así, en este nivel, la discusión pierde su sentido bajo una perspectiva práctica. Además, con base en el levantamiento realizado por Chan (2003)⁵⁸⁵, la inclusión de la cláusula social en los acuerdos internacionales no llega a ser totalmente efectiva porque tanto empleadores como gobiernos tienden a aferrarse a la ventaja competitiva representada por los bajos costes de mano de obra.

⁵⁸⁴ Concretamente dentro del ámbito laboral, constituye uno de los objetivos estratégicos del “Programa Trabajo Decente” de la OIT. Específicamente, en materia de protección social, la OIT ha establecido tres objetivos principales: 1) Aumentar la eficacia y extender la cobertura de los sistemas de seguridad social; 2) Promover la protección de los trabajadores (salarios, tiempo de jornada, salud y seguridad); 3) Promover la protección de grupos vulnerables (trabajadores migrantes y sus familias, trabajadores en la economía informal). Todos esos elementos, agrupados a los demás anteriormente mencionados, constituyen la base de los programas políticos estatales de protección de los derechos humanos. Su logro es un objetivo y también un reto a los gobiernos, que deben observar los parámetros establecidos en el ámbito de la sociedad internacional.

⁵⁸⁵ Chan, A. (2003). Racing to the bottom: international trade without a social clause. *Third World Quarterly*, 24(6), 1011-1028.

Sin embargo, como observan Martin & Maskus (2001)⁵⁸⁶, es posible indagar si la expresión “cláusula social” corresponde a los denominados *derechos humanos laborales*. La cláusula social no hace referencia a esa categoría de derechos pero todo indica que, al menos en lo que se refiere a los convenios de la OIT, esto sea así.

Evidentemente, también aquí existe una enorme controversia. Según Jenks (1971)⁵⁸⁷, los convenios de la OIT que protegen DD.HH básicos comprenden tres categorías: 1º) convenios sobre la prohibición del trabajo forzoso; 2º) convenios sobre la libertad sindical; 3º) convenios sobre la prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Valticos (1977)⁵⁸⁸, Charnovitz (1987)⁵⁸⁹, Pla Rodríguez (1998)⁵⁹⁰ y Montejo (2012)⁵⁹¹ también opinan lo mismo. Por su vez, Edgren (1979)⁵⁹² incluye dentro de lo que denomina “normas equitativas de trabajo”, la regulación de la edad mínima, las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo y la inspección de trabajo (para asegurar la eficacia de la aplicación de esas reglas)⁵⁹³. De modo más pormenorizado, tendríamos los siguientes convenios de la OIT dentro de las categorías

⁵⁸⁶ Martin, W., & Maskus, K. E. (2001). Core labor standards and competitiveness: implications for global trade policy. *Review of International Economics*, 9(2), 317-328.

⁵⁸⁷ Jenks, C. W. (1971). *The International Labour Organization in the U.N. family*. New York: United Nations Institute for Training and Research.

⁵⁸⁸ Valticos, N. (1977). *Derecho Internacional del Trabajo*. Madrid: Tecnos.

⁵⁸⁹ Charnovitz, S. (1987). Influence of International Labour Standards on the World Trading Regime-A Historical Overview, *The. Int'l Lab. Rev.*, 126, 565.

⁵⁹⁰ Plá Rodríguez, A. (1998). *El rol de las normas internacionales de trabajo en el proceso de integración económica*. Buenos Aires. Librería Universitaria.

⁵⁹¹ Montejo, M. F. C. (2012). Los derechos humanos laborales en el Derecho Internacional. *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*, 23(1), 115-144.

⁵⁹² Edgren, G. (1979). Fair labour standards and trade liberalization. *Int'l Lab. Rev.*, 118 (2), 523-548.

⁵⁹³ Administración e inspección del trabajo (convenios): convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 (núm. 63), convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), convenio sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85), convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150), convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160), Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947.

normalmente asumidas por la doctrina como las constitutivas de los denominados “derechos humanos laborales” (Dehejia & Samy, 2004)⁵⁹⁴:

1º) Trabajo forzoso:

- Convenio nº 029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930;
- Convenio nº 105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957.

2º) Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo:

- Convenio nº 011 - Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921;
- Convenio nº 084 - Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947;
- Convenio nº 087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948;
- Convenio nº 098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949;
- Convenio nº 135 - Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971;
- Convenio nº 141 - Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975;
- Convenio nº 151 - Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978;
- Convenio nº 154 - Convenio sobre la negociación colectiva, 1981.

El tema de la libertad sindical es importante para la UE. En sus acuerdos comerciales este es un tema recurrente. No obstante, como se ha visto anteriormente, la repercusión de la libertad sindical o de asociación es muy débil en aquellos países con abundante mano de obra dispuesta a trabajar casi que en cualquier situación para sobrevivir (Freeman, 2009)⁵⁹⁵.

⁵⁹⁴ Dehejia, V. H. & Samy, Y. (2004). Trade and labour standards: theory and new empirical evidence. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 13(2), 179-198.

⁵⁹⁵ Freeman, R. B. (2009). *Labor regulations, unions, and social protection in developing countries: market distortions or efficient institutions?* (nº 14789). National Bureau of Economic Research.

3º) Prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación (igualdad de oportunidades y de trato):

- Convenio nº 100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951;
- Convenio nº 111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958;
- Convenio nº 156 - Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981.

Este investigador cree que se puede incluir una cuarta categoría, totalmente compatible con el espíritu de la cláusula social:

4º) Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores:

- Convenio nº 005 - Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919;
- Convenio nº 006 - Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919;
- Convenio nº 010 - Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921;
- Convenio nº 015 - Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921;
- Convenio nº 033 - Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932;
- Convenio nº 059 - Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937;
- Convenio nº 060 - Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937;
- Convenio nº 077 - Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946;
- Convenio nº 078 - Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946;
- Convenio nº 079 - Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946;
- Convenio nº 090 - Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948;
- Convenio nº 123 - Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965;

- Convenio n° 124 - Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965;
- Convenio n° 138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973;
- Convenio n° 182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

De cualquier modo, como se puede fácilmente observar, el Reglamento (UE) n° 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (SPG), de 25 de octubre de 2012, no señala todos los convenios pertinentes a estas cuatro categorías. Como advierten Schmeisser, Krimphove & Popp (2013)⁵⁹⁶, se ha buscado un *mínimo social e internacionalmente aceptable*. En esta línea de racionamiento, algunos autores, como Mah (1997)⁵⁹⁷, Reinaldo & Dalla Via (2000)⁵⁹⁸ y Kaufmann (2007)⁵⁹⁹, han intentado incorporar otras normas laborales, otros convenios, ensanchando los *derechos humanos laborales* (o derechos laborales básicos). En posición extrema, Leary (1982)⁶⁰⁰, sostiene que todos los derechos incluidos en los convenios de la OIT deben ser considerados como normas laborales mínimas internacionales. Esta progresiva ampliación, sin embargo, ha sido criticada por diversos autores, entre los cuales Carmen y Ramos

⁵⁹⁶ Schmeisser, W.; Krimphove, D. & Popp, R. (2013). *International Human Resource Management and International Labour Law: A Human Resource Management Accounting Approach*. München: Oldenbourg Wissensch.

⁵⁹⁷ Mah, J. S. (1997). Core labour standards and export performance in developing countries. *The World Economy*, 20(6), 773-785.

⁵⁹⁸ Reinaldo, J. & Dalla Via, A. R. (2000). *Régimen Constitucional de los tratados* (2ª edit.). Buenos Aires: Abeledo Perrot.

⁵⁹⁹ Kaufmann, C. (2007). *Globalization and Labour Rights: The Conflict Between Core Labour Rights and International Economic Law*. Oxford: Hart Publishing.

⁶⁰⁰ Leary, V. A. (1982). *International Labour Conventions and National Law: The Effectiveness of the Automatic Incorporation of Treaties in National Legal Systems*. Leiden: Brill.

(1991)⁶⁰¹, Capón Filas (1992)⁶⁰² y Cristaldo Montaner (2000)⁶⁰³, que han proclamado el carácter contraproducente de una interminable discusión relacionada con la clasificación de las normas internacionales del trabajo en función tanto de los diferentes criterios adoptados como de la subjetividad de sus autores. Se pueden mencionar aun las posiciones de Alston (2004)⁶⁰⁴, que establece una diferencia entre *derechos humanos laborales fundamentales* (convenciones de la OIT sobre libertad de trabajo, libertad sindical e igualdad de oportunidades y de trato) y *derechos humanos básicos* relacionados con la materia laboral (derecho al trabajo, derecho a un ingreso mínimo, protección social en sentido estricto, derecho a condiciones de vida y de trabajo satisfactorias) y de Ermida (2003)⁶⁰⁵, según la cual los derechos laborales calificables como DD.HH son aquellos que están expresamente consagrados en los pactos y en las declaraciones sobre DD.HH, tanto universales como regionales.

En fin, existen profundas diferencias en la doctrina jurídica en lo que concierne al contenido de un eventual núcleo duro en el ámbito laboral. Existen dudas y controversias incluso sobre la fecha en que se ha plasmado su construcción conceptual. Montejo (2008)⁶⁰⁶, por ejemplo, comenta expresamente que:

“...resulta difícil rastrear exactamente en qué documento se introduce por primera vez el término “derechos humanos fundamentales” dentro de la OIT, pero se produce

⁶⁰¹ Ferreira, M. D. C. & Ramos Olivera, J. (1991). *Mercosur. Enfoque laboral*. Montevideo: Editorial Fundación de Cultura Universitaria.

⁶⁰² Capón Filas, R. (1992). Armonización de la legislación laboral en los países del MERCOSUR, *Revista Notisur*, Buenos Aires, Año XVII n° 43, noviembre, 26-42.

⁶⁰³ Cristaldo Montaner, J. D. (2000). *Armonización normativa laboral del MERCOSUR. Una propuesta unificadora*. Asunción: Editora Litocolor.

⁶⁰⁴ Alston, P. (2004). “Core labour standards” and the transformation of the international labour rights regime. *European Journal of International Law*, 15(3), 457-521.

⁶⁰⁵ Ermida Uriarte, O. (2003). *Derechos laborales y comercio internacional. Globalización económica y Relaciones Laborales*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

⁶⁰⁶ Montejo, M. F. C. (2008). Los derechos humanos laborales: el núcleo duro de derechos (core rights) y el ius cogens laboral. *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, 8, 111-158, p. 118.

con anterioridad a la elaboración de los Pactos Internacionales de 1966. La primera referencia clara la tenemos en la Primera Conferencia Regional Africana de la OIT en Lagos donde se adoptó una resolución que resalta entre los convenios internacionales del trabajo existentes, aquellos relativos a la protección de ciertos derechos humanos fundamentales (OIT, 1961: párrafo 7)9”.

A parte de las iniciativas privadas de asociar normas laborales (mínimas) a la buena imagen de la empresa (Diller, 1999)⁶⁰⁷, se podría decir que, tal como afirma Montejo (p. 146): “la importancia del *ius cogens* laboral reside en que cualquier tratado internacional o acto unilateral de los estados sería nulo si está en conflicto con los derechos humanos laborales recogidos en las normas imperativas del derecho internacional general. Así, el *ius cogens* laboral gozaría de un carácter imperativo sobre los ordenamientos internacional y nacionales”.

La doctrina tiende a apoyar propuestas de constitución de un eventual núcleo duro en los convenios de la OIT. La propia entidad también lo hace en sus pronunciamientos, como se puede observar, por ejemplo, en la Declaración de 1998 (que, además, emplea los términos “derechos fundamentales del trabajo”)⁶⁰⁸. Este investigador no tiene dudas de que la UE, en su cláusula social, también busca fortalecer determinados convenios de la OIT, aquellos que considera nucleares entre las normas laborales internacionales. Sin embargo, al tratarse de convenios, deben ser ratificados por los diferentes países.

En lo que concierne a la cláusula social, hay que observar que ella comprende todas las categorías de DD.HH. Los instrumentos señalados en los acuerdos comerciales o en el SGP así lo demuestran. Los convenios de la OIT considerados básicos por la UE

⁶⁰⁷ Diller, J. (1999). ¿Una conciencia social en el mercado mundial? Dimensiones laborales de los códigos de conducta, el etiquetado social y las iniciativas de los inversores. *Revista Internacional del Trabajo*, 118(2), 111-145.

⁶⁰⁸ La OIT ya mencionaba la existencia de los DD.HH. fundamentales con anterioridad a los Pactos Internacionales de 1966 (derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales), por ejemplo: Primera Conferencia Regional Africana de la OIT en Lagos (Nigeria, 1960) y 44ª Reunión de la Conferencia de la OIT (también de 1960). En ambas reuniones la expresión “derechos humanos fundamentales” ha sido empleada.

(para que sean ratificados por sus socios comerciales) expresan aquello que el bloque europeo considera el núcleo duro de las normas laborales, sin entrar en controversias. Así, la discusión doctrinal pierde mucho de su fuerza ante la opción política por determinados convenios⁶⁰⁹.

La cláusula social, como repositorio de un conjunto de valores pretensiosamente universales, gana peso en las relaciones internacionales en virtud de la erosión progresiva del estado nacional en el proceso global de integración económica. En este contexto *pretensiosamente orgánico* que conforma la globalización (“pretensiosamente” porque la SI aún es jurídicamente fragmentada), la protección social aparece como una necesidad también global que la cooperación internacional – o el comercio bilateral con la UE - procura fomentar (Rajagopal, 2003)⁶¹⁰.

No obstante, en la opinión de este investigador, el camino será arduo. Oraá & Isa (2002, pp. 75)⁶¹¹, ya advertían que “el tema de la universalidad de los DD.HH va a ser la gran batalla a la que nos tendremos que enfrentar. En esta batalla van a ser necesarias grandes dosis de apertura hacia otras culturas y hacia otras cosmovisiones de los derechos humanos, sobre todo para acercarse a planteamientos provenientes del Tercer Mundo y de los países islámicos”. Alston (1990)⁶¹² va más lejos y afirma que cualquier sugerencia de que la DUDH posee disposiciones aceptadas universalmente es, tanto en sentido filosófico como antropológico, simplemente insostenible. Esto ocurre porque la observancia y las concepciones de los DD.HH suelen ser muy distintas en los diferentes

⁶⁰⁹ Como los señalados en el Anexo VIII del Reglamento (UE) n° 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012.

⁶¹⁰ Rajagopal, B. (2003). *International Law from Below: Development, Social Movements and Third World*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁶¹¹ Oraá, J. O. & Isa, F. G. (2002). La declaración universal de derechos humanos (vol. 10). Universidad de Deusto, p. 75.

⁶¹² Alston, P. (1990). *The Fortieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights: A Time for Reflection than for Celebration*, in Human Rights in a Pluralist World. Individuals and Colelctivities, UNESCO-Roosevelt Study Center, Meckler, Westoport, pp. 1-13.

países. Según el autor, en la actualidad, el carácter universal atribuido a los DD.HH presenta síntomas de crisis.

De cualquier modo, bajo la concepción europea, los DD.HH contribuyen a la formación de una identidad global de la persona y, más que eso, verdaderamente superadora de las idiosincrasias locales. En otras palabras, se podría decir que los valores albergados en la cláusula social señalan un denominador común para todos los pueblos y para todos los estados. En la práctica, este es el denominador común que deben tener aquellos países interesados en exportar (o gozar de facilidades comerciales) a su mercado único. Según Santos (1995)⁶¹³, este conjunto de derechos (todos los derechos que están asociados a la protección social/cláusula social) actúa como la verdadera fuerza motriz de una política progresista e incluyente de las esferas públicas en el ámbito transnacional.

Las condiciones jurídicas parecen tender a desestructurarse nacionalmente y a reestructurarse con el propósito de responder a modelos y patrones consagrados en instrumentos jurídicos internacionales de vocación universal. En otras palabras, la universalización de ciertos valores es perseguida y fomentada por determinadas instituciones (de vocación universal) con base en instrumentos jurídicos (también de vocación universal). La UE persigue esta universalización y respalda los procedimientos y decisiones adoptados por esas instancias, y espera que los PED también lo hagan. Sin embargo, tal como ha preconizado Huntington (1998)⁶¹⁴, la competencia global ocurre en detrimento de la legitimidad local, de modo que la concepción universalista de los DD.HH constituye un instrumento de choque entre civilizaciones con características dispares, algo de cierta forma también ventilado por Ridruejo (2011)⁶¹⁵ y acorde con los comentarios anteriormente realizados.

⁶¹³ Santos, B. de S. (1995). *Toward a New Common Sense. Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*. New York: Routledge.

⁶¹⁴ Huntington, S. P. (1998). *The Clash of Civilizations*. New York: Pocket Books.

⁶¹⁵ Ridruejo, J. A. P. (2011). *Anuario de Derechos Humanos*. Nueva Época. Vol. 12., 267-286.

Si la UE pretende proclamar los DD.HH en sus relaciones comerciales, es de esperar que lo haga de modo realmente coherente y uniforme. En esta línea de racionamiento, se podría citar la antigua y aguda observación de Falk (1981)⁶¹⁶ sobre la existencia tanto de una “política de invisibilidad” (v.g. silencio en los medios de comunicación sobre la precaria situación de los casi cien millones de “intocables”⁶¹⁷ en la India, el genocidio del pueblo Maubere en Timor Oriental etc.) como de una “política de supervisibilidad” (exaltación en los medios de comunicación de abusos posrevolucionarios contra los DD.HH en Vietnam e Irán etc.) que, aunque graviten alrededor de la dignidad humana, atienden a intereses políticos, económicos y estratégicos distintos. En una simple transposición de esos intereses para el ámbito del comercio internacional, se puede observar que la postura de la UE ha variado sustancialmente en función de sus distintos intereses en relación a diferentes países.

Realizadas estas observaciones, la investigación buscará identificar los DD.HH comprendidos en la cláusula social.

4.2 LAS GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Aunque la concepción occidental de los DD.HH obedezca a una simetría mecanicista entre derechos y deberes que no encuentra exacta reproducción en todas las culturas, es imperioso observar que sus elementos centrales tienen una vocación claramente universalista, al consagrar derechos asociados a la dignidad de todos los seres humanos (Forrest, 2011)⁶¹⁸, sin tomar en cuenta necesariamente la categoría jurídica en que se encuadre (primera, segunda o tercera generación).

⁶¹⁶ Falk, R. (1981). *Human Rights and State Sovereignty*. New York: Holmes & Meier Publishers.

⁶¹⁷ Los descartados *Dalits*.

⁶¹⁸ Forrest, C. (2011). *International Law and the Protection of Cultural Heritage*. Londres: Routledge.

A propósito de las generaciones de DD.HH, desde que Vasak (1982)⁶¹⁹ estableció sus tres categorías en 1979, en el ámbito del Instituto Internacional de Derechos Humanos (Estrasburgo, Francia), diversos juristas han adoptado la división, basada esencialmente, como afirma Cuenca (2006)⁶²⁰, en el criterio histórico (momento en que fueron reivindicados y reconocidos en las constituciones de los estados). Tres categorías de DD.HH, todas de carácter universal, estaban incorporadas en la noción de bienestar social preconizada por los países europeos del segundo post-guerra⁶²¹:

1) Los derechos civiles (afirmados en el siglo XVIII y plasmados en los tribunales de justicia): reunían las libertades individuales y consagraban el pensamiento, la palabra y el culto.

2) Los derechos políticos (afirmados en el siglo XIX y reflejados en los Parlamentos y partidos políticos): extendieran los derechos civiles a la orden política, con la consagración del sufragio universal y la posibilidad de ocupar cargos públicos.

3) Los derechos sociales (afirmados en el siglo XX y asentados principalmente en el sistema educacional y en los servicios sociales): consagraban todos los derechos relacionados con el goce de un mínimo de bienestar y seguridad económica, lo que incluye el establecimiento de condiciones laborales compatibles con la dignidad humana.

En los próximos epígrafes se analizará con un poco más de detalle las generaciones de DD.HH consagradas en la cláusula social.

⁶¹⁹ Vasak, K. (1982). *The International Dimensions of Human Rights*. Connecticut: Greenwood Press.

⁶²⁰ Carmona Cuenca, E. (2006). Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital. *Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas* nº 2, 172-197.

⁶²¹ La clasificación parece basarse tanto en criterios temporales como axiológicos.

4.2.1 Los derechos humanos de primera generación

Los DCP están clasificados como de primera generación. Su objetivo primordial es proteger el individuo de los excesos cometidos por el estado y establecer un equilibrio entre institución y ciudadano. Según Vasak, la idea central correspondería a la libertad⁶²². Plasman, esencialmente, el derecho a la vida, a la integridad y seguridad física y a la libertad (en sus diversas expresiones), así como los medios para garantizarlos: garantías procesales, derecho a juicio justo etc. Estos derechos fueron históricamente reivindicados en las revoluciones liberales burguesas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa occidental y EE.UU e incorporados en las primeras constituciones liberales. Sobre el tema, Randall (2014)⁶²³, con una visión muy interesante, afirma que:

“Ces droits incarnent la valeur de la liberté et expriment d'un point de vue idéologique la doctrine du libéralisme. Ces droits sont protégés tant au niveau universel qu'au niveau régional.

Au niveau universel, nous les trouvons dans la déclaration universelle des droits de l'homme d'une part, et ensuite cela n'est pas surprenant, dans le pacte qui s'appelle pacte sur les droits civils et politiques (Il est souvent aussi appelé le pacte deux)

Au niveau régional, toutes les conventions générales en matière des droits de l'homme protègent aussi les droits de la première génération, donc il s'agit de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention américaine des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et aussi de la Charte arabe des droits de l'homme.

⁶²² Apuntes personales. Curso "Introduction aux droits de l'homme", Universidad de Ginebra (31 marzo a 26 de mayo), semana 4. Material de estudio.

⁶²³ Randall, M. H. (2014). Curso "Introduction aux droits de l'homme", Universidad de Ginebra (31 marzo a 26 de mayo), semana 4. Material de estudio. Apuntes personales.

La liberté, cependant, comprise dans deux sens différents, selon qu'il est question de droits civils ou de droits politiques. Les droits civils, en effet, l'idée de la liberté qui les sous-tend, est une vision défensive de la liberté, l'idée de l'autonomie individuelle, qui doit être défendue à l'égard de l'État.

Pour les droits politiques, on ne parle pas tellement de l'autonomie individuelle, mais on met en avant l'autonomie dite de participation. L'autonomie de participation est l'idée que chaque personne, en tant que citoyen, est un membre du peuple et peut participer aussi à l'exercice du pouvoir public.

Les droits civils ont une fonction défensive, elle vise à ménager à la société civile un espace de liberté contre l'ingérence arbitraire de l'État. Ces droits ont pour cette raison aussi été appelés droits boucliers ou droits de résistance.

Envisagés du point de vue de l'État, ces droits lui imposent une obligation négative. L'obligation de s'abstenir. L'État ne doit pas s'ingérer dans la liberté qui revient aux particuliers.

La liberté d'expression, par exemple, impose à l'État le devoir de ne pas censurer la presse. Le droit au respect de la sphère privée et familiale impose à l'État le devoir de ne pas espionner les citoyens.

Quels droits font partie des droits civils? Nous y trouvons tout d'abord le droit à la vie. C'est le premier droit, le droit sans lequel l'exercice d'autres droits n'est pas possible.

Nous y trouvons ensuite la garantie de l'intégrité physique garantie dans les traités des droits de l'homme par l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants.

Les droits qui font partie de la deuxième sous-catégorie des droits de la première génération, les droits politiques, sont aussi liés à l'émergence de l'État souverain.

Cette fois-ci, on met en avant le monopole de l'État d'adopter des règles de droit. La législation de nos jours elle est étatique, les normes sont produites par les organes de l'État.

L'idée qui sous-tend les droits politiques est au fond celle, les particuliers ne sont pas juste des bénéficiaires passifs des libertés. Ils sont associés à l'exercice du pouvoir public, c'est donc l'idéal démocratique qu'on trouve à la base des droits politiques.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen faisait déjà allusion à cet idéal, son article six dit, reflétant les paroles de Jean-Jacques Rousseau, la loi est l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation.

Au niveau international, nous ne trouvons pas un droit qui garantit le droit, à un régime démocratique. Ce la s'explique pour des raisons politiques évidentes. Nous trouvons néanmoins plusieurs volets des droits politiques.

Ces droits sont énoncés à l'article 25 du pacte deux, nous y trouvons notamment: le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit l'intermédiaire des représentants librement choisis. Ensuite, le droit de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin y secret assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. Et la dernière composante est le droit d'accéder dans les conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays.

La première génération engendre des obligations négatives, et la deuxième génération des obligations dites positives, l'État doit donc agir. On en a déduit au fond

que la réalisation des droits de la première génération est gratuite, et celle de la deuxième génération est coûteuse”.

Estos derechos están contemplados en los ámbitos universal, regional y nacional. Así, por ejemplo, podríamos mencionar:

- **Ámbito global:**

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (10.12.1948);
- Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (16.11.1966).

- **Ámbito regional:**

- Convención Europea de los Derechos del Hombre (04.11.1950);
- Convención Americana relativa a los Derechos del Hombre (22.11.1969);
- Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (27.06.1981);
- Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (07.12.2000);
- Carta Árabe de los Derechos del Hombre (22.05.2004).

- **Ámbito Nacional:**

- Carta de Derechos (EE.UU);
- Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia), ambos del siglo XVIII, solamente para mencionar dos instrumentos de enorme importancia histórica.

4.2.2 Los derechos humanos de segunda generación

Los DESC, resultantes del pensamiento humanista tradicional e impulsado por la universalización del sufragio, el reformismo social (especialmente el movimiento obrero) y las ideologías de corte internacionalista, son clasificados como de segunda generación. Según Vasak la idea central correspondería a la igualdad formal⁶²⁴. Estos

⁶²⁴ Apuntes personales. Curso "Introduction aux droits de l'homme", Universidad de Ginebra (31 marzo a 26 de mayo), semana 4. Material de estudio.

derechos surgieron en el siglo XIX pero su generalización ha ocurrido fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito de las constituciones democráticas, siendo la constitución mexicana de 1917 y la alemana de 1919 las primeras en reconocer esos derechos explícitamente, según Fioravanti (1999)⁶²⁵.

Al contrario de los derechos de primera generación, que buscan limitar la actuación del estado, los de segunda generación demandan su intervención con el propósito de promover la igualdad entre los individuos nacidos en condiciones distintas. Están incluidos en esta categoría los derechos a la educación (la primaria y secundaria son obligatorias y gratuitas), a la seguridad social, al trabajo (en condiciones equitativas, dignas), a la sindicación, huelga y libertad sindical, a la salud (física y mental), a un nivel de vida adecuado (alimentación, vestido, vivienda), a la asistencia médica, a la protección social en sentido estricto (servicios sociales básicos) etc.

Randall (2014)⁶²⁶ señala concretamente que esa categoría de DD.HH comprende, v.g., el derecho a la educación, el derecho de elegir libremente la vida cultural de la comunidad, de gozar de las artes, de participar del progreso científico y de disfrutar de sus beneficios, de la libertad para realizar investigaciones científicas y participar de actividades creativas y del derecho a la protección de los intereses morales y materiales derivadas de la producción científica, literaria o artística⁶²⁷. Además, señala que:

“Ces droits sont protégés au niveau universel et au niveau régional. Au niveau universel, nous les trouvons dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et

⁶²⁵ Fioravanti, M. (1999). *Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones*. Madrid: Trotta.

⁶²⁶ Randall, M. H. (2014). Curso "Introduction aux droits de l'homme", Universidad de Ginebra (31 marzo a 26 de mayo), semana 4. Material de estudio. Apuntes personales.

⁶²⁷ Randall, M. H. (2014). Curso "Introduction aux droits de l'homme", Universidad de Ginebra (31 marzo a 26 de mayo), semana 4. Material de estudio. Apuntes personales.

par la suite dans le, l'autre pacte, le pacte sur les droits économiques sociaux et culturels aussi appelé pacte un.

Au niveau régional, toutes les conventions majeures protègent les droits économiques, sociaux et culturels avec une exception. La Convention européenne des droits de l'homme est entièrement consacrée aux droits dits de la première génération.

Au niveau européen, il y a une convention spécifique, la Charte sociale européenne qui protège les droits de la deuxième génération. Il en va de même du continent américain, le Protocole dit de San Salvador est consacré aux droits de la deuxième génération. Ce protocole complète la Convention américaine des droits de l'homme, qui elle consacre une seule disposition, l'article 26 aux droits de la deuxième génération.

Les droits économiques et sociaux plongent leurs racines dans l'idéologie socialiste et communiste. Marx, en effet, était très critique des droits consacrés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc des droits de la première génération.

Dans son ouvrage de la question juive parue en 1844, Marx écrivit: Avant tout, nous constatons que les droits dits de l'homme, les droits de l'homme par opposition aux droits du citoyen, ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la collectivité.

Pour réaliser une égalité matérielle, donc une égalité de chances, voire de résultats, l'État ne peut pas se contenter de rester passif. Il doit agir. Il doit par exemple, fournir les biens et services les plus élémentaires à la population. Il doit aussi adopter des politiques sociales.

Les droits de la deuxième génération permettent donc aux particuliers d'exiger des prestations de la part de l'État. Pour cette raison, on a aussi appelé les droits de la deuxième génération, droits créances ou droits épées.

L'idéal de l'État qui sous-tend la première génération, c'est l'État veilleur de nuit, un État minimal. Alors que pour la deuxième génération, la vision de l'État est celle de l'État providence.

Quand on parle des droits économiques, on désigne des droits qui sont liés au statut du travailleur, donc des personnes qui exercent une activité lucrative dépendante. Ces droits contiennent par exemple la liberté syndicale, le droit de grève, donc des droits qui visent à protéger l'action collective des travailleurs.

Nous y trouvons également le droit au travail, soit la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et ensuite nous y trouvons le droit à une rémunération équitable, et à une durée de temps de travail raisonnable, ainsi que la garantie de la sécurité et de l'hygiène au travail.

Les droits sociaux sont indépendants du statut du travailleur. C'est donc des droits de l'homme qui reviennent à toute personne humaine, et ces droits ont pour but de satisfaire les besoins les plus élémentaires de la population.

On peut en effet identifier quatre besoins qui sont vraiment les plus importants: l'alimentation, la santé et l'hygiène, le logement et l'habillement. Ces quatre besoins sont aussi protégés dans le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, notamment à l'article 11 et 12 du pacte.

Bien que les droits sociaux reviennent à toute personne, dans les faits, ce sont des droits qui sont quand même les plus pertinents pour les plus démunis dans la société.

Cette idée a trouvé un prolongement aussi au niveau international des droits de l'homme, dans le fait qu'aujourd'hui, il y a des conventions qui sont consacrées à des groupes vulnérables, des conventions spécifiques qui protègent des groupes qui ont besoin, des besoins de protection particuliers, notamment, les femmes, les enfants, les

personnes faisant partie des minorités ethniques raciales, et aussi les personnes handicapées.

Concernant ces conventions spécifiques, peut-être juste pour le préciser, elles ne font pas partie de la deuxième génération. Mais la valeur, l'idée à la base est quand même celle d'une égalité aussi et matérielle, il y ait des personnes qui ont besoin de protection particuliers.

L'idée de base aux droits culturels est au fond que l'identité personnelle est l'appart, est très étroitement liée à l'appartenance culturelle. Ces droits plongent leurs racines aussi à la pensée du 19ème siècle, à une pensée qui est critique du siècle des Lumières qui voit l'homme plutôt comme un individu isolé. Ici, on met en avant aussi l'appartenance de la personne à une communauté ici culturelle.

De façon générale, les droits culturels protègent la participation et l'accès de toute personne à la vie culturelle. Cela soulève une difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par vie culturelle ou culture. Ces termes sont difficiles à définir, controversés.

On trouve des sources d'inspiration dans les travaux de l'UNESCO. Une autre définition qui est utile a été proposée dans la Déclaration dite de Fribourg, il s'agit là d'une déclaration qui a été élaborée par un groupe de travail interdisciplinaire sous les égides de l'université de Fribourg. Le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vies par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement.

Ce sont le droit à l'éducation, le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent, la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices, le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur''.

Los DESC están contemplados:

- **Ámbito global:**

- Organización Internacional del Trabajo, creada en 1919.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (10.12.1948): derecho al trabajo, a igual salario, al descanso y tiempo libre, a la seguridad social o a la protección en caso de paro;
- Pacto Internacional relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (16.12.1966).

- **Ámbito regional:**

- Convención Americana relativa a los Derechos del Hombre (22.11.1969);
- Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (27.06.1981);
- Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (Estrasburgo, 1989);
- Carta Social Europea (Turín, 18.10.1961, revisada en 1996);
- Protocolo de San Salvador (17.11.1998);
- Carta Árabe de los Derechos del Hombre (22.05.2004);
- Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Niza, 07.12.2000, enmendada en el 2007).

4.2.3 Los derechos humanos de tercera generación

Los DD.HH de tercera generación, mucho más recientes, están asociados al acceso universal a formas más avanzadas de ciudadanía, civilidad, libertad y calidad de vida. Según Vasak, la idea central correspondería a la fraternidad o solidaridad. Su amplio espectro incluye el DD, el derecho a la paz y a la coexistencia pacífica, a la cooperación internacional y regional, a la justicia internacional, a la ayuda humanitaria, a la conservación del patrimonio cultural de la humanidad, al respeto y a la conservación de la diversidad cultural, al uso de los avances de las ciencias y de la tecnología, a la independencia económica y política, al progreso social, al desarrollo, a la identidad

nacional y cultural, a la autodeterminación, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, a la protección del medioambiente y al medioambiente sano, a la calidad de vida etc.

Randall (2014)⁶²⁸ enseña que:

“Ces droits se distinguent par un point important des deux premières générations. Les droits première génération ont pour titulaires des individus. La personne humaine, alors que les droits de la troisième génération ont pour titulaires des entités collectives, les peuples. Les droits de solidarités sont issus des aspirations des pays en voie de développement, et plongent leurs racines à la deuxième moitié du 20ème siècle.

Les deux pactes, donc le pacte un et le pacte deux, tiennent compte de l'aspiration des pays en voie de développement à la décolonisation, et consacrent le premier et le plus connu des droits des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Ce droit protège l'auto-détermination dans le domaine politique, social, économique et culturel, et comprend aussi le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.

Il y a encore d'autres droits qui sont aussi rangés parmi les droits de solidarités, mais contrairement au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ces droits ne sont au niveau universel pas consacrés dans des traités.

On les trouve dans des déclarations, ou des résolutions, les déclarations et les résolutions font partie de la soft law, ça veut dire ce sont des documents qui ne sont juridiquement pas contraignants, qui ont une valeur politique.

⁶²⁸ Randall, M. H. (2014). Curso "Introduction aux droits de l'homme", Universidad de Ginebra (31 marzo a 26 de mayo), semana 4. Material de estudio. Apuntes personales.

On a pour cette raison aussi décrit les autres droits comme des droits en devenir. Regardons ensemble quels droits en font partie. Les droits qui sont le plus souvent mentionnés, toujours sous l'égide des droits de solidarité, sont le droit au développement, le droit à la paix, le droit à un environnement sain, le droit à l'aide humanitaire.

Ce droit reflète les revendications des pays en voie de développement vers un ordre international plus juste. Elle exprime aussi l'idée qu'au fond, la réalisation des droits de la première et de la deuxième génération n'est pas indépendante des conditions économiques, sociales, culturelles, et environnementales.

Ces droits font appel à la fraternité, à la solidarité, parce qu'en partie ils protègent des intérêts collectifs: la paix, l'environnement. Il y a là deux intérêts dont tout le monde bénéficie indépendamment de sa contribution respective.

Nous avons vu qu'au niveau universel, les droits à part, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, ont été décrits comme des droits en devenir. Au niveau régional, sur le continent africain, les droits de solidarité ne sont pas juste des droits en devenir, mais ce sont des droits qui sont juridiquement contraignants, nous trouvons en effet dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples tout un catalogue de droits de la troisième génération.

Nous y trouvons notamment: le droit à l'égalité des peuples, le droit à l'autodétermination, le droit à la disposition de richesses et ressources naturelles, le droit au développement économique, social et culturel le droit des peuples à la paix, le droit des peuples à un environnement satisfaisant.

La définition d'un peuple n'est pas facile, mais on voit quand même ici qu'on est face à une communauté qui est, d'abord se considère du point de vue subjectif, comme une entité à part, c'est un peuple autochtone. Et de plus c'est aussi reconnu par autrui comme faisant, une identité à part. Et ils ont un mode de vie, une culture, partagée”.

Por último, autores como González (1999)⁶²⁹, Donas (2001)⁶³⁰, Martínez (2004)⁶³¹ o Bustamante (2010)⁶³², entre otros, hablan además de DD.HH de cuarta generación, asociados a las nuevas formas que cobrarían los derechos anteriormente mencionados (de primera, segunda y tercera generación) en el entorno del ciberespacio.

4.3 CRÍTICAS A LAS GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS (I)

Aunque tradicional en la doctrina, muchas críticas han sido realizadas sobre la existencia de distintas generaciones de DD.HH:

- Transmiten la errónea idea de que la nueva generación sucede y reemplaza la generación anterior. En realidad, las tres categorías tradicionales de DD.HH coexisten y se complementan. Esto se puede fácilmente observar en los instrumentos internacionales asociados a la cláusula social.
- La idea de esta clasificación (generaciones de DD.HH) es demasiado simplista. Por ejemplo, el criterio temporal es aproximativo, porque los movimientos sociales y políticos no se contienen o restringen en el período de un siglo. Además, la cláusula social y la política exterior de la UE reconocen la indivisibilidad o interdependencia de los DD.HH.

⁶²⁹ González, G. (1999). *Derechos Humanos: La condición humana en la sociedad tecnológica*. Madrid: Tecnos.

⁶³⁰ Donas, J. B. (2001). Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la condición humana en la sociedad tecnológica. *CTS+ I: Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación*, (1), 3-16.

⁶³¹ Ortega, M. J. (2004). Sociedad de la información y derechos humanos de la cuarta generación. Un desafío inmediato para el derecho constitucional. *Memoria del Congreso de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados* nº 6, 663-684.

⁶³² Bustamante Donas, J. (2010). La cuarta generación de derechos humanos en las redes digitales. *Telos: Cuadernos de comunicación e innovación* nº 85, 80-89.

- Ni siempre es evidente la inserción de un derecho específico dentro de una u otra categoría de DD.HH.
- Las categorías jurídicas se solapan.
- La clasificación en generaciones de derechos expresa una visión competencial entre ellas, lo que permitiría a los estados priorizar ciertos derechos que estén conformes a sus preferencias ideológicas.

Relativamente a esta última crítica, interesa comentar que la priorización de derechos en función de preferencias ideológicas se ha verificado durante la guerra fría, en el clivaje “Este-Oeste”, que ha opuesto el bloque occidental al bloque soviético (y, posteriormente, especialmente a partir de los años setenta del siglo XX, en las relaciones “Norte-Sur”, basado esta vez en el clivaje “estados desarrollados-estados en desarrollo”).

Para el bloque soviético, los derechos de primera generación eran considerados sobre todo como garantías de protección de los intereses egoístas de la burguesía que, en el fondo, amenazaban la realización de los derechos de segunda generación. Esta era, fundamentalmente, la crítica marxista a los derechos de primera generación. Los países occidentales, al contrario, priorizaron los DCP (estos últimos considerados como una aspiración política que los legisladores establecerían programáticamente y que implementarían en la medida de las posibilidades de los estados). Los derechos de primera generación serían gratuitos (abstención del estado: obligación estatal negativa) al paso que los de segunda generación corresponderían a obligaciones positivas del estado, lo que implicaría en costes económicos para su implementación.

Estas dos visiones antagónicas llevaron a una escisión de la DUDH, lo que ha conducido a la elaboración de los dos Pactos Universales sobre DD.HH, uno que consagraría los derechos de primera generación y otro que haría lo mismo relativamente a los de segunda generación. Con efecto, los dos Pactos Internacionales de 1966

plasmaron esta dicotomía, facilitando el camino para que diferentes estados ratificasen los instrumentos que albergan aquellos derechos priorizados por sus ideologías.

En el caso de los DCP, los estados se comprometerían a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encontrasen en su territorio (sujetos a su jurisdicción) los derechos reconocidos en el Pacto (concretamente, los estados estarían obligados a cumplir con los derechos emanados del Pacto de una manera inmediata). No obstante, los Pactos también determinan que cada estado (que los haya ratificado) debe asumir el compromiso de adoptar medidas, por todos los medios apropiados (inclusive y en particular por medio de la adopción de medidas legislativas), tanto por su propio esfuerzo como mediante la asistencia y la cooperación internacionales (especialmente económicas y técnicas), hasta el máximo de sus recursos disponibles, para implementar progresivamente (hasta la plena efectividad) los derechos reconocidos en el Pacto (art. 2). En el ámbito europeo también ha ocurrido la misma división. El contenido de la DUDH ha sido concretado parcialmente en la Convención Europea de los Derechos del Hombre de 1950 (que ha consagrado los derechos de primera generación) y en la Carta Social Europea (que consagraría los derechos de segunda generación).

También interesa señalar, relativamente a los derechos de tercera generación, que en el marco del clivaje “Norte-Sur”, los antagonismos están basados en una cuestión de perspectiva jurídica. Bajo la óptica de los países del Norte, desarrollados, los derechos que expresen la fraternidad o solidaridad (los denominados derechos colectivos) no son verdaderamente considerados como derechos, asumiendo más un papel de aspiración entre los pueblos.

Una crítica habitual es la de que esta ideología colectivista es hostil a la idea de libertad. Serían pseudo-derechos porque el término “pueblo” (la referencia necesaria) es muy difícil de ser conceptualizado jurídicamente.

Los PED (caso de los países latinoamericanos) desean una conceptualización jurídica estable sobre este tema, que fomente y garantice su DD y la prosperidad

económica. Hasta existe una expresión– *trade-off thesis* – según la cual la realización de los derechos de solidaridad implica en la renuncia de los derechos de primera generación. También debe ser considerado que los derechos de primera generación suelen reflejar la cultura y la visión occidental, caracterizadas por la centralización del individuo. Esto no ocurre con la misma intensidad, por ejemplo, en las culturas asiáticas, donde el mayor peso se encuentra en la comunidad. La Declaración de Bangkok, por ejemplo, exalta la soberanía nacional, la integridad territorial, la no injerencia externa sobre asuntos internos del estado, el DD, las especificidades culturales, la no utilización de los DD.HH como instrumento de presión política etc. La idea esencial enfatiza lo siguiente: si los DD.HH son universales, ellos deben ajustarse al contexto social y a las idiosincrasias culturales, religiosas y hasta a sus patrimonios históricos.

Los derechos de primera generación exaltan la óptica occidental pero no se coadunan con la visión de los países asiáticos. Esta visión compartimentada, presente durante la guerra fría, acabó siendo reemplazada por la teoría de la indivisibilidad e interdependencia de los DD.HH, que exaltaba la sinergia existente entre ellos. Por su vez, los derechos de tercera generación están comprendidos en lo que cierta corriente de la doctrina jurídica denomina “soft law”, reglas esencialmente programáticas, sin real poder vinculante (en el continente africano esas reglas constituyen una realidad normativa aplicada por los tribunales, según Viljoen, 2012)⁶³³.

Además, con la entrada en vigor, en el año 2013, del PFPIDESC, la situación, ya cambiada formalmente en lo que se refiere a la justiciabilidad, tenderá a cambiar también en lo que concierne a la conducta de los estados (incluyendo la supervisión del comportamiento de los agentes privados).

Por último, interesaría señalar que los DD.HH de primera generación son enfatizados por los países occidentales, los de segunda por los países integrados en el antiguo bloque soviético y los de tercera generación por los PED. La tendencia

⁶³³ Viljoen, F. (2012). *International human rights law in Africa*. Oxford University Press.

contemporánea apunta a que todos los DD.HH, independientemente de su categoría, generan tres tipos de obligaciones para el estado, ya comentadas anteriormente: a) la obligación de respetarlos, b) la obligación de protegerlos y c) la obligación de implementarlos.

Aunque criticables, como se ha visto, los autores tienden a concordar con la clasificación generacional de los DD.HH bajo la óptica histórica y didáctica. Sin embargo, actualmente, muchos de ellos señalan que esa categorización ni siempre es plenamente justificable. El tema de la justiciabilidad (o posibilidad de invocación jurisdiccional de esos derechos), en función de su categoría, aun es complicado en la práctica internacional⁶³⁴.

De un modo general suelen existir pocas dudas en relación a la justiciabilidad de los derechos de primera generación. En relación a los de segunda y tercera generación el tema es más controvertido, aunque es posible también encontrarlo dentro de los sistemas regionales de protección de los DD.HH.

Así, por ejemplo, la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos ha apreciado diversos casos relacionados con la reivindicación y defensa de los derechos de segunda generación. En este sentido, se pueden mencionar, por ejemplo, los casos del pueblo Ogoni en Nigeria (Naanen, 1995)⁶³⁵ y el caso Grootboom (Sachs,

⁶³⁴ Conclusiones del Abogado General Pedro Cruz Villalón presentadas el 18 de julio de 2013. Asunto C-176/12. Association de médiation sociale contra Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT). Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de Cassation (Francia); Conclusiones del Abogado General Pedro Cruz Villalón presentadas el 23 de octubre de 2014. Asunto C-510/13, E.ON Földgáz Trade Zrt contra Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría); Conclusiones del Abogado General Pedro Cruz Villalón presentadas el 19 de diciembre de 2013. Asunto C-427/12. Comisión Europea contra Parlamento Europeo. Consejo de la Unión Europea. Recurso de anulación planteado por la Comisión; Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger presentadas el 11 de enero de 2000. Aunque para algunos autores todos los derechos humanos son justiciables, la jurisprudencia internacional no es uniforme (“justiciabilidad reducida” y “justiciabilidad reforzada”, “diferentes grados o niveles de justiciabilidad” etc.).

⁶³⁵ Naanen, B. (1995). Oil-producing minorities and the restructuring of Nigerian federalism: The case of the Ogoni people. *Journal of Commonwealth & Comparative Politics*, 33(1), 46-78.

2003)⁶³⁶. Por su vez, el PFPIDESC de la ONU, en vigor desde el 5 de mayo de 2013, permite que las personas petitionen y tramiten denuncias individuales ante la pertinente comisión de la ONU en relación a la violación de sus derechos. Esta es una confirmación de su justiciabilidad que favorecerá y fortalecerá la real integración de todos los DD.HH.

De momento, aun son pocos los estados que lo ratificaron, con especial destaque para España, el primer país europeo en hacerlo. No obstante, para la justiciabilidad, la precisión de las normas jurídicas es muy importante, de modo que mientras los derechos de primera generación son claros (v.g., la prohibición de la tortura), los de segunda generación son más difíciles de ser precisados técnicamente (v.g., derecho a la cultura), lo que suele ser remediado, en la medida del posible, por una concretización lograda mediante la complementación legislativa de su contenido. En otras palabras, los derechos son justiciables pero su contenido debe ser precisado. La fundamentación de la pretensión jurídica condicionaría también el grado de justiciabilidad (el acatamiento de la pretensión por el poder judicial del país). De momento, solamente en el continente africano todos los derechos son considerados justiciables. Es famosa la apreciación del caso del pueblo Ogoni, antes mencionado, cuyo entorno deteriorado por la acción de agentes químicos vertidos por una fábrica afectaba su DD.

Hottelier, Chatton & Malinverni (2014)⁶³⁷ afirman que para ser justiciable, dos elementos deben existir: 1) la norma invocada debe ser clara y precisa⁶³⁸, 2) la decisión puede y debe ser destinada a la solución de un caso concreto, lo que podría eventualmente incluir derechos colectivos en el caso de ciertos mecanismos, como la acción popular (reclamación colectiva).

⁶³⁶ Sachs, A. (2003). The judicial enforcement of socio-economic rights: The Grootboom case. *Current Legal Problems*, 56(1), 579-601.

⁶³⁷ Hottelier, M.; Chatton, G. T. & Malinverni, G. (2014). *Vers la pleine reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels*. Schulthess: Ginebra.

⁶³⁸ Puede ser necesaria una concretización del contenido por una norma legislativa.

En teoría, todos los DD.HH son justiciables, puesto que se basan en el principio de la igualdad de sus valores jurídicos y en su indivisibilidad o interdependencia. Sin embargo, esa justiciabilidad no ocurre en la misma medida. Además, no existe una asociación exacta entre el grado de precisión y la categoría generacional de los DD.HH. Sin embargo, la mayoría de los autores suele considerar que los DD.HH de primera generación son claros y precisos y que los de segunda generación poseen un contenido más vago, que deja mucho más margen de apreciación para los estados.

El tema puede ser discutido en otros términos. Todos los DD.HH implican tres niveles de obligaciones estatales, como se ha comentado anteriormente: respetar (implica una abstención del estado para el derecho tradicional), proteger (implica una acción del estado para el derecho tradicional) e implementar (ídem). “Implementar” significa dotar efectivamente de efectos jurídicos. Esto implica la asignación de recursos económicos. Existe un vacío interpretativo sobre el tema que ha sido, de cierta forma, subsanado por el CDESC de la ONU (este Comité señala la necesidad de que el estado demuestre que está haciendo todo lo que puede para que esos DD.HH se realicen dentro de una situación concreta).

4.4 CRÍTICAS A LAS GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS (II)

La idea de generación de derechos, muy habitual en la doctrina especializada, es severamente criticada por el ilustre Antonio Augusto Cançado Trindade (1997)⁶³⁹. Según el autor, la imagen de sucesión generacional hace suponer un reemplazo progresivo de los DD.HH que, sin embargo, no corresponde a la realidad, puesto que se expanden, acumulan y mutuamente se fortalecen, interactuando los derechos individuales y sociales.

⁶³⁹ Cançado Trindade, A. A. (1997). Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor.

Lo que importa reconocer es que los DD.HH, independientemente de su categoría generacional, tienden a cristalizarse en normas jurídicas nacionales e internacionales, cuyos principios son enfocados por la UE hacia la universalidad. A propósito, Cassese (2008)⁶⁴⁰ sustenta que las estructuras normativas nacionales gradualmente se orientan hacia patrones aceptados internacionalmente. Estos patrones, según la perspectiva occidental, servirían para plasmar adecuadamente las relaciones entre los diversos países o bloque de países, aunque con culturas y tradiciones distintas.

De modo similar, Portero (2010)⁶⁴¹ afirma que el recto actual de la SI es establecer normas de comportamiento, reglas y compartir valores para superar la diferencia que viene determinada por la propia historia. Sin embargo, hay que reconocer que la dinámica social y la permeabilidad jurídica y cultural entre los países no es la misma (Donnelly, 1984)⁶⁴². La verdad es que ciertos valores “universales” (como la libertad de creencia) pueden eventualmente generar rechazo entre ciertos grupos humanos, como se aprecia actualmente con el autodenominado “estado islámico”.

Cuando estos valores están institucionalizados (tratados, resoluciones de instancias supranacionales), la presión existente puede ser asociada a intromisión en asuntos internos, algo que los estados deben evitar, según la propia Carta de San Francisco, constitutiva de la ONU⁶⁴³. El entorno internacional, además, según Xavier Mena

⁶⁴⁰ Cassese, A.; Gaeta, P. & Zappala, S. (2008). *The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese*. Oxford: Oxford University Press.

⁶⁴¹ Portero, F. (2010). Los retos que la globalización plantea (cuarta ponencia). Globalización y derechos humanos: seminario permanente de derechos humanos Antonio Marzal. XIV sesión. Bartlett, Enric Bardají, María Dolores. Barcelona.

⁶⁴² Donnelly, J. (1984). Cultural relativism and universal human rights. *Human Rights Quarterly*, 400-419, recuperado de http://hmb.utoronto.ca/Old%20Site/HMB303H/weekly_supp/week-02/Donnelly_cultural_relativism.pdf

⁶⁴³ Instituciones internacionales de naturaleza multilateral y vocación universal, como la ONU, la OIT, la OMC, el GBM etc. asumen un rol destacado en esa concertación en que las estructuras nacionales deben adecuarse.

(2010)⁶⁴⁴, se caracteriza por el hecho de que los flujos comerciales a escala global están sujetos a continua tensión entre la competencia y la cooperación entre los estados.

Efectivamente, muchos factores están involucrados en estas relaciones: la reasignación geográfica de la industria, la confrontación de diferentes modelos laborales, niveles salariales y protecciones sociales etc., elementos que, bajo la perspectiva económica, están encuadrados en el modelo CAGE del profesor Pankaj Ghemawat, anteriormente mencionado. Estos patrones universales (consagrados en la cláusula social) que plasmarían la protección de los DD.HH, el fomento de la democracia, la preservación del medioambiente etc., no obstante, ni siempre persiguen propósitos altruistas.

Durante la guerra fría, ya se ha visto, el tema de la protección de los DD.HH.L atendía esencialmente a intereses políticos, ideológicos y geoestratégicos. La exaltación de las “virtudes” del bloque democrático y capitalista en relación al bloque comunista estaba asociada a la apertura del mercado y al incremento de relaciones comerciales (Mariager & Molin, 2014)⁶⁴⁵. Según la retórica, ambos factores conducirían los países al progresivo desarrollo económico y social y, por consiguiente, a la gradual implementación y consolidación de los DD.HH. Esta concepción, surgida luego después de la Segunda Guerra Mundial, se ha expandido durante la guerra fría como elemento de persuasión esgrimido para lograr el alineamiento de los PED, especialmente de las ex colonias europeas que se habían independizado durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado.

⁶⁴⁴ Mena, Xavier J. (2010). *Los retos que la globalización plantea* (tercera ponencia). Globalización y derechos humanos: seminario permanente de derechos humanos Antonio Marzal. XIV sesión. Bartlett, Enric Bardají, María Dolores. Barcelona.

⁶⁴⁵ Mariager, R. M., & Molin, K. (2014). Cold War and human rights. In R. Mariager, K. Molin, & K. Brathagen (Eds.), *Human Rights in Europe during the Cold War*. (pp. 1-12). London/ New York: Routledge Falmer.

Es importante observar, tal como preconiza Evans (2010)⁶⁴⁶, que la protección de los DD.HH.L ocurre en un mundo cada vez más interconectado. La idea de universalización de esos derechos atiende a la cercanía propiciada por las múltiples conexiones existentes entre los países y acelerada por los avances tecnológicos en diferentes sectores⁶⁴⁷.

En este sentido, es redundante la afirmación de que las consecuencias de la acción u omisión de los miembros de la sociedad internacional, especialmente de los más relevantes bajo criterios económicos, comerciales, políticos y militares, repercuten a todos los demás. La generación de riqueza mediante el incremento global de la actividad económica y comercial es la base del modelo de bienestar y ese modelo, bajo la perspectiva actual, debe vincularse a patrones de protección de los DD.HH también de carácter internacional.

Como se ha mencionado, los DD.HH.L deben estar idealmente enfocados al desarrollo socio-económico de los países (Barr, 2012)⁶⁴⁸. Dentro de esta óptica, según Hamilton (1985)⁶⁴⁹, promover el desarrollo de los países periféricos mediante el comercio internacional y con enfoque político, institucional y normativo en los DD.HH, evitaría, por ejemplo, corrientes demográficas motivadas por la pobreza relativa. Por esta razón, cobra sentido la postura de la UE según la cual los beneficios comerciales concedidos a los PED deben ir de manos dadas con avances concretos en la promoción de los DD.HH (lo que conlleva a la adopción y efectiva aplicación de las normas

⁶⁴⁶ Evans, M. D. (2010). *International Law*. Oxford: Oxford University Press.

⁶⁴⁷ En sentido contrario, el profesor Pankaj Ghemawat afirma y demuestra mediante diversos estudios que la globalización es sobrevalorada y que el nivel de interrelaciones aún es muy bajo. Él utiliza la expresión *Globalony*. *Globalization of Business Enterprise*. Apuntes personales (participación en el curso auspiciado por el IESE, 03 de febrero a 11 de abril, 2014).

⁶⁴⁸ Barr, N. (2012). *Economics of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.

⁶⁴⁹ Hamilton, F. E. Ian. (1985). *Industrialization in Developing and Peripheral Regions*. Londres: Routledge.

internacionales de protección de los DD.HH.L referenciados por la UE en muchos de sus acuerdos).

Los mecanismos de cooperación comercial internacional procuran plasmar todas las generaciones de DD.HH. Esto no significa que el SPG⁶⁵⁰ o los tratados de libre comercio celebrados por la UE con los PED sean profundamente altruistas. Esta interpretación es simplista e ingenua.

El desarrollo de los países latinoamericanos es relevante para la UE por diferentes razones, de las cuales mencionaré dos:

- En virtud de la hiperconectividad, ni el bloque europeo ni cualquier país o agrupación de países en el mundo debería ignorar los problemas que afectan a los demás (especialmente cuando esos países absorben inversiones extranjeras directas, poseen una economía dinámica, producen materias primas etc.). Las agendas políticas internacionales (bilaterales y multilaterales) demuestran ese interés por varios PED.
- El comercio internacional importa a todos los países, en mayor o en menor grado. Adam Smith (2012)⁶⁵¹ afirmaba que la riqueza de las naciones procede del comercio. Sin la generación de riqueza los países y las poblaciones se empobrecen. Sin el adecuado desarrollo en sus países de origen, muchas personas emigran por falta de opción, lo que se convierte en un tema de interés global, no solamente europeo. A la UE interesa – o debería interesar - que los países latinoamericanos (o los países europeos que aún no se hayan integrado al bloque) se desarrollen. Su desarrollo repercutiría, por ejemplo, en el incremento de la exportación de bienes con mayor valor agregado (modelo CAGE) o en la reducción de las corrientes migratorias por razones económicas, solamente para mencionar dos consecuencias.

⁶⁵⁰ Se trata de un AC autónomo a través del cual la UE proporciona acceso preferencial no recíproco al mercado único para productos originarios de países y territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios.

⁶⁵¹ Smith, A. (2012). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Chicago: University of Chicago Press.

El desarrollo económico y el desarrollo social, plasmados ambos en la visión universalista de los DD.HH (derecho al trabajo, a la salud, a la igualdad etc.) cumplen una función muy relevante, que es proporcionar una opción para que esos pueblos puedan seguir adelante. La UE no presiona a los PED a aceptar su ayuda en forma de cooperación económica y comercial, pero caso deseen aceptarla, debe resultar claro que la ayuda tiene que estar vinculada a cambios reales (buena gobernanza, combate a la corrupción, protección de los DD.HH en su sentido más amplio, protección del medioambiente, democracia).

En otras palabras, es importante que los países beneficiados por las ayudas (reducciones arancelarias, por ejemplo) enfoquen sus esfuerzos en favor del desarrollo económico y social de sus respectivas poblaciones.

Naturalmente esta no es una tarea sencilla, puesto que la desregulación de determinados sectores económicos en diversos países ha implicado en mayor protagonismo del sector privado. Las empresas, con el amparo institucional y jurídico internacional y nacional, actúan en el marco de la libre competencia (garantizada por los estados y las instituciones multilaterales como la OMC) y, en función de la maximización de beneficios, actúan muchas veces sin el debido respeto a los DD.HH.L (en el ámbito de la UE existen normativas que procuran fomentar la responsabilidad social de la empresa como, por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2009, sobre la responsabilidad social de las empresas de subcontratación en las cadenas de producción (2008/2249(INI))⁶⁵²; la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (2009/2201(INI))⁶⁵³ o la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre la dimensión exterior de la política social, la

⁶⁵² DOUE de 6.5.2010 (C 117 E/176).

⁶⁵³ DOUE de 3.4.2012 (C99E/101).

promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas (2010/2205(INI))⁶⁵⁴.

El comercio internacional, asentado sobre el principio de la libre competencia y la reducción recíproca del proteccionismo, debería caminar en paralelo con los derechos y libertades fundamentales, perseguidas por la SI e instrumentalizada en tratados internacionales diversos. Los estados, en este marco, buscan, por un lado, tutelar y garantizar que se cumplan las reglas del juego de la libre competencia y, por otro, proteger los intereses de sus empresas, ciudadanos, productores, consumidores (y votantes).

Una vez asentada la importancia de la protección de los DD.HH (de cualquier generación), importa señalar, como lo ha hecho Alvarado (1996)⁶⁵⁵, que la visión occidental propone su promoción como mecanismo estructurador y normativo de la convivencia pacífica entre los pueblos. Este sería el aporte occidental a la realización histórica de la humanidad. Tal como comprendía Ellacuría (1990)⁶⁵⁶, esta contribución, volcada a la universalización, cobra su verdadero sentido cuándo cumple un papel liberador como expresión fundamental del estado de justicia y no como elemento legitimador de un orden institucional injusto (Ellacuría, 1969)⁶⁵⁷. Para que sean operativos e institucionalizados, los DD.HH requieren reconocimiento político y protección jurídica. Solamente de este modo podrán efectivamente cumplir la finalidad

⁶⁵⁴ DOUE de 11.12.2012 (C380E/39).

⁶⁵⁵ Alvarado, R. (1996). Derechos Humanos y Mundialización. *Travesías. Política, cultura y sociedad en Iberoamérica*. Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana Santa María de la Rábida, 1, 47-59.

⁶⁵⁶ Ellacuría, I. (1990). Historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares, *Estudios Centro Americanos* 502, 589-596.

⁶⁵⁷ Ellacuría, I. (1969). Seguridad Social y solidaridad humana. Aproximación filosófica al fenómeno de la seguridad social. *Estudios Centroamericanos* 253, 357-365.

de reducir las diferencias existentes entre “opresores y oprimidos”, para emplear la expresión de Acevedo (1993)⁶⁵⁸.

Así, respondiendo a la duda inicial, sobre si hay diferencias significativas entre los DD.HH.L para efectos del comercio internacional llevado a cabo entre la UE y los países latinoamericanos, se puede afirmar que no. Esta es una discusión con poca relevancia teórica en este nivel, puesto que tanto los DD.HH como los derechos laborales están plasmados en los instrumentos internacionales referenciados por la UE en sus acuerdos internacionales.

Además, las sanciones también están asociadas a la violación de los instrumentos pertinentes, lo que engloba todas las categorías de DD.HH. Los DD.HH.L, la cláusula democrática, el buen gobierno, la protección al medioambiente etc., han sido incorporados por la UE en el ámbito de su política exterior y comercial. El bloque europeo nivela todas esas dimensiones en sus acuerdos comerciales (tanto recíprocos como no recíprocos). Todos ellos asumen el rol de condicionalidades (Van Parijs, 1995)⁶⁵⁹.

Una vez verificada la esterilidad de la discusión sobre si la UE diferencia los DD.HH.L en el ámbito de la cláusula social, se procede a la indagación de si es realmente necesario incluir esa cláusula en sus acuerdos comerciales con los países latinoamericanos. ¿Es razonable partir de la idea de que el conjunto de instrumentos jurídicos de protección de los DD.HH existente en la UE es más (o mucho más) elevado que el conjunto normativo existente en el ámbito latinoamericano? Para responder a esta pregunta es necesario analizar el sistema de DD.HH en la UE y, en seguida, en AL.

⁶⁵⁸ Acevedo, C. (1993). El legado filosófico-político de Ignacio Ellacuría, *Estudios Centro Americanos*, 541-542, 1087-1104.

⁶⁵⁹ Van Parijs, P. (1995). *Más Allá de la Solidaridad. Los Fundamentos Éticos del Estado de Bienestar y de su Superación* en Alonso, M. A. y Giraldo Ramírez, J. *Ciudadanía y derechos humanos sociales*. Medellín: ENS.

4.5 LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SEÑALADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

En el fondo, la condicionalidad de la protección social solamente tiene sentido si los DD.HH.L señalados en los instrumentos internacionales referenciados en los acuerdos comerciales UE-AL pueden ser garantizados. Así que importa analizar las implicaciones jurídicas relacionadas con la incorporación de esos DD.HH.L en los instrumentos internacionales señalados por la UE.

Cuando la UE establece condicionalidades basadas en la protección de los DD.HH.L, espera que los países latinoamericanos asuman sus obligaciones (respetarlos, protegerlos e implementarlos). La primera obligación que se analizará es la obligación de respetar. Es la más simple e intuitiva. El PIDCP, asociado a la cláusula social, sirve como ejemplo (art. 2, párrafo 1º). Los estados-partes asumen el compromiso de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y que estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en ese Pacto. En otras palabras, los estados asumen la obligación de garantizar los derechos proclamados en ese instrumento (v.g., el derecho a la vida; art. 6: *nadie puede ser arbitrariamente privado de la vida*).

En relación a los DCP (derechos de primera generación), el estado asume, como se ha visto, una obligación negativa, de abstenerse, de no intervenir. Estaría albergada aquí, esencialmente, la libertad del individuo, lo que incluye la libertad de asociación⁶⁶⁰ (incluso sindical⁶⁶¹, en función de la interrelación entre los DD.HH). El derecho de sindicación está recogido en convenios de la OIT frecuentemente señalados por la UE en sus acuerdos comerciales con los PED. A parte de ser un derecho laboral básico, su inclusión en la categoría de derecho civil es muy habitual. De cualquier modo, la UE ha

⁶⁶⁰ Convención Europea, art. 11: libertad de asociación (asociarse o no asociarse) y de constituir sindicatos.

⁶⁶¹ Corte Europea de Derechos Humanos (1981), *Young, James y Webster contra Reino Unido*.

dejado muy clara su relevancia al señalar, por ejemplo, en el SPG, tanto el PIDCP como los principales convenios pertinentes de la OIT (Anexo VIII).

Los derechos de índole social o económica, como el derecho a la vivienda, contemplado en el artículo 11 del PIDESC de 1966, otro instrumento imprescindible para la UE en sus acuerdos comerciales, ya exigen una actuación positiva por parte del estado, en razón de la dificultad de acceso para ciertos individuos⁶⁶² (v.g., el derecho de beneficiarse de los servicios sociales - Carta Social Europea - implica en el derecho de acceso de la persona a los servicios sociales, sin discriminación de cualquier tipo).

El PIDESC (1966) en su art. 11, también contempla el derecho a la vivienda (el estado no puede desalojar arbitrariamente a nadie de su vivienda sin adoptar escrupulosamente los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico). En el caso de los derechos económicos y sociales, no basta la abstención del estado. El derecho a la vivienda demuestra que la obligación de respetar ni siempre puede restringirse a la abstención. La dificultad del acceso a la vivienda suele requerir un comportamiento activo del estado (políticas públicas de vivienda, construcción de edificios, desarrollo de infraestructura eléctrica, de transporte, comunicación etc.). Clapham (2006)⁶⁶³ también observa que puede ser exigible un comportamiento activo del estado para evitar que una persona sea indebidamente desalojada de su vivienda por un agente no estatal (un agente privado).

La tendencia actual es expandir las obligaciones del estado, haya visto la insuficiencia de la obligación pasiva para proteger a las distintas categorías de derechos. Se espera del estado una actitud proactiva que se exprese en una obligación concreta de proteger. A propósito, la obligación de proteger históricamente ha estado asociada y hasta mismo asimilada a los derechos sociales, porque la simple abstención no es suficiente para ofrecer una garantía eficaz a los DD.HH.

⁶⁶² La limitación ilegítima de ese derecho puede partir de agentes públicos o de particulares (agentes no estatales). En este caso el estado deberá intervenir para garantizar el ejercicio de ese derecho básico.

⁶⁶³ Clapham, A. (2006). *Human rights obligations of non-state actors*. Oxford University Press.

El acceso a un tribunal independiente e imparcial conlleva a una obligación proactiva del estado (creación, mantenimiento, funcionamiento efectivo de un sistema judicial eficiente, capacitación del personal etc.). Se puede extender la idea de proactividad del estado a diversos otros casos. Por ejemplo, la prohibición absoluta de la tortura. Caso ocurra, sea por un agente público o por un agente privado, surge la obligación del estado de llevar a cabo una investigación para aclarar los hechos e identificar a los responsables. Lo mismo pasa con los tratamientos crueles, inhumanos o degradantes.

La visión contemporánea de los DD.HH es la de que esos derechos conllevan, aunque en diferentes grados, a la obligación estatal de respetar, proteger e implementar, como se ha comentado anteriormente. La frontera entre las obligaciones positivas y negativas del estado (art. 8 de la CEDH) es adecuada para recibir una definición precisa. Sus principios son comparables. Para determinar si la obligación existe, debe ser tomado en cuenta el equilibrio entre los intereses generales y los intereses individuales (evidentemente, en ambos casos, el estado goza de cierta margen de apreciación)⁶⁶⁴.

Históricamente la construcción teórica de los DD.HH ha sido concebida y diseñada para limitar la acción del estado o para invitarlo a intervenir con el propósito de proteger a sus súbditos más débiles y vulnerables. El destinatario de los DD.HH, el sujeto pasivo, es primordialmente el estado, al paso que las personas son las titulares de esos derechos.

Sin embargo, los individuos también pueden practicar actos contrarios al derecho internacional y a los DD.HH (la existencia del Tribunal Penal Internacional está basada en este hecho). En el ámbito europeo, por ejemplo, podríamos citar la sentencia del TEDH en relación a Francia (29 de abril 1997), en el caso de la expulsión, de Francia a EE.UU, de una persona detenida en el aeropuerto por tráfico de drogas. Para que el artículo 3 de la CEDH tenga una aplicación efectiva, es necesario que el riesgo sea real y que las autoridades del estado de destino sean capaces de ofrecer una protección

⁶⁶⁴ Actualmente, es mucho más tenue la distinción entre las libertades y los derechos sociales.

apropiada⁶⁶⁵. La CEDH comprende que las controversias jurídicas deben ser apreciadas a la luz de las circunstancias propias de la vida actual (debe buscar, en su campo de aplicación, una protección real y concreta del individuo). En este sentido, la propia legislación nacional debe ser interpretada en función y en consonancia con los DD.HH.

La tercera obligación del estado, como se ha visto, es la obligación de implementar los DD.HH. Esto exige, según Shue (1996)⁶⁶⁶, el establecimiento de una estructura adecuada y de una proactividad institucional. Para cumplir su cometido, el estado debe adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas. En el mismo sentido, se podría mencionar dos recientes tesis doctorales en la Universidad de Ginebra: a) la de Gregor Chatton (2013)⁶⁶⁷ y b) la de Abdoulaye Soma (2010)⁶⁶⁸.

En lo que concierne a la aplicabilidad de los DD.HH, la idea subyacente es la de que asuman el rol de normas objetivas válidas para todos los seres humanos. Dentro de esa concepción, los DD.HH poseen una dimensión mucho más amplia que la simple salvaguardia de derechos individuales. La dimensión institucional (puesto que el estado es llamado a actuar en diferentes niveles para implementar los DD.HH en todas sus categorías) conlleva a la superación de la idea clásica de que las instituciones nacionales e internacionales deben únicamente asumir las obligaciones de respetar y proteger los derechos individuales que el estado debe garantizar. El desarrollo de una perspectiva más amplia y social es importante.

⁶⁶⁵ La idea aun hoy predominante apunta – y el Tribunal de Estrasburgo lo sostiene en su jurisprudencia – que el desarrollo e implementación de los derechos económicos y sociales dependen esencialmente de la situación del estado, especialmente de sus finanzas.

⁶⁶⁶ Shue, H. (1996). *Basic rights: Subsistence, affluence, and US foreign policy*. Princeton University Press.

⁶⁶⁷ Chatton, G. T. (2013). *Vers la pleine reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels*. Tesis doctoral, University of Geneva.

⁶⁶⁸ Soma, A. (2010). *Droit de l'homme à l'alimentation et sécurité alimentaire en Afrique*. Tesis doctoral, University of Geneva.

Efectivamente, el ordenamiento jurídico debe ser interpretado y armonizado con los DD.HH, lo que incluye tanto la actuación del estado, mediante sus agentes públicos, como la actuación de los agentes privados. Con efecto, el estado no se exime de su obligación de garantizar la plena realización de los DD.HH por la actuación de ningún de ellos. La cláusula social no especifica, por cierto, si la actuación violadora debe ser practicada por agentes estatales o no estatales. No obstante, de cualquier modo, el estado tiene una obligación de garantizar los DD.HH en ambos casos.

En 1982, cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU elaboró su observación general nº 6 relativo al derecho a la vida, ha observado que el respeto y la protección de ese derecho no se restringe a la observancia del PIDCP. En otras palabras, la actuación estatal debe ir más allá (existe una importante dimensión objetiva en relación a las instituciones del estado que deben ser puestas en marcha para lograr plenamente ese derecho fundamental⁶⁶⁹). En este sentido, la asunción de compromisos políticos y de obligaciones jurídicas por parte de los estados latinoamericanos no es inferior al mínimo aceptable por la UE al tenor de la cláusula social aunque, naturalmente, es conveniente que los estados profundicen la consagración y consolidación de esos derechos.

Se ha visto que los DD.HH buscan limitar la conducta del estado como medio para garantizar ciertos derechos al ser humano. Sin embargo, la UE, como se ha comentado anteriormente, no es un estado. La pregunta que se podría formular es si los DD.HH, bajo la perspectiva jurídica, también deben ser acatados por entidades como la UE.

Los cuarenta y siete países que forman el Consejo de Europa, de los que veintiocho son miembros de la UE, se han adherido al CEDH. Además, el Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, permite que la UE se adhiera al instrumento

⁶⁶⁹ Paralelamente, existe un gran número de normas internacionales cuyo objeto es la protección de los DD.HH. Esos tratados suelen ser auspiciados por organizaciones internacionales. De hecho, los instrumentos internacionales referenciados por la UE en sus acuerdos comerciales provienen de la ONU y de la OIT. Las organizaciones pueden ser regionales o universales. La UE, en sus acuerdos con AL, toma como referencia aquellos instrumentos jurídicos emitidos por las organizaciones de vocación universal y los asocia a la cláusula social (algo explícito en los esquemas SPG).

jurídico. De hecho, en 2013 se ultimó un preacuerdo de adhesión: cuando eso ocurra, sus actividades estarán sometidas a la jurisdicción de la CEDH⁶⁷⁰.

Paralelamente, la integración de la Carta de Niza, la CDFUE de diciembre de 2000 y la consagración de su fuerza obligatoria a través del Tratado de Lisboa han cumplido un rol importante en este proceso: la CDFUE es ahora una parte integral de sus fuentes jurídicas primarias. Sus estados miembros están sometidos a los derechos fundamentales de la UE mediante el Tratado de Lisboa (la propia UE está sometida a los derechos fundamentales⁶⁷¹ que figuran en el Tratado de Lisboa).

También interesa señalar algunas características que se están diseñando en el ámbito de los DD.HH en este momento. Además de plasmar tradicionalmente los derechos esencialmente individuales, los DD.HH cada vez más incorporan, dentro de una perspectiva mucho más amplia, obligaciones legales de carácter objetivo que el gobierno debe tomar en cuenta en la totalidad de sus actividades. Dentro de ese cuadro, los efectos que caracterizan los DD.HH actualmente no pueden más ser disociados en función de las diferentes categorías o generaciones de derechos.

Así, por ejemplo, los derechos enmarcados en la CDFUE (que, como se ha mencionado, constituye una fuente jurídica primaria en virtud de su integración en el Tratado de Lisboa), están en el mismo nivel de igualdad. En otras palabras, no existe entre ellos distinciones en función de categorías. Todos merecen respeto, protección e implementación para que se realicen plenamente.

⁶⁷⁰ *El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre el Proyecto de acuerdo de adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales e identifica problemas de compatibilidad con el Derecho de la Unión.* El Tribunal de Justicia, tras recordar que el Tratado de Lisboa resolvió el problema de la inexistencia de base jurídica para la adhesión de la Unión al CEDH, subrayó que, puesto que la Unión no puede considerarse un Estado, la adhesión debe tomar en cuenta sus especificidades. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Comunicado de Prensa nº 180/14, Luxemburgo, 18 de diciembre de 2014.

⁶⁷¹ Una observación interesante es que, a nivel de la UE, no se habla en DD.HH., sino en derechos fundamentales. Básicamente eso ocurre porque esos derechos han dejado de estar plasmados en tratados internacionales para pasar a integrar una especie de constitución supranacional.

En la práctica, sin embargo, tendría que ver cómo los estados cumplirán esas obligaciones en los próximos años. De momento, la dignidad humana, base de los DD.HH, cuenta con una base jurídica amplia para expresarse: igualdad, libertad, solidaridad, acceso a la justicia etc. Todos ellos requieren el mismo tratamiento para que sean efectivos. En la práctica, saber cómo esas obligaciones son ejecutadas y, sobretodo, verificar como los estados cumplen los compromisos que libremente han asumido al ratificar instrumentos internacionales de protección de los DD.HH es uno de los objetivos de la UE que está asociado a la inclusión de la cláusula social (seguimiento de la ratificación y aplicación de los instrumentos jurídicos de protección de los DD.HH).

4.6 LIMITACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Para que la UE pueda eventualmente restringir el comercio bilateral con AL (reduciendo las importaciones de productos latinoamericanos destinados a su mercado interior), con base en la cláusula social, deberá tomar en cuenta, además de los aspectos políticos, económicos y geoestratégicos de la cuestión, también algunas especificidades propias del derecho internacional público y, específicamente, de los DD.HH. Sin eso, la restricción del acceso (condicionalidad asociada a la cláusula social) sería inválida jurídicamente.

Ya se sabe que mediante la inclusión de la cláusula social en los acuerdos comerciales (incluyendo el SPG), la UE busca fomentar la protección de los DD.HH en los PED. Esta es la condicionalidad de acceso o de concesión de beneficios comerciales que, sin embargo, se ve seriamente comprometida por el hecho de que la protección de los DD.HH encuentra límites establecidos por el propio derecho internacional. Esos límites no pueden ni deben ser apreciados por el poder político, algo que la UE, mediante la actuación del Parlamento Europeo, parece inclinarse. Es el poder jurisdiccional quien debe examinar si existe o no limitación o violación de los DD.HH para efectos de aplicación de eventuales sanciones contempladas en el instrumento acordado entre las partes, incluyendo una eventual suspensión del acuerdo.

Aunque presente todas las deficiencias observadas anteriormente, la UE considera la cláusula social como una de categoría fundamental (de acuerdo con la CVDT). Además, en el cuerpo de los tratados con los PED, suele aparecer en el epígrafe “cláusula fundamental”.

Sin embargo, esa posición destacada, conferida por la UE, no puede ser llevada al extremo, a punto de considerarse como violación de los DD.HH cualquier acto “aparentemente violador” practicado por el estado. Para empezar, algunos estados pugnan que ciertos DD.HH no son siempre aplicables. Para realizar una apreciación correcta sobre el campo de aplicación de los DD.HH, algo que condicionaría la apreciación por parte de la UE de la adecuada observancia de la cláusula social por los países latinoamericanos, hay que distinguir entre dos campos: el personal y el material.

El campo de aplicación personal concierne a la cuestión de la titularidad. ¿La persona que invoca la protección de los DD.HH es titular de esos derechos? La universalidad de los DD.HH pugnados por la UE conduciría a la respuesta sencilla de que todos los seres humanos son titulares de esos derechos.

No obstante, esa respuesta exige un comentario más complejo. Algunos tratados internacionales sobre DD.HH son específicos para ciertas categorías de personas. Por ejemplo, la convención relativa a los derechos de los niños solo se aplica a aquellas personas que sean menores de edad. De modo similar, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o que turben su igualdad en relación a los hombres, se aplica únicamente a las personas del sexo femenino. La UE, en sus acuerdos comerciales, mediante la cláusula social, busca incorporar tratados que protejan a ambos, niños y mujeres (los Pactos de 1966 también podrían valer, pero son más genéricos).

En sus relaciones comerciales con AL, la UE ha incluido instrumentos internacionales más específicos. Por su vez, el campo de aplicación material se refiere al contenido del derecho. Este campo confiere a su titular prerrogativas específicas que

corresponden a obligaciones que deben ser asumidas por el estado. Suponer que la protección de los DD.HH en AL es baja, como fundamento de la persistencia de la cláusula social en las relaciones comerciales UE-AL, puede conducir a problemas específicos generados por las propias dificultades de interpretación de las normas y su adaptación a casos concretos.

Estas dificultades existen dentro de cada sistema regional de protección de los DD.HH, de modo que la interpretación de su adecuación jurídica por un sistema regional, realizado desde la perspectiva de una instancia con competencia específica en otra región e inserida dentro de otro sistema regional, además de ilegal, constituiría un absurdo hermenéutico. Por ejemplo, en la UE, la CEDH (art. 5, derecho a la libertad / no ser privado de la libertad) no se adecua perfectamente a los casos de personas privadas de libertad por el hecho de ser sospechosas de prácticas terroristas. De modo similar, su artículo 10 (libertad de expresión), ni siempre se adapta a situaciones como, por ejemplo, la exposición de un cartel homofóbico o islamofóbico. Lo mismo podría ocurrir en relación a la adecuación de aplicabilidad de su art. 3 y las amenazas de malos tratos a una persona sospechosa de matar a un niño, para que preste sus declaraciones. ¿La amenaza puede ser calificada como tortura o trato inhumano o degradante, como ha ocurrido en el caso Gäfgen? (Greer, 2011)⁶⁷².

Los DD.HH son formulados de modo conciso y general. Para conocer su contenido preciso es necesario acudir a la jurisprudencia. En este último caso, el TEDH confirmó que el art. 3 de la Convención se aplica a las amenazas de malos tratos. La prohibición de la tortura, de los tratamientos inhumanos y degradantes visa proteger tanto la integridad física como la psíquica (sufrimientos mentales). Así, por más énfasis que ponga la UE en la observancia de la cláusula social en sus acuerdos comerciales, la verdad es que los casos son apreciados por los poderes judiciales y, como mínimo, suscitan dudas jurídicas. Esa es una realidad en AL y en la UE. La cláusula social no puede evitar eso.

⁶⁷² Greer, S. (2011). Should Police Threats to Torture Suspects Always be Severely Punished? Reflections on the Gäfgen Case. *Human Rights Law Review*, 11(1), 67-89.

4.6.1 Derogación, privación y restricción de los derechos humanos

Los países latinoamericanos pueden limitar los DD.HH plasmados en los instrumentos internacionales consagrados en función de la cláusula social por las mismas razones que cualquier otro país: a) derogación, ante situaciones excepcionales, especialmente en tiempos de crisis; b) privación (o pérdida), adoptada tanto en tiempos de crisis como en tiempos “normales”, con la finalidad de prevenir y castigar abusos de derechos y c) restricción, también aplicada a cualquier tiempo, con el objetivo de conciliar los DD.HH (especialmente la libertad) con intereses privados o colectivos concurrentes (Neuman, 2003)⁶⁷³.

La idea de derogación de los DD.HH no viene contemplada en los acuerdos comerciales. Ella expresa la posibilidad de que el estado, dentro de ciertas circunstancias, y por un período de tiempo determinado, pueda modificar el nivel de protección de los DD.HH. En el ámbito europeo, por ejemplo, la CEDH contempla la necesidad de que la derogación sea formalmente comunicada al secretario general del Consejo de Europa (condición formal). Durante ese tiempo, el derecho objeto de derogación se queda suspenso, de modo que el estado podría practicar actos que, caso no hubiera la suspensión, denotarían una violación a esos derechos (Koji, 2001)⁶⁷⁴.

¿Si algún país aparentemente viola los DD.HH, estaría la UE en posición adecuada de apreciar la existencia de una eventual derogación? Este investigador acredita que no. Sus instancias jurisdiccionales no poseen competencia para hacerlo y sus instancias políticas, que son las que realizan las apreciaciones concernientes a la verificación de conductas consonantes con la cláusula social, para efectos de condicionalidad de acceso al mercado, tampoco.

⁶⁷³ Neuman, G. L. (2003). Human rights and constitutional rights: harmony and dissonance. *Stanford Law Review*, 1863-1900.

⁶⁷⁴ Koji, T. (2001). Emerging Hierarchy in International Human Rights and Beyond: From the Perspective of Non-derogable Rights. *European Journal of International Law*, 12(5), 917-941.

De cualquier modo, ni todos los DD.HH pueden ser derogados. Macdonald (1998)⁶⁷⁵ recuerda que el art. 15, párrafo 2 de la CEDH establece una lista de los derechos que no pueden jamás ser derogados por el estado. Parker (1988)⁶⁷⁶, por su vez, observa que el art. 4, párrafo 2 del PIDCP contempla también derechos inderogables. Ahora, los derechos inderogables no son los mismos en todos los instrumentos jurídicos, de modo que la condicionalidad de la protección social en el marco de las relaciones comerciales con AL implica en la adopción de los derechos contemplados en aquellos instrumentos considerados esenciales para la UE. La Convención Europea, por ejemplo, considera inderogable los derechos contemplados en su arts. 2 y 3. Mismo en el caso de aplicación de una derogación de los DD.HH, permanecerá como inderogable la prohibición de la tortura, del trato deshumano o del trato degradante. Este es un instrumento jurídico no extensible a AL, evidentemente.

En circunstancias excepcionales, el estado puede derogar DD.HH cuando existe un peligro que amenace la existencia de la nación. Las medidas restrictivas de los DD.HH deben estar relacionadas con esas circunstancias excepcionales (condición de proporcionalidad). Además, el estado debe demostrar que, a pesar de la adopción de las medidas excepcionales, mantiene su compromiso en relación a las otras obligaciones internacionales contraídas (especialmente las que señalen que su conducta no colisiona formal o materialmente con ninguna de las disposiciones jurídicas contempladas en los instrumentos internacionales de referencia de la cláusula social).

El Comité de Derechos del Hombre (el órgano encargado de controlar la aplicación del pacto) ha adoptado en el año 2001 la observación general n° 29, precisamente sobre el tema de la derogación y ha reconocido que el Pacto de las Naciones Unidas contenía un mayor número de derechos inderogables. Por otro lado, después de los atentados de 11 de septiembre de 2001, Reino Unido ha derogado formalmente el artículo 5, párrafo

⁶⁷⁵ Macdonald, R. S. J. (1998). Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights. *Colum. J. Transnat'l L.*, 36, 225-241.

⁶⁷⁶ Parker, K. (1988). Jus Cogens: Compelling the Law of Human Rights. *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.*, 12, 411-425.

1, de la CEDH. Así, es posible comprender que la UE, en sus relaciones comerciales con AL, no puede pretender algo que escapa efectivamente de su control. La derogación de los DD.HH, por parte de los países latinoamericanos, no representaría una violación de la cláusula social, justamente porque el derecho permite que, en circunstancias excepcionales, por un período de tiempo determinado, eso pueda ocurrir (Lauren, 2011)⁶⁷⁷.

¿Será que la privación de los DD.HH⁶⁷⁸ por los países latinoamericanos constituye violación de la cláusula social incorporada en los acuerdos comerciales UE-AL?

Antes de nada es importante saber que la privación de los DD.HH busca prevenir y sancionar un abuso de derecho. La CEDH, en su art. 17, la contempla. Actos abusivos serían aquellos que visasen incumplir una actividad o cumplir una actividad visando la destrucción de derechos o libertades protegidos en la Convención. Evidentemente, los países latinoamericanos no pueden ser signatarios de la CEDH, lo que significa que la privación de DD.HH fundamentada en alguna convención interamericana no constituiría violación alguna a esos derechos.

Interesa observar que, en esa categoría jurídica, el individuo privado del derecho lo pierde. En otras palabras, no podrá invocarlo ante las instancias administrativas o judiciales, salvo para que se aclare la legitimidad del acto gubernamental en relación al tiempo de la aplicación. La idea central sería impedir que individuos (o grupos de individuos) puedan explorar a su favor y en flagrante detrimento de los demás, los derechos establecidos en la norma jurídica.

⁶⁷⁷ Lauren, P. G. (2011). The evolution of international human rights: Visions seen. University of Pennsylvania Press.

⁶⁷⁸ México: Sentencia n° ST-JDC-0366-2012 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Regional Toluca), 17 de Enero de 2012, Sentencia n° ST-RAP-0005-2012 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Regional Toluca), 12 de Abril de 2012; Sentencia n° ST-JDC-0367-2012 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Regional Toluca), 12 de Abril de 2012; Guatemala, Sentencia n° 280-90 de Corte constitucional, 19 de Octubre de 1990.

Normalmente la privación se aplica a los derechos de libertad de comunicación, de expresión, de asociación y de reunión relacionados, por ejemplo, con la incitación al odio o la creación o consolidación de estereotipos negativos que afecten a determinados colectivos. En este sentido, se podría afirmar que ese mecanismo procura consagrar una democracia realmente activa, apto a defenderse de los movimientos totalitarios o de la propagación de ideas xenófobas, racistas o ultranacionalistas. Así, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión o de manifestación no se puede expresar en carteles que proclamen el odio a los homosexuales o a la comunidad musulmana. También sería el caso de la difusión de las imágenes de la Torres Gemelas ardiendo con la inscripción: “¡No al Islam!”. La idea de presentar a todos los musulmanes como terroristas sanguinarios o a todos los homosexuales como enfermos mentales constituiría un abuso del derecho de expresión.

Por último, se puede señalar la denominada restricción de los DD.HH. Esta limitación - restricción - puede ocurrir a cualquier tiempo y es la más apreciada por la TEDH. Ocurre la restricción cuando el estado, mediante sus representantes, realiza un acto de injerencia sobre los DD.HH de una persona o de un grupo de personas (constituido o no como colectivo diferenciado). Sobre el tema ya se ha pronunciado la CIDH (Opinión Consultiva de 17 de Septiembre de 2003. Caso Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Serie A nº 18). La restricción solamente puede alcanzar a los denominados DD.HH relativos (que constituye su mayoría)⁶⁷⁹. Además, según Laws (1998)⁶⁸⁰, debe existir una razón de orden público (no puede ser arbitrario). Recientemente (1 de Julio de 2013), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México ha proclamado en una Tesis Aislada (nº 1a. CCXV/2013, 10a.) la inexistencia de DD.HH absolutos. La CADH (Pacto de San José, 1969) la contempla en su artículo 30 (“Alcance de las Restricciones”) en los siguientes términos: *Las*

⁶⁷⁹ Recientemente (1 de Julio de 2013), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México ha proclamado en una Tesis Aislada (nº 1a. CCXV/2013, 10a.) la inexistencia de DD.HH. absolutos, con base en los requisitos para restringirlos o suspenderlos conforme a los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10.06.2011) y 30 de la CADH.

⁶⁸⁰ Laws, J. (1998). The limitations of human rights. *Public Law*, 112, 254-265.

restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas).

Si las condiciones legales están reunidas, la restricción de los DD.HH no puede ser identificada por la UE como una violación de su cláusula social. En otras palabras, no se trataría de una violación a los DD.HH, sino en una medida estatal legalmente justificada.

4.6.2 Cláusula social y derechos humanos absolutos

Apreciar correctamente si los DD.HH están siendo violados o no en AL es un tema complejo bajo la perspectiva jurídica. Las medidas gubernamentales que importen en injerencia sobre los DD.HH pueden ser legítimas o ilegítimas. El elemento clave para identificar si la limitación de los DD.HH (derogación, privación o restricción) es o no justificable jurídicamente se basa en la naturaleza del derecho intervenido: absoluto o relativo (de Castro Cid, 2010)⁶⁸¹.

La UE no puede realizar una apreciación jurídica sobre eso, de modo que la cláusula social debe ser contemplada con mitigaciones. Además, la construcción de esa teoría (derecho absoluto o relativo) no es latinoamericana, sino europea y expresa sus valores esenciales. Según Donnelly (2007)⁶⁸², Fedorova & Sluiter (2009)⁶⁸³ y Landman & Carvalho (2009)⁶⁸⁴, es posible saber de antemano que un derecho es relativo cuando el

⁶⁸¹ Castro Cid, B. D. (2010). La fundamentación de los derechos humanos (reflexiones incidentales). *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, 24, 115-127.

⁶⁸² Donnelly, J. (2007). The relative universality of human rights. *Human Rights Quarterly*, 29(2), 281-306.

⁶⁸³ Fedorova, M. & Sluiter, G. (2009). Human Rights as Minimum Standards in International Criminal Proceedings. *Hum. Rts. & Int'l Legal Discourse*, 3, 9-22.

⁶⁸⁴ Landman, T. & Carvalho, E. (2009). *Measuring human rights*. Londres: Routledge.

propio texto normativo contempla la posibilidad de una injerencia justificada. Los DD.HH absolutos, por su vez, constituyen valores fundamentales dentro de una sociedad democrática. El TEDH interpreta el art. 3 de la CEDH como un derecho absoluto, recordando Ast (2010)⁶⁸⁵ el caso Gafgen contra Alemania (DD.HH absolutos vs. lucha contra el terrorismo). Los casos Chahal contra Reino Unido (Gómez, 2004⁶⁸⁶ y Fernández, 2006⁶⁸⁷) o Soering contra el Reino Unido (Barrenechea, 2007⁶⁸⁸ y Alberdi, 2011)⁶⁸⁹ son ilustrativos (el envío de un extranjero sospechoso de actividad terrorista a un país donde sufra el riesgo de ser torturado no es admisible por el derecho).

Como ejemplos de DD.HH absolutos se puede mencionar, por ejemplo, la prohibición de la tortura⁶⁹⁰ y de los tratamientos inhumanos y degradantes, la prohibición de la esclavitud (art. 4 de la CEDH), el derecho a un proceso justo y equitativo (art. 6) o el derecho al uso de recursos efectivos (art. 13).

⁶⁸⁵ Ast, S. (2010). Gafgen Judgment of the European Court of Human Rights: On the Consequences of the Threat of Torture for Criminal Proceedings, *The German LJ*, 11, 1393-1437.

⁶⁸⁶ Gómez, C. M. (2004). El Convenio Europeo de Derechos Humanos: primeros pasos para una nueva reforma. *Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época*, 5, 755-784.

⁶⁸⁷ Fernández, L. P. (2006). Límites jurídicos al discurso político sobre el control de flujos migratorios: non refoulement, protección en la región de origen y cierre de fronteras europeas. *Revista electrónica de estudios internacionales*, (11), 1-21.

⁶⁸⁸ Barrenechea, L. (2007). ¿Están recogidas las vinculaciones entre el derecho de asilo y el terrorismo en la Estrategia Global contra el Terrorismo de Naciones Unidas?. *Revista electrónica de estudios internacionales*, 14, 1-10.

⁶⁸⁹ Alberdi, M. D. L. R. P. (2011). La jurisprudencia social del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. *Lex Social: Revista de Derechos Sociales*, 1(1), 93-105.

⁶⁹⁰ México, Tesis Aislada num. 1a. CCVI/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 23 de Mayo de 2014 (Tesis Aisladas); Colombia, Sentencia de Tutela nº 282/14 de Corte Constitucional, 14 de Mayo de 2014; Caso Contencioso de CIDH de 26 de Noviembre de 2010. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Serie C nº 220, Caso Contencioso de CIDH de 23 de Noviembre de 2011. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Serie C nº 236; Caso Contencioso de CIDH de 25 de Octubre de 2012. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Serie C nº 252; Sentencia nº C-542/13 de Tribunal de Justicia (UE), 18 de Diciembre de 2014, Sentencia nº C-562/13 de Tribunal de Justicia (UE), 18 de Diciembre de 2014, Auto nº C-390/13 P de Tribunal de Justicia (UE), 28 de Noviembre de 2013, Sentencia nº C-199/12 de Tribunal de Justicia (UE), 7 de Noviembre de 2013.

Es importante resaltar que la eventual limitación de los DD.HH no puede ser arbitraria. Cualquier medida limitativa debe respetar el principio de la legalidad y, evidentemente, no colisionar con los derechos absolutos. Solamente los DD.HH relativos pueden ser limitados. Así, la apreciación por parte de la UE de cómo se comporta un país latinoamericano signatario de un AC o beneficiario de un esquema SPG, relativamente a una eventual limitación de los DD.HH, no puede ser realizada de forma genérica, aunque la cláusula social presuponga esa uniformidad.

La verdad es que, en el ámbito de la UE, tampoco existe uniformidad. Posiblemente el caso más ilustrativo es la adopción, por el Reino Unido, de una ley especial sobre antiterrorismo, crimen y seguridad, el conocido *Act* de 2001 (Fenwick, 2002)⁶⁹¹. Esta norma jurídica prevé la detención de extranjeros sospechosos de terrorismo. Reino Unido era consciente del hecho de que los motivos jurídicos contemplados en el art. 5 de la CEDH no le permitirían detener a una persona por un período de tiempo indeterminado sin que fuera juzgada. La decisión de Reino Unido ha sido simplemente derogar el art. 5 (la derogación no ha sido considerada válida por la Corte que, además, examinó la conformidad de la detención con ese art. 5 y constató su violación).

Existen derechos que están sometidos a la reserva de orden público como, por ejemplo, la libertad de expresión consagrada en el art. 10 de la CEDH. Su párrafo segundo expone una serie de razones o motivos que podrían justificar la limitación del derecho. Estas razones pueden ser divididas en dos categorías:

- La primera categoría comprende una serie de motivos que se refieren a intereses públicos o necesidades sociales, como la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden, la prevención del crimen, la protección de la salud o de la moral, la protección de informaciones confidenciales o la garantía de la autoridad e imparcialidad del poder judicial.

⁶⁹¹ Fenwick, H. (2002). The Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001: A Proportionate Response to 11 September?. *The Modern Law Review*, 65(5), 724-762.

- La segunda categoría concierne a intereses particulares: la protección de la reputación o de los derechos ajenos. Son DD.HH sometidos al régimen de reserva del orden público e incluyen esencialmente las libertades de expresión (art. 10), de conciencia, de creencia, de religión (art. 9), de asociación y de reunión (art. 11) y la protección de la esfera privada y familiar (art. 8).

Estas condiciones son apreciadas, en el ámbito de la UE, por el TEDH. Primeramente, la Corte aprecia si la injerencia es previa a la ley (exigencia de la legalidad), lo que conlleva al examen de los principios de seguridad y previsibilidad jurídica. En seguida, la Corte examina si posee una razón legítima y por fin, si la limitación del derecho era necesaria dentro de una sociedad democrática. Son tres condiciones cumulativas y capitales. La apreciación ocurrirá siempre en función del derecho cuya limitación se examina, de la redacción de la norma, de la interpretación de los hechos, de las condiciones y especificidades del caso concreto y de la jurisprudencia existente (Gialdino, 2008)⁶⁹².

Aunque similares, también existen diferencias importantes que deben ser comprendidas entre el sistema europeo y el sistema interamericano. La cláusula social no parece tomar en cuenta esas diferencias regionales. Por ejemplo, la CIDH exige que la norma jurídica corresponda a un acto adoptado por el Parlamento (legitimación democrática). El TEDH, al contrario, interpreta el concepto de “ley” de manera amplia y flexible, incluyendo las normas jurídicas adoptadas por el poder ejecutivo (determinados tipos de decreto y actos administrativos) y, en el caso del *Common Law*, la jurisprudencia. Sobre la diferencia entre ambos sistemas se recomienda el trabajo de Hitters (2003)⁶⁹³. Para saber si corresponde a una sociedad democrática – siempre recordando que la democracia es uno de los valores fundamentales de la política exterior de la UE - es necesario que intervenga un tribunal que realice un balance entre

⁶⁹² Gialdino, R. E. (2008). La nueva Corte Europea de Derechos Humanos–Protocolo 11. *Revista Investigaciones*, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1999, 1-27.

⁶⁹³ Hitters, J. C. (2003). Criterios establecidos por los órganos jurisdiccionales de los sistemas interamericano y europeo. *La Ley*, Buenos Aires, 1373, 62-93.

los intereses públicos y privados y si existe realmente un interés legítimo y jurídicamente justificable para invocar la restricción.

En este sentido, el TEDH suele señalar los siguientes valores asociados a sociedad democrática: tolerancia, pluralismo, espíritu de apertura y protección de las minorías⁶⁹⁴. La apreciación no es un cálculo utilitario, como pudiera sugerir Jeremy Bentham o John Stuart Mills⁶⁹⁵. El hecho de que una restricción sea aprobada por una mayoría (caso de la ley) no es determinante. Aquí se puede observar que el criterio adoptado por la CIDH es más democrático que la europeo, al exigir que la restricción derive de una ley aprobada por el Parlamento. De cualquier modo, el predominio de la voluntad de la mayoría podría conducir eventualmente a una tiranía, lo que es contrario a los valores de la tolerancia y del pluralismo. El caso *Plon contra Francia* (Alcalá, 2004)⁶⁹⁶ ilustra esa idea: el TEDH apreció el conflicto que gravitaba entre la libertad de expresión y el derecho a la protección de la esfera privada.

En resumen, existen tres diferentes tipos de limitación al ejercicio de los DD.HH:

- 1) La derogación: este tipo de limitación permite al estado suspender temporalmente, bajo determinadas circunstancias excepcionales (guerra, crisis graves etc.) el ejercicio de los DD.HH. Las condiciones observables para la limitación buscan asegurar que el estado de excepción no se convierta en la regla y la aplicabilidad de los DD.HH en una excepción.

⁶⁹⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bolzano — Italia) — *Servet Kamberaj/Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano*; Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de abril de 2012 (Asunto C-571/10 *Kamberaj*); Sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 5 de diciembre de 2012 (Asunto F-29/11 BA / Comisión).

⁶⁹⁵ Bentham, J. & Mill, J. S. (2004). *Utilitarianism and other essays*. Penguin UK.

⁶⁹⁶ Alcalá, C. Q. (2004). La dificultad de conjugar la libertad de expresión con el secreto médico. Comentario a la sentencia del TEDH de 18 de mayo de 2004, asunto *Plon Société c. Francia* (nº 58148/00). *Revista General de Derecho Europeo*, 5, 12-23.

2) La privación: toma por base el abuso de derecho y es aplicable a cualquier tiempo (circunstancias normales y circunstancias excepcionales). Su objetivo es prevenir que ciertos derechos sean invocados para socavar valores fundamentales como, por ejemplo, la democracia. Desde su origen histórico, la privación se aplica con el objetivo de inhibir movimientos totalitarios, racistas o xenófobos⁶⁹⁷. Juega un papel importante en el campo de la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Entran en su órbita de incidencia los discursos que inciten al odio o las asociaciones de tendencia totalitaria.

3) La restricción: son los límites a los DD.HH que presentan la mayor importancia práctica. Se debe buscar el balance entre los derechos e intereses individuales, por un lado, y los derechos e intereses generales (o públicos), por otro. La restricción toma en cuenta la existencia de DD.HH absolutos y DD.HH relativos. En su análisis son considerados elementos como el orden público, capaz de justificar la injerencia del estado sobre el campo de los DD.HH. No obstante, eso no significa que esos derechos puedan relativizarse sin cualquier límite. La restricción sólo puede ser justificada si cumple tres condiciones: a) estar prescrita en ley (legalidad), b) ser (temporalmente) necesaria en una sociedad democrática, c) cumplir una finalidad legítima. Estos requisitos están en la base de una injerencia estatal legítima sobre los DD.HH.

⁶⁹⁷ Resolución del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia en la Unión Europea (COM(1999) 268 C5-0310/1999 C5-0015/2000 1999/2205(COS)). DOCE de 29.12.2000 (C 377/366); Reglamento (CE) nº 1035/97 del Consejo de 2 de junio de 1997 por el que se crea un Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. DOCE de 10.6.97 (nº L 151/1), modificado por el Reglamento (CE) nº 1652/2003 de 29.09.2003 (L 245); Reglamento (CE) nº 168/2007 del Consejo de 15 de febrero de 2007 por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. DOUE de 22.2.2007 (L 53/1).

PARTE III
LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UNIÓN
EUROPEA Y EN AMÉRICA LATINA

CAPÍTULO 5
LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UNIÓN
EUROPEA Y EN AMÉRICA LATINA

5.1 PANORAMA RECIENTE DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA

Los apartados anteriores señalaron las deficiencias de la cláusula social en relación a la estructura y al funcionamiento del mercado. También se analizó cuáles son los DD.HH comprendidos dentro de la expresión “protección social”, asociada a esa cláusula, y se profundizó la apreciación de las posibilidades legales que tienen los estados, según el derecho internacional público, para limitar esos derechos legítimamente, sin que se pueda alegar violación de la cláusula social.

Verificada la eficacia limitada de la cláusula social bajo diferentes dimensiones, procede analizar la normativa pertinente actualmente en vigor en AL. Si ella es inexistente, sería comprensible - bajo la perspectiva jurídica - la presencia de la cláusula social en los acuerdos concluidos con AL. Si esas normas están presentes, pero son escasas, también sería comprensible su incorporación. Así que, en esta parte de la investigación, se intentará responder la hipótesis de desarrollo, o sea, ¿es la cláusula social incorporada en los acuerdos comerciales UE-AL justificable jurídicamente?

Para este investigador, la inclusión de una cláusula social en un AC con AL no deja de reflejar una concepción sesgada de la UE sobre los estándares internacionales de protección de los DD.HH.L que deben tener los PED que deseen exportar sus productos al mercado único europeo. La deliberada elección de instrumentos jurídicos producidos por la ONU y la OIT (asociados a la cláusula social) es políticamente coherente, sin duda, puesto que apunta hacia una uniformidad normativa. Ahora, sería útil verificar hasta qué punto esa elección volcada a la uniformización de sus relaciones exteriores es coherente con la propia noción de protección social vigente dentro de la UE.

El tema de los DD.HH es amplio y la normatividad intrincada. Serán mencionados en los próximos apartados ciertos aspectos relevantes de su inclusión en el ámbito de la intrazona y en el marco de la política exterior y de seguridad común de la UE.

Sobre este tema, es importante mencionar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido un papel relevante en el establecimiento y en la consolidación de los DD.HH como principio general del derecho comunitario, en consonancia con las tradiciones constitucionales comunes a los estados miembros. Su apreciación de los DD.HH estaba vinculada a la aplicación de la normativa comunitaria⁶⁹⁸ como instrumento del proceso de integración económica. Como afirma Castillo Daudí (2006)⁶⁹⁹ la violación de los derechos fundamentales se analizaba según la perspectiva y en virtud de la conexión con el desarrollo de ese proceso.

En los años más recientes, diversas e importantes medidas han sido adoptadas en nivel de la intrazona, mediante la constitución de organismos específicos. Se podría mencionar, por ejemplo, la Agencia de los Derechos Fundamentales, instituida por el Reglamento (CE) nº 168 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, que ampliaba el mandato del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (OERX), en funcionamiento desde 1997, y que ahora lo reemplaza. La Agencia, en funcionamiento desde el 1 de marzo de 2007, asiste y asesora tanto a las instituciones y órganos de la UE como a los estados miembros en materia de derechos fundamentales y combate al racismo, la xenofobia y la intolerancia⁷⁰⁰.

Aunque su competencia sea esencialmente regional, los ámbitos temáticos definidos en el Marco Plurianual acordado con el Consejo y el Parlamento Europeo pueden ser extendidos a países que hayan suscrito algún acuerdo de estabilización y asociación con la UE, aunque con enfoque prioritario hacia los países candidatos. Además, la Agencia, en colaboración con distintas instituciones de la UE, organismos nacionales de los

⁶⁹⁸ Sentencias *Stauder* (12 de noviembre de 1969), *Internationale Handelsgesellschaft* (17 de diciembre de 1970), *Nold* (14 de mayo de 1974), *Rutili* (28 de octubre de 1975), *Defrenne* (15 de junio de 1978), *Hauer* (13 de diciembre de 1979), *Orkem* (18 de octubre de 1989).

⁶⁹⁹ Castillo Daudí, M. (2006). Los derechos humanos en la Unión Europea, *Cuadernos de Integración Europea* nº 4, marzo, pp. 13-33.

⁷⁰⁰ Decisión nº 252/2013/UE del Consejo, de 11 de marzo de 2013, por la que se establece un marco plurianual para el período 2013-2017 para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

países miembros y la sociedad civil, ha logrado establecer una Plataforma de Derechos Fundamentales.

También interesa mencionar que, aunque los DD.HH estuviesen contemplados en instrumentos relevantes de la talla del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950), la Carta Social Europea (1961) y el Acta Única Europea (1986, Preámbulo), su extensión efectiva en el marco de la PESC ha ocurrido con el TUE de 1992⁷⁰¹ (Preámbulo y Título V, artículo J.1.1 y 2). Anteriormente, el tratado constitutivo de la Comunidad Europea (vigente hasta el 1 de diciembre de 2009, en su Título XX, art. 177, apartado 2 y art. 178) ya señalaba la consolidación de la democracia, del estado de derecho y el respeto por los DD.HH y las libertades fundamentales en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

De hecho, sentencias del Tribunal de Justicia como, por ejemplo, “República Portuguesa vs Consejo”, de 3 de diciembre de 1996, reforzaban ese entendimiento. Con la modificación introducida por el Tratado de Niza, el nuevo Título XXI del Tratado de la Comunidad Europea pasó a señalar (art. 181, A.1) que la cooperación económica, financiera y técnica con terceros países debería contribuir con el objetivo de respeto de los DD.HH y de las libertades fundamentales. La adopción de los convenios elaborados en el ámbito de la ONU y de la OIT, en armonía con los instrumentos resultantes del Consejo de Europa y las legislaciones nacionales, ha sido relevante para preservar el estado de bienestar social afectado por la ampliación del proceso de integración hacia los PECO. De las distintas consecuencias derivadas de este proceso, señalamos dos:

- La acomodación de los DD.HH, por el lado del bloque europeo.

⁷⁰¹ El TUE, de 7 de febrero de 1992, firmado en Maastricht, ha tenido su vigencia hasta el 01 de Julio de 2013.

- El reemplazo gradual de más de cuarenta años de planificación central a raíz del proceso de transición hacia la economía de mercado⁷⁰², la democracia, el estado de derecho, el respeto por los DD.HH y la protección de las minorías, por el lado de los países candidatos.

El artículo 49 del TUE, de 7 de febrero de 1992⁷⁰³, ha sido reforzado, además, por el Consejo Europeo de Copenhague (1993)⁷⁰⁴, al establecer estándares económicos y políticos para el ingreso de los países candidatos al bloque europeo. El programa PHARE⁷⁰⁵, creado en 1989 para apoyar el proceso de reformas y la transición económica y política en Polonia y Hungría se convertiría, en 1994 (como resultado del Consejo Europeo de Essen) en un instrumento financiero relacionado con la estrategia de preadhesión de los PECO (posteriormente extendida a los países candidatos de los Balcanes occidentales) y, en virtud de la Agenda 2000 (1997-1999) en un fondo de tipo estructural cuyo objetivo era fomentar el desarrollo económico⁷⁰⁶, complementado con los Programas Nacionales para la Adopción del Acervo (PNAA).

⁷⁰² Dictamen del Comité Económico y Social sobre “El empleo y la situación social en los países de Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión”. DOCE de 10.7.2001 (C 193/87).

⁷⁰³ Vigente hasta el 01 de Julio de 2013.

⁷⁰⁴ Comunicación de la Comisión al Consejo con vistas a la reunión del Consejo Europeo de Copenhague los días 21 y 22 de junio de 1993 - UNA COOPERACION MAS ESTRECHA CON LOS PAÍSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL; Documento de la Comisión Europea (07.07.1993) “Como Consecuencia del Consejo Europeo de Copenhague: medidas de acceso al mercado en favor de los Países de la Europa Central y Oriental (doc. n°

⁷⁰⁵ La UE ha llevado a cabo, además, el Programa TACIS (1991-2006), cuya finalidad era apoyar la transición hacia una economía de mercado y reforzar la democracia en el ámbito de la Comunidad de Estados Independientes (CEI: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación Rusa, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán) y en Mongolia. Por otro lado, el Reglamento (CE) n° 1488/96 del Consejo, de 23 de julio, ha instituido el programa MEDA (I), reformado en el año 2000 (MEDA II), cuyo objetivo era atenuar las repercusiones sociales y medioambientales del desarrollo económico mediante la cooperación a terceros países en la reforma de sus estructuras económicas y sociales en el marco de la colaboración euromediterránea. Países beneficiarios de la ayuda financiera y técnica: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Territorios Palestinos, Túnez y Turquía.

⁷⁰⁶ Aunque inicialmente enfocada a la asistencia técnica (y en la eventual ayuda humanitaria), gradualmente las necesidades de inversión en sectores como infraestructuras o protección del medio ambiente se han incrementado.

La violación de la cláusula de condicionalidad negativa (compromisos relacionados con la protección de los DD.HH, la democracia y el estado de derecho, considerados esenciales desde 1992 y plasmados en una fórmula estandarizada desde 1995) autorizaba la suspensión de los acuerdos comerciales suscritos por la CE con los PED. Con la modificación introducida por el Tratado de Lisboa (art. 1, apartado 3), los valores plasmados en el art. 2 del TUE (1992), desde 1º diciembre 2009, a saber, respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho, respeto de los DD.HH (incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías), se consolidarían más fuertemente. A propósito, el Consejo, por mayoría cualificada, puede suspender determinados derechos al estado que viole grave y persistentemente esos valores, incluidos los derechos de voto del representante del gobierno en el Consejo (art. 7 del TUE redactado por el apartado 9 del artículo 1 del Tratado de Lisboa).

En diferentes niveles esos valores están presentes. En su labor, la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo cuentan con la ayuda de la Agencia de los Derechos Fundamentales, cuyos datos son utilizados en la aplicación de la política de derechos fundamentales y para la elaboración, desde el año 2010, del informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales. La política de DD.HH. de la UE, en nivel intrazona y en nivel de política exterior, abarca los DCPESC. En los AC y en los esquemas SPG suscritos con terceros países, todos esos derechos están consustanciados en las cláusulas sociales, que funcionan como condicionantes de acceso al mercado o a la obtención de rebajas arancelarias. Paralelamente, el Reglamento (CE) nº 1889/2006⁷⁰⁷ del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, mediante la constitución de un instrumento de financiación, pasó a promocionar en terceros países esos valores básicos (DD.HH, democracia, estado de derecho), apoyando la sociedad civil en lo que concierne a la defensa de la democracia y el combate a la tortura y al racismo.

⁷⁰⁷ A raíz de la expiración de los Reglamentos nº 975/1999 (PED) y 976/1999 (otros terceros países) del Consejo.

El fomento y la protección de los DD.HH, de la democracia pluralista y la consolidación del estado de derecho integran todas las modalidades de cooperación con terceros países, incluida la cooperación al desarrollo (artículo 181 A, del tratado constitutivo de la Comunidad Europea) y los distintos esquemas comerciales (acuerdos recíprocos y SPG, mediante la cláusula social). La actuación de la UE en pro de los DD.HH y la democracia se manifiesta de distintas maneras, por ejemplo:

- Con el Parlamento Europeo: apoyo a las instituciones parlamentarias democráticas en terceros países, colaboración con organizaciones no gubernamentales, cooperación (en conjunto con la Comisión) en misiones asistenciales y de observación electoral.
- Con la Comisión Europea: coordina las políticas y los programas en materia de DD.HH (delegaciones en relación a los estados miembros, en los ámbitos de la justicia, los asuntos de interior, la política social y el medio ambiente) y, en conjunto con el Parlamento y los interlocutores sociales, en relación a temas comerciales y de inversión en terceros países, a fin de lograr un desarrollo socioeconómico equitativo y sostenible.

Los valores y principios generales, basados en la CDFUE (incluidos en los programas de ayuda y en el diálogo interinstitucional), brindan coherencia en la actuación interior y exterior de la UE. Sin embargo, aunque los países no incorporen y apliquen los instrumentos internacionales de referencia en relación a los DD.HH, podrán beneficiarse de la ayuda humanitaria proporcionada por la UE. En otras palabras, la reducción del sufrimiento humano y el atendimento de las necesidades de

las víctimas no están condicionadas a la postura del gobierno local relativamente a la protección y fomento de los DD.HH⁷⁰⁸.

Asociada a esta temática, la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de diciembre de 2008, sobre el Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas también es una forma de actuar en el campo de los DD.HH, puesto que los estados miembros se comprometen a negar la licencia de exportación a las empresas productoras de armamento cuando existe el riesgo de que sea empleado en la represión de la población.

Como se puede notar, el fin último de esas medidas es el desarrollo económico y social tanto de la intrazona como de terceros países. En el ámbito de la UE, la denominada “economía del conocimiento” (impulsada con la Agenda de Lisboa del año 2000), está vinculada al combate a la exclusión social, la mejora del empleo y la cohesión social, elementos fuertemente vinculados a los DD.HH. En el marco del procedimiento de revisión ordinaria de los tratados (art. 48 del TUE) se han llevado a cabo distintas conferencias intergubernamentales (CIGs)⁷⁰⁹ con el objetivo de profundizar el proceso de integración.

La concepción de desarrollo sostenible (análisis coordinado de las dimensiones económicas, sociales y medioambientales de las políticas institucionales) ha ganado peso a partir del impulso generado por el Consejo Europeo de Gotemburgo (2001) y ha sido reforzada con la Declaración del Consejo Europeo de Laeken (2001), en que se exaltaba la importancia y el compromiso con la democracia, la transparencia y la

⁷⁰⁸ Decisión nº 258/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por la que se modifican las Decisiones nº 573/2007/CE y nº 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión nº 435/2007/CE del Consejo a fin de incrementar el porcentaje de cofinanciación del Fondo para los Refugiados, del Fondo Europeo para el Retorno y del Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países, en lo que respecta a determinadas disposiciones de gestión financiera aplicables a ciertos Estados miembros que sufren o corren el riesgo de sufrir graves dificultades en lo relativo a su estabilidad financiera.

⁷⁰⁹ Han resultado de conferencias intergubernamentales: a) el Acta Única Europea (1986), b) el Tratado de Maastricht (1992), c) el Tratado de Ámsterdam (1997), d) el Tratado de Niza (2001), e) el Tratado de Lisboa (2007).

eficacia. Con el fracaso del proyecto de Constitución (2004)⁷¹⁰, concebido para dar continuidad al proceso de reformas emprendidas con el Tratado de Niza, el Consejo Europeo (2005), abre un “período de reflexión” sobre el futuro de Europa, retomado en 2007, mediante un mandato para convocar una CIG que se incumbiría de la adopción de un tratado de reforma sustitutivo de la Constitución para la UE. El documento resultante, conocido como Tratado de Lisboa (2007), entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Hay que comprender que la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos era reconocida por los estados miembros pero no por la propia UE, cuya falta de personalidad jurídica ha motivado el rechazo de su solicitud de adhesión en 1996. Por su vez, el Parlamento Europeo (mediante la Comisión de Derechos Fundamentales y Asuntos Internos y la Comisión de Peticiones) protege los DD.HH en el ámbito de la UE. Con la designación de un Defensor del Pueblo⁷¹¹ en 1994 (Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo), la protección se ha extendido a los casos de mala administración institucional, con exclusión del Tribunal de Justicia.

Por su vez, la Comisión Europea (mediante la Dirección General de Relaciones Exteriores, desde 1999) y el Consejo Europeo (responsable principal en la búsqueda de consensos) elaboran las directrices políticas pertinentes a los DD.HH, además de controlar su aplicación. En el ámbito de la Comisión, la División de Derechos Humanos y Democratización registra la situación de los DD.HH en diversos países al paso que la Dirección General para el Desarrollo (Sección Especial para Derechos Humanos) está enfocada a temas de protección de los DD.HH en los países ACP.

⁷¹⁰ Rechazado por Francia y Países Bajos.

⁷¹¹ La decisión del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2013, asigna la Sra. Emily O'Reilly para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo Europeo a partir del 1 de octubre de 2013 hasta el término de la legislatura, conforme el resultado de la votación celebrada el día 3 de julio de 2013 (publicado el 16.7.2013 en el DOUE).

La CDFUE⁷¹² (adoptada en el año 2000)⁷¹³, ha consagrado en un único documento distintas categorías de DD.HH. Este documento orienta tanto la actuación interior como exterior de la UE en materia de DD.HH, vinculando, desde la ratificación del Tratado de Lisboa en el año 2009, a los órganos institucionales y a los estados miembros (sólo cuando aplican la legislación de la UE). Están excluidos de la aplicación de la Carta, Polonia y Reino Unido (Protocolo nº 30) y República Checa (Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de mayo de 2013), en virtud de la aplicación de una cláusula de exclusión voluntaria de la aplicación de la Carta.

En el ámbito puramente doméstico, los tribunales nacionales aplican la Carta en virtud de los principios de primacía y aplicabilidad directa, al paso que en el nivel institucional de la UE, con diferentes competencias, la protección de los DD.HH podría involucrar a la Comisión Europea, al Defensor del Pueblo Europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al TEDH, con la futura adhesión de la UE al CEDH (lo que permitiría interpretar las normativas europeas en consonancia con el Convenio). La base jurídica para esa adhesión (artículo 59.2 del CEDH, modificado por el Protocolo nº 14 del CEDH) entró en vigor en el año 2010. La CDFUE ha sido criticada por duplicar una normatividad ya existente, por no ampliar la competencia institucional y por tender a la reducción de estándares más elevados establecidos en la Convención Europea o fijadas nacionalmente (caso de los países escandinavos).

También debe ser mencionada la actuación del TEDH, órgano del Consejo de Europa, que atiende denuncias individuales de violaciones de los derechos reconocidos en la CEDH por los países miembros (el cumplimiento de las sentencias es vigilado por su Comité de Ministros), al paso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo) tiene competencia sobre los estados-miembros, las instituciones de la UE y las personas en el ámbito geográfico de la Unión.

⁷¹² Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 22 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel de Mons — Bélgica) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge.

⁷¹³ Los derechos humanos están contemplados en los títulos I (dignidad), II (libertades), III (igualdad), IV (solidaridad), V (ciudadanía) y VI (justicia).

La protección de los DD.HH incluida en los AC como elemento condicionante de acceso al mercado único (cláusula social), se añade a las habituales medidas adoptadas en el ámbito de la política exterior de la UE en materia de DD.HH: denuncias de violación, diálogo político, retrasos o suspensión de implementación o de ejecución de tratados (o de sus obligaciones convencionales), imposición de sanciones económicas etc. El respeto por la protección de los DD.HH también ha encontrado expresión, recientemente, en el Reglamento nº 606/2013, de 12 de junio, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil y en el Reglamento nº 610/2013, de 26 de junio de 2013 (modificación de ciertas disposiciones relativas al espacio Schengen), ambos del Parlamento Europeo y del Consejo.

En el marco del Consejo de la Unión Europea, en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior (JAI), se verifica tanto la cooperación judicial (en materia penal) como la cooperación policial, ambas enfocadas en la seguridad y la represión al crimen, antítesis del derecho.

La decisión de 22 de julio de 2013 (referente a la decisión 2008/633/JAI)⁷¹⁴ busca, mediante la consulta del Sistema de Información de Visados, prevenir delitos de terrorismo y otros delitos graves. Por su parte, la cooperación en el espacio Schengen está plasmada en la libertad de circulación de las personas, la supresión de los controles internos y la cooperación en las fronteras exteriores⁷¹⁵. El Tratado de Ámsterdam (mayo de 1999) ha extendido de modo más firme el control en temas de asilo, inmigración, prevención y lucha contra la delincuencia y cooperación judicial en materia civil (por mayoría cualificada, en codecisión con el Parlamento Europeo)⁷¹⁶. Dinamarca, Reino Unido e Irlanda no participan plenamente de la aplicación de algunas medidas en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior (libre circulación de personas,

⁷¹⁴ Decisión de 22 de julio de 2013 (referente a la decisión 2008/633/JAI), DOUE, núm. 198, de 23 de julio de 2013, páginas 45 a 46. DOUE-L-2013-81484.

⁷¹⁵ Noción que está siendo reformulada a raíz de la crisis de los refugiados.

⁷¹⁶ Sin embargo, las decisiones relativas al derecho de familia son adoptadas unánimemente por el Consejo, previa consulta con el Parlamento Europeo.

controles en las fronteras exteriores y política de visados) en el marco del Acuerdo de Schengen.

Relativamente al tema que más nos interesa, Asuntos Exteriores (política exterior y de seguridad común, comercio exterior y cooperación para el desarrollo), los DD.HH también están presentes. A propósito, el Consejo de la Unión Europea tiene como uno de sus objetivos dotar de coherencia la actuación del bloque europeo en materia de DD.HH. La protección, consolidación y desarrollo de los DD.HH y las libertades fundamentales, la democracia, el estado de derecho, la preservación de la paz, la seguridad y la independencia y el fomento de la cooperación internacional son elementos esenciales en la PESC, basados en la Carta de las Naciones Unidas.

La política de comercio exterior de la UE busca, por un lado, reforzar la multilateralidad propia de la OMC y, por otro, basar, en nivel bilateral, tanto las negociaciones como los acuerdos en los valores anteriormente mencionados: democracia, estado de derecho, protección a los DD.HH. Con un mandato del Consejo y previa consulta a su Comité de Política Comercial, la Comisión Europea negocia AC en nombre de la UE, además de representar a sus estados miembros en el órgano de solución de diferencias. Será concretamente en el ámbito del comercio con terceros países, especialmente en lo que concierne al SPG, que la UE ofrece interesantes elementos asociados a los DD.HH, la democracia y la buena gobernanza.

La cooperación al desarrollo, en sus distintas modalidades, son objeto de codecisiones del Consejo y del Parlamento Europeo cuya adopción, en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión (art. 208 del TFUE)⁷¹⁷, busca complementar y reforzar la actuación de los estados miembros en los ámbitos económico y social de modo sostenible (consolidación de la democracia y del estado de derecho, integración gradual en la economía mundial, erradicación de la pobreza,

⁷¹⁷ Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Vigente hasta el 1 de enero de 2013.

respeto de los DD.HH y las libertades fundamentales)⁷¹⁸. La CDFUE busca reforzar estos elementos y dotar de coherencia la actuación institucional. Tanto los países que desean ingresar en la UE⁷¹⁹ (actualmente con 28 países) como los que desean celebrar AC con la UE, deben respetar esos principios básicos^{720/721}.

Las directrices de la UE relativas a los diálogos sobre DD.HH con países no europeos sirven de base a la decisión del Consejo de la UE para iniciar diálogos de esa naturaleza. Existen también otras directrices relevantes sobre: a) defensores de los DD.HH en terceros países; b) violencia y discriminación contra las mujeres; c) abolición universal de la pena de muerte; d) niños en conflictos armados; e) tortura, malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; f) derechos del menor; g) observancia del derecho internacional humanitario.

En el ámbito del SPG, por ejemplo, los principales instrumentos sobre democracia y DD.HH ofrecen la adecuada correspondencia a esas directrices, ampliando su fomento y consolidación en escala global. Aunque existan iniciativas específicas para fomentar la democracia, el diálogo político, la cooperación financiera y los DD.HH con Argelia,

⁷¹⁸ Así, el respeto por los DD.HH. (DCPESC), el estado de derecho y la democracia están presentes en el ámbito intrazona y deben estar presentes en la actuación externa de la UE.

⁷¹⁹ Países candidatos: a) Albania, b) Antigua República Yugoslava de Macedonia, c) Montenegro, d) Serbia y e) Turquía. Candidatos potenciales: a) Bosnia y Herzegovina y b) Kosovo.

⁷²⁰ Existen iniciativas y programas relevantes centrados en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia y en la protección de los colectivos vulnerables (niños, mujeres y minorías). Los estados miembros y organismos institucionales son asistidos por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales.

⁷²¹ En los acuerdos comerciales con terceros países, la inclusión de una cláusula de protección de los DD.HH.L (cláusula social) como elemento fundamental al acuerdo, tiene su fundamento legal en el TUE (artículos 2, 3, 6 y 21) y en el TFUE (artículos 208 a 211 y 218). Los derechos fundamentales en la UE están especialmente plasmados en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea y en la CDFUE. En sus relaciones externas bilaterales y multilaterales, la UE procura promover y consolidar el respeto de la democracia, del estado de derecho y de los DD.HH, fundamentándose especialmente en la CDFUE. Como se percibe, los valores consagrados internamente son también fomentados en la política exterior de la UE mediante la conclusión de acuerdos comerciales, de cooperación y la adopción de diferentes instrumentos financieros. En esta línea, se podría mencionar, por ejemplo, el instrumento de financiación para la promoción de la democracia y los derechos humanos en el mundo (Reglamento nº 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre).

Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez y la Autoridad Palestina, de forma alguna se debe comprender que existe un menor interés de la UE en relación a países no integrantes del entorno mediterráneo. Tanto eso es verdad que el fomento de los DD.HH, la democracia pluralista y el estado de derecho en terceros países engloba indistintamente tanto los países candidatos a la adhesión (tratado de la UE, art. 49) como aquellos involucrados en esquemas de cooperación (tratado constitutivo de la Comunidad Europea, art. 181A). En fin, la CDFUE consolida diversos derechos relevantes tanto en nivel interior como exterior del bloque y le imprime coherencia⁷²².

En el próximo apartado se analizará el tema de la protección social en AL con el propósito de apreciar si la presencia de la cláusula social en los AC (UE-AL) es justificable jurídicamente.

5.2 LA PROTECCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

Una vez analizada la protección legal de los DD.HH en el seno de la UE, conviene compararla con la existente en AL. La historia latinoamericana ha estado plagada de gobiernos autoritarios y de violaciones de los DD.HH⁷²³. Esto no significa que, bajo la perspectiva formalista del derecho, la situación actual sea de desprotección legal. En la realidad, existe desde hace varios años un conjunto creciente de normas jurídicas protectoras de los DD.HH en esa parte del planeta.

Históricamente la influencia española ha sido determinante para la formación de una concepción más o menos uniforme sobre los DD.HH en AL. Las ideas de libertad e igualdad fraguadas en la península ibérica han sido reiteradas y universalizadas en esa región como resultado de la teología católica del siglo XVI.

⁷²² En la misma línea se podría hablar en la estrategia global de asistencia y observación electoral relativamente a países no pertenecientes a la UE (elecciones libres, imparciales, secretas, genuinas y periódicas).

⁷²³ Actualmente se verifica la inoperancia de las organizaciones regionales ante la deriva autoritaria de Venezuela y hasta mismo una confirmación de la “doctrina Estrada” formulada en los años treinta del siglo pasado.

Esa afirmación teórica de la igualdad esencial de todos los hombres, así como de su libertad, se divorciaba de una realidad marcada por el absolutismo monárquico en España, que se ha plasmado, en la práctica, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en una realidad de poder ajena al reconocimiento de los derechos fundamentales.

Alexander y Parker (2009)⁷²⁴ subrayan que el divorcio entre el derecho y la realidad, entre el ser y el deber ser, se ha proyectado en AL de forma rotunda, de modo que, al mismo tiempo en que los latinoamericanos asisten a la afirmación de principios nobles y la aprobación de normas jurídicas inspiradas en ellos, observan una realidad social muchas veces distinta de las pautas declaradas por el derecho formalmente vigente. Todo eso ha generado una fuerte incredulidad en el derecho como instrumento eficaz de cambio social.

En la segunda y tercera décadas del siglo XIX, el surgimiento de nuevos estados independientes ha tomado por base la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, de 4 de julio de 1776, aunque, en AL, estuviesen aun condicionados tanto por la tradición católica como por el pensamiento jurídico español. El sustrato liberal e individualista, influencia del pensamiento francés y de la reducción de la influencia española, ha lanzado nuevos cimientos al desarrollo de la concepción humanista en AL.

Para Wright-Carozza (2003)⁷²⁵, el ideario humanista estaba limitado a las élites, puesto que la gran masa arrastraba condiciones precarias, de exploración y de miseria. La implementación práctica de los DD.HH enfrentaba obstáculos enormes. En este sentido, la resistencia de sistemas políticos autocráticos y de estructuras económicas y sociales reaccionarias condujeron el proceso de realización de los DCP a la convicción de que no podían dejar de integrarse fuertemente con los DESC. Más que eso, sin la

⁷²⁴ Alexander, R. J, & Parker, E. M. (2009). *International Labor Organizations and Organized Labor in Latin America and the Caribbean: A History*. Connecticut: Praeger Frederick.

⁷²⁵ Wright-Carozza, P. (2003). From conquest to constitutions: retrieving a Latin American tradition of the idea of human rights. *Human Rights Quarterly*, 25(2), 281-313.

acción positiva del estado para asegurar esos últimos derechos, la igualdad y la libertad jurídica perdían su significado práctico.

La consagración de los DESC por la Constitución Mexicana de 1917 parece haber sido un marco relevante en la diseminación de esos derechos en las demás Constituciones en Latinoamérica. La concepción integral de los derechos del hombre en AL ha sido formalmente plasmada en las legislaciones internas, en nivel constitucional e infraconstitucional.

Sin embargo, en función del hiato entre lo que era proclamado y lo que presentaba la realidad, se afianzó la idea de que esos derechos eran esencialmente programáticos. Los DD.HH se han vinculado al régimen republicano y a la democracia, aunque la realidad se ha caracterizado por golpes de estado y dictaduras.

La supuesta existencia de una democracia solidaria en AL se ha desarrollado con base en los textos internacionales que componen el SIDH, teniendo como antecedentes más remotos las Conferencias de Buenos Aires (1936), Lima (1938), Chapultepec (1945) y Bogotá (1948).

La comprensión de los DD.HH en AL no difiere en esencia de lo que se verifica en tantos otros países. Rafael Águila (1998)⁷²⁶, por ejemplo, señala la existencia de un proceso de creación de dependencias e interdependencias en el mundo caracterizado por una fuerte jerarquía que se verifica internamente en términos de riqueza y poder efectivo. Este proceso se amplía y homogeniza con el ideal liberal-democrático en la esfera internacional, mediante la elaboración de normas internacionales (tratados), la actuación jurídico-política de instituciones y organizaciones internacionales, la formulación de políticas y la adopción de decisiones en distintos foros internacionales.

⁷²⁶ Águila, R. D. (1998). *Ciudadanía Global. Riesgos, límites y problemas*, separata del libro *La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Cincuenta Aniversario*. Barcelona: Editorial Bosch.

Si la UE pretende fomentar la ratificación de normas internacionales de protección de los DD.HH, podría considerar también el esfuerzo histórico realizado por la OEA, en este momento lamentablemente impotente en la promoción firme de los valores democráticos⁷²⁷.

La OEA mucho se ha inspirado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De hecho, tanto la entidad como la declaración surgieron a partir del marco ofrecido por la IX Conferencia Internacional Americana de marzo de 1948 (Conferencia de Bogotá), además de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. La OEA ha buscado compatibilizar las peculiaridades regionales con un profundo sentido de universalidad de los DD.HH, según Salvioli (2003)⁷²⁸. De igual modo, la cláusula social también busca la universalidad de los DD.HH, aunque con base en instrumentos jurídicos de vocación internacional, no regional. El hecho es que, tal como ha ocurrido en Europa, la proclamación de los DD.HH en América, mediante la DADDH, también ha sido fruto de un proceso histórico correlato a la evolución política y jurídica del continente, en la opinión de Gros Espiell (1988)⁷²⁹.

La universalidad de los DD.HH (idea proyectada por la UE en su política exterior común) está, como mínimo, formalmente presente desde los años cuarenta del siglo pasado en el seno de los estados americanos, que reconocen explícitamente que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, idea especialmente reforzada con la adopción de la Resolución XXX de la IX Conferencia Americana. Esta afirmación antecede aquella realizada en el Preámbulo del PIDCP, del PIDESC, del Preámbulo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas

⁷²⁷ La elección del excanciller uruguayo Luis Almagro como nuevo secretario general de la OEA no deja de ser un factor de dudas, por su presunta simpatía hacia el “chavismo”.

⁷²⁸ Salvioli, F. (2003). *El aporte de la Declaración Americana de 1948 para la protección internacional de los derechos humanos. Memoria del seminario sobre El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI*. CIDH, San José de Costa Rica.

⁷²⁹ Gros, Espiell, H. (1988). *La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Raíces conceptuales en la historia y el derecho americano*. Estudios sobre Derechos Humanos II. Madrid: Civitas.

las Formas de Discriminación Racial, del Preámbulo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes y del Preámbulo de la CADH, como observa Ayala Corao (1998)⁷³⁰. El hecho es que la DADDH reconoce varios DD.HH:

- Derecho a constituir una familia y a recibir protección (artículo VI);
- Derecho de protección a las mujeres en estado de gravidez o en época de lactancia (artículo VII);
- Derecho a todo niño o niña a gozar de protección, cuidados y ayuda especiales (artículo VII);
- Derecho a la salud y a la asistencia médica (artículo XI);
- Derecho a la alimentación, el vestido y la vivienda (artículo XI);
- Derecho a la educación en condición de igualdad de oportunidades (artículo XII);
- Derecho a recibir gratuitamente la educación primaria (artículo XII);
- Derecho de participar en la vida cultural de la comunidad (artículo XIII);
- Derecho a gozar de las artes y a disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y de los descubrimientos científicos (artículo XIII);
- Derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor (artículo XIII);
- Derecho al trabajo (artículo XIV);
- Derecho al descanso y a la recreación (artículo XV);
- Derecho a la seguridad social en casos de desocupación, vejez e incapacidad física o mental (artículo XVI);
- Derecho a la propiedad privada (artículo XXIII).

Su rol es bastante amplio. Aunque la DADDH no tuviese poder vinculante (la DUDH, adoptado por la AGNU en 1948 tampoco lo tenía), ha servido de inspiración

⁷³⁰ Ayala Corao, C. (1998). *La jerarquía de los tratados de derechos humanos. El futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica.

para la creación, en 1959, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (resultante de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile).

Como se percibe, la preocupación por la protección de los DD.HH antecede en muchos años la cláusula social incorporada en los AC concluidos por la UE con los países latinoamericanos. El proceso histórico de consolidación de los DD.HH sigue en el año siguiente. En 1960, el Consejo de la OEA aprueba el estatuto de la Comisión y, durante la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria (Rio de Janeiro, 1965) se procede a reformas de ámbito competencial que asume una forma convencional en 1967, con la aprobación del Protocolo de Buenos Aires de Reforma de la Carta de la OEA, convirtiéndose la Comisión en órgano de la entidad.

En 1970, con la reforma de la Carta, asume la Comisión el mandato de promover y proteger los DESC (como órgano principal de la OEA y como órgano de supervisión de la CADH, del Protocolo de San Salvador y de la DADDH), así como de recibir y examinar comunicaciones o denuncias individuales por violación a los DCPESC reconocidos por la DADDH (Lutz & Sikkink, 2000)⁷³¹. Después de la relativa pasividad de la AGOEA en las reuniones de Washington D.C. y Atlanta, en 1976, durante la Conferencia de Santiago de Chile, la Asamblea pasa a apoyar de modo más claro la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El mandato de la Comisión abarca los 34 estados miembros de la Organización, aunque no tengan ratificado los tratados de DD.HH del sistema interamericano, puesto que la asunción y cumplimiento de las obligaciones deriva de la condición de miembros de la OEA (Estatuto y Carta), con base en la DADDH, lo que extiende su reconocimiento también a los DCP.

⁷³¹ Lutz, E. L. & Sikkink, K. (2000). International human rights law and practice in Latin America. *International Organization*, 54(03), 633-659.

Las Relatorías temáticas y Relatorías de países, dentro de la Comisión, conocen casos relacionados con la protección de los DESC. Para que se tenga una idea aproximada de la extensión de su labor, a parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión⁷³², se podría destacar la existencia de las siguientes Relatorías: a) Derechos de la Niñez, b) Derechos de la Mujer, c) Afro-Descendientes, d) Discriminación Racial, e) Derechos de los Pueblos Indígenas⁷³³. Estas dos últimas, según Abramovic (2009)⁷³⁴, ampliaron considerablemente la utilización del SIDH por parte de los líderes de los pueblos indígenas y de comunidades afroamericanas. Las Relatorías también conocen de denuncias individuales por violación de derechos reconocidos en la DADDH contra estados que no son partes de la CADH.

El espectro de la protección de los DD.HH, que infirmaría, bajo la perspectiva legal, la necesidad de persistencia de la cláusula social en los AC, sigue aún mucho más. A parte de las Relatorías, las Defensorías del Pueblo, Procuradurías de DD.HH y oficinas del *Ombudsman* también están legitimadas para presentar denuncias individuales contra los estados aunque para eso, evidentemente, sea necesario agotar previamente los recursos ofrecidos por la jurisdicción interna, salvo en el caso de adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas. A propósito, se recomienda la lectura del interesante trabajo de Oyarzún (2006)⁷³⁵ sobre la función del *Ombudsman* en AL (en lo que concierne a la protección de los DD.HH de los pueblos indígenas, su proclamación en distintas constituciones y las distintas actuaciones gubernamentales).

⁷³² Algo especialmente difícil para los periodistas de la región.

⁷³³ El problema, naturalmente, aun no ha sido resuelto. Las comunidades indígenas, los campesinos y los afrodescendientes componen los grupos más numerosos de desplazados internos en Colombia. Su presencia en territorios de importancia estratégica, económica o militar es la principal razón de su constante hostigamiento por parte de paramilitares, guerrilla y fuerzas de seguridad.

⁷³⁴ Abramovic, V. (2009). De las violaciones masivas a los patrones estructurales: nuevos enfoques y clásicas tensiones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. *Derecho PUCP*, (63), 96-138.

⁷³⁵ Oyarzún, J. A. (2006). *Ombudsman y derechos indígenas en América Latina: estudio comparativo sobre el marco normativo e institucional*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Aun en el final de los años sesenta (concretamente el 22 de noviembre de 1969) se suscribe la CADH en San José de Costa Rica (en vigor desde el 18 de julio de 1978), con el depósito del undécimo instrumento de ratificación por Panamá en la Secretaría General de la OEA. Esta convención reconoce ampliamente los DCP e incorpora algunos derechos económicos y sociales como, por ejemplo: a) el derecho del hombre y la mujer a fundar una familia y a gozar de protección por parte del estado (art. 17); b) el derecho de protección especial a la niñez (art. 19) o c) el derecho a la propiedad privada (art. 21). También reconoce (art. 26) el desarrollo progresivo de los DESC y la responsabilidad de los estados en adoptar diligencias para su consecución, tanto en nivel interno como mediante la cooperación internacional (especialmente de naturaleza económica y técnica).

Lamentablemente, el más poderoso país americano, EE.UU, ha firmado pero no ha ratificado la Convención, al paso que otros países, como Brasil, Chile, Trinidad y Tobago o Paraguay, han tardado varios años hasta realizar el depósito de sus respectivos instrumentos de adhesión. México ha presentado declaraciones interpretativas/reservas al paso que Trinidad y Tobago (en 1998) y Venezuela (en 2012) la han denunciado. Su cuadro de adhesión⁷³⁶ actual está así configurado⁷³⁷:

- Antigua y Barbuda: no ha firmado ni ratificado.
- Argentina: firma (02/02/84) y ratificación (14/08/84). A fecha de 10 de marzo de 2016, existen 20 casos contenciosos⁷³⁸ apreciados por la CIDH⁷³⁹.

⁷³⁶ La resolución de AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) 2009 declara que la participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA.

⁷³⁷ Organización de los Estados Americanos. Departamento de Derecho Internacional. Estado de Firmas y Ratificaciones a 1º de octubre de 2014. Recuperado de http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm

⁷³⁸ El más reciente del año 2015: Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2015. Serie C No. 294.

⁷³⁹ CIDH. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/index.php/mapa-interactivo>

- Bahamas: no ha firmado ni ratificado.
- Barbados: firma (20/06/78) y ratificación (05/11/81). Existen 02 casos contenciosos⁷⁴⁰.
- Belice: no ha firmado ni ratificado.
- Bolivia: ratificación (20/06/79). Existen 06 casos contenciosos⁷⁴¹.
- Brasil: ratificación (09/07/92). Existen 07 casos contenciosos⁷⁴².
- Canadá: no ha firmado ni ratificado.
- Chile: firma (22/11/69) y ratificación (10/08/90). Existen 09 casos contenciosos⁷⁴³.
- Colombia: firma (22/11/69) y ratificación (28/05/73). Existen 26 casos contenciosos⁷⁴⁴.
- Costa Rica: firma (22/11/69) y ratificación (02/03/70). Existen 02 casos contenciosos⁷⁴⁵.
- Dominica: ratificación (03/06/93). No hay casos contenciosos.
- Ecuador: firma (22/11/69) y ratificación (08/12/77). Existen 24 casos contenciosos⁷⁴⁶.

⁷⁴⁰ Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C No. 204 y Corte IDH. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169.

⁷⁴¹ El más reciente del año 2013: Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272.

⁷⁴² El más reciente del año 2010: Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219.

⁷⁴³ El más reciente del año 2015: Corte IDH. Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de septiembre de 2015. Serie C No. 300.

⁷⁴⁴ El más reciente del año 2014: Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287.

⁷⁴⁵ El más reciente del año 2012: Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257.

⁷⁴⁶ El más reciente del año 2015: Corte IDH. Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306.

- El Salvador: firma (22/11/69) y ratificación (20/06/78). Existen 10 casos contenciosos⁷⁴⁷.
- Estados Unidos: firma (01/06/77). No hubo ratificación.
- Grenada: firma (14/07/78) y ratificación (14/07/78). No hay casos contenciosos.
- Guatemala: firma (22/11/69) y ratificación (27/04/78). Existen 32 casos contenciosos⁷⁴⁸.
- Guyana: no ha firmado ni ratificado.
- Haití: ratificación (14/09/77). Existen 02 casos contenciosos⁷⁴⁹.
- Honduras: firma (22/11/69) y ratificación (05/09/77). Existen 20 casos contenciosos⁷⁵⁰.
- Jamaica: firma (16/09/77) y ratificación (19/07/78). No existen casos registrados.
- México: ratificación (02/03/81). Existen 10 casos contenciosos⁷⁵¹.
- Nicaragua: firma (22/11/69) y ratificación (25/09/79). Existen 06 casos contenciosos⁷⁵².
- Panamá: firma (22/11/69) y ratificación (08/05/78). Existen 07 casos contenciosos⁷⁵³.

⁷⁴⁷ El más reciente del año 2015: Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303.

⁷⁴⁸ El más reciente del año 2015: Corte IDH. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307.

⁷⁴⁹ El más reciente del año 2011. Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236.

⁷⁵⁰ El más reciente del año 2015. Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015. Serie C No. 305.

⁷⁵¹ El más reciente del año 2013: Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 273.

⁷⁵² El más reciente del año 2005: Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.

⁷⁵³ El más reciente del año 2014. Corte IDH. Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 284.

- Paraguay: firma (22/11/69) y ratificación (18/08/89). Existen 08 casos contenciosos⁷⁵⁴.
- Perú: firma (27/07/77) y ratificación (12/07/78). Existen 73 casos contenciosos⁷⁵⁵.
- República Dominicana: firma (07/09/77) y ratificación (21/01/78). Existen 05 casos contenciosos⁷⁵⁶. El 04 de noviembre de 2014 el Tribunal Constitucional del país declaró, mediante sentencia, la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de competencia de la CIDH⁷⁵⁷.
- San Kitts y Nevis: no ha firmado ni ratificado.
- Santa Lucía: no ha firmado ni ratificado.
- San Vicente y Granadinas: no ha firmado ni ratificado.
- Suriname: ratificación (12/11/87). Existen 10 casos contenciosos⁷⁵⁸.
- Trinidad y Tobago: ratificación en 03/04/91. Existen 05 casos contenciosos⁷⁵⁹. Denuncia el 26 de mayo 1998 (en vigor desde el 26 de mayo de 1999).
- Uruguay: firma (22/11/69) y ratificación (26/03/85). Existen 03 casos contenciosos⁷⁶⁰.

⁷⁵⁴ El más reciente del año 2010: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214.

⁷⁵⁵ El más reciente del año 2015: Corte IDH. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C NO. 308.

⁷⁵⁶ El más reciente del año 2014: Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282.

⁷⁵⁷ La República Dominicana se ha desligado de la Corte Interamericana en 2014, bajo el argumento de que su adhesión se ha procedido de modo inconstitucional. Esto ha ocurrido dos semanas después de que la Corte emitiera su fallo de que el país discriminara a ciudadanos haitianos entre los años 1999 y 2000 y privara a más de 200.000 haitianos del derecho a la nacionalidad mediante una resolución constitucional del año 2013.

⁷⁵⁸ El más reciente del año 2015: Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309.

⁷⁵⁹ El más reciente del año 2005. Corte IDH. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123.

⁷⁶⁰ El más reciente del año 2012. Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012 Serie C No. 243.

- Venezuela: firma (22/11/69) y ratificación en 23/06/77. Existen 22 casos contenciosos^{761/762}. La República Bolivariana de Venezuela manifestó su decisión de denunciar la CADH el 10 de septiembre de 2012 (efectos a partir de 10 de septiembre de 2013).

El histórico compromiso de los estados miembros de la OEA con la protección de los DD.HH revela que, bajo la perspectiva jurídica, no es imprescindible la presencia de la cláusula social en los acuerdos comerciales concluidos con la UE para que esos estados se involucren con esos derechos. Es verdad que desde la proclamación de la DADDH (Bogotá, 1948) hasta la entrada en vigor de la CADH (Pacto de San José de Costa Rica) en 1978⁷⁶³ (había sido suscrita el 22 de noviembre de 1969) han pasado muchos años. No obstante, ese lapso de tiempo no puede ser esgrimido como un argumento fehaciente para depreciar el compromiso, al menos jurídico, de los países latinoamericanos hacia los DD.HH.

El significativo transcurso del tiempo ha ocurrido básicamente, en el modo de ver de este investigador, porque muchos países del continente, durante ese período histórico, aun padecían una situación política bastante convulsa. Parece que por la misma razón los países han tardado tanto tiempo para firmar, adherir/ratificar el Protocolo Adicional a la CADH en materia de DESC (Protocolo de San Salvador, adoptado el 17 de noviembre de 1988 durante la realización del Décimo Octavo Período Ordinario de Sesiones de la AGOEA y con inicio de vigencia el 16 de noviembre de 1999). EE.UU no lo ha hecho y otros han tardado varios años para depositar el instrumento de

⁷⁶¹ El más reciente del año 2015. Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293.

⁷⁶² La República Bolivariana de Venezuela manifestó su decisión de denunciar la CADH el 10 de septiembre de 2012.

⁷⁶³ Entrada en vigor: 18 de julio de 1978, en conforme al artículo 74.2 de la Convención.

adhesión en la Secretaría de la OEA. El cuadro de ratificaciones en la actualidad es lo que se señala a continuación⁷⁶⁴:

- Argentina: adhesión/ratificación el 30.06.2003.
- Bolivia: adhesión/ratificación el 12.07.2006.
- Brasil: adhesión/ratificación el 08.08.1996.
- Chile: ha firmado el 05.06.2001 pero aun no la ha ratificado.
- Colombia: adhesión/ratificación el 22.10.1997.
- Costa Rica: adhesión/ratificación el 29.09.1999.
- Ecuador: adhesión/ratificación el 10.02.1993.
- El Salvador: adhesión/ratificación el 04.05.1995.
- Guatemala: adhesión/ratificación el 30.05.2000.
- Haití: ha firmado el 17.11.1988 pero aun no la ha ratificado.
- Honduras: adhesión/ratificación el 14.09.2011.
- México: adhesión/ratificación el 08.03.1996.
- Nicaragua: adhesión/ratificación el 15.12.2009.
- Panamá: adhesión/ratificación el 28.10.1992.
- Paraguay: adhesión/ratificación el 28.05.1997.
- Perú: adhesión/ratificación el 17.05.1995.
- República Dominicana: ha firmado el 17.11.1988 pero aun no la ha ratificado.
- Suriname: adhesión/ratificación el 28.02.1990.
- Uruguay: adhesión/ratificación el 21.11.1995.
- Venezuela: ha firmado el 27.01.1989 pero aun no la ha ratificado.

Como se puede observar, los dos únicos países que suscribieran el Protocolo de San Salvador en la fecha de su adopción (17.11.1988) han sido Haití y República Dominicana. Ambos no la han ratificado hasta hoy. El Protocolo está fundamentado sobre el principio de la igualdad y no discriminación y reafirma la interrelación entre los

⁷⁶⁴ Organización de los Estados Americanos. Departamento de Derecho Internacional. Estado de Firmas y Ratificaciones a 10 de marzo de 2016. Recuperado de <http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html>

DCPESC, así como la indivisibilidad de los DD.HH. Atiende, por tanto, a los mismos principios e ideales plasmados por la UE en la cláusula social. Entre los derechos consagrados en este instrumento podemos destacar:

- Derecho al trabajo (art. 6);
- Derechos sindicales (art. 8);
- Derecho de huelga (art. 8);
- Derecho a la Seguridad Social en casos de vejez y de incapacidad física o mental (art. 9);
- Derecho a la salud (art. 10);
- Derecho a un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos (art. 11);
- Derecho a la alimentación y a una nutrición adecuada (art. 12);
- Derecho a la educación (art. 13);
- Derecho a los beneficios de la cultura, a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que se es autor (art. 14);
- Derecho a formar familia y a gozar de protección (art. 15);
- Derecho de protección especial de la niñez (art. 15);
- Derecho a protección especial durante la ancianidad (art. 17);
- Derecho a recibir una atención especial en caso de disminución de las capacidades físicas o mentales (art. 18).

Una observación atenta revela que el protocolo, también aquí, atiende las mismas expectativas consustanciadas en la cláusula social. Según el Protocolo, los estados partes deben adoptar las medidas necesarias, tanto de orden interno (adecuación normativa) como mediante la cooperación internacional (especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles) y tomando en cuenta su grado de

desarrollo, para lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos reconocidos en el instrumento.

Los estados, de acuerdo con este instrumento, deben fortalecer el respeto por los DD.HH, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz, objetivos también compartidos por la UE. El instrumento también proclama (art. 4) la imposibilidad de restringir o menoscabar derechos reconocidos o vigentes en un estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, bajo el argumento de que el Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado. Según el art. 5, los estados partes sólo pueden establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

Por su vez, las denuncias individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base en el Protocolo de San Salvador, abarcan el derecho a la educación y la libertad sindical (tema fundamental en la cláusula social). Siendo la acción imputable directamente a un estado, tanto la Comisión como la CIDH podrán actuar (arts. 44 a 51 y 61 a 69 de la CADH). En términos de compromisos políticos y asunción de obligaciones jurídicas parece existir una superación de los propósitos de la cláusula social.

Una vez más se puede observar que, bajo la perspectiva de la formalidad jurídica, la cláusula social incorporada en los acuerdos comerciales presenta una relevancia inferior aquella que en principio puede parecer. El SIDH parece como mínimo igualar las expectativas jurídicas asociadas a la cláusula social. El sistema interamericano de DD.HH (uno de los tres sistemas regionales de promoción y protección de los DD.HH, al lado del sistema europeo y el sistema africano) está constituido por una serie de instrumentos internacionales adoptados en el marco de la OEA. Este sistema no solamente reconoce los DD.HH, sino que establece efectivamente obligaciones tendientes a su promoción y protección. Además, ha creado órganos destinados a velar

por la observancia de los diversos instrumentos y compromisos asumidos en relación a ellos.

5.2.1 Algunos aspectos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Formalmente el SIDH tiene su inicio en 1948, con la aprobación de la DADDH, al que se añadirían la CADH, diferentes protocolos y convenciones sobre temas especializados⁷⁶⁵ y los reglamentos y estatutos de los órganos creados.

El sistema se encuentra integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ubicada en Washington, D.C.) y la CIDH (ubicada en San José de Costa Rica), que ya tiene apreciados 309 casos contenciosos hasta la fecha de 10 de marzo de 2016. Los estados miembros de la OEA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, EE.UU, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela⁷⁶⁶. Por su vez, la competencia de la Corte ha sido reconocida por: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.

⁷⁶⁵ Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención sobre la Desaparición Forzada y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres etc. ya mencionadas en este mismo capítulo.

⁷⁶⁶ La VII Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá entre los días 10 y 11 de abril de 2015, ha marcado un histórico acercamiento de EE.UU y Cuba. No obstante, la integración cubana en el marco de la OEA solamente sería posible si el actual régimen se convierte en una democracia liberal con plena libertad económica.

La Corte⁷⁶⁷ fue creada por la CADH en 1969, habiendo entrado en vigor la convención en 1978 y en funcionamiento la Corte en 1979. La Corte cumple dos funciones básicas, una de carácter contencioso y otra naturaleza consultiva. Además, también puede adoptar medidas provisionales.

En su función contenciosa, la Corte busca determinar si un estado ha incurrido en responsabilidad internacional por violación de cualquier derecho contemplado en la CADH. El artículo 61.1 de la Convención determina que solamente los estados parte y la Comisión tienen derecho a someter los casos para que la Corte aprecie y decida. La seguridad jurídica, que podría infirmar aún más la necesidad de que persista en los AC concluidos con AL la cláusula social, adviene del hecho de que los fallos de la Corte son definitivos e inapelables. Sobre este tema se han expresado Trindade & Robles (2003, p. 49)⁷⁶⁸, al analizaren la ejecución de las decisiones de la Corte:

“La executio encuéntrase presidida por tres principios indispensables y característicos: a) las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables; b) los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todo caso en que sean partes; y c) el cumplimiento de las decisiones de la Corte está sujeto a la supervisión del propio Tribunal, en sentencias tanto de fondo como de reparaciones”.

Existe también la posibilidad de que, dentro de los noventa días siguientes a la notificación del fallo, y en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del mismo, la Corte emita una interpretación de la sentencia a solicitud de cualquiera de las partes. Dentro de la obligación de la Corte de informar periódicamente a la AGOEA se encuadra la facultad de supervisión del cumplimiento de sus sentencias, tarea que se lleva a cabo a través de la revisión de informes periódicos remitidos por parte del estado

⁷⁶⁷ Existen tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos: la TEDH, la CIDH y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

⁷⁶⁸ Trindade, A. A. C., & Robles, M. E. V. (2003). *El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 29-73.

y objetados por las víctimas y por la Comisión. Durante el año 2007 la Corte inició una nueva práctica de celebración de audiencias de supervisión del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal.

En cuanto a la función consultiva, es el medio por el cual la Corte responde a consultas que formulan los estados miembros de la OEA o los órganos de la misma. Esta competencia consultiva fortalece la capacidad de la organización para resolver los asuntos que surjan por la aplicación de la Convención, ya que permite a los órganos de la OEA realizar consultas a la Corte en lo que sea de su competencia. Hasta el 11 de marzo de 2016, la Corte ha emitido 22 opiniones consultivas, siendo la última del año 2014⁷⁶⁹.

La Corte puede adoptar, cuando se haga necesario, medidas provisionales que considere pertinentes, en casos de extrema gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables a las personas. Eso es válido tanto para los casos que estén sometidos al conocimiento de la Corte como para los asuntos que aún no se han sometido a su conocimiento, a solicitud de la Comisión Interamericana. Hasta la fecha de 11 de marzo de 2016, la Corte ha adoptado 568 medidas provisionales, siendo la última del año 2016⁷⁷⁰. En su ámbito de competencia, la Corte puede también realizar la supervisión de cumplimiento de sus sentencias (406 hasta el 11 de marzo de 2016)⁷⁷¹.

Como se ha comentado, la CIDH no es competente para atender a las peticiones formuladas por individuos u organizaciones. Al contrario, ellas deben presentarse ante la Comisión, que es el órgano encargado de recibir y evaluar las denuncias que le

⁷⁶⁹ Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21. La solicitud de opinión consultiva ha sido presentada por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es

⁷⁷⁰ Corte IDH. Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución del Presidente de la CIDH de 25 de enero de 2016.

⁷⁷¹ Corte IDH. Caso Atavía Murillo y otros ("Fertilización In Vitro") Vs. Costa Rica. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la CIDH de 26 de febrero de 2016.

plantean particulares con motivo de violaciones a los DD.HH llevadas a cabo por alguno de los estados parte. Sin embargo, como afirma Carpizo (2009)⁷⁷², ni todos los países latinoamericanos han aceptado expresamente la competencia contenciosa de la Corte⁷⁷³.

5.2.2 Instrumentos Jurídicos de protección de los Derechos Humanos en América Latina

Con el objetivo de señalar la falta de necesidad, bajo la óptica estrictamente jurídica, de la inclusión de una cláusula social en los AC concluidos entre UE y AL, se mencionarán a seguir otros instrumentos relevantes destinados a proteger los DD.HH en el continente americano. El SIDH cuenta con los siguientes instrumentos jurídicos:

- Carta de la OEA (suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo de Washington en 1992 y por el Protocolo de Managua en 1993).
- Convenio de sede entre el Gobierno de Costa Rica y la CIDH (Resolución aprobada en la séptima sesión plenaria celebrada el 1º de julio de 1978: AG/RES.372 (VII-0/78)).
- Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (aprobado mediante la Resolución n° 447 adoptada por la AGOEA en su noveno período ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979).

⁷⁷² Carpizo, J. (2009). Tendencias actuales del constitucionalismo latinoamericano. *Revista Derecho del Estado*. Colombia, 23 (diciembre), 230-251.

⁷⁷³ Las sentencias de la CIDH son de cumplimiento obligatorio para el poder judicial de los estados. No obstante, aunque sirvan como elementos orientadores para todos los estados-parte, su aplicación se restringe, evidentemente, a los casos concretos.

- Estatuto de la CIDH (aprobado mediante la Resolución n° 448 adoptada por la AGOEA en su noveno período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979).
- Declaración de Panamá sobre la Contribución Interamericana al Desarrollo y la Codificación del Derecho Internacional (aprobada en la sexta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 1996: AG/DEC. 12 (XXVI-O/96).
- Carta Democrática Interamericana (aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 11 de septiembre de 2001).
- Reglamento de la CIDH (aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009).
- Acuerdo de Entendimiento entre la CIDH y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (aprobado el 25 de septiembre del 2009 y en vigor desde el 1 de enero del 2010).
- Reglamento de la CIDH sobre el funcionamiento del fondo de asistencia legal de víctimas (suscrito en la sede de la CIDH en San José de Costa Rica el día 4 de febrero de 2010).
- Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Fondo de Asistencia Legal del SIDH (en vigor desde el 1 de marzo de 2011).
- Carta Social de las Américas (aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2012 y revisada por la Comisión de Estilo en el marco del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la OEA, celebrado de 3 al 5 de junio de 2012 en Cochabamba, Bolivia; OEA/Ser.P, AG/doc.5242/12 rev. 2, 20 septiembre 2012).

- Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009 y modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147° período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013 (entrada en vigor el 1° de agosto de 2013).

Para la promoción y protección de los DD.HH los instrumentos son:

- DADDH (aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948).

- CADH (Pacto de San José, suscrito el 22 de noviembre de 1969).

- Protocolo Adicional a la CADH en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador, adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988).

- Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública (Resolución de la AGOEA, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010).

- Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, 2013.

En relación a la prevención de la discriminación, los instrumentos son:

- Declaración de la Conferencia de Santiago (documento adoptado por la Conferencia Regional de las Américas, llevada a cabo en Santiago de Chile, de 4 a 7 de diciembre de 2000).

- Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia (OEA/Secretaría General, CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 13, 23 de abril del 2010).

Los derechos de las mujeres⁷⁷⁴ están contemplados en los siguientes instrumentos:

- Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer (suscrita en la Séptima Conferencia Internacional Americana, Montevideo, Uruguay, 17 de diciembre a 26 de marzo de 1933).
- Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer (adoptado en Bogotá, Colombia, el 05/02/48).
- Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (suscrita en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, de 30 de marzo a 2 de mayo, 1948).
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), suscrita el 9 de junio de 1994, por ocasión de la celebración de la XXIV reunión ordinaria de la AGOEA (en vigor desde 05 de marzo de 1995). La rapidez con que ha entrado en vigor esta convención se debe a que bastaba el depósito de dos instrumentos de ratificación. No obstante, tampoco ha sido ratificada por EE.UU;
- Estatuto de la Comisión Interamericana de Mujeres (aprobado en la XXIX Asamblea de Delegadas de la CIM, mediante CIM/RES.201(XXIX-O/00), 18 de Noviembre de 1998).
- Reglamento de la Comisión Interamericana de Mujeres, aprobada el 18 de Noviembre de 1998.

En lo que concierne a los derechos de los niños y niñas los principales instrumentos son los siguientes:

⁷⁷⁴ AL es la región del planeta con más mujeres como jefes de gobierno.

- Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores (adoptado en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984, en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado. Entrada en vigor el 26 de mayo de 1988).
- Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (suscrito en la Ciudad de México, D.F. el 18 de marzo de 1994).
- Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores (adoptado en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1989, en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado. Entrada en vigor el 11 de abril de 1994).
- Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (adoptada en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1989 en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado. Entrada en vigor el 03 de junio de 1996).

En relación a los pueblos indígenas se pueden citar los siguientes instrumentos:

- Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 y 8 de junio de 2004; AG/RES. 2029, XXXIV-O/04).
- Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2005; AG/RES. 2073, XXXV-O/05).
- Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de 2006; AG/RES. 2234, XXXVI-O/06).

Las personas con discapacidad cuentan con el siguiente instrumento jurídico:

- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (adoptada en la ciudad de Guatemala el 06 de julio de 1999).

Relativamente a la orientación sexual e identidad de género tenemos:

- Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género (aprobada en la cuarta sesión plenaria de la AGOEA, celebrada el 3 de junio de 2008. AG/RES. 2435, XXXVIII-O/08).
- Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género (aprobada en la cuarta sesión plenaria de la AGOEA el 4 de junio de 2009. AG/RES. 2504, XXXIX-O/09).
- Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género (aprobada en la cuarta sesión plenaria de la AGOEA el 8 de junio de 2010, AG/RES. 2600, XL-O/10).

Sobre la administración de justicia:

- Convención Interamericana sobre Extradición (adoptada en Caracas, Venezuela, el 25 de febrero de 1981. Entrada en vigor el 28 de marzo de 1992).
- Protocolo a la CADH relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (adoptado en Asunción, Paraguay, el 06 de agosto de 1990 durante el Vigésimo período Ordinario de Sesiones de la AGOEA, celebrada en Asunción, Paraguay;
- Convención Interamericana contra la Corrupción (adoptada en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996. Entrada en vigor el 06 de marzo de 1997).

- Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (Documento aprobado por la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008).

El empleo cuenta con un instrumento específico:

- Declaración de Mar del Plata (adoptada en Mar del Plata, Argentina, el 5 de noviembre de 2005).

La tortura y desaparición cuentan con los siguientes instrumentos:

- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, suscrito el 19 de diciembre de 1985 en Cartagena de Indias, Colombia, por ocasión de la celebración del XV período ordinario de sesiones de la AGOEA (en vigor desde 28 de febrero de 1987);

- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (adoptado en Belem do Pará, Brasil, el 09 de junio de 1994, durante el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la AGOEA. Entrada en vigor el 08 de marzo de 1996).

En lo que concierne a la nacionalidad, asilo, refugio y personas internamente desplazadas los instrumentos son:

- Convención sobre Asilo Político (aprobada en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 26 de diciembre de 1933, durante la Séptima Conferencia Internacional Americana. Entrada en vigor el 28 de marzo de 1935).

- Convención sobre Asilo Territorial (adoptada en Caracas, el 28 de marzo de 1954, durante la Décima Conferencia Interamericana. Entrada en vigor el 29 de diciembre de 1954).

- Convención sobre Asilo Diplomático (aprobada en Caracas, el 28 de marzo de 1954, durante la Décima Conferencia Interamericana y en vigor desde el 29 de diciembre de 1954).
- Declaración de Cartagena sobre Refugiados (adoptada en el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984).
- Principios y Criterios para la Protección y Asistencia de los Refugiados, Repatriados, y Desplazados Internos Centroamericanos en América Latina (documento aprobado en la ciudad de Guatemala, durante la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos – CIREFCA – celebrado del 29 al 31 de mayo de 1989).
- Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas (adoptada por el "Coloquio Internacional: 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados", celebrado en San José, Costa Rica, del 5 al 7 de diciembre de 1994).
- Declaración de Tlatelolco sobre Acciones Prácticas en el Derecho de los Refugiados en América Latina y el Caribe (adoptada por los participantes en el Seminario Regional sobre Acciones Prácticas en el Derecho de los Refugiados, reunidos en la Ciudad de México los días 10 y 11 de mayo de 1999).
- Declaración y Plan de Acción de México Para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina (adoptada en la Ciudad de México, el 16 de noviembre del 2004).
- Derechos Humanos de los Migrantes, Estándares Internacionales y Directiva Europea sobre Retorno (Resolución 03/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

- Prevención y Reducción de la Apatridia y Protección de las Personas Apátridas de las Américas (aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011. AG/RES. 2665, XLI-O/11).

- Desplazados Internos (documento aprobado en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011, AG/RES. 2667, XLI-O/11).

- Protección de los Solicitantes de la Condición de Refugiados y de los Refugiados en las Américas (documento aprobado en la cuarta sesión plenaria de la AGOEA, celebrada el 7 de junio de 2011).

Por último, existen los siguientes instrumentos que abordan el uso de la fuerza y conflicto armado:

- Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional (suscrita en el Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la AGOEA, celebrada en Washington D.C., el 2 de febrero de 1971. Entrada en vigor: para cada país, en la fecha de depósito de su instrumento de ratificación (art. 12 de la Convención).

- Convención Interamericana contra el Terrorismo (adoptada en Bridgetown, Barbados, el 03 de junio de 2002, durante el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la AGOEA. Entrada en vigor el 10 de julio del 2003).

5.2.3 Los derechos humanos en la legislación interna de los países latinoamericanos

Los DD.HH también se reflejan en la legislación interna de varios países latinoamericanos. En términos constitucionales, tanto la Constitución Española de 1978

como la Constitución de Cádiz de 1812 han ofrecido modelos válidos para varios de esos países según Bogdandy (2010⁷⁷⁵) y Bazán (2010)⁷⁷⁶. Se pueden mencionar:

- Constitución de Argentina de 1994⁷⁷⁷: menciona en su preámbulo los ideales perseguidos por el país. Algunos tratados de DD.HH señalados por la constitución tienen rango constitucional (para eso necesitan la aprobación con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara) y son comprendidos en sintonía con los derechos consagrados en la norma constitucional. Sin embargo, la propia constitución deja la reglamentación del ejercicio de los DD.HH a las normas infraconstitucionales (Travieso, 1996)⁷⁷⁸.
- Constitución de Bolivia de 2009⁷⁷⁹: menciona que los DD.HH contemplados en su texto son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles, progresivos y que el estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Los tratados de DD.HH prevalecen en el orden jurídico interno. Además, reza que los derechos consagrados en el texto constitucional deben ser interpretados de conformidad con los tratados internacionales y proclama la prevalencia de las normas jurídicas que declaren derechos más favorables, de modo que, caso los tratados internacionales de DD.HH consagren derechos más amplios o favorables, deben prevalecer sobre la

⁷⁷⁵ Bogdandy, Armin von *et al* (cords.). (2010). *La justicia constitucional y su internacionalización ¿Hacia un ius constitutionale comune en América Latina?* México: UNAM.

⁷⁷⁶ Bazán, Víctor. (2010). En torno al Estado de derecho, la justicia constitucional y la tutela de los derechos fundamentales, con particular énfasis en América Latina, *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*. España, nº 14, 2010.

⁷⁷⁷ Senado de la Nación Argentina. Constitución Nacional. Recuperado de <http://www.senado.gov.ar/delInteres>

⁷⁷⁸ Travieso, J. A. (1996). *Los Derechos humanos en la constitución de la república Argentina*. Buenos Aires. Argentina. EUDEBA.

⁷⁷⁹ Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Constitución Política del estado. Recuperado de http://www.economia y finanzas . gob . bo / index . php ? opcion=com_contenido&ver=contenido&id=1399&id_item=446

propia norma constitucional y, por extensión, sobre todas las demás normas jurídicas del país. Es la consagración del principio *pro homine*.

- Constitución de Brasil de 1988⁷⁸⁰: establece la dignidad humana como uno de sus principios fundamentales. En sus relaciones internacionales, uno de sus principios directivos es la prevalencia de los DD.HH. Existen muchas disposiciones sobre los DD.HH en la constitución brasileña. Ellas no excluyen cualquier derecho o garantía consagrado en tratados internacionales en que el país sea parte. Los tratados y convenciones internacionales sobre DD.HH aprobados, en cada Casa del Congreso Nacional, en dos turnos, por tres quintos de los votos de los respectivos miembros, equivalen a las enmiendas constitucionales.

- Constitución de Colombia de 1991⁷⁸¹: proclama la prevalencia de los tratados internacionales de DD.HH en el orden jurídico interno. Los DD.HH son considerados como los fundamentos de la convivencia pacífica entre todos los miembros de la comunidad, que asumen también la responsabilidad de defenderlos y difundirlos.

- Constitución de Ecuador de 2008⁷⁸²: reconoce los DD.HH y la obligación del estado de garantizarlos, así como de los ciudadanos ecuatorianos de respetarlos y luchar por su cumplimiento. Los principios de derecho internacional como el *pro homine* y la no restricción de derechos se incorporan en la norma constitucional. El proyecto de reforma de 2014 ha encontrado serios problemas en su tramitación por el hecho de limitar los DD.HH⁷⁸³: a) limitación de la posibilidad de los ciudadanos de recurrir judicialmente contra acciones abusivas del estado, b) potestad de las Fuerzas

⁷⁸⁰ Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

⁷⁸¹ Congreso de la República de Colombia. Recuperado de <http://www.camara.gov.co/portal2011/normatividad>

⁷⁸² Recuperado de http://www.asambleanacional.gob.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf

⁷⁸³ Human Rights Watch. Ecuador: Problemático proyecto de reforma constitucional. Recuperado de <http://www.hrw.org/es/news/2014/07/14/ecuador-problematico-proyecto-de-reforma-constitucional>

Armadas de participar en operativos de seguridad pública, c) clasificación de la comunicación como servicio público, d) posibilidad de reelección ilimitada del presidente de la República.

- Constitución de Guatemala de 1985⁷⁸⁴: contempla en su Preámbulo la primacía de la persona, la responsabilidad del estado en la promoción de los DD.HH y su decisión en impulsarlos. Los tratados internacionales sobre DD.HH prevalecen sobre el derecho interno del país. Sin embargo, reconoce la pena de muerte en algunos casos.

- Constitución de México de 1917⁷⁸⁵ (reformada en el año 2011): proclama que los DD.HH y las libertades reconocidas en la norma constitucional están vinculadas a la actuación de los poderes del estado. En este sentido, todas las autoridades deben prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños generados por violaciones a esos derechos. Los DD.HH contemplados en los tratados internacionales son expresamente reconocidos como integrantes del acervo jurídico personal del individuo. Además, la norma incorpora el principio *pro homine*. Las adicciones normativas (enmiendas constitucionales de febrero y junio de 2014) reforzaron varios DD.HH.

- Constitución de Paraguay de 1992⁷⁸⁶: menciona la dignidad humana en su Preámbulo y los DD.HH en el articulado. Los tratados internacionales tienen un rango inferior a la constitución pero superior a las leyes ordinarias. Sin embargo, admite un orden jurídico de naturaleza supranacional que tenga por objeto garantizar la vigencia de los DD.HH.

⁷⁸⁴ ACNUR. Constitución de Guatemala. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0134>

⁷⁸⁵ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm>

⁷⁸⁶ ACNUR. Constitución de la República de Paraguay. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0055>

- Constitución del Perú de 1993⁷⁸⁷: establece que las normas relativas a los DD.HH deben ser interpretadas de acuerdo con la DUDH y los tratados internacionales sobre esta materia. También proclama que, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos reconocidos constitucionalmente puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.
- Constitución de Venezuela de 1999⁷⁸⁸: contempla en el Preámbulo los DD.HH y, en el cuerpo principal del instrumento, algunos de sus principios, como el de la progresividad y no discriminación. Los tratados internacionales de DD.HH tienen idéntica jerarquía que la norma constitucional. No obstante, si amplían esos derechos, prevalecerán sobre la constitución. También determina que todas las personas tienen la obligación de promover y defender los DD.HH.

5.2.4 Eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos e interiorización de esos derechos en el ámbito regional

Una vez verificado que el problema no es la ausencia o la escasez de normas protectoras de los DD.HH, se podría indagar sobre su eficacia jurídica, para buscar la fundamentación teórica de la presencia de la cláusula social en el ámbito de las relaciones comerciales UE-AL. Para llevar a cabo este análisis, fueron apreciados los mecanismos de control independientes de orden jurisdiccional (existen tres: 1. Tribunal Europeo, 2. Corte Interamericana y 3. Tribunal Africano. Serán considerados los dos primeros).

- El Tribunal Europeo se encuentra apoyado institucionalmente en el Consejo de Europa, al paso que la Corte Interamericana se apoya en la OEA. El control por el Tribunal Europeo era suficiente en la medida en que las violaciones a los DD.HH,

⁷⁸⁷ Constitución Política del Perú. Recuperado de <http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html>

⁷⁸⁸ República Bolivariana de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. CNE Poder Electoral. Recuperado de http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/disposiciones.php#final

aunque existentes, no se producían de forma masiva y sistemática. En lo que concierne al continente americano, sin embargo, ha sido necesario un acuerdo de carácter intergubernamental, que incluía la presión política a los estados violadores⁷⁸⁹. Así, el control es ejercido doblemente en el continente americano, tanto por la Comisión de los Derechos Humanos como por una Asamblea de jefes de estado y de gobierno de la OEA.

- Esencialmente, la Comisión transmite sus informes a la Asamblea para que adopte resoluciones. La situación de violación sistemática de los DD.HH en AL era intensa. No obstante, también se han constatado varias violaciones sistemáticas a los DD.HH en los países del centro y del este europeo, de modo que el tribunal ya no era suficiente. Curiosamente, no se han ablandado las exigencias jurídicas en relación a AL, aunque el control jurisdiccional por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se mostrara él mismo insuficiente. En la práctica, se han mantenido importantes presiones visando el fomento, la promoción y la consolidación de los DD.HH para AL, incrementadas a partir de la década de los noventa por la inclusión de la cláusula social en los AC, al mismo tiempo en que se han desarrollado nuevos mecanismos de control en la UE, como es el caso de las funciones ejercidas por el Comisario Europeo, a parte de la vigilancia sobre el respeto de los DD.HH llevada a cabo por la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)⁷⁹⁰.

- En el sistema interamericano, la Comisión puede aceptar demandas particulares de víctimas de violaciones, además de demandas interestatales pero, en este caso, la competencia de la Comisión se configura con la aceptación de su competencia por ambos estados (el demandante y el demandado), lo que reduce la capacidad de actuación de la entidad. Según Carbonell & Carlos (2003)⁷⁹¹, “la declaración de

⁷⁸⁹ Lamentablemente, se está verificando actualmente una inoperancia de la OEA en el caso del deterioro democrático (incluyendo violaciones de DD.HH.) en Venezuela.

⁷⁹⁰ Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, celebrada en Helsinki en 1975.

⁷⁹¹ Carbonell, R. & Carlos, J. (2003). *La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estructura, Funcionamiento y Jurisprudencia*. Instituto Europeo de Derechos Humanos. Barcelona, España, p. 19.

admisibilidad e inadmisibilidad serán públicos y la Comisión los incluirá en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA”. En el ámbito europeo, sin embargo, la competencia del tribunal no necesita la autorización del estado demandado. Además, antes, los particulares demandantes no tenían legitimación activa para acudir directamente al tribunal. Con la reforma en el marco europeo, la Comisión acaba siendo suprimida y el Tribunal pasa a admitir las demandas, sin necesidad de aceptación *ad hoc* por parte del estado demandado.

- Las condiciones de admisibilidad de la demanda son muy similares en ambos sistemas así como lo eran las funciones de ambas Comisiones (esencialmente el intento de arreglo amistoso y la emisión de informes de fondo), antes del reemplazo de la Convención de Roma (de 3 de noviembre de 1950) por el Protocolo nº 11 (de 14 de mayo de 1994) que entró en vigor el 1º de noviembre de 1998.

- Ni en el sistema interamericano ni en el sistema europeo las sentencias derogan leyes o anulan decisiones judiciales o actos administrativos internos.

- Por otro lado, en el sistema interamericano, de acuerdo con Pasqualucci (1996)⁷⁹² y Sarkin (2004)⁷⁹³, las disposiciones de la Convención de San José son más claras a respecto de la reparación del daño por violación de los DD.HH. Así, exige que el estado demandado, caso se verifique la procedencia de la demanda, garantice al lesionado el goce de su derecho violado y, siendo el caso, le conceda una justa indemnización, que podrá ser ejecutada en el país en conformidad con el procedimiento interno pertinente a la ejecución de sentencias contra el estado. En el ámbito europeo, el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales (Convenio de Roma) proclamaba la posibilidad de concesión de una satisfacción equitativa caso la reparación del estado condenado fuera imperfecta.

⁷⁹² Pasqualucci, J. M. (1996). Victim reparations in the Inter-American Human Rights System: a critical assessment of current practice and procedure. *Mich. J. Int'l L.*, 18, 1, 15-36.

⁷⁹³ Sarkin, J. (2004). The coming of age of claims for reparations for human rights abuses committed in the south. *Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos*, 1(1), 70-133.

Existiendo incumplimiento del fallo, el Comité de Ministros ejercería presión moral y política al estado condenado.

- La Corte Interamericana también es más activa en la emisión de opiniones consultivas o dictámenes, esencialmente porque los requisitos para su solicitud son menos estrictos.

- Un aspecto favorable al sistema europeo concierne a la dedicación a tiempo completo de los 46 jueces ubicados en Estrasburgo. En el sistema interamericano, los 7 jueces se reúnen esporádicamente (solamente el secretario debe residir en San José de Costa Rica).

- Los presupuestos para ambos sistemas también difieren. UE cuenta con mucho más recursos financieros. Las aportaciones de los estados para el sistema interamericano son mucho más escasas (además de, evidentemente, no contaren con el apoyo económico de los EE.UU, que no es parte en la Convención Interamericana y, por supuesto, tampoco acepta la jurisdicción de la Corte). En este punto parece muy acertada la observación de Ridruejo (2007)⁷⁹⁴, según la cual no se sabe realmente hasta qué punto interesa a los países sudamericanos, centroamericanos y caribeños, el funcionamiento eficaz de una institución que expondría sus “trapos sucios”.

- Existe una ventaja del sistema interamericano relacionado con la posibilidad de adoptar medidas cautelares o provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario, para evitar daños irreparables a las personas⁷⁹⁵. Ni la

⁷⁹⁴ Ridruejo, J. A. P. (2007). La Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos: una comparación entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. *Revista Electrónica Iberoamericana (ALCUE)*, vol. 1 (1), 5-15.

⁷⁹⁵ Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 63.2: “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.

Convención de Roma ni el Protocolo nº 11 poseen disposición equivalente. En el sistema europeo, esta facultad figura solamente en el reglamento aprobado por los jueces. Esta diferencia de regulación es importante. En el sistema interamericano la seguridad de que las medidas cautelares sean jurídicamente vinculantes es mucho mayor que en el sistema europeo.

Expuesto esto, bajo el aspecto cuantitativo, del número de leyes y convenciones internacionales pertinentes, la hipótesis de desarrollo (si es realmente justificable, bajo el enfoque estrictamente jurídico, incluir la cláusula social en las relaciones comerciales con AL) merece una respuesta negativa. Además, bajo el aspecto cualitativo, las opiniones consultivas y las sentencias de la Corte Interamericana son considerados de elevada calidad jurídica. Hasta mismo en lo que se refiere a la reparación jurídica, la Convención de San José parece ir más lejos que la normativa europea.

Dando continuidad a la búsqueda de la respuesta a la hipótesis de desarrollo, se ha apreciado, bajo la perspectiva jurídica, la necesidad de permanencia de la cláusula social (y de la condicionalidad que representa) fuera de la actividad propia de la Corte. Concretamente se ha perquirido sobre la interiorización de su actividad en el ámbito de las poblaciones latinoamericanas. En este sentido, Ridruejo (p. 11)⁷⁹⁶ considera que el sistema europeo está mucho más interiorizado que el sistema interamericano, aún bastante desconocido e infrautilizado en la práctica jurídica de los países sudamericanos y centroamericanos.

Sin embargo, esto no sería jurídicamente suficiente para establecer una condicionalidad de acceso al mercado interior asociada a la protección de los DD.HH. Así que decidimos analizar la concepción que AL tiene sobre esos derechos.

⁷⁹⁶ Ridruejo, J. A. P. (2007). La Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos: una comparación entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. *Revista Electrónica Iberoamericana (ALCUE)*, vol. 1, (1), p. 11

Por todo lo que se ha visto, los DD.HH no constituyen algo extraño al continente americano. Al contrario, existe una fuerte inclinación jurídica en casi todos los países latinoamericanos en el sentido de fomentarlos y garantizarlos, al menos desde el punto de vista formal, como diría Pasqualucci (1994)⁷⁹⁷. Deiros (1992)⁷⁹⁸ se orienta por la explicación histórica de que las ex colonias españolas y portuguesas han heredado los valores de la civilización cristiana que exaltan el respeto y la protección del ser humano. Lógicamente, esto antecede muchísimo a la incorporación del tema en la agenda bilateral UE-AL o a la inclusión de la cláusula social en sus AC recíprocos y no recíprocos (caso del SPG). No parece jurídicamente razonable que la permanencia de la condicionalidad de acceso al mercado único esté fundamentada en la escasez, completa ausencia o nivel de calidad de las normas jurídicas o hasta mismo de los compromisos políticos en materia de DD.HH por parte los países latinoamericanos^{799/800}.

5.2.5 Relación histórica entre Unión Europea y América Latina: derechos humanos y comercio internacional

Al analizar las relaciones históricas entre la CEE y AL, desde 1957 (fecha de su constitución) hasta 1971 (cuando se suscriben los primeros acuerdos de cooperación

⁷⁹⁷ Pasqualucci, J. M. (1994). Whole Truth and Nothing but the Truth: Truth Commissions, Impunity and the Inter-American Human Rights System, *The. BU Int'l LJ*, 12, 321-356.

⁷⁹⁸ Deiros, P. A. (1992). *Historia del cristianismo en América Latina*. Fraternidad Teológica Latinoamericana.

⁷⁹⁹ Aunque hay que reconocer, evidentemente, y como mínimo, su violación en Cuba y en la Venezuela de Nicolás Maduro, recientemente con poderes ampliados para legislar en materia de seguridad.

⁸⁰⁰ La posición europea proclive a la protección de los DD.HH. se ha formalizado en el ámbito interno con el Tratado de Maastricht, que pasa a incorporar los DD.HH. y los valores democráticos como elementos fundamentales de su proceso de integración y como principios inspiradores de sus relaciones exteriores. Los ciudadanos de la UE parecen estar más conscientes de la posibilidad de reivindicar y reclamar sus derechos en los ámbitos nacional y regional. Aunque exista un creciente euroescepticismo en la región (insuflada con la crisis económica), en la opinión de este investigador, la continua promoción de los DD.HH. y la existencia de un estado de bienestar que se plasmó en la mente de las personas como un conjunto de derechos adquiridos, la interiorización de los derechos humanos y de la actividad del TEDH está más arraigada en el escenario europeo.

internacional UE-AL), se observa un interés político y económico por parte de la UE mucho más limitado en esa región del planeta.

El primer gran impulso ha sido dado con la percepción de vulnerabilidad europea ante la crisis del petróleo de 1973, que afectaba fuertemente a Europa Occidental. Ha sido un primer paso, aunque tímido, en relación al estrechamiento de vínculos. El segundo impulso ha sobrevenido en 1981, cuando: a) la CE adopta en un reglamento los criterios aplicables a la ayuda financiera y técnica a favor de los PED, b) tiene inicio las reuniones entre representantes de la CE y del Grupo Latinoamericano de Embajadores, c) son suscritos nuevos acuerdos de cooperación con AL y d) se pone en marcha el denominado “Diálogo Renovado” entre ambas regiones del planeta (con el ingreso de España y Portugal en las Comunidades Europeas, en 1986, el acercamiento con sus ex colonias por parte de todo el bloque europeo se intensifica). También en este período 1981-1982 ha ocurrido la crisis de la deuda cuyo impacto negativo ha llevado Europa a prestar mayor atención a los problemas que afectaban a AL. El inicio del proceso de redemocratización en la zona y la crisis de las islas Malvinas exaltaron la necesidad de estrechar las relaciones entre Europa y AL.

En los años ochenta tienen inicio los acuerdos denominados de segunda generación con Brasil, el Grupo Andino y Centroamérica. La importancia dada a las relaciones internacionales por el bloque europeo se intensifica con el Acta Única Europea. Estos acuerdos birregionales de segunda generación abarcan intereses comerciales, políticos y de cooperación al desarrollo. La dinámica de las relaciones internacionales cambiará de rumbo con el fin de la bipolaridad característica de la guerra fría. En este escenario, en paralelo con el fomento de la liberalización comercial, los lazos entre ambas regiones se recrudecen, con base en la democracia (que en AL necesitaba apoyo internacional) y en los DD.HH.

En el marco del Tratado de Maastricht (artículo F.1 y F.2) y de Ámsterdam (artículo 6.1 y 6.2) los DD.HH adquieren un rol fundamental, en consonancia con el creciente protagonismo internacional pretendido por la UE. El TUE incluye entre los objetivos de

la PESC el desarrollo y la consolidación de la democracia y del estado de derecho, así como el respeto por los DD.HH y las libertades fundamentales (artículo J. 1). El Tratado de las Comunidades Europeas, después de las modificaciones introducidas por el Tratado de Maastricht, también recogería el respeto de los DD.HH en lo que se refiere a la política de cooperación y desarrollo (objetivo general). Por su vez, el tratado de Niza también incorporaría (artículo 181. A) ese mismo principio en relación a la cooperación económica, financiera y técnica.

Los acuerdos de tercera generación suscritos por la UE con AL a partir de los años noventa⁸⁰¹ del siglo pasado pasarían a incorporar tanto la cláusula democrática como la cláusula social. Esta ha sido una década especialmente relevante en lo que concierne a los procesos de integración en AL, con perspectivas de incremento del protagonismo de la región en el escenario mundial⁸⁰². El dialogo político y la cooperación al desarrollo coexistirá con la relevancia creciente del bloque europeo hacia los intereses políticos, de integración y económicos/comerciales que tendrán, por otro lado, un fuerte incentivo con el fin de la Ronda Uruguay del GATT y el inicio operativo de la OMC.

La estrategia europea hacia AL (estrategia birregional), en este período, se basaba esencialmente en el escenario multipolar característico del fin de la Guerra Fría. Sin embargo, no se ha logrado la coordinación de las políticas birregionales y multilaterales en el contexto de los foros internacionales y la expectativa de que los diversos esfuerzos de integración latinoamericanos se orientasen hacia el propio modelo europeo también fracasaron (apoyo institucional de la UE, pero con una aportación de recursos económicos claramente insuficiente).

⁸⁰¹ La estrategia bilateral hacia América Latina data de 1994, momento en que existía un enorme interés hacia los mercados emergentes de la región.

⁸⁰² Estos procesos de integración parecen muchas veces que tienden a solaparse.

La principal preocupación europea era el posible desvío del comercio latinoamericano en virtud del NAFTA y una eventual implantación del ALCA⁸⁰³. La urgencia conduce a la UE a firmar, a partir de mediados de los años noventa (1995 y 1997), acuerdos con México, Chile y el Mercosur. Esos nuevos acuerdos (denominados de “cuarta generación”) buscaban constituir áreas de libre comercio, basados en el diálogo político y económico regular, la cooperación y la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios comerciales.

En relación a los países o grupos de países en que el acuerdo no ha sido posible, la UE optó por aplicar el marco jurídico representado por el SPG *Plus*. En esta etapa, según Grabendorff (2004)⁸⁰⁴, las subvenciones, la inflexibilidad para acercar posturas y la tendencia de condicionar el impulso de las negociaciones a los resultados de la Ronda Doha de la OMC condujeron a una situación de desconfianza latinoamericana hacia las intenciones de la UE.

Llama la atención que los acuerdos de cuarta generación hayan sido adoptados en relación a países cuyas exportaciones agrícolas, además de reducidas, prácticamente no afectaban a los sectores sensibles de la UE. Es el caso de Chile y México. A propósito, ambos países habían firmado acuerdos de libre comercio con EE.UU. México, concretamente, que había recusado en 1991 a aceptar la incorporación de la cláusula democrática en su acuerdo de cooperación con la UE, acabaría firmando el acuerdo NAFTA con EE.UU y Canadá. UE no quería quedarse atrás⁸⁰⁵.

⁸⁰³ Por su vez, parece que los EE.UU también tomaban en cuenta la implantación del mercado único europeo en 1992.

⁸⁰⁴ Grabendof, W. (2004). La estrategia birregional y sus limitaciones en un mundo unipolar. *Nueva Sociedad* 18 (enero-febrero), pp. 97-109.

⁸⁰⁵ México y Chile tenían economías abiertas cuyas industrias podían soportar la presencia de productos industriales europeos sin que sus exportaciones agrícolas amenazasen para la política agraria europea. La negociación con el Mercosur ha sido mucho más lenta por dos motivos básicos: 1) su enorme competitividad en el campo agrícola y 2) la preocupación brasileña de competir con los productos industriales europeos en los mercados de sus socios del Mercosur.

Al final de la década de los noventa, UE tiene que proceder a una complicada compatibilización jurídica. Apostar por el multilateralismo pugnado por la OMC o, aprovechándose de su omisión normativa en temas de DD.HH, apostar por los acuerdos comerciales bilaterales, donde era posible incorporar la cláusula social. La asociación estratégica⁸⁰⁶ birregional (1999) buscaba, además de objetivos comerciales, un modelo socio-económico con cohesión, sostenible y socialmente incluyente que garantizara la erradicación de la pobreza y el desarrollo de las dos regiones a través de un productivo diálogo político que exaltara sus valores comunes (promoción y defensa de los DD.HH, la democracia y el estado de derecho) y facilitara la coordinación de ambas partes en el ámbito de los foros multilaterales. A propósito, el multilateralismo, la previsibilidad y la seguridad jurídica (uniformidad de reglas y principios) de la OMC era y es acorde con el protagonismo pretendido por la UE en todo el mundo, lo que demuestra su auto reconocimiento como potencia política, económica y comercial. Le interesa seguir y hacer con que otros miembros de la SI sigan las reglas del juego.

5.2.5.1 “Escayolamiento” del sistema mundial de comercio, Ronda Doha de la OMC y Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión

La enorme cantidad de miembros de la OMC (162 a 30 de noviembre de 2015, fecha de incorporación de Kazajistán) y las cada vez más complejas negociaciones en su ámbito “escayolaron” el funcionamiento del sistema multilateral de comercio. Ante el avance de las economías emergentes, como la china (actualmente en desaceleración, lo cual afecta negativamente a los PED que le suministran materias primas, según Granell Trías, 2015⁸⁰⁷), la india (actualmente en crecimiento) o la de los países latinoamericanos (actualmente casi todos en desaceleración) en un marco caracterizado por el término de la bipolaridad internacional, consecuencia del fin de la Guerra Fría, la inclinación de la UE por negociaciones bilaterales en el ámbito del comercio se ha visto acentuada.

⁸⁰⁶ UE tiene una asociación estratégica con EE.UU, Canadá, México (miembros del NAFTA), Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica (miembros del BRICS), Japón y Corea del Sur.

⁸⁰⁷ Granell Trías, F. (2015). El Sistema Económico Internacional en 2015. Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española nº 3071, 3-18.

EE.UU ya había optado por acuerdos bilaterales con diferentes países latinoamericanos ante la dificultad de avance del proyecto ALCA en los años noventa.

En estos últimos 15 años las relaciones UE-AL se han vinculado fuertemente con el proceso negociador de la Ronda Doha de la OMC, cuyo desenlace interesa a ambas partes. El fracaso de estas negociaciones desde la Conferencia Ministerial de Hong-Kong en el año 2005 ha conducido la UE, a partir de la Cumbre de Viena de 2006, a retomar su estrategia de bilateralismo de mediados de los años noventa. Los avances pocos significativos de la Reunión de Nairobi (v.g., eliminación de subvenciones a exportaciones agrícolas y comercio agrario de los países menos adelantados y facilitación del comercio) siguen impulsando la negociación y consolidación de integraciones económicas regionales (áreas de libre comercio y uniones aduaneras, según Granell Trías (2015)⁸⁰⁸, que es donde precisamente la UE incorpora los DD.HH.L.

El desbloqueo de las negociaciones en la Conferencia de Bali en el año 2013 y el avance de las conversaciones en el programa de trabajo posterior no parecen haber alterado sustancialmente esta posición. Existe una cierta frustración de la UE en relación a la presumible voluntad de los poderes emergentes de usar las instituciones multilaterales con el objetivo de frenar ciertas pretensiones históricamente deseadas en Europa, como la de convertirse en un gran y eficaz impulsor de los DD.HH, la democracia y el estado de derecho en todo el mundo. Con efecto, en lo que se refiere a los DD.HH, se ha llegado a bloquear sendas iniciativas tanto en la AGNU como en el CDH de la ONU.

En el ámbito de la OMC, como se sabe, los DD.HH no están contemplados eficazmente en ninguna de sus normas. Con la enorme dificultad de avance de la Ronda Doha y el escayolamiento del propio sistema multilateral de comercio, se ha llegado a

⁸⁰⁸ Granell Trías, F. (2015). El Sistema Económico Internacional en 2015. Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española nº 3071, 3-18. El autor menciona como campos de desarrollo en nivel bilateral, entre otros, los criterios de origen, la estandarización de obstáculos no arancelarios y la supresión de dobles controles en origen y destino de las mercancías.

comentar la pérdida de relevancia de la entidad ante la proliferación de decenas de acuerdos comerciales bilaterales, subregionales y regionales por todo el planeta. Además, existen ahora nuevas tendencias que se están gestando y que favorecen el bilateralismo: los denominados mega acuerdos de comercio. Estos mega acuerdos surgieron exactamente como resultado de la intensa proliferación de acuerdos preferenciales de comercio y de las dificultades de conclusión de la mencionada Ronda Doha de la OMC, desde su lanzamiento en el 2001. Naturalmente, aunque la postura oficial de la OMC sea la de que la entidad se preocupa con el proteccionismo, no con el regionalismo, a corto y medio plazo no hay ninguna duda de que estos mega acuerdos acaben socavando el multilateralismo.

Una característica importante de los mega acuerdos consiste en la enorme interpenetración existente entre temas comerciales y temas geopolíticos. Esto es lo que ocurre en el marco de las negociaciones (entre UE y EE.UU) de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP)⁸⁰⁹, que reuniría el 50% del PIB mundial y el 30% del comercio mundial. Esto es lo que ha ocurrido con la firma (el 4 de febrero de 2016) de la Asociación Transpacífica (TPP)⁸¹⁰, que reúne a 12 países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, EE.UU y Vietnam), cubriría el 40% de la economía mundial.

Por el lado latinoamericano también se podría señalar la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) cuyos países concentran el 35% del PIB latinoamericano y el 55% de las exportaciones de la región (así como el 40% de las exportaciones y el 40% de la inversión española en la región) y que parece expandirse hacia Asia⁸¹¹, como ya lo hacen EE.UU y UE.

⁸⁰⁹ Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership.

⁸¹⁰ Trans-Pacific Partnership. El acuerdo será sometido ahora a un período de ratificación de dos años en los que al menos seis países (que representen el 85% del PIB combinado de los doce miembros del acuerdo) deben aprobar el texto final para que el pacto se implemente.

⁸¹¹ Alianza del Pacífico: apuesta comercial latinoamericana, Estudios de Política Exterior, ACTUALIDAD - 29 / MAY / 2013.

Según Badin (2012)⁸¹², en estos acuerdos se discuten dos conjuntos de temas: a) los que ya existen en la OMC pero que en su ámbito no es factible su desarrollo o profundización (los denominados OMC-*plus*: servicios, propiedad intelectual, barreras técnicas etc.), b) los que no están en el marco regulatorio de la OMC (los denominados OMC-*extra*: patrones laborales y medioambientales, competencia, inversiones etc.).

En lo que concierne al aspecto laboral y medioambiental, como es notorio, su incorporación en los ABC entre la UE y los PED ocurre mediante la inclusión de la cláusula social, preferencialmente con el estatus de cláusula fundamental.

La condicionalidad que esa cláusula plasma se manifiesta en la vinculación jurídica de las exportaciones de ciertos productos procedentes de los PED al mercado interior de la UE y la concesión de beneficios comerciales de naturaleza arancelaria (variables en función del grado de sensibilidad a los productores europeos). Esto es el habitual en el marco del SPG en su específico régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza, parcialmente modificado por el Reglamento Delegado (UE) 2015/602 de la Comisión de 9 de febrero de 2015⁸¹³, en lo que respecta al umbral de vulnerabilidad definido en el anexo VII, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n° 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

En relación al TTIP y al TTP, los PED que se queden “del lado de fuera” del acuerdo por no adoptar los elevados estándares laborales y medioambientales negociados entre ambas partes podrían tener muchas dificultades para exportar sus productos al futuro mercado ampliado UE-EE.UU, con la evidente consecuencia económica que eso conllevaría a sus respectivos pueblos. De cualquier modo, como

⁸¹² Badin, M. R. (2012). A regulação de “Novos Temas” em Acordos Preferenciais de Comércio celebrados por União Europeia, Estados Unidos, China e Índia: pontos relevantes para o Brasil. *IPEA*, TD 1773, 122-137.

⁸¹³ DOUE de 17.4.2015 (L 100/8).

señala Granell Trías (2015)⁸¹⁴, EE.UU aun no ha asumido normas laborales y medioambientales consideradas fundamentales para la UE

Propuestas como la formulada por los EE.UU sobre los textiles, conocida por “yarn-foward”, al exigir que todo el proceso de producción se realice al menos en uno de los países signatarios del acuerdo (en este caso el TPP) sí que podrían tener impactos en la UE, puesto que, actualmente, la picardía conduce a situaciones aberrantes en que prácticamente toda la producción se realice en Asia y solamente la finalización de la manufactura en el ámbito europeo (además, la Comisión Europea exige, por ser el producto “made in EU”, el acceso preferencial de los textiles a ciertos países latinoamericanos como Brasil.

Aun sobre temas laborales, en el TTIP la cláusula social hace referencia a los compromisos adoptados en diversos foros multilaterales, como la OIT, aun considerando que los EE.UU no ha suscrito varias convenciones de la entidad consideradas relevantes para la UE⁸¹⁵. Contrariamente, los países latinoamericanos son, en su mayor parte, signatarios de la mayoría de esas convenciones. Además de la presencia de derechos laborales básicos, también se contemplan en las negociaciones la preservación de un patrón mínimo de protección social (previsto en la legislación de las partes) imposible de sufrir cualquier tipo de flexibilización (para evitar que surjan ventajas competitivas en el ámbito del comercio bilateral) y la previsión de mecanismos de asistencia técnica, capacitación, educación y diálogo que promocióne las cuestiones laborales (Thorstensen, Badin, Müller & Eleoterio, 2014)⁸¹⁶.

⁸¹⁴ Granell Trías, F. (2015). El Sistema Económico Internacional en 2015. Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española nº 3071, 3-18.

⁸¹⁵ Las propuestas estadounidenses incluyen las declaraciones de la OIT pero las negociaciones con la UE están estancadas en este punto.

⁸¹⁶ Thorstensen, V.; Badin, M. R.; Müller, C. & Belisa, E.. (2014), Acordos Preferenciais de Comércio: da multiplicação de novas regras aos mega-acordos comerciais, *Revista Política Internacional* nº 23 (1), julio-septiembre, 151-181.

Según Sparding (2013)⁸¹⁷ el comercio es una de las pocas áreas en las que la UE aún puede actuar como un relevante actor geopolítico y estratégico. Si se toma en cuenta que la cuota del comercio mundial de la UE ha decrecido en las últimas décadas en detrimento de la producción en los PED (como señala Guillén & Ontiveros, 2012⁸¹⁸) y que la persistente recesión económica, especialmente en la eurozona, agrava la situación como un todo, parece razonable que exista esta necesaria búsqueda de crecimiento económico fuera de las propias fronteras europeas (aunque, bajo la perspectiva económica, la necesidad de estímulo interno que implique incremento de la demanda sigue siendo esencial). De cualquier modo, interesa saber que, según Granell Trías (2015)⁸¹⁹, el comercio mundial crece por debajo del ritmo de crecimiento del producto mundial bruto, lo que afectaría la internacionalización de la producción mundial.

Después de un rápido crecimiento de los acuerdos bilaterales con AL en la década de los noventa del siglo pasado (interés por los mercados emergentes, miedo del proyecto ALCA etc.), la UE se volcó al multilateralismo. Sin embargo, es evidente que sus autoridades estaban y están conscientes de los problemas e impasses que hasta hoy existen en el desarrollo de las negociaciones multilaterales.

Así, lo que ha hecho la UE ha sido plasmar en su estrategia Europa Global de 2006 su intención de reactivar los acuerdos bilaterales de libre comercio, especialmente con aquellos mercados de rápido crecimiento. Las negociaciones no paran desde entonces, como señalan desde el 2009 las llevadas a cabo con Canadá (Acuerdo Comercial y Económico Global Canadá-UE: CETA, por sus siglas en inglés) y el ya mencionado TTIP. No hay nada raro en este proceso: las economías involucradas en las negociaciones están fuertemente interrelacionadas y las barreras comerciales entre ambas partes son relativamente bajas, con una media inferior al 3%. Además, las

⁸¹⁷ Sparding, P. (2013), *Política Exterior* nº 153, (mayo-junio), 74-82.

⁸¹⁸ Guillén, M. F. & Ontiveros, E. (2012). *Global Turning Points. Understanding the Challenges for Business in the 21st Century*. Philadelphia: Wharton School, University of Pennsylvania.

⁸¹⁹ Granell Trías, F. (2015). El Sistema Económico Internacional en 2015. Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española nº 3071, 3-18.

inversiones europeas en EE.UU multiplican por ocho a las realizadas de forma combinada en India y China y la inversión extranjera directa estadounidense en la UE alcanza casi el 60% (Spardin, pp. 76-77⁸²⁰ y Akhtar & Jones, 2013)⁸²¹.

Aproximadamente 15 millones de puestos de trabajo (en la UE y en los EE.UU) dependen actualmente de esta relación de comercio e inversión. Según cálculos de la Comisión Europea, a partir de la firma y posterior implementación del acuerdo, se podría incrementar el crecimiento anual en aproximadamente 5%, algo muy representativo en una economía escuálida. No obstante, es muy importante superar los escollos de siempre: agricultura, alimentos, contratos públicos y licitaciones.

Con Asia, el interés también es inmenso, como ya lo había señalado en el 2001 la Comisión Europea. Se estima que el 40% de la clase media en el año 2020 estará en la región asiática, lo que conllevará a una importante demanda de productos europeos (Alemania, por ejemplo, está cada vez más dependiente de las exportaciones hacia China) si existe una mejora en relación a la competencia de los productos japoneses y estadounidenses en la región.

Sobre los patrones laborales, en el nivel de acuerdos subregionales latinoamericanos con la UE, quizá el mejor ejemplo sea la Declaración sobre Cuestiones Sociolaborales del Mercosur, que proclama los principios de promoción de la igualdad, la eliminación del trabajo forzado, los derechos sindicales y la protección de los menores (da Silva, 2015)⁸²². La incorporación de la cláusula social en el comercio con la UE (algo duramente criticado por los países latinoamericanos desde el final de la Ronda Uruguay del GATT) está siendo cada vez más relativizado porque el miedo que la UE tenía en

⁸²⁰ Sparding, P. (2013), pp. 76-77.

⁸²¹ Akhtar, S. I., & Jones, V. C. (2013). Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): In Brief. *Congressional Research Service*, 7-5700.

⁸²² da Silva, W. L. R. (2015). Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e Declaração Sociolaboral do Mercosul: origem, natureza jurídica e aplicabilidade. *Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo*, 109, 349-387.

relación a la competencia de productos procedentes de los PED (como los latinoamericanos), AL tiene actualmente en relación a los productos chinos, cuyo país tiene una influencia creciente en la región.

Aunque la OMC haya logrado evitar un exagerado proteccionismo sistémico desde su creación, el avance en la liberalización del comercio en nivel multilateral enfrenta problemas derivados de los numerosos intereses divergentes y del modelo de negociación llevado a cabo por el elevado número de miembros de la entidad. Además, naturalmente, existen temas peliagudos que deberían ser tocados con firmeza. Solamente para dar un ejemplo de esos temas complejos, las discusiones tendrían que incidir sobre la política agrícola de la UE (y de los PD como EE.UU, Canadá o Japón) donde aun existe un desempleo en nivel elevado.

Además, no parece existir un liderazgo fuerte para llevar adelante todas las reformas propuestas o deseadas, como se ha podido observar en los vaivenes sobre el paquete de la Conferencia Ministerial de Bali de diciembre de 2013, menos ambicioso que el original de Doha. Su Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y, más recientemente, su protocolo de Enmienda de 27 de noviembre de 2014 (para insertar el nuevo acuerdo en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC) aun enfrenta dificultades aunque, sin duda, es un avance cualquier acuerdo que agilice el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías (incluidas aquellas en tránsito). El tiempo que tardará para entrar en vigencia (condicionado por la ratificación de, como mínimo, dos tercios de los miembros de la entidad, o sea 108 de los 162 miembros actuales) aun no está claro. Si los esfuerzos actuales siguen con la misma intensidad quizá eso sea posible hasta 2017/2018.

De cualquier modo, de momento, siguen las normas de la OMC sin interpenetración con los DD.HH. El reciente acercamiento de la entidad con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el propósito de incrementar esfuerzos para lidiar con la delicada situación del comercio y la seguridad alimentaria es un paso loable que, no obstante, no puede extenderse fácil y eficazmente hacia todas las categorías de DD.HH en función de su régimen jurídico autocontenido.

Además del bilateralismo, existe otro aspecto que parece importante destacar. Mientras la situación económica siga débil y la recuperación modesta, todo tendrá que ser bien calculado. AL tiene proyecciones de crecimiento poco alentadoras de modo que el gran plan de eliminación de la pobreza hasta el año 2030 propuesto por el GBM, aunque coincida con los objetivos socioeconómicos sostenidos por la UE en sus acuerdos asociativos con AL y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Pos-2015) no parece, de momento, muy viable.

Si por un lado el GBM apoya su plan en la creación de un sistema de protección social a nivel global, las inversiones en capital humano y en el crecimiento económico, por otro, la ONU busca, además de la mitigación del cambio climático, la erradicación de la pobreza y la generalización del empleo digno, vectores que los países latinoamericanos aceptan desde que no se conviertan en condicionalidades de acceso de sus productos al mercado interior de la UE.

El escenario está continuamente en movimiento. Los intereses también se reorientan. Por ejemplo, la iniciativa china de creación del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII) a finales de 2014 (en funcionamiento desde el 16.01.2016 y que, como señala Granell Trías, 2015⁸²³, se une al banco de los BRICS, ya creado;) y que ya cuenta con aproximadamente 57 países participantes (incluyendo España, Francia, Italia, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Suiza, Alemania, Austria, Corea del Sur y Reino Unido, en un punto de inflexión de este último país con su tradicional socio EE.UU) y la construcción de corredores económicos desde Asia hasta Europa en la denominada nueva "Ruta de la seda"⁸²⁴, deben acaparar aun más los intereses europeos por Asia. Los acuerdos bilaterales con AL seguirán existiendo, aunque los miembros de la OMC logren salvar sus diferencias en lo que concierne a la

⁸²³ Granell Trías, F. (2015). El Sistema Económico Internacional en 2015. Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española nº 3071, 3-18.

⁸²⁴ Existe un enorme potencial para que grandes empresas europeas obtengan expresivos beneficios económicos en el proceso de ampliación de la red de infraestructuras en Asia Central. Este proceso incluirá tanto rutas marítimas como terrestres para la expedición de mercaderías (v.g., la línea férrea que une la ciudad china Yiwu con Madrid).

facilitación del comercio. Las negociaciones, uno de los tres pilares fundamentales de la OMC, al lado de la vigilancia en el cumplimiento de las reglas y la solución de controversias, presentan una dinámica inferior a las relaciones bilaterales. En las circunstancias actuales, el comercio vía acuerdos bilaterales sigue siendo una opción viable con posibilidades reales de concreción de resultados.

Sobre la cláusula social, su inclusión, relativamente a AL, es jurídicamente cuestionable, puesto que existe acervo normativo, preocupación política y sistema regional de protección de los DD.HH. Claro está que la persistencia de la cláusula social podría ser considerada también en términos de eficiencia y eficacia del SIDH o de la capacidad de respuesta de las políticas nacionales a los problemas socio-económicos. En ambos casos, se trata esencialmente de una apreciación política, donde todo suele ser relativo e interesado.

Este investigador teme que, a pesar de todo, en la práctica, la protección internacional de los DD.HH en AL sigue siendo precaria. Su efectividad se incrementaría con la adecuada coordinación del sistema establecido por la OEA (actualmente criticado por el deterioro democrático en Venezuela), el sistema de la OIT⁸²⁵ y el régimen jurídico de la ONU. En este aspecto este investigador concuerda que sigue siendo importante la inclusión de la cláusula social, no por su dimensión estrictamente jurídica, sino por el compromiso político asumible ante la UE.

5.3 Casos concretos: ejemplos y sanciones. Enfoque empírico y seguimiento de operatividad

Como se ha visto, la UE desde hace años señala algunos de los instrumentos adoptados por la ONU y la OIT en los acuerdos comerciales concluidos con los PED (con especial destaque para aquellos de naturaleza no recíproca como el SPG:

⁸²⁵ Constitución y Convenios Internacionales del Trabajo.

Reglamento nº 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo⁸²⁶, de 25 de octubre de 2012, Anexo VIII, Parte A). El tema de los DD.HH se ha convertido en una pieza fundamental de los acuerdos concluidos por la UE, casi siempre integrando el propio articulado del texto principal del instrumento.

UE establece divisiones subregionales en AL (concretamente América Central, Comunidad Andina y Mercosur)⁸²⁷. Tomando por base sus relaciones bilaterales y los acuerdos comerciales en que expresamente son señalados los DD.HH, se presenta el siguiente cuadro⁸²⁸:

- **Centroamérica⁸²⁹:**

Está constituida por Costa Rica⁸³⁰, El Salvador, Guatemala⁸³¹, Honduras, Nicaragua y Panamá (relación inicialmente con base en el diálogo de San José de 1984). El

⁸²⁶ Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 31.10.2012, L 303/1.

⁸²⁷ European Union. External Action. Recuperado de http://eeas.europa.eu/lac/index_en.htm

⁸²⁸ El Caribe se analiza en el ámbito de los países ACP.

⁸²⁹ En relación a los países centroamericanos, la UE adoptó la Decisión del Consejo de 14 de abril de 2014 relativa a la celebración de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (L 111/4). Decisión 2012/734/UE del Consejo, de 25 de junio de 2012, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, y a la aplicación provisional de su parte IV relativa al comercio (DO L 346 de 15.12.2012, p. 1).

⁸³⁰ Decisión de Ejecución de la Comisión de 24 de julio de 2014 que modifica los anexos de la Decisión 92/260/CEE en lo que respecta a la admisión temporal de caballos registrados procedentes de Costa Rica y la Decisión 2004/211/CE en lo que respecta a las entradas correspondientes a Brasil y Costa Rica en la lista de terceros países y partes de los mismos desde los que se autoriza la importación en la Unión de équidos vivos y esperma, óvulos y embriones de la especie equina [notificada con el número C(2014) 5166] (Texto pertinente a efectos del EEE) (2014/501/UE). Diario Oficial de la Unión Europea de 26.7.2014, L 222/16.

⁸³¹ Diario Oficial de la Unión Europea L 315/1, de 26.11.2013. Comunicación relativa a la aplicación provisional de la parte IV (comercio) del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (Guatemala): *"A la espera de concluir los procedimientos de celebración del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, firmado en Tegucigalpa el 29 de junio de 2012, su parte IV, relativa al comercio, deberá, de acuerdo con su artículo 353, apartado 4, aplicarse de manera provisional entre la Unión Europea y Guatemala a partir del 1 de diciembre de 2013. En virtud del artículo 3, párrafo primero, de la Decisión 2012/734/UE del Consejo (1), relativa a la firma y aplicación provisional del Acuerdo, el artículo 271 no se aplicará de forma provisional"*.

Acuerdo de Asociación UE-América Central ha sido firmado en el año 2012 con el propósito de constituir un área de libre comercio para mercancías y servicios. Está siendo aplicado provisionalmente desde agosto de 2013. Esos países, salvo Panamá, son beneficiarios de un acceso preferencial al mercado único europeo mediante la aplicación del esquema SPG *Plus* (régimen especial de estímulo al desarrollo sostenible y la gobernanza, que promueve la sustentabilidad y los DD.HH).

El acuerdo de asociación prevé una completa liberalización de los intercambios de productos industriales y pesqueros, ya contemplados parcialmente con el SPG⁸³². Ese régimen especial se aplica a los países económicamente vulnerables que ratifiquen y apliquen efectivamente determinados instrumentos internacionales de DD.HH., laborales y medioambientales (actualmente contemplados en el anexo VIII del Reglamento 978/2012).

Según el BM, Panamá ha registrado datos de renta de nivel medio-alto en el periodo 2009-2011. El fin de su acceso privilegiado al mercado único europeo, sin embargo, no ha ocurrido el 1 de enero de 2014, puesto que el país ha logrado concluir las negociaciones de un AC con la UE a fecha de entrada en vigor del Reglamento 978/2012, lo que ha generado la dilatación del período transitorio hasta noviembre de 2014. Los países señalados ya gozaban del trato de Nación Más Favorecida previsto en el anterior acuerdo marco de cooperación UE-Centroamérica de 1993. Los DD.HH están contemplados en el artículo 1 (Principios) del acuerdo de 2012 en los siguientes términos:

“El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y al Estado de Derecho sustenta las políticas internas e internacionales de ambas Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”.

⁸³² El acceso preferencial al mercado único, mediante la aplicación del SPG Plus ya beneficia diversos productos industriales, agrícolas y pesqueros.

Relativamente a Costa Rica, el tema central que interesa a la UE es de naturaleza medioambiental (contaminación de acuíferos por las empresas dedicadas a la producción de piñas, como, por ejemplo, el Humedal de Caño Negro). Las misiones técnicas de la UE contribuyen a las buenas prácticas agrícolas y ambientales. Sin embargo, tanto las misiones como las cadenas comerciales de la UE centran su *atención en la calidad de la fruta ofrecida, y no en la salud de los trabajadores o la de las comunidades, ni los efectos de la producción de la piña en los suelos y en la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica* (Boeglin, 2015)⁸³³.

Los DD.HH están incorporados dentro de los mecanismos de diálogo político (plataforma permanente para el intercambio de puntos de vista sobre multitudes de otros temas: democracia, buena gobernanza, Estado de Derecho, medioambiente etc.). El Acuerdo de Asociación UE-América Central de 2012 (esta parte no está en vigor) se basa en el diálogo político, la cooperación y el establecimiento de una zona de libre comercio. Aunque sea un país de renta media, posee un nivel de desarrollo relativamente elevado, de modo que no figura como un país prioritario para la cooperación de los donantes internacionales⁸³⁴.

Sobre los problemas que afectan muy directamente a los DD.HH.L: sistema judicial muy lento, largos términos de detención sin juicio, trabajo infantil, desigualdad, violencia contra mujeres y niños etc. la UE no ha adoptado ninguna sanción al país.

Por su vez, El Salvador, un país castigado por la violencia callejera, grupos de exterminio, pandillas, pobreza, violencia excesiva por parte de las fuerzas de seguridad, impunidad de los responsables por los abusos cometidos durante la guerra civil (1980-1992), persecución de los defensores de los DD.HH, desapariciones forzadas, violencia física, psicológica y asesinatos contra mujeres y niñas dentro y fuera del hogar, trabajo infantil (diversas violaciones de los DD.HH.L por sus empresas) etc.

⁸³³ Boeglin, N. (2015). La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de <http://www.globalresearch.ca/la-pina-de-costa-rica-ante-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/5439868>

⁸³⁴ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/costarica/index_es.htm

tampoco ha sido sancionado por la UE, aunque la ONU haya exhortado las autoridades del país a respetar esos derechos.

Los DD.HH (así como la democracia, el estado de derecho, la buena gobernanza y la protección del medioambiente) están enmarcados en el Acuerdo de Asociación UE-América Central de 2012 que se articula sobre la base del diálogo político, la cooperación y el libre comercio (la única actualmente en vigor)⁸³⁵.

En relación a Guatemala, la UE no adoptó ninguna sanción fundamentada en las incontables violaciones de los DD.HH.L perpetradas en el país (solamente pronunciamientos de la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, en el 2013, a favor de los juicios por violaciones de los DD.HH durante la Guerra Civil). En el año 2014, después de la suspensión de la juez Yasmín Barrios, la delegación de la UE en Guatemala se pronunció a favor de la independencia de la Justicia y, en 2015, a raíz de los escándalos de corrupción que llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, el Servicio Europeo de Acción Exterior anunció su apoyo a las autoridades electorales para asegurar la transparencia democrática.

Los DD.HH también están enmarcados en Acuerdo de Asociación UE-América Central de 2012. Además, la UE financia diferentes iniciativas de las ONG y otros colectivos en ámbitos como los DD.HH⁸³⁶.

En relación a Honduras, el amedrentamiento, las amenazas y los asesinatos de indígenas, activistas del medio ambiente y defensores de los DD.HH (asesinato de líderes ecologistas como, v.g., Berta Cáceres o del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, v.g., Nelson García) y la extrema vulnerabilidad de la comunidad LGTBI (Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual) solamente ha conducido la UE a adoptar declaraciones (por parte del Servicio Europeo de Acción Exterior y la delegación de la UE en el país). A pesar de sus incontables violaciones de DD.HH.L (incluyendo empleo de mano de obra infantil etc.), la UE tampoco ha sancionado el país.

⁸³⁵ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/el_salvador/index_es.htm

⁸³⁶ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/guatemala/index_es.htm

Por su vez, la cláusula democrática fue considerada más relevante. Durante la negociación del Acuerdo de Asociación con la UE ocurrió el golpe de Estado al gobierno democráticamente electo de Manuel Zelaya. Este evento llevó al Consejo de la UE a separar a Honduras de las negociaciones (reincorporada nuevamente después de la realización de nuevas elecciones). Los DD.HH también se enmarcan en el acuerdo de 2012. Interesa observar que la UE es el principal donante de ayuda oficial al desarrollo del país⁸³⁷.

Con Nicaragua, en el año 2008, la UE decidió suspender fondos de la cooperación por irregularidades en las elecciones locales. Sobre las incontables violaciones de los DD.HH por parte de las autoridades públicas (detenciones arbitrarias, maltrato de personas bajo la custodia policial, tráfico de drogas por agentes públicos, expulsiones de extranjeros, violencia excesiva de las fuerzas de seguridad, - v.g., “masacre de las Jagüitas”) y de los DD.HH.L por parte de empresas privadas (incluyendo el uso de mano de obra infantil etc.) ninguna sanción fue adoptada por la UE contra el país. Los DD.HH también se enmarcan en el acuerdo de 2012. UE es el principal donante de ayuda oficial al desarrollo del país⁸³⁸.

Con Panamá, país que padece de diversos problemas como persecuciones políticas, pandillas y violencia callejera, abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, discriminación contra lésbicas, gays, transexuales y bisexuales, explotación laboral, uso de mano de obra infantil etc., tampoco la UE ha adoptado sanciones. Ahora, eso sí, estudia sancionar bancos y asesores fiscales tras el escándalo de los “Panama Papers”. De cualquier modo, los DD.HH también se enmarcan en el acuerdo de 2012⁸³⁹.

Todos esos países son acusados por diferentes entidades de protección de los DD.HH por el elevado número de amenazas, intimidaciones y ataques (incluyendo agresiones sexuales) a niños, mujeres, indígenas, ecologistas y activistas humanitarios,

⁸³⁷ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/honduras/index_es.htm

⁸³⁸ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/nicaragua/index_es.htm

⁸³⁹ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/panama/index_es.htm

además de violencia callejera y domestica, linchamientos de sospechosos, impunidad de autoridades públicas, sobreexplotación y violación de derechos laborales etc. Todo eso no impidió ni las negociaciones ni la firma de Acuerdo con la UE, que hasta ahora no ha sancionado a ningún de los países por violaciones de los DD.HH.L.

- **Chile:**

Las relaciones comerciales entre la UE y Chile están plasmadas en el Acuerdo de Asociación y su Acta Final, de diciembre de 2002 (vigente desde marzo de 2005), aunque ciertas disposiciones entraron en vigor en febrero de 2003 (Decisión 2002/979/CE del Consejo). Su objetivo es la creación de un área de libre comercio para mercancías y servicios y la eliminación de todos los obstáculos existentes en materia de compras públicas. Los DD.HH. están contemplados en el artículo 1:

“Art. 1. Principios

1. El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y al principio del Estado de Derecho inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”.

La UE tiene una excelente relación con Chile, basada en una amplia convergencia de valores y objetivos comunes a nivel internacional. Los DD.HH están enmarcados en un campo más amplio de diálogos que también abarcan las políticas sociales y de empleo. El pilar comercial entre ambos es el Acuerdo de Libre Comercio (en vigor desde el 2003), marco sobre lo cual se ha incrementado los intercambios comerciales bilaterales durante la última década. La UE es el segundo socio comercial de Chile, por detrás de China (y superando a los EE.UU). Además, es la principal fuente de inversión directa extranjera en el país (en AL, Chile es el cuarto beneficiario de la inversión extranjera directa de la UE, por detrás de Brasil, México y Argentina), por delante de los EE.UU y Canadá⁸⁴⁰.

⁸⁴⁰ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/chile/index_es.htm

La UE no ha adoptado hasta el momento ninguna sanción fundamentada en las violaciones de los DD.HH.L en el país, a pesar de la violencia y discriminación contra mujeres, menores, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, indígenas, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y el uso de mano de obra infantil. Las violaciones de los DD.HH de los integrantes del pueblo Mapuche fueron sancionadas, pero únicamente por la CIDH, no por la UE.

- **Comunidad Andina:**

La Comunidad Andina está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador⁸⁴¹ y Perú. Esos países eran beneficiarios de la extinta modalidad SPG Droga, concedida por la UE para aquellos países implicados en la lucha contra el narcotráfico (mientras la UE goza del trato de la Nación Más Favorecida concedida por ese grupo de países). Las ventajas arancelarias adicionales de ese régimen SPG han sido denunciadas por el gobierno indio bajo el argumento de que eran discriminatorias para los demás PED. En función de la reclamación promovida por el gobierno indio, UE ha iniciado negociaciones visando la celebración de acuerdos asociativos con ese grupo de países. Las dificultades de una negociación conjunta conducirían, finalmente, a una fórmula alternativa de negociación por separado en materia comercial.

Bolivia y Ecuador son actualmente beneficiarios del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG *Plus*), cuyo trato arancelario preferente (para todos los productos industriales y un amplio grupo de bienes agrícolas y pesqueros) está asociado a aquellos países económicamente vulnerables que ratifiquen y apliquen efectivamente diversos instrumentos internacionales de DD.HH.L, medioambientales y de buen gobierno. No obstante, el BM ha registrado en el periodo 2009-2011 valores de renta de nivel medio-alto en Perú, de modo que el país dejaría de ser beneficiario del SPG en enero de 2014.

Sin embargo, eso no ha ocurrido, puesto que el gobierno peruano ha logrado concluir las negociaciones de un AC con la UE a fecha de entrada en vigor del

⁸⁴¹ Recientemente ha sido adoptado el Reglamento (UE) nº 1384/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2014 relativo al trato arancelario a las mercancías originarias de Ecuador. Diario Oficial de la Unión Europea de 30.12.2014 L (372/5).

Reglamento nº 978/2012. De esa forma, tendría un periodo transitorio de adaptación de dos años (finalizado el 21 de noviembre de 2014). Lo mismo ocurre con Colombia. Esos dos países (Colombia y Perú) han concluido un acuerdo multipartito con la UE en el año 2010, vigente⁸⁴² (aplicación provisional) desde el 2013, con posibilidad de adhesión por los demás países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia y Ecuador).

Es interesante mencionar que la famosa “Guerra de los Bananos” (1991-2009, la más larga diferencia comercial registrada desde la creación del GATT/OMC) se ha reflejado en la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se determina que *la suspensión temporal del arancel aduanero preferencial establecido en el marco del mecanismo de estabilización para el banano del acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, no es apropiada para las importaciones de plátanos (bananas) originarios del Perú para el año 2013 (2013/783/UE)*⁸⁴³.

La Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, determinó que la suspensión temporal del arancel aduanero preferencial establecido en el marco del mecanismo de estabilización para el banano (del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra) no es apropiada para las importaciones de plátanos (bananas) originarios del Perú para el año 2014⁸⁴⁴.

⁸⁴² Aplicación provisional: a) para Perú, el 2 de marzo de 2013 y b) para Colombia, el 1 de agosto de 2013. Entrada en vigor definitiva: requiere la aprobación de los parlamentos nacionales de todos los estados miembros de la UE. También merece la pena mencionar la Decisión del Consejo de 8 de julio de 2014 sobre “la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias establecido por el Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, con respecto a la adopción de las Reglas de Procedimiento de dicho Subcomité”. Concretamente se ha adoptado la Decisión del Subcomité MSF UE-Colombia-el Perú. Diario Oficial de la Unión Europea de 10.7.2014, L 201/18.

⁸⁴³ Diario Oficial de la Unión Europea de 20.12.2013, L 346/73. Anteriormente se puede ver el Reglamento (UE) nº 19/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2013 por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra. Diario Oficial de la Unión Europea de 19.1.2013 (L 17/1).

⁸⁴⁴ Diario Oficial de la Unión Europea de 18.12.2014 (L 363/181).

Relativamente a Perú, el AC contempla la liberalización total de los productos industriales y pesqueros (80% desde la entrada en vigor) al paso que con Colombia, la liberalización inicial ha sido del 65%. Hasta el año 2023, todos los productos deberán estar liberalizados. No obstante, el virtud de la contaminación por el virus de la hepatitis A, se ha editado la Decisión de Ejecución de la Comisión de 3 de diciembre de 2014 relativa a las medidas de emergencia para la suspensión de las importaciones de determinados moluscos bivalvos destinados al consumo humano⁸⁴⁵. UE logra, con el acuerdo, la apertura del mercado de esos países para sus principales productos agrícolas, vinos, bebidas espirituosas, carne de cerdo y lácteos. Además, ha sido posible arrancar un compromiso político en materia de compras públicas⁸⁴⁶, servicios e inversiones.

Existe un capítulo de desarrollo sostenible contemplado en el acuerdo que aborda la protección laboral y medioambiental, cuyo objetivo perseguido es similar al contemplado en el SPG. Su falta de cumplimiento puede llevar, teóricamente, a la suspensión inmediata de las preferencias contempladas en el acuerdo. Este acuerdo ha suscitado una intensa discusión en el ámbito de la UE sobre la naturaleza de la competencia comercial (exclusiva para la Comisión Europea o mixta - UE y estados miembros - para el Consejo Europeo).

Finalmente si ha optado por la naturaleza mixta, por contener el acuerdo tanto una cláusula de protección de los DD.HH (cláusula social) como otra específica sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva. Para evitar retrasos en el inicio de su vigencia (definitiva), puesto que la competencia mixta requiere la aprobación por los parlamentos nacionales de todos los estados miembros de la UE y considerando que la materia principal del acuerdo es de naturaleza comercial (competencia exclusiva), se ha pactado la aplicación anticipada de modo provisional. Los DD.HH están contemplados en el Capítulo 1 (Elementos Esenciales), artículo 1 (Principios Generales):

⁸⁴⁵ Decisión de Ejecución de la Comisión de 3 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2008/866/CE, relativa a las medidas de emergencia para la suspensión de las importaciones de determinados moluscos bivalvos destinados al consumo humano procedentes de Perú, en lo que respecta a su período de aplicación [notificada con el número C(2014) 9113]. Diario Oficial de la Unión Europea de 5.12.2014 (L 349/63).

⁸⁴⁶ Colombia no es signatario del Acuerdo Plurianual de Compras Públicas de la OMC.

“El respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de los principios que sustentan el Estado de Derecho, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes. El respeto de dichos principios constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”.

Las relaciones con Bolivia se desarrollan tanto bilateralmente como en el marco de la cooperación regional entre la UE y la Comunidad Andina⁸⁴⁷. En el país, las prioridades de la UE son la democratización y el desarrollo económicamente sostenible.

La UE es el quinto socio comercial de Bolivia, que goza de acceso privilegiado al mercado único europeo en virtud del SPG *Plus*. Las inversiones europeas se concentran en la explotación minera y el sector de los hidrocarburos. Bolivia es el mayor beneficiario en AL de la cooperación bilateral para el desarrollo de la UE⁸⁴⁸, cuya actuación está centrada en la creación de oportunidades económicas a través de un trabajo digno, en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas ilícitas y en la conservación del medio ambiente.

Bolivia padece de problemas serios como la impunidad, el racismo (casos Sucre, El Porvenir), la xenofobia, la agresión contra los indígenas y campesinos pobres, la violencia contra las mujeres, la crisis en la administración de la justicia, la insuficiente cobertura del sistema judicial, la falta de transparencia, los linchamientos de sospechosos, las vejaciones y torturas, los problemas en el sistema penitenciario, las agresiones contra periodistas, el escaso acceso a la información pública (ONU, Asamblea General)⁸⁴⁹ además de incontables violaciones de los DD.HH.L en el ámbito empresarial (sobreexplotación, uso de mano de obra infantil etc.). La UE no adoptó

⁸⁴⁷ Incluyendo el acuerdo marco de cooperación de 1993, actualizado y reforzado por el acuerdo de diálogo político y cooperación firmado en el 2003 pero que aun no entró en vigor.

⁸⁴⁸ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/bolivia/index_es.htm

⁸⁴⁹ ONU, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos. Informe anual del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: recuperado de <http://bolivia.ohchr.org/docs/Informe%20Anual%202013.pdf>

ninguna sanción contra el país, optando por el dialogo y la cooperación para el desarrollo sostenido de los recursos naturales para los campesinos y la población indígena (Delegación de la UE en Bolivia)⁸⁵⁰ y la difusión de sus valores democráticos y de DD.HH, particularmente la lucha contra la desigualdad, la discriminación y la violencia contra la mujer, la gobernabilidad y la libertad de expresión (Delegación de la UE en Bolivia)⁸⁵¹.

Colombia es uno de los principales socios de la UE en AL (su economía es cada vez más dinámica y abierta y el país tiene un creciente peso en la región). Las relaciones entre la UE y Colombia están basadas en el diálogo político, el comercio y la cooperación para el desarrollo, cuyas prioridades son la paz, la estabilidad, el desarrollo alternativo, la justicia, los DD.HH, el comercio y la competitividad (esas prioridades están plasmadas en el Documento de Estrategia Nacional)⁸⁵².

Colombia es el cuarto socio económico más importante de la UE en la región al paso que la UE es el segundo socio comercial más importante de Colombia. Los DD.HH están enmarcados en el ámbito del diálogo bilateral sobre DD.HH⁸⁵³.

Los problemas de violaciones de DD.HH fueron objeto de preguntas y debates en el ámbito del Parlamento Europeo (que también adoptó resoluciones en apoyo al proceso de paz con las FARC, la más reciente propuesta de enero de 2016)⁸⁵⁴. La Hoja de Ruta en que el gobierno colombiano se comprometía a hacer avances en esa materia - y que acompañaba el acuerdo con la UE - no es vinculante. La UE no ha adoptado ninguna sanción basada en las múltiples violaciones de los DD.HH.L en el país (que incluye, por ejemplo, el uso de mano de obra infantil y la sobreexplotación de los trabajadores).

⁸⁵⁰ Delegación de la UE en Bolivia. Recuperado de http://www.eeas.europa.eu/delegations/bolivia/index_es.htm

⁸⁵¹ Delegación de la UE en Bolivia, recuperado de http://www.eeas.europa.eu/delegations/bolivia/eu_bolivia/index_es.htm

⁸⁵² Documento de Estrategia nacional. Recuperado de http://eeas.europa.eu/colombia/csp/07_13_es.pdf

⁸⁵³ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/colombia/index_es.htm

⁸⁵⁴ Parlamento Europeo. Proceso de paz en Colombia. Recuperado de <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0016+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES>

Ecuador es un socio importante de la UE en AL. Las prioridades de la cooperación UE-Ecuador son: a) fomentar un mayor gasto social en calidad por parte del gobierno ecuatoriano (especialmente en el sector educativo) y b) reforzar la competitividad y el acceso al mercado de las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas⁸⁵⁵. La UE es uno de los mayores socios comerciales del país, que goza de un acceso privilegiado al mercado de la UE gracias al sistema SPG *Plus*⁸⁵⁶. Ninguna medida sancionadora fue adoptada por la UE contra Ecuador, a pesar de sus problemas de DD.HH.L (empleo de mano de obra infantil, sobreexplotación de los trabajadores etc.).

Por su vez, Perú, un país de economía emergente que comparte varios objetivos y valores con la UE, es considerado un socio clave en AL. Las relaciones de la UE con Perú se centran en el diálogo político, los intercambios comerciales y la cooperación para el desarrollo⁸⁵⁷. La UE es el segundo socio comercial del país y el principal inversor extranjero. Los flujos comerciales tienden a incrementarse por el acuerdo comercial entre UE-Perú/Colombia (aplicación provisional). La cooperación bilateral enfatiza la modernización del Estado, la buena gobernanza, la inclusión social, el desarrollo social y la cohesión social⁸⁵⁸.

A pesar de la corrupción, el tráfico de drogas, la agresión a los indígenas y de innumerables violaciones de los DD.HH.L (v.g., uso de mano de obra infantil, sobreexplotación laboral etc.), ninguna sanción ha sido adoptada por la UE contra el país.

- **México:**

El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y sus Estados Miembros y los Estados Mexicanos, de

⁸⁵⁵ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/ecuador/index_es.htm

⁸⁵⁶ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/ecuador/index_es.htm

⁸⁵⁷ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/peru/index_es.htm

⁸⁵⁸ Documento de Estrategia Nacional. Revisión Intermedia. Recuperado de http://eeas.europa.eu/peru/csp/11_13_mtr_fr.pdf

diciembre de 1997 (vigencia desde octubre de 2000)⁸⁵⁹ contempla los DD.HH en sus arts. 1 y 39:

“Art. 1

El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”.

Por su vez, el artículo 39 (Cooperación sobre Derechos Humanos y Democracia), dispone que:

“1. Las Partes convienen en que la cooperación en esta esfera debe tener como objeto promover los principios a los que se refiere el artículo 1.

2. La cooperación se centrará principalmente en lo siguiente:

a) el desarrollo de la sociedad civil por medio de programas de enseñanza, formación y sensibilización de la opinión pública;

b) medidas de formación y de información destinadas a ayudar a las instituciones a funcionar de manera más efectiva y fortalecer el Estado de Derecho;

c) la promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos.

3. Las Partes podrán ejecutar proyectos conjuntos a fin de fortalecer la cooperación entre sus respectivas instituciones electorales y entre aquellas encargadas de vigilar y promover el cumplimiento de los derechos humanos”.

México es la segunda mayor economía de AL con un papel cada vez más importante en esa zona y en el mundo. Fue el primer país latinoamericano en celebrar un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación con la UE (el acuerdo, de 1997, se centra en el dialogo político, el comercio y la cooperación). Además de la zona

⁸⁵⁹ El acuerdo se hace acompañar de varios otros instrumentos. Los principales son las decisiones 2/2000, 2/2001, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 1/2005, 1/2008, 2/2008 y 3/2008 del Consejo Conjunto Unión Europea-México.

de libre comercio con la UE, desde el 2008 ese país es considerado uno de los dos socios estratégicos de la UE en AL⁸⁶⁰ (el otro es Brasil). El diálogo entre UE y México abarca varios temas, entre ellos la democracia y los DD.HH, la paz y seguridad internacional, la gobernanza económica mundial, el desarrollo sostenible y el cambio climático. A pesar de las incontables violaciones de los DD.HH.L, ninguna sanción fue adoptada por la UE en relación al país.

- **Mercosur:**

El marco jurídico básico de las relaciones comerciales entre la UE y el Mercosur es el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados Partes, por otra, vigente desde el año 1999. Durante la VI Cumbre UE-América Latina y Caribe (ALC), celebrada en Madrid (2010) se han reanudado las negociaciones tendentes a la conclusión de un futuro y amplio acuerdo de asociación entre los dos bloques.

El futuro acuerdo pretende cubrir el comercio de bienes y servicios, las inversiones y diversos temas de especial relevancia para la UE como la propiedad intelectual (incluyendo la protección de las indicaciones geográficas), las barreras técnicas al comercio, los temas sanitarios y fitosanitarios y las compras públicas⁸⁶¹. Previamente, la UE había firmado acuerdos bilaterales de cooperación con:

- Argentina (1990): plasmado en la Decisión 90/530/CEE del Consejo, de 8 de octubre de 1990, relativa a la celebración del acuerdo marco de cooperación comercial y económica entre la Comunidad Económica Europea y la República Argentina (vigente desde el 1 de agosto de 1991)⁸⁶².

⁸⁶⁰ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/mexico/index_es.htm

⁸⁶¹ Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. Mercosur. Recuperado de <http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relaciones-bilaterales-union-europea/america/Paginas/mercosur.aspx>

⁸⁶² Diario Oficial L 295 de 26.10.1990.

- Paraguay (1992): plasmado en la Decisión 92/509/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la celebración del acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República del Paraguay (vigencia desde el 1 de noviembre de 1992)⁸⁶³.
- Uruguay (1992): plasmado en la Decisión 92/205/CEE del Consejo, de 16 de marzo de 1992, relativa a la celebración del acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Oriental del Uruguay (vigente desde el 1 de noviembre de 1994)⁸⁶⁴.
- Brasil (1995): plasmado en la Decisión 95/445/CE del Consejo, de 30 de octubre de 1995, relativa a la celebración del acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa del Brasil (vigencia desde el 1 de noviembre de 1995)⁸⁶⁵.

Durante años, esos países se han beneficiado del SPG europeo. Con el Reglamento nº 978/2012 y la aplicación por su art. 4 de los criterios de clasificación del BM (países de renta alta o media-alta durante tres años consecutivos), solamente Paraguay podrá seguir siendo acogido por el sistema. Los demás países han dejado de ser beneficiarios desde el 1 de enero de 2014. El Acuerdo Marco contempla los DD.HH en su Título I (Objetivos, Principios y Ámbito de Aplicación), artículo 1 (Fundamento de la Cooperación):

“El respeto de los principios democráticos y de los Derechos Humanos fundamentales, tal y como se enuncian en la Declaración Universal de Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”.

Las altas partes aún están negociando el nuevo acuerdo. De momento, además del Acuerdo Marco de 1999, la relación bilateral con los países miembros del Mercosur se encuentra así:

⁸⁶³ Diario Oficial L 313 de 30.10.1992.

⁸⁶⁴ Diario Oficial L 94 de 8.4.1992.

⁸⁶⁵ Diario Oficial L 262 de 1.11.1995.

- Argentina:

Las relaciones comerciales de la UE con este país están asentadas, hasta que se concluya y entre en vigor el futuro Acuerdo de Asociación (que reemplazará el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, vigente desde julio de 1999 y considerado el marco jurídico básico), en el Acuerdo Marco de Cooperación CEE-Argentina de 1990. Argentina era beneficiaria del acceso preferencial al mercado único de la UE. No obstante, con el actual SPG (Reglamento nº 978/2012) el país no puede obtener rebajas arancelarias, puesto que durante el periodo 2009-2011 ha logrado, según el Banco Mundial, valores de renta de nivel medio-alto. Los DD.HH están contemplados en el art. 1.1 (Fundamento Democrático de la Cooperación) de ese acuerdo:

“Las relaciones de cooperación entre la Comunidad y Argentina, así como todas las disposiciones del presente Acuerdo, se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos que inspiran las políticas internas e internacionales de la Comunidad y de Argentina”.

La UE en su conjunto es el primer socio en cooperación, el primer inversor y el segundo socio comercial de Argentina. El acuerdo marco de cooperación comercial y económica entre UE y Argentina (1990) está centrado en la consolidación de la democracia y los DD.HH y la integración regional. Los proyectos que involucran los DD.HH y la colaboración con agentes no estatales están financiados por el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, cuyos objetivos son contribuir al desarrollo y la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los DD.HH y las libertades fundamentales en todo el mundo⁸⁶⁶. A pesar de las incontables violaciones de los DD.HH.L (por agentes públicos y privados), ninguna sanción fue adoptada por la UE en relación al país.

- Paraguay:

Hasta que se concluya y entre en vigor el futuro Acuerdo de Asociación entre la UE y el Mercosur (que reemplazará el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, vigente desde julio de 1999, considerado el marco jurídico básico), las relaciones

⁸⁶⁶ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/argentina/index_es.htm

comerciales entre la UE y Paraguay se basan en el Acuerdo Marco de Cooperación de 1992, cuyo art. 1 (Fundamento Democrático de la Cooperación) señala que:

“Las relaciones de cooperación entre la Comunidad y el Paraguay y todas las disposiciones del presente Acuerdo se basan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos que inspiran las políticas interiores e internacionales tanto de la Comunidad como del Paraguay”.

Los flujos comerciales entre UE y Paraguay van en aumento. La UE es el mayor socio comercial de Paraguay por detrás del Mercosur y China⁸⁶⁷. Desde 2008 el país disfruta del Sistema SPG *Plus*. La cooperación UE-Paraguay durante el periodo 2007-2013 se centró en tres ámbitos prioritarios: reducción de la pobreza, educación e integración económica. A pesar de las incontables violaciones de los DD.HH.L (extrema precariedad laboral, uso de mano de obra infantil etc.), ninguna sanción fue adoptada por la UE en relación al país.

- Uruguay:

Hasta que se concluya y entre en vigor el futuro Acuerdo de Asociación entre la UE y el Mercosur (que reemplazará el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, vigente desde julio de 1999, considerado el marco jurídico básico), las relaciones comerciales entre la UE y Uruguay se basan en el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación de 1992 (vigente desde el año 1994).

Uruguay era beneficiario del acceso preferencial al mercado único de la UE. No obstante, con el actual SPG (Reglamento nº 978/2012) el país, desde 1 de enero de 2014, ha dejado de recibir un trato preferente (rebajas arancelarias), puesto que durante el periodo 2009-2011 ha logrado, según el BM, valores de renta de nivel medio-alto. Los DD.HH. están contemplados en el art. 1 (Fundamento Democrático de la Cooperación) del Acuerdo Marco de Cooperación:

“Las relaciones de cooperación entre la Comunidad y el Uruguay y todas las disposiciones del presente Acuerdo se basan en el respeto de los principios

⁸⁶⁷ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/paraguay/index_es.htm

democráticos y de los derechos humanos que inspiran las políticas interiores e internacionales tanto de la Comunidad como del Uruguay”.

la UE es el principal inversor del país y su tercer socio comercial. Los proyectos en campos como los DD.HH son financiados por el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo y la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los DD.HH y las libertades fundamentales en todo el mundo⁸⁶⁸. UE no adoptó sanciones por la violación de los DD.HH.L en el país.

- Brasil:

Hasta que se concluya y entre en vigor el futuro Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur (que reemplazará el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, vigente desde julio de 1999, considerado el marco jurídico básico), las relaciones comerciales entre la UE y Brasil se basan en el Acuerdo Marco de Cooperación CEE-Brasil de 1995 (Decisión 95/445/CE del Consejo, de 30 de octubre de 1995, relativa a la celebración del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa del Brasil)⁸⁶⁹. Los DD.HH están contemplados en el art. 1 (Fundamento Democrático de la Cooperación) de este acuerdo:

“Las relaciones de cooperación entre la Comunidad y Brasil, y todas las disposiciones del presente Acuerdo, se basarán en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos que inspiran las políticas interiores e internacionales tanto de la Comunidad como de Brasil, y que constituyen un elemento fundamental del presente Acuerdo”.

⁸⁶⁸ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/uruguay/index_es.htm

⁸⁶⁹ Anteriormente, CEE y Brasil habían concluido otros acuerdos: a) acuerdo comercial entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa del Brasil (19 de diciembre de 1973), b) acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa de Brasil (18 de septiembre de 1980), c) acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa de Brasil (29 de junio de 1992). El último es el acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa de Brasil, de 30 de octubre de 1995.

Brasil era beneficiario de un acceso preferencial al mercado único de la UE. No obstante, con el actual SPG (Reglamento nº 978/2012) el país no puede más ser beneficiario de las correspondientes rebajas arancelarias, puesto que durante el periodo 2009-2011 ha logrado, según el BM, valores de renta de nivel medio-alto.

Existe, además, entre la UE y Brasil, un proceso de Asociación Estratégica implementado mediante un Plan de Acción. La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 30 de mayo de 2007, “Hacia el establecimiento de una asociación estratégica entre la Unión Europea y Brasil” también abarca el tema de los DD.HH, especialmente en su punto 2.2: *mejora de la situación en materia de derechos humanos, fomento de la democracia y la gobernanza*.

Brasil es el principal socio comercial de la UE en AL (socio estratégico desde el 2007). Paralelamente, la UE es el primer socio comercial de Brasil⁸⁷⁰. A pesar de las incontables violaciones de los DD.HH.L (incluyendo, entre otras, trabajo en condiciones análogas a la esclavitud y empleo de mano de obra infantil) ninguna sanción fue adoptada por la UE en relación al país.

Venezuela se ha incorporado al Mercosur en el año 2012 (Bolivia está en proceso de adhesión). Al contrario de los demás miembros del bloque, las relaciones de la UE con ese país no están ordenadas por ningún marco jurídico bilateral (tampoco por el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y la Comunidad Andina firmado en el 2003 porque Venezuela se retiró de ese bloque en el año 2006).

Venezuela participa actualmente en el diálogo y en las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre UE y Mercosur (en el ámbito regional, las relaciones están enmarcadas en el conjunto de la CELAC). La UE es el cuarto socio comercial de Venezuela. El Documento de Estrategia Nacional⁸⁷¹, que delimita los ejes principales de la cooperación financiera bilateral con el país, establece como prioridades de ayuda el

⁸⁷⁰ Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/brazil/index_pt.htm

⁸⁷¹ Comisión Europea. Venezuela Country Strategy Paper (2007-2013). Recuperado de http://eeas.europa.eu/venezuela/csp/07_13_en.pdf

apoyo a la modernización y la descentralización del Estado y sus instituciones, el crecimiento económico equitativo y sostenible y la diversificación de la economía⁸⁷².

La UE proporciona ayuda a Venezuela en el campo de los DD.HH y en la colaboración con agentes no estatales (esos proyectos están financiados por el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo y la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los DD.HH y las libertades fundamentales en todo el mundo). A pesar de las incontables violaciones de los DD.HH.L, ninguna sanción fue adoptada por la UE en relación al país. UE insiste en el dialogo político constructivo entre las partes involucradas.

Del expuesto, se observa que la UE opta por el diálogo constructivo, no por las sanciones comerciales a los estados latinoamericanos que violen los DD.HH.L (mediante agentes públicos o privados). Además del modelo europeo de capitalismo, basado en la sociedad, hay que reconocer que las sanciones comerciales no ayudarían a los intereses de la UE en AL, en virtud de la colosal participación comercial de la UE en esos países.

⁸⁷² Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/venezuela/index_es.htm

CONCLUSIONES

LA PROTECCIÓN SOCIAL COMO CONDICIONANTE EN LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA

1.1 ASPECTOS DESTACABLES

El tema elegido para esta tesis doctoral involucra diferentes campos del conocimiento (Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Comercio Internacional, Política Exterior de la UE) con el objetivo de analizar si la cláusula social (cláusula de protección de los derechos humanos y laborales) incorporada en los acuerdos comerciales UE-AL es eficaz en la promoción de esos derechos (hipótesis de partida) y jurídicamente justificable (hipótesis de desarrollo).

Con el propósito de interconectar coherente y eficazmente esos campos, el marco teórico elegido ha sido la historia de las relaciones internacionales, con especial destaque para las aportaciones proporcionadas por los historiadores franceses Pierre Renouvin (“fuerzas profundas”) y Fernand Braudel (“estructuralismo temporal”). Aunque sean casi imperceptibles en la redacción de la tesis, ambas sirvieron de base y actuaron como guía de orientación durante todo el proceso de investigación y elaboración de la tesis doctoral.

Después de abordar las distintas cuestiones metodológicas pertinentes, se ha establecido una hipótesis de partida y una hipótesis de desarrollo (surgida con el avance de la investigación). La primera está plasmada en la siguiente formulación: ¿cumple la cláusula social incorporada en los acuerdos comerciales concluidos entre UE y AL eficazmente su función de promotora de los DD.HH.L? y la segunda en la pregunta: ¿es jurídicamente justificable la incorporación de la cláusula social en los acuerdos comerciales concluidos entre UE y AL?

Se ha establecido también una reflexión prospectiva sobre la posibilidad de que la UE, con base en la violación de la cláusula social por los países latinoamericanos, aplique sanciones como la suspensión de los acuerdos comerciales o la restricción del flujo comercial con esos países)⁸⁷³. Finalmente se alude a las fuentes empleadas en la

⁸⁷³ Por ejemplo, condicionar sin contemplaciones el acceso a su mercado único de bienes y servicios procedentes de AL en función de las violaciones de los DD.HH.L practicadas en esa parte del planeta.

realización de la tesis doctoral.

El Capítulo 2 (“Derechos Humanos y Comercio Internacional: delineamientos básicos”) enfoca principalmente la relación entre la cláusula social y el funcionamiento del mercado; el Capítulo 3 (“Los Derechos Humanos en las Relaciones Comerciales de la Unión Europea”) aborda diversos otros aspectos de la referida cláusula; el capítulo 4 (“La Protección Social: Derechos Humanos y Derechos Laborales”) desarrolla el amplio tema de los DD.HH.L y el Capítulo 5 (“La Protección Social en la Unión Europea y en América Latina”) profundiza el análisis de la incorporación de los DD.HH.L en la UE y, muy especialmente, en AL.

Aunque ciertamente mejorable, esta tesis doctoral ha buscado ampliar el tema de la cláusula social mediante la aportación de diferentes campos del conocimiento, sin establecer compartimientos herméticos o visiones aisladas. El objetivo de hacer convergir temas asociados a distintas áreas (derecho, economía, comercio internacional, relaciones internacionales, política exterior de la UE), trabajar con sus diferentes perspectivas, encauzarlas dentro de las técnicas de investigación en Relaciones Internacionales e integrar todos estos elementos de modo a que se convirtiesen en un solo bloque de conocimiento asimilable por estudiosos y profesionales de todas las áreas involucradas ha sido un planteamiento arriesgado y un reto importante cuyo proceso de desarrollo pretende ser novedoso. En los epígrafes siguientes, con base en los resultados obtenidos, serán ofrecidas respuestas a los principales planteamientos de la investigación.

I.- SÍNTESIS, OBJETIVOS, ALCANCE Y APORTACIONES RELEVANTES. ASPECTOS METODOLÓGICOS

La tesis ha tenido por objeto de estudio la interrelación entre los DD.HH.L, por un lado, y el comercio UE-AL, por otro. Se ha apreciado el tema tanto en el marco del funcionamiento del mercado como en el ámbito de los instrumentos jurídicos de protección de los DD.HH.L en vigor en AL. Concretamente, se ha profundizado el tema

de la eficacia de la cláusula social en los mercados (hipótesis de partida) y su presencia (justificable o no bajo la perspectiva jurídica) en los ABC concluidos en el ámbito UE-AL (hipótesis de desarrollo).

Con la finalidad de alcanzar una visión omnicomprendensiva del tema abordado en esta investigación, se ha procedido a la elaboración de un marco constituido por dos elementos centrales y sutilmente fusionados a lo largo de la investigación: las fuerzas profundas de la historia y la estructura temporal de los factores condicionantes en las decisiones políticas de los miembros de la SI (factores económicos, comerciales, políticos, sociales, empresariales etc.).

De modo discreto, englobando con sutileza esos factores, se ha optado por un abordaje más cercano de la historia total, de carácter holístico, en vez de la tradicional abordaje evenemencial. Con la selección de estos temas y el abordaje realizado, la tesis busca cumplir satisfactoriamente su objetivo de cubrir una laguna de conocimiento en el campo jurídico y de las relaciones internacionales entre UE y AL.

Del mismo modo, la investigación pretende constituirse en un punto de referencia y de partida para futuras investigaciones en este campo del conocimiento, así como estimular el interés y el pensamiento crítico entre diversos actores sociales europeos y latinoamericanos. La difusión del contenido y de los resultados de la tesis podrían permitir un incremento cuantitativo y cualitativo del conocimiento existente sobre las relaciones comerciales entre ambas regiones (sin descartar la posibilidad de constitución de una comunidad epistémica dedicada a la búsqueda de soluciones para los problemas existentes entre el comercio internacional, los DD.HH.L y la economía, con particular énfasis en el funcionamiento del mercado).

Los resultados de la investigación también podrían ser aprovechados por los medios académicos y centros decisorios (formuladores y ejecutores de la política exterior, agentes económicos y sociales etc.) así como por el público en general. Su conocimiento (y discusión) permitiría no solamente percibir críticamente la existencia

del problema (ineficacia de la cláusula social en el mercado y falta de justificación jurídica para su presencia en los ABC), como discernirlo adecuadamente y profundizarlo, generando un puente propicio para la elaboración de diagnósticos más precisos y adecuados y la ideación de instrumentos más eficientes, eficaces y útiles para el perfeccionamiento de las relaciones comerciales en el ámbito UE-AL.

En lo que concierne al alcance de la investigación, a las aportaciones y a las novedades que incorpora, modestamente y con plena conciencia de las limitaciones, carencias y deficiencias de la tesis doctoral (y de la responsabilidad exclusiva de su autor en ellas), se espera que haya podido contribuir positivamente al estudio de la cláusula social.

En este sentido, esta investigación pretende lograr, aunque parcialmente, seis aportaciones principales: 1) el encauzamiento en la misma investigación de campos tradicionalmente estudiados de forma separada (v.g., economía y derecho), 2) el análisis de las relaciones entre UE y AL tomando en consideración la óptica latinoamericana, 3) la aportación de datos y conocimientos oriundos de diferentes campos (v.g., economía, derecho, comercio internacional, política exterior de la UE etc.), 4) el conocimiento y la difusión de los meandros del funcionamiento del mercado y su interferencia negativa en el rol de promotor de los DD.HH.L atribuido a la cláusula social, 5) la difusión de los instrumentos jurídicos de protección de los DD.HH.L en vigor en AL, 6) la reivindicación de una perspectiva analítica que se desarrolla bajo el manto de las fuerzas profundas de la historia y de su estructura temporal.

En lo que se refiere a los aspectos metodológicos que afectan a la tesis, en virtud de una opción personal del investigador y en función de su aplicabilidad al objeto de estudio analizado, se ha elegido para el enfoque sistémico y el marco teórico, la Historia de las Relaciones Internacionales. Su base permite una visión más amplia sobre los diferentes factores involucrados en las relaciones internacionales de naturaleza comercial entre estados y grupos de estados.

En este sentido, la combinación de la perspectiva histórica con la perspectiva sistémica permitió cierta flexibilidad y dinamismo dentro de este marco de análisis, capaz de albergar distintos campos del conocimiento. Su función de brújula e hilo conductor ha estado presente durante todo el tiempo de desarrollo de la investigación, aunque de modo muy sutil, casi imperceptible. Finalmente, ha cumplido un rol fundamental en la verificación de las hipótesis de partida y de desarrollo planteadas, sirviendo tanto de orientación en el análisis como de base para la interpretación de los datos colectados durante la investigación, además de proporcionar un soporte sólido para comprender la relación existente entre los fenómenos estudiados.

Aunque ciertamente mejorables, los resultados finales esperan poder ser considerados positivos: se ha pretendido lograr el encauzamiento de temas habitualmente estudiados de forma aislada (tanto en derecho - v.g., derecho internacional público, derecho del comercio internacional, libertad de competencia, derechos humanos -, como en economía, en comercio internacional, en relaciones internacionales, en política internacional y en ciencias políticas) y la exposición crítica de un tema relevante pero poco estudiado (la cláusula social incluida en los AC concluidos por la UE con los PED) fuera del marco de los países ACP.

Entre las dificultades para el conocimiento del objeto de estudio se puede destacar la ausencia de investigaciones previas u obras de referencia sobre la materia, incluyendo investigaciones parciales que sistematizasen e integrasen los temas abordados. La brutal escasez de análisis que proporcionasen claves interpretativas y parámetros de referencia sobre la línea de investigación planteada en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales fue una limitación severa e importante. Además de los problemas señalados, las fuentes disponibles (muy dispersas) han podido contribuir para la dispersión y fragmentación de la realidad investigada durante el desarrollo de la investigación. No obstante, este investigador ha procurado en todo el momento (lectura de fuentes primarias y secundarias, análisis de los datos etc.) mantener un riguroso control sobre todos los datos recabados, con el propósito específico de minimizar al máximo el uso de la imaginación.

II.- VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS PROPUESTAS

La suposición, intuición o presentimiento del investigador en lo que concierne a la generación de una respuesta adecuada a los problemas suscitados por la realidad investigada debe ser aquí verificada.

El objetivo de la hipótesis es el conocimiento, la comprensión de aquello que el investigador intuye pero aún no conoce con exactitud en su complejidad y funcionamiento. Sirve de base e hilo conductor de toda la investigación. La confirmación de la hipótesis resulta directamente aplicable al conocimiento de la realidad investigada, aportando explicaciones sobre su funcionamiento y permitiendo cierto grado de previsión sobre su comportamiento, lo que abre el camino para nuevas y posteriores investigaciones. La refutación de la hipótesis también resulta directamente aplicable al conocimiento de la realidad. Aunque la verificación de la proposición contraria infirme la hipótesis de partida y conlleve al descarte de las explicaciones anteriores realizadas sobre esa realidad, también aquí se abriría el camino para nuevas investigaciones, obligando a desechar las hipótesis refutadas y, en consecuencia, a formular nuevas hipótesis de trabajo.

La hipótesis de partida se ha plasmado en la siguiente pregunta: ¿Cumple la cláusula social incorporada en los AC celebrados entre UE-AL eficazmente su función de promotora de los DD.HH.L?

La investigación ha demostrado que no. La cláusula social busca fomentar a los DD.HH.L en los PED (de hecho, esa cláusula plasma el objetivo de la UE de fomentar sus valores fundamentales por todo el mundo) pero no altera sustancialmente el funcionamiento del mercado en el marco de la libre competencia. En otras palabras, las empresas privadas seguirán con poder decisorio para asignar los recursos económicos disponibles (o potencialmente viables mediante préstamos, por ejemplo), incluyendo la partida destinada a los salarios. Además, en un mercado competitivo (libre competencia), las dos principales opciones empresariales para consolidar e incrementar

la cuota de mercado son el liderazgo en costes (costes de producción muy bajos, asociados a bajos salarios, explotación laboral y violación de los DD.HH) y la innovación (cuyos elevados recursos invertidos son parcialmente compensados *a posteriori* por la producción a bajo coste).

Actualmente las empresas buscan ambas estrategias: a) innovar (lo que exige inversiones elevadas con resultados inciertos) y b) producir con bajos costes (hasta mismo para compensar la inversión realizada en el proceso de innovación). La cláusula social no puede idóneamente alterar el proceso decisorio de asignación de recursos, al contrario, la experiencia señala que los PED con legislaciones protectoras más estrictas:

- No se caracterizan por el respeto sistemático y generalizado de los DD.HH.L.
- Suelen presentar elevado nivel de corrupción por parte de los agentes públicos designados a la inspección de las normas jurídicas laborales incorporadas en los respectivos ordenamientos jurídicos.

No siendo la cláusula social realmente eficaz en su rol de promotora de los DD.HH.L en el mercado (hipótesis de partida)⁸⁷⁴, se debilita mucho, bajo la perspectiva de cumplimiento de sus objetivos, la idea de establecerla como un elemento condicionante en las relaciones comerciales entre la UE y AL. En un momento posterior (hipótesis de desarrollo), la investigación se ha centrado en el análisis de la justificación jurídica de la incorporación de la cláusula social en el ámbito de las relaciones comerciales UE-AL, algo que serviría de base, también, para su establecimiento como elemento condicionante en esas relaciones.

Durante el avance de la investigación, la hipótesis de desarrollo se ha plasmado en la siguiente formulación: ¿Es jurídicamente justificable la inclusión de la cláusula social en los acuerdos comerciales concluidos entre UE y AL? La investigación ha demostrado

⁸⁷⁴ Por el funcionamiento del mercado y la decisión de asignación de recursos económicos (incluyendo la partida destinada a los salarios) por parte de los agentes privados.

que no. La presencia (y permanencia) de la cláusula social en los AC con AL es justificable en términos políticos - en función del modelo europeo de capitalismo, centrado en la sociedad - pero no en términos estrictamente jurídicos, por el hecho de existir un inmenso acervo de normas protectoras de los DD.HH.L - incluso en nivel constitucional - en los países latinoamericanos (así como la existencia del SIDH). Además, el problema de la eficacia de esas normas jurídicas protectoras en AL no puede ser legalmente apreciado en el ámbito de la UE (también se podría mencionar el elevado nivel técnico-jurídico de las decisiones del SIDH).

Por último, se debe señalar que este investigador acepta introducir eventuales matizaciones *a posteriori*, como consecuencia de las aportaciones y abordajes de otros especialistas o investigadores o del surgimiento de nuevos documentos que revelen una realidad diferente de la expuesta. El autor de esta tesis doctoral desea y espera que otros investigadores sigan adelante en este complejo tema, tan relevante para millones de personas en todo el mundo. Después de todo, esas reglas se aplican tanto a Latinoamérica como a cualquier PED.

III.- TEMAS PENDIENTES. EVOLUCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y PROSPECTIVA

No es posible abarcar en una sola tesis doctoral todos los temas y todas las perspectivas metodológicas desde las que se puede proceder a la investigación de la realidad objeto de estudio.

Existen varias áreas en el conocimiento de las relaciones comerciales internacionales que pueden ser aún exploradas. Entre las más destacadas, cabría señalar, por ejemplo: a) la posibilidad de que la cláusula social funcione como barrera comercial no arancelaria, b) la validez de la restricción del comercio internacional con base en la violación de la cláusula social ante la OMC, en virtud de la necesidad de convergencia entre los ABC y los acuerdos multilaterales que, como es notorio, no contemplan los DD.HH.L.

Así, la tesis busca cumplir el propósito de lanzar las semillas de varios temas conexos al futuro. En este lanzamiento existen enormes posibilidades de investigación a ser desarrollada por este investigador o por otros, tanto europeos como latinoamericanos.

Como reflexión prospectiva se podría preguntar si la UE estaría realmente dispuesta a sancionar a todos los países latinoamericanos violadores de los DD.HH.L. Aunque esta posibilidad jurídica exista, la probabilidad de que esto ocurra se reduce casi a cero cuando se observa que entre UE y AL existen diversos e importantes intereses en juego, de lo que, en la investigación, fueron destacadas las de naturaleza comercial (otros intereses relevantes serían, naturalmente, los de naturaleza geopolítica, geoeconómica, estratégica, la creación de marcos jurídicos estables para la transferencia de capitales, inversión extranjera directa, internacionalización de empresas europeas etc.

La apreciación, más o menos estricta, que puede realizar la UE sobre la violación de los DD.HH.L en esos países, así como la eventual decisión de aplicar sanciones y restringir los flujos comerciales, es de naturaleza esencialmente política, no jurídica (esta apreciación debe tomar en cuenta el conjunto de beneficios, perjuicios y consecuencias derivadas de la eventual adopción de una decisión sancionadora).

En resumen, la UE puede adoptar medidas económicas y comerciales más drásticas en relación a muchos de los países latinoamericanos violadores de los DD.HH.L pero, siguiendo su característica histórica, tendería a aplicar sanciones efectivas solamente en pocos y selectos casos. Aun así, sus intereses comerciales y financieros en AL serían afectados con esa decisión.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA TRABAJADA

● Resumen y presentación:

Agazzi, E. (2002). El desafío de la interdisciplinariedad: Dificultades y logros, *Revista Empresa y Humanismo*, 2, 241-252.

Almeida, P. R. D. (2001). *A economia internacional no século XX: um ensaio de síntese*. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 44(1), 112-136.

Arenal, C. D. (1990). *Introducción a las Relaciones Internacionales*. Madrid: Tecnos.

Arlen, J. (1998). Comment: The future of behavioral economic analysis of law. *Vand. L. Rev.*, 51, 1765-1798.

Bennett, J. (2002). Multinational corporations, social responsibility and conflict. *Journal of International Affairs*, Columbia University, 55(2), 393-414.

Castello, A. (2000). La cláusula social y la declaración social laboral del MERCOSUR. *Derecho Laboral*, 198, 201-228.

Díaz Barrado, C. M. (2008). Marco político-normativo de las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe a la luz de las Cumbres. Díaz Barrado, Fernández Liesa y Zapatero Miguel. Perspectivas sobre las relaciones entre Unión Europea y América Latina. Madrid: Universidad Carlos III y Boletín Oficial del Estado, 17-26.

Dunoff, J. L., & Trachtman, J. P. (1999). Economic analysis of international law. *Yale Journal International Law*, 24, 1-39.

Durán, P. (1995). Sobre el análisis económico del Derecho. *Anuario de filosofía del derecho*, (12), 705-718.

Fernández Liesa, C. R. (2008). La democracia y los derechos humanos en el espacio eurolatinoamericano e iberoamericano. Díaz Barrado, Fernández Liesa y Zapatero Miguel. Perspectivas sobre las relaciones entre Unión Europea y América Latina. Madrid: Universidad Carlos III y Boletín Oficial del Estado, 51-77.

Gilpin, R. (2011). *Global political economy: Understanding the international economic order*. Princeton University Press.

Gilpin, R., & Gilpin, J. M. (1987). *The political economy of international relations* (Vol. 8). Princeton: Princeton University Press.

Jacobstein, J. M., Mersky, R. M., & Dunn, D. J. (1994). *Fundamentals of legal research*. Foundation Press.

Luz, M. (2005). *La reforma laboral en América Latina: 15 años después*. M. L. V. Ruíz (Ed.). Oficina Internacional del Trabajo, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

McCombie, J. S., Thirlwall, A. P., & Thompson, P. (1994). *Economic growth and the balance-of-payments constraint*. New York: St. Martin's press.

Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people. *California management review*, 36(2), 9-21.

Pomeranz, K., & Topik, S. (2012). *The World That Trade Created: Society, Culture, and the World Economy, 1400 to the Present*. New York: Me sharpe.

Portes, A. (1995). *En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la economía no regulada*. FLACSO Mexico.

Renouvin, P., & Duroselle, J. B. (2000). Introducción a la historia de las relaciones internacionales. Fondo de Cultura Económica.

Roemer, A. (1994). *Introducción al Análisis Económico del Derecho*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Sanahuja, J. A. (2015). *La UE y CELAC: Revitalización de una relación estratégica*. Relaciones birregionales/Series de los Foros de Reflexión. Hamburgo: Fundación EU-LAC.

Sotillo Lorenzo, J. A. (2009). Las Cumbres Unión Europea-América Latina y Caribe: Encuentros y Desencuentros, *Revista de Derecho Comunitario Europeo* n° 33 (mayo/agosto), 541-566.

van Liemt, G. (1989). Normas laborales mínimas y comercio internacional: ¿ resulta viable una cláusula social?. *Revista internacional del trabajo*, 108(3), 301-318.

Vázquez, R. (1996). Comentarios sobre algunos supuestos filosóficos del análisis económico del derecho. *Isonomia*, 5, 311-342.

Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *Introduction to comparative law*. Oxford: Clarendon Press.

●Capítulo I

Acosta-López, J. I. y Duque-Vallejo, A. M. (2008). Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿norma de ius cogens? *Revista colombiana de derecho internacional*, 12, 13-34.

Akerlof, G. A., & Shiller, R. J. (2010). *Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism*. Princeton University Press.

Alonso, J. A. & Mosley, P. (1999). *La eficacia de la cooperación internacional al desarrollo: evaluación de la ayuda*. Madrid: Civitas.

Alston, P. y Goodman, R. (2007). *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*. Oxford: OUP.

Art, R. C. & Jervis, R. *International politics: enduring concepts and contemporary issues*. New York: Harper Collins.

Ávila Álvarez, A.; Castillo Urrutia, J. A., & Díaz Mier, M. A. (1997). *Política Comercial Exterior de la Unión Europea*. Madrid: Ediciones Pirámide.

Ayuso, A. & Sánchez-Montijano. (2011). *Propuesta para la Creación de un Observatorio de las Migraciones entre la UE y América Latina y el Caribe*. Bruselas: Centro de Estudios Internacionales de Barcelona (CIDOB). Departamento Temático de la Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión.

Bahillo, C. G. (2012). Ética y responsabilidad empresarial en la sociedad globalizada. *Revista Icade. Publicación de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales* 75, 125-142.

Baldwin, R. E. (2006). Multilateralising regionalism: spaghetti bowls as building blocs on the path to global free trade. *The World Economy*, 29(11), 1451-1518.

Baldwin, R., Cohen, D., Sapir, A., Venables. A. (1999) *Market Integration, Regionalism and the Global Economy*, Cambridge University Press.

Bandeira, M. (1997). *Relações Brasil-EUA no contexto da globalização: Presença dos EUA no Brasil*. São Paulo: Senac.

Bergsten, C. F. (1998). *Fifty Years of the GATT/WTO: Lessons from the Past for Strategies for the Future*. Institute for International Economics.

Berr, H. (2012). *La synthèse en histoire*. Paris: Albin Michel.

Bindi, F. M. (2010). *The foreign policy of the European Union: Assessing Europe's role in the world*. Washington D.C.: Brookings Institution Press

Blackett, A. (1999). Whither Social Clause-Human Rights, Trade Theory and Treaty Interpretation. *Colum. Hum. Rts. L. Rev.*, 31, 1-36.

Bourrinet, J., & Torrelli, M. (1996): *Les relations extérieures de la C.E.E.*: Paris: Librairie l'étourdi.

Bouvier, J. (1965). L'appareil conceptuel dans l'histoire économique contemporaine. *Revue économique*, 1-17.

Braudel, F. (1986). *La historia y las ciencias sociales*. Madrid: Alianza.

Braudel, F. (1995). *The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II*. Univ of California Press.

Braudel, F., Martín, F. R., & Tovar, I. P. V. (1984). *Civilización material, economía y capitalismo, siglos XV-XVIII*. Madrid: Alianza.

Bronckers, M. C. (2001). More Power to the WTO?. *Journal of International Economic Law*, 4(1), 41-65.

Butterfield, H. (2012). *The historical novel: An essay*. Cambridge: Cambridge University Press.

Calduch, R. (1991). Curso de métodos y técnicas de investigación en Relaciones Internacionales. Recuperado de <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/Metodos.pdf>

Cazau, P. (2006). *Introducción a la investigación en ciencias sociales*. Lima. Editorial Universidad Ricardo Palma.

Cepillo Galván, M. A. (2010). *Política comercial europea y preferencias arancelarias*. Madrid: Editorial Dykinson.

Cervo, A. L., & Bueno, C. (1992). *Historia da política exterior do Brasil* (vol. 81). Editora Ática.

Chabod, F. (1987). *La idea de nación*. México: Fondo de cultura económica.

Clapham, J. H. (1987). *An Economic History of Britain, The Cambridge Economic History of Modern Britain*. Cambridge.

Collingsworth, T. (2001). Essential Element of Fair Trade and Sustainable Development in the FTAA is an Enforceable Social Clause, *An. Rich. J. Global L. & Bus.*, 2, 197-232.

Conde Pérez, E. (2002). *Los instrumentos de la política exterior de la Unión Europea*. Madrid: Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense, Facultad de Derecho.

Cook, S. W., Deutsch, M., Jahoda, M., & Selltiz, C. (1976). *Métodos de investigación en las relaciones sociales*. Madrid: Rialp.

Cox, A & Chapman, J. (1999). *The European Community External Cooperation Programmes. Policies, Management and Distribution*. London: Overseas Development Institute (ODI).

Crawford, J. A. & Laird, S. (2001). Regional trade agreements and the WTO. *The North American Journal of Economics and Finance*, 12(2), 193-211.

D'Amoja, F. (1981). Primato della politica estera, primato della politica interna nella storia delle relazioni internazionali. *Studi Storici*, 553-570.

Davies, I. A., Doherty, B., & Knox, S. (2010). The rise and stall of a fair trade pioneer: The Cafédirect story. *Journal of Business Ethics*, 92(1), 127-147.

de Almeida, P. R. (2012). *Relações internacionais e política externa do Brasil*. São Paulo: LTC.

De Feyter, K. (2013). *Human Rights: Social Justice in the Age of the Market (Global Issues)*. London: Zed Books.

De Keyser, V. (2011). Informe sobre las políticas exteriores de la UE en favor de la democratización. Comisión de Asuntos Exteriores.

de la Garza, E. (2012). La subcontratación y la acumulación de capital en el nivel global. pp. 17-40, en Celis J., (2012) Comp. La Subcontratación Laboral en América Latina: Miradas Multidimensionales. Medellín, Colombia: Escuela Nacional Sindical.

de Rezende Martins, E. C. (2002). *Relações internacionais: cultura e poder*. Ibri.
de Wet, E. (1995). Labor standards in the globalized economy: the inclusion of a social clause in the General Agreement on Tariff and Trade/World Trade Organization. *Human Rights Quarterly*, 871, 443-462.

Degnbol-Martinussen, J. & Engberg-Pedersen, P. (2003). *Aid: Understanding International Development Cooperation*. Londres, Zed Books.

Demaret, P. (1988). *Les relations extérieures des Communautés européennes et le marché intérieur: aspects juridiques et fonctionnels*. Brussels: Stora scientia.

Désir, H. (2010). *Document de Travail sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords de commerce internationaux*. Parlamento Europeo (Commission du commerce international).

Devuyst, Y. & Serdarevic, A. (2007). World Trade Organization and Regional Trade Agreements: Bridging the Constitutional Credibility Gap, *The. Duke J. Comp. & Int'l L.*, 18, 1-16.

Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.

Doratioto, F. (1994). *Espaços nacionais na América Latina: da utopia bolivariana à fragmentação*. Editora Brasiliense.

Dunne, T., & Wheeler, N. J. (1999). *Human rights in global politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dunne, T., & Wheeler, N. J. (1999). *Human rights in global politics*. Cambridge University Press.

Dunoff, J. L. (2000). WTO in Transition: Of Constituents, Competence and Coherence, *The. Geo. Wash. Int'l L. Rev.*, 33, 979-1001.

Durkheim, E. (2013). *Institutional analysis* (revisión crítica realizada por Lucien Levy-Bruhl). University of Chicago Press. Durkheim, E., Mauss, M., & Nelson, B. (1971). Note on the Notion of Civilization. *Social Research* nº 117, 808-813.

Agnew, J. A. (1989). *The power of place: Bringing together geographical and sociological imaginations*. Sidney: Allen & Unwin Australia.

Duroselle, J. B. (1990). *História da Europa*. São Paulo: Círculo de Leitores.

Duroselle, J. B. (1998). *Todo imperio perecerá: Teoría sobre las relaciones internacionales*. México: Fondo de Cultura Económica.

Duverger, M. (1996). *Métodos de las ciencias sociales*. Barcelona: Ariel.

Edwards, M. (2004). *Future Positive: International Cooperation in the 21st Century*. Oxford: Earthscan.

Eeckhout, P. (2004). *External Relations of the European Union: Legal and Constitutional Foundations*. Londres: Oxford University Press.

Elgström, O. & Smith, M. (2006). *The European Union's Roles in International Politics: Concepts And Analysis*. Londres: Taylor & Francis Publishers.

Espiell, H. G. (1975): Le système interaméricain comme régime regional de protection international des droits de l'homme". *RCADI*, 145, 72-118.

Falcon, F. J. C., & Moura, G. (1981). *A formação do mundo contemporâneo*. São Paulo: Editora Campus.

Fenwick, H. & Glancey, R. (2012). *Civil Liberties & Human Rights 2013-2014 (Questions and Answers)*. London: Routledge.

Figari, G. M. (1991). *Argentina y América Latina: conflictos e integración*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Fjellner, C. (2011). Documento de Trabajo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas. Comisión de Comercio Internacional.

Flory, M. (1974). Souveraineté des états et cooperation pour le développement. *RCADI*, 141, 221-269.

Fontana, J. (1999). *Historia: análisis del pasado y proyecto social*. Barcelona: Biblioteca del Bolsillo.

Ford, R. A. (2001). Beef Hormone Dispute and Carousel Sanctions: A Roundabout Way of Forcing Compliance with World Trade Organization Decisions, *The Brooklyn Journal of International Law.*, 27, 543-1137.

Forsythe, D. P. (2012). *Human rights in international relations*. Cambridge University Press.

Fouchard, P. (2007). *Droit et moral dans les relations économiques internationales*. Paris: Centre Français de l'Arbitrage.

Frankel, J. A., Stein, E., & Wei, S. J. (1997). *Regional trading blocs in the world economic system*. Peterson Institute.

Fraser, C. (2007). *An Introduction to European Foreign Policy*. New York: Taylor & Francis Publishers.

Freres, C. (2000). The European Union as a Global "Civilian Power": Development Cooperation in EU-Latin American Relations. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 42(2), 63-85.

Fugier, A. (2007). La Guerra de las Naranjas: (Luciano Bonaparte en Badajoz). L. A. L. Píriz (Ed.). Diputación Provincial, Departamento de Publicaciones.

Fukuyama, F. (1992). *El fin de la historia y el último hombre*. Barcelona: Planeta.

Gamble, A. & Stuart, D. L. (2009). *The European Union and world politics: consensus and division*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

García, R. F. (1977). *Metodología de la investigación*. México: Trillas.

Garrett, G (1992). *International Cooperation and Institutional Choice: The European Community's Internal Market*. Cambridge: The MIT Press.

Gilpin, R. (1971). The politics of transnational economic relations. *International Organization*, 25(03), 398-419.

Ginzburg, C., Martín, F., & Cuartero, F. (1997). *El queso y los gusanos*. Barcelona: Muchnik editores.

Gowa, J. (1986). Anarchy, egoism, and third images: The Evolution of Cooperation and international relations, *International Organization*, 40(01), 167-186.

Gowa, J. (1995). *Allies, adversaries, and international trade*. Princeton University Press.

Gowa, J., & Mansfield, E. D. (1993). Power politics and international trade. *American Political Science Review*, 87(02), 408-420.

Grabendorff, W. & Seidelmann, R. (2005). *Relations Between the European Union and Latin America: Biregionalism in a Changing Global System* (Internationale Politik Und Sicherheit). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. Internationale Politik Und Sicherheit.

Grabendorff, W., & Seidelmann, R. (2005). *Relations between the European Union and Latin America: biregionalism in a changing global system* (Vol. 57). Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co.

Grisanti, L. X. (2004). El nuevo interregionalismo trasatlántico: la asociación estratégica Unión Europea-América Latina (vol. 4). BID-INTAL.

Hill, C. & Smith, M. (2011). *International Relations and the European Union*. Oxford: OUP.

Hitters, J. C. (1991). *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*. Buenos Aires: Ediar.

Iggers, G. G., & Powell, J. M. (1990). *Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline*. Nueva York: Syracuse Univ Pr.

Ishay, M. R. (2008). *The history of human rights: From ancient times to the globalization era*. Univ of California Press.

Israel, J. (1998). *Droit des libertés fondamentales*. Paris: LGDJ.

Jørgensen, R. F. (2006). *Human rights in the global information society*. MIT Press.

Kabunda, B. M. (2000). *Derechos humanos en Africa: teorías y prácticas*. Universidad de Deusto.

Kaddous, C. (1998). *Le droit des relations extérieures dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes*. Bruxelles: Bruylant.

Kazak, M. (2011). Documento de Trabajo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales de la ayuda macrofinanciera a terceros países. Parlamento Europeo. Comisión de Comercio Internacional.

Kelly, J. P. (2001). Judicial Activism at the World Trade Organization: Developing Principles of Self-Restraint. *Nw. J. Int'l L. & Bus.*, 22, 353-371.

Keukeleire, S. y MacNaughtan, J. (2008). *The Foreign Policy of the European Union*. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Kingah, S. (2006). The Revised Cotonou Agreement between the European Community and the African, Caribbean and Pacific States: Innovations on Security, Political Dialogue, Transparency, Money and Social Responsibility. *Journal of African Law*, 50(01), 59-71.

Kuyper, P. J. (1994). The law of GATT as a special field of international law: Ignorance, further refinement or self-contained system of international law?. *Netherlands Yearbook of International Law*, 25, 227-257.

Kuznets, S. (1980). Driving forces of economic growth: What can we learn from history?. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 116(3), 409-431.

Lafer, C. (1988): *A Reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt*. São Paulo, Cia das Letras.

Lai, C. C. (2000). Braudel's Concepts and Methodology Reconsidered, *The European Legacy* 5 (1), 65-86. Ver también, del mismo autor, la obra de 2004: *Braudel's Historiography Reconsidered*. Maryland: University Press of America.

Leary, V. (1982). *International labour conventions and national law. The effectiveness of the automatic incorporation of treaties in national legal systems*. Boston, Martinus Nijhoff.

Lee, R. G. (2012). *Blackstone's Statutes on Public Law & Human Rights 2012-2013* (Blackstone's Statute Series). Oxford: OUP.

Lenz, T. (2009). *From Geopolitics to Geoeconomics: The European Union's Promotion of Regional Integration in Latin America*. Saarbrücken: VDM Verlag.

Lewis-Anthony, S. (1994). *Treaty based procedures for making human rights complaints within the UN system. Guide to international human rights practice* (2^a ed.). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Lewis, W. A., Stavenhagen, R. & Soberón, O. (1958). *Teoría del desarrollo económico*. México: Fondo de Cultura Económica.

Lindroos, A., & Mehling, M. (2005). Dispelling the chimera of 'self-contained regimes' international law and the WTO. *European Journal of International Law*, 16(5), 857-877.

Lustick, I. S. (1996). History, historiography, and political science: Multiple historical records and the problem of selection bias. *American Political Science Review*, 605-618.

Lynch, F. (1984). Resolving the Paradox of the Monnet Plan: National and International Planning in French Reconstruction*. *The Economic History Review*, 37(2), 229-243.

Mamontoff, A. M. (2013). Risque, vulnérabilité et protection sociale. *PLes cahiers européens des sciences sociales*, 3, 31-58.

Mansfield, E. D., & Reinhardt, E. (2003). Multilateral determinants of regionalism: The effects of GATT/WTO on the formation of preferential trading arrangements. *International organization*, 57(04), 829-862.

Marquez, G. (2008). *Outsiders? The Changing Patterns of Exclusion in Latin America and the Caribbean, Economic and Social Progress in Latin America*. Inter-American Development Bank. David Rockefeller/ Inter-American Development Bank.

Mavroidis, P. C. (2000). Remedies in the WTO legal system: between a rock and a hard place. *European Journal of International Law*, 11(4), 763-813.

McMahon, J. A. (1998): *The Development Cooperation Policy of the EC*. London, Boston: Kluwer Law International.

- Merle, M. (1991). *Sociología de las Relaciones Internacionales*. Madrid: Alianza.
- Michalak, W., & Gibb, R. (1997). Trading blocs and multilateralism in the world economy. *Annals of the Association of American Geographers*, 87(2), 264-279.
- Mihr, A. (2011). *Human Rights Benchmarks for EU'S External Policy*. Utrecht: Utrecht University.
- Nagarajan, N. (1998). *Regionalism and the WTO: New Rules for the Game?* European Commission.
- Nuttall, S. J. (2000). *European Foreign Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Ohmae, K. (1992). El mundo sin fronteras: poder y estrategia en la economía entrelazada. Serie Publicaciones Misceláneas A1/SC (IICA), 96, 11-27.
- Orazem, P. F., Tzannatos, Z. y Sedlacek, G. (2009). *Child Labor and Education in Latin America: An Economic Perspective*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Orbie, J. (2008). *Europe's Global Role: External Policies of the European Union*. Surrey: Ashgate Publishing.
- Paillard, Y. G. (1994). *Expansion occidentale et dépendance mondiale: fin du XVIIIe – 1994*. Paris: Armand Colin.
- Panagariya, A. (2002). EU preferential trade arrangements and developing countries. *The World Economy*, 25(10), 1415-1432.
- Parlamento Europeo. Tratado de Lisboa. Recuperado de http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html
- Pauwelyn, J. (2000). Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules-Toward a More Collective Approach. *American Journal of International Law*, 512, 335-347.
- Pérez Bernardez, C. (2007): *La proyección exterior de la Unión Europea: desafíos y realidad*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Pérez-Soba, I. (2000). *Cooperación para el desarrollo. Legislación y directrices*. Madrid: Trotta.
- Perkmann, M & Sum, N. (2002). *Globalization, regionalization and cross border regions*. Paris: Lavoisier.

Petersmann, E. U. (1997). *The GATT/WTO dispute settlement system: international law, international organizations and dispute settlement* (Vol. 23). New York: Martinus Nijhoff Publishers.

Porter, M. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. *Harvard Business Review*, 86(1), 58-77.

Rajagopal, B. (2003). *International Law from Below: Development, Social Movements and Third World*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rapoport, M. (1997). La globalización económica: ideologías, realidad, historia. *Revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad*, 7(12), 3-42.

Raymond, Q. & Campenhoudt, L. V. (1998). *Manual de investigação em ciências sociais*. Lisboa: Gradiva.

Remiro Brotons, A & Blazquez Navarro, I. (2006): *El futuro de la acción exterior de la Unión Europea*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Renouvin, P. & Duroselle, J. B. (2000). *Introducción a la historia de las relaciones internacionales*. México: Fondo de Cultura Económica.

Robalino, D. A., Ribe, H. y Walker, I. (2010). *Achieving Effective Social Protection for All in Latin America and the Caribbean: From Right to Reality (Directions in Development)*. Washington: World Bank Publications.

Sahagun, F. (1998). *De Gutenberg a Internet. La sociedad internacional de la información*. Madrid: Edit. Estudios Internacionales de la Complutense.

Saïfi, T. (2012). Documento de Trabajo sobre el comercio y la inversión como motores de crecimiento para los países en desarrollo. Parlamento Europeo. Comisión de Comercio Internacional.

Sanahuja, J. A. (2000). Asimetrías económicas y concertación política en las relaciones Unión Europea-América Latina: un examen de los problemas comerciales. *Revista electrónica de estudios internacionales*, 1-18.

Sanahuja, J. A. (2008): *La efectividad de la cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y América Latina: balance y perspectivas*, Documento de Estrategia, Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión. Dirección B, Parlamento Europeo, abril.

Sanchez Ramos, B. (2005). *La Unión Europea y las relaciones diplomáticas*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Saraiva, J. F. S. (2001). *História das relações internacionais: O objeto de estudo e a evolução do conhecimento. Relações internacionais — dois séculos de história*. Brasília: IPRI, 15-58.

Saraiva, J. F. S. (2001). *Relações internacionais: dois séculos de história. Entre a ordem bipolar e o policentrismo (de 1947 a nossos dias)*. Brasília: Ibrl.

Sarquis, D. (2001). ¿Historia o coyuntura?: hacia una redefinición del análisis histórico en relaciones internacionales, *Revista Mexicana de Política Exterior*, 65 (nov.2001-feb.2002),126-143.

Scheinin, M. (1995). *Economics and Social Rights as Legal Rights. Economic, Social and Cultural Rights – A Textbook*. Dordrecht: Nijhoff.

Schlosser, P. (2000). Jurisdiction and international judicial and administrative cooperation. *RCADI*, 2000, 284, 311-387.

Schmitz, H. (2000). *Does Local Cooperation Matter? Evidence from Industrial Clusters in South Asia and Latin America*. Oxford Development Studies, V. 28, Issue 3.

Scholz, H. (2010). *Documento de Trabajo sobre las relaciones comerciales UE-América Latina*. Parlamento Europeo. Comisión de Comercio Internacional.

Sheehan, J. J. (1981). What is German history? Reflections on the role of the nation in German history and historiography. *The Journal of Modern History*, 2-23.

Sikkink, K (1993): *Human rights, principled issue-networks, and sovereignty in Latin America*. Massachusetts: IO Foundation and the Massachusetts Institute of Technology.

Smith, K. (2008). *European Union Foreign Policy in a Changing World*. Hoboken: John Wiley & Sons.

Smith, K. E. (1998). The use of political conditionality in the EU's relations with third countries: How effective? *European Foreign Affairs Review*, 3(2), 253-274.

Smith, K. E. (2011). *The European Union and the Review of the Human Rights Council*. European Parliament.

Smith, M. E. (2003). *Europe's Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Söderbaum, F. y Patrik, P. (2010). *The European Union and the global South*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

- Sorel, J. (2004). *L' emergence de la personne humaine en droit international: l'exemple de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice*. Roma: Editoriale Scientifica.
- Sotillo Lorenzo, J. A. (2014). La política exterior y la política de cooperación: paradojas del caso español, *Comillas Journal of International Relations*, nº 1 pp. 117-131.
- Spero, J. E, & Hart, J. (2009). *The politics of international economic relations*. Cengage Learning.
- Swedberg, R. (2000). *Max Weber and the idea of economic sociology*. Princeton University Press.
- Thobie, J. (1985). *La dialectique forces profondes-décision dans l'histoire des relations internationales*. *Relations internationales*, 41, 29-38.
- Tomassini, L. (1991). *La política internacional en un mundo postmoderno*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
- Tomz, M. (2007): *Reputation and International Cooperation: Sovereign Debt across Three Centuries*. Princeton: Princeton University Press.
- Torrent, R. (1998). *Derecho y práctica de las relaciones exteriores de la Unión Europea*. Barcelona: CEDECS.
- Toynbee, A. (1972). *A Study of History Illustrated*. Cambridge: Oxford University Press.
- Truyol y Sierra, A. (1973). *La teoría de las relaciones internacionales como Sociología*. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.
- Valor, C. (2006). What if all trade was fair trade? The potential of a social clause to achieve the goals of fair trade. *Journal of Strategic Marketing*, 14(3), 263-275.
- Verdier, D. & O'Rourke, K. (1994). *Democracy and international trade: Britain, France, and the United States, 1860-1990*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Verma, G.K. & Beard, R.M. (1981). *What is Educational Research? Perspectives on techniques of research*, Aldershot, Gower.
- Vigazzi, B. (1991). *Politica estera e opinione pubblica in Italia dall'unità ai giorni nostri: orientamenti degli studi e prospettive della ricerca*. Milano: Editoriale Jaca Book.

Vincent, R. J. (1986). *Human rights and international relations*. Cambridge University Press.

Watson, A. (2009). *The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis*. Londres: Routledge.

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Univ of California Press.

Weber, M. (1981). *General economic history*. New Jersey: Transaction publishers.

Weber, M. (2002). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism and Other Writings*. Londres: Penguin.

Weber, M. (2009). *Essays in sociology*. Londres: Routledge.

Wilkinson, J. (2007). Fair trade: dynamic and dilemmas of a market oriented global social movement. *Journal of Consumer Policy*, 30(3), 219-239.

Winters, L. A. (1999). Regionalism vs. multilateralism. *Market integration, regionalism and the global economy*, 5-49. Krueger, A. O. (1999). Are preferential trading arrangements trade-liberalizing or protectionist?. *The Journal of Economic Perspectives*, 105-124.

Woods, N. (1995). Economic ideas and international relations: beyond rational neglect. *International Studies Quarterly*, 161-180.

Young-Anawaty, A. (1980). Human Rights and the ACP-EEC Lomé II Convention: Business as usual at the EEC. *NYUJ Int'l L. & Pol.*, 13, 63-94.

Zeller, G. (1987). *Les institutions de la France au XVIe siècle* (Vol. 14). Presses universitaires de France.

● Capítulo II

Adamy, W. (1994). International Trade and Social Standards, *Intereconomics* n° 29, 11-12/1994, 269-277.

Aggestam, L. (2008). Introduction: ethical power Europe? *International affairs*, 84(1), 1-11.

Alben, E. (2001). GATT and the Fair Wage: A Historical Perspective on the Labor-Trade Link. *Columbia Law Review*, 1410-1447.

Aldecoa Luzárraga, F. (2002). *La integración europea. Génesis y desarrollo de la Unión Europea (1979-2002)*. Madrid, Tecnos.

Aldecoa Luzárraga, F. (2005). La política exterior común y el proceso constitucional, *Revista de Derecho de la Unión Europea* nº 9, 19-37.

Aldecoa Luzárraga, F. (2006). La nueva política exterior de responsabilidad y su dimensión ética. *Eikasia: revista de filosofía* nº 6, 1-23.

Aldecoa Luzárraga, F. & Guinea Lorente, M. (2008). El rescate sustancial de la Constitución Europea a través del Tratado de Lisboa: la salida del laberinto. *Documentos de Trabajo (Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos)*, nº 9, 1-32.

Appelbaum, R. P., & Christerson, B. (1997). Cheap labor strategies and export-oriented industrialization: some lessons from the Los Angeles/East Asia apparel connection. *International Journal of Urban and Regional Research*, 21(2), 202-217.

Arye .H. (2009). *Public Finance and Public Policies. Responsibilities and Limitations of Government*. Cambridge University Press.

Barnard, C. & Peers, S. (2014). *European Union Law*. Oxford: OUP.

Bhagwati, J. (2007). *In Defense of Globalization*. Oxford: Oxford University Press.

Chan, A. (2003). Racing to the bottom: international trade without a social clause. *Third World Quarterly*, 24(6), 1011-1028.

Charnovitz, S. (1987). Influence of International Labour Standards on the World Trading Regime-A Historical Overview, *The. Int'l Lab. Rev.*, 126, 565-586.

Coller, X., Edwards, T., & Rees, C. (1999). Difusión e isomorfismo en las organizaciones. El caso de las multinacionales. *Reis*, 79-94.

Collingsworth, T., Goold, J. W., & Harvey, P. J. (1994). Labor and free trade: time for a global new deal. *Foreign Affairs*, 73(1), 8-13.

Cordella, T. & Grilo, I. (2001). Social dumping and relocation: is there a case for imposing a social clause? *Regional Science and Urban Economics*, 31(6), 643-668.

Corden, W. M. & Vousden, N. (2001). Paved with Good Intentions: Social Dumping and Raising Labour Standards in Developing Countries. *Globalization under threat*, 124-143.

DataméricaGlobal: Venezuela, gran donante de renta media. Política Exterior, Real Instituto Encano y Flacso España, recuperado de <http://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/datamericaglobal-venezuela-gran-donante-de-renta-media/>

De Wet, E. (1995). Labor standards in the globalized economy: the inclusion of a social clause in the General Agreement on Tariff and Trade/World Trade Organization. *Human Rights Quarterly*, 443-462.

Devlin, R., Estevadeordal, A., & Rodríguez, A. (2006). *The Emergence of China: Opportunities and Challenges for Latin America and the Caribbean*. IDB.

Díaz-Alejandro, C. F. (1975). North-south relations: The economic component. *International Organization*, 29(01), 213-241.

Duchene, F. & Ball, G. W. (1980). *Jean Monnet: The First Statesman of Interdependence*. New York: W. W. Norton and Company, Inc.

Elmslie, B. & Milberg, W. (1996). Free trade and social dumping: lessons from the regulation of US interstate commerce. *Challenge* 72, 46-52.

Freeman, R. B., & Nickell, S. (1988). Labour market institutions and economic performance. *Economic Policy*, 136, 64-80.

French, J. D. (1996). Será a Cláusula Social do GATT/OMC um Pesadelo, um Santo Graal ou uma Ilusão Fútil? Procurando Garantias Vinculadas ao Comércio dos Direitos Internacionais dos Trabalhadores, en S. Portela, I. Rodrigues, T. Vigevani y H. Zylberstajn, *Processos de Integração Regional e as Respostas da Sociedade: O Sindicalismo na Argentina, Brasil, México e Venezuela*. Río de Janeiro: Paz e Terra.

French, J. D. & Cowie, J. R. (1995). *Labor and NAFTA: A Briefing Book*. Durham: The Duke-UNC Program in Latin American Studies.

García-Castrillón, C. O (2016). “Derechos Humanos y Responsabilidad Corporativa: vías para su articulación jurídica internacional” in *Nuevos retos y amenazas a la protección de los derechos humanos en la era de la globalización* (López Martín, A. G, editora y Chinchón Álvarez, J., coordinador). Valencia. Tirant lo Blanch, 143-171.

Garcia, F. J. (1999). Global Market and Human Rights: Trading Away the Human Rights Principle, *The Brooklyn Journal International Law*, 25, 51-70.

Gaytán, R. T. (1998). *Teoría del comercio internacional*. México: Siglo XXI.

Giovannetti, G. (2014). *The European Union in Global Governance*. Curso realizado por Iversity entre 28 de abril a 13 de junio. Apuntes personales.

Giovannetti, G. & Quintieri, B. (2007). *Globalizzazione, specializzazione produttiva e mercato del lavoro. lavoro presentato al convegno “Globalizzazione, specializzazione produttiva e mercato del lavoro: verso un nuovo welfare”* organizzato dalla Fondazione Manlio Masi e dal CNEL.

Gough, I. (1999). *Capitalism and social cohesion: essays on exclusion and integration*. Macmillan.

Granell Trías, F. (2005). Política exterior europea y pobreza mundial. *Economía Exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española*, nº 35, 51-57.

Granell Trías, F. (2008). La cuarta oleada de organismos económicos internacionales. *Revista de Economía mundial*, 18, 369-380.

Granell Trías, F. (2011). La evolución de la cooperación europea para el desarrollo. *Revista española de desarrollo y cooperación* nº 27 (Ejemplar dedicado a: 25 aniversario del Magister en Cooperación Internacional), 59-73.

Großmann, H. & Koopmann, G. (1994). Minimum Social Standards for International Trade, *Intereconomics* 29 (11-12), 277-283.

Guillén, M. F. (2014). *Curso Analyzing Global Trends for Business and Society*. Wharton School, University of Pennsylvania. Apuntes personales.

Guillén, M. F. & Ontiveros, E. (2012). *Global Turning Points. Understanding the Challenges for Business in the 21st Century*. Philadelphia: Wharton School, University of Pennsylvania.

Gunter, B., & Hoeven, R. (2004). The social dimension of globalization: A review of the literature. *International Labour Review*, 143(1-2), 7-43.

Hansson, G. (1983). *Social Clauses and International Trade: An Economic Analysis of Labor Standards in Trade Policy*. New York: St. Martin's Press.

Hansson, G. (2010). *Labour Standards, Development and Trade*. Londres: Routledge.

Hill, C. & Smith, M. (2011). *International Relations and the European Union*. Oxford: Oxford University Press (OUP).

Hindriks, J. & Myles, G. D. (2006). *Intermediate public economics*. Cambridge: MIT Press.

Hyde-Price, A. (2012). *International Security: An Introduction*. Londres: Routledge.

Iglesias Vázquez, M. A. & Santaella Alonso, M. (2004). Elementos e Instituciones de la Unión Europea. *Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*.

Iglesias Vázquez, M. A. (2007). Cuestiones de Derecho Internacional y Política. Acerca de un Ordenamiento jurídico para la paz en la época de la globalización. *Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid*, pp. 45-62.

Iglesias Vázquez, M. A. & Santaella Alonso, M. (2009). El Tratado de Lisboa en el Proceso de Evolución de la Unión Europea y del Derecho Europeo, *Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social* nº 21, 1-28.

Jinji, N. (2005). *Social Dumping and International Trade*. ETSG Working Paper.

Kaplow, L., & Shavell, S. (2002). Economic analysis of law. *Handbook of public economics*, 3, 1661-1784.

Kwa, A. (1998). WTO and Developing Countries, *Foreign Policy in Focus*, 3, 37, Noviembre.

Leary, V. A. (1997). WTO and the Social Clause: Post-Singapore, *The European Journal of International Law*, 8, 118.

Lenz, T. (2009). *From Geopolitics to Geoeconomics: The European Union's Promotion of Regional Integration in Latin America, 1980s*. Saarbrücken: VDM Verlag Publishing.

Lugones, G. (2001). Teorías del comercio internacional. *Carpeta de Trabajo de la Universidad Virtual de Quilmes, UNQ-UVQ*, julio.

Mainhold, G. & Sole, V. (1995). *La Cláusula Social: ¿una estrategia sindical ante la liberalización comercial?* San José de Costa Rica: Fundación Friedrich Ebert.

Manners, I. & Whitman, R. (2001). *The Foreign Policies of European Union Member States*. Manchester: Manchester University Press.

Mayorga, P. & González, V. (2001). *Responsabilidad social de la empresa. Elementos teóricos y experiencias*. Fundación Corona.

Meron, T. (1989). *Human rights and humanitarian norms as customary law*. Oxford: Clarendon Press.

Meyler, B. A. (2008). Commerce in Religion. *Notre Dame Law Review*, 84(2), 09-027.

Moravcsik, A. & Milner, H. V. (2012). *Power, Interdependence and Nonstate Actors in World Politics*. Nueva Jersey: Princeton University Press.

Nowag, J. (2016). *European Business Law: Understanding the Fundamentals*. Universidad de Lund (via Coursera) de 11 de enero de 2016 a 22 de febrero de 2016. Transcripción de la clase (semana 1: *EU Legal Method*).

Oxfam. Informe Oxfam nº 22. (2002). La hipocresía de Europa. Recuperado de http://www.fongdcam.org/manuales/comerciojusto/datos/docs/ARTICULOS%20Y%20DOCUMENTOS%20DE%20REFERENCIA%20def/CONCEPTO%20CI/Como%20funciona%20el%20sistema/11-Hipocresia_Europa_oxfam.pdf

Poyatos, R. P., & Gámez, M. D. M. V. (2015). La responsabilidad social corporativa: especial referencia a la gestión de derechos humanos. *Iniciación a la Investigación*, (1).

Ricardo, D. (2003). *Principios de economía política y tributación*. Madrid: Ediciones Pirámide.

Rodgers, G., Lee, E., Swepston, L., & Van Daele, J. (2009). The International Labour Organization and the quest for social justice, 1919-2009.

Roosendaal, G. van (2002). *Trade Unions and Global Governance: The Debate on a Social Clause*. Londres: Routledge.

Sanahuja, J. A. (2013). La Unión Europea y el regionalismo latinoamericano: un balance. *Investigación & Desarrollo*, 21(1), 156-184.

Sandel, M. J. (2010). *Justice: What's the Right Thing to Do?* New York: Farrar, Straus and Giroux.

Santillán, S. E. (1995). Los Mercados Laborales: Pérdidas y Ganancias en el Proceso de Integración Regional, en *La Dimensión Social de la Integración Regional*. Centro de Formación para la Integración Regional, Montevideo, DT, 11, 73-79.

Smith, A. (2008). *Riqueza das Nações*. Curitiba: Hemus.

Smith, K. E. (1998). The use of political conditionality in the EU's relations with third countries: How effective?. *European Foreign Affairs Review*, 3(2), 253-274.

Smith, K. E. (1998). The Use of Political Conditionality in the EU's Relations with Third Countries: How effective?, *European Foreign Affairs Review*, 3, 253-274.

Sotillo Lorenzo, J. A. (2015). *La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible*, Catarata/ Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

Sotillo Lorenzo, J. A. (2015, dir.). *Antología del Desarrollo*, Catarata/Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación-Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

Van Liemt, G. (1989). Minimum labour standards and international trade: Would a social clause work. *Int'l Lab. Rev.*, 128, 433-472.

Wouters, J. (2014). *The European Union in Global Governance*. European University Institute, KU Leuven, and Universität Passau. Curso realizado en los meses de abril y mayo de 2014. Apuntes personales.

Yusuf, A. A. (1980). Differential and More Favourable Treatment: The GATT Enabling Clause. *Journal of World Trade*, 14(6), 488-507.

● Capítulo III

Abramovich, V. & Courtis, C. (2003). *Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales. La protección judicial de los derechos sociales*, 3, Ecuador, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, serie Justicia y Derechos Humanos. Neoconstitucionalismo y Sociedad.

Acemoglu, Daron & Robinson, J. A. (2012). *Por qué fracasan los países*. Barcelona. Deusto/Centro Libros PAPF.

Acosta-López, J. I. & Duque-Vallejo, A. M. (2008). Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿norma de ius cogens?. *Revista colombiana de derecho internacional*, 12, 13-34.

Aguirre, V. & de Sousa, B. (1998). *Por una concepción multicultural de los derechos humanos*, vol. 12, UNAM.

Alexidze, L. (1981). Legal nature of *jus cogens* in contemporary international law. *RCADI*, 172, 315-353.

Alland, D. (2000). *Droit International Public*. Paris: PUF.

Alston, P. (2002). Resisting the Merger and Acquisition of Human Rights by Trade Law: A Reply to Petersmann, The Jean Monnet Programme, *Jean Monnet Working Paper 12/02*. New York: New York University School of Law in *European Journal of International Law*, Vol. 13, No. 4, 2002, pp. 815-844.

Argenpress.info., Carmona, E. (2012). La noticia más censurada nº 7: La ONU proclamó 2012 Año Internacional de las Cooperativas. Recuperado de http://www.argenpress.info/2012_10_24_archive.html

Artigas, C. (2005). *Una mirada a la protección social desde los derechos humanos y otros contextos internacionales*. Chile: CEPAL – Naciones Unidas.

Barrientos, A. (2004). *Regulation and social protection: leading issues in competition, regulation and*

Ben-Naftali, Orna (2011). *International Humanitarian Law and International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press.

Bensusán, G. (2009). Estándares laborales y calidad de los empleos en América Latina. *Perfiles latinoamericanos*, 17(34), 13-49.

Bhagwati, J. (2004). *In Defense of Globalization*. Oxford: Oxford University Press.

Bianchi, A. (2008). Human rights and the magic of jus cogens. *European journal of international law*, 19(3), 491-508.

Bilbao, A. (1990). La lógica del Estado de bienestar y la lógica de su crítica: Keynes y Misses. *Papers*, 34, Universitat Autònoma de Barcelona.

Bobbio, N; Matucci, N. & Pasquino, G. (2002). *Diccionario de Política*. Ciudad de México: Siglo Veintiuno.

Boutros-Ghali, B. (1995). *Les Nations Unies et les droits de l'homme 1945-1995*. New York: UN.

Boyle, K. (1995). Stock-taking on Human Rights: The World Conference on Human Rights, Vienna 1993. *Political Studies*, 43(1), 79-95.

Browlie, I. (2003). *Principles of public international law* (6^a ed). Oxford: Clarendon Press.

Cançado Trindade, A. A. (1995). *The Interpretation of the International Law of Human Rights by the Two Regional Human Rights Courts, Contemporary International Law Issues: Conflicts and Convergence*. Proceedings of the III Joint Conference ASIL/Asser Instituut. La Haya: Asser Instituut.

Cançado Trindade, A. A. (1996). *A Proteção Internacional dos Direitos humanos no Limiar do Novo Século. The Modern World of Human Rights - Essays in Honour of Th. Buergenthal*. San José de Costa Rica: IIDH.

Cançado Trindade, A.A. (1997). *Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos* (vol. I). Porto Alegre: Fabris.

Cassese, A. (1993). *Los derechos humanos en el mundo contemporáneo*. Ariel: Barcelona.

Cassin, R. (1958). *La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948*. Paris: Académie des Sciences Morales et Politiques.

Chemillier-Gendreau, M. (1995). *Humanité et souverainetés: essai sur la fonction du droit international*. Paris: La Découverte.

Christenson, G. A. (1987). *Jus Cogens: Guarding Interests Fundamental to International Society*. *Va. J. Int'l L.*, 28, 585-611.

Combacau, J. & Sur, S. (2004). *Droit international public* (6^a. ed.) Paris: Montchrestien.

Crawford, J. A., & Laird, S. (2001). Regional trade agreements and the WTO. *The North American Journal of Economics and Finance*, 12(2), 193-211.

De Schutter, O. (2014). *International Human Rights Course*, realizado en la Université Catholique de Louvain, de 17 de febrero a 28 abril de 2014. Apuntes personales.

Delmas-Marty, M. (2005). *Vers un droit commun de l'humanité* (2^a ed.). Paris: Textuel.

Dessing, M. (2001). *The social clause and sustainable development*. ICTSD. *Development*. London: Edward Elgar.

Dupuy, P. (2004). *Droit international public* (7^a ed.) Paris: Dalloz.

Elliott, M. A. (2008). *A cult of the individual for a global society: The development and worldwide expansion of human rights ideology* (Doctoral dissertation, Emory University).

Esping-Andersen, G. (1993). *Los Tres mundos del Estado de Bienestar*. Valencia: Ediciones Alfons El Magnanim.

Fernández, G. R. (2011). *El XII Plan Quinquenal de la República Popular China*. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái. Madrid: ICEX.

Forsythe, D. P. (2012). *Human rights in international relations*. Cambridge University Press.

Fouchard, P. (2007). *Droit et moral dans les relations économiques internationales*. Paris: Centre Français de l'Arbitrage.

Gaja, G. (1981). *Jus Cogens* beyond the Vienna Convention. *RCADI*, 172, 213-276.

Garretón, M. A. (2007). *Del Post-Pinochetismo a la Sociedad Democrática. Globalización y Política en el Bicentenario*. Santiago: Debate.

Ghemawat, P. (2011). *World 3.0: Global Prosperity and how to Achieve it*. Boston: Harvard Business Press Books.

Ghemawat, P. (2014). *Globalization of Business Enterprise*. Apuntes personales (participación en el curso auspiciado por el IESE, 03 de febrero a 11 de abril, 2014).

Gómez Robledo, A. (1981). Le *jus cogens* international: sa génèse, sa nature, ses fonctions. *RCADI*, 172, 102-210.

Gómez, J. M. (1995). El Estado del Bienestar y el reto de la solidaridad. *Anales de Estudios Económicos y Empresariales*, 10, 63-89.

Habermas, J. (1994). *Ensayos Políticos*. Barcelona: Editorial Península.

Hall, S. (2001). The Persistent Spectre: Natural Law, International Order and the Limits of Legal Positivism. *European journal of international law*, volume 12, 2, 253-269.

Harris, J. (1994). *Beveridge's social and political thought*. Oxford: Clarendon Press.

Hasenkamp, M. L. (2004). *Universalization of human rights. The Effectiveness of Western Human Rights Policies towards Developing Countries after the Cold War. With Case Studies on China*, Frankfurt a. M.

Headley, J. M. (2008). *The Europeanization of the world: On the origins of human rights and democracy*. Princeton University Press.

Hillman, R. S.; Peeler, .A. & da Silva, E. C. (2001). *Democracy and Human Rights in Latin America*. Connecticut: Praeger Frederick Publisher.

Hobsbawm, E. (1998). *Historia del siglo XX*. Buenos Aires: Crítica.

Horn, H., Mavroidis, P. C. & Sapir, A. (2010). Beyond the WTO? An anatomy of EU and US preferential trade agreements. *The World Economy*, 33(11), 1565-1588.

Hottelier, M. (2014). Curso *Introduction aux droits de l'homme*, Universidad de Ginebra (31 de marzo-26 de mayo). Semana 5 (28 de abril-5 de mayo). Apuntes personales.

Humphrey, J. (1973). *The International Law of Human Rights in the Middle Twentieth Century. The Present State of International Law and Other Essays*. Deventer: Kluwer.

Jelin, E, & Hershberg, E. (1996). *Constructing democracy: human rights, citizenship, and society in Latin America*. Colorado: Westview Press.

Klikberg, B. (1999). Capital social y cultura, claves esenciales del desarrollo. *Revista de la CEPAL*.

Koji, T. (2001). Emerging Hierarchy in International Human Rights and Beyond: From the Perspective of Non-derogable Rights. *European Journal of International Law*, 12(5), 917-941.

Kucera, D. (2001). *The Effects of Co-worker Rights on Labor Cost and Foreign Direct Investment: Evaluating the 'conventional wisdom'*. Discussion Paper 130, International Institute for Labour Studies, ILO, Ginebra.

Lawrence, F. K. & Meyer, B. D. (1990). Unemployment Insurance, Recall Expectations, and Unemployment Outcomes. *Quarterly Journal of Economics*, 105, noviembre, 973-1.002.

López Martín, A. G. (2016). "Hacia la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito internacional en la era de la globalización, in *Nuevos retos y amenazas a la protección de los derechos humanos en la era de la globalización* (López Martín, A. G.; editora y Chinchón Álvarez, J. coordinador). Valencia. Tirant lo Blanch, 19-42.

Maritain, J. (1982). *Los Derechos del Hombre y la Ley Natural*. Buenos Aires: Ed. Leviatan.

Markovic, M. (1986). *Differing Conceptions of Human Rights in Europe: Towards a Resolution* in Philosophical Foundations of Human Rights. Paris: UNESCO.

McAfee, R. P., & McMillan, J. (1989). Government procurement and international trade. *Journal of international economics*, 26(3), 291-308.

Meron, T. (1986). On a hierarchy of international human rights. *American Journal of International Law*, 80, 1.

Mutua, M. W. (1996). The ideology of human rights. *Virginia Journal of International Law*, 36, 16-31.

- Narlikar, A. Daunton, M. & Stern, R. M. (2012). *The Oxford Handbook on the World Trade Organization (Oxford Handbooks in Politics & International Relations)*. Oxford Handbooks in Politics & International Relations Collection. Oxford. Oxford University Press.
- Navarro, P. (2016). Universidad de California (Irvine): transcripción de las clases del profesor en su curso *The Power of Macroeconomics: Economic Principles in the Real World*, a que asistió este investigador (enero-abril 2016).
- Nwobike, J. (2005). Application of Human Rights in African Caribbean and Pacific-European Union Development and Trade Partnership, the. *German LJ*, 6, 1381.
- Offe, C. (1990). *La política social y la teoría del Estado (Contradicciones en el Estado del Bienestar)*. Madrid: Alianza Editorial.
- Orakhelashvili, A. (2006). *Peremptory norms in international law*. Oxford: Oxford University Press.
- Panagariya, A. (2002). EU preferential trade arrangements and developing countries. *The World Economy*, 25(10), 1415-1432.
- Parker, K. (1988). *Jus Cogens: Compelling the Law of Human Rights*. *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.*, 12, 411-427.
- Pinto, M. (1997). *El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos. La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales*. Buenos Aires: Ediciones del Puerto.
- Piron, L. H. (2004). *Rights-based approaches to social protection*. UK Department for International Development. Londres: DFID.
- Prieto, N. C., & Luzárraga, F. A. (1998). El nuevo regionalismo y reestructuración del sistema mundial. *Revista Española de Derecho Internacional*, 50(1), 59-114.
- Rich, B. (2013). *Mortgaging the earth: The World Bank, environmental impoverishment, and the crisis of development*. Washington: Island Press.
- Ridruejo, J. A. P. (2011). Sobre la universalidad del Derecho internacional de los derechos humanos. *Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época*, 12, 267-286.
- Rivero Illa, M. & Van Rompaey, K. (2015). La cooperación Sur-Sur en América Latina. *Política Exterior* nº 163 (v. 29), 100-107.
- Rodrik, D. (2011). *La paradoja de la globalización*. Barcelona. Antoni Bosh editor.

Rodrik, D. (2016). *Las leyes de la economía*. Vizcaya. Deusto.

Sanahuja, J. A. (2000). Asimetrías económicas y concertación política en las relaciones Unión Europea-América Latina: un examen de los problemas comerciales. *Revista electrónica de estudios internacionales*, 1-18.

Santos, B. (1998). Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos. De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad, Bogotá, *Siglo del Hombre/Universidad de los Andes*, 203 (2), 345-367.

Scheinin, M. (1995). *Economics and Social Rights as Legal Rights. Economic, Social and Cultural Rights – A Textbook*. Dordrecht: Nijhoff.

Schmitz, H. (2000). Does Local Cooperation Matter? Evidence from Industrial Clusters in South Asia and Latin America, *Oxford Development Studies*, v. 28, 3, 91-127.

Schutter, O. D. (2014). *International Human Rights Course*. Université Catholique de Louvain. Workpaper. Apuntes personales.

Sikkink, K. (1993): *Human rights, principled issue-networks, and sovereignty in Latin America*. Massachusetts: IO Foundation and the Massachusetts Institute of Technology.

Silva, L. D. (2009). *A liberalização do comércio internacional de alimentos e o combate à fome*, In Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI.

Smith, K. (2008). *European Union Foreign Policy in a Changing World*. Hoboken: John Wiley & Sons.

Sorel, E. & Padoan, P. C. (2008). *The Marshall Plan: Lessons Learned for the 21st Century*. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Sotillo Lorenzo, J. A. (2007). “La cooperación Sur-Sur y la revitalización de la integración en América Latina” (2007), in *La construcción de una región: México y la geopolítica del Plan Puebla-Panamá*; in Cairo Carou, H; Preciado Coronado, J. A. y Rocha Valencia, A. (coordinadores). Madrid. Los Libros de la Catarata, 257-268

Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. (2008). *International human rights in context: law, politics, morals: text and materials*. Oxford, Oxford University Press.

Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its Discontents*. New York, W.W. Norton & Company.

Surasky, J. (2012). Seguimiento de la Cooperación Sur-Sur. *Revista española de desarrollo y cooperación* nº 29, 271-292.

Thorstensen, V.; Badin, M. R.; Müller, C. & Eleotério, B. (2014). Acordos Preferenciais de Comércio: da multiplicação de novas regras aos maga-acordos comerciais. *Política Externa*, 23 (1), jul/ago/set, 151-179.

Tomz, M. (2007). *Reputation and International Cooperation: Sovereign Debt across Three Centuries*. Princeton: Princeton University Press.

Tugores Ques, J. (2006). Economía Internacional: Globalización e Integración Regional. McGraw-Hill/ Interamericana de España.

Van Boven, T. C. (1979). *United Nations Policies and Strategies: Global Perspectives?, Human Rights: Thirty Years after the Universal Declaration*. La Haya: Nijhoff.

Wapshott, N. (2013). *Keynes vs Hayek. El choque que definió la economía moderna*. Barcelona. Deusto.

Weber, M. (1998). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Ediciones AKAL.

Wexler, I. (1983). *Marshall Plan Revisited: The European Recovery Programme in Economic Perspective*. Connecticut: Greenwood Press.

Winters, F. X. (2009). *Remembering Hiroshima: Was it Just? (Justice, International Law and Global Security)*. Farnham: Ashgate Publishing Limited.

●Capítulo IV

Acevedo, C. (1993). El legado filosófico-político de Ignacio Ellacuría, *Estudios Centro Americanos*, 541-542, 1087-1104.

Alberdi, M. D. L. R. P. (2011). La jurisprudencia social del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. *Lex Social: Revista de Derechos Sociales*, 1(1), 93-105.

Alcalá, C. Q. (2004). La dificultad de conjugar la libertad de expresión con el secreto médico. Comentario a la sentencia del TEDH de 18 de mayo de 2004, asunto Plon Société c. Francia (nº 58148/00). *Revista General de Derecho Europeo*, 5, 12-23.

Alston, P. (1990). *The Fortieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights: A Time for Reflection than for Celebration*, in Human Rights in a

Pluralist World. Individuals and Colelectivities, UNESCO-Roosevelt Study Center, Meckler, Westoport, pp. 1-13.

Alston, P. (2004). "Core labour standards" and the transformation of the international labour rights regime. *European Journal of International Law*, 15(3), 457-521.

Ast, S. (2010). Gafgen Judgment of the European Court of Human Rights: On the Consequences of the Threat of Torture for Criminal Proceedings, *The. German LJ*, 11, 1393-1437.

Barr, N. (2012). *Economics of the Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.

Barrenechea, L. (2007). ¿Están recogidas las vinculaciones entre el derecho de asilo y el terrorismo en la Estrategia Global contra el Terrorismo de Naciones Unidas?. *Revista electrónica de estudios internacionales*, 14, 1-10.

Bentham, J. & Mill, J. S. (2004). *Utilitarianism and other essays*. Penguin UK.

Bustamante Donas, J. (2010). La cuarta generación de derechos humanos en las redes digitales. *Telos: Cuadernos de comunicación e innovación* nº 85, 80-89.

Cançado Trindade, A. A. (1997). Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor.

Capón Filas, R. (1992). Armonización de la legislación laboral en los países del MERCOSUR, *Revista Notisur*, Buenos Aires, Año XVII nº 43, noviembre, 26-42.

Carmona Cuenca, E. (2006). Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital. *Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas* nº 2, 172-197.

Cassese, A.; Gaeta, P. & Zappala, S. (2008). *The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese*. Oxford: Oxford University Press.

Castro Cid, B. D. (2010). La fundamentación de los derechos humanos (reflexiones incidentales). *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, 24, 115-127.

Chan, A. (2003). Racing to the bottom: international trade without a social clause. *Third World Quarterly*, 24(6), 1011-1028.

Charnovitz, S. (1987). Influence of International Labour Standards on the World Trading Regime-A Historical Overview, *The. Int'l Lab. Rev.*, 126, 565.

Chatton, G. T. (2013). *Vers la pleine reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels*. Tesis doctoral, University of Geneva.

Clapham, A. (2006). *Human rights obligations of non-state actors*. Oxford University Press.

Cristaldo Montaner, J. D. (2000). *Armonización normativa laboral del MERCOSUR. Una propuesta unificadora*. Asunción: Editora Litocolor.

Dehejia, V. H. & Samy, Y. (2004). Trade and labour standards: theory and new empirical evidence. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 13(2), 179-198.

Diller, J. (1999). ¿Una conciencia social en el mercado mundial? Dimensiones laborales de los códigos de conducta, el etiquetado social y las iniciativas de los inversores. *Revista Internacional del Trabajo*, 118(2), 111-145.

Donas, J. B. (2001). Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la condición humana en la sociedad tecnológica. *CTS+ I: Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación*, (1), 3-16.

Donnelly, J. (1984). Cultural relativism and universal human rights. *Human Rights Quarterly*, 400-419, recuperado de http://hmb.utoronto.ca/Old%20Site/HMB303H/weekly_supp/week-02/Donnelly_cultural_relativism.pdf

Donnelly, J. (2007). The relative universality of human rights. *Human Rights Quarterly*, 29(2), 281-306.

Edgren, G. (1979). Fair labour standards and trade liberalization. *Int'l Lab. Rev.*, 118 (2), 523-548.

Ellacuría, I. (1969). Seguridad Social y solidaridad humana. Aproximación filosófica al fenómeno de la seguridad social. *Estudios Centroamericanos* 253, 357-365.

Ellacuría, I. (1990). Historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares, *Estudios Centro Americanos* 502, 589-596.

Ermida Uriarte, O. (2003). *Derechos laborales y comercio internacional. Globalización económica y Relaciones Laborales*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Evans, M. D. (2010). *International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Falk, R. (1981). *Human Rights and State Sovereignty*. New York: Holmes & Meier Publishers.

Fedorova, M. & Sluiter, G. (2009). Human Rights as Minimum Standards in International Criminal Proceedings. *Hum. Rts. & Int'l Legal Discourse*, 3, 9-22.

Fenwick, H. (2002). The Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001: A Proportionate Response to 11 September?. *The Modern Law Review*, 65(5), 724-762.

Fernández, L. P. (2006). Límites jurídicos al discurso político sobre el control de flujos migratorios: non refoulement, protección en la región de origen y cierre de fronteras europeas. *Revista electrónica de estudios internacionales*, (11), 1-21.

Ferreira, M. D. C. & Ramos Olivera, J. (1991). *Mercosur. Enfoque laboral*. Montevideo: Editorial Fundación de Cultura Universitaria.

Fioravanti, M. (1999). *Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones*. Madrid: Trotta.

Forrest, C. (2011). *International Law and the Protection of Cultural Heritage*. Londres: Routledge.

Freeman, R. B. (2009). *Labor regulations, unions, and social protection in developing countries: market distortions or efficient institutions?* (nº 14789). National Bureau of Economic Research.

Gialdino, R. E. (2008). La nueva Corte Europea de Derechos Humanos–Protocolo 11. *Revista Investigaciones*, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1999, 1-27.

Gómez, C. M. (2004). El Convenio Europeo de Derechos Humanos: primeros pasos para una nueva reforma. *Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época*, 5, 755-784.

González, G. (1999). *Derechos Humanos: La condición humana en la sociedad tecnológica*. Madrid: Tecnos.

Greer, S. (2011). Should Police Threats to Torture Suspects Always be Severely Punished? Reflections on the Gäfgen Case. *Human Rights Law Review*, 11(1), 67-89.

Hamilton, F. E. Ian. (1985). *Industrialization in Developing and Peripheral Regions*. Londres: Routledge.

Hitters, J. C. (2003). Criterios establecidos por los órganos jurisdiccionales de los sistemas interamericano y europeo. *La Ley*, Buenos Aires, 1373, 62-93.

Hottelier, M.; Chatton, G. T. & Malinverni, G. (2014). *Vers la pleine reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels*. Schulthess: Ginebra.

- Huntington, S. P. (1998). *The Clash of Civilizations*. New York: Pocket Books.
- Jenks, C. W. (1971). *The International Labour Organization in the U.N. family*. New York: United Nations Institute for Training and Research.
- Kaufmann, C. (2007). *Globalization and Labour Rights: The Conflict Between Core Labour Rights and International Economic Law*. Oxford: Hart Publishing.
- Koji, T. (2001). Emerging Hierarchy in International Human Rights and Beyond: From the Perspective of Non-derogable Rights. *European Journal of International Law*, 12(5), 917-941.
- Landman, T. & Carvalho, E. (2009). *Measuring human rights*. Londres: Routledge.
- Lauren, P. G. (2011). *The evolution of international human rights: Visions seen*. University of Pennsylvania Press.
- Laws, J. (1998). The limitations of human rights. *Public Law*, 112, 254-265.
- Leary, V. A. (1982). *International Labour Conventions and National Law: The Effectiveness of the Automatic Incorporation of Treaties in National Legal Systems*. Leiden: Brill.
- Macdonald, R. S. J. (1998). Derogations Under Article 15 of the European Convention on Human Rights. *Colum. J. Transnat'l L.*, 36, 225-241.
- Mah, J. S. (1997). Core labour standards and export performance in developing countries. *The World Economy*, 20(6), 773-785.
- Mariager, R. M., & Molin, K. (2014). Cold War and human rights. In R. Mariager, K. Molin, & K. Brathagen (Eds.), *Human Rights in Europe during the Cold War*. (pp. 1-12). London/ New York: Routledge Falmer.
- Martin, W., & Maskus, K. E. (2001). Core labor standards and competitiveness: implications for global trade policy. *Review of International Economics*, 9(2), 317-328.
- Mena, Xavier J. (2010). *Los retos que la globalización plantea* (tercera ponencia). Globalización y derechos humanos: seminario permanente de derechos humanos Antonio Marzal. XIV sesión. Bartlett, Enric Bardají, María Dolores. Barcelona.
- Montejo, M. F. C. (2008). Los derechos humanos laborales: el núcleo duro de derechos (core rights) y el ius cogens laboral. *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, 8, 111-158, p. 118.

Montejo, M. F. C. (2012). Los derechos humanos laborales en el Derecho Internacional. *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*, 23(1), 115-144.

Naanen, B. (1995). Oil-producing minorities and the restructuring of Nigerian federalism: The case of the Ogoni people. *Journal of Commonwealth & Comparative Politics*, 33(1), 46-78.

Neuman, G. L. (2003). Human rights and constitutional rights: harmony and dissonance. *Stanford Law Review*, 1863-1900.

Oraá, J. O. & Isa, F. G. (2002). La declaración universal de derechos humanos (vol. 10). Universidad de Deusto, p. 75.

Ortega, M. J. (2004). Sociedad de la información y derechos humanos de la cuarta generación. Un desafío inmediato para el derecho constitucional. *Memoria del Congreso de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados* nº 6, 663-684.

Parker, K. (1988). Jus Cogens: Compelling the Law of Human Rights. *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.*, 12, 411-425.

Plá Rodríguez, A. (1998). *El rol de las normas internacionales de trabajo en el proceso de integración económica*. Buenos Aires. Librería Universitaria.

Portero, F. (2010). Los retos que la globalización plantea (cuarta ponencia). Globalización y derechos humanos: seminario permanente de derechos humanos Antonio Marzal. XIV sesión. Bartlett, Enric Bardají, María Dolores. Barcelona.

Rajagopal, B. (2003). *International Law from Below: Development, Social Movements and Third World*. Cambridge: Cambridge University Press.

Randall, M. H. (2014). Curso "Introduction aux droits de l'homme", Universidad de Ginebra (31 marzo a 26 de mayo), semana 4. Material de estudio. Apuntes personales.

Reinaldo, J. & Dalla Via, A. R. (2000). *Régimen Constitucional de los tratados* (2ª edit.). Buenos Aires: Abeledo Perrot.

Ridruejo, J. A. P. (2011). *Anuario de Derechos Humanos*. Nueva Época. Vol. 12., 267-286.

Sachs, A. (2003). The judicial enforcement of socio-economic rights: The Grootboom case. *Current Legal Problems*, 56(1), 579-601.

Santos, B. de S. (1995). *Toward a New Common Sense. Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*. New York: Routledge.

Schmeisser, W.; Krimphove, D. & Popp, R. (2013). *International Human Resource Management and International Labour Law: A Human Resource Management Accounting Approach*. München: Oldenbourg Wissensch.

Shue, H. (1996). *Basic rights: Subsistence, affluence, and US foreign policy*. Princeton University Press.

Smith, A. (2012). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Chicago: University of Chicago Press. Alvarado, R. (1996). Derechos Humanos y Mundialización. *Travesías. Política, cultura y sociedad en Iberoamérica*. Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana Santa María de la Rábida, 1, 47-59.

Soma, A. (2010). *Droit de l'homme à l'alimentation et sécurité alimentaire en Afrique*. Tesis doctoral, University of Geneva.

Valticos, N. (1977). *Derecho Internacional del Trabajo*. Madrid: Tecnos.

Van Parijs, P. (1995). *Más Allá de la Solidaridad. Los Fundamentos Éticos del Estado de Bienestar y de su Superación* en Alonso, M. A. y Giraldo Ramírez, J. *Ciudadanía y derechos humanos sociales*. Medellín: ENS.

Vasak, K. (1982). *The International Dimensions of Human Rights*. Connecticut: Greenwood Press.

Viljoen, F. (2012). *International human rights law in Africa*. Oxford University Press.

● Capítulo V

Abramovic, V. (2009). De las violaciones masivas a los patrones estructurales: nuevos enfoques y clásicas tensiones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. *Derecho PUCP*, (63), 96-138.

Águila, R. D. (1998). *Ciudadanía Global. Riesgos, límites y problemas*, separata del libro *La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Cincuenta Aniversario*. Barcelona: Editorial Bosch.

Akhtar, S. I., & Jones, V. C. (2013). Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): In Brief. *Congressional Research Service*, 7-5700.

Alexander, R. J., & Parker, E. M. (2009). *International Labor Organizations and Organized Labor in Latin America and the Caribbean: A History*. Connecticut: Praeger Frederick.

Ayala Corao, C. (1998). *La jerarquía de los tratados de derechos humanos. El futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica.

Badin, M. R. (2012). A regulação de “Novos Temas” em Acordos Preferenciais de Comércio celebrados por União Europeia, Estados Unidos, China e Índia: pontos relevantes para o Brasil. *IPEA*, TD 1773, 122-137.

Bazán, Víctor. (2010). En torno al Estado de derecho, la justicia constitucional y la tutela de los derechos fundamentales, con particular énfasis en América Latina, *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*. España, nº 14, 2010.

Boeglin, N. (2015). La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de <http://www.globalresearch.ca/la-pina-de-costa-rica-ante-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/5439868>

Bogdandy, Armin von *et al* (cords.). (2010). *La justicia constitucional y su internacionalización ¿Hacia un ius constitutionale comune en América Latina?* México: UNAM.

Carbonell, R. & Carlos, J. (2003). *La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estructura, Funcionamiento y Jurisprudencia*. Instituto Europeo de Derechos Humanos. Barcelona, España, p. 19.

Carpizo, J. (2009). Tendencias actuales del constitucionalismo latinoamericano. *Revista Derecho del Estado*. Colombia, 23 (diciembre), 230-251.

Castillo Daudí, M. (2006). Los derechos humanos en la Unión Europea, *Cuadernos de Integración Europea* nº 4, marzo, pp. 13-33.

da Silva, W. L. R. (2015). Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e Declaração Sociolaboral do Mercosul: origem, natureza jurídica e aplicabilidade. *Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo*, 109, 349-387.

Deiros, P. A. (1992). *Historia del cristianismo en América Latina*. Fraternidad Teológica Latinoamericana.

Grabendof, W. (2004). La estrategia birregional y sus limitaciones en un mundo unipolar. *Nueva Sociedad* 18 (enero-febrero), pp. 97-109.

Granell Trías, F. (2015). El Sistema Económico Internacional en 2015. *Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española* nº 3071, 3-18.

Gros, Espiell, H. (1988). *La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Raíces conceptuales en la historia y el derecho americano. Estudios sobre Derechos Humanos II*. Madrid: Civitas.

Guillén, M. F. & Ontiveros, E. (2012). *Global Turning Points. Understanding the Challenges for Business in the 21st Century*. Philadelphia: Wharton School, University of Pennsylvania.

Lutz, E. L. & Sikkink, K. (2000). International human rights law and practice in Latin America. *International Organization*, 54(03), 633-659.

Oyarzún, J. A. (2006). *Ombudsman y derechos indígenas en América Latina: estudio comparativo sobre el marco normativo e institucional*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Pasqualucci, J. M. (1994). Whole Truth and Nothing but the Truth: Truth Commissions, Impunity and the Inter-American Human Rights System, *The. BU Int'l LJ*, 12, 321-356.

Pasqualucci, J. M. (1996). Victim reparations in the Inter-American Human Rights System: a critical assessment of current practice and procedure. *Mich. J. Int'l L.*, 18, 1, 15-36.

Ridruejo, J. A. P. (2007). La Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos: una comparación entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. *Revista Electrónica Iberoamericana (ALCUE)*, vol. 1 (1), 5-15.

Salvioli, F. (2003). *El aporte de la Declaración Americana de 1948 para la protección internacional de los derechos humanos. Memoria del seminario sobre El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI*. Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica.

Sarkin, J. (2004). The coming of age of claims for reparations for human rights abuses committed in the south. *Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos*, 1(1), 70-133.

Sparding, P. (2013), *Política Exterior* nº 153, (mayo-junio), 74-82.

Thorstensen, V.; Badin, M. R.; Müller, C. & Belisa, E.. (2014), Acordos Preferenciais de Comércio: da multiplicação de novas regras aos mega-acordos comerciais, *Revista Política Internacional* nº 23 (1), julio-septiembre, 151-181.

Travieso, J. A. (1996). *Los Derechos humanos en la constitución de la república Argentina*. Buenos Aires. Argentina. EUDEBA.

Trindade, A. A. C., & Robles, M. E. V. (2003). *El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 29-73.

Wright-Carozza, P. (2003). From conquest to constitutions: retrieving a Latin American tradition of the idea of human rights. *Human Rights Quarterly*, 25(2), 281-313.

● Normas Jurídicas, informes y páginas web

Acta Única Europea, 1986.

Acuerdo de Entendimiento entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, 2009.

Argentina. Constitución, 1994. Senado de la Nación Argentina. Constitución Nacional. Recuperado de <http://www.senado.gov.ar/deInteres>

Bolivia. Constitución, 2009. Bolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Constitución Política del estado. Recuperado de http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=1399&id_item=446

Brasil. Constitución, 1988. Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, 2000/ 2007.

Carta de la Organización de los Estados Americanos, 1948.

Carta de las Naciones Unidas, 1945.

Carta Democrática Interamericana, 2001.

Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, 1948.

Carta Social de las Américas, 2012.

Colombia. Constitución, 1991. Colombia. Congreso de la República de Colombia. Recuperado de <http://www.camara.gov.co/portal2011/normatividad>
Comisión Europea. Venezuela Country Strategy Paper (2007-2013). Recuperado de http://eeas.europa.eu/venezuela/csp/07_13_en.pdf

Comunicación relativa a la aplicación provisional de la parte IV (comercio) del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (Guatemala)

Consejo Conjunto Unión Europea-México. Decisiones 2/2000, 2/2001, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 1/2005, 1/2008, 2/2008 y 3/2008

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 1969.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, 1984.

Convención de Roma, 1950.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969.

Convención Interamericana contra el Terrorismo, 2002.

Convención Interamericana contra la Corrupción, 1996.

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, 1999.

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1985.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), 1994.

Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, 1984.

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994.

Convención Interamericana sobre Extradición (Caracas, 1981).

Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, 1948.

Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, 1948.

Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, 1989.

Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, 1989.

Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, 1994.

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 1965.

Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional, 1971.

Convención sobre Asilo Diplomático, 1954.

Convención sobre Asilo Político, 1933.

Convención sobre Asilo Territorial, 1954.

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, 1933.

Convenio de sede entre el Gobierno de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1978.

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 1950.

Convenio nº 005 - Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919.

Convenio nº 006 - Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919.

Convenio nº 010 - Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921.

Convenio nº 011 - Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921.

Convenio nº 015 - Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921.

Convenio nº 029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.

Convenio nº 033 - Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932.

Convenio nº 059 - Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937.

Convenio nº 060 - Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937.

Convenio nº 077 - Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946

Convenio nº 078 - Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946.

Convenio nº 079 - Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946.

Convenio nº 084 - Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947.

Convenio nº 087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.

Convenio nº 090 - Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948.

Convenio nº 098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.

Convenio nº 100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951.

Convenio nº 105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957.

Convenio nº 111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.

Convenio nº 123 - Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965.

Convenio nº 124 - Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965.

Convenio nº 135 - Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971.

Convenio nº 138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973.

Convenio nº 141 - Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975.

Convenio nº 151 - Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978.

Convenio nº 154 - Convenio sobre la negociación colectiva, 1981.

Convenio nº 156 - Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981.

Convenio nº 182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/index.php/mapa-interactivo>

Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo.

Decisión de 22 de julio de 2013 (referente a la decisión 2008/633/JAI), DOUE, núm. 198, de 23 de julio de 2013, páginas 45 a 46. DOUE-L-2013-81484.

Decisión nº 252/2013/UE del Consejo, de 11 de marzo de 2013, por la que se establece un marco plurianual para el período 2013-2017 para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Decisión nº 258/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por la que se modifican las Decisiones nº 573/2007/CE y nº 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión nº 435/2007/CE del Consejo.

Decisión del Consejo de 14 de abril de 2014 relativa a la celebración de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (L 111/4).

Decisión 2012/734/UE del Consejo, de 25 de junio de 2012, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, y a la aplicación provisional de su parte IV relativa al comercio (DO L 346 de 15.12.2012, p. 1).

Decisión de Ejecución de la Comisión de 24 de julio de 2014 que modifica los anexos de la Decisión 92/260/CEE en lo que respecta a la admisión temporal de caballos registrados procedentes de Costa Rica y la Decisión 2004/211/CE en lo que respecta a las entradas correspondientes a Brasil y Costa Rica en la lista de terceros países y partes de los mismos desde los que se autoriza la importación en la Unión de équidos vivos y esperma, óvulos y embriones de la especie equina [notificada con el número C(2014) 5166] (Texto pertinente a efectos del EEE) (2014/501/UE).

Decisión del Consejo de 8 de julio de 2014 sobre la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias establecido por el Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, con respecto a la adopción de las Reglas de Procedimiento de dicho Subcomité.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948).

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2004, 2005, 2006).

Declaración de Cartagena sobre Refugiados, 1984.

Declaración de la Conferencia de Santiago (Santiago de Chile, 2000).

Declaración de Mar del Plata, 2005.

Declaración de Panamá sobre la Contribución Interamericana al Desarrollo y la Codificación del Derecho Internacional, 1996.

Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, 2013.

Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, 1994.

Declaración de Tlatelolco sobre Acciones Prácticas en el Derecho de los Refugiados en América Latina y el Caribe, 1999.

Declaración del Consejo Europeo de Laeken, 2001.

Declaración sobre Desplazados Internos, 2011.

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.

Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina, 2004.

Delegación de la UE en Bolivia. Recuperado de http://www.eeas.europa.eu/delegations/bolivia/index_es.htm

Delegación de la UE en Bolivia, recuperado de http://www.eeas.europa.eu/delegations/bolivia/eu_bolivia/index_es.htm

Derechos Humanos de los Migrantes, Estándares Internacionales y Directiva Europea sobre Retorno, 2008.

Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género.

Diario Oficial de la Unión Europea: diversos años.

Documento de Estrategia nacional. Recuperado de http://eeas.europa.eu/colombia/csp/07_13_es.pdf

Documento de Estrategia Nacional. Revisión Intermedia. Recuperado de http://eeas.europa.eu/peru/csp/11_13_mtr_fr.pdf

Ecuador. Constitución, 2008, recuperado de http://www.asambleanacional.gob.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf

Ecuador. Human Rights Watch. Ecuador: Problemático proyecto de reforma constitucional. Recuperado de <http://www.hrw.org/es/news/2014/07/14/ecuador-problematico-proyecto-de-reforma-constitucional>

Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resoluciones n°s 447, 448, 1979.

Estatuto de la Comisión Interamericana de Mujeres, 1998.

European Union. External Action. Recuperado de http://eeas.europa.eu/lac/index_en.htm

Guatemala. Constitución, 1985. ACNUR. Constitución de Guatemala. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0134>

Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, 2010.

México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recuperado de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm>

Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. Mercosur. Recuperado de <http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relaciones-bilaterales-union-europea/america/Paginas/mercosur.aspx>

Naciones Unidas, Acta Final de la Conferencia Internacional de Derechos humanos (Teherán, abril/mayo de 1968), N.Y., ONU, 1968, doc. A/CONF.32/41, pp. 1-61.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2002). La mundialización y sus consecuencias sobre el pleno disfrute de los derechos humanos. Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/28. Recuperado de <http://www.unhcr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/e0cf64c479e41632c1256ba60055dff2?Opendocument>

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Recuperado de <http://www2.ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm>

ONU, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos. Informe anual del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: recuperado de <http://bolivia.ohchr.org/docs/Informe%20Anual%202013.pdf>

Organización de los Estados Americanos. Departamento de Derecho Internacional. Estado de Firmas y Ratificaciones a 1º de octubre de 2014. Recuperado de http://www.oas.org/dil/lesp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm

Organización de los Estados Americanos. Departamento de Derecho Internacional. Estado de Firmas y Ratificaciones a 1º de octubre de 2014. Recuperado de <http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html>

Organización Internacional del Trabajo. Constitución y Convenios Internacionales del Trabajo, recuperado de <http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm>

Organización Mundial del Comercio. (2003). El programa de Doha para el desarrollo. Informe sobre el Comercio Mundial 2003. Recuperado el 20 de enero de 2012 de www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep.../wtr03_chap2b_s.pdf

Organización Mundial del Comercio: Información por miembro. La Unión Europea y la OMC, recuperado de http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/european_communities_s.htm

Organización Mundial del Comercio: noticias 2014 (31 de julio de 2014). Comité de Negociaciones comerciales. Reunión Informal. Recuperado de http://www.wto.org/spanish/news_s/news14_s/tnc_infstat_31jul14_s.htm

Parlamento Europeo. Proceso de paz en Colombia. Recuperado de <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0016+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES>

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.

Paraguay. Constitución, 1992. ACNUR. Constitución de la República de Paraguay, recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0055>

Perú. Constitución, 1993. Perú. Constitución Política del Perú, recuperado de <http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html>

Prevención y Reducción de la Apatridia y Protección de las Personas Apátridas de las Américas, 2011.

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, 2008.

Principios y Criterios para la Protección y Asistencia de los Refugiados, Repatriados y Desplazados Internos Centroamericanos en América Latina, 1989.

Protección de los Solicitantes de la Condición de Refugiados y de los Refugiados en las Américas, 2011.

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, 1990.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 1988.

Protocolo de Buenos Aires de Reforma de la Carta de la OEA (Protocolo de Buenos Aires, 1967).

Protocolo de Cartagena de Indias, 1985.

Protocolo de Managua, 1993.

Protocolo de Washington, 1992.

Protocolo n° 11 del CEDH, 1994.

Protocolo n° 14 del CEDH, 2004.

Protocolo n° 30 del CEDH, 2013.

Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia (OEA/Secretaría General, CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 13, 23 de abril del 2010).

Reglamento (CE) n° 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre.

Reglamento (CE) n° 2240/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004.

Reglamento (UE) n° 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil, 2013. Publicado en DOUE, núm. 181, de 29 de junio de 2013, páginas 4 a 12. DOUE-L-2013-81292.

Reglamento (UE) n° 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013.

Reglamento (UE) n° 1384/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2014 relativo al trato arancelario a las mercancías originarias de Ecuador.

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 2011.

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009 y 2013.

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el funcionamiento del fondo de asistencia legal de víctimas, 2010.

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009.

Reglamento n° 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre.

Reglamento (UE) n° 19/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2013 por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de

estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra.

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de agosto de 2014.

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de mayo de 2013.

Tratado de Ámsterdam, de 1997.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 1985 y revisión de 2012.

Tratado de la Unión Europea, 1992.

Tratado de las Comunidades Europeas, 1985 y revisión de 2001.

Tratado de Lisboa, 2009.

Tratado de Niza, 2001.

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/costarica/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/el_salvador/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/guatemala/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/honduras/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/nicaragua/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/panama/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/chile/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/bolivia/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/ecuador/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/ecuador/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/peru/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/argentina/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/paraguay/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/uruguay/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/brazil/index_pt.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/colombia/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/venezuela/index_es.htm

Unión Europea. Acción Exterior. Recuperado de http://eeas.europa.eu/mexico/index_es.htm

United Nations (1993). Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Document A/CONF. 157/23.

Venezuela. Constitución, 1999. Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. CNE Poder Electoral. Recuperado de http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/disposiciones.php#final

ANEXOS

ANEXO I

Encuesta dirigida a empresas (47)

Objetivo: Determinar la eficacia de la cláusula social en el mercado (hipótesis de partida) y su justificación jurídica en los acuerdos comerciales UE-AL (hipótesis de desarrollo).

1. ¿Cree usted que la protección de los derechos humanos (cláusula social incorporada en los acuerdos UE-AL) ha incrementado, en su empresa, la asignación de recursos destinados a los trabajadores?

Respuestas: a) 45 (no), b) 1 (no respondió/no sabe), c) 1 (sí)

2. ¿Cree usted que la situación laboral de sus trabajadores ha sido alterada por la inclusión de la cláusula de protección de los DD.HH en los acuerdos comerciales UE-AL?

Respuestas: a) 28 (no), b) 18 (no respondieron/no saben), c) 1 (sí)

3. ¿Cree usted que las normas jurídicas de protección de los DD.HH.L en AL existen en que cantidad?

Respuestas: a) 0 (no existen), b) 0 (pocas), c) 0 (suficientes), d) 47 (muchas)

4) Con base en la respuesta anterior, ¿cree usted que es jurídicamente justificable la presencia de una cláusula de protección de los derechos humanos en los acuerdos comerciales UE-AL?

Respuestas: a) 41 (no), b) 5 (no respondieron/no saben), c) 1 (sí)

ANEXO II

Encuesta dirigida a trabajadores (90)

Objetivo: Determinar la eficacia de la cláusula social en el mercado (hipótesis de partida) y su justificación jurídica en los acuerdos comerciales UE-AL (hipótesis de desarrollo).

1. ¿Cree usted que su situación laboral ha mejorado con la inclusión de la cláusula de protección de los DD.HH.L en los acuerdos comerciales UE-AL?

Respuestas: a) 83 (no), b) 7 (no respondieron/ no saben)

2. ¿Cree usted que las normas jurídicas de protección de los DD.HH.L en AL existen en que cantidad?

Respuestas: a) 0 (no existen), b) 11 (pocas), c) 36 (suficientes), d) 43 (muchas)

3. ¿Cree usted que las empresas cumplen todas las reglas de protección de los DD.HH.L que deberían?

Respuestas: a) 83 (no), b) 7 (no respondieron/no saben), c) 0 (sí)

4. ¿Cree usted que la UE debe incluir la protección de los DD.HH.L en sus acuerdos con AL?

Respuestas: a) 27 (sí), b) 19 (no respondieron/no saben), c) 29 (depende de los objetivos), d) 15 (no)

5) ¿Cree usted que es justificable jurídicamente la presencia de una cláusula de protección de los DD.HH en los acuerdos comerciales UE-AL?

Respuestas: a) 24 (no), b) 64 (no respondieron/no saben), c) 2 (sí)